Poder Ejecutivo Nacional
SECRETARIA DE HACIENDA DE LA NACION
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº 801.-

AUMENTO DE EMERGENCIA

///nos Aires, 5 de diciembre de 1958.-

Ref.: Ministerio de Educación y Justicia - Universidad Nacional de Tucumán: s/aplicación de la Ley 14.456 al personal docente secundario y universitario.

Visto el adjunto planteo referido a la aplicación del artículo 9º del decreto nº 4.476/58 (+) reglamentario de la Ley 14.456 (º) para el personal docente secundario y universitario, esta Secretaría es de opinión que a ese personal debe aplicársele las disposiciones de la Ley 14.473 que aprobó el Estatuto para el Personal Docente y en caso de personal que no le alcancen esos beneficios, debe considerárselo frente a las disposiciones emergentes del Decreto nº 4.476/58 ya citado.

Con lo expuesto pase al Ministerio de Educación y Justicia (Universidad Nacional de Tucumán) a los fines que estime corresponder, sirviendo la presente de atenta nota de envío.-

Fdo.RAFAEL RODOLFO AYALA
Subsecretario de Hacienda

PROVIDENCIA Nº 549.-

(+) Ver Digesto Administrativo Nº 590.-
(º) Ver Digesto Administrativo Nº 589.-

Poder Ejecutivo Nacional
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº 802.-

AUMENTO DE EMERGENCIA

///nos Aires, 17 de diciembre de 1958.-

Ref.: Dirección General Impositiva.- Solicita aclaración cumplimiento aumento de emergencia dispuesto por la Ley nº 14.456.-

Vuelva a la Dirección General de Contabilidad y Administración para manifestarle, con referencia a la consulta que plantea en los adjuntos actuados la Dirección General Impositiva, lo siguiente:

1º.- Que corresponde aplicar la escala a que se refiere el artículo 2º del decreto nº 4.476/58 (+);

2º.- Que a tales efectos el sueldo básico que debe considerarse a fin de liquidar el expresado beneficio, es el que resulta de la promoción automática, aun cuando el día 1º de mayo ppdo., no se hubiera concretado el respectivo ajuste presupuestario; y

3º.- Que no procede deducir de la liquidación que se efectué por aplicación de lo indicado en el punto 2º, el importe de los ascensos automáticos y consecuentemente los que resulten en los reajustes por adicional técnico y costo de vida.

Sirva la presente de atenta nota de envío.-

RESOLUCION Nº 322.-

Fdo. RICARDO LUMI
Secretario de Hacienda de la Nación

(+) Ver Digesto Administrativo Nº 590.-

Poder Ejecutivo Nacional
SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº 803.-

AUMENTO DE EMERGENCIA

///nos Aires, 7 de enero de 1959.-

Vuelva a la Dirección General de Contabilidad y Administración para manifestarle con referencia a la consulta formulada en los presentes actuados, respecto a la aplicación del aumento de emergencia dispuesto por la Ley 14.456 (+), que el artículo 7º apartado de sus beneficios al personal cuyas asignaciones mensuales nominales incluso las que se liquidan en concepto de costo de vida, bonificación por antigüedad, y computada la asignación familiar, supere la suma de m$n. 5.400.-

En consecuencia, el personal que reciba en el conjunto de retribuciones, incluído el aumento de emergencia una suma superior a dicha cantidad, perderá el beneficio a que se refiere el Decreto-Ley nº 14.984/57 (º).-

Fdo. RAFAEL RODOLFO AYALA
Subsecretario de Hacienda

PROVIDENCIA Nº 9.-

(+) Ver Digesto Administrativo Nº 589.-

(º) Ver Digesto Administrativo Nº 369.-

Poder Ejecutivo Nacional
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº 804.-

AUMENTO DE EMERGENCIA

///nos Aires, 3 de marzo de 1959.-

Ref.: Contador Fiscal Don Amilcar José Dorado - Plantea reclamo por la forma en que le ha sido liquidado el aumento de emergencia dispuesto por la Ley número 14.456.-

Vuelva al Tribunal de Cuentas de la Nación para manifestarle que con referencia al reclamo que se interpone a fs. 1 de los presentes actuados, esta Secretaría debe manifestar que si bien a la fecha de designación del agente Amilcar José Dorado ocurrido en el mes de junio ppdo. no había sido aún sancionada la Ley nº 14.456(+) ésta en su artículo 1º dispuso taxativamente que el aumento de emergencia que se disponía regiría a partir del día 1º de mayo de 1958, vale decir pues que en razón de tal retroactividad la designación de dicho agente debe ser considerada en la siguiente forma:

Sueldo básico	$ 3.000.-
Adicional Técnico	$ 600.-
Costo de Vida	$ 1.500.-
Aumento de Emergencia	$ 1.000.-
	$ 6.100.-

(+) Ver Digesto Administrativo Nº 589.-

En tales condiciones, queda sobreentendido que la suma de $ 1.000.- que corresponde a dicho agente en concepto de aumento de emergencia es parte integrante del primer mes de sueldo y, en consecuencia, el descuento a practicar sobre la misma debe ser del 50 %.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 18 del decreto nº 4.476 de fecha 22 de agosto de 1958, dése a la presente el carácter de resolución aclaratoria a las disposiciones del citado decreto.-

Fdo. RICARDO LUMI
Secretario de Hacienda de la Nación

RESOLUCION Nº 43.-

Poder Ejecutivo Nacional
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº 805.-

RACIONALIZACION - ESTRUCTURAS Y ORGANIZACION

Buenos Aires, 12 de junio de 1959.-

Visto lo aconsejado por el I.S.A.P., y

CONSIDERANDO:

Que es necesario asegurar la uniformidad de los organogramas que grafican las estructuras de los organismos que integran el Poder Administrador, los que se encuentran abocados al cumplimiento del Decreto nº 10.975/58 (+),

EL COMITE EJECUTIVO DEL PLAN DE RACIONALIZACION Y AUSTERIDAD

R E S U E L V E :

ARTICULO 1º.- Las estructuras orgánicas que en cumplimiento del Decreto nº 10.975/58, deben ser reajustadas, serán graficadas de acuerdo a las indicaciones más abajo transcriptas y a los organogramas tipos que corren en anexos a) y b) y que integran la presente:

INDICACIONES

1.- El organograma que figura en el Anexo "A", muestra la estructura de un Ministerio o Secretaría de Estado imaginario. El gráfico indica la división primaria del trabajo, o sea aquellos suborganismos que dependen directamente del nivel ministerial.

2.- En el ejemplo se ha representado dos Organismos Des

(+) Ver Digesto Administrativo Nº 682.-

Poder Ejecutivo Nacional
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº 805.-

RACIONALIZACION - ESTRUCTURAS Y ORGANIZACION

Buenos Aires, 12 de junio de 1959.-

Visto lo aconsejado por el I.S.A.P., y

CONSIDERANDO:

Que es necesario asegurar la uniformidad de los organogramas que grafican las estructuras de los organismos que integran el Poder Administrador, los que se encuentran abocados al cumplimiento del Decreto nº 10.975/58 (+),

El COMITE EJECUTIVO DEL PLAN DE RACIONALIZACION Y AUSTERIDAD

R E S U E L V E :

ARTICULO 1º.- Las estructuras orgánicas que en cumplimiento del Decreto nº 10.975/58, deben ser reajustadas, serán graficadas de acuerdo a las indicaciones más abajo transcriptas y a los organogramas tipos que corren en anexos a) y b) y que integran la presente:

INDICACIONES

1.- El organograma que figura en el Anexo "A", muestra la estructura de un Ministerio o Secretaría de Estado imaginario. El gráfico indica la división primaria del trabajo, o sea aquellos suborganismos que dependen directamente del nivel ministerial.

2.- En el ejemplo se ha representado dos Organismos Des

(+) Ver Digesto Administrativo Nº 682.-

centralizados, una Asesoría y tres Direcciones Nacionales o Generales, un Departamento, una División, una Sección y una Oficina.

3.- En el organograma del Anexo "B" se representa la estructura de un Organismo Descentralizado -sea su órgano directivo unipersonal o colegiado-o de una Dirección Nacional o General. Los suborganismos dependientes se han colocado debajo y en el nivel jerárquico correspondiente.

4.- En el nivel de Departamento, el organograma muestra cuatro organismos de esta categoría -uno de ellos es una Asesoría-. Dos de los Departamentos tienen cierto número de suborganismos que les están subordinados, los mismos se han colocado debajo y en el nivel jerárquico correspondiente. El tercero de los Departamentos representados, no tiene suborganismos bajo su dependencia.

5.- En el nivel de División: se observan cuatro organismos, uno de los cuales tiene una segunda jefatura. Los cuatro poseen cierto número de organismos que le están subordinados, los que se han colocado debajo y en el nivel que le corresponde.

6.- En el nivel de Sección: son diez los organismos representados, tres de los cuales no tienen suborganismos dependientes y uno de ellos depende directamente del nivel de Departamento.

7.- En el nivel de Oficina: se han representado diez y nueve organismos; uno de ellos depende directamente del nivel de Departamentos, y tres del nivel de División. Este nivel es el más bajo y no admite subdivisión alguna.

8.- Los diferentes organismos representados en un organograma, deben ser unidos exclusivamente por líneas horizontales y verticales.

9.- Cuando la línea une organismos de ejecución, la línea será gruesa y llena; si la línea une a un organismo principal con otro asesor, la línea será fina; si la línea une a un organismc descentralizado la misma será punteada.

10.- Cuando se representen organismos que no cumplen funciones de asesoramiento, la línea que los une al organismos principal debe partir de la parte inferior del rectángulo que los representa (Anexos "A" y "B" Nº 1).

Si el organismo cumple funciones de asesoramiento, la línea de asesoramiento parte de un costado del rectángulo que representa al organismo princiapl (Anexo "A" y "B" Nº 2).

11.- Los organismos descentralizados se representarán con un recuadro (Anexo "A" Nº 3)

12.- En los niveles inferiores no deben graficarse:

a) Cuerpos de auxiliares administrativos que cumplan funciones en un nivel inferior al de Oficina y no tengan otro supervisor inmediato que un encargado, que es simplemente el "jefe" de un grupo de trabajo;

b) Cuerpos de dactilógrafos que se desempeñen en forma similar al caso anterior;

c) Cuerpos de ordenanzas a cargo de algún mayordomo, a menos que la mayordomía o su equivalente, constituya suborganismo de los graficados en los niveles del Decreto nº 10.975/58

13.- Los organismos centralizados se presentarán con un rectángulo simple.

14.- Si un organismo tiene segunda jefatura, la misma se representara adosando al rectángulo del organismo principal otro cuya altura será igual a un tercio de la de aquél, Anexo "B" Nº 4).

15.- En un pequeño cuadro que se colocará en el ángulo in

ferior derecho del rectángulo que representa a un organismo, se indicará el número de agentes que dependen directamente del Jefe del mismo (Anexo "B" Nº 5).

16.- Aparte del organograma de la estructura principal de un Ministerio o Secretaría de Estado, deben confeccionarse gráficos de organización de acuerdo al siguiente detalle:

a) Uno para cada Dirección Nacional o General, mostrando todos los suborganismes que dependen de ella (p.ej.: Departamento, División, Sección y Oficina);

b) Uno para cualquier otro organismos principal o suborganismo que dependa directamente del nivel ministerial (p.ej.: una Empresa de Estado, un Organismo Descentralizado, un Departamento de Biblioteca, etc.);

c) Uno para cada dependencia en que se divide un primer nivel, cuando así lo aconsejen razones de tamaño.

17.- En todo organograma -excepto en aquellos que correspondan a nivel ministerial- cuando el primer nivel representado dependa de otro organismo que no figura, se significará esta circunstancia mediante una línea que arrancando de la parte superior del rectángulo que grafica a aquél, salga hacia afuera (Anexo "B" Nº 6).

18.- En cada rectángulo se colocará la denominación del organismo que representa, sin el título o denominación del nivel (p.ej.: Publicaciones y no Departamento o División o Sección u Oficina Publicaciones).

19.- En los organogramas de niveles inferiores al ministeral, deberá consignarse en la parte inferior el total del personal que cumple funciones en el organismo, indicando el que tiene funciones de Jefatura y el que cumple tareas auxiliares.

20.- Los organogramas deben presentarse en papel tamaño oficio o doble oficio.

21.- En el ángulo superior derecho del organograma debe hacerse constar la fecha de confección del gráfico y si el mismo se refiere a una estructura vigente o propuesta.

ARTICULO 2º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.-

Fdo. JUAN OVIDIO ZAVALA
Secretario Técnico de la
Presidencia de la Nación

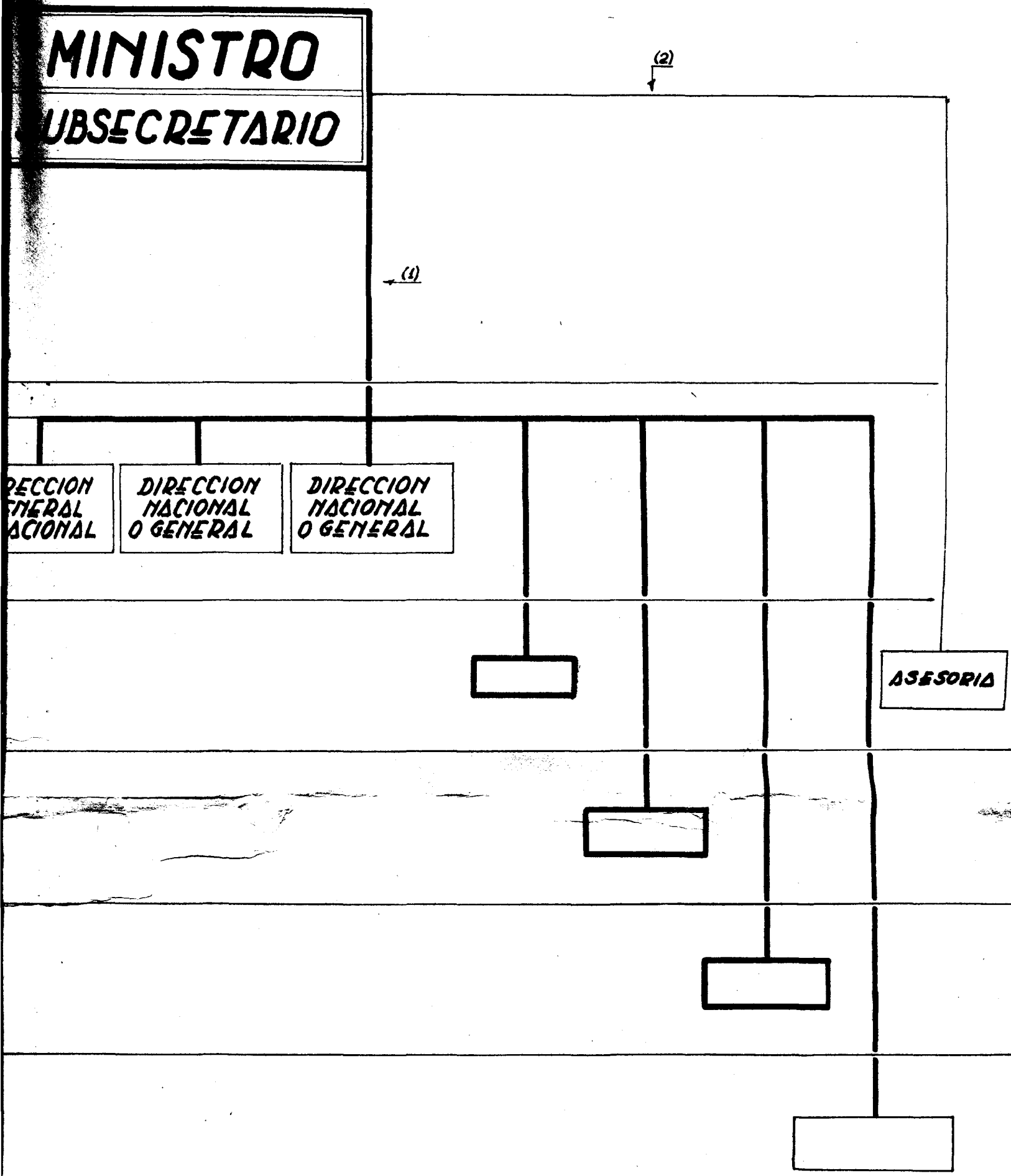
RESOLUCION Nº 7.-

MINIS

SUBSECR

NIVELES JERARQUICOS DECRETO Nº 10.975/58	
DIRECCION NACIONAL O GENERAL TOTAL : 5	(3) → ORGANISMO DESCENTRALIZADO; ORGANISMO DESCENTRALIZADO (3); DIRECCION GENERAL O NACIONAL; DIREC NACIO O GENE
DEPARTAMENTO TOTAL : 2	
DIVISION TOTAL : 1	
SECCION TOTAL : 1	
OFICINA TOTAL : 1	

ANEXO "A"


MINISTRO
UBSECRETARIO
(2)
(1)
ECCION
NERAL
ACIONAL
DIRECCION
NACIONAL
O GENERAL
DIRECCION
NACIONAL
O GENERAL
ASESORIA

Poder Ejecutivo Nacional
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº 806.-

ESTATUTO DEL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL (art. 43º)

Expediente nº 35.461 - 1959
Providencia nº 232.-

///nos Aires, 3 de junio de 1959.-

Vuelva a la Dirección General de Contabilidad y Administración llevando a su conocimiento que el procedimiento fijado en la Resolución S.H. nº 7.799/58 (+), para la integración de las Juntas de Disciplina de aquellos organismos que carezcan entre su personal de agentes letrados que reunan las condiciones exigidas por el artículo 43º del Estatuto del Personal Civil, es aplicable a las Juntas de Calificaciones, ya que los requisitos para la constitución de éstas es similar en un todo a los de aquéllas, aparte de la excepción consagrada en el punto 44º del Escalafón y ratificado por la Ley número 14.794 (º).-

Fdo. JOSE LUIS FRANGI
Director General del
Servicio Civil de la Nación

(+) Ver Digesto Administrativo Nº 598.-
(º) Ver Digesto Administrativo Nº 688.-

Poder Ejecutivo Nacional
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº 807.-

INTENDENCIA - MINISTERIO - DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION

Buenos Aires, noviembre 6 de 1958.-

Visto el decreto nº 1.149 del 31 de enero de 1958 (+), por el cual se aprobó el cuerpo de disposiciones que fijan la organización y funciones de la Dirección General de Contabilidad y Administración de la actual Secretaría de Estado de Hacienda de la Nación, y

CONSIDERANDO:

Que entre las funciones fijadas a la aludida Dirección General en el Capítulo I - artículo 1º de dichas disposiciones, se encuentran, en su inciso j), las de "Coordinar y dirigir los servicios generales de intendencia del edificio central del Ministerio, como así también la atención y conservación de los automotores afectados a su control";

Que dichos servicios se hallan a cargo de la División Intendencia, que integra la organización de aquella Dirección General;

Que en la actualidad, funcionan en el edificio de la precitada Secretaría de Estado, el Ministerio de Economía y la Secretaría de Estado de Finanzas, siendo atendidos sus respectivos servicios de intendencia por la recordada División;

Que la circunstancia apuntada precedentemente, hace aconsejable, por razones funcionales, que la aludida División Intendencia cumpla su cometido bajo el control directo del señor Subsecretario de Hacienda de la Nación;

(+) Ver Digesto Administrativo Nº 431.-

Que por tal motivo, se hace necesaria la supresión y/o modificación de parte de las disposiciones aprobadas por el mencionado Decreto nº 1.149/58, a fin de adaptarlas a la nueva estructura y competencia de la Dirección General de Contabilidad y Administración;

Por lo expuesto,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- La División Intendencia, que integra la organización de la Dirección General de Contabilidad y Administración, pasará a depender directamente del señor Subsecretario de Hacienda de la Nación, con las funciones previstas en los incisos p) y q) del artículo 10º (Capítulo V) de las disposiciones aprobada oportunamente por el Decreto nº 1.149/58.

ARTICULO 2º.- Suprímase de las disposiciones aprobadas por el decreto nº 1.149/58, el inciso j) del artículo 1º (Capítulo I).

ARTICULO 3º.- El Departamento de Personal y Servicios Generales, que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2º de las disposiciones aprobadas por el decreto nº 1.149/58, integra la organización de la Dirección General de Contabilidad y Administración, pasará a denominarse "Departamento de Personal" y continuará con las funciones específicas que le fija el artículo 10º de las citadas disposiciones, excepto las consignadas en sus incisos p) y q).

ARTICULO 4º.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario en el Departamento del Interior e interino de Economía y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda.

ARTICULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.-

DECRETO Nº9.489.- FRONDIZI - A.R. Vítolo - R. Lumi.-

Poder Ejecutivo Nacional
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº 808.-

LOTERIA DE BENEFICENCIA NACIONAL Y CASINOS (Casinos) - COMPENSACION POR DESARRAIGO

Buenos Aires, 20 de enero de 1959.-

Visto las presentes actuaciones, por las cuales la Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos gestiona la implantación de un régimen de compensaciones a aplicar sobre el jornal básico de los agentes que se desempeñan en los casinos de su dependencia, con el objeto de compensar el gasto que les origina su estada en la localidad donde funciona la sala de entretenimiento, en las ocasiones en que deben actuar fuera de su lugar de residencia, y

CONSIDERANDO:

Que el temperamento propuesto tiende a dar solución integral a un problema que se debate desde tiempo atrás y que ha sido planteado en diversas oportunidades por conducto de las organizaciones gremiales que agrupan a ese personal;

Que ya en oportunidades anteriores y siempre relacionado con el mismo problema, se han dado soluciones parciales al mismo por conducto de las resoluciones ministeriales nº7.245, del 2 de julio de 1957 y nº 7.809, del 22 de agosto de 1958,mediante las cuales se estableció el otorgamiento de una asignación compensatoria por gastos de residencia para el personal que se desempeñe en los Casinos de Bariloche y Termas de Río Hondo;

Que tal temperamento ha sido adoptado en razón de que no procede liquidar al personal de referencia los viáticos establecidos por el decreto nº 18.989/56(+) toda vez que la naturale

(+) Ver Digesto Administrativo Nº 14.-

za peculiar de su función obliga a que su designación sea sin destino fijo, debiendo desempeñarse indistintamente en cualesquiera de los Casinos según las necesidades respectivas, en mérito a lo cual su traslado ya no constituye la "comisión de servicio" a que alude el citado acto de gobierno, sino una característica propia de su tarea;

Que la asignación de tales compensaciones resulta equitativa, teniendo en cuenta que otros servidores del Estado que se desempeñan en regiones situadas al sur del país, en lugares apartados de la precordillera o en zonas tórridas, que ofrecen similares características a aquéllas en que funcionan las salas de entretenimiento y donde se acentúan los problemas del mayor costo de vida, reciben ya beneficios análogos traducidos en suplementos mensuales sobre sus remuneraciones básicas;

Que con tal objeto se ha efectuado un reajuste sobre las escalas propuestas por la Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos, a fin de adaptar los montos del beneficio a un nivel similar al de aquellas asignaciones que por análogo concepto vienen percibiendo otros agentes de la Administración Pública;

Que finalmente, hallándose debidamente fundadas en el presente caso las necesidades ineludibles del servicio a que alude el artículo 32° del decreto-ley n° 16.990/57 (°) correspecto a las excepciones de lo dispuesto por el artículo 29° del referido texto legal, sobre modificaciones en los regímenes de sobreasignaciones, compensaciones u otros beneficios similares vigentes, nada obsta para acordar la correspondiente autorización;

Por ello,

EL PRESIDENTE PROVISIONAL DEL HONORABLE SENADO
DE LA NACION EN EJERCICIO DEL PODER EJECUTIVO

D E C R E T A :

ARTICULO 1°.-A partir del 1° de enero de 1959, el personal

(°) Ver Digesto Administrativo N° 409.-

jornalizado de la LOTERIA DE BENEFICENCIA NACIONAL Y CASINOS que sea destinado a prestar servicios en los casinos dependientes de la misma, gozará de una asignación por desarraigo, compensatoria de los gastos que le origine su estada en la localidad donde funcione la respectiva sala de entretenimientos, de acuerdo a los porcentajes que se indican a continuación:

Casino Central de Mar del Plata, Anexos I y II, Casino de Miramar y Casinos de Necochea: 40 %

Casinos de Bariloche y Casino de Termas de Río Hondo: 50 %

ARTICULO 2º.- Los porcentajes que establece el artículo anterior se aplicarán sobre el jornal básico de cada agente, y será acreedor de tal beneficio el personal cuyo lugar de residencia habitual que conste en su libreta de enrolamiento o cívica, dista a más de (40) cuarenta kilómetros del lugar donde funciona el Casino.

A efectos de comprobar debidamente el lugar de residencia habitual y permanente del agente, la LOTERIA DE BENEFICENCIA NACIONAL Y CASINOS - cuando así lo estime necesario- podrá solicitar de los organismos competentes, ya sean nacionales, provinciales o municipales, la extensión de certificaciones de domicilio.

En el caso de que mediante ese procedimiento, o por gestión directa de la repartición, se constatare alguna irregularidad en lo concerniente a la declaración de domicilio, el agente incurso en dicha falta se hará pasible de la consiguiente sanción disciplinaria en las condiciones determinadas por el Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública Nacional, sin perjuicio de la formulación del cargo correspondiente por lo percibido indebidamente.

ARTICULO 3º.- Es incompatible la percepción de la asigna-

ción por gastos de residencia, establecida por el presente decreto, con el cobro de viáticos liquidados de conformidad con el decreto nº 18.989/56.

ARTICULO 4º.- Los agentes que sean destinados a prestar servicios en un determinado Casino y se encuentren en las condiciones que prevé el artículo 2º del presente decreto, tendrán derecho a que se les anticipe el importe correspondiente a la asignación de referencia, hasta un máximo de treinta (30) días. Esa liquidación se practicará a partir del día que el empleado sale de su asiento habitual y hasta el momento que se reintegre al mismo, con la alternativa a que se refiere el inciso c) del artículo 5º; quedando establecido que la Repartición determinará en cada caso los días que corresponde liquidar.

ARTICULO 5º.- Cuando el Estado facilite gratuitamente al agente alojamiento o comida, el monto de la asignación se liquidará conforme a los siguientes porcentajes:

a) 50 % si se le diera alojamiento sin comida;

b) 50 % si se le diera comida sin alojamiento;

c) 25 % durante los días que el agente emplee para el viaje de ida y regreso;

d) si se le diera alojamiento y comida no tendrá derecho a percibir suma alguna en concepto de asignación compensatoria por gastos de residencia.

ARTICULO 6º.- La asignación compensatoria que se implanta por este decreto, en razón de la finalidad por la cual ha sido instituida, no sufrirá descuento alguno en concepto de aportes jubilatorios, y se liquidará también cuando el empleado haga uso de francos hebdomadarios, aún en el caso de que éstos fueran sin goce de jornal, como asimismo durante las inasistencias justificadas con derecho a la percepción de haberes, contempladas en el decreto nº 7.511/58.

ARTICULO 7º.- Las disposiciones del régimen aprobado por el

presente decreto tendrán carácter provisorio, debiendo incorporarse este personal al régimen que con carácter general se dicte oportunamente en la materia.-

ARTICULO 8º.- Quedan derogados el decreto nº 3.670/52, de fecha 22 de febrero de 1952, y las resoluciones miniteriales números 7.245/57 y 7.809/58, de fechas 2 de julio de 1957 y 22 de agosto de 1958, respectivamente.

ARTICULO 9º.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario en el Departamento del Interior, interinamente a cargo de la cartera de Economía y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda.

ARTICULO 10º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y pase a la Secretaría de Hacienda a sus efectos.-

GUIDO - Alfredo R. Vítolo - Ricardo Lumi.-

DECRETO Nº 870.-

Poder Ejecutivo Nacional
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº 809.-

LOTERIA DE BENEFICENCIA NACIONAL Y CASINOS (Casinos) - COMPENSACION POR DESARRAIGO

Buenos Aires, 17 de junio de 1959.-

Visto las presentes actuaciones Expediente nº 51.862/59, que dieran origen al Decreto nº 870 de fecha 20 de enero de 1959 (+), y

CONSIDERANDO:

Que por dicho acto de gobierno se implanta una asignación por desarraigo, al personal de la Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos, destinado a prestar servicios en los casinos dependientes de la misma, a partir del 1º de enero de 1959;

Que tal medida contraviene las disposiciones del artículo 28 del Decreto-Ley nº 16.990/57 (º), toda vez que las promociones o aumentos de las asignaciones del personal de la Administración Nacional, en todas sus ramas cualquiera fuese el motivo o la autoridad competente que las disponga, no podrán tener efecto retroactivo y regirán invariablemente a partir del día 1º del mes siguiente al de la fecha en que hubieran sido dispuestas;

Por ello y atento lo manifestado por el Tribunal de Cuentas de la Nación,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A:

ARTICULO 1º.- Establécese que la fecha de aplicación del bene

(+) Ver Digesto Administrativo Nº 808.-
(º) Ver Digesto Administrativo Nº 409.-

ficio a que se refiere el artículo 1º del Decreto número 870/59, regirá a partir del 1º de febrero de 1959.

ARTICULO 2º.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda.

ARTICULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y pase a la Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos -Secretaría de Estado de Hacienda- a sus efectos.-

FRONDIZI - Emilio Donato del Carril - Ricardo Lumi.-

DECRETO Nº 7.455.-

Poder Ejecutivo Nacional
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº 810.-

LOTERIA DE BENEFICENCIA NACIONAL Y CASINOS (Lotería - Premios - Prescripción)

Buenos Aires, 16 de junio de 1959.-

Visto las presentes actuaciones expediente nº 387.700/59 por las cuales la Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos, gestiona modificar el plazo de caducidad de las emisiones de lotería, y

CONSIDERANDO:

Que oportunamente por decreto nº 2.507/43, se adecuó el plazo de prescripciones de las referidas emisiones de lotería, estableciéndose en 90 días corridos subsiguientes al respectivo sorteo, cualquiera sea el carácter de los mismos;

Que el plazo referido, en su tiempo se ajustaba al desenvolvimiento general de la Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos, por cuanto estaba en consonancia con las series y millares emitidos;

Que al presente dado el incremento operado en los rubros aludidos precedentemente y atento las razones de mejor servicio, se estima conveniente reducir el plazo de caducidad para hacer efectivo el cobro de los billetes de lotería;

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- Los billetes premiados deberán ser entregados para su cobro en la Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos dentro de un plazo de sesenta días corridos, desde el día si-

guiente al del sorteo hasta el cierre de las operaciones del sexagésimo día, o del día hábil siguiente si aquél recayera en feriado o no laborable. Transcurrido dicho plazo sin haberse efectuado la presentación indicada, se tendrá por automáticamente extinguido el derecho del interesado para reclamar el pago del billete.

ARTICULO 2º.- El plazo establecido por el artículo anterior comenzará a regir a partir de la primera emisión que se sortee en el mes de septiembre de 1959.

ARTICULO 3º.- Deróganse las disposiciones del artículo 40 del Reglamento General de la Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos y del decreto nº 2.507 de 14 de julio de 1943, con la salvedad de que el plazo de 90 días fijado para este último regirá hasta su respectivo vencimiento para las emisiones anteriores a la indicada en el artículo segundo.

ARTICULO 4º.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda.

ARTICULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y pase a la Secretaría de Estado de Hacienda a sus efectos.-

FRONDIZI - Emilio Donato del Carril
Ricardo Lumi.-

DECRETO Nº 7.420.-

Poder Ejecutivo Nacional
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº 811.-

ESCALAFON PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL - INCOMPATIBILIDADES

Buenos Aires, 11 de febrero de 1959.-

Visto la solicitud interpuesta por el Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública de la Nación, con la finalidad de que se le exceptúe del cumplimiento de lo prescripto en el art. 11º del Decreto nº 9.530 de fecha 7 de noviembre de 1958, aprobatorio del "Escalafón para el Personal Civil de la Administración Nacional"; y

CONSIDERANDO:

Que el referido artículo acuerda un plazo de sesenta (60) días contados a partir de la fecha del citado decreto, a fin de que los agentes que no hubieren presentado o actualizado la declaración jurada sobre incompatibilidades o inhabilidades, den cumplimiento a dicha obligación;

Que el citado Departamento de Estado en su petición, expresa que en la actualidad se halla abocado al estudio para la aplicación del Escalafón, tendiente a dar cabida en él a los Profesionales del Arte de Curar en sus respectivas carreras: asistencial y sanitaria;

Que como resultado de ello, cierto número de profesionales que actualmente cumplen sus tareas con el horario reducido de dieciocho horas semanales, deberán ejercer durante treinta y cinco horas semanales, dado la naturaleza de sus funciones;

Que asimismo, en similares condiciones se encontrarían los profesionales que se desempeñan en los restantes Departamentos de Estado, y en otras especialidades;

Que el tener conocimiento los mismos de sus ubicación en dicho Escalafón y de las exigencias de horario que éste les impone, implicaría la confección de nuevas declaraciones juradas de acumulación de cargos;

Que en consecuencia, de dar cumplimiento los Departamentos de Estado a lo determinado en el citado artículo, sucedería que a posteriori tendrán que exigir la presentación de nuevas declaraciones juradas;

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- Exceptúase al personal de profesionales que presta servicios en los distintos Departamentos de Estado, del cumplimiento de lo estatuído en el artículo 11º del Decreto nº 9.530 de fecha 7 de noviembre de 1958, aprobatorio del "Escalafón para el Personal Civil de la Administración Nacional".

ARTICULO 2º.- Los referidos Departamentos de Estado exigirán a todos los profesionales la presentación o actualización de declaraciones juradas sobre incompatibilidades dentro de los treinta (30) días posteriores a la fecha de notificación del decreto por el que se aprueba su ubicación escalafonaria, de acuerdo con lo determinado en el "Escalafón para el Personal Civil de la Administración Pública Nacional".

ARTICULO 3º.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía y por el señor Secretario de Estado de Hacienda.

ARTICULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.-

FRONDIZI - Emilio Donato del Carril - Ricardo Lumi.-

DECRETO Nº 1.411.-

Poder Ejecutivo Nacional
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nª 812.-

HORARIO ADMINISTRATIVO

Expediente nº 35.618/59.-

Buenos Aires, mayo 20 de 1959.-

A S.E.EL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA DE LA NACION,
DON RICARDO LUMI
S / D.

Tengo el honor de dirigirme a V.E., encareciéndole quiera tener a bien disponer se determine el temperamento que deberá adoptarse frente a las conclusiones del Decreto nª 3.754/59 (+) con respecto a los agentes que desarrollan su actividad en horarios nocturnos, dado que la Ley nº 11.544 determina que toda hora que exceda las 21 horas deberá ser cumputada como 68 minutos, lo que motivaría una lógica disminución en la jornada normal.

Encuentro oportuna esta circunstancia para renovar a V.E., las seguridades de mi más alta consideración.-

Fdo. REINALDO BRENNA
Presidente de la
Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos

(+) Ver Digesto Administrativo Nª 722.-

Expediente nº 35.618 - 1959.-
LOTERIA DE BENEFICENCIA NACIONAL Y CASINOS. Consulta sobre el temperamento a seguir con los agentes que desarrollan sus actividades en horarios nocturnos.-

//--nos Aires, junio 1º de 1959.-

Atento lo manifestado precedentemente y teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 5º del decreto número 3.754 del 1º de abril de 1959, pase al Comité Ejecutivo del Plan de Racionalización y Austeridad (C.E.P.R.A.) a los fines correspondientes, estimándole, dada la índole del asunto planteado, se sirva hacer saber a esta Secretaría, con carácter de preferente despacho, lo que se resuelva sobre el particular.-

Fdo. RAFAEL R. AYALA
Subsecretario de Hacienda

BUENOS AIRES, 22 de junio de 1959.-

Actuación nº 1.572.-

Ref.: Horarios nocturnos. LOTERIA DE BENEFICENCIA NACIONAL Y CASINOS.-

La jornada de trabajo que por razones higiénicas han sido legalmente reducidas, no pueden ser modificadas por decre

to del Poder Ejecutivo, ya que un decreto no puede derogar ni modificar una ley.

Por ello las disposiciones del Plan de Racionalización y Austeridad deben ajustarse a las normas de la Ley número 11.544 y en ese sentido el C.E.P.R.A. resuelve contestar a la Secretaría de Hacienda.

Sirve la presente de atenta nota de envío.-

Fdo. JUAN OVIDIO ZAVALA
Secretario Técnico
de la Presidencia de la Nación

Poder Ejecutivo Nacional
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº 2813.-

ESCALAFON PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL

Expediente nº 90.258 - 1959.
Providencia nº 244.-

//nos Aires, 11 de junio de 1959.-

Vuelva a la Dirección General de Obra Social, manifestándole, con respecto a la consulta formulada, lo siguiente:

a) Los pedicuros deben ser incluídos en los grupos técnicos de la Clase D - grupos III, V y VII.

b) De acuerdo con lo dispuesto por el decreto nº 6.266/59, el personal aludido en el apartado a) puede ser incluído en horario reducido, pero ello depende de las necesidades del servicio a juicio de la propia repartición.

c) Las respuestas dadas en los apartados precedentes son de aplicación a las consultas formuladas en igual sentido para los Auxiliares de Farmacia.

Fdo. JOSE LUIS FRANGI
Director General
Servicio Civil de la Nación

Poder Ejecutivo Nacional
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº 814.-

ESCALAFON PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL (Punto 52º) - ANTIGÜEDAD

Expediente nº 90.219/59.-
Nota nº 171/59 (I.N.T.A.)
Providencia nº 234.-

SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA:

Respecto de las consultas que formula el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaría acerca del cómputo de servicios del personal (punto 52º del Escalafón aprobado por decreto nº 9.530/58), esta Dirección General considera lo siguiente:

a) los servicios desempeñados en la Administración Pública Nacional durante el lapso en que el horario oficial era inferior a 35 horas semanales deberán ser computados como cumplidos con sujeción a ese mismo.

b) los servicios docentes-horas de cátedra- inferiores a 18 horas semanales, deben computarse en forma proporcional, aplicando el mismo criterio porcentual seguido en el punto 52º, apartado c) del Escalafón.

c) los servicios que por su naturaleza no estén comprendidos en el horario mínimo fijado serán computados en la forma antedicha, pero será necesario que se trate de servicios específicamente autorizados por autoridad competente para desarrollarse con una determinada reducción horaria.

d) las constancias existentes en los legajos personales de los agentes sobre servicios prestados en otras dependencias, en las que no conste el horario de las tareas, deberán considerarse de la siguiente manera; servicios docentes: corresponderá requerir la constancia expresa del número de horas cumplidas; servicios administrativos: de tratarse de servicios comunes, se considerarán cumplidos en el horario oficial, salvo indicación expresa en contrario; en caso de servicios de características especiales que hagan presumir la existencia de horarios inferiores, se requerirá la pertinente información.-

DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO CIVIL, 4 de junio de 1959.-

Fdo. JOSE LUIS FRANGI
Director General

//--nos Aires, 8 de junio de 1959.-

Aprobado; dése a la presente el carácter de resolución aclaratoria de las normas para el cómputo de servicios del personal (punto 52° del Escalafón y decreto nº 4.632/59 (+), y vuelva a la Dirección General del Servicio Civil de la Nación a sus efectos.-

Fdo. RICARDO LUMI
Secretario de Estado de Hacienda

RESOLUCION Nª 7.744.-

(+) Ver Digesto Administrativo Nª 709.-

Poder Ejecutivo Nacional
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nª 815.-

ESCALAFON PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL - SUBSIDIO FAMILIAR

Cde.Expediente nº 90.203 -S.H.-
Cde.Expediente nº 681.596 D.E.y C.
Providencia nª 231.-

Señor Secretario de Estado de Hacienda:

El pago del subsidio por cónyuge cuando la situación encuadra en el punto VI, apartado b), de las normas complementarias del punto 26º del Escalafón, aprobadas por decreto nº 4.631/59 (+), debe entenderse sujeto, no sólo a la prescripción particular que fija la necesidad de probar que el cónyuge que se desempeña fuera de la Administración Nacional, ha renunciado o no tiene derecho en su empleo a tal beneficio, sino a las restantes condiciones generales, vale decir que debe tratarse de un matrimonio efectuado de conformidad con las leyes argentinas o extranjeras reconocidas en el país, y estar el cónyuge "a cargo" del interesado.

Dicha situación de "a cargo" quedó perfectamente delimitada en la resolución S.H. nº 7.142/59 (º) -dictada en uso de atribuciones resultantes del art. 13º del decreto nº 9.530/58 y art. 5º del decreto nº 4.631/59- de acuerdo con la cual se considera que el cónyuge está "a cargo" cuando conviva con el agente, y éste atiende a su subsistencia.

Por consiguiente, el pago de subsidio por cónyuge, en el ca

(+) Ver Digesto Administrativo Nª 738.-
(º) Ver Digesto Administrativo Nª 781.-

so previsto en el citado punto VI, apartado b), sólo resulta procedente cuando se verifiquen los recaudos expuestos en el primer párrafo de la presente. En el caso del agente varón, la liquidación se hará efectiva sin que necesite demostrar que atiende la subsistencia de su esposa, con la que debe convivir; en el caso del agente mujer, ésta debe demostrar fehacientemente que atiende la subsistencia del esposo, con el que convive, ya sea por incapacidad física de éste, o por otra causa.-

DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO CIVIL, junio 3 de 1959.-

Fdo. JOSE LUIS FRANGI
Director General

//nos Aires, 16 de junio de 1959.-

APROBADO; dése a la presente carácter de resolución aclaratoria de las normas para el pago de subsidio familiar (punto 26° del Escalafón y decreto n° 4.631/59) y vuelva a la Dirección General del Servicio Civil de la Nación a sus efectos.-

Fdo. RICARDO LUMI
Secretario de Estado de Hacienda

RESOLUCION Nª 7.786.-

Poder Ejecutivo Nacional
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº 816.

ESCALAFON PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL - SUBSIDIO FAMILIAR

Expediente Nº 90.206/59
Providencia Nº 236.-

Señor Secretario de Estado de Hacienda:

Respecto de las consultas que formula la Universidad Nacional de Córdoba acerca de las normas para el pago del subsidio familiar (punto 26º del Escalafón y decreto número 4.631/59 (+), esta Dirección General considera lo siguiente:

1) la situación del cónyuge, respecto de los "parientes enumerados" en el punto III de las normas complementarias del punto 26º del Escalafón, ha quedado perfectamente delimitada en la Resolución S.H. nº 7.142/59 (º) Bol. Oficial del 26/5/59).

2) no corresponde la liquidación del subsidio por cónyuge en los casos de separación legal en que la sentencia no disponga el pago de alimentos. En el caso de corresponder dicho pago, el subsidio correspondería al agente varón, pero en ningún caso a la mujer, por razones obvias.

3) la determinación del monto de los ingresos del cónyuge que ejerce alguna profesión liberal o se dedica a actividades comerciales remuneradas mediante comisiones, pue

(+) Ver Digesto Administrativo Nº 738.-
(º) Ver Digesto Administrativo Nº 781.-

de hacerse en base a una estimación-promedio mensual.

4) en los casos de separaciones de hecho, sin sentencia judicial, la liquidación del subsidio por hijos resultará de la declaración jurada del interesado, sujeta a las verificaciones previstas en los puntos IX y X de las normas complementarias del punto 26° del Escalafón (decreto nº 4.631/59), y susceptible, en caso de falsedad comprobada, de la aplicación de lo determinado en el punto XIV de las mismas. En estos casos no corresponde el pago de subsidio por cónyuge.

5) los casos en que ambos cónyuges estén amparados por subsidios de igual monto y causa deben ajustarse a las normas resultantes de la Res.S.H. nº 7.142/59.

6) en los casos en que ambos cónyuges trabajen y uno de ellos tuviera asignado un subsidio inferior al fijado en el Escalafón (decreto nº 9.530/58), y por convenio no pudiera renunciar a él, no procede liquidar suma alguna en concepto de diferencia al cónyuge ocupado en la Administración Pública Nacional, ya que si éste es el agente varón, le correspondería la suma fijada en el citado Escalafón, y si se trata de la mujer, es aplicable la norma de la Resol.S.H. nº 7.142/59.

7) cuando un agente de la Administración Nacional ayude de su peculio a la subsistencia de un pariente, aún cuando éste reciba además ayuda de otros, la liquidación del subsidio deberá ajustarse a estas normas: a) que se trate de uno de los parientes enumerados en el punto 26° del Escalafón: b) que esté incapacitado; c) que los otros parientes que contribuyen al sustento de aquél no perciban, por esa misma causa, subsidio familiar en sus ocupaciones, ya que en ningún caso se podrá abonar el beneficio más de una vez por el mismo concepto, aunque se trate de distintos beneficiarios.

8) no corresponde liquidar subsidio por hijo cuando éste es beneficiario de una beca estudiantil de ayuda, cuyo impor

te sea de $ 1.000.-mensuales, o más.

9) no procede liquidar subsidio por cónyuge al personal viudo.

10) el subsidio de $ 100.- por nacimiento, instituído en el art.13º del decreto nº 7.025/51 no ha sido derogado, estando su liquidación supeditada a la norma del art. 21º del decreto nº 3.019/53, vale decir que será liquidado a los agentes de la Administración Nacional cuyas entradas normales y permanentes al hogar sean de hasta $ 2.000.-mensuales nominales.

11) corresponde considerar "a cargo" al pariente incapacitado que se encuentre recluído en establecimiento público que no requiera contribución alguna por internación, pero que demande otras necesidades en concepto de ropa, etc., siempre que se demuestre: a) que se trate de alguno de los enumerados en el punto 26º del Escalafón: b) que no cuente con ingresos superiores a $ 1.000.- mensuales, ya sean provenientes de jubilación, sueldo, intereses, etc. En estos casos, el beneficio sólo podrá ser percibido por una persona, aún cuando sean varios los que contribuyen a la ayuda.-

DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO CIVIL, 5 de junio de 1959.-

Fdo. JOSE LUIS FRANGI.
Director General

//nos Aires, 16 de junio de 1959.-

APROBADO; dése a la presente el carácter de resolución aclaratoria de las normas para el pago de subsidio familiar (punto 26º del Escalafón y decreto nº 4.631/59) y vuelva a la Dirección General del Servicio Civil de la Nación, a sus efectos.-

Fdo. RICARDO LUMI
Secretario de Estado de Hacienda

RESOLUCION Nº 7.787.-

Poder Ejecutivo Nacional
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº 817.-

ESTATUTO PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL (Art. 43º) - JUNTA DE DISCIPLINA

Cde. Expediente nº34.549/59
Providencia nº 243.-

//nos Aires, 10 de Junio de 1959.-

Vuelva a la Loteria de Beneficencia Nacional y Casinos, informando que si el letrado propuesto a fs. 103, reúne los requisitos exigidos por el art. 43º del Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública Nacional para desempeñarse como miembro de la Junta de Disciplina podría ser designado en tal carácter; caso contrario serían de aplicación los términos de la resolución nº 7.799/58 (+) (B.O. 18/9/58).-

DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO CIVIL DE LA NACION,

Fdo. JOSE LUIS FRANGI
Director General

(+) Ver Digesto Administrativo Nº 598.-

Poder Ejecutivo Nacional
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº 818.-

ESTATUTO DEL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL - SANCIONES

Expediente nº 34.172 - 1956.-
Providencia nº 224.-

//ÑOR SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA:

Respecto de la cuestión planteada en las presentes actuaciones por la Direccion General Inmobiliaria, esta Dirección General considera que, en primer término, debe determinarse si el Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública Nacional aprobado por Decreto-Ley nº 6.666/57 (+), y su reglamentación aprobada por Decreto nº 1.471/58 (°), son de aplicación al presente caso.

En tal sentido, y conforme a lo dictaminado por la Procuración del Tesoro de la Nación en el expediente nº 35.802/56, debe tenerse en cuenta lo dispuesto en el art. 2º del Código Penal, esto es, aplicarse la ley más benigna al procesado.

Suponiendo que encuadrara en la norma disciplinaria vigente, resultaría procedente pasar a considerar los otros dos puntos consultados.

Por entender que dará mayor claridad a la interpretación que se solicita, comenzaremos por dilucidar la competencia de la Junta de Disciplina que debe intervenir en autos.

El agente sumariado, en el momento de ocurrir el hecho que dió lugar a las actuaciones sumariales, pertenecía presupuestariamente a la Dirección General Impositiva, hallándose en comisión en la ex-Fundación, lugar este último dentro de

(+) Ver Digesto Administrativo Nº 254.-
(°) Ver Digesto Administrativo Nº 422.-

cuya jurisdicción cometió el delito. Posteriormente, pasó presupuestariamente a revistar en la Dirección General Inmobiliaria, donde no llegó nunca a prestar servicios.

Es indiscutible que ninguna de las dos Juntas, tanto la de la Dirección General Impositiva como la de la Dirección General Inmobiliaria, se encuentran integradas por representantes elegidos por el inculpado. Si bien desde este punto de vista las dos estarían en igualdad de condiciones, existe un organismo, la nombrada Dirección General Impositiva, donde el empleado prestó servicios efectivos con anterioridad a su pase en comisión. Por otra parte, fué esa misma Repartición la dispuso el sumario y donde se sustanció el mismo.

Dichas razones hacen que entre dos Juntas en igualdad de condiciones, como se manifestó procedentemente, la de la Dirección General Impositiva ofrezca mayores garantías al sumariado, por estar dentro de la jurisdicción en que el procesado prestó servicios efectivos.

Por otra parte, el hecho en cuestión no configura un "delito contra la administración", ya que fué cometido contra una institución privada, sin que haga variar tal concepto la circunstancia de que con posterioridad dicha institución pase a formar parte del Estado. Se trata indudablemente de una "violación de los deberes y obligaciones del funcionario", hecho que afecta a la Dirección General Impositiva, donde revistaba el mismo, y no a la Dirección General Inmobiliaria, a cuyo presupuesto fué luego transferido, sin haber llegado a prestar servicios en la misma.

Entendiendo la Junta de Disciplina que se indica, es evidente que debe pronunciarse, en cuanto a la sanción disciplinaria, la autoridad máxima de la jurisdicción donde funciona. Sentar otro criterio sería contrario a los principios de jerarquía y subordinación que deben imperar en la Administración Pública.

En síntesis, con el pronunciamiento de la Junta de Disciplina indicada, el Director de la Dirección General Impositiva debe propiciar la medida disciplinaria que estime corresponder, dando traslado para su conocimiento a la Dirección General Inmobiliaria, en atención a razones de dependencia presupuestaria del causante.

Finalmente, considera esta Dirección General que situaciones como la presente pueden suscitarse en cualquier momento y dentro de distintas jurisdicciones, por lo que sería conveniente el dictado de una Resolución que, resolviendo este caso particular pueda servir de norma aclaratoria del Estatuto y su Reglamentación.

En tal sentido, se eleva a su consideración el pertinente proyecto de Resolución.-

DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO CIVIL DE LA NACION, 30/10/58.-

Fdo. JOSE LUIS FRANGI
Director General

Buenos Aires, 31 de octubre de 1958.-

Visto el expediente nº 34.172/56 y sus agregados, y

CONSIDERANDO:

Que un agente perteneciente al presupuesto de la Dirección General Impositiva, que prestaba servicios como adscripto en la ex-Fundación, cometió en perjuicio de ésta un delito por el cual fué condenado por la Justicia;

Que en tales condiciones aquella Repartición estima que corresponde propiciar su exoneración, por estar comprendido el causante dentro de lo previsto en el artículo 38, inciso c), del Estatuto del Personal Civil (Decreto-Ley nº 6.666/57);

Que no obstante tratarse de hechos anteriores a la vigencia de este cuerpo legal, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2º del Código Penal, es procedente la aplicación de la Ley más benigna, en este caso el aludido Estatuto;

Que en tales condiciones, antes de adoptar una medida de orden disciplinario, corresponde la previa intervención de la Junta de Dsiciplina, que debe dictaminar necesariamente en los sumarios administrativos incoados por razones de ese orden;

Que si bien con posterioridad a los hechos que originan la presente, el interesado pasó a revistar presupuestariamente en la Dirección General Inmobiliaria, no llegó nunca a prestar servicios en esta última Repartición;

Que el hecho cometido configura una evidente violación de los deberes y obligaciones del funcionario público, que afecta al organismo al que pertenecía en el momento de ejecutarlo, vale decir, a la Dirección General Impositiva;

Que es, por tanto, a la Junta de Disciplina de dicha Repartición a quien corresponde tomar en estas actuaciones la

intervención que le compete, de acuerdo con el artículo 44º del aludido Estatuto;

Que una vez expedida la Junta de Disciplina de esta jurisdicción, corresponde a las autoridades de la misma, en base a las actuaciones promovidas, pronunciarse en cuanto a la sanción disciplinaria a aplicarse;

Por todo ello, atento a lo informado por la Dirección General del Servicio Civil de la Nación y de conformidad con lo previsto en el Decreto-Ley nº 797/58 (1),

EL SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA
R E S U E L V E :

ARTICULO 1º.- En las actuaciones producidas en el expediente nº 34.172/56 deberá tomar la intervención prevista en el artículo 44º del Estatuto del Personal Civil y su Reglamentación, la Junta de Disciplina de la Dirección General Impositiva.

ARTICULO 2º.- Producido el dictamen por parte de esa Junta, dicha Repartición deberá pronunciarse en cuanto a la sanción disciplinaria que estime corresponder, la que deberá ser puesta en conocimiento de la Dirección General Inmobiliaria, en cuyo presupuesto revista actualmente el causante.

ARTICULO 3º.- Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, y archívese.-

Fdo. RICARDO LUMI

RESOLUCION Nº 8.003.-

(1) Ver Digesto Administrativo Nº 419.-

Poder Ejecutivo Nacional
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº 819.-

ESTATUTO PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL (Arts. 41º y 44º) - SUMARIOS - SANCIONES - LLAMADO DE ATENCION

Expediente nº 32.341 - 1959
Providencia nº 183.-

//nos Aires, 24 de marzo de 1959.-

Vuelvan las presentes actuaciones a la Dirección General de Contabilidad y Administración llevando a su conocimiento que la sustanciación de todo sumario deben cumplimentarse las disposiciones resultantes de los artículos 41º y 44º del Estatuto del Personal Civil (decreto-ley nº 6.666/57 (+) y su Reglamentación, sin cuyo requisito serán legalmente objetables.

Asimismo, las sanciones a aplicar deben encuadrar dentro de las enumerdas en el art. 34º de dicho cuerpo legal las que por su carácter taxativo excluyen otras, tales como el "llamado de atención".-

DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO CIVIL DE LA NACION.-

Fdo. JOSE LUIS FRANGI
Director General

(+) Ver Digesto Administrativo Nº 254.-

Poder Ejecutivo Nacional
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nª 820.-

ESTATUTO DEL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL - SUSPENSIONES - SUMARIOS

Expediente nº 44.113 - 1957.- Dirección General Impositiva - José Alberto Mayo - Estatuto del Personal Civil - Delito contra la Administración - Sumario Judicial y sumario administrativo - Independencia de ambos; requisitos - Suspensión por hechos ajenos al servicio y por causas del servicio o imputables al mismo - Pago de haberes - Normas de interpretación de la Ley.-

//ñor Secretario de Hacienda:

1.- El Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública Nacional contiene las siguientes normas respecto de la suspensión de los empleados como medida preventiva:

a) artículo 39º.- Sobre suspensión del agente presuntivamente incurso en faltas por causas del servicio o imputables al mismo; la suspensión, mientras se sustancia el sumario administrativo, no podrá ser mayor de 90 días;

b) artículo 41º, inc. XIV, de la reglamentación, sobre sustanciación de sumarios administrativos por hechos que, a la vez, pudieran configurar delitos y determinar la sustanciación paralela de proceso criminal; ambas causas serán independientes pero -una vez efectuada la denuncia ante la justicia, según lo dispuesto por el art.

164 del Código de Procedimiento en lo Criminal- solo podrá proseguirse la sustanciación de la causa administrativa a los efectos de establecer la conducta del agente "en el orden administrativo" y determinar si corresponde la aplicación de sanciones disciplinarias, con la salvedad de que, pendiente la causa criminal, no podrá dictarse resolución absolutoria; la resolución que se dicte en la causa criminal no influirá, necesariamente, en las decisiones que adopte la administración y el sobreseimiento provisional o definitivo, así como la absolución en dicha causa, no habilitará al agente para continuar en el servicio civil si el mismo fuera sancionado en el sumario administrativo;

c) artículo 39; inc. I, de la reglamentación, sobre suspensión preventiva del agente privado de libertad o sometido a proceso criminal "por hechos ajenos al servicio"; la suspensión durará, en el primer caso, hasta que el agente recobre la libertad, y en el segundo, hasta que demuestre su inculpabilidad con el testimonio de la sentencia firme respectiva.

2.- Como puede verse, no contiene el Estatuto una disposición expresa que se refiera concretamente a la suspensión del agente sometido a proceso criminal por causas del servicio o imputables al mismo, y corresponde, en consecuencia, proceder a una interpretación de las normas en cuestión para establecer su significación o su contenido y apreciar la regla de conducta que ellas estatuyen para los destinatarios a que se dirigen. Es decir, que se trata en el caso de un problema de "interpretación de la ley".

A este propósito, conviene recordar algunos principios esenciales, y nada nos parece tan claro como lo expuesto por Alfredo Orgaz, en sus "Nuevos estudios de derecho civil" (Bs. As. 1954, p. 404), donde dice lo siguiente:

"La interpretación legal tiene por objeto "la determinación del sentido objetivo de la ley, esto es, del sentido que resulta de la ley misma, considerada como un conjunto orgánico y sistematico de preceptos, y no del sentido puramente subjetivo que puede desprenderse de las llamadas "intenciones del legislador", o sea de las personas concretas que participan en la legislación.

"Ahora bien: la voluntad legislativa puede estar expresada en el precepto correcta o defectuosamente. Cuando la interpretación, mediante el empleo de todos sus recursos, llega a la conclusión de que la voluntad legal es la que surge efectivamente de su texto, se dice que la interpretación es declarativa o estricta. Cuando, al contrario, se estima que no hay una exacta concordancia entre aquella voluntad y su declaración, son dos la hipótesis posibles:

"a) Que el texto esté redactado de manera demasiado amplia o comprensiva; por ejemplo, la ley dice "enajenar" y resulta indudable que sólo ha querido decir "vender"; en este caso, la ley debe aplicarse con esta reducción o restricción, y la interpretación se llama restrictiva.

"b) Que, al revés de la situación precedente, la expresión de la voluntad legislativa se haya hecho con insuficiencia, en cuanto al alcance o extensión del precepto: vgr., el artículo 135 del cód. civil establece que los menores emancipados no pueden, sin autorización judicial, "vender" o hipotecar bienes raíces, de cualquier valor que sean", y según la literalidad de estos términos podrían permutar bienes inmuebles, constituir usufructos, servidumbres, etc., sin necesidad de ninguna autorización.

Aunque el código no tuviese otras disposiciones concordantes relativas a estos actos, la interpretación correcta del

art. 135 habría podido y aún debido extender a ellos esta disposición ante la manifiesta discordancia entre la voluntad de la ley y su declaración. En estos casos, la interpretación se denomina extensiva.

"La cuestión de si una ley debe ser interpretada estricta, restrictiva o extensivamente es, por lo tanto, una cuestión de hecho, que depende estrechísimamente de las circunstancias. No puede decirse nunca "a priori" que la interpretación debe hacerse de uno u otro modo, según los tipos de leyes; lo único que cabe decir "a priori", es que la interpretación debe ser siempre correcta, y esto, según las circunstancias particulares, exigirá al intérprete que se ajuste al texto de la ley o bien que se quede más acá o vaya más allá de lo que ese texto literalmente declara".

3.- Si se aplican estos principios a la interpretación de las normas del Estatuto y su reglamentación (supra, nº 1), se llega, a juicio de esta Dirección, a las siguientes conclusiones:

a) Que no puede haber dos sumarios -uno administrativo y otro judicial- que se refieran "exclusivamente" a los mismos hechos o a la misma conducta del agente. La sustanciación de ambas causas a que se refiere la reglamentación del Estatuto, sólo puede tener lugar cuando, además de haber cometido un hecho (delito) cuya punibilidad penal juzgará la justicia, el agente hubiese incurrido en faltas o transgresiones administrativas que pudieran merecer sanción disciplinaria (incumplimiento de determinadas obligaciones; negligencia o mal desempeño de sus funciones; quebrantamiento de la disciplina, etc. Ejemplos: la agresión a un superior, que podría dar lugar a un proceso criminal por lesiones y a un sumario administrativo por falta de disciplina; el accidente de tránsito ocasionado por el agente al conducir un vehículo oficial, que podría dar lugar a un proceso criminal por el daño causado en el cuerpo o en la salud de terceros, y a un sumario administrativo por

infracción de los reglamentos de la Administración en el caso de haber utilizado el vehículo fuera del servicio, sin la debida autorización, etc.).

Si no existiera la posibilidad de juzgar la conducta del agente por faltas puramente administrativas, esto es, si sólo se tratara de establecer si es o no responsable por un hecho que constituye delito, el sumario administrativo no podría tramitar sino a los efectos de reunir los antecedentes necesarios para poder efectuar la pertinente denuncia ante las autoridades policiales o judiciales, y la decisión del caso quedaría supeditada, exclusivamente, al resultado de la causa criminal.

Por todo ello, parece evidente que la suspensión preventiva del agente -sin goce de haberes- hasta la terminación de la causa criminal, es facultad innegable de la Administración, puesto que tiene esta misma facultad aún en el caso de hallarse el agente sometido a proceso por hechos enteramente ajenos al servicio, y que ella se le concede en defensa del decoro y prestigio de la Administración y con el fin de establecer luego si la conducta del agente es o no compatible con su permanencia en el cargo, en orden a lo dispuesto por el artículo 6°, inc. b) del Estatuto, según el cual el personal está obligado a observar, en el servicio y fuera de él, una conducta decorosa y digna de la consideración y de la confianza que su estado oficial exige.

b) Que el juego armónico de las disposiciones en cuestión, sobre la base de una correcta interpretación extensiva de sus normas, consideradas como un conjunto orgánico y sistemático de preceptos, permite establecer que la suspensión preventiva del agente sometido a proceso criminal por causas del servicio o imputables al mismo, se halla sobrentendida o implícitamente contenida en el art. 39, inc. I, de la reglamentación del Estatuto, no sólo por lo expuesto, sino porque ninguna norma la niega como discreto y razonable ejercicio del

poder disciplinario por parte de la autoridad competente.

4.- En el caso particular de las presentes actuaciones, se rectifica, pues, en razón de las conclusiones que anteceden, el criterio expuesto en el dictamen de fs. 10 y se concluye en el sentido de que corresponde mantener la suspensión preventiva del agente JOSE ALBERTO MAYO, sin goce de haberes, hasta la terminación de la causa judicial, para resolver luego en definitiva según el resultado de la misma. Es de advertir, además, en este sentido, que conviene establecer las conclusiones a que se hubiera llegado en el sumario administrativo instruído según lo dispuesto por la resolución nº 247/57 cuya copia corre a fs. 2, para determinar en qué medida podría aplicarse desde ahora sanciones disciplinarias con independencia del resultado de la causa criminal (esto es, bien entendido, si el agente hubiese incurrido en alguna violación de sus deberes, puramente administrativa, y distinta de la comisión del delito por el cual se halla procesado, porque si sólo se tratara de esto último -la comisión de un delito-, no correspondería sino esperar la terminación de la causa judicial).-

DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS, setiembre 19 de 1958.-

Fdo. CRISTIAN GIMENEZ DEMARIA
Director General

Expediente nº 36.961 - 1958.-
Providencia nº 220.-

//ñor Secretario de Estado de Hacienda:

Esta Dirección General comparte plenamente el criterio sustentado por su similar de Asuntos Jurídicos en cuanto se relaciona con la suspensión preventiva de aquellos agentes

sometidos a proceso criminal por causa del servicio o imputable al mismo, la que debe hacerse efectiva sobre la base de las disposiciones de la reglamentación del artículo 39º del Estatuto, es decir, sin sujeción al plazo de noventa (90) días, y sí hasta que demuestre su inculpabilidad con el testimonio de la sentencia firme respectiva.

En tal sentido ya se ha expedido en el expediente número 90.164/58, al ser consultada por la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública sobre la aplicación de los artículos 35º y 39º del Estatuto y su Reglamentación.

A efectos de evitar distintas interpretaciones resulta necesario el dictado de una Resolución aclaratoria, tal como está previsto en el decreto-ley nº 797/58 (+), y en tal sentido se eleva a su consideración el pertinente proyecto de la misma.-

DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO CIVIL DE LA NACION, 28/10/958

Fdo. JOSE LUIS FRANGI
Director General

MINISTERIO DE ASISTENCIA SOCIAL
Y SALUD PUBLICA

Expediente nº 90.164 - 1958

DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS:

A raíz de diversas situaciones que se plantean en la interpretación de los textos legales y reglamentarios que reglan las suspensiones preventivas, este Departamento requie-

(+) Ver Digesto Administrativo Nº 419.-

re dictamen legal sobre las cuestiones que más adelante se enuncian a fin de adoptar las medidas del caso y fijar criterio sobre el procedimiento a seguir en la materia:

a) En los casos en que, por circunstancias del sumario, los hechos que dieron origen a la suspensión preventiva del agente no hubieren sido desvirtuados al momento en que ha transcurrido el término de 90 días previsto en el artículo 39º del decreto nº 6.666/57 (º), corresponde proceder a su levantamiento o por el contrario es factible mentener la suspensión hasta la oportunidad en que se dicte resolución en el sumario?

b) En el supuesto que la suspensión pudiere mantenerse, no obstante encontrarse vencido el término de 90 días, corresponde que se abonen los haberes al agente por el término en que excede dicho plazo, si la sanción no fuere la de cesantía o exoneración o si fuere absuelto?

c) Si se entendiera que corresponde abonarle los haberes al agente en el supuesto previsto en el apartado b), esta decisión no estaría en oposición con lo dispuesto en la reglamentación del artículo 35º, inciso I)?

d) Para ampliar el término de 30 días por el cual hubiere sido suspendido preventivamente el agente, es necesario un pronunciamiento expreso de este Departamento solicitando la ampliación por 60 días más, o ante el silencio que se guarde, de hecho se entiende prorrogado?

e) En el caso que se entendiera que la suspensión puede exceder de 90 días, cual de los dos criterios expuestos en el punto anterior corresponde aplicar?

f) Si el imputado en el sumario se encuentre sometido a proceso por la denuncia que al respecto formulen las

(º) Ver Digesto Administrativo Nº 254.-

autoridades de esta Repartición en virtud de un presunto delito cometido durante el servicio, resultando o no damnificado el Ministerio, sería de aplicación el art. 39º del Estatuto o bien el inciso I "in fine" de su reglamentación, no obstante que la última norma citada regla el caso de que el agente se encontrase bajo proceso criminal por un hecho ajeno al servicio ? Claro está que esta última interpretación no tendría razón de ser, de entenderse que al personal pudiere seguir suspendido no obstante encontrarse vencido el término de 90 días previsto por el art. 39º.

DEPARTAMENTO DE SUMARIOS, 20 de agosto de 1958.-

Fdo. JULIO SANTINI
Jefe de Departamento

MINISTERIO DE ASISTENCIA SOCIAL
Y SALUD PUBLICA

DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO CIVIL DE LA NACION:

De acuerdo a lo preceptuado por el decreto nº 2.477/58 (¹), artículo 1º inciso d) se solicita opinión sobre los puntos respecto a los cuales pide dictamen legal precedentemente el Departamento de Sumarios.

Sin perjuicios de la consulta efectuada esta Dirección General sostiene los siguientes puntos de vista.

a) Por dictamen 1897, emitido en el expediente 42.467/57, de fecha 7 de noviembre de 1957, esto es con anterioridad al decreto nº 1.471/58 (") reglamentario del Estatuto del Personal Civil de la Nación, esta Dirección General sostuvo la tesis, respecto del artículo 39º del Estatuto, "que sin forzar la interpretación de la re-

(¹) Ver Digesto Administrativo Nº 432.-
(") Ver Digesto Administrativo Nº 422.-

ferida norma se infiere que el sentido de la misma apunta a dos cuestiones totalmente diferente. Una, la separación en sí, que responde al estado de necesidad; otra, el derecho de percibir haberes a partir de un determinado momento sumarial. Es decir que el término de separación preventiva puede prolongarse más allá de los noventa días cuando una razón de fuerza mayor lo justifique, en el caso de que la reincorporación del agente pudiera lesionar el prestigio de la Administración Pública o afectar la dignidad de la función. Precisamente, la última parte del referido artículo 39ª establece que sí la sanción no fuera privativa de haberes, éstos le serán íntegramente pagados; en su defecto le serán pagados en la proporción correspondiente, queriendo significar que la mayor o menor extensión del término de la suspensión preventiva no deberá afectar patrimonialmente al agente, según fuere la sanción que en definitiva resultare aplicable".

El decreto reglamentario nº 1.471/58 agregó posteriormente (inciso II) que "en los casos en que el personal fuera sancionado con exoneración o cesantía, no tendrá derecho a la percepción de los haberes correspondientes al lapso durante el cual permaneció suspendido".

El inciso I de este artículo contempla el caso de proceso criminal del agente suspendido, por hechos ajenos al servicio. Dispone al respecto que la suspensión durará hasta que recobre la libertad, cuando se encontrare privado de ella o hasta que demuestre su inculpabilidad, si continuase procesado, mediante testimonio de la sentencia firme que se dicte.

Este artículo 39º del decreto 1.471/58 demuestra claramente, a juicio de esta Dirección General, que la suspensión preventiva puede exceder de noventa días, pues es obvio que normalmente el proceso criminal dura mucho más.

En lo que respecta al pago de las remuneraciones se estima que las mismas recién deben abonarse al concluir el sumario, pues si el mismo acarrease la cesantía o exoneración del agente éste pierde el derecho a percibir emolumentos durante el lapso en que estuvo suspendido en forma preventiva. Una interpretación contraria haría de imposible cumplimiento el inciso II del artículo 39º del decreto nº 1.471/58, salvo que se interpretase que se debe abonar el sueldo del agente después de noventa días de suspensión y que en caso de que posteriormente fuese objeto de una medida expulsiva se le formulase cargo por los sueldos percibidos indebidamente.

Esta Dirección General estima que esta última solución es inaceptable por dos razones: una de orden práctico y patrimonial, pues si el agente resultase insolvente sería imposible el cumplimiento del cargo y se produciría un daño fiscal que pudo evitarse. Otra, de orden jurídico: el cobro de los sueldos por parte del agente está condicionado al hecho de que no sea declarado cesante o exonerado, por lo tanto, "pendente conditione", no surge su derecho a percibir haberes (Código Civil artículos 545 y 548).

No puede argüirse que se trata de una condición resolutoria y no suspensiva pues para ser resolutoria debe tratarse de un derecho adquirido (Código Civil artículo 553) y en el presente caso el derecho de percibir haberes durante la suspensión no es un derecho adquirido sino simplemente expectativa, es decir que la obligación de pagar los emolumentos existirá o no por parte del Estado según que un acontencimiento futuro e incierto (no ser objeto de una medida expulsiva) suceda o no suceda.

Por lo tanto esta Dirección General estima que la suspensión preventiva puede exceder de noventa días cuando el alejamiento del agente sea necesario para el esclarecimiento de los hechos o cuando su permanencia sea incompatible con el estado de autos. Pero atento los perjuicios que puede ocasionar al agente una suspensión preventiva prolongada debe consi

derarse en cada caso, y siempre que el Estatuto no la dispon ga en forma obligatoria, si es absolutamente necesario que el agente sea suspendido, esto es, se debe dar carácter restric tivo a las suspensiones preventivas, según lo establece la R.M. 180/55.

b) De acuerdo a lo expuesto en el punto anterior el agen te suspendido preventivamente tiene un derecho en expectativa sobre su sueldo y tendrá derecho a percibir sus haberes si no es declarado cesante o exonerado a raíz del sumario.

c) Aparentemente existe una contradicción entre lo dispues to por el artículo 35° inciso I y 39° inciso II ambos del de- creto 1.471/58. La primera norma citada establece que las sus pensiones preventivas se harán efectivas sin percepción de ha beres, y la segunda, a contrario sensu, que el agente suspen- dido que no hubiese sido sancionado con medida expulsiva ten- drá derecho a sus haberes durante el lapso que permaneció sus pendido preventivamente.

Esta Dirección General estima que esa contradicción es a- parente pues el artículo 35° se refiere a que no percibirá el salario mientras dure la suspensión, pero el artículo 39° es- tablece que a posteriori podrá percibirlo si no se declarase su cesantía o exoneración. Surge esta interpretación del espí ritu de ambas normas y de la remisión que hace el artículo 35° al artículo 39° del Estatuto, el cual establece claramen- te la obligación de pagar esos sueldos.

A mayor abundamiento se hace notar que el Estatuto es un decreto-ley, dictado por el Gobierno de facto en uso del ejer cicio del Poder Legislativo y que en cambio el decreto número 1.471/58 es simplemente un decreto. Por tanto la ley en esta materia es el decreto-ley nº 6.666/57, cuyo artículo 39° esta blece el derecho de percibir haberes devengados durante la sus pensión preventiva, siempre que no mediase medida expulsiva, y ese derecho no puede ser dejado sin efecto por el decreto re glamentario, a título de interpretación de esa ley (Constitu-

ción Nacional, artículo 66, inc. II).

d) Surge de los términos del artículo 39º del decreto-ley nº 6.666/57 el carácter restrictivo de las suspensiones preventivas, las cuales sólo podrán ser dispuestas, y por un término en principio no mayor de treinta días, cuando el alejamiento del agente sea necesario para el esclarecimiento de los hechos. Podrá seguir suspendido por más tiempo si en ese lapso no se hubiese dictado resolución definitiva. Por lo tanto, respecto a este punto esta Dirección General estima lo siguiente: 1º.- Llegado un expediente al Departamento de Sumarios, en el cual exista personal suspendido, deberá examinarse la situación planteada en autos, y si estimase que el alejamiento del agente no es necesario para el esclarecimiento de los hechos, y siempre que su reincorporación no fuese incompatible con el estado del expediente y la gravedad de la falta cometida, deberá solicitar el cese de la suspensión preventiva.- 2º Si por lo contrario la suspensión preventiva fuese necesario para la investigación o para el prestigio de la institución y no se pudiese resolver la situación del agente dentro de los treinta días, se solicitará que la misma se prorrogue sesenta días más. Es obvio que si la suspensión fuere sin término y no fuese levantada al vencimiento de los treinta días, continuará el agente suspendido.

e) Interpretando esta Dirección General, de acuerdo a lo expuesto en el punto a), que la suspensión preventiva puede exceder de noventa días, vencido ese plazo el Departamento de Sumarios deberá informar si es necesario que el agente continúe suspendido y si su reincorporación es incompatible con el estado del expediente.

f) Con respecto a los agentes a quienes se les imputa la comisión de delitos, el decreto-ley nº 6.666/57 y su re-

glamentación hacen un distingo: delito ajeno al servicio, o cometido durante sus funciones. En el primer caso, el apartado I del artículo 39º de la reglamentación establece que la suspensión preventiva durará hasta que el agente demuestre su inculpabilidad con el testimonio de la sentencia firme respectiva.

En relación con el segundo, dispone el apartado XIV inciso b), artículo 41º decreto 1.471/58 que proseguirá la instrución sumarial, a los efectos de establecer la conducta del agente en el orden administrativo y determinar si corresponde la aplicación de medidas disciplinarias, no pudiéndose dictar resolución absolutoria pendiente la causa criminal. A continuación el inciso c) establece la independencia del sumario administrativo respecto a la causa criminal.

A juicio de esta Dirección General estos preceptos dan la pauta para resolver el punto.

El espíritu de las normas transcriptas es indudablemente el siguiente: los delitos ajenos a las funciones no pueden ser investigados administrativamente por estar al margen de la Administración Pública y no corresponder, por su índole, que ésta los investigue. Pero como interesa a ésta la catadura moral de sus agentes, exige la reglamentación del Estatuto que el agente imputado demuestre su inculpabilidad mediante testimonio de la sentencia, debiendo permanecer suspendido preventivamente hasta tanto.

En cambio los delitos cometidos en ejercicio de sus funciones por el agente son a la vez faltas administrativas, y por lo tanto la Administración Pública puede y debe investigarlos.

Existe al respecto independencia entre el sumario administrativo y el proceso criminal, con la única salvedad de que no puede ser absuelto administrativamente estando pendiente de resolución la causa judicial.

Por lo tanto el agente puede ser sancionado en la esfera administrativa aunque medie sobreseimiento provisional o de-

finitivo en la causa criminal e incluso aunque sea absuelto (artículo 41° apartado XIV inciso c) decreto 1.471/58).

De lo expuesto esta Dirección General deduce que en el caso de que se impute a un agente un delito cometido en el ejercicio de su cargo debe ser suspendido preventivamente en sus funciones, labrarse sumario para investigar su conducta y si la prueba reunida en el mismo demostrase su inculpabilidad se pedirá el levantamiento de dicha suspensión, aunque no se haya dictado aún sentencia en la causa criminal. Lo que no podrá hacerse es absolverlo definitivamente hasta que no haya pronunciamiento judicial.

Nª 1.268-D

DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS, 27 de agosto de 1958

Fdo. JUAN G. DE SOUZA LOBO
Director General

Expediente nª 90.164 - 1958
Providencia n° 221.-

//ñor Secretario de Estado de Hacienda:

En las presentes actuaciones la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública, consulta acerca de la aplicación de los artículos 35° y 39° del Estatuto del Personal Civil y su Reglamentación.

El artículo 39° del Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública Nacional, aprobado por Decreto-Ley número 6.666/57, es expreso y terminante, no ofreciendo dudas, es decir, que el término de la suspensión puede alcanzar como máximo noventa (90) días. Cumplido este lapso sin haberse concluído el sumario, el inculpado debe ser reintegrado, pudien-

do en este último supuesto, asignarle tareas distintas en cuanto a lugar y materia, de tal manera que la incompatibilidad desaparezca.

Cuando resulte necesario ampliar la suspensión de treinta (30) días que con carácter preventivo se hubiere aplicado, es necesario que la misma autoridad que dictó la primera resolución, dicte otra en el sentido anotado.

El artículo correlativo del decreto reglamentario del referido Estatuto dispone que cuando el agente se encontrare sometido a proceso criminal por hechos ajenos al servicio será suspendido preventivamente hasta que demuestre su inculpabilidad con el testimonio de la sentencia firme respectiva.

Se infiere de lo preanotado que en este supuesto el plazo de noventa (90) días como máximo no debe tomarse en cuenta, vale decir, que la suspensión dispuesta como medida precautoria durará tanto como dure el proceso criminal, sin que ello implique pago de haberes por parte del Estado, aún cuando el presunto culpable fuera absuelto por la autoridad judicial.

Se hace necesario determinar si resulta de aplicación la referida norma legal, cuando el origen del proceso reconoce como causa un hecho delictuoso cometido en el desempeño de sus funciones. Es evidente que para que tenga lugar la substanciación de una causa criminal, debe existir en primer término el delito y en segundo el presunto culpable, por lo que la Administración Pública no podría mantener en su empleo al agente sobre quien recae la presunción de culpabilidad delictuosa.

En consecuencia, por vía de interpretación y buscando el fin perseguido por la ley, esto es, el mejoramiento del servicio público que se logra mediante moralidad, dignidad, decoro y respeto al superior, debe entenderse que en este último supuesto también resulta de aplicación la suspensión por tiempo indeterminado y hasta tanto se presente resolución firme de la autoridad competente.

En razón de la índole de las cuestiones tratadas, se estima conveniente el dictado de una Resolución aclaratoria de las normas comentadas, a cuyos fines se eleva a su consideración el pertinente proyecto.-

DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO CIVIL DE LA NACION, 28-10-58

Fdo. JOSE LUIS FRANGI
Director General

Buenos Aires, 31 de octubre de 1958.-

Visto los expedientes nos. 90.164/58 y 36.961/58, en los que formulan consultas acerca de la aplicación de los artículos 35° y 39° del Estatuto del Personal Civil y su Reglamentación, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 39° de dicho cuerpo legal es claro y terminante en cuanto al máximo de días que puede alcanzar la suspensión de un agente presuntivamente incurso en faltas de orden administrativo;

Que respecto del procedimiento para prorrogar el término de días de suspensión cuando ello resulte necesario, y hasta el máximo permitido, es lógico que sea la misma autoridad que dictó la primera medida la que acuerde su eventual extensión;

Que si bien el Estatuto no contiene una disposición expresa que se refiera concretamente a la suspensión del agente sometido a proceso criminal por causas del servicio o imputables al mismo, corresponde proceder a una interpretación de las normas correspondientes para establecer su sig-

nificación ó su contenido, y apreciar la regla de conducta que ellas estatuyen para los destinatarios a que se dirigen;

Que de principios esenciales en materia de derecho civil resulta que no puede haber dos sumarios, uno administrativo y otro judicial que se refieran exclusivamente a los mismos hechos o a la misma conducta del agente. La sustanciación de ambas causas sólo puede tener lugar cuando, además de haber cometido un hecho cuya punibilidad penal juzgará la justicia, el agente hubiese incurrido en faltas o transgresiones administrativas que pudieran merecer sanción disciplinaria;

Que el juego armónico de las disposiciones en cuestión permite establecer que la suspensión preventiva del agente sometido a proceso criminal por causas del servicio o imputables al mismo, se halla sobrentendida o implicitamente contenida en el artículo 39°, inciso I), de la Reglamentación del Estatuto, ya que ninguna norma la niega como discreto y razonable ejercicio del poder disciplinario por parte de la autoridad competente;

Que a efectos de evitar una posible dualidad de criterios en la aplicación de estas normas corresponde el dictado de una Resolución aclaratoria, conforme lo prevé el Decreto-Ley nº 797/58;

Por ello, atento a lo dictaminado por la Dirección General de Asuntos Jurídicos y al informe de la Dirección General del Servicio Civil de la Nación,

EL SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA

R E S U E L V E :

ARTICULO 1º.- La suspensión prevista en el artículo 39° del Estatuto del Personal Civil, para el personal presuntivamente incurso en faltas de orden administrativo, no podrá, en

ningún caso, exceder de noventa (90) días. Cumplido este lapso sin haberse concluído el sumario, el inculpado debe ser reintegrado, pudiendo en este último supuesto, asignársele tareas distintas en cuanto a lugar y materia, de tal manera que la incompatibilidad desaparezca.

ARTICULO 2º.- Cuando vencida la suspensión de treinta (30) días impuesta a un agente, en las condiciones del artículo 39º del Estatuto, fuera necesario prorrogar la misma, corresponderá el dictado de una resolución en tal sentido, emanada de la misma autoridad que determinó la primera.

ARTICULO 3º.- La suspensión preventiva de un agente sometido a proceso criminal por causa del servicio o imputable al mismo, debe hacèrse efectiva de acuerdo con lo que establece la reglamentación del artículo 39º del Estatuto, vale decir, hasta que demuestre su inculpabilidad con el testimonio de la sentencia firme respectiva.

ARTICULO 4º.- Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.-

Fdo. RICARDO LUMI

RESOLUCION Nº 8.004.-

Poder Ejecutivo Nacional
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº 821.-

ESTATUTO DEL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL - REINGRESO - REHABILITACION

Expediente nº 42.097 - 1958.-
Providencia nº 163.-

//ñor Subsecretario de Hacienda:

En virtud de la consulta formulada por la Dirección General de Contabilidad y Administración, y teniendo en cuenta las actuaciones producidas, esta Dirección General considera que -de estimarlo oportuno esa Superioridad en base a lo actuado precedentemente- procederá a la rehabilitación expresa del causante, mediante pronunciamiento de autoridad competente, sin necesidad de convertir previamente la exoneración en cesantía. Esta medida lo habilitaría tanto para el reingreso a la Administración Pública, en las condiciones resultantes del Escalafón aprobado por decreto nº 9.530/58, como para los efectos jubilatorios (art. 37º de la ley nº 4.349, modificada por su similar nº 12.887).-

DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO CIVIL, 11 de marzo de 1959.-

Fdo. JOSE LUIS FRANGI
Director General

Poder Ejecutivo Nacional
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nª 822.-

ESTATUTO DEL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL - JUNTA DE DISCIPLINA - SUMARIOS

Expediente nº 3.205 - 1957.-
Providencia nº 239.-

//ñor Secretario de Estado de Hacienda:

Tratan las presentes actuaciones del sumario iniciado a un agente de la Administración Pública Nacional, presuntivamente incurso en la comisión de irregularidades durante su desempeño como Administrador de la Unidad Turística de Río Tercero (Córdoba). En el referido sumario debe dictaminar necesariamente la Junta de Disciplina prevista en los artículos nos. 43º y 44º del Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública Nacional.

Ahora bien, el organismo donde los hechos tuvieron lugar, dependía en ese momento del Instituto Nacional de Acción Social, actualmente en liquidación; por Decreto nº 17.800/56, la referida Unidad Turística pasó a depender de la Dirección General Inmobiliaria; y finalmente, por Decreto nº 11.945/57, de la Dirección Nacional de Turismo, en cuya jurisdicción se encuentra actualmente.

El Decreto nº 1.471/58 (+), Reglamentario del Estatuto del Personal Civil (Decreto-Ley nº 6.666/57 (º), no contiene normas precisas que permitan determinar claramente cuál sería la Junta de Disciplina que, por razones de orden jurisdiccional, debería intervenir en casos como el presente. Só-

(+) Ver Digesto Administrativo Nª 422.-
(º) Ver Digesto Administrativo Nª 254.-

lo en su artículo 41°, inciso III, establece que "el instructor debe pertenecer a la misma jurisdicción en la que se ha producido el hecho".

Se plantea en consecuencia el problema de determinar a cuál Junta de Disciplina corresponde conocer en el sumario de que se trata, si la de la Dirección General Inmobiliaria o la de la Dirección Nacional de Turismo, ya que la Unidad Turística de Río Tercero (Córdoba) no tiene constituída su propia Junta de Disciplina, de acuerdo con los antecedentes que posee esta Dirección General, y no existen esas Juntas en el Instituto Nacional de Acción Social, por cuanto su personal está expresamente excluído del ámbito de aplicación del Estatuto del Personal Civil.

Al respecto, esta Dirección General es de opinión que como medida previa a fijar la competencia de la Junta, corresponde analizar las garantías que ofrece al sumariado teniendo presente para ello los principios generales de derecho en materia penal. Es indiscutible que ninguna de las dos referidas Juntas se encuentran integradas por representantes elegidos por el inculpado, y desde este punto de vista las dos estarían en igualdad de condiciones.

Por consiguiente, se hace necesario determinar en base a otras consideraciones cuál ha de ser la Junta de Disciplina a la que corresponde expedirse en estos actuados, y para ello haremos un breve análisis de las dos posibles: a) Junta de Disciplina de la Dirección General Inmobiliaria: el sumario se refiere a hechos ocurridos antes de la incorporación a esa Repartición de la Unidad Turística de Río Tercero (Córdoba), que desde el año 1957 ha dejado de pertenecer a la misma. Los hechos son, pues, definidamente ajenos a su jurisdicción; b) Junta de Disciplina de la Dirección Nacional de Turismo: el sumario se refiere a hechos ocurridos en su organismo que se encuentra en la actualidad dentro de su organización; si bien los mismo tuvieron lugar antes de que la referida Unidad Tu-

rística le fuera incorporada, existe una continuidad administrativa que no debe dejarse de tener en cuenta. En efecto, el traspaso de dicha dependencia de uno a otro organismo se ha efectuado con su personal, bienes patrimoniales, presupuesto, etc. Vale decir, que los actos administrativos iniciados bajo una dependencia, deben continuar hasta su conclusión bajo la nueva dependencia del organismo respectivo. En consecuencia, es evidente que la Junta de Disciplina de la Dirección Nacional de Turismo se encuentra en mejores condiciones para intervenir en el sumario que origina estas actuaciones. El organismo donde los hechos se produjeron está dentro de su jurisdicción, y posee así todos los medios y elementos que pueda considerar necesarios para llevar a cabo su cometido.

De tal manera, expedida dicha Junta de Disciplina, corresponde a las autoridades de la Dirección Nacional de Turismo adoptar la resolución del caso en cuanto a las responsabilidades emergentes de la situación, y comunicar lo que se resuelva a la Dirección General Inmobiliaria, donde revista presupuestariamente el causante, a efectos del cumplimiento de la resolución adoptada.

Dada la índole especialísima de la cuestión que nos ocupa, no prevista expresamente en el texto del Estatuto del Personal Civil, ni de su reglamentación, considera esta Dirección General que se hace necesario el dictado de una Resolución que tendrá carácter interpretativo de la parte pertinente de dichas normas, a cuyos fines se eleva a su consideración el correspondiente anteproyecto.-

DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO CIVIL, 11 de noviembre de 1958.

FDO. JOSE LUIS FRANGI
Director General

Buenos Aires, 12 de noviembre de 1958.-

Visto el expediente nº 3.205/57 y sus agregados, relacionados con las actuaciones promovidas con motivo de la suspensión impuesta al ex-Administrador de la Unidad Turística de Río Tercero (Córdoba), y

CONSIDERANDO:

Que en el sumario instruído debe dictaminar necesariamente la Junta de Disciplina prevista en los artículos 43º y 44º del Estatuto del Personal Civil (Decreto-Ley nº 6.666/57);

Que la aludida Unidad Turística dependía del Instituto Nacional de Acción Social, actualmente en liquidación, pasando luego a depender de la Dirección General Inmobiliaria (Decreto nº 17.800/56), y finalmente, de la Dirección Nacional de Turismo (Decreto nº 11.945/57), en cuya jurisdicción se encuentra actualmente;

Que el Decreto nº 1.471/58, reglamentario del Estatuto del Personal Civil, no contiene normas precisas que permitan determinar claramente a qué Junta de Disciplina le corresponde intervenir, por razones de orden jurisdiccional, en caso como el presente, en que el organismo donde se produjeron los hechos ha cambiado de dependencia funcional;

Que es evidente que dichos traspasos de jurisdicción no alteran la continuidad administrativa del organismo, ya que en todos los casos se han efectuado con su presupuesto, personal, bienes patrimoniales, etc., de tal manera que los actos administrativos iniciados bajo una dependencia, continúan su trámite, hasta su conclusión, bajo la nueva jurisdicción;

Que, en consecuencia, la tramitación del sumario referente a hechos ocurridos en un organismo debe continuar hasta su resolución final dentro de la jurisdicción en que éste se encuentre, aún cuando el inculpado haya dejado de pertenecer a la misma;

Que en el presente caso, y en base a las consideraciones expuestas, corresponde que tome intervención en las actuaciones promidas, la Junta de Disciplina de la Dirección Nacional de Turismo, de quién depende actualmente la Unidad Turística de Río Tercero;

Que la resolución final debe ser adoptada asimismo por las autoridades de esa Repartición, bajo cuya dependencia se encuentra el organismo donde se han producido los hechos que determinaron el levantamiento del sumario, aún cuando el inculpado no pertenezca presupuestariamente a la misma;

Por tanto, atento a lo informado por la Dirección General del Servicio Civil de la Nación y de conformidad con lo previsto en el Decreto-Ley Nº 797/58 (*),

EL SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA

R E S U E L V E :

1º.- La Junta de Disciplina que debe dictaminar necesariamente en todo sumario administrativo incoado por razones disciplinarias, es la que corresponde a la jurisdicción donde se han producido los hechos que dan orígen a áquel, cualquiera sea la dependencia presupuestaria del o de los inculpados.

2º.- En los casos de organismos que pasen de una a otra jurisdicción administrativa, corresponderá intervenir, en los sumarios enunciados en el punto anterior, a la Junta de Disciplina de la dependencia en cuya jurisdicción se encuentre el organismo al momento de concluídas las actuaciones sumariales por el instructor designado, salvo que tenga constituída su propia Junta de Disciplina, a la que corresponderá en ese caso la intervención pertinente.

3º.- En el caso tramitado en el expediente nº 3.205/57 deberá tomar intervención la Junta de Disciplina de la Dirección

(*) Ver Digesto Administrativo Nº 419.-

Nacional de Turismo, correspondiendo a las autoridades de dicho Repartición adoptar la resolución definitiva que estime corresponder, dando conocimiento de la misma, a la dependencia de donde dependan presupuestariamente los interesados, a los fines consiguientes.

4º.- Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, y archívese.-

Fdo. RICARDO LUMI

RESOLUCION Nº 8.039.-

Poder Ejecutivo Nacional
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº 823.-

AUTOMOTORES

Buenos Aires, 23 de junio de 1959.-

VISTOS Y CONSIDERANDO:

Que por Decreto nº 535/59 (+), modificado por decreto número 1.848/59, se acordó a los agentes del Estado Nacional con asiento permanente al sur del paralelo 42º trasladados por razones del servicio al norte del citado paralelo con anterioridad a la vigencia del decreto nº 9.970/58 el derecho a introducir temporariamente el automóvil que hubieran tenido en uso en la zona donde se desempeñaban, bajo determinadas condiciones sustantivas;

Que la situación de los funcionarios citados que habiendo adquirido automotores con anterioridad a la fecha de vigencia del Decreto nº 9.970/58 son trasladados con posterioridad a dicho acto de gobierno al norte del paralelo 42º por razones de servicios, resulta similar a la contemplada por los Decretos 535/59 y 1.848/59, ya que tampoco han podido hacer en su momento las previsiones necesarias para poder abonar los recargos que para proceder a la nacionalización del automotor comprado en franquicia corresponde oblar, viéndose abocados a malvenderlo;

Por ello y de conformidad con lo aconsejado por la Secretaría de Hacienda de la Nación,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A:

ARTICULO 1º.- Inclúyese en el régimen establecido por los

(+) Ver Digesto Administrativo Nº 698.-

Decretos Nros. 535/59 y 1.848/59 a los agentes del Estado Nacional con asiento permanente al sur del paralelo 42° que fueran trasladados por razones de servicio al norte de dicho paralelo con posterioridad a la fecha del Decreto nº 9.970/58, siempre que se cumplan con anterioridad a dicha fecha las condiciones exigidas por el Decreto nº 535/59.

ARTICULO 2º.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda.

ARTICULO 3º.- Publíquese, comuníquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y pase a la Dirección Nacional de Aduanas, a sus efectos.-

FRONDIZI - Emilio Donato del Carril - Ricardo Lumi.-

DECRETO Nº 7.714.-

Poder Ejecutivo Nacional
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº 824.-

EMPRESAS PERIODISTICAS

Buenos Aires, 26 de enero de 1959.-

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que por el decreto-ley nº 3.490/58 (+) se dispuso la transferencia a la Secretaría de Hacienda de todos los bienes y documentación que se encontraba bajo el dominio de la ex-Intervención Liquidadora de las Empresas Periodísticas y Afines, encomendándose al propio tiempo a dicho Departamento que, sobre la base de los bienes documentación recibidas propusiera al Poder Ejecutivo las medidas necesarias para el total cumplimiento de los objetivos emergentes del decreto-ley nº 7.104/56 y posteriores;

Que en cumplimiento de ello y a propuesta de la Secretaría de Hacienda, fué dictado ya el decreto nº 5.135/58 (°), por el cual se organizan las tareas relacionadas con la liquidación final de dichas actividades y se fijan las funciones que deberá cumplir el Administrador Liquidador para el logro de su cometido;

Que dado el carácter transitorio de este servicio es necesario que el Poder Ejecutivo establezca de acuerdo a esta estructura el procedimiento a seguir, mientras no se determine su destino definitivo, de la existencia de papel para diario remanente de las actividades que cumplían las empresas dependientes de la ex-Intervención Liquidadora, que, como es de público conocimiento, fueron oportunamente enajenadas;

Que en ese sentido procede tener en cuenta que dicha mer-

(+) Ver Digesto Administrativo Nº 480
(°) Ver Digesto Administrativo Nº 593

cadería se encuentra actualmente concentrada en depósitos, por lo cual debe pagarse importantes sumas en concepto de almacenaje y que por otra parte, la misma sufre los deterioros producidos por la acción del tiempo y emergentes de la propia naturaleza perecedera del material;

Que mientras ello ocurre, los órganos periodísticos del país soportan los inconvenientes propios de la escasez en plaza de dicho elemento, esencial para su desenvolvimiento;

Que ha sido reinteradamente expuesto el pensamiento del gobierno en el sentido de conceder el máximo de facilidades a los órganos de difusión perodística, como contribución efectiva al afianzamiento de la libertad de prensa en nuestro país;

Que con tal motivo y sin perjuicio de la intervención que le corresponda al Banco de la Provincia de Buenos Aires, por la mediación financiera que le cupo oportunamente en la adquisición del papel de que se trata y a la Dirección Nacional de Comercio Interior como organismo competente en la materia, se considera conveniente arbitrar los medios necesarios para que en armonía con los principios expuestos se pueda contribuir a la solución, aunque transitoria por este medio, del problema antes señalado;

Por ello, de acuerdo a las facultades del artículo 5° del citado decreto-ley n° 3.490/58;

EL PRESIDENTE PROVISIONAL DEL HONORABLE SENADO
DE LA NACION EN EJERCICIO DEL PODER EJECUTIVO

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- Autorízase al Administrador Liquidador designado en la Cuenta Especial "Secretaría de Hacienda - Dirección General de Contabilidad y Administración - Decreto-Ley número 3.490/58- Liquidación de Empresas Periodísticas y Afines", para que entregue papel para diario a las Empresas Periodísticas que así lo soliciten, en carácter de préstamo, en las can

tidades y condiciones que previstamente y en cada caso determine la Dirección Nacional de Comercio Interior dependiente de la Secretaría de Comercio y el Banco de la Provincia de Buenos Aires.

ARTICULO 2º.- Sin perjuicio de lo determinado en el artículo 1º, establécese con carácter general que los prestamos de que se trata se formalizarán por escrito con arreglo a los siguientes requisitos:

a) Depósito de garantía igual al valor total de la mercadería prestada fijado por el Banco de la Provincia de Buenos Aires.

b) Por un lapso no superior a sesenta (60) días.

c) Se reintegrarán en espacio de las mismas características recibidas.

ARTICULO 3º.- De no cumplirse con lo determinado en los apartados b) y c) del artículo anterior, el prestatario perderá el depósito de garantía y además, si el precio del papel vigente en plaza a la fecha del vencimiento del préstamo fuera superior a dicha garantía deberá ingresar dentro de los diez (10) días hábiles la diferencia resultante en la Tesorería de la Dirección General de Contabilidad y Administración de la Secretaría de Hacienda.

ARTICULO 4º.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario en el Departamento del Interior interinamente a cargo de la cartera de Economía y firmado por los señores Secretarios de Estado de Hacienda y de Comercio.

ARTICULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y archívase.-

GUIDO - Alfredo R. Vítolo - Ricardo Lumi - Juan Carlos Orfila

DECRETO Nº 932.-

Poder Ejecutivo Nacional
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº 825.-

AUMENTO DE EMERGENCIA

Buenos Aires, 24 de octubre de 1958.-

Ref.: Dirección Nacional de Turismo: Consulta referente liquidación a agentes transitorios de los beneficios de la ley nº 14.456

Vuelva a la Gerencia Financiera de la Dirección Nacional de Turismo para manifestarle que atenta la cuestión planteada en los presentes actuados, en cuanto se refiere al régimen que deberá adoptarse para proceder a la liquidación de los agentes transitorios de ese organismo, incluídos en los créditos previstos en la partida de "Jornales" de su presupuesto vigente, el aumento de emergencia aprobado por la ley nº 14.456 (+), esta Dirección General estima que el procedimiento correcto responde a la siguiente mecánica:

1ª) A los efectos de considerar un importe mensual base, se multiplicará por 20 días, 25 días o 30 días (según lo especifique el régimen de liquidación en vigor) el jornal que se le haya asignado al agente, en función de las autorizaciones vigentes, excluído todo otro emolumento;

2ª) A este monto, así obtenido, se le ubicará en la escala que determina el artículo 2º del Decreto nº 4.476/58 (º) (Re-

(+) Ver Digesto Administrativo Nº 589.-
(º) Ver Digesto Administrativo Nº 590.-

glamentario de la ley nº 14.456), la que automáticamente le fija el complemento del sueldo o salario básico que le corresponde;

3ª) Conocida la mejora nominal a liquidarse en virtud de una asistencia total, se adecuará este importe -en forma proporcional- a los días en que el agente preste realmente servicios.

Sirva la presente de atenta nota de envío.-

Fdo. ALVARO O. VIZCARGÜENAGA
Subdirector General de Finanzas

Poder Ejecutivo Nacional
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº 826.-

ESCALAFON PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL (arts. 43º y 44º) - JUNTA DE CALIFICACIONES

Buenos Aires, 20 de julio de 1959.-

Visto el expediente nº 90.212/59 por el cual la Dirección Nacional de Química solicita la designación de un agente letrado para la integración de la Junta de Calificaciones de ese Organismo, y

CONSIDERANDO:

Que por resolución nº 7.799/58 (+) quedó establecido que aquellos organismos que no contaran con un letrado para la constitución de las Juntas de Disciplina, debían solicitar el concurso del mismo a la Dirección General de Asuntos Jurídicos o a la dependencia que hiciera sus veces, del Ministerio, Secretaría o jurisdicción a que pertenezcan;

Que tal temperamento es aplicable a las Juntas de Calificaciones, dada la similitud de los requisitos exigidos para la integración de ambas, aparte de la excepción consagrada en el punto 44º del Escalafón para el Personal Civil de la Administración Pública Nacional, ratificado por Ley nº 14.794 (º);

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos opina que procede dictar la respectiva resolución, con el objeto de aclarar la situación planteada, por el mismo conducto en que se hizo efectiva la concreción de su similar nº 7.799/58;

Por todo lo expuesto,

(+) Ver Digesto Administrativo Nº 598.-
(º) Ver Digesto Administrativo Nº 688.-

EL SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA

R E S U E L V E :

ARTICULO 1º.- A los efectos de la integración de las Juntas de Calificaciones que prevé el artículo 43º del Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública Nacional y artículos 43º y 44º del Escalafón aprobado por decreto número 9.530/58, los organismos que carezcan de agentes letrados que reúnan los requisitos exigidos, deberán adoptar el temperamento establecido por Resolución nº 7.799, de fecha 18 de agosto de 1958.

ARTICULO 2º.- Comuníquese a quienes corresponda, publíquese en el Boletín Oficial y archívase.-

Fdo. GUILLERMO WALTER KLEIN

RESOLUCION Nº 7.889.-

Poder Ejecutivo Nacional
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nª 827.-

LICENCIAS

Expediente nº 90.268 - 1959.-
Ref.: nota 211/59 - MT y SS.-
Providencia nº 280.-

//ñor Secretario de Estado de Hacienda:

La aplicación del beneficio otorgado por el artículo 14º del decreto nº 12.720/53 (+) -licencia por razones de salud por causal que importe largo tratamiento está relacionada con la norma del artículo 7º del Decreto nº 26.942/47, que no fué derogado al dictarse aquel decreto, ya que no se opone al mismo (art. 42º).

En base a ello, esta Dirección General considera que su otorgamiento, en los casos de aquellos agentes que, habiendo utilizado total o parcialmente sus beneficios, vuelvan a enfermarse con cargo al mismo artículo, debe ajustarse al procedimiento que, para cada caso particular, se expone a continuación:

1ª) si el agente utiliza dos años de licencia con percepción íntegra de haberes y un año con la mitad de su remuneración (licencia en forma continua por una misma o distinta afección) y a su vencimiento retoma servicio, deben transcurrir tres años desde esa fecha para que tenga derecho a una nueva licencia para largo tratamiento de la salud.

2ª) cuando un agente al que se le ha otorgado, con cargo a dicho artículo, licencia por un lapso inferior a tres (3) años y es dado de alta, si vuelve a enfermarse, por la misma o distinta afección, sin haber

(+) Ver Digesto Administrativo Nª 15.-

transcurrido el intervalo de tres años de prestación de servicios, tiene derecho a usufructuar el período de licencia que resta para cumplir aquel período, vencido el cual serían de aplicación las previsiones del mencionado artículo 14°, 2ª párrafo, "in-fine".
Planteado el caso de que la Junta Médica actuante determinara una incapacidad parcial que inhibiera al agente temporariamente el mismo estaría comprendido en lo que establece el artículo 4ª "in - fine" del Decreto nº 26.942/47, que tampoco puede considerarse derogado, hasta un nuevo dictamen de la Junta con relación a su capacidad laboral.

3ª) si el agente utiliza parcialmente los beneficios del recordado artículo, a los tres años de ser dado de alta tiene derecho a que se le conceda nuevamente la totalidad de los mismos.-

DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO CIVIL, 18 de junio de 1959.-

Fdo. JOSE LUIS FRANGI
Director General

Buenos Aires, 20 de julio de 1959.-

APROBADO: dése a la presente el carácter de Resolución aclaratoria de las normas del art. 14° del decreto nº 12.720/53 y arts. 4° y 7° del decreto nº 26.942/47, y vuelva a la Dirección General del Servicio Civil de la Nación a sus efectos.-

Fdo. GUILLERMO WALTER KLEIN
Secretario de Estado de Hacienda

RESOLUCION Nª 7.891.-

Poder Ejecutivo Nacional
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº 828.-

ESCALAFON PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL (punto 26º) - SUBSIDIO FAMILIAR

Expediente nº 90.277/59 DGSC.
Expediente nº 87.839/59 ME y J.
Providencia nº 298.-

//ñor Secretario de Estado de Hacienda:

Respecto de las consultas que formula el Ministerio de Educación y Justicia acerca de normas para el pago del subsidio familiar (punto 26º del Escalafón aprobado por decreto nº 9.530/58 y decreto nº 4.631/59 (+) esta Dirección General considera lo siguiente:

a) el subsidio familiar, accesorio del sueldo o jornal, está sometido a cualquier reducción que afecte a aquéllos (licencias, inasistencias, etc.), la que hará disminuir proporcionalmente dicho beneficio.

En consecuencia, al personal que se encuentra en uso de licencia por servicio militar, o por enfermedad con goce del 50 % de haberes, le corresponderá percibir la mitad del subsidio familiar a que tuviera derecho.

b) no corresponde abonar subsidio por menores a cargo, cuando éstos no sean hijos del declarante, ya que los mismos no están comprendidos en la enumeración del punto 26º del Escalafón.-

DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO CIVIL, 29 de junio de 1959.-

Fdo. JOSE LUIS FRANGI
Director General

(+) Ver Digesto Administrativo Nº 738.-

Buenos Aires, 20 de julio de 1959.-

APROBADO: dése a la presente el carácter de resolución aclaratoria de las normas para el pago de subsidio familiar (punto 26º del Escalafón y decreto nº 4.631/59), y vuelva a la Dirección General del Servicio Civil de la Nación a sus efectos.-

Fdo. GUILLERMO WALTER KLEIN
Secretario de Estado de Hacienda

RESOLUCION Nº 7.892.-

Poder Ejecutivo Nacional
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº 829.-

ESTATUTO DEL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL - SANCIONES - RECURSOS ADMINISTRATIVOS - RECURSO JERARQUICO - RECURSO DE REVOCATORIA

Expediente nº 90.259/59 (Hacienda)

Buenos Aires, 20 de mayo de 1959.-

Ref.: Recursos contra sanciones disciplinarias aplicadas previo sumario administrativo - Su procedencia.-

Señor Secretario de Estado de Hacienda:

I - Como es de conocimiento de V.E., el Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública Nacional establece, en su régimen disciplinario, que concluída la prueba de cargo en los sumarios administrativos, se dará vista a los agentes sumariados (Art. 41º), correspondiendo luego la intervención de la Junta de Disciplina (Art. 44º). Producido el dictamen de esta última como consejo sobre las medidas que sea procedente adoptar en la causa, el suscripto, como autoridad superior del Organismo, dicta la resolución pertinente aplicando suspensiones por términos adecuados dentro del máximo de un mes que establece el artículo 34 inc. b).

El cuerpo legal mencionado no contiene disposición expresa alguna que consagra determinado procedimiento para recurrir de las sanciones impuestas por esa vía, a contrario de

lo que ha previsto para las medidas disciplinarias que no requieran la formación de sumario, que según lo dispuesto en el artículo 23º pueden ser objeto de reclamo dentro de los cinco días.

Cabe traer también a consideración que las sanciones de máximo rigor como la cesantía y exoneración, sujetas a la decisión del Poder Ejecutivo, son a su vez apelables por vía de recurso ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de la Capital Federal (Art. 24º).

II - Ante este planteo, surge la necesidad de determinar si en tales condiciones proceden los recursos de revocatoria y jerárquico.

Al respecto, advierte esta Dirección General que razones de lógica indican que si determinadas sanciones menores y otras de extrema gravedad tienen posibilidad de ser reclamadas, no podrían dejar de serlo aquellas cuyo rigor ha sido regulado en medida intermedia.

Por otra parte, no habiendo sido derogado el decreto número 7.520/44 (+) que establece el trámite del recurso jerárquico, sus disposiciones serían de aplicación a las situaciones comentadas.

Esta Dirección General ha llegado a las conclusiones precedentes luego del análisis de la cuestión promovida y previo dictamen de su Dirección de Asuntos Jurídicos, entendiendo que el criterio sustentado es el que debería aplicarse al caso. Pero tratándose de un problema que debe ser encarado con carácter uniforme en toda la Administración e implicando una interpretación de las disposiciones del referido Estatuto, ha estimado oportuno requerir del señor Secretario quiera expresar su conformidad a tal temperamento.

III - Para el caso de que ese Departamento de Estado compartiese el punto de vista que sustenta este Organismo resolviendo que proceden los recursos de revocatoria y jerárquico, resultará también necesario precisar -frente a la disposi-

(+) Ver Digesto Administrativo Nº 43.-

ción del artículo 2º, inc. 3º) del aludido decreto número 7.520/44- si la circunstancia de que la resolución emane del titular de la Repartición -como ocurre en todo sumario administrativo- deja expedita la vía para presentar directamente el recurso jerárquico, desde que la medida proviene de la autoridad que debe entender en los recursos de revocatoria por sanciones aplicadas por otras funcionarios inferiores, o si, no obstante lo dicho, debe el suscripto resolver el recurso de revocatoria contra su propia decisión, para qué recién pueda prosperar el recurso jerárquico.

IV - Existiendo casos concretos que deben resolverse según el temperamento que en definitiva apruebe el señor Secretario, ha quedado momentáneamente en suspenso el efectivo cumplimiento de las suspensiones aplicadas, circunstancia que me permito hacer presente a efectos de destacar la conveniencia de contar con un pronunciamiento superior a la brevedad.

Con tal motivo, saludo a V.E. con mi consideración más distinguida.-

Fdo. DOCITEO S. LOSADA
Director General Impositiva

Expediente nº 90.259 - 1959 (H)
Providencia nº 299.-

Señor Subsecretario de Hacienda:

La Dirección General Impositiva solicita se le informe con relación a los derechos a reclamar que asisten a los agentes sancionados previo sumario administrativo, con penas menores, en razón de no hallarse expresamente establecida tal situación en el Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública Nacional.

Sobre el aspecto concreto de la consulta, esta Dirección General considera que si bien en el Estatuto como en su Reglamentación, no se hace mención alguna al procedimiento a seguir en estos casos, corresponde admitir la procedencia de la interposición de los recursos de recovatoria y jerárquico contra medidas que dispongan, previo sumario, suspensiones por términos de más de 10 días, postergación en los ascensos, o retrogradación de categorías. En efecto, estando previstos estos derechos para casos de sanciones menores y también, por vía judicial, para medidas de mayor gravedad, lógico es que el empleado pueda ejercitarlos en estos casos, que en cuanto a la importancia de la sanción, configuran un término medio entre éstos y aquéllos.

En tal sentido, atento lo determinado en el artículo 2º, inciso 3º del decreto nº 7.520/44, esta Dirección General entiende que a fin de que pueda prosperar el recurso jerárquico, es imprescindible agotar la vía de la revocatoria, la que necesariamente deberá ser considerada por la autoridad administrativa que estableció la medida punitiva. De no ser así, el funcionario superior del organismo al que se apele por recurso jerárquico, estaría en condiciones de desestimar tal reconsideración, por no haber cumplimentado las prescripciones del citado decreto.

A mayor abundamiento, es conveniente transcribir el dictamen del señor Procurador del Tesoro de fecha 27 de octubre de 1957, que dice: "En realidad, el recurso del Decreto nº 7.520/44 persigue fines que superan el ínteres de los propios recurrentes. Está dirigido a velar por la legitimidad y seguridad jurídica en el ámbito de la Administración del Estado, de lo que, desde luego, el Poder Ejecutivo es máximo responsable. Se concede para ante ese Poder, contra el acto emanado de la máxima autoridad interna. No es recurso jerárquico -aunque así lo llame quien lo interponga-, el pedido de revocación que se formula ante la misma autoridad que dictó la decisión. Para

que tal recurso se abra, es menester que se haya solicitado, sí, revocatoria,y que ésta haya sido denegada por la autoridad superior del funcionario u órgano administrativo del cual emanó la resolución recurrida, o provenir la resolución directamente de esa misma autoridad (Art. 2°, inc. 3°, decreto número 7.520/44)".-

DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO CIVIL DE LA NACION, 29-6-1959.

Fdo. JOSE LUIS FRANGI
Director General

//nos Aires, 10 de julio de 1959.-

APROBADO, dése a la presente carácter de resolución interpretativa de las normas del Estatuto para el Personal Civil de la Administración Pública Nacional y su Reglamentación, y vuelva a la Dirección General del Servicio Civil a sus efectos.-

Fdo. GUILLERMO WALTER KLEIN
Secretario de Estado de Hacienda

RESOLUCION Nº 7.893.-

Poder Ejecutivo Nacional
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº 830.-

ESCALAFON PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL (punto 52°) - BONIFICACION POR ANTIGÜEDAD

Expediente nº 90.247 - 1959.-
Providencia nº 300.-

SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO:

El punto 52° del Escalafón aprobado por decreto nº 9.530/58 establece cuales han de ser los servicios que se computarán al personal a efectos de establecer su antigüedad, reconocible en los importes que en el mismo punto se fijan.

Dicha disposición tiene carácter general para todos los organismos comprendidos en el Escalafón, y no cabe, por consiguiente, la posibilidad de disponer regímenes de excepción a sus normas para una determinada dependencia.

En efecto, podría darse el caso de considerar computables, a los fines del Escalafón, servicios prestados en determinadas dependencias, como podrían ser las entidades bancarias; si ello se aprobase, la norma sería de aplicación a todos los organismos involucrados en el decreto nº 9.530/58, pero de ninguna manera resultaría procedente hacerlo para un organismo determinado con exclusión de los demás.

Cabe destacar, respecto del ejemplo consignado, que esa posibilidad concreta fué analizada al estudiarse el Escalafón, siendo desechada, al igual que otras que comprendían otros tipos de servicios, en base a los estudios efectuados.

En el caso de la Junta Nacional de Granos, y atendiendo al principio de que el Escalafón no admite en ningún caso una rebaja en las remuneraciones que tiene asignadas el personal, ca

be aplicar uno de los dos procedimientos que se indican a continuación, tomando en cada caso el más favorable al agente de que se trate:

a) computar pura y exclusivamente los servicios especificados en el inciso c) del punto 52° del Escalafón -con prescindencia de otros que se hubieran cumputado en el referido organismo hasta la fecha- reconociéndolos en los importes que en el mismo inciso se establecen;

b) computar todos los servicios que hasta el 31-10-58 se reconocían en la Junta Nacional de Granos, de acuerdo con los decretos, resoluciones y demás actos indicados en la nota de fojas 1/7, pero con los importes fijados por el art. 6° del decreto nº 5.848/58; vale decir, que en este caso se tomaría el importe que en concepto de remuneración por antigüedad registraban los agentes al 31 de octubre ppdo.-

DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO CIVIL, 23 de junio de 1959.-

Fdo. JOSE LUIS FRANGI
Director General

//nos Aires, 20 de julio de 1959.-

APROBADO; dése a la presente el carácter de Resolución aclaratoria de las normas para el cómputo de servicios del personal (punto 52° del Escalafón y decreto nº 4.632/59 (+), y vuelva a la Dirección General del Servicio Civil de la Nación a sus efectos.-

Fdo. GUILLERMO WALTER KLEIN
Secretario de Estado de Hacienda

RESOLUCION Nª 7.894.-

(+) Ver Digesto Administrativo Nª 709.-

Poder Ejecutivo Nacional
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº 831.-

ESTATUTO DEL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL (Art. 35°) - SANCIONES - SUSPENSIONES - DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA

Expediente nº 42.040 - 1958.-
Providencia nº 117.-

//ñor Subsecretario:

El artículo 35° del Estatuto del Personal Civil establece que las suspensiones mayores de diez días y la postergación en el ascenso de los agentes que comprende, serán dispuestas por los Ministerios y autoridades superiores de los organismos, según corresponda. La expresión "autoridades superiores de los organismos" es evidente que se refiere a aquellas entidades autárquicas o descentralizadas existentes dentro del ámbito de la Administración Pública Nacional.

Si bien la Dirección General Impositiva no configura expresamente la situación de dichos organismos, cabe recordar que en el art. 3° de la Ley nº 11.683 (t.o.1956) se establece: "Sin perjuicio de la superintendencia general que ejercerá sobre ella el Ministerio de Hacienda, la Dirección General Impositiva actuará como entidad descentralizada en el orden administrativo, tanto en lo que se refiere a su organización y funcionamiento,...".

Por lo tanto, nada se opondría a que la facultad disciplinaria del art. 35° del Estatuto, a que se ha hecho mención al comienzo, fuera ejercida por el Director General de la aludida Repartición, pero en atención a la situación particular de que se trata, considera esta Dirección General que sería necesario el dictado de una Resolución en tal sentido.
DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO CIVIL DE LA NACION, 12-1-959.

Fdo. JOSE LUIS FRANGI
Director General

Poder Ejecutivo Nacional
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº 832.-

ESTATUTO DEL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL (arts. 6º y 41º apart. XVIII)

Expediente Nº 90.273/58

//nos Aires, 8 de enero de 1959.-

Vuelvan las presentes actuaciones a la Agrupación Servicios de la Presidencia de la Nación, informando lo siguiente:

a) entre los deberes que el art. 6º del Estatuto del Personal Civil fija para el personal que comprende, figura el de "mantener permanentemente actualizada la información referente al domicilio" (Reglamentación de dicho artículo-punto II-apartado c).

De lo infromado a fs. 1 surge la presunción de que el interesado no ha dado cumplimiento a esa obligación, lo que debe ser tenido en cuenta en la sustanciación del sumario a que se elude.

b) el hecho de que el causante se encuentre en uso de licencia extraordinaria sin sueldo, no lo libera del vínculo laboral con la Administración Pública Nacional, y en consecuencia, está sujeto al cumplimiento de las normas pertinentes. A este respecto, cabría determinar si la autorización para el uso de la citada licencia llevaba implícito el permiso para ausentarse del país, lo cual no lo eximiría, empero, de la obligación de concretar un domicilio para eventuales citaciones o comunicaciones oficiales, máxime considerando que estaba comprendido en un sumario administrativo.

c) la situación del causante, considerados los puntos expuestos precedentemente, podría ser encuadrada en lo previsto en la Reglamentación del art. 41° del Estatuto - apartado XVIII: su ausencia del país, sin dar aviso del domicilio al que pudieran enviársele posibles notas oficiales, tornaría injustificada la causa de su no presentación ante las citaciones efectuadas; por consiguiente, en tal caso el instructor deberá proseguir el sumario con el fin de reunir todos los elementos de prueba, tendientes a esclarecer el hecho investigado, quedando paralizado el sumario al concluir estas diligencias, en cuyo estado será elevado a la Junta de Disciplina, a los fines previstos en dicho articulado.

Sirva la presente de atenta nota de remisión.-

Fdo. JOSE LUIS FRANGI
Director General
Servicio Civil de la Nación

Poder Ejecutivo Nacional
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº 833.-

ESTATUTO DEL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL (art. 31º) - INDEMNIZACION POR TRASLADO

Expediente nº 60.318/59
Nota Nº 16/59

Buenos Aires, 9 de abril de 1959.-

Señor Presidente del Tribunal de Cuentas de la Nación,
DON JOSE M. FERNANDEZ FARIÑA
S / D

Tengo el agrado de dirigirme al señor Presidente, con referencia al artículo 5º del decreto nº 18.989/56(+) y artículo 31º del Estatuto del Personal Civil, aprobado por decreto-ley nº 6.666/57 (•) y su reglamentación (decreto nº 1.471/58 ("), que reglan la "indemnización por traslado" para los agentes de la Administración Pública Nacional.

Atento que en la práctica se han presentado dudas con respecto al alcance de dichas disposiciones, la Delegación Fiscalía a mi cargo considera del caso formular la consulta pertinente a esa Superioridad, con el objeto de uniformar criterios en su aplicación.

En efecto, de la lectura de los textos legales mencionados surge como primera pregunta la siguiente:

(+) Ver Digesto Administrativo Nº 14.-
(•) Ver Digesto Administrativo Nº 254.-
(") Ver Digesto Administrativo Nº 422.-

¿es condición "sine qua non" que tenga lugar el traslado de la familia del agente al nuevo destino asignado a éste, para que corresponda el pago de la indemnización pertinente?. Si la respuesta fuera afirmativa, quedaría a su vez por precisar:

a) ¿Puede invocar el derecho a su percepción el agente soltero que sea trasladado y no tenga familiares a su cargo o miembros a quienes debe prestar alimentos de acuerdo con el Código Civil?

b) Si se produjera el traslado simultáneo y con el mismo destino de cónyuges o de agentes integrantes de un mismo núcleo familiar ¿a favor de quién o quiénes corresponde practicar la correspondiente liquidación de indemnización?

c) ¿El punto I, del artículo 31° de la reglamentación del Estatuto para el personal civil, al establecer: "la indemnización por gastos de traslado del agente y de la familia a su cargo....compensará las erogaciones que por tal concepto se realicen efectivamente, dentro de las cantidades máximas que rijan, ha enervado los incisos a) y b) del artículo 5° del decreto n° 18.989/56?

Con respecto al primero de los aspectos planteados la respuesta afirmativa parecería surgir del punto II de la reglamentación del artículo 31° ya citado, que determina: "El personal que no haga efectivo el traslado de la familia a su cargo al nuevo destino dentro del término de un (1) año, desde la fecha de ordenado su cambio

de destino, sin causa de fuerza mayor debidamente comprobada, perderá todo derecho a la indemnización pertinente".

En lo referente al punto b), entiende esta Delegación Fiscalía que debe ser resuelto conjuntamente con el c) y en tal sentido considera que los incisos a) y b) -art. 5°- decreto nº 18.989/56, han quedado limitados en su alcance dado que el Estado indemnizará al agente por gastos de traslado, compensando las erogaciones que por tal concepto éste realice efectivamente y dentro de las cantidades máximas que rijan", tal lo preceptuado por el punto I del recordado artículo 31°.

Como cantidad máxima, a falta de una disposición expresa, debe considerarse - en opinión de esta Delegación Fiscalía-la que resulte de sumar los beneficios enunciados en los incisos a) y b) del artículo 5° del decreto nº 18.989/56. En tal virtud, sólo podrán reconocerse las erogaciones efectivamente realizadas por el concepto mencionado, es decir, las-que se documentan mediante la presentación de los respectivos comprobantes, hasta un importe máximo que resulte de aplicar en cada caso la interpretación precedente.

En consecuencia, si en el núcleo familiar existiera más de un agente del Estado, ejs cónyuges, padre e hija, la indemnización por traslado consistirá en la compensación de las erogaciones efectivamente realizadas en ese concepto y hasta el importe máximo que resulte de aplicar los incisos a) y b) del artículo 5° del decreto número 18.989/56, tomando en consideración al familiar trasladado que perciba la mayor asignación y a quien se practicará la respectiva liquidación.

La presente consulta resulta igualmente oportuna para conocer el criterio de esa Superioridad en aquellos casos en que el traslado sea a pedido del interesado o por permuta - situación en que no corresponde indemnización - pero donde quedaría por aclarar si el agente conserva el derecho de uso de orden oficial de pasaje y carga y si el primero de estos beneficios se hace extensivo también

a los familiares a su cargo.

Finalmente, corresponde que esta Delegación Fiscalía destaque la urgencia que reviste conocer el criterio de esa Superioridad acerca de los puntos considerados, por cuanto por resolución nº 504/59, la Dirección Nacional de Turismo ha dispuesto el traslado simultáneo y con igual destino de dos agentes, cónyuges, y ha sido sometida a intervención la liquidación en concepto de indemnización y el correspondiente libramiento interno de pago.

Saludo al señor Presidente con distinguida consideración.-

Fdo. CARLOS J. LOPEZ
Contador Fiscal

Expediente nº 60.318/59 TCN
Providencia nº 239/59

//nos Aires, 13 de abril de 1959

Pasen las presentes actuaciones a la Secretaría de Estado de Hacienda, estimándole quiera tener a bien expedirse en el asunto de que se trata, en función de la facultad acordada por el artículo 17 del decreto número 18.989/56, encareciéndole imprimir a las mismas carácter de preferente despacho.

Sirva la presente de atenta nota de remisión.-

Fdo. JOSE M. FERNANDEZ FARIÑA
Presidente

Expedientes nros. 60.318/59 T.C.
90.178/59 M.H.
Providencia número 279.-

//ñor Secretario de Estado de Hacienda:

La Delegación Fiscal del Tribunal de Cuentas de la Nación ante la Dirección Nacional de Turismo solicita aclaraciones con respecto a la indemnización por traslado que establece el art. 5º del Decreto nº 18.989/56 y el artículo 31º del Decreto-Ley 6.666/57 y su reglamentación (Decreto nº 1.471/58) aprobatorios del Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública Nacional.

En tal sentido, esta Dirección General considera que no es condición esencial que el agente deba trasladarse con su familia al nuevo destino que le fuera asignado, para que corresponda el pago de la indemnización por traslado.

Si se tratara de un agente con familiares a su cargo tendrá derecho a la percepción de la indemnización por ellos, siempre que el traslado de los mismos se efectúe dentro del año de concretado su traslado (art. 31º, punto II de la reglamentación, Decreto nº 1.471/58).

En consecuencia, y respecto de las situaciones particulares planteadas, corresponde informar lo siguiente:

a) es procedente la liquidación de indemnización por traslado en el caso de tratarse de un agente soltero.

b) si se produjera el traslado simultáneo de dos agentes pertenecientes al grupo familiar (Cónyuges; padre e hijo; hermanos; etc) siempre que fuera por razones de servicio, corresponde a los dos independientemente, el pago de la indemnización. La liquidación en ese concepto por los familiares a cargo, debe efectuarse directamente sobre el agente del cual dependen.

c) la disposición del punto I del artículo 31º de la re

glamentación del Estatuto del Personal Civil (Decreto nº 1.471/58) que establece que la indemnización por gastos de traslado del agente y de la familia a su cargo a la fecha de producido éste, por cambio de destino que obedezca a necesidades del servicio, e importe una real y efectiva modificación de domicilio a una distancia superior a 50 kilómetros de la anterior, compensará las erogaciones que por tal concepto se realicen efectivamente, dentro de las cantidades máximas que rijan", debe interpretarse adecuada a las normas del artículo 5º del Decreto número 18.989/56 y artículo 1º del Decreto nº 6.170/59(').

Vale decir que la liquidación deberá ajustarse al gasto efectivamente realizado, sin ser inferior al mínimo establecido por los dos decretos citados (según sea la fecha a la que corresponda el traslado), ni superar el máximo que los mismos estipulan.

En cuanto concierne al uso de orden oficial de pasaje y carga, en los casos en que el traslado o la permuta sean a pedido del agente, cabe destacar que el Decreto número 32.897/33 (") estableció las normas correspondientes, las que deben aplicarse en estos casos.

DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO CIVIL, 18 de junio de 1959.-

Fdo. JOSE LUIS FRANGI
Director General

Buenos Aires, 20 de julio de 1959.-

APROBADO; dése a la presente el carácter de Resolución aclaratoria de las normas que regulan la liquidación de la indemnización por traslado (Decretos 18.989/56, art.5º; 1.471/58, art.31º, pto. I; y 6.170/59, art.1º), vuelva a la Dirección Gral. del Servicio Civil de la Nación a sus efectos.-

Fdo. GUILLERMO WALTER KLEIN
Secretario de Hacienda

RESOLUCION Nº 7.890.-

(') Ver Digesto Administrativo Nº 786.-

(") Ver Digesto Administrativo Nº 102.-

Poder Ejecutivo Nacional
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº 834.-

ESCALAFON PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL (Punto 52º)

Expedientes Nros. 1.727/59 D. de F.-
10.133/59 S. de S.-
90.181/59 S.Hacienda

//ñor Subsecretario:

En estas actuaciones la Superintendencia de Seguros de la Nación expone los puntos de vista que, a su juicio, permiten sostener que el decreto nº 1.867/59 (+) no es aplicable a su personal.

El aspecto esencial de su argumentación radica en el hecho que los considerandos del decreto aludido hacen referencia exclusivamente a aquellos organismos que con posterioridad al 11/8/58 hubieran obtenido la sanción de un escalafón particular, cuyo acto aprobatorio dispusiera su incorporación al Escalafón dado por el decreto nº 9.530/58.

Ponderados los razonamientos expuestos con sujeción al texto de dichos considerandos, es evidente que la posición de la Superintendencia de Seguros resultaría en principio convincente, aún cuando podría discutirse si el ordenamiento dado por el decreto nº 7.855/58 (fs. 1) para las retribuciones de su personal, constituye o no un "escalafón" en la acepción gramatical de este vocablo.

Pero dejando de lado esa cuestión y aceptado que los considerandos del decreto no enuncian íntegramente todos los casos

(+) Ver Digesto Administrativo Nº 700.-

que dicho acto ha pretendido comprender, limitándose a destacar especialmente la situación de aquellos organismos que hubieren obtenido un escalafón particular, no por ello es posible restar eficacia a la parte dispositiva del acto en cuestión, que es la que en definitiva concreta la voluntad del Poder Ejecutivo. En efecto, si bien es norma que los considerandos expongan suscintamente los fundamentos del acto, para orientar su correcta interpretación, no es menos cierto, que en defecto de estos fundamentos en forma total o parcial, el acto es igualmente válido y debe ser ejecutado con arreglo a las estipulaciones de su articulado.

Siendo ello así y remitiéndonos a la parte dispositiva del decreto nº 1.867/59, tenemos que su art. 1º expresa: "El personal de los organismos que con posterioridad al 11 "de agosto de 1958 hubieran logrado la actualización de sus "retribuciones mediante la obtención de nuevos escalafones "o escalas de sueldos, que con carácter general valoricen "las funciones en mayor medida que el Escalafón aprobado "por el Decreto nº 9.530/58 en los importes iniciales de "cada grupo, ...".

Esto es, que a través de dicho texto, no queda duda de sus efectos respecto de la Superintendencia de Seguros, puesto que si es discutible que los beneficios dados por el decreto nº 7.855/58, constituyen el "escalafón particular" o "nuevo escalafón" a que se ha querido aludir, no puede negarse en cambio que a través de dicho artículo se han actualizado las retribuciones del personal mediante la fijación de una nueva "escala de sueldos". Pretender que ello no es así y llamar a dichos aumentos "mejoras de rutina" (fs.11), es una apreciación simplemente dialéctica y circunstancial que en ningún modo puede empalidecer los méritos reconocidos por el Poder Ejecutivo al conceder tales mejoras, según se expresara en los considerandos 4º y 5º del decreto

nº 7.855/58, ya citado; "que la escala de remuneraciones vi "gente para los funcionarios y empleados de la Superintenden "cia de Seguros no responde cabalmente a la experiencia y ap "titudes evidenciadas por los agentes de la misma";

"que para el logro de esos fines es menester actualizar "las remuneraciones, llevando las mismas a "niveles ordena- "dos";.

Por otra parte es evidente que se llamen "mejoras de ru tina" o de cualquier otra manera, ha existido y esto es inne gable, una actualización de remuneraciones, y que ellas son en general superiores a los sueldos iniciales que fija el Es calafón aprobado por el decreto nº 9.530/58, para cada gru- po, y tal es precisamente el hecho que el decreto nº 1.867/59 ha querido contemplar, valiéndose para ello de la alusión a las denominaciones más comunes y genéricas con que se defi- nen los actos que la pudieran dar origen: escalafón o esca- la de remuneraciones.

El propósito que movió a ello no puede ser más evidente: evitar que mejoras aisladas acordadas para determinados or- ganismos luego del 11/8/58, pudieran ser nuevamente incremen tados por aplicación de un sistema fijado exclusivamente en orden a situaciones vigentes a esa fecha. Siendo ello así y encontrándose la Superintendencia de Seguros en la situación descripta, es opinión de esta Dirección General que le son aplicables las disposiciones del acto cuestionado.-

Fdo. JOSE LUIS FRANGI
Director General
Servicio Civil de la Nación

Expediente nº 90.181/59

//nos Aires, 27 de julio de 1959.-

De conformidad con lo informado por la Dirección General del Servicio Civil de la Nación pase a la Superintendencia de Seguros a sus efectos.-

Fdo. RAFAEL RODOLFO AYALA
Subsecretario de Hacienda

Poder Ejecutivo Nacional
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº 835.-

ESCALAFON PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL (Punto 23º) - ESTATUTO PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL (arts. 3º al 5º) - INGRESO

Expediente nº 90.018/58
Providencia nº 161

//nos Aires, 11 de marzo de 1959.-

Vuelvan las presentes actuaciones a la Dirección General de Despacho de la Secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería, llevando a su conocimiento que la aplicación de las normas del Estatuto del Personal Civil aprobado por decreto ley nº 6.666/57(+), en cuanto se refieren al ingreso del personal, ha derogado practicamente las disposiciones del decreto nº 1.025/47. En el mismo sentido se ha pronunciado el Tribunal de Cuentas de la Nación con fecha 23 de abril de 1958 (expte. nº 10.852/58).

En consecuencia, la designación de agentes en organismos comprendidos en el mencionado Estatuto se hará con arreglo, solamente, a las disposiciones de los arts. 3º al 5º del mismo y de su Reglamentación, y punto 23º del Escalafón aprobado por decreto nº 9.530/58.

Sírva la presente de atenta nota de remisión.-

DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO CIVIL DE LA NACION.-

Fdo. JOSE LUIS FRANGI
Director General

(+) Ver Digesto Administrativo Nº 251

Poder Ejecutivo Nacional
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº836.-

ESCALAFON PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL (punto 51º y 52º) - BONIFICACION POR ANTIGUEDAD

Expediente nº 42.094/58.-
Providencia nº 324.-

//nos Aires, 20 de julio de 1959.-

Vuelva a la Dirección General de Contabilidad y Administración informando respecto de lo solicitado a fs. 1 y 6, que el mecanismo de las promociones del personal de la Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos, como el de todos los organismos que se encuentran comprendidos en el Escalafón aprobado por decreto nº 9.530/58, está claramente determinado en el Capítulo III, puntos 3º a 11º de dicho cuerpo normativo.

A efectos de la ubicación del agente en la categoría pertinente, dentro de la clase y grupo asignados, el cómputo de servicios que hubieran dado lugar a jubilación o retiro está reglado en el decreto nº 4.632/59, (+), inciso II, apartado a). Ubicado el personal, de acuerdo con las normas del Capítulo X, puntos 51º y 52º del Escalafón, aquellos servicios, como todos los computados, no tienen influencia alguna en el mecanismo escalafonario subsiguiente.

Queda de tal manera ratificado el informe de fs. 3 (Providencia nº 204/59), en el sentido de que la situación planteada está claramente determinada en el recordado decreto nº 4.632/59.

DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO CIVIL DE LA NACION

Fdo.: JOSE LUIS FRANGI
Director General

(+) Ver Digesto Administrativo Nº 709.-

Poder Ejecutivo Nacional
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº 837.-

ESTATUTO DEL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL - JUNTA DE DISCIPLINA

Expediente nº 846.789 - 1956.-
Sumario administrativo c/agente Héctor M. Lobato - SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA.-

Señor Secretario de Estado de Hacienda:

Por haber dictaminado en las presentes actuaciones sumariales la Junta de Disciplina (fs. 121) cuya intervención, que hace al aparato formal del Estatuto, no es discutible, desde que la doctrina y la jurisprudencia con marcada coincidencia admiten la aplicación inmediata de las normas procesales, cuando la ley no dispone lo contrario, para el juzgamiento de los hechos pertinentes cualquiera sea el tiempo en que estos sucedieron, corresponde, por la importancia que tiene el informe pericial de fs. 137/42 producido con posterioridad a la intervención de aquella Junta, que se le de vista del mismo para que produzca nuevo dictamen.-

Julio 14 de 1959.-

Fdo. Dr. ALEJANDRO R. AHUMADA
Sub-Procurador del Tesoro de la Nación

Poder Ejecutivo Nacional
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº 838.-

PAGOS ENTRE REPARTICIONES O EMPRESAS DEL ESTADO - PAGOS - LEY DE CONTABILIDAD (Arts. 44° y 45°) - LIBRAMIENTOS

Buenos Aires, 18 de mayo de 1959.-

Visto lo dispuesto por los artículos 44° y 45° de la Ley de Contabilidad, y

CONSIDERANDO:

Que la atención de pagos por parte de los servicios administrativos, da lugar a frecuentes casos en que se extraen fondos de la Tesorería General de la Nación, para entregarlos, girarlos o transferirlos a otros servicios similares o bien a organismos o empresas del Estado;

Que cuando dicho procedimiento se aplica a dependencias de un mismo servicio, que tienen a su cargo la realización de pagos a terceros o a sus agentes, no ofrece dificultad, ya que, evidentemente deben proveerse de los fondos necesarios para atenderlos, operándose en cambio un proceso innecesario de dispersión cuando tales provisiones de fondos se destinan a la finalidad referida en el considerando anterior;

Que, por otra parte, dicho proceso origina trámites innecesarios, que pueden evitarse en beneficio de una racional agilidad administrativa, mediante el pago directo por la Tesorería General de la Nación, con lo que, a su vez, se reducirán sensiblemente tramitaciones que no son indispensables, con la ventaja de que al mismo tiempo, el volumen de las operaciones de control y registro se limitará al estrictamente necesario;

Que el sistema de libramientos de entrega y pago, en vigencia por la Ley de Contabilidad, asegura el debido control y permite que los pagos a ordenar por los organismos competentes puedan clasificarse de acuerdo con su destino específico;

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- Los servicios administrativos que deben efectuar pagos a sus similares de otra jurisdicción o a organismos o empresas del Estado, con fondos a proveer por el TESORO NACIONAL, lo harán mediante la emisión de libramientos de pago a favor del servicio u organismo acreedor, los que serán cumplidos directamente por la TESORERIA GENERAL DE LA NACION.

ARTICULO 2º.- Para la atención de erogaciones que comprendan pagos a efectuar directamente por los servicios administrativos o sus dependencias a sus agentes o a terceros y al mismo tiempo a otros organismos del Estado, se emitirán simultáneamente el libramiento de entrega para la provisión de fondos y los de pago que corresponda para cada servicio u organismo acreedor.

ARTICULO 3º.- Las disposiciones de entrega de fondos, por cualquier concepto, a favor de empresas del Estado, deberán determinar en qué medida se destinan a cancelar compromisos con organismos del Estado, a efectos de aplicar lo dispuesto por este decreto.

ARTICULO 4º.- La CONTADURIA GENERAL DE LA NACION y la TESORERIA GENERAL DE LA NACION, no darán curso a libramientos de entrega a favor de servicios administrativos, cuando los mismos incluyan importes que corresponda pagar a otros organismos del Estado, quedando facultadas ambas reparticiones,

para requerir los antecedentes que consideren necesarios en los casos en que el detalle de los libramientos no sea suficientemente demostrativo.

ARTICULO 5º.- El presente decreto será refrendado por el Señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado por el Señor Secretario de Estado de Hacienda.

ARTICULO 6º.- Comuníquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y pase a sus efectos al Tribunal de Cuentas de la Nación y a la Contaduría General de la Nación.-

FRONDIZI - Emilio Donato del Carril
Ricardo Lumi.-

DECRETO Nº 6.125.-

Poder Ejecutivo Nacional
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nª 839.-

ESTATUTO DEL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL (art. 36°) - SANCIONES - ASISTENCIA

Expediente n° 37.598 - 1957.-
Providencia n° 157.-

//nos Aires, 5 de marzo de 1959.-

Vuelvan las presentes actuaciones a la Dirección General de Contabilidad y Administración, llevando a su conocimiento que la aplicación de sanciones por falta de asistencia y puntualidad posteriores al 13 de febrero de 1958 debe hacerse con sujeción únicamente, a las normas de la reglamentación del art. 36° del Estatuto del Personal Civil, ya que las mismas derogan las que se le oponen (art. 2° del decreto número 1.471/58 (+), que es el caso de las previstas en los puntos 22° y 23° de la Resolución n° 8.264/56 (°).

La aplicación de sanciones por los mismos motivos, pero correspondientes a faltas anteriores al 13/2/58 y aún no sancionadas, podría hacerse en base a las escalas de los puntos 22° y 23° de la Resolución n° 8.264/56, ya que no existe incompatibilidad entre las mismas y las normas del art. 36° del Estatuto (sin reglamentar hasta la promulgación del decreto n° 1.471/58), pero de acuerdo con el criterio sustentado por el señor Procurador del Tesoro de la Nación en su dictamen del 28 de abril de 1958, cabe resolver estas situaciones con arreglo a las normas del Estatuto, en cuanto se trate de la ley más benigna, como lo establece el art. 2° del Código Penal.-

Fdo. JOSE LUIS FRANGI
Director General
Servicio Civil de la Nación

(+) Ver D.A. Nª 422.-
(°) Ver D.A. Nª 16.-

Poder Ejecutivo Nacional
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín nº 840.-

CONTRATACIONES

Expediente nº 20.275 - 1959.-
Informe nº 188 - 1959
(Contrat. y Trab. Públicos).-

Señor Ministro de Asistencia Social y Salud Pública:

Por resolución nº 236, dictada por el señor Ministro de Asistencia Social y Salud Pública con fecha 28 de enero de 1959, se deja sin efecto la adjudicación a favor de la firma "La Hidrófila Argentina S.A.C. e I." a pedido de la misma.

En lo actuado se documenta que la comunicación de la preadjudicación así como también la adjudicación se realizaron dentro del plazo de mantenimiento de la oferta, quedando con ello perfeccionado el contrato de acuerdo con lo previsto en el inciso 73) de la reglamentación del artículo 61 de la ley de contabilidad.

Si bien no se comunicó esa adjudicación dentro de los plazos a que se refiere el inciso 74), primera parte, el adjudicatario no la requirió en la forma en que el mismo inciso establece.

En consecuencia, siguiendo el principio de que los contratos en que el Estado es parte deben ser cumplidos estrictamente hasta su total extinción, el adjudicatario está obligado a satisfacer sus compromisos en la forma convenida, bajo apercibimiento de la aplicación de las penalidades pertinentes.

Por lo tanto, habiéndose transgredido las disposiciones mencionadas, el Tribunal de Cuentas formula a la resolución nú

mero 236/59 la observación legal que prescribe el artículo 85 inciso a) de la ley de contabilidad, señalando que la misma suspende el cumplimiento del acto conforme lo dispone el artículo 87 de la citada ley.-

TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA NACION, 5 de marzo de 1959.-

Fdo. WIFREDO DEDEU
Presidente en Ejercicio

Fdo. CESAR AGUIRRE LEGARRETA
Secretario

Poder Ejecutivo Nacional
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nª 841.-

RACIONALIZACION - ESTRUCTURAS Y ORGANIZACION

(Este Digesto reemplaza al nº 805, por haber aparecido con error en su original publicado en el Boletín Oficial del 16 de junio de 1959)

Buenos Aires, 12 de junio de 1959.-

Visto lo aconsejado por el I.S.A.P. y,

CONSIDERANDO:

Que es necesario asegurar la uniformidad de los organogramas que grafican las estructuras de los organismos que integran el Poder Administrador, los que se encuentran abocados al cumplimiento del Decreto nº 10.975/58 (+),

EL COMITE EJECUTIVO DEL PLAN DE RACIONALIZACION Y AUSTERIDAD

R E S U E L V E :

ARTICULO 1ª.- Las estructuras orgánicas que en cumplimiento del Decreto nº 10.975/58, deben ser reajustadas, serán graficadas de acuerdo a las indicaciones más abajo transcriptas y a los organogramas tipos que corren en anexos a) y b) y que integran la presente.

- INDICACIONES -

1ª El organograma que figura en el Anexo "A" muestra la estructura de un Ministerio o Secretaría de Estado imaginario. El gráfico indica la división primaria del trabajo, o sea aquellos suborganismos que dependen directamente del nivel ministerial.

(+) Ver Digesto Administrativo Nª 682.-

2ª.- En el ejemplo se ha representado dos Organismos Descentralizados, una Asesoría y tres Direcciones Nacionales o Generales, un Departamento, una División, una Sección y una Oficina.

3ª.- En el organograma del Anexo "B" se representa la estructura de un Organismo Descentralizado -sea su órgano directivo unipersonal o colegiado- o de una Dirección Nacional o General. Los suborganismos dependientes se han colocado debajo y en el nivel jerárquico correspondiente.

4ª.- En el nivel de Departamento, el organograma muestra cuatro organismos de esta categoría -uno de ellos es una Asesoría-. Dos de los Departamentos tienen cierto número de suborganismos que les están subordinados, los mismos se han colocado debajo y en el nivel jerárquico correspondiente. El tercero de los Departamentos representados, no tiene suborganismos bajo su dependencia.

5ª.- En el nivel de División: se observan cuatro organismos, uno de los cuales tiene una segunda jefatura. Los cuatro poseen cierto número de organismos que le están subordinados, los que se han colocado debajo y en el nivel que le corresponde.

6ª.- En el nivel de Sección: son diez los organismos representados, tres de los cuales no tienen suborganismos dependientes y uno de ellos depende directamente del nivel de Departamento.

7ª.- En el nivel de Oficina: se han representado diecinueve organismos; uno de ellos depende directamente del nivel de Departamento y tres del nivel de División. Este nivel es el más bajo y no admite subdivisión alguna.

8ª.- Los diferentes organismos representados en un organograma, deben ser unidos exclusivamente por líneas horizontales y verticales.

9ª.- Cuando la línea une organismos de ejecución, la línea será gruesa y llena; si la línea une a un organismo principal con otro asesor, la línea será fina; si la línea une a organismos descentralizados la misma será punteada.

10ª.- Cuando se representen organismos que no cumplen funciones de asesoramiento, la línea que los une al organismo principal debe partir de la parte inferior del rectángulo que los representa (Anexos "A" y "B" Nª 1)

Si el Organismo cumple funciones de asesoramiento, la línea de asesoramiento parte de un costado del rectángulo que representa al organismo principal (Anexo "A" y "B" Nª 2).

11ª.- Los organismos descentralizados se representarán con un recuadro (Anexo "A" Nª 3).

12ª.- En los niveles inferiores no deben graficarse:

a) Cuerpos de auxiliares administrativos que cumplan funciones en un nivel inferior al de Oficina y no tengan otro supervisor inmediato que un encargado, que es simplemente el "jefe" de un grupo de trabajo;

b) Cuerpos de dactilógrafos que se desempeñen en forma similar al caso anterior;

c) Cuerpo de ordenanzas a cargo de algún mayordomo, a menos que la mayordomía o su equivalente, constituya un suborganismo de los gratificados en los niveles del Decreto nº 10.975/58.

13ª.- Los organismos centralizados se presentarán con un rectángulo simple.

14ª.- Si un organismo tiene segunda jefatura, la misma se representará adosando al rectángulo del organismo principal otro cuya altura será igual a un tercio de la de aquél, (Anexo "B" Nª 4).

15ª.- En un pequeño cuadro que se colocará en el ángulo inferior derecho del rectángulo que representa a un organismo, se indicará el número de agente que dependan directamente del Jefe del mismo (Anexo "B" Nº 5).

16ª.- Aparte del organograma de la estructura principal de un Ministerio o Secretaría de Estado, deben confeccionarse gráficos de organización de acuerdo al siguiente detalle:

a) Uno para cada Dirección Nacional o General, mostrando todos los suborganismos que dependen de ella (p. ej.: Departamento, División, Sección y Oficina);

b) Uno para cualquier otro organismo principal o suborganismo que dependa directamente del nivel ministerial (p. ej.: una Empresa de Estado , un Organismo Descentralizado, un Departamento de Biblioteca, etc);

c) Uno para cada dependencia en que se divide un primer nivel, cuando así lo aconsejen razones de tamaño.

17ª.- En todo organograma -excepto en aquellos que correspondan al nivel ministerial- cuando el primer nivel representado dependa de otro organismo que no figura, se significará esta circunstancia mediante una línea que arrancando de la parte superior del rectángulo que grafica aquél, salga hacia afuera (Anexo "B" Nº 6).

18ª.- En cada rectángulo se colocará la denominación del organismo que representa, sin el título o denominación del nivel (p. ej.: Publicaciones y no Departamento o División o Sección u Oficina Publicaciones).

19ª.- En los organogramas de niveles inferiores al ministerial, deberá consignarse en la parte inferior el total del personal que cumple funciones en el organismo, indicando el que tiene funciones en el organismo, indicando el que tiene funciones de jefatura y el que cumple tareas auxiliares.

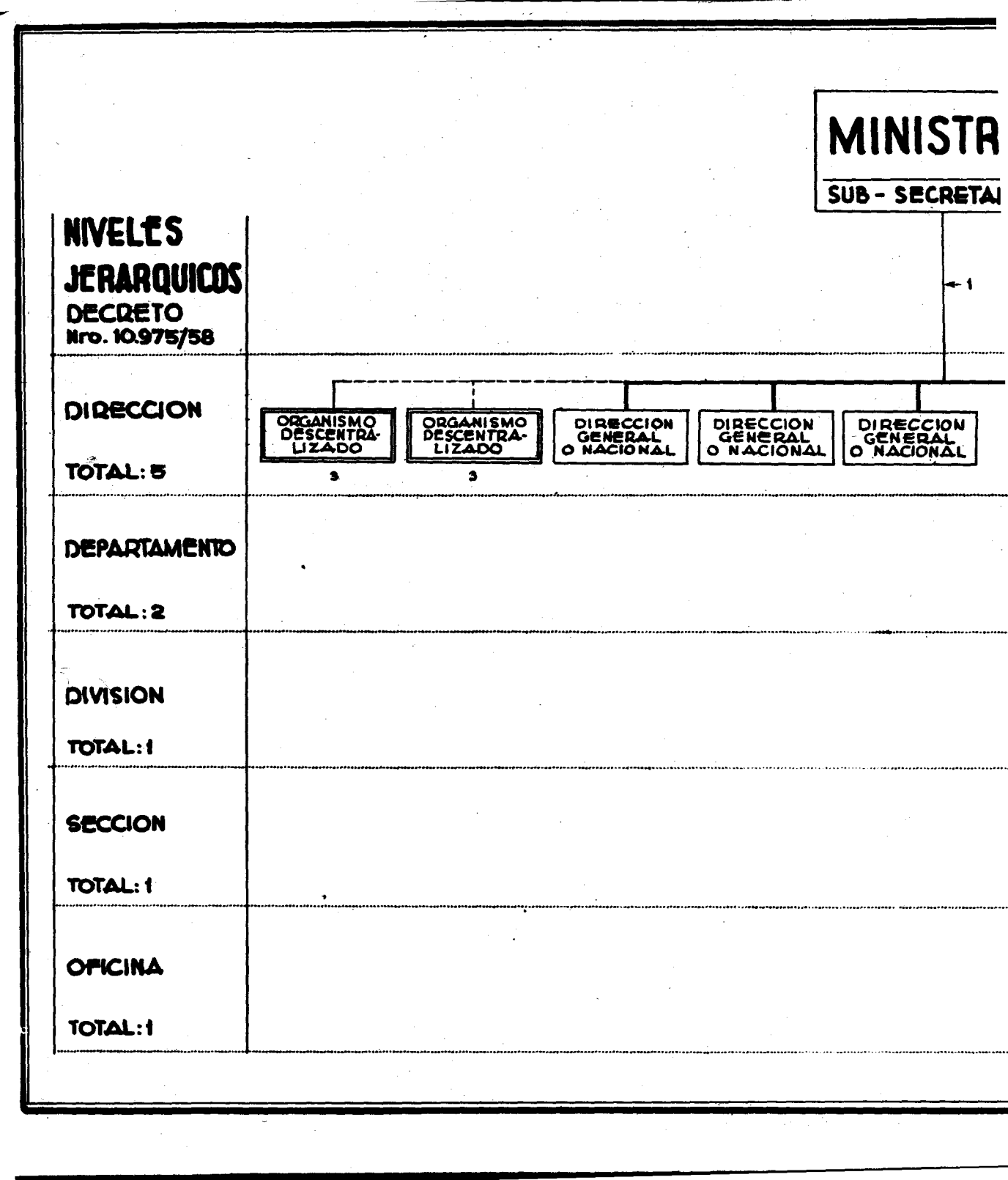
20ª.- Los organogramas deben presentarse en papel tamaño oficio o doble oficio.

21ª.- En el ángulo superior derecho del organograma debe hacerse constar la fecha de confección del gráfico y si el mismo se refiere a una estructura vigente o propuesta.

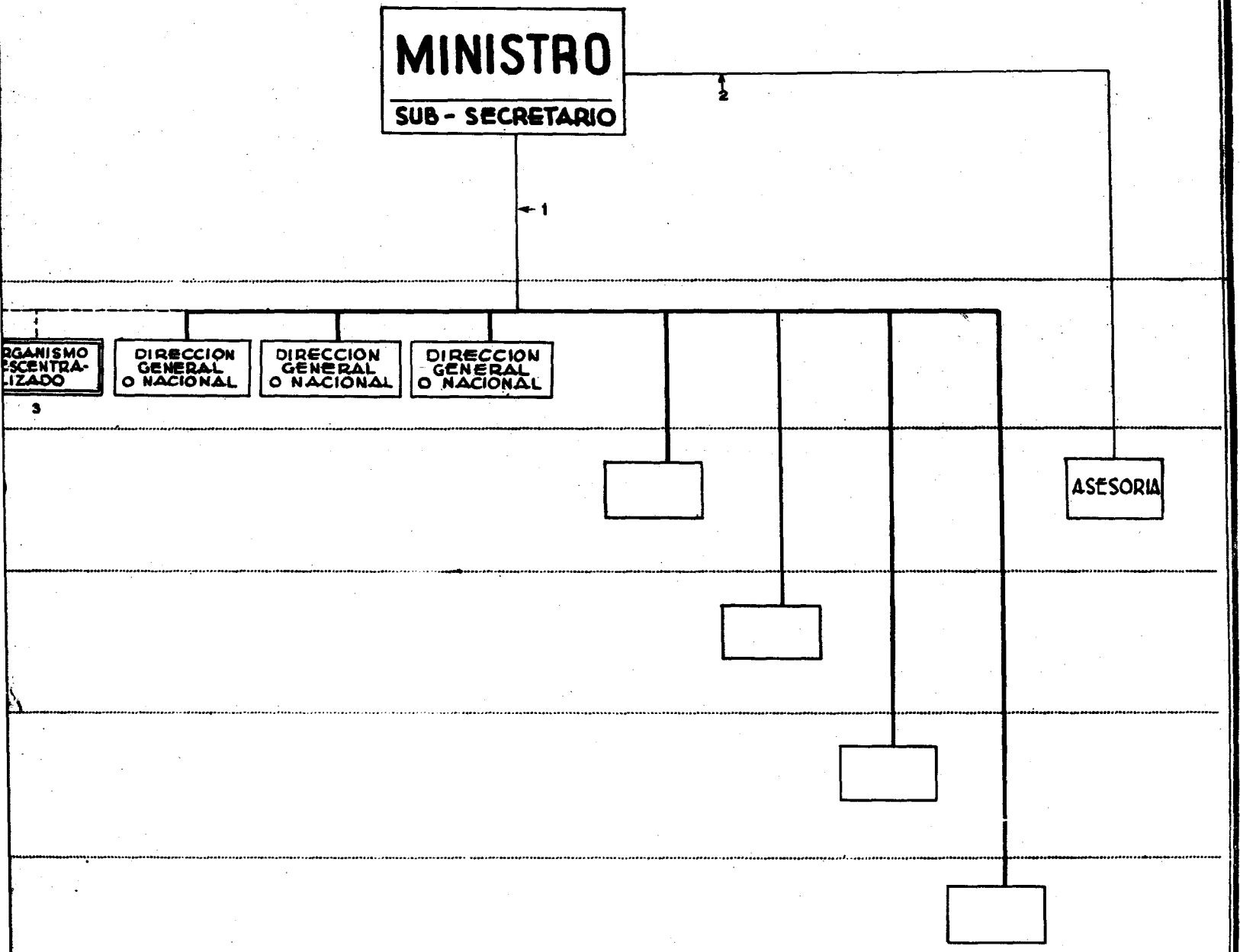
ARTICULO 2ª.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.-

Fdo. JUAN OVIDIO ZAVALA
Secretario Técnico de la
Presidencia de la Nación

RESOLUCION Nº 7.-


MINISTR
SUB - SECRETAI
1
NIVELES JERARQUICOS
DECRETO
Nro. 10.975/58
DIRECCION
TOTAL: 5
ORGANISMO DESCENTRA-LIZADO
3
ORGANISMO DESCENTRA-LIZADO
3
DIRECCION GENERAL O NACIONAL
DIRECCION GENERAL O NACIONAL
DIRECCION GENERAL O NACIONAL
DEPARTAMENTO
TOTAL: 2
DIVISION
TOTAL: 1
SECCION
TOTAL: 1
OFICINA
TOTAL: 1

ANEXO "A"


MINISTRO
SUB - SECRETARIO
2
1
RGANISMO
SCENTRA-
LIZADO
3
DIRECCION GENERAL O NACIONAL
DIRECCION GENERAL O NACIONAL
DIRECCION GENERAL O NACIONAL
ASESORIA

Poder Ejecutivo Nacional
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nª 842.-

ESTATUTO DEL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL

Expediente nº 90.126/59.-
Expediente nº PB/96/02/58
Providencia nº 200.-

//nos Aires, 5 de mayo de 1959.-

Vuelvan las presentes actuaciones a la Secretaría de Estado de Obras Públicas -Secretaría General-, llevando a su conocimiento que las normas contenidas en el Estatuto del Personal Civil (decreto-ley nº 6.666/57 (+) tienen plena vigencia desde el día 27 de junio de 1957, por haber sido publicado el mismo el día anterior en el Boletín Oficial (art. 2º del Código Civil). Al dictarse la reglamentación de sus disposiciones (decreto nº 1.471/58 (º) se excluyó de la misma a aquéllas que, por su carácter o redacción, hacían innecesario aclarar o precisar sus conceptos, caso en el que pueden involucrarse los incisos i), j), y k) del artículo 6º, e inciso b) del artículo 7º, entre otros.

Por consiguiente, su aplicación no puede ser dilatada invocando carencia de reglamentación; los organismos que consideren necesarias aclaraciones o interpretaciones de sus normas, deben requerir de la Secretaría de Estado de Hacienda la intervención o el asesoramiento para cada caso, resultante de la competencia que en la materia le asignara el decreto nª 797/58.(*)

Sirva la presente de atenta nota de remisión.-

Fdo. JOSE LUIS FRANGI
Director General

(+) Ver D.A. Nª 254.-
(º) Ver D.A. Nª 422.-
(*) Ver D.A. Nª 419.-

Poder Ejecutivo Nacional
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº 843.-

ESTATUTO DEL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL

Expediente nº 25/953 (Res.) s/rec. jerárquico c/denegatoria de indemnización, daños producidos por incendio Hotel Pto. Blest.- SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA Y GANADERIA.-

Señor Secretario de Estado de Agricultura y Ganadería:

Vuelvan estas actuaciones a mi dictamen, a raíz del recurso jerárquico interpuesto a fs. 132 por el señor Eduardo F. Garrafa, contra la resolución nº 370/57 (fs. 122), denegatoria de indemnización por pérdida y destrucción de sus efectos personales en ocasión del incendio producido en el Hotel Puerto Blest, el 5 de noviembre de 1952.

I.- Esta Procuración del Tesoro tiene dictaminado que el recurso jerárquico contra resoluciones de entidades autárquicas sólo puede prosperar, en principio, por motivos de legitimidad. Su procedencia por razones de mérito (oportunidad y conveniencia) debe estar acordada en precepto expreso para su admisibilidad (dictámenes del 11 de junio de 1951, en expediente nº 144.729/49 del Ministerio de Educación; 9 de marzo de 1955, en expediente nº 3.297/53 del Ministerio del Interior; 21 de junio de 1957, en expediente nº 1.348/56, del ex-Ministerio de Obras Públicas; 25 de febrero de 1958, en proyecto de decreto nº 8.697 (provisorio) de la Presidencia de la Nación).

Contra una resolución de la autoridad superior del órgano

administrativo respectivo, debe interponerse el recurso jerárquico directamente, sin previa revocatoria (decreto número 7.520/44, art. 2ª, inc. 3ª (+).

La revocatoria, en los términos del decreto nº 7.520/44, pierde los caracteres de una "reconsideración", como alguna vez se la ha llamado (dictámenes 37.141; 42,11, entre otros), para circunscribirse a ser un recurso jerárquico de orden menor, por cuanto su denegación ha de producirse por "la autoridad superior del funcionario u órgano administrativo del cual emanó la resolución recurrida". (Conf. Pearsa M.M.,"Del Recurso Jerárquico", 1954, p.26).

Si erróneamente se interpusiera en término (quince días hábiles administrativos - dec. nº 21.680/49 (°) y no número 19.041/51 (') un recurso contra una decisión de entidad autárquica, con la denominación de revocatoria o bien de reconsideración, pero se desprendiera la intención del recurrente de seguir la vía jerárquica, debe "admitirse y tramitarse como recurso jerárquico cuando substancialmente reúna las condiciones que para el mismo son exigidas reglamentariamente (dictámenes de julio 30 de 1951, en expediente número 8.083/51, del ex-Ministerio de Hacienda; octubre 7 de 1955, expediente nº 178.961/48 y 30 de octubre de 1956 en expediente nº 27.837/55, ambos del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto; junio 21 de 1957, en expediente nº 1.348/56 del ex-Ministerio de Obras Públicas" y febrero 28 de 1958, en proyecto de decreto nº 8.697 (provisorio) ya citado), ello porque, como se dice en los dictámenes mencionados, "los recursos administrativos han de interpretarse no de acuerdo a la letra de los escritos que los expresan; sino conforme a la intención del recurrente, inclusive cuando éste los haya

(+) Ver Digesto Administrativo Nº 43.-
(°) Ver Digesto Administrativo Nº 44.-
(') Ver Digesto Administrativo Nº 45.-

clasificado erróneamente usando términos técnicos inexactos".

Para el caso normal de la procedencia de la revocatoria (jerárquico de orden menor) ante la autoridad superior contra una resolución del inferior, conforme a los arts. 3º y 4º del decreto nº 7.520/44, el recurrente tiene dos posibilidades a) promover el recurso jerárquico dentro del término comprendido entre los once y veinticinco días hábiles administrativos (dec. nº 19.041/51, citado; b) esperar la resolución de la revocatoria, que de ser desfavorable, reabrirá la vía jerárquica por quince días más a contar desde la respectiva notificación.

Ahora bien: como queda dicho más arriba, la autoridad superior de un órgano administrativo que recibe un recurso con otra denominación, pero de cuyos términos fluye la substancia del jerárquico, debe encauzarlo, con los antecedentes respectivos, hacia el Poder Ejecutivo, por la vía ministerial correspondiente (art. 2º, dec. nº 7.520/44).

Pero cuando, como en el presente caso se interpone -dentro del término establecido para el jerárquico- un recurso de reconsideración y la autoridad respectiva entra a conocerlo: ¿quedaría cerrada la vía jerárquica?

La contestación negativa se impone, porque si precisamente para obviar la confusión introducida por el decreto número 7.520/44, al llamar "revocatoria" a un recurso que no es de reconsideración, se admite el recurso jerárquico aún mal interpuesto, por error del recurrente, mayor razón habría cuando la Administración participa del señalado error, dictando una resolución improcedente.

Por consiguiente, si bien el recurso jerárquico de fs.132, se habría interpuesto fuera de término por cuanto la reconsideración no interrumpe ni suspende el plazo de quince días, debe considerarse la primera presentación (fs. 116) como recurso jerárquico, tomándose la segunda (fs. 132) como una reiteración del recurso pendiente.

II.- Admitido el recurso, corresponde entrar a considerar el problema de fondo.

La Resolución de la Dirección de Parques Nacionales nº 75 de fecha 22 de enero de 1957 (fs. 114) reconoce como principal fundamento de la denegatoria la inexistencia, a esa época, de disposición legal que autorizase a abonar la indemnización solicitada.

Ahora bien, en la actualidad la norma existe y está concretada en el decreto-ley nº 6.666/57 (") (art.31) y en el art.31, punto VI, de su reglamentación.

La cuestión consiste pues, en saber si las disposiciones legales y reglamentarias citadas son de aplicación al caso.

Si se tiene presente que es una regla elemental de hermenéutica jurídica aquélla que establece que las leyes disponen para lo futuro y que no tienen efecto retroactivo (art. 3º del Código Civil), no resulta dudoso afirmar que la pretensión del recurrente no puede en modo alguno prosperar.

Ello es tanto más así si se tiene en cuenta que nada en el Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública Nacional y su Reglamentación autoriza a afirmar que sus previsiones, para supuestos como el que tratan estas actuaciones, han tenido en vista indemnizar hechos producidos con anterioridad a su vigencia.

III.- No obstante lo expuesto y teniendo presente que de estar a lo establecido en el art. 1º del decreto número 797 de 24 de enero ppdo. (°), corresponde a la Secretaría de Estado de Hacienda (Dirección General del Servicio Civil de la Nación) entre otras funciones, interpretar los regímenes aplicables al personal de los distintos organismos del Estado, debiendo intervenir especialmente en las materias de que

(") Ver Digesto Administrativo Nº 254.-
(°) Ver Digesto Administrativo Nº 419.-

trata el Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública Nacional y su Reglamentación, considero que sería del caso, antes de dictar el pertinente decreto girar estas actuaciones a la Dirección General nombrada, a sus efectos.-

NOVIEMBRE 10 DE 1958.-

Fdo. RICARDO COLOMBRES
Procurador del Tesoro de la Nación

Expediente nº 90.281 - 1958
Providencia nº 109.-

//nos Aires, 8 de enero de 1959.-

Vuelvan las presentes actuaciones a la Dirección General de Despacho de la Secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería, informando que esta Dirección General comparte plenamente el criterio sustentado por el señor Procurador del Tesoro de la Nación en su dictamen de fs. 150/151 (punto II). En efecto, las provisiones contenidas en el Estatuto del Personal Civil y su Reglamentación no rigen sino desde la fecha de su promulgación, careciendo de todo efecto retroactivo.

Por consiguiente, para la dilucidación del caso en cuestión, no son de aplicación las normas contenidas en el artículo 31º del cuerpo legal citado y de su decreto reglamentario.

Sirva la presente de atenta nota de remisión.-

Fdo. JOSE LUIS FRANGI
Director General
Servicio Civil de la Nación

Poder Ejecutivo Nacional
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº 844.-

CONTRATACIONES (Rescisión)

Buenos Aires, 29 de julio de 1959.-

Visto el presente expediente nº 51.146/59 y el agregado sin acumular nº 51.262/59, por los cuales la Unión de Proveedores del Estado y otras firmas, solicitan se admita en los contratos ya celebrados con el Estado el reajuste de los precios pactados, y

CONSIDERANDO:

Que si bien las disposiciones de la Ley de Contabilidad, que regla los contratos públicos, no permiten la modificación de los precios contractuales, es evidente que las razones formuladas por la Unión de Proveedores del Estado justifican una consideración y resolución especial de su pedido;

Que por esa razón es necesario fijar un procedimiento equitativo y justo que permita resolver, dentro de las normas legales, las situaciones de excepción y de emergencia planteadas, para aquellos casos en que las presentaciones de los contratistas reúnan los requisitos y condiciones que justifiquen tratamientos especiales;

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA
D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- Facúltase a las Reparticiones de la Administración Pública Nacional a rescindir los contratos de suministros, servicios u otros conceptos, concertados hasta el 31 de diciembre de 1958, o posteriormente si el acto de apertura de las res

pectivas propuestas se hubiera realizado hasta esa fecha, cuando medie pedido expreso de adjudicatarios invocando mayores costos por variaciones producidas con posterioridad y siempre que las cláusulas contractuales no hubieran previsto su reconocimiento.

ARTICULO 2ª.- Los adjudicatarios que opten por acogerse a los beneficios de este decreto, deberán interponer la solicitud pertinente, con carácter de declaración jurada en relación con las causas que la motivan, ante los organismos con quienes hubieran contratado dentro de los (30) treinta días laborables de publicado el presente en el Boletín Oficial de la República Argentina.

ARTICULO 3ª.- La presentación efectuada con posterioridad al plazo de caducidad establecido en el Artículo 2º, hará improcedente el otorgamiento de la franquicia y, como consecuencia, obligará al cumplimiento del contrato en las condiciones pactadas.

ARTICULO 4ª.- Las rescisiones de contratos que se produzcan de acuerdo con el régimen establecido en el presente decreto, no darán lugar a la imposición de sanciones contra el proveedor ni a indemnizaciones a favor de ninguna de las partes.

ARTICULO 5ª.- No serán aplicables las disposiciones de este Decreto a las partes de los contratos que a la fecha de publicación del mismo se encuentren en mora, salvo que ésta obedezca a razones de fuerza mayor o fortuitas.

ARTICULO 6ª.- Sin perjuicio de iniciar de inmediato la respectiva licitación, hasta tanto se adjudique la misma, las oficinas de compras actuantes, por el plazo de sesenta días laborables a contar de la fecha de rescisión operada en consecuencia de lo dispuesto en el presente, podrán formalizar directamente contratos destinados a satisfacer necesidades impostergables en la forma prevista por el Artículo 56º, inciso 7º, Apartado d) de la Ley de Contabilidad, u otras disposiciones análogas.

ARTICULO 7º.- La Administración se reserva el derecho de verificar la exactitud de los mayores costos invocados a los fines del presente decreto y la comprobación de falsedad dará lugar a la repetición de las sumas que se hubieren pagado en más en las nuevas contrataciones a efectuar, sin perjuicio de adoptar las sanciones del caso ante el Registro de Proveedores del Estado.

ARTICULO 8º.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda.

ARTICULO 9º.- Tómase nota, comuníquese al Tribunal de Cuentas de la Nación, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y vuelva a la Dirección General de Suministros del Estado a sus efectos.-

FRONDIZI - Alvaro Alsogaray -
Guillermo Walter Klein.-

DECRETO Nº 9.026.-

Poder Ejecutivo Nacional
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nª 845.-

ESTATUTO DEL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL (art. 41) - SANCIONES - SUMARIO

Expediente nº 31.973 - 1959.
Providencia nº 182.-

//nos Aires, 24 de marzo de 1959.-

Vuelvan estas actuaciones a la Dirección General de Contabilidad y Administración, llevando a su conocimiento que, con carácter general, en los casos en que del sumario administrativo surja la evidencia de la comisión del hecho imputado al causante, es procedente aplicar la sanción que resulte de lo actuado sin necesidad de esperar el fallo de la Justicia en el proceso criminal.

La resolución condenatoria que se dictare en la referida causa podrá determinar una agravación de la pena impuesta en el orden administrativo (Resolución nº 8.112/58 (+), pero por el contrario, en caso de absolución, ello no obligará a la Administración a adoptar una medida similar (artículo 41ª, punto XIV, apartado c), de la Reglamentación del Estatuto del Personal Civil).-

FDO. JOSE LUIS FRANGI
Director General
Servicio Civil de la Nación

(+) Ver Digesto Administrativo Nª 674.-

Poder Ejecutivo Nacional
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº 846.-

CONTRATACIONES - OBRAS PUBLICAS

Buenos Aires, 28 de julio de 1959.-

Visto el expediente nº 751/58 del Registro de la Secretaría de Estado de Obras Públicas en el que la Cámara Argentina de la Construcción solicita que los bonos emitidos por Y.P.F. conforme al Decreto-Ley nº 15.456 del 22 de noviembre de 1957, una vez que se negocien en Bolsa sean admitidos para conferir las garantías propias de la licitación y contratación de las obras públicas nacionales; y

CONSIDERANDO:

Que los "Bonos Plan de Reactivación Y.P.F." tienen carácter nacional y pueden, en consecuencia, ser admitidos para conferir la garantía que establecen los artículos 14 y 21 de la ley 13.064 y sus complementarias, leyes nros. 14.000 y 14.143 y decretos nros. 7.928 del 31 de marzo de 1949 y 1516 del 2 de febrero de 1954, sin pronunciamiento expreso que lo autorice;

Que en cuanto a la integración del "fondo de reparos" nada obsta para incluir en los Pliegos de Condiciones una cláusula que permita su sustitución total o parcial por los "Bonos Plan de Reactivación Y.P.F."; y en cuanto a los contratos ya celebrados, puede autorizarse la substitución, si las respectivas bases prevén genéricamente la posibilidad de substituir dicho fondo en efectivo, por "títulos" o por otra clase de garantías;

Que tal medida al permitir mayor disponibilidad de numerario a las empresas constructoras, será beneficiosa para el Estado ya que favorecerá la competencia en los remates y permitirá bajar los precios de las propuestas; y por ende, disminuir el costo de las obras;

Por ello de acuerdo con lo manifestado por el Procurador del Tesoro de la Nación (fs.6/7) y por el Tribunal de Cuentas de la Nación (fs. 8 vta.) y atento a lo propuesto por el señor Secretario de Estado de Obras Públicas,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- En los Pliegos de Condiciones que sirvan de base para la contratación de obras públicas que se celebren con sujeción a la ley 13.064, se incluirán cláusulas que permitan sustituir el llamado "fondo de reparos" en efectivo, por títulos o bonos nacionales incluso los emitidos por Y.P.F., de acuerdo con el decreto-ley nº 15.456/57, una vez que se negocien en Bolsa.

ARTICULO 2º.- La substitución a que se refiere el artículo anterior podrá efectuarse también en el caso de contratos en curso de ejecución siempre que las respectivas bases autoricen genéricamente la substitución del "fondo de reparos" en efectivo, por títulos u otra clase de garantías.

ARTICULO 3º.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario en el Departamento de Obras y Servicios Públicos y firmado por el señor Secretario de Estado de Obras Públicas.-

ARTICULO 4º.- Comuníquese,publíquese,dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y vuelva a la Secretaría de Estado de Obras Públicas.-

FRONDIZI - Alberto R. Costantini

DECRETO Nº 8.919.- Pascual A. Palazzo.-

Poder Ejecutivo Nacional
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº 847.-

PAGOS - CREDITOS - COMPENSACION (Recíproca o Múltiple)

Buenos Aires, 18 de mayo de 1959.

Visto el expediente nº 8.909/57, en el que corre el trabajo efectuado por la Comisión Especial que creó el Decreto nº 5.803 del 31 de mayo de 1957, con la finalidad de estudiar un régimen que permita liquidar mediante compensación las distintas deudas que mantengan entre sí los ministerios y reparticiones, y

CONSIDERANDO:

Que según ha podido apreciarse las deudas y créditos recíprocos entre reparticiones públicas presentan una persistencia y magnitud realmente considerable, por muy diversos conceptos, pero su constante evolución y los problemas contables internos dificultan obtener cifras homogéneas y comparables, a iguales fechas, lo que ha llevado a la conclusión de que más que una satisfacción inmediata y concreta de determinadas deudas, era menester hallar algún mecanismo que pudiese funcionar permanentemente, con prescindencia de situaciones del momento, a fin de que se liquidasen con periodicidad para lograr el objetivo de un saneamiento estable;

Que las investigaciones practicadas, han servido para formar criterio con respecto a la importancia de la cuestión y asimismo demuestran que hay situaciones múltiples de reparticiones que tienen el carácter de acreedoras una respecto a otras, a tal punto que si todos los pagos se dieran por cumplidos, desaparecerían en forma natural buena parte de esas deudas;

Que la implantación de un sistema de compensación ya fue

ra recíproca para los créditos o deudas que dos reparticiones tuviesen entre sí, o múltiple por abarcar en cadena a tres o más reparticiones sucesivamente acreedoras una de la otra; podría funcionar con bastante simplicidad, al considerarse que los pagos se han cumplido en virtud de la compensación, sin interferir en absoluto en todo el proceso previo de contabilidad y de disponibilidad de los fondos, que naturalmente, por imperio de las diversas normas contables de la administración y de las reparticiones o empresas, rige en todo acto hasta llegar a la orden o disposición de su pago;

Que ese proceso contable puede y debe funcionar con normalidad dentro del mecanismo habitual y la acumulación de deudas y créditos insatisfechos surge precisamente cuando se ha cumplido el ciclo administrativo y sólo resta pagar, ya que recién en ese momento revisten el carácter de créditos y deudas exigibles;

Que la acumulación de deudas representa sin duda un trastorno de gravedad para la marcha financiera de cada repartición o empresa afectada, y requiere que exista un procedimiento y también un órgano que lo aplique e impulse, a fin de que por el simple arbitrio de considerar como producida la efectividad de los pagos de un determinado conjunto de créditos recíprocos, se liquide con regularidad, la acumulación indebida de deudas insatisfechas;

Que el régimen propuesto por la Comisión cuenta con la conformidad del Tribunal de Cuentas de la Nación (fs.18) y de la Contaduría General de la Nación (fs. 19) vta.;

Que sin perjuicio de la aprobación de este sistema, separadamente serán estudiados los arbitrios tendientes a prevenir que se originen estos problemas de acumulación de deudas insatisfechas entre reparticiones;

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- Los créditos y deudas que por cualquier concepto se originen entre entidades públicas nacionales y sus dependencias, reparticiones descentralizadas o empresas del Estado, serán cancelados por los procedimientos de Compensación Recíproca o Compensación Múltiple, de conformidad con las normas que se indican en los artículos siguientes. La compensación tendrá el alcance de un pago, extinguiéndose las deudas y créditos respectivos.

ARTICULO 2º.- Entiéndese por Compensación Recíproca el procedimiento de extinguir créditos y deudas que se originen entre dos entidades que revistan mutualmente las calidades de acreedoras una con respecto a la otra. Entiéndese por Compensación Múltiple el procedimiento de extinguir créditos y deudas que se originen entre tres o más entidades que revistan una respecto a las otras, tomadas sucesivamente, las calidades de acreedoras, en forma tal que la última del grupo que se considere resulte acreedora de la primera.

ARTICULO 3º.- En ambos casos se procederá a extinguir los créditos que se afecten al sistema de compensación, exclusivamente por operaciones contables a realizar trimestralmente en la contabilidad de cada entidad oficial, hasta cerrar el circuito correspondiente y hasta la concurrencia del crédito menor. Los saldos resultantes al finalizar el período considerado, se incorporarán al siguiente dentro de igual mecanismo. Los que queden al finalizar el ejercicio serán incorporados al mismo proceso en el ejercicio siguiente, salvo que la estadística precedente demuestre una persistencia en determinados créditos, en cuyo caso procederá disponer la cancelación por pago efectivo.

ARTICULO 4º.- Los Jefes de los servicios administrativos de los diversos organismos, establecerán los montos de los cré-

ditos y deudas con otros organismos públicos que existan pendientes de pago según su propia información, al 31 de enero, al 30 de abril, al 31 de julio y al 31 de octubre de cada año y remitirán cuando así corresponda, el detalle a la Contaduría General de la Nación dentro de los diez (10) primeros días subsiguientes al vencimiento de cada período. En dicho detalle, los montos de los créditos y deudas deberán consignarse por ejercicios, y serán previamente certificados por los delegados fiscales del Tribunal de Cuentas de la Nación ante los organismos respectivos, a los efectos de verificar sí las deudas contraídas han contado con los créditos legales correspondientes y su pertinente registración.

ARTICULO 5º.- Con el conjunto de la información recibida a que se refiere el artículo anterior la Contaduría General de la Nación seleccionará los créditos que habrán de afectarse a las compensaciones y una vez proyectadas las mismas requerirá la intervención del correspondiente delegado fiscal, sin perjuicio de la función que le asigna el artículo anterior, con cuyo informe indicara luego a los jefes de cada servicio administrativo las operaciones contables que deberán realizar para hacer efectivas las compensaciones. Dichos delegados tendrán a su cargo las verificaciones que fueran necesarias para el cumplimiento de las operaciones contables que se realizarán en cada organismo en virtud del presente sistema.

ARTICULO 6º.- Con los elementos informativos trimestrales y las cancelaciones operadas en su consecuencia, la Contaduría General de la Nación determinará los saldos de créditos al cierre del ejercicio sobre la base de su persistencia en los trimestres precedentes, dictaminará acerca de cuáles deben incorporarse al procedimiento de compensaciones del ejercicio siguiente y cuáles deberán cancelarse como está previsto en el último párrafo del artículo 3º.

ARTICULO 7º.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía y fir

mado por el señor Secretario de Estado de Hacienda.
ARTICULO 8º.- Comuníquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y pase a la Contaduría General y al Tribunal de Cuentas de la Nación, a sus efectos.-

FRONDIZI - Emilio Donato del Carril - Ricardo Lumi.-

DECRETO Nº 6124.-

Poder Ejecutivo Nacional
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº 848.-

ESTATUTO PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL (art. 5ª) - CANCELACION DE NOMBRAMIENTO

Expediente nº 32.566/59 (Hacienda)
Providencia nº 273.-

//nos Aires, 17 de junio de 1959.-

Vuelva a la Dirección General de Contabilidad y Administración llevando a su conocimiento que la cancelación de un nombramiento no significa privación del derecho del agente afectado por la medida de percibir los haberes por el lapso en que prestó servicio. El art. 5º de la Reglamentación del Estatuto del Personal Civil (Decreto nº 1.471/58 (+) no quiso significar, con el empleo de la palabra "cancelación", tal procedimiento, ya que sería improcedente no remunerar los servicios prestados por una persona, los que engendran automáticamente el derecho a su retribución, salvo que anticipada y expresamente se hubiera pactado lo contrario entre las partes.-

DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO CIVIL DE LA NACION.-

Fdo. JOSE LUIS FRANGI
Director General

(+) Ver Digesto Administrativo Nº 422.-

Poder Ejecutivo Nacional
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº 849.-

ESTATUTO DEL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL (art. 9º) - TRASLADO - SANCIONES

Expediente nº 3.467 - 1958.-
Providencia nº 198 (Reservado)

//nos Aires, 23 de abril de 1959.-

El traslado a otra dependencia dentro de la misma Repartición, con motivo de la sustanciación de un sumario, no implica para el agente sanción disciplinaria, cuando lo justifican razones de conveniencia del servicio, ya que se realiza en uso de facultades que son propias de la organización administrativa.

No debe entenderse, por otra parte, que el traslado del causante limita el progreso en su carrera administrativa, ya que, como lo establece el art. 9º del Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública Nacional, "el derecho a la "carrera administrativa se refiere siempre a la clase, grupo "y categoría, y no a la función que se le haya asignado, si "esta última no fuere inherente a aquéllos".

Concretada así la opinión de esta Dirección General, pase a sus efectos a la Dirección General de Contabilidad y Administración.-

DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO CIVIL.-

Fdo. JOSE LUIS FRANGI
Director General

Poder Ejecutivo Nacional
SECRETARÌA DE ESTADO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº 850.-

ESTATUTO DEL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL (Arts. 3º y 10º) - NOMBRAMIENTOS - ESCALAFON PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL

Expediente nº 90.285 - 1958
Providencia nº 110

//ñor Secretario de Estado de Hacienda:

Respecto de la presentación efectuada en estas actuaciones, esta Dirección General cumple en informar lo siguiente:

a) la norma cuya aplicación suspendió el decreto-ley número 13.769/57 (+) no es el art. 3º del Estatuto del Personal Civil, como manifiesta el causante a fs. 4, sino el art. 3º del decreto-ley nº 6.666/57 (°) que aprobó a aquel, y que establece: "A partir de la fecha y hasta tanto se "aplique el sistema escalafonario aludido por el art. 2º, "solamente podrá nombrarse personal en los cargos infe- "riores del presupuesto de cada organismo con sujeción a "las disposiciones establecidas por el Decreto-Ley núme- "ro 23.573/56 (¹). Facultáse al Ministerio de Hacienda "para determinar en casos de duda, cuáles son los cargos "presupuestarios considerados como inferiores a los efec- "tos de la aplicación del presente artículo."

b) la reglamentación aprobada por decreto nº 1.471/58 (") no estableció cuáles serían los cargos inferiores de las carreras correspondientes a que se refiere el art. 3º cita

(+) Ver Digesto Administrativo nº 361.-
(°) Ver Digesto Administrativo nº 254.-
(¹) Ver Digesto Administrativo nº 141.-
(") Ver Digesto Administrativo nº 422.-

tado. Por consiguiente, la suspensión dispuesta por el decreto-ley nº 13.769/57 continuó subsistente.

c) la aprobación del Escalafón para el Personal Civil de la Administración Pública Nacional, efectuada mediante decreto nº 9.530, del 7 de noviembre de 1958, determinó el término de dicha suspensión, al establecer las Clases y Grupos dentro de los cuales se ubicará al personal comprendido dentro del Estatuto, su ingreso a los mismos y su carrera.

d) la norma fijada en el art. 10º, inciso c), de la Reglamentación del Estatuto no tenía, pues aplicación práctica hasta el momento de aprobarse dicho Escalafón, el que por otra parte la ha reemplazado por sus artículos 12º al 22º inclusive.

En consecuencia, estima esta Dirección General que correspondería poner lo expresado precedentemente en conocimiento del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a los fines que estime corresponder.-

DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO CIVIL, 8 de enero de 1959.-

Fdo. JOSE LUIS FRANGI
Director General

Expediente nº 90.285/58
Providencia nº 122

//nos Aires, 19 de enero de 1959.-

Con lo informado por la Dirección General del Servicio Civil de la Nación, vuelvan estos actuados al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.-

Sirva la presente de atenta nota de remisión.-

Fdo. RICARDO LUMI
Secretario de Hacienda de la Nación

Poder Ejecutivo Nacional
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº 851.-

ESTATUTO DEL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL - SUMARIOS

Expediente nº 406.699 - 1953.-

Ref.: Ex-agentes: Alberto N. Nunez, Arturo Raúl Garibaldi, Ricardo Albérico Zabala y Lorenzo Fullana.-

//nos Aires, octubre 23 de 1958.-

Dado que las personas precitadas han dejado de prestar servicios en esta Repartición, vuelvan estas actuaciones sumariales a la Junta de Disciplina, estimándole se sirva tener a bien reconsiderar su precedente providencia nº 26, si comparte el criterio de este Departamento: de no existir otro ámbito de aplicación para lo preceptuado por el Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública Nacional, que el fijado en el artículo 1º del mismo, con las excepciones del 2º.

Fdo. ALFREDO AUGUSTO LOZA
Jefe Departamento Personal
Dirección Nacional de Aduanas

PROVIDENCIA Nº 99.S.

//Junta de Disciplina, Diciembre 2 de 1958.-

Al tomar conocimiento de los términos que informan la precedente providencia del Departamento de Personal, esta Junta se pronuncia en disidencia con los mismos por entender:

a) que si bién el art. 1º del Decreto-Ley nº 6.666/57 (+) establece categóricamente cuales son las personas comprendidas en dicha norma legal, el art. 2º del mismo, que reviste carácter taxativo en cuanto se refiere a las excepciones que alcanzan al anterior, nada dice respecto de quienes por una u otra causa han dejado de pertenecer a la Administración; cabe concluir entonces que, si entre las excepciones taxativamente enumeradas, no figuran los agentes alejados de la función pública por jubilación, cesantía, renuncia, etc, nada obsta por consiguiente para que estos puedan ser juzgados por faltas cometidas en tanto prestaron servicios remunerados en organismos dependientes del Poder Ejecutivo.

b) que la circunstancia de haber cesado, por alguno de los motivos señalados, la relación de dependencia de un empleado con el organismo administrativo al cual perteneció, no lo excluye de ser juzgado por hechos irregulares cometidos durante su gestión como agente del Personal Civil; admitir lo contrario, implicaría inhibición para iniciar causa o bién obligatoriedad de disponer el archivo de la que se le hubiere incoado, quedando el imputado exento de toda responsabilidad por el solo hecho de haber cesado en su prestación de servicios.

(+) Ver Digesto Administrativo Nº 254.-

c) que para el caso eventual de que el agente colocado en las condiciones a que alude en el punto anterior, lograse por una contingencia cualquiera, ingresar nuevamente a la Administración Pública Nacional, nos encontraríamos con que el mismo no registraría ningún antecedente en su legajo personal, en lo que a penalidades se refiere libre éste de toda constancia vinculada a sanciones y por ende colocado aquel en condiciones de competir con otros servidores responsables, correctos y cumplidores del deber, consumándose de tal suerte una sensible injusticia.

Consecuente con lo expuesto y atento lo dictaminado en expediente nº 527.906/56 (providencia nº 157 del 26/6/58) por la Dirección General del Servicio Civil de la Nación cuya parte pertinente dice: "ademas, aún después de presentada la renuncia, el agente puede ser sometido a procedimientos disciplinarios, tal como ocurre cuando la formaliza para eludir sanciones a raíz de la comisión de un delito o falta", esta Junta estima que procede la prosecución de estos actuados corriendo la vista a que hace referencia la providencia nº 26.

Con el dictamen que antecede pase a la Dirección Nacional de Aduanas a sus efectos.

Fdo. JUAN E. GRUMELLI - ENRIQUE A. VALETTE - FELIX T. GIMENEZ - ANTONIO P. CORNEJO.- Vocales Titulares Junta de Disciplina.

Dictamen nº 62.-

//nos Aires, diciembre 5 de 1958.-

Atento lo actuado, y considerando que el decreto-ley nº 6.666/57 en su artículo 5º preceptúa: "Establécese que

"el Estatuto del Personal Civil de la Administración Públi-
"ca Nacional comprende solamente a las personas cuyo desem-
"peño sea de carácter permanente." y, de estar puntualizado su ámbito de aplicación en el artículo 1º de dicho ordenamiento legal, remítase a la Dirección General del Servicio Civil de la Nación para que tenga a bien determinar si los emplea-dos que han dejado de pertenecer a la Repartición - como en el caso de autos - deben continuar siendo juzgados administrativamente con sujeción al régimen disciplinario del mencionado Estatuto.

Fdo. ARMANDO H. PRADA
Dirección Nacional de Aduanas
Interventor.

Providencia nº 124 S.

Expediente nº 406.699/53
Providencia nº 132.-

//nos Aires, 2 de febrero de 1959.-

Vuelvan las presentes actuaciones a la Dirección Nacional de Aduanas, llevando a su conocimiento que esta Dirección General comparte el criterio sustentado por la Junta de Disciplina de ese organismo a fs. 216 vuelta y 217, concordante con lo dictaminado anteriormente en el expediente nº 527.906/56, providencia nº 157/58, ya que el hecho de que el inculpado en un sumario administrativo haya dejado de pertenecer al organismo no puede determinar la caducidad de las actuaciones respectivas, que deben continuar hasta su resolución final.

Corresponde, pues, en el presente caso la prosecución de las tramitaciones respectivas.-

Fdo. JOSE LUIS FRANGI
Director General
Servicio Civil de la Nación

Poder Ejecutivo Nacional
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nª 852.-

ESCALAFON PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL (Puntos 37ª,,48ª y 49ª)

Expediente nº 90.265 - 1959.-
Providencia nº 288.-

//ñor Subsecretario:

Esta Dirección General considera que el recibo de haberes del personal no constituye una notificación formal del encasillamiento escalafonario que le ha correspondido a cada agente, dado que la firma del mismo constituye pura y exclusivamente la constancia de haber recibido el dinero que en el mismo se consigna.

Vale decir que el plazo para interponer reclamo por razones de escalafonamiento no puede contarse sino desde el momento de haberse producido la notificación expresa de la ubicación asignada (Clase y grupo) dentro del Escalafón, para lo cual, a falta de la comunicación impresa que distribuye la Dirección General de Contabilidad y Administración, cada organismo puede arbitrar los medios que considere más oportunos para suplirla.

En cuanto se refiere al cómputo de días para presentar los reclamos, el Código Civil, en su artículo 28º establece que los plazos señalados por las leyes o los decretos del gobierno se computarán en días corridos, salvo que expresamente se indique que los mismos correrán sobre días útiles. Por lo tanto, no haciéndose aclaración alguna en tal sen

tido en el texto del Escalafón aprobado por decreto número 9.530/58, debe entenderse que los distintos plazos que fija en su articulado deberán computarse sobre días corridos.

Pese a ello, razones de orden práctico aconsejan la conveniencia de que, en el caso particular de los plazos para notificar calificaciones, presentar reclamos, y tramitar y resolver estos últimos, aquéllos sean tomados sobre días laborables, temperamento que favorece al personal al proporcionarle un mayor tiempo para efectuar sus presentaciones, documentándolas fehacientemente,y permitirá un mejor análisis de las mismas a efectos de su resolución definitiva.

Estas razones inducen a esta Dirección General a propiciar ante esa Superioridad el dictado de un decreto en tal sentido, ya que no sería procedente por vía de una Resolución de esta Secretaría, que tiene facultades para dictar normas reglamentarias , complementarias, aclaratorias e interpretativas, pero no modificatorias como sería en el presente caso.-

DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO CIVIL, 26 de junio de 1959.

Fdo. JOSE LUIS FRANGI
Director General

Buenos Aires, 4 de agosto de 1959.-

Visto el expediente nº 90.265/59, de la Dirección General del Servicio Civil de la Nación de la Secretaría de Estado de Hacienda, y

CONSIDERANDO:

Que en los puntos 32º, 37º, 48º y 49º del Escalafón para el Personal Civil de la Administración Pública Nacional, aprobado por decreto nº 9.530/58, al fijar plazos para distintos trámites, no se establece que los mismos se cómputan sobre días hábiles;

Que por lo tanto, y de acuerdo con el artículo 28º del Código Civil, los mismo deberían tomarse como días corridos;

Que razones de orden práctico aconsejan que los plazos para notificar las calificaciones al personal, para presentar reclamos en materia de calificaciones, escalafonamiento, ascensos, orden de méritos y menciones, y para tramitar y resolver los mismos, sean computados en días hábiles;

Que de tal manera se favorecería al personal, al proporcionarle un tiempo mayor para efectuar sus presentaciones, documentándolas fehacientemente, y permitiría al mismo tiempo realizar un mejor análisis de las mismas a efectos de su resolución definitiva;

Que para ello sería menester establecer expresamente que los plazos para los trámites indicados precedentemente, deben computarse sobre días laborables;

Que no ocurre lo propio con el plazo fijado en el punto 32º, el que por su índole debe considerarse computable en días corridos;

Por ello, y atento a lo aconsejado por la Secretaría de Estado de Hacienda;

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA
D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- Los plazos fijados en los puntos 37º, 48º y 49º del Escalafón para el Personal Civil de la Administración Pública Nacional, aprobado por decreto nº 9.530/58, deberán computarse considerando únicamente los días laborables.

ARTICULO 2º.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda.
ARTICULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas, y archívese.-

FRONDIZI - Alvaro C. Alsogaray
Guillermo Walter Klein.-

DECRETO Nº 9.221.-

Poder Ejecutivo Nacional
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº 853.-

ESCALAFON PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL (Punto 52º) - ANTIGUEDAD

Buenos Aires, 7 de agosto de 1959.-

Visto el expediente nº 36.446/59 de la Secretaría de Estado de Hacienda, en el que se plantea la situación de un agente que a la fecha de cumplirse el plazo establecido en el punto VII del decreto nº 4.632/59 (+) para la presentación de los certificados de servicios prestados, a efectos de computar la antigüedad, no contaría con la documentación respectiva, pese a haber iniciado los trámites necesarios con la suficiente anticipación, y

CONSIDERANDO:

Que en el punto VII del citado cuerpo legal, aprobatorio de las normas complementarias del punto 52º del Escalafón para el Personal Civil de la Administración Pública Nacional, se determina que "por esta única vez se reconocerá con efecto al 1º de noviembre la antiguedad que surja de los antecedentes registrados o de las constancias que se presenten dentro de los noventa (90) días de efectuada la primera liquidación del haber que resulte de su ubicación escalafonaria original. Los reconocimientos que se soliciten con posterioridad al vencimiento del plazo citado tendrán efecto a partir del 1º del mes siguiente al de la fecha de presentación del respectivo certificado de servicios";

Que en muchos casos, la falta de dichas constancias no se debe a negligencia por parte del empleado, sino por el contrario a la demora en que incurren los organismos ante la

---

(+) Ver Digesto Administrativo Nº 709.-

imposibilidad de localizar los antecedentes necesarios a esos fines;

Que en el caso en cuestión, en que el causante pertenecía al ex-Instituto Nacional de Acción Social, tal demora es atribuíble al hecho de que todos los servicios que lo componían, como el personal que conformaba su planta de agentes, han sido transferidos a otras reparticiones y, en consecuencia, tal circunstancia impide efectuar los trámites con la premura conveniente;

Que sobre este aspecto, no sería justo ni equitativo, perjudicar al agente cuando la obtención, en término, de las certificaciones, no depende de él sino del Estado mismo, que es quien otorga el beneficio;

Que por otra parte es dable señalar que pueden surgir situaciones similares en entidades o instituciones que hayan sido nacionalizadas o descentralizadas y cuyo personal dependiera actualmente de reparticiones amparadas en las prescripciones del recordado cuerpo dispositivo, en virtud de lo cual y con el objeto de dar solución al problema, es menester dictar la norma que modifique, con carácter general, el régimen en cuestión;

Que en mérito a lo expresado, la Secretaría de Estado de Hacienda propicia esa modificación, en el sentido de establecer que aquellos agentes que en el plazo determinado no hubieran conseguido la totalidad de sus certificaciones de servicios, deberán acreditar fehacientemente haber iniciado el trámite conducente al reconocimiento de la antiguedad, dentro del lapso estipulado y con la anticipación necesaria, a fin de no perder el derecho a la liquidación del beneficio con efecto retroactivo al 1º de noviembre de 1958, en oportunidad de su presentación ante la respectiva oficina;

Por todo lo expuesto

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- Los agentes de la Administración Pública Nacional comprendidos en el Escalafón aprobado por decreto número 9.530/58, que al vencimiento del plazo establecido en el punto VII de las normas complementarias del punto 52º de dicho cuerpo legal (decreto nº 4.632/59), no hayan podido acreditar los servicios prestados en otras reparticiones, entidades, empresas o instituciones, a efectos del cómputo de la antigüedad, pero que demuestren fehacientemente que han iniciado el trámite de certificación correspondiente con una anticipación no inferior a treinta (30) días respecto de la fecha de vencimiento de ese lapso, no perderán el derecho a la liquidación, con efecto retroactivo al 1º de noviembre de 1958, del beneficio que por tal concepto corresponde abonarles, en orden a lo que resulte del respectivo certificado de servicios.
ARTICULO 2º.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía, y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda.
ARTICULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y pase a la Secretaría de Estado de Hacienda a sus efectos.-

FRONDIZI - Alvaro C. Alsogaray - Guillermo Walter Klein.-

DECRETO Nº 9.546.-

Poder Ejecutivo Nacional
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº 854.-

DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO CIVIL - PERSONAL - BOLSA DE TRABAJO

Buenos Aires, 12 de agosto de 1959.-

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que es imprescindible tender a una reducción efectiva del personal dependiente de la Administración Pública Nacional, sin que ello importe privar a los agentes de sus legítimos medios de subsistencia;

Que las disposiciones en vigor han dispuesto la supresión y congelamiento de vacantes;

Que, no obstante, ciertos servicios públicos y Empresas del Estado necesitan indispensablemente cubrir las vacantes producidas;

Que es medida de buen gobierno procurar la más eficaz utilización del personal al servicio actual del Estado mediante una correcta redistribución del mismo;

Que debe facilitarse por todos los medios la reubicación de los agentes que por razones de vocación o conveniencia personal deseen cambiar de actividad o destino;

Que se requerirá una amplia colaboración de la actividad privada productiva en el proceso de reducción encarado por la Administración Pública;

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A:

Artículo 1º.- La Dirección General del Servicio Civil de la Nación de la Secretaría de Estado de Hacienda, organizará un

servicio centralizado para transferencia y redistribución del personal de la Administración Pública, cuyo funcionamiento se establece en el presente decreto.

Artículo 2º.- La Dirección General del Servicio Civil, deberá:

a) Mantener ficheros del personal a ser redistribuido o transferido, con los datos básicos indispensables.

b) Proveer información sobre personal disponible a todos los organismos del Estado y de la actividad privada que lo requieran.

Artículo 3º.- Todos los organismos del Estado, administración central y descentralizada, incluyendo Empresas del Estado, pondrán a disposición de la Dirección General del Servicio Civil, el siguiente personal:

a) Personal correspondiente a organismos que se supriman.

b) Personal en exceso a raíz de la aplicación de medidas de racionalización o economía.

c) Personal en exceso por cualquier otra razón

d) Personal que no cumpla funciones específicas vinculadas íntimamente con el título, profesión, oficio o especialidad que posee.

e) Personal que desee cambiar de destino en razón de la distancia existente entre el lugar de trabajo y su domicilio.

f) Personal que voluntariamente desee egresar de la Administración Pública.

Artículo 4º.- Queda prohibido a todos los organismos del Estado, incluyendo Ministerios, Secretarías de Estado, Entidades descentralizadas y autárquicas, Empresas de Estado y demás organismos dependientes del Poder Ejecutivo Nacional, realizar nombramientos o propuestas de nombramientos hasta tanto la Dirección General del Servicio Civil infor-

me la imposibilidad de proveer el personal requerido, por no tenerlo con las condiciones solicitadas, de lo que se dejará constancia escrita. La Dirección General del Servicio Civil deberá informar en el perentorio término de cinco (5) días a partir de los cuales los organismos recurrentes quedan en libertad de acción para realizar o proponer designaciones de acuerdo con las disposiciones en vigor.

Artículo 5º.- Exceptúanse de las disposiciones del artículo anterior los nombramientos o propuestas de nombramiento de personal obrero transitorio, el que continuará rigiéndose por las disposiciones en vigor.

Artículo 6º.- Los organismos del Estado mencionados en el artículo 4º que necesiten personal, lo solicitarán directamente a la Dirección General del Servicio Civil. Elegido el personal a transferir, la Dirección General citada impartirá la orden, simultáneamente, a la jurisdicción originaria, a la del nuevo destino y al interesado, siendo suficiente dicho acto para que se cumpla el traslado.

Artículo 7º.- El agente que en virtud del artículo anterior sea motivo de traslado se desempeñará en su nuevo destino "en comisión" hasta tanto sea incorporado definitivamente al presupuesto respectivo, previa transferencia presupuestaria del cargo o habilitación de la vacante que pudiera existir. En este último caso, el cargo que quede vacante en el organismo cuyo agente es transferido se considerará automática y definitivamente suprimido.

Artículo 8º.- Hasta tanto la Dirección General del Servicio Civil, no le fije su nuevo destino, el personal comprendido en el artículo 3º continuará desempeñándose en el asiento habitual de sus tareas, salvo el aludido en los incisos a) y b), que deberá hacerlo en dependencias de la jurisdicción a que pertenece el organismo que se suprime o reduce.

Artículo 9º.- Las empresas o entidades de la actividad privada que decidan incorporar personal de las listas de disponibles lo comunicarán a la Dirección General del Servicio Civil indicando fecha a partir de la cual comenzará a pres

tar servicios dicho personal. A partir de esa fecha se lo considerará automáticamente con licencia sin goce de haberes por un plazo máximo de tres (3) meses, cumplido el cual si el empleado se incorpora definitivamente, deberá presentar su renuncia o comenzará a regir el plazo del artículo 37º, inciso a) del Estatuto del Personal Civil. Si por cualquier causa no pasara definitivamente a prestar servicio en la actividad privada antes del plazo citado, el agente será incluído nuevamente en la lista de disponibles y cesará automáticamente en su licencia.

Artículo 10º.- Los organismos que posean personal en las condiciones del artículo 3º remitirán los datos necesarios a la Dirección General del Servicio Civil, en la forma que ésta lo establezca.

Dicha remisión se deberá realizar:

Dentro de los diez (10) días de haberes dispuesto las medidas a que se refiere el artículo 3º inciso a), o de constituirse los excesos a que se refieren los incisos b) y c).

Dentro de los diez (10) días de la correspondiente solicitud para el personal comprendido en el artículo 3º, incisos d), e) y f).

Artículo 11º.- La desafectación del personal inscripto en la Dirección General del Servicio Civil será dispuesto por ésta a solicitud fundada de la dependencia de origen.

Artículo 12º.- La Dirección General del Servicio Civil facilitará a las empresas o entidades de la actividad privada que lo requieran, toda clase de informaciones relacionadas con los antecedentes sobre personal disponible.

Artículo 13º.- La Dirección General del Servicio Civil podrá efectuar anuncios públicos indicando las especialidades u oficios para los que transitoriamente tienen disponibilidad.

Artículo 14º.- Los directores de administración y de personal, o funcionarios que hagan sus veces, serán responsables, dentro de su competencia, del cumplimiento estricto y dili

gente del presente decreto.

Artículo 15º.- Las dependencias de origen acordarán al personal comprendido en el artículo 3º incisos a), b) y c), el máximo de facilidades para que realice gestiones a fin de encontrar nuevo destino.

Artículo 16º.- Invítase a la actividad privada a colaborar en la reducción de los cuadros de personal de la Administración Pública planteando sus requerimientos a la citada Dirección General.

Artículo 17º.- Invítase al Poder Legislativo, Poder Judicial, Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y Gobiernos y Municipios Provinciales a solicitar el personal que necesiten, a la Dirección General del Servicio Civil.

Artículo 18º.- La Secretaría de Estado de Hacienda establecerá, cuando ello sea necesario, las normas aclaratorias y procedimientos de aplicación del presente Decreto.

Artículo 19º.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda.

Artículo 20º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.

Fdo. FRONDIZI
A. ALSOGARAY
G.W. KLEIN

Decreto nº 9.718.-

Poder Ejecutivo Nacional
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº 855.-

LIMITACION DE SERVICIOS - CESANTIAS

Buenos Aires, 20 de agosto de 1959.-

Visto el Decreto nº 11.709/58 (+) por el cual el Poder Ejecutivo enunció su propósito de reducir el plantel del personal del Estado, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 13 de la ley 14.794 (") dispone: "autorízase al Poder Ejecutivo para que, frente a la ineludible necesidad de realizar economías en los gastos públicos, reduzca funciones o empleos de la Administración Pública Nacional, en la medida que estime compatible con el adecuado funcionamiento de los servicios";

Que "dicha reducción se operará mediante la aplicación de los siguientes procedimientos: a) Limitación de servicios del personal que sea titular de una jubilación ordinaria o prestación similar; b) Prescindir de los servicios de quienes reunan los extremos necesarios para acogerse a la jubilación ordinaria; c) Aplicación de un régimen que reduzca al mínimo la acumulación de cargos, a cuyo efecto el Poder Ejecutivo modificará los regímenes en vigor; d) Prescindir de Personal en la medida que sea necesaria y de acuerdo con un sistema que ampare a los agentes de más capacidad, ponderada mediante un régimen uniforme de calificaciones, y a igualdad de esa condición, aquéllos con mayores obligaciones familiares";

Por ello,

(+) Ver Digesto Administrativo Nº 691.-

(") Ver Digesto Administrativo Nº 688.-

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA
D E C R E T A :

Artículo 1º.- Dentro de los veinte (20) días corridos de la publicación del presente decreto en el Boletín Oficial, los señores Ministros y Secretarios de Estado, Procurador del Tesoro, Tribunal de Cuentas, Secretarios de la Presidencia de la Nación y las autoridades superiores de los organismos con facultades legales para remover personal (Administración Central, Servicios de Cuentas Especiales, Organismos Descentralizados, Obras Sociales, Empresas del Estado y Plan de Trabajos Públicos) procederán a calificar a todo el personal bajo su dependencia, excluído el mencionado en el artículo 5º aplicando el sistema uniforme que se indica en el artículo siguiente.

Artículo 2º.- Se adoptará la siguiente tabla de calificaciones:

	Puntos
Eficiencia y rendimiento.....	0 a 10
Disciplina	0 a 10
Asistencia y puntualidad.....	0 a 5

La suma del puntaje obtenido determinará la calificación de cada agente a los efectos del presente decreto, la cual será de 25 puntos como máximo. Los rubros se computarán en números enteros, sin decimales y serán fijados por concepto.

Artículo 3º.- No serán calificados los agentes comprendidos en los incisos b), c), d), f), g), h) e i) del artículo 2º del Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública Nacional, aprobado por el Decreto-Ley nº 6.666/57 (º), así como tampoco aquellos no incluídos en los incisos citados para cuya designación se requiera acuerdo del Honorable Senado de la Nación.

Artículo 4º.- Dentro de los treinta (30) días corridos de la

(º) Ver Digesto Administrativo nº 254.-

publicación del presente en el Boletín Oficial, las autoridades de la Administración Nacional que se mencionan en el artículo 1º cumplirán el siguiente proceso:

1º) Formular las nóminas de los agentes que deberán cesar incluyendo en ellas a los de menor calificación y, dentro de éstos, a los que tuvieran menos carga de familia; la selección entre el conjunto que así resulte se realizará teniendo en cuenta la menor antigüedad y la menor edad.

2º) Notificar fehacientemente la calificación asignada a cada agente incluído en esas nóminas, la que podrá ser recurrida por éste dentro del término de tres (3) días de notificado.

3º) Resolver el recurso sin apelación.

4º) Elevar al Poder Ejecutivo el proyecto de decreto conteniendo la nómina de los agentes que deben cesar, en la cantidad que se haya fijado de acuerdo a lo establecido en el artículo 6º.

Las autoridades con facultades para remover personal resolverán por si la baja de los agentes observando el procedimiento establecido en los apartados 1º), 2º) y 3º) precedentes y dentro del término improrrogable de treinta (30) días aludido, dando cuenta de inmediato al Poder Ejecutivo. Artículo 5º.- En el término de quince (15) días corridos desde la publicación de este decreto, las mismas autoridades propondrán o resolverán la baja de aquellos agentes que sean titulares de una jubilación ordinaria o prestación similar o bien que reunan los extremos de edad y antiguedad para obtener tales beneficios. Quedan facultados los Ministros y Secretarios de Estado para disponer las excepciones a que se refiere el penúltimo párrafo del artículo 13º de la Ley número 14.794, en las reparticiones, organismos y empresas de sus respectivas jurisdicciones.

Artículo 6º.- La proporción de agentes que debe cesar en cada una de las jurisdicciones mencionadas en el artículo 1º será fijada por el Poder Ejecutivo, mediante comunicaciones que remitirá a sus titulares por intermedio del Comité Ejecutivo del Plan de Racionalización y Austeridad (C.E.P.R.A.)

El Tribunal de Cuentas de la Nación no dará curso a la liquidación de los haberes correspondientes al mes de septiembre y subsiguientes, del personal superior hasta el cargo de Jefe de División o similar, inclusive, de cada jurisdicción ministerial hasta que dichos agentes en cumplimiento de las pertinentes instrucciones del señor Ministro o Secretario de Estado hayan posibilitado la concreción de las disposiciones del presente decreto. Dicho cumplimiento será comunicado por el Comité Ejecutivo del Plan de Racionalización y Austeridad (C.E.P.R.A.) al Tribunal de Cuentas.

Artículo 7º.- El personal afectado por el presente decreto será indemnizado en la forma siguiente.

a) Para los agentes comprendidos en el Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública Nacional, el 40 por ciento del sueldo mensual por cada año de servicio y hasta un máximo de veinte (20) años;

b) Para los agentes excluídos del Estatuto mencionado en el apartado a) y que estén comprendidos en otro régimen indemnizatorio se aplicará la escala que, con carácter general, corresponda por despido sin causa, según este último;

c) Para los agentes excluídos del citado Estatuto y que no se encuentren amparados por régimen indemnizatorio alguno, se aplicará lo previsto en el apartado a).

En los casos mencionados precedentemente, la indemnización será calculada de acuerdo con la antigüedad computable en la Administración Nacional, para el agente cuyos servicios se supriman en virtud de lo establecido en el presente decreto, no pudiendo ser inferior a tres (3) meses de

sueldo, conforme lo establece el artículo 13º de la Ley 14.794.

Para los agentes que tienen otorgado un beneficio jubilatorio o prestación similar, o que se encuentren en condiciones de obtenerlos, la indemnización será igual a tres (3) meses de sueldo.

Al solo efecto de este decreto entiéndese por sueldo la última remuneración (sueldo o jornal) nominal mensual básica del agente y demás asignaciones o bonificaciones regulares y permanentes, con exclusión de toda otra forma de retribucion compensación o reintegro.

Artículo 8º.- Las indemnizaciones serán abonadas en todos los casos en cuotas mensuales sucesivas equivalentes al setenta por ciento (70 %) del importe de la percepción nominal mensual que tenía el agente, determinada según lo establecido en la parte "in fine" del artículo 7º. El último pago estará dado por el saldo necesario para cubrir el total de la indemnización.

Artículo 9º.- Los organismos del Estado cargarán provisionalmente los gastos emergentes del pago de las indemnizaciones determinadas en los artículos que anteceden y que correspondan al presente ejercicio, al disponible de los créditos presupuestarios para gastos en personal, sin perjuicio de proponer al Poder Ejecutivo, con intervención de la Secretaría de Hacienda, los ajustes respectivos que reflejen la supresión de las vacantes producidas e incorporen o incrementen el crédito específico para el pago de las indemnizaciones de que se trata.

Artículo 10.- Este decreto integra a todos los efectos, el Plan de Racionalización y Austeridad de conformidad con lo determinado por el artículo 4º del Decreto número 10.974/58(+) y deroga todas las disposiciones vigentes que se le opongan.

(+) Ver Digesto Administrativo Nº 681.-

Artículo 11º.- El presente decreto será refrendado por todos los señores Ministros y Secretarios de Estado.
Artículo 12º.- Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.-

FRONDIZI - Alfredo R. Vítolo - Justo P. Villar - Alvaro Alsogaray - Alberto R. Constantini - Héctor V. Noblia - Luis R. Mac Kay - Elbio C. Anaya - Gastón C. Clement - Ramón A. Abrahín - Guillermo W. Klein - Ernesto Malaccorto - Eustaquio A. Méndez Delfino - Carlos A. Juni - Pascual Palazzo - Adolfo T. Cosentino - Manuel F. Castello.

DIRECCION Gral. de CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION Dpto. de Secretaría

Poder Ejecutivo Nacional
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nª 856.-

LIMITACIÓN DE SERVICIOS - CESANTIAS

INSTRUCCIONES PARA CALIFICAR AL PERSONAL

1ª) Los Jefes de repartición remitirán a la Dirección General de Contabilidad y Administración, antes del día 2 del mes de Septiembre de 1959, indefectiblemente, la siguiente información:

a) Resumen de calificaciones de todo el personal en la forma que se indica en la planilla anexa nº 1.

b) Foja de calificación del personal de acuerdo al modelo nº 2.

c) Nómina del personal que goce de una jubilación ordinaria íntegra o prestación similar (retiro militar, etc.).

d) Nómina del personal que reúna los extremos de edad y antigüedad al 31 de agosto de 1959, para acogerse a los beneficios de la jubilación ordinaria íntegra.

e) Nómina del personal aludido en los incisos c) y d) cuyos servicios se consideren imprescindibles, fundamentando expresamente en cada caso la excepción.

2ª) La calificación del personal se ajustará a las siguientes normas:

I) Se califican los siguientes conceptos, en números enteros y de acuerdo con la escala que en cada caso se indica:

EFICIENCIA

Sumamente eficiente	5 puntos
Muy eficiente	4 "
Aceptable	3 "
Regular	2 "
Escasa	1 "

RENDIMIENTO

Excelente	5 puntos
Muy bueno	4 "
Aceptable	3 "
Regular	2 "
Escaso	1 "

DISCIPLINA

Hasta	10 puntos

ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD

Hasta	5 puntos

II) Para calificar el concepto "Disciplina", se observará el procedimiento que se indica a continuación:

a) Por cada tres (3) "apercibimientos" o fracción se rebajará un (1) punto (ej.: 1er. y 2do. apercibimiento: un (1) punto; 3er. apercibimiento: un (1) punto; 5to. apercibimiento: dos (2) puntos; 7mo. apercibimiento: tres (3) puntos.

b) Por cada día de "suspensión" se disminuirá un (1) punto.

III) Para calificar "asistencia y puntualidad", se observará el procedimiento que a continuación se indica:

a) Se rebajará un (1) punto por cada falta de puntualidad injustificada al agente que registre más de tres y hasta un máximo de cinco faltas de esta naturaleza.

b) Las inasistencias con o sin goce de sueldo (Art.36 del decreto nº 12.720/53 (+) y las licencias sin goce de sueldo (Arts. 31º y 34º del citado decreto), darán lugar a la siguiente disminución de puntaje:

Hasta 4 días	sin disminución
de 5 a 30 días	se rebaja un (1) punto
de más de 1 mes a 3 meses	" " dos (2) puntos
" " " 3 meses a 6 meses	" " tres (3) "
" " " 6 " a 1 año	" " cuatro (4) "

Para estas deducciones el cómputo de las inasistencias o licencias se hará en forma global.

IV) Las inasistencias o faltas de puntualidad que hubieren dado origen a medidas disciplinarias, no se considerarán como tales, debiendo en cambio efectuarse la deducción correspondiente por la sanción aplicada.

V) El concepto "Disciplina" comprenderá las sanciones aplicadas al agente desde el 1º de septiembre de 1957 a la fecha de calificación y el de "Asistencia y Puntualidad" comprenderá las licencias, inasistencias o faltas de puntualidad injustificadas producidas en el período comprendido desde el 1º de setiembre de 1958 hasta la fecha de calificación.

VI) La calificación de los conceptos "Eficiencia" y "Rendimiento" se llevará a cabo en tres (3) instancias su

(+) Ver Digesto Administrativo Nª 15.-

periores previas, de carácter informativo y una última o definitiva, siguiendo el orden que a continuación se indica:

Primera instancia: Jefes de División o agentes con jerarquía similar.

Segunda instancia: Jefes de Departamento o agentes con jerarquía similar.

Tercera instancia: Jefe de la repartición.

Ultima instancia o definitiva: Secretario de Estado de Hacienda o autoridad facultada para nombrar y remover.

Cuando la organización jerárquica impida el cumplimiento de las etapas de calificación señaladas, se estará al máximo de instancias que se pudiere establecer dentro del tal límite y se llevarán a cabo por los Jefes jurisdiccionales que sustituyan aquellos niveles.

VII) El calificador estará obligado a excusarse cuando lo una al calificado un vínculo de parentesco o cuando alguna otra causa lo inhiba eticamente para calificar. En tal caso lo reemplazará su substituto legal. Asimismo, ningún agente podrá calificar a personal que no mantenga con el relación de dependencia.

VIII) El personal que durante los períodos íntegros indicados en el apartado V) hubiera permanecido alejado

del servicio en uso de liecencia por enfermedad de largo tratamiento, servicio militar, razones gremiales, o para el desempeño de cargos políticos, como así también para realizar estudios o investigaciones o cumplir actividades científicas, técnicas, artísticas, culturales o deportivas, siempre que dichos beneficios se hubieran acordado con auspicio oficial, se le considerará a los fines indicados en el recordado apartado V) al último lapso de dos (2) o (1) año, respectivamente, según el caso, durante el cual se hubiere desempeñado.

IX) Las calificaciones se realizarán en los formularios (modelo 2) que se adjuntan y que corresponden a:

Personal superior y jerarquizado

Personal profesional universitario, técnico, especializado, administrativo y docente

Personal de Maestranza y obrero

Personal de servicios auxiliares

X) Los calificadores procederán a fijar el puntaje en los conceptos "eficiencia" y "rendimiento", en tanto que las correspondientes Oficina de Personal lo harán con "disciplina" y "asistencia y puntualidad".

3º) El personal adscripto, en el supuesto que la prestación en ese carácter sea superior a seis meses, será calificado por los conceptos de "disciplina" y "asistencia y puntualidad" por la repartición de la cual es titular el agente, solicitando a su vez a los organismos donde aquel personal preste servicios la calificación por "eficiencia" y "rendimiento".

4º) La notificación de la calificación asignada recién

se operará una vez cumplida la última instancia o definitiva y se hará únicamente con aquellos agentes que, como consecuencia de dicha calificación, resulten incluídos en la nómina de los que serán separados del servicio.-

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Poder Ejecutivo Nacional
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº 857.-

PASAJES OFICIALES

Buenos Aires, julio 31 de 1959.-

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que los Decretos números 98.902/37 (+) y su modificatorio 35.696/44 ("), reconocieron derecho a pasaje oficial de ida y regreso a cualquier punto de la República cada dos años, al personal destacado en los territorios nacionales;

Que con motivo de la sanción de la Ley Nº 14.408, de provincialización de los territorios nacionales, fué dictado el Decreto nº 17.158 ('), mediante el cual, teniendo en cuenta que la alusión territorios nacionales, contenida en el Decreto nº 98.902/37, debía ser interpretada como punto de referencia geográfico para fijar las zonas amparadas por el beneficio, sin que fuera óbice para ello la estructura política de tales jurisdicciones, se volvieron a precisar con referencias geográficas permanentes, los límites territoriales de los puntos del país comprendidos en dicha franquicia y al mismo tiempo, se reajustaron distintas normas relacionadas con su concesión;

Que si bien dicho pronunciamiento dejó perfectamente aclarado el régimen de aplicación futuro, no previó el caso de las situaciones presentadas desde la sanción de la comentada Ley Nº 14.408, hasta el momento de vigencia de las mismas normas, ya que en muchas jurisdicciones, ateniéndose estrictamente a la letra del Decreto nº 98.902/37 denegaron las solicitudes de agentes destinados en los territorios provincializados;

Que en mérito a ello, corresponde el dictado de la medida

(+) Ver Digesto Administrativo nº 103.-
(") Ver Digesto Administrativo nº 105.-
(') Ver Digesto Administrativo nº 421.-

que permita ajustar a su verdadera finalidad la disposición comentada;

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

Artículo 1º.- Déjase aclarado que las disposiciones de los Decretos números 98.902/37 y 35.696/44, vigente hasta el dictado del Decreto nº 17.158/57, corresponden ser aplicadas a los agentes destinados a los ex Territorios Nacionales, aún después de producida su provincialización.

Artículo 2º.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda.

Artículo 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y pase a la Secretaria de Estado de Hacienda a sus efectos.

FRONDIZI - Alvaro Alsogaray-
Guillermo Walter Klein.

Decreto nº 9.131.-

Poder Ejecutivo Nacional
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín nº 858.-

HORARIO ADMINISTRATIVO - PERSONAL FEMENINO

Buenos Aires, 31 de julio de 1959.-

Visto que como consecuencia de lo dispuesto en el decreto nº 3.754/59 (+) la salida del personal femenino que se desempeña en las dependencias que funcionan en el edificio de esta Secretaría, se produce juntamente con el resto de los agentes al término de las tareas diarias; y

CONSIDERANDO;

Que a la fecha de ese pronunciamiento el aludido personal daba término a sus tareas antes de la hora ordinaria del cese de las mismas, medida dispuesta en principio por el Acuerdo General de Ministros nº 8.453 del 13 de setiembre de 1943(º) y luego confirmada en esta jurisdicción por resolución del ex-Ministerio de Hacienda nº 490 del 18 de mayo de 1949;

Que tal franquicia subsistió desde la fecha del pronunciamiento indicado en primer término, pese a los sucesivos cambios de horario aplicados al personal de la Administración Pública, circunstancia por la cual procede mantenerla, ya que las razones que motivaron su implantación subsisten en la actualidad;

Por ello y teniendo en cuenta la opinión emitida por el Comité Ejecutivo del Plan de Racionalización y Austeridad,

EL SUBSECRETARIO DE HACIENDA
R E S U E L V E ;

1º.- A partir de la fecha, el horario de trabajo del personal

(+) Ver Digesto Administrativo Nº 722.-
(º) Ver Digesto Administrativo Nº 98.-

femenino que presta servicios en las dependencias de esta jurisdicción ubicadas en el edificio que ocupa esta Secretaría de Estado, finalizará diez (10) minutos antes de la hora ordinaria del cese de actividades fijada para el resto del personal.

2ª.- Comuníquese a quienes corresponda, tómese nota y archívese.-

Fdo. RAFAEL R. AYALA

RESOLUCION Nº 4.032.-

Poder Ejecutivo Nacional
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº 859.-

HORARIO ADMINISTRATIVO

Buenos Aires, 5 de agosto de 1959.-

SEÑOR SECRETARIO:

Tengo el agrado de dirigirme al señor Secretario de Estado, con motivo de la Nota nº 1426 del 29 de mayo, en la cual esa Secretaría solicita se incluya en el régimen de licencias en vigor, un articulado que autorice al Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública o a las respectivos Servicios Médicos de los organismos del Estado a otorgar franquicias de reducción horaria por razones de salud.

Sobre el particular el C.E.P.R.A. ha resuelto dejar aclarado que las franquicias resultantes de la aplicación de normas legales, como la ley 12.568 que menciona en la citada nota, conservan su vigencia.

En cuanto al otorgamiento de horarios especiales al margen de las disposiciones legales, estaría en contradicción con lo establecido en el Art. 3º del decreto nº 3.754/59 (+), pero nada impide que los casos particulares se resuelvan mediante decreto del Poder Ejecutivo y con asesoramiento de los organismos médicos pertinentes.

En este sentido el C.E.P.R.A. ha resuelto contestar a esa Secretaría de Estado.

Saludo al señor Secretario con toda consideración.-

Fdo. JUAN OVIDIO ZAVALA
Secretario Técnico de la
Presidencia de la Nación

(+) Ver D.A. Nº 722.-

Poder Ejecutivo Nacional
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº 860.-

HORARIO ADMINISTRATIVO - PERSONAL FEMENINO

Buenos Aires, 6 de agosto de 1959.-

Visto que es necesario aclarar el alcance de lo dispuesto por los Decretos números 3.754/59 (+) y 5.008/59 (°), que esblecieron el horario único en la Administración Nacional y un régimen general de excepciones al mismo, y

CONSIDERANDO:

Que la franquicia acordada por decreto del Poder Ejecutivo al personal de sexo femenino para dar por terminadas sus tareas 15 minutos antes de finalizar la jornada común, ha quedado sin efecto por oponerse a los decretos posteriores que íntegran el Plan de Racionalización y Austeridad;

Que la entrada y salida simultánea de la totalidad del personal, en algunos casos origina inconvenientes por las deficiencias de los locales en que funcionan las oficinas, u otras causas que no es del caso enumerar;

Que dichos inconvenientes podrían llegar a afectar en alguna medida el orden y la disciplina, con el consiguiente perjuicio para los servicios;

Que tales efectos se oponen abiertamente a los fundamentos básicos tenidos en cuenta para la implantación del horario único;

Que es obligaciones de los funcionarios que se hallan al frente de las distintas dependencias del Estado, adoptar to-

(+) Ver Digesto Administrativo Nº 722.-
(°) Ver Digesto Administrativo Nº 741.-

das las medidas necesarias para evitar tales anomalías;

Que las atribuciones para dar solución a estos problemas no pueden negarse sin afectar la buena marcha de la Administración;

Por ello,

EL COMITE EJECUTIVO DEL PLAN DE RACIONALIZACION Y AUSTERIDAD

R E S U E L V E :

ARTICULO 1º.- Facúltase a los jefes de los distintos organismos del Estado para disponer pequeñas adaptaciones al horario único vigente, cuando evidentes necesidades o ventajas del servicio así lo aconsejen, sin reducir la jornada oficial de trabajo.

ARTICULO 2º.- Tales adaptaciones deberán ser conformadas por el Ministerio o Secretaría de Estado que corresponda y comunicadas al Comité Ejecutivo del Plan de Racionalización y Austeridad.

ARTICULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.-

Fdo. JUAN OVIDIO ZAVALA
Secretario Técnico de la
Presidencia de la Nación

RESOLUCION Nº 8.-

Poder Ejecutivo Nacional
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº 861.-

ESCALAFON DEL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL (Capítulo IV) - PROFESIONALES

Expediente nº 37.123 - 1959.-
Providencia nº 337.-

//nos Aires, 31 de julio de 1959.-

Vuelva a la Dirección General de Contabilidad y Administración llevando a su conocimiento que:

a) la resolución nº 7.023/59 (+), fué dictada para aclarar el procedimiento a seguir para el encasillamiento de los profesionales. Sus efectos se limitan, en consecuencia, a aquel momento y no podría basarse en ella un derecho permanente para modificar el agrupamiento de estos agentes, toda vez que el mismo, una vez producido el escalafonamiento, debe regirse por las disposiciones del capítulo IV del Escalafón aprobado por el decreto número 9.530/58.

b) en el presente caso se trata del cambio de grupo de un agente (Grupo I a Grupo IV de la clase C) debiéndose cumplir los extremos previstos en el Capítulo IV sin que la conformidad del interesado y del servicio y la circunstancia de que la retribución sea menor permitan una excepción a dichas normas.-

DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO CIVIL DE LA NACION.-

Fdo. JOSE LUIS FRANGI
Director General

(+) Ver Digesto Administrativo Nº 678.-

DIRECCION Gral. de CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION
Secretaría de Hacienda

Poder Ejecutivo Nacional
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº 862.-

LEY DE CONTABILIDAD (Art. 138)

Buenos Aires, 29 de julio de 1959.-

Visto la Ley nº 14.057 de creación de la Dirección General de Servicios Sociales para el Personal de Seguros, Reaseguros, Capitalización y Ahorro, y

CONSIDERANDO:

Que no obstante el carácter de derecho privado de la Entidad, según surge de la citada disposición legal el Estado tiene responsabilidad en su dirección y administración, ya que es el Poder Ejecutivo quién designa al Director General, Subdirector General y Síndico a propuesta de la Secretaría de Estado de Finanzas, así como a los restantes consejeros representantes del personal y las empresas a propuesta de las respectivas entidades gremiales;

Que, asimismo, la intervención del Estado se extiende a otros diversos aspectos previstos en la misma ley, entre otros la consideración del presupuesto anual de sueldos, gastos e inversiones y del balance general, cuenta de ganancias y pérdidas y memoria;

Que el artículo 138 de la Ley de Contabilidad, aprobada por Decreto-Ley nº 23.354/56 establece que las entidades de derecho privado en cuya dirección o administración tenga responsabilidad el Estado quedan comprendidos en la denominación de haciendas para-estatales y sometidas a la jurisdicción del Tribunal de Cuentas de la Nación;

Que la reglamentación del artículo citado precedentemen

te, aprobada por Decreto nº 13.100/57 (+), establece que, en cada caso, el Poder Ejecutivo debe declarar como haciendas para-estatales las entidades que corresponda, en función de lo previsto por la Ley de Contabilidad;

Por ello, y atento lo propuesto por la Secretaría de Estado de Finanzas,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- Declárase comprendida dentro de las disposiciones del artículo 138 de la Ley de Contabilidad (Decreto-Ley nº 23.354/56) y su reglamentación a la Dirección General de Servicios Sociales para el Personal de Seguros, Reaseguros, Capitalización y Ahorro.

ARTICULO 2º.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado por los señores Secretarios de Estado de Finanzas y Hacienda.

ARTICULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y pase a la Secretaría de Estado de Finanzas y al Tribunal de Cuentas de la Nación, a sus efectos.-

FRONDIZI - Alvaro C. Alsogaray - Eustaquio A. Méndez Delfino - Guillermo Walter Klein.-

DECRETO Nº 8.990.-

(+) Ver Digesto Administrativo Nº 487.-

Poder Ejecutivo Nacional
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº 863.-

RACIONALIZACION - TRAMITES

Buenos Aires, 12 de agosto de 1959.-

Visto la necesidad de asegurar el mejor cumplimiento de los propósitos de racionalización administrativa enunciados oportunamente por el Poder Ejecutivo, con la adopción de medidas que posibiliten una efectiva agilitación del dilingenciamiento de las actuaciones administrativas que tramiten en jurisdicción de esta Secretaría de Estado, y

CONSIDERANDO:

Que si bien tales propósitos ya han tenido principio de realización con las distintas medidas que se dictaron en procura de aquel objetivo, las mismas deben no obstante complementarse con aquellas otras que inspiradas en la misma finalidad, puedan constituirse en instrumentos de ponderable efecto para la simplificación del trámite y la activación en el giro y recepción de los expedientes;

Que en tal sentido, cabe considerar la forma de evitar dilaciones innecesarias en la tramitación de actuaciones que en razón de su naturaleza, no requieren la intervención directa de esta Secretaría para la firma de providencias de mero trámite;

Que la situación expuesta precedentemente comprende, no sólo a los expedientes y actuaciones de las características señaladas que tramiten entre reparticiones de esta Secretaría de Estado, sino también a aquellas que deban girarse a organismo que funcionen fuera de su jurisdicción;

Que de tal modo ha de obtenerse un mejoramiento de los servicios, con el consiguiente beneficio que ello ha de apor

tar en el orden de los intereses del fisco y, principalmente, en el del particular, al eliminarse viejas costumbres burocráticas que impiden, con su presencia, el logro de una auténtica y eficaz racionalización del trámite administrativo;

Por ello,

EL SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA

R E S U E L V E :

1ª.- Las reparticiones y organismos de esta Secretaría de Estado adoptarán las medidas necesarias con el objeto de que, en lo sucesivo, la tramitación de expedientes y actuaciones entre las mismas y/u otras fuera de la jurisdicción de esta Secretaría, se efectúe directamente con intervención del titular de cada organismo.

2ª.- La medida dispuesta precedentemente, alcanza exclusivamente a las actuaciones de mero trámite, debiéndose seguir en las que sea necesario dejar sentada la opinión de este Departamento, el procedimiento observado hasta el presente. Este tratamiento jerárquico se aplicará también a los expedientes y actuaciones que, remitidos a esta Secretaría por las autoridades superiores de otros Departamentos de Estado, deban ser devueltos a las mismas.

3ª.- Comuníquese, publíquese en el Digesto Administrativo y archívese.-

Fdo. GUILLERMO WALTER KLEIN

RESOLUCION Nª 7.972.-

Boletín Nº 864.-

ESCALAFON PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL (Punto 52º) - ANTIGÜEDAD

Buenos Aires, 12 de agosto de 1959.-

Visto el punto 52º del Escalafón para el Personal Civil de la Administración Pública Nacional aprobado por decreto nº 9.530/58, y

CONSIDERANDO:

Que en el mismo no existen normas referentes al cómputo de los servicios prestados en forma honoraria, a efectos de la asignación por antigüedad;

Que el decreto nº 21.120/56 (+) declaró computables los servicios de ese carácter, a los fines de los distintos regímenes de bonificación por antigüedad vigentes a esa fecha, cuando hubieran sido prestados al Estado, y fueran reconocidos por la Caja Nacional de Previsión para el Personal del Estado de acuerdo con las prescripciones de la Ley número 14.069;

Que el artículo 9º de dicha Ley declaró computables para todos los efectos de la Ley nº 4.349 y sus complementarias los servicios de carácter honorarios prestados a la Nación o en organismos directamente vinculados a las ramas de los poderes públicos nacionales;

Que ante el silencio del punto 52º del Escalafón y del decreto nº 4.632/59 (º), que aprobó las normas complementa-

(+) Ver Digesto Administrativo Nº 92.-
(º) Ver Digesto Administrativo Nº 709.-

rias del mismo, acerca de los servicios "ad-honorem" corresponde considerar subsistentes las disposiciones del decreto nº 21.120/56;

Por ello, atento a lo aconsejado por la Dirección General del Servicio Civil de la Nación, y de conformidad con las facultades emergentes del decreto-ley nº 797/58 (*),

EL SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA
R E S U E L V E :

Artículo 1º.- A los fines del reconocimiento de antigüedad, establecidos en el punto 52º, apartado c), del Escalafón aprobado por decreto nº 9.530/58, serán computables los servicios prestados al Estado en carácter "ad-honorem", en las condiciones fijadas en el decreto nº 21.120, del 21/11/56.
Artículo 2º.- Los certificados que acreditan tales servicios deberán ser expedidos por organismos competentes, constando en los mismos las fechas de alta y baja, horarios cumplidos, número y fecha del decreto, resolución o disposición que autorizó su prestación, y el reconocimiento de la Caja Nacional de Previsión para el Personal del Estado.
Artículo 3º.- Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.-

Fdo. GUILLERMO WALTER KLEIN

RESOLUCION Nº 7.973.-

(*) Ver Digesto Administrativo Nº 419.-

Poder Ejecutivo Nacional
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº 865.-

ESCALAFON PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL (Punto 26º) - SUBSIDIO FAMILIAR

Buenos Aires, 12 de agosto de 1959.-

Visto el punto 26º del Escalafón para el Personal Civil de la Administración Pública Nacional, y

CONSIDERANDO:

Que en el punto VI, apartado b), de las normas complementarias del mismo (decreto nº 4.631/59 (+) se establece que cuando uno de los cónyuges se desempeñara fuera de la Administración Nacional, sólo se pagará el subsidio por el respectivo concepto al agente titular del cargo público cuando probare que su cónyuge ha renunciado o no tiene derecho a percibir en su empleo el beneficio por la misma causa;

Que de la norma citada no surgen alternativas para su aplicación que permitan establecer un régimen de excepción en aquellos casos en que el cónyuge ocupado fuera de la Administración Nacional esté percibiendo, o haya percibido con posterioridad al 1/11/58, un beneficio similar pero de un monto inferior al establecido en el punto 26º del Escalafón para los distintos conceptos;

Que en tales condiciones no resultaría procedente liquidar a los interesados suma alguna en concepto de diferencia de montos, por el período en que el cónyuge hubiera percibido en su empleo u ocupación -ajeno a la Administración Nacional- un beneficio inferior;

(+) Ver Digesto Administrativo Nº 738.-

Por todo ello, atento a lo informado por la Dirección General del Servicio Civil de la Nación, y de conformidad con las facultades conferidas en el artículo 13° del decreto número 9.530/58, y artículo 5° del decreto n° 4.631/59,

EL SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA

R E S U E L V E :

Artículo 1ª.- Aclárase que, atento a lo prescripto en el punto VI, apartado b), de las normas aprobadas por decreto número 4.631/59, no procede liquidar suma alguna en concepto de diferencia por subsidio familiar, al agente de la Administración Pública Nacional cuyo cónyuge perciba en su ocupación o empleo un monto menor al fijado en el punto 26° del Escalafón (decreto n° 9.530/58), para la misma causa o beneficio.
Artículo 2ª.- Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.-

Fdo. GUILLERMO WALTER KLEIN

RESOLUCION Nª 7.974.-

Poder Ejecutivo Nacional
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº 866.-

LEY DE CONTABILIDAD (Art. 96º) - RESPONSABLES - RENDICIONES DE CUENTAS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Buenos Aires, 13 de agosto de 1959.-

Visto la necesidad de determinar la condición de responsables de los distintos servicios de la administración nacional, frente a este Tribunal de Cuentas, de acuerdo con las disposiciones de la ley de contabilidad y su reglamentación; y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 84 inciso o) de la ley de contabilidad faculta a este cuerpo para dictar normas interpretativas de sus disposiciones, siendo necesario resolver el problema enunciado para ubicar la situación de los distintos agentes u organismos encargados de la administración o custodia de los fondos, valores o bienes de pertenencia del Estado;

Que las obligaciones y responsabilidades de los agentes u organismos, a que se hace referencia en el considerando anterior, nacen de un conjunto de disposiciones que el referido cuerpo legal ha establecido para los mismos en sus distintos capítulos, vinculados con los servicios que el mismo organiza, lo cual permite afirmar que todas esas normas son de igual exigibilidad, cualquiera sea el sector de la administración en que se apliquen;

Que si bien el art. 96º de la mencionada ley establece como responsables ante este Tribunal a las autoridades de los organismos descentralizados o centralizados, en su caso, nada se opone, a los efectos de la presentación, reque-

rimientos, reparos y aprobación de las cuentas que esa calidad la invistan exclusivamente los jefes de los respectivos servicios administrativos que, aparte de estar al frente de la gestión directa en el gobierno administrativo de las entidades, no importa en modo alguno limitar las responsabilidades que corresponda discernir conforme con la ley a las autoridades superiores de esos organismos, ni supone tampoco enervar las facultades que esas autoridades ejerzan en función de sus respectivas leyes orgánicas;

Que en ese orden de ideas es necesario también traer a consideración del problema las disposiciones de tipo general que con vistas a la uniformidad en los procesos administrativos contiene la ley vigente y, entre los cuales, precisamente, se halla el principio declarado en su artículo 76, respecto a la obligación de organizar servicios administrativos en las distintas jurisdicciones de los poderes del Estado;

Que en las entidades a que se ha hecho mención funcionan direcciones de administración o dependencias que hacen sus veces, con organización análoga o similar a las que existen en los ministerios y secretarias de Estado;

Que para proponer a una organización metódica es menester que los asuntos específicamente administrativos, estén sometidos en cuanto a los procedimientos de fiscalización, a sistemas uniformes, dentro de la ley y reglamentaciones que le son comunes, con las ventajas de todo orden que ello comporta;

Por lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA NACION
R E S U E L V E :

ARTICULO 1º.- A los efectos de la presentación, requerimientos, reparos y aprobación de las cuentas, serán considerados

responsables de las entidades descentralizadas y centralizadas en su caso, a que se refiere el artículo 96 de la ley de contabilidad, los jefes de los respectivos servicios administrativos, sin perjuicio de la responsabilidad que, de acuerdo con la misma ley puede corresponder a las autoridades superiores de los citados organismos.

ARTICULO 2º.- Por la Dirección General de Fiscalías se dispondrán las medidas tendientes a la determinación de los respectivos responsables.

ARTICULO 3º.- La presente resolución forma parte integrante de la resolución 947/57 (+) que aprueba el reglamento de rendición de cuenta.

ARTICULO 4º.- Dése a Digesto Administrativo y comuníquese a los distintos responsables. Cumplido, archívese.-

JOSE M. FERNANDEZ FARIÑA - Wifredo Dedeu - Rodolfo J. Tarelli - Antonio M. Pérez Arango - Eusebio E. Villar (voc. acc.) - César Aguirre Legarreta -Secretario-

RESOLUCION Nº.- 1.466.-

(+) Ver Digesto Administrativo Nº 285.-

Poder Ejecutivo Nacional
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nª 867.-

INCOMPATIBILIDADES

Buenos Aires, 10 de agosto de 1959.-

Visto las situaciones creadas en el cuerpo de profesores que se desempeñan en los establecimientos de enseñanza dependientes del Ministerio de Educación y Justicia, y de sus respectivos institutos privados incorporados por la aplicación de preceptos legales en materia de acumulación de horas de cátedra, conforme criterios interpretativos dispares, sobre las cuales no se solicitó en tiempo oportuno, el previo pronunciamiento del Poder Ejecutivo;

Por ello y de acuerdo a lo aconsejado por el señor Ministro de Educación y Justicia,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1ª.- Determínase:

a) Que con relación a la enseñanza media en establecimientos dependientes directamente del Ministerio de Educación y Justicia sigue en vigor, con el carácter de régimen orgánico en materia de acumulación de horas de cátedra, el Acuerdo General de Ministros del 23° de marzo de 1932 y disposiciones concordantes posteriores.

b) Que en la parte pertinente, la Ley 14.386, debe interpretarse con el alcance de una modificación parcial, en beneficio exclusivo del profesor que se desempeñe

conforme al régimen de horas de cátedra en los establecimientos dependientes directamente del Ministerio de Educación y Justicia y en sus respectivos institutos incorporados, del artículo 7°de dicho Acuerdo General de Ministros de 1932, en cuanto al límite máximo de horas de cátedra que puede acumularse.

c) Que la aplicación de dicha Ley nº 14.386 debe ajustarse a las siguientes normas:

1.- La dedicación exclusiva debe entenderse como prohibición para los profesores que acumulan más de 24 horas y hasta 30 horas de cátedra, de ejercer cualquier otro cargo oficial o privado y la actividad regular inherente a su profesión u oficio.

2.- A partir del 11 de septiembre de 1956, por imperio de las disposiciones de los artículos 83° y 107° del decreto-ley nº 16.767 del 11 de septiembre de 1956 y 94° y 12° de la Ley nº 14.473, no podrá acumularse más de 24 horas en establecimientos correspondientes a las ramas de la enseñanza secundaria o técnica, pudiéndose en su caso acumular el excedente de hasta 6 horas en otros establecimientos de enseñanza dependientes directamente del Ministerio de Educación y Justicia y en los institutos incorporados a la enseñanza oficial.

d) Que la aplicación del Decreto nº 1.956 del 11 de febrero de 1954 alcanza hasta el 1º de mayo de 1958, a partir de cuya fecha rigen las disposiciones del Decreto nº 10.898/58 (+).

e) Que el artículo 13° de la Ley 13.343 carece de eficacia práctica puesto que no modifica el régimen de acu

(+) Ver Digesto Administrativo Nº 720.-

mulación de horas de cátedras y cargos, contenido en el Acuerdo General de Ministros de 1932 y disposiciones concordantes dictadas con posterioridad.

ARTICULO 2º.- El Ministerio de Educación y Justicia, procederá a ordenar conforme las disposiciones precedentes, la situación de revista de los profesores que se desempeñan en los establecimientos de enseñanza de su dependencia y sus respectivos institutos privados incorporados, dentro de los 45 días hábiles a contar de la fecha del presente decreto, autorizándole a dictar las disposiciones complementarias que sean necesarias para el adecuado cumplimiento de lo dispuesto.

ARTICULO 3º.- Comuníquese, publíquese, anótese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.-

FRONDIZI - Luis R. Mac Kay

DECRETO Nº 9.606.-

Poder Ejecutivo Nacional
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº 868.-

CONTRATACIONES

Buenos Aires, 24 de agosto de 1959.-

Visto la observación legal formulada por el Tribunal de Cuentas de la Nación al Decreto nº 9.026 del 29 de julio último (+) y,

CONSIDERANDO:

Que subsisten las causas que motivaron el referido pronunciamiento;

Que, como manifiesta el Tribunal de Cuentas de la Nación lo proyectado contempla una fórmula práctica, justa y equitativa para salvar la difícil situación por la cual atraviezan los Proveedores del Estado;

Por tanto, de conformidad con el artículo 87 de la Ley de Contabilidad, aprobada por Decreto-Ley nº 23.354/56,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- Insístese en el cumplimiento del Decreto número 9.026 del 29 de julio de 1959.

ARTICULO 2º.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda.

(+) Ver Digesto Administrativo Nº 844.-

ARTICULO 3º.- Tómese nota, comuníquese al Tribunal de Cuentas de la Nación, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y vuelva a la Dirección General de Suministros del Estado a sus efectos.-

FRONDIZI - Alvaro C. Alsogaray - Guillermo Walter Klein

DECRETO Nº 10.180.-

Boletín Nº 869.-

LOTERIA DE BENEFICENCIA NACIONAL Y CASINOS (Casinos) - COMPENSACION POR DESARRAIGO

Buenos Aires, 24 de agosto de 1959.-

Visto el expediente nº 390.986/59, por el cual la Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos gestiona la modificación del artículo 1º del decreto nº 870/59 (+), modificado por el Decreto nº 7.455/59 (°), que determina que el personal jornalizado destinado a prestar servicios en los Casinos dependientes de la misma, gozará de una asignación por desarraigo, y

CONSIDERANDO:

Que por Decreto nº 7.416/59 se determina que la explotación del Casino de Termas de Reyes de la Provincia de Jujuy estará a cargo de la referida Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos;

Que en tal circunstancia y teniendo en cuenta que el porcentaje que corresponde asignar en la emergencia es el del 50% en concordancia con lo determinado para los Casinos de Bariloche y Termas de Río Hondo;

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- Modifícase el texto del artículo 1º del Decreto nº 870/59 modificado por el Decreto nº 7.455/59, en la

(+) Ver Digesto Administrativo Nº 808.-
(°) Ver Digesto Administrativo Nº 809.-

siguiente forma:

"Artículo 1º.- A partir del 1º de febrero de 1959, el personal Jornalizado de la Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos que sea destinado a prestar servicios en los Casinos dependientes de la misma, gozará de una asignación por desarraigo, compensatoria de los gastos que le origine su estada en la localidad donde funcione la respectiva Sala de entretenimientos de acuerdo a los percentajes que se indican a continuación:

Casino Central de Mar del Plata, Anexo I y II, Casino de Miramar y Casino de Necochea: Cuarenta por ciento (40 %).

Casinos de Bariloche, Termas de Río Hondo y Termas de Reyes de la Provincia de Jujuy: Cincuenta por ciento (50 %)".

ARTICULO 2º.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda.
ARTICULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas, y pase a la Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos a sus efectos.-

FRONDIZI - Alvaro C. Alsogaray -
Guillermo Walter Klein.-

DECRETO Nº 10.183.-

Poder Ejecutivo Nacional
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº 870.-

LOTERIA DE BENEFICENCIA NACIONAL Y CASINOS (Hipódromos)

Buenos Aires, 24 de agosto de 1959.-

Visto las presentes actuaciones, Expediente nº 52.753/59, por las cuales la Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos propone un régimen para el pago de suplementos por mayor número de carreras y de diferencias por desempeño de funciones superiores al personal jornalizado por reunión de los hipódromos de su dependencia, y

CONSIDERANDO:

Que el régimen proyectado tiende a regularizar la situación creada como consecuencia de las disposiciones contenidas por el punto 27º del Escalafón para el Personal Civil de la Administración Pública Nacional, aprobado por el Decreto nº 9.530/58, en cuanto dispone la congelación de adicionales de la naturaleza indicada o de características similares, hasta tanto se establezca el nuevo ordenamiento general en la materia;

Que la situación imperante en la actualidad, con las modificaciones que el tiempo y las necesidades de los servicios han ido introduciendo, tiene su origen en convenciones de trabajo existentes en la época en que la Asociación Civil Jockey Club tenía a su cargo la explotación de las actividades hípicas;

Que si bien aquellas convenciones con la nacionalización de los hipódromos han perdido vigencia, por la vía presupuestaria se adoptaron oportunamente las disposiciones pertinentes, que permitieron seguir abonando hasta la fecha los bene

ficios aludidos;

Que en virtud de haberse producido el escalafonamiento funcional de los agentes, la repartición estima llegado el momento en que resulta necesario ajustar aquellos beneficios a la circunstancia apuntada, y establecer asimismo, el ordenamiento general de que habla el recordado punto 27º del Escalafón;

Que en tal sentido la Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos considera de fundamental importancia, a fin de evitar graves inconvenientes en la explotación, la adopción de un régimen que, sin apartarse de los lineamientos generales determinados por las disposiciones que rigen la materia, mantengan la necesaria elasticidad que requiere una dinámica atención de los servicios correspondientes;

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- Fíjase el presente régimen para el pago de suplementos por mayor números de carreras y diferencias por desempeño de funciones superiores al personal jornalizado por reunión de los hipódromos dependientes de la Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos:

I - Suplementos por mayor número de carreras

1º.- El pago por este concepto corresponderá al personal que presta tareas efectivas durante el desarrollo total de la reunión excluyéndose a aquellos cuyas funciones no requieren su permanencia hasta la finalización de las reuniones.

2º.- El Jornal Básico, suplemento por antigüedad y diferencia de escalafón, será liquidado al personal por reunión, sobre la base de ocho (8) carreras a programar-

se y desarrollarse de acuerdo a los intereses y necesidades de la Explotación.

3º.- Cuando los programas consten de más de ocho (8) carreras al jornal establecido precedentemente se le adicionarán:

c) un octavo del mismo por novena carrera.

b) tres octavos del mismo por décima o más carrera.

Déjase establecido que dichos octavos adicionales no son acumulables.

4º.- En caso de mecanizarse el sistema de apuestas, en forma que modifique sustancialmente al actual sistema, deberá amoldarse la presente reglamentación de acuerdo a la nueva modalidad.

II - Diferencias por desempeño de cargos superiores

5º.- Cuando se produzcan vacantes en cargos superiores, por ausencia o por necesidad de ampliar los servicios, éstas serán cubiertas por agentes de categorías inferiores, los que tendrán derecho a percibir la diferencia del jornal básico únicamente de la función de que son titulares y las del cargo a cubrir y de acuerdo a lo establecido en el escalafonamiento funcional aprobado por Decreto nº 4.867/59.

6º.- Los cargos vacantes por ausencia que podrán ser cubiertos liquidándose las diferencias correspondientes son las siguientes:

Comisariato

Pesador, Revisor Identidad de Caballos, Taquígrafo, Encargado Conmutador, Encargado de Boxes, Ayudante control de llegada, Pizarrero, Telefonista, Herrador.

División Apuestas

Subjefe mesa centralizadora
Subjefe de Pabellón
Calculista
Encargado pago de Boletos Agencia Mar del Plata
Jefe Control de Vales
Cajero General Pagadores
Jefe de Cajeros
Encargado Planillas de Personal
" Mesa de Ajuste
" Sector Ventas
" Estadísticas
" Transmisiones Hípicas
" Inspección Externa
" Control de Boletos
" Mesa Distribuidora
" Recuento de Boletos
Pagador de Vales
Teletipista
Inspector Vigilancia Agencia Mar del Plata
Pagador de Boletos
Cajeros
Auxiliar Inspección Externa
Auxiliar Cajero, Control Triple, Mesa Distribuidora, Estadística Libro Ventas, Mesa de Ajustes Servicios Varios, Recuento.
Locutor
Pizarrero Encargado
Totalizador
Vendedor de Vales
Subencargado Inspección Externa
Pizarrero subencargado
Vendedor de Boletos

Cambista
Pizarrero
Recolector de Dinero
Ayudante Locutor
Telefonista
Distribuidores de Boletos

Administración de boleterías

Encargado Venta de Entradas, Cajero, Inspectores
Vendedores de Entradas

Administración General de Hipódromos

Jefe de Taller
Jefe de Teléfonos
Encargado Starting Gate
Conductor
Encargado Starting Gate
Tractorista
Personal de Oficios

En ningún caso, los segundos jefes de servicios o denominaciones similares, tendrán derecho al pago de la diferencia por desempeño en el campo superior. Tanto en la liquidación de la diferencia por desempeño de cargo superior, como en la del suplemento por mayor número de carreras, deberá tomarse siempre el importe que corresponde a la categoría inicial de cada grupo escalafonario.

III - Retribución extraordinaria con motivo de la Disputa de los grandes premios "Nacional" y "Carlos Pellegrini"

7ª.- El personal que desempeñe tareas efectivas durante la disputa de los citados grandes premios, tendrá derecho a percibir una retribución extraordinaria equivalente a un jornal básico de la función desempeñada. No corresponderá la liquidación de tal retribución al personal

que disfrute del jornal en virtud de licencias reglamentarias.

ARTICULO 2º.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario de Estado en el Departamento de Economía y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda.

ARTICULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y pase a la Secretaría de Estado de Hacienda a sus efectos.-

FRONDIZI - Alvaro C. Alsogaray - Guillermo Walter Klein.-

DECRETO Nº 10.185.-

Poder Ejecutivo Nacional
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº 871.-

ESTATUTO PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL (Artículos 34º, 36º y 39º) - SANCIONES - SUSPENSIONES

Buenos Aires, 3 de setiembre de 1959.-

Visto el expediente nº 38.413/59 S.H. en el que la Dirección General Impositiva solicita aclaraciones con respecto al descuento efectivo de haberes de las sanciones disciplinarias de suspensión, y

CONSIDERANDO:

Que cuando dichas sanciones son producto de reiteradas ausencias, incumplimiento injustificado en el horario, o cualquier otra falta de menor importancia que implique suspensión de hasta diez (10) días, en la aplicación de las mismas y su concreción no media más tiempo que el que corresponde a la consideración de los hechos en sí;

Que por el contrario, en los casos en que estas medidas sancionatorias son emergentes del resultado de sumarios administrativos, recién pueden ser impuestas y cumplidas luego de finalizada la causa, con todas las alternativas que pueden haber prolongado el término de la instrucción, hasta su resolución final, ya sea con relación directa al sumario o al ejercicio de los derechos que acuerden las normas vigentes al agente afectado;

Que en este sentido, pueden presentarse situaciones en las cuales, entre el momento en que se cometió la falta y aquél en que se cumple la sanción impuesta, las remuneracio-

nes percibidas hayan experimentado un aumento, proveniente del mejoramiento general de los sueldos o de la aplicación del ascenso automático;

Que en el artículo 35°, apartado I de la Reglamentación del Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública Nacional se determina que las suspensiones tanto preventivas como correctivas, se harán efectivas sin prestación de servicios y sin percepción de haberes;

Que la Dirección General del Servicio Civil de la Nación expone su criterio de que el descuento procede efectuarlo en base a las remuneraciones asignadas al agente en el momento de cumplir la pena impuesta;

Que por otra parte es razonable que los días no trabajados sean descontados según el valor con que se retribuyen las tareas al momento en que dejan de ser prestadas;

Por ello, y atento a lo determinado en el art. 1° del decreto-ley n° 797/58 (+) y art. 6° del decreto número 860/58 (°),

EL SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA

R E S U E L V E :

Artículo 1ª.- Aclárase que el descuento de haberes correspondiente a sanciones disciplinarias de suspensión, emergentes de los artículos 34° al 36° y 39° del Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública Nacional y su Reglamentación, debe efectuarse sobre las remuneraciones efectivamente asignadas al agente al momento de cumplirse la pena impuesta.

Artículo 2ª.- Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.-

RESOLUCION Nª 8.024.- Fdo. GUILLERMO WALTER KLEIN

(+) Ver Digesto Administrativo Nª 419.-
(°) ver Digesto Administrativo Nª 420.-

Poder Ejecutivo Nacional
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº 872.-

VIATICOS - SERVICIO EXTERIOR - MISIONES AL EXTERIOR - COMISIONES AL EXTERIOR

Buenos Aires, 28 de agosto de 1959.-

Visto el decreto nº 10.974/58 (+) (Plan de Racionalización y Austeridad); y

CONSIDERANDO:

Que se hace necesario adoptar las medidas que permitan asegurar una real y efectiva economía en los gastos públicos en consonancia con las disposiciones del citado decreto;

Que en tal sentido corresponde establecer un ajuste en las distintas disposiciones vigentes en materia de viáticos para las misiones transitorias a cumplirse en el exterior, con el objeto de uniformar tales asignaciones, reduciéndolas al mínimo indispensable,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A:

ARTICULO 1º.- Los agentes de la Administración Pública Nacional en todas sus dependencias, inclusive empresas estatales y cualquiera fuese la denominación, rango y jerarquía de sus empleos, o toda persona designados para cumplir misiones transitorias en el exterior, a quienes de conformidad con las disposiciones vigentes les corresponda la percepción de viáticos con coeficiente, percibirán en lo sucesivo, en reemplazo de tales asignaciones y en concepto de compensación por todo gasto, hasta la suma diaria máxima en pesos mo

(+) Ver Digesto Administrativo Nº 681.-

neda nacional equivalente a treinta dólares estadounidenses (u$s. 30.-), la que podrá girarse en la divisa correspondiente.

ARTICULO 2º.- Las disposiciones del artículo anterior regirán a partir de la fecha del presente decreto y se aplicarán en forma uniforme cualquiera sea el país o países donde se cumpla el cometido de la misión encomendada.

ARTICULO 3º.- Deróganse todas las disposiciones vigentes en la materia en cuanto se opongan al presente decreto.

ARTICULO 4º.- Declárase aplicables a este decreto las normas generales contenidas en el Plan de Racionalización y Austeridad para la Administración Pública Nacional (Decreto nº 10.974/58).

ARTICULO 5º.- El presente decreto será refrendado por todos los Ministros Secretarios de Estado y firmado por todos los Secretarios de Estado.

ARTICULO 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.-

FRONDIZI - Héctor V. Noblía - Diógenes Taboada - Justo P. Villar - Alfredo R. Vítolo - Luis R. Mac Kay - Ramón A. Abrahín - Pascual Palazzo - Ernesto Malaccorto - Alberto R. Costantini - Guillermo Walter Klein - Adolfo T. Cosentino - Alvaro C. Alsogaray - Eustaquio A. Méndez Delfino - Carlos A. Juni - Elbio C. Anaya - Manuel F. Castello - Gastón C. Clement

DECRETO Nº 10.545.-

Boletín Nº 873.-

DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS (Facultades) - ESTATUTO PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL (Artículo 35º) - SANCIONES

Buenos Aires, 28 de agosto de 1959.-

Visto el artículo 9º de la Ley de Aduanas (t.o.1956) modificado por el artículo 1º de la Ley Nº 11.792; y

CONSIDERANDO:

Que dicho precepto legal estatuye. "Asimismo, el director nacional está autorizado para establecer el reglamento interno del personal y para distribuir el fondo de estímulo con arreglo a la reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo. Los nombramientos, ascensos, remociones y sanciones del personal serán dispuestos por el Poder Ejecutivo por intermedio de la Secretaría de Hacienda, a propuesta de la Dirección Nacional de Aduanas";

Que, siendo facultad del Poder Ejecutivo reglamentar la ley corresponde dictar las normas respectivas adoptando para la aplicación de las sanciones disciplinarias en la referida repartición, un procedimiento acorde con el que en general poseen los organismos dependientes de la Administración Nacional;

Que en mérito a lo expuesto, procede, de conformidad con lo prescripto en el artículo 35º del Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública Nacional, aprobado por decreto-ley Nº 6.666 del 17 de junio de 1957 (*), facultar a la Dirección Nacional de Aduanas para que aplique a su personal

---

(*) Ver Digesto Administrativo Nº 254

las sanciones de apercibimiento y suspensión hasta diez días y establecer que la Secretaría de Estado de Hacienda - a propuesta de dicha repartición - dispondrá las medidas de suspensión hasta un mes y de postergación en el ascenso, reservándose a la consideración del Poder Ejecutivo, la retrogradación de categoría, la cesantía y la exoneración;

Que, asimismo, es conveniente dejar establecido que en oportunidad de que la Dirección Nacional de Aduanas dicte el reglamento previsto en el comentado artículo 9º deberá ajustarlo estrictamente a las normas prescriptas en el referido Estatuto;

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA .....

D E C R E T A:

Artículo 1º.- Facúltase a la Dirección Nacional de Aduanas de conformidad a las prescripciones del Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública Nacional, aprobado por decreto ley Nº 6.666 de 17 de junio de 1957 - para que aplique al personal de su jurisdicción las sanciones disciplinarias de apercibimiento y suspensión hasta diez días.-

Las suspensiones de hasta un mes y la postergación en el ascenso serán dispuestas por la Secretaría de Estado de Hacienda, a propuesta de la Dirección Nacional de Aduanas.-

La retrogradación de categoría, la cesantía y la exoneración las dispondrá el Poder Ejecutivo por intermedio de la Secretaría de Estado de Hacienda, a propuesta de la Dirección Nacional de Aduanas.-

Artículo 2º.- La Dirección Nacional de Aduanas en oportunidad de dictar el reglamento que prevé el artículo 9º de la Ley de Aduana (t.o. 1956), modificado por el artículo 1º de la Ley Nº 14.792, deberá observar estrictamente las normas establecidas en el Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública Nacional, aprobado por el decreto-ley nº 6.666 de 17 de junio de 1957.-

Artículo 3º.- Ratifícase las sanciones aplicadas por la Dirección Nacional de Aduanas y por la Secretaría de Estado

de Hacienda al personal de la citada repartición desde la vigencia de la Ley Nº 14.792 hasta la fecha del presente decreto y que se ajusten a las normas establecidas en el artículo 1º de este acto de gobierno.-

Artículo 4º.- El presente decreto será refrendado por el Señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda.-

Artículo 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.-

FRONDIZI - Alvaro Alsogaray -
Guillermo W. Klein

DECRETO Nº 10.570.-

Poder Ejecutivo Nacional
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº 874.-

EMPRESAS DEL ESTADO - CONVENIOS COLECTIVOS DE TRABAJO

Buenos Aires, 19 de junio 1959

Visto: Que las empresas del Estado carecen de una política uniforme para encarar posibles negociaciones colectivas sobre salarios y condiciones de trabajo, y

CONSIDERANDO:

Que es conveniente establecer las normas a que deben ajustarse las empresas del Estado en lo que concierne a dichas negociaciones, conforme a las exigencias del Plan de Estabilización Monetaria;

Que las circunstancias en que se desenvuelve el país, hacen indispensable aumentar la productividad de las empresas del Estado;

Que los considerables déficit de explotación están gravitando sobre el erario nacional, provocando así una fuerte presión inflatoria;

Que el mejor ordenamiento de las empresas estatales permitirá enjugar, en gran medida, el déficit fiscal;

Que si bien no es posible autorizar aumentos generales de salarios no vinculados a la mayor productividad, es factible establecer normas para que cada empresa pueda disponer de un mejor ordenamiento del trabajo que permita aumentar los rendimientos de la mano de obra;

Que reducidos substancialmente los déficit de explotación, las economías resultantes de la mayor productividad general deberán determinar aumentos de salarios para el personal ocupado por las empresas;

Que las convenciones colectivas que celebren las empresas del Estado deben tener debidamente en cuenta los principios de la política de estabilización monetaria,

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

Artículo 1º.- Las empresas del Estado en las negociaciones para la renovación de convenciones colectivas de trabajo, se regirán por las siguientes normas:

a) La duración mínima de las convenciones será de diez y ocho meses.-

b) No se concederán aumentos masivos de salarios ni se adoptarán o mantendrán cláusulas para su ajuste automático.-

c) Sólo se contemplarán aquellos aumentos de salarios que resulten de la mayor productividad de cada empresa, teniendo en cuenta a ese efecto no sólo el mejor rendimiento de la mano de obra por la aplicación de regímenes de eficiencia, sino también el que sea consecuencia de una explotación racional y de la más adecuada organización de las empresas.-

d) No podrán acordarse aumentos mientras las empresas respectivas no hayan reducido substancialmente los déficit de explotación.-

e) Cada empresa establecerá su régimen de productividad conforme a un procedimiento general que se determinará en la convención colectiva.-

f) No se admitirán modificaciones de las condiciones de trabajo que determinen una reducción de su rendimiento; ello sin perjuicio de la protección que acuerda a los trabajadores la legislación vigente.-

Artículo 2º.- Las empresas del Estado que tengan en vigor convenciones colectivas sin que sus normas se ajusten a las presentes instrucciones, reiniciarán las negociaciones para adaptarlas al presente decreto.-

Artículo 3º.- Las empresas del Estado no podrán suscribir nuevas convenciones colectivas o modificaciones de las anteriores, sin una autorización especial expedida por decreto del Poder Ejecutivo respecto del proyecto de acuerdo. Este decreto se dictará previo dictamen de los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social y de Economía.-
Artículo 4º.- El presente decreto será refrendado por los señores Ministros Secretarios en los Departamentos de Trabajo y Seguridad Social y de Economía.-
Artículo 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.-

FRONDIZI -Emilio Donato del Carril, David Blejer.

DECRETO Nº 7.589.-

Poder Ejecutivo Nacional
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº 875.-

ESTATUTO PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL - SANCIONES

Buenos Aires, setiembre 7 de 1959.-

Visto lo prescripto en el artículo 35º del Estatuto del Personal Civil de la Administración Nacional, aprobado por decreto-ley nº 6.666 de 17 de junio de 1957 (+); y

CONSIDERANDO:

Que el punto II) de la reglamentación (decreto nº 1.471/58 (º) del citado artículo 35º, establece "En cada organismo dependiente del Poder Ejecutivo Nacional, se determinarán las autoridades que, en las respectivas jurisdicciones, aplicarán las medidas disciplinarias de apercibimiento y suspensión hasta diez (10) días...";

Que en ese orden de ideas, cabe destacar que la Dirección General del Servicio Civil de la Nación considera que las sanciones a que se ha hecho referencia, deben ser aplicadas por los Directores Nacionales o Generales o sus sustitutos legales, temperamento que resulta conveniente disponer con el objeto de evitar interpretaciones dispares y procedimientos diversos;

Por ello,

EL SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA

R E S U E L V E:

1º.- Establécese que la medidas disciplinarias de aperci-

(+) Ver Digesto Administrativo Nº 254.-
(º) Ver Digesto Administrativo Nº 422.-

bimiento y suspensión hasta diez (10) días, prescriptas por el artículo 35° del Estatuto del Personal Civil de la Administración Nacional, aprobado por decreto-ley nº 6.666 de 17 de junio de 1957, su jurisdicción de esta Secretaría de Estado, serán aplicadas por los Directores Nacionales y/o Generales o funcionarios de igual jerarquía o sus sustitutos legales.

2ª.- Comuníquese a quienes corresponda, tómase nota y archívese.-

Fdo. GUILLERMO WALTER KLEIN

RESOLUCION Nª 4.097.-

Poder Ejecutivo Nacional
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº 876.-

ESCALAFON PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL - SECRETARIA DE HACIENDA

Buenos Aires, 24 de abril de 1959.-

Visto lo dispuesto por el artículo 4° del Decreto número 9.530 del 7 de noviembre de 1958 que establece la obligación, por parte de los distintos Ministerios, Secretarias de Estado, etc., de proceder a la ubicación de funciones del personal conforme a las disposiciones contenidas en dicho decreto, y

CONSIDERANDO:

Que la precitada ubicación debe realizarse sobre la base de la planta efectiva de personal de que disponen los distintos servicios;

Que habiéndose propuesto la ubicación de funciones del personal de la Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos dependiente de la Secretaría de Estado de Hacienda, corresponde aprobar el agrupamiento de las mismas en las clases y grupos programados;

Por ello y atento lo propuesto por la Secretaría de Estado de Hacienda,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- Apruébase el agrupamiento de funciones en los grupos y clases que dan cuenta las planillas anexas, corres-

pondiente al personal que a la fecha revista en la Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos dependiente de la Secretaría de Estado de Hacienda.

ARTICULO 2º.- Habilítase en la Clase B, para el personal jornalizado de los Hipódromos dependientes de la Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos, los grupos B-O, a) y B-O, b), con jornales iniciales y categorías, mayores en m$n. 35.- y m$n. 15.-, respectivamente, de los que corresponden al Grupo I de la referida Clase.

Los adicionales y subsidios se calcularán en la forma prevista con carácter general por el punto 57º del Escalafón aprobado por el Decreto Nº 9.530/58.

ARTICULO 3º.- Los jornales iniciales y las categorías de cada grupo, así como los adicionales y subsidios, se calcularán en la veinteava (1/20) parte de los correspondientes al personal mensualizado de las Clases y Grupos respectivos.

ARTICULO 4º.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda.

ARTICULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas, tome conocimiento el Tribunal de Cuentas de la Nación, pase a la Secretaría de Estado de Hacienda para su registro en la Dirección General del Servicio Civil de la Nación y archívese.-

FRONDIZI - Emilio Donato del Carril - Ricardo Lumi.-

DECRETO Nº 4.867.-

PERSONAL JORNALIZADO

C L A S E A				
GRUPO I	GRUPO II	GRUPO III	GRUPO IV	GRUPO V
			Jefe de Departamento	2º Jefe de Departamento
			2	2

Total general: 6.470.-

LOTERIA DE BENEFICENCIA NACIONAL Y CASINOS - CUENTA ESPECIAL EXPLOTACION DE HIPODROMOS

PERSONAL JORNALIZADO

C L A S E B								
GRUPO 0,a	GRUPO 0,b	GRUPO I	GRUPO II	GRUPO III	GRUPO IV	GRUPO V	GRUPO VI	GRUPO VI
Jefe de Apuestas Jefe de Starters Jefe Secretaría General de Carreras	Administrador General Hipódromo. Asesor General Hipódromos. Inspector General Administración. Inspector General Personal. Jefe Agencia Mar del Plata. Jefe Servicio Veterinario. 2º Jefe Apuestas. 2º Jefe Secretaría General Carreras	Cajero Agencia Hipódromo Mar del Plata. Jefe Ayudante Apuestas Pabellón Popular. Jefe Boleterías Hipódromo. Jefe Mesa Centralizadora. Jefe de Pabellón. Jefe Servicios Generales. Jefe del Servicio Médico Juez de Raya	Encargado Ajustador Agencia Mar del Plata. Encargado Pagador Boletería Agencia Mar del Plata. Fiscalizador Identidad Caballos Carreras. Fiscalizador Veterinario. Jefe de Actas y Partes Jefe Ayudante Apuestas Pabellón Paddock y Oficial	Cajero General de Pagadores. Encargado de Ajuste. Encargado Control de Llegada. Encargado General Mesa Distribuidora. Encargado General Personal Pizarras Encargado General Inspección Externa Encargado Inspección de Personal	Auxiliar Boletería. Encargado Informaciones Sumarias Encargado Sección Estadística. Encargado Transmisiones Hípicas. Encargado Ventas de Entradas. Fiscalizador Concesiones Handicaper Inspector Vigilancia Agencia Mar del Plata.			
6								

LOTERIA DE BENEFICENCIA NACIONAL Y CASINOS [illegible]

PERSONAL JORNALIZADO

C L A S E C				
GRUPO I	GRUPO II	GRUPO III	GRUPO IV	GRUPO V
Médico	Kinesiólogo			
12	4			

PERSONAL JORNALIZADO

C L A S E D								
GRUPO I	GRUPO II	GRUPO III	GRUPO IV	GRUPO V	GRUPO VI	GRUPO VII	GRUPO VIII	SUBGRUPO
Auxiliar Inscripción Ratificación. Auxiliar Inspección Externa e Interna. Auxiliar Planillas Personal. Auxiliar Cotizador. Auxiliar Boletería. Ayudante Tesorería Ayudante Llegada Control Ayudante Largador	Auxiliar Agencia Mar del Plata. Auxiliar Inspección Administrativa. Auxiliar Inspección Personal. Celador Recinto Cronistas. Control Tiempo Oficial. Encargado Pizarra Agencia Mar del Plata.	Auxiliar Informaciones Sumarias. Auxiliar Estadística. Auxiliar Inscripciones y Ratificaciones. Ayudante Locutor. Ayudante Oficina Equipos. Cambista. Enfermero	Auxiliar Control Entradas Auxiliar Dividendos y Apuestas Auxiliar Grupo de Prensa. Auxiliar Inspector Administración y Personal. Auxiliar Pesador Laboratorista.	Auxiliar Libro de Venta. Auxiliar Mesa de Ajuste. Encargado Oficina de Dactilografía. Telefonista Interno Auxiliar Servicio Ordenes. Auxiliard Servicios Generales Telefonista Ambulancia	Auxiliar Mesa Recuento. Auxiliar Servicios Varios. Distribuidor de Boletos. Oficinista Dactilografo. Auxiliar Servicio Ordenes.	Auxiliar Suplente		
				189	281	619		

LOTERIA DE BENEFICENCIA NACIONAL Y CASINOS – CUENTA ESPECIAL EXPLOTACION DE HIPODROMOS

PERSONAL JORNALIZADO

C L A S E D

GRUPO I	GRUPO II	GRUPO III	GRUPO IV	GRUPO V	GRUPO VI	GRUPO VII	GRUPO VIII	SUBGRUPO
Ayudante Llegada. Ayudante fiscalizador Identificación caballos. Cabo Enfermero. Cajero Cajero Boletería. Encargado Boxes. Encargado Conmutador Encargado Impresión Boletos Encargado Mesa Ajuste Agencia Mar del Plata. Encargado Mesa Distribuidora.	Encargado Recuento de Boletos. Oficinista Servicio Médico. Pesador. Pizarrero Subencargado. Auxiliar Servicio Ordenes. Auxiliar Comisariato Telefonista Interno Comisión	Liquidador Planilla Personal. Operador Conmutador. Pizarrero. Pizarrero Comisariato. Radiografo. Recolector Dinero. Auxiliar Servicio Ordenes. Telefonista de Asta. Venededor de Boletos.	Auxiliar Servicio Ordenes. Vendedor de Entradas.					
	36	1.553	270					

PERSONAL JORNALIZADO

C L A S E D								
GRUPO I	GRUPO II	GRUPO III	GRUPO IV	GRUPO V	GRUPO VI	GRUPO VII	GRUPO VIII	SUBGRUPO
Encargado Rotonda. Encargado Mesa Ajuste. Inspector Boleteria Jefe Administrativo Servicio Medico Locutor. Pesador. Pizarrero Encargado Revisor Vales Secretaria Servicio Medico. Control Entradas. Control de Equipos. Auxiliar Servicio Ordenes. Taquígrafo. Vendedor de Vales Totalizador								

LOTERIA DE BENEFICENCIA NACIONAL Y CASINOS – [illegible]
PERSONAL JORNALIZADO

C L A S E D								
GRUPO I	GRUPO II	GRUPO III	GRUPO IV	GRUPO V	GRUPO VI	GRUPO VII	GRUPO VIII	SUBGRUP
Auxiliar Servicio Médico. Encargado de Pistas Encargado Mesa Placé Mar del Plata.								
1.472								

LOTERIA DE BENEFICENCIA NACIONAL Y CASINOS – CUENTA ESPECIAL EXPLOTACION [illegible]

PERSONAL JORNALIZADO

C L A S E E							
GRUPO I	GRUPO II	GRUPO III	GRUPO IV	GRUPO V	GRUPO VI	GRUPO VII	GRUPO VIII
	Jefe de Cultivos. Jefe Servicio Omnibus Jefe de Taller Jefe de Teléfonos	Ayudante de Veterinario Encargado Palafrenero Encargado Starting-Gate. Herrador. Subjefe Servicio Omnibus	Ayudante de Veterinaria Conductor. Encargado de Garage. Oficial Palafrenero de Caballo. Palafrenero de Largada.	Ayudante Starting-Gate. Ayudante de Veterinario. Conductor Ambulancia Caballos. Motociclista. Oficial. Palafrenero de Llegada. Tractorista.	Ayudante Oficina Equipos. Ayudante Salida de Caballos. Operario de Pista. Peón Bañero. Talabartero.		
	13	19	89	63	778		

LOTERIA DE BENEFICENCIA NACIONAL Y CASINOS - CUENTA ESPECIAL EXPLOTACION [illegible]

PERSONAL JORNALIZADO

C L A S E F					
GRUPO I	GRUPO II	GRUPO III	GRUPO IV	GRUPO V	GRUPO VI
Mayordomo General.	Mayordomo.	Capataz.	Encargado Compra Boletos. Encargado Portería. Encargado Palco.	Cocinero. Guardían. Mucama Servicio Médico. Ordenanza. Peón Especial Comisariato. Sereno.	Comprador de Boletos Encargado de Toilette. Lavandera de Mandiles. Mensajero de Coches.
4	2	6	161	78	65

PLANILLA ANEXA AL ARTICULO 2a.

Personal Jerarquizado

Clase "B"

GRUPO O, a	GRUPO O, b
430,—	410,—
438,50	418,50
447,—	427,—
457,—	437,—
467,—	447,—
477,—	457,—
487,—	467,—
495,50	475,50
504,—	484,—
512,50	492,50
521,—	501,—
527,50	507,50
534,—	512,—
540,50	520,50
547,—	527,50
552,—	532,—
557,—	537,—
562,—	542,—
567,—	547,—
572,—	552,—
577,—	557,—
580,50	560,50
584,—	564,—
587,50	567,50
591,—	571,—
594,50	574,50
598,—	578,—
601,50	581,50
605,—	585,—
608,50	588,50
612,—	592,—

Poder Ejecutivo Nacional
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº 871.-

ASOCIACIONES PROFESIONALES (Reglamentación)

Buenos Aires, 12 de septiembre de 1958.-

Visto lo dispuesto en los artículos 57 y 58 de la Ley Nº 14.455, y

CONSIDERANDO:

Que las referidas disposiciones de la ley citada, establecen que deben efectuarse elecciones en todas las organizaciones profesionales del país a efectos de encauzarlas dentro de las estructuras constitucionales y legales actualmente vigentes;

Que con dichas elecciones se normalizará definitivamente la vida sindical y se pondrá término a la intervención del Estado en esas actividades;

Que, dada la importancia fundamental que esta normalización institucional reviste para asegurar el orden y la paz social, es menester garantizar que el proceso eleccionario sea de una total pureza, para que sus resultados reflejen verdaderamente la libre voluntad de los trabajadores sindicalizados;

Que con ese fin y habida cuenta del carácter extraordinario que esta elección inicial reviste, el Estado debe, de conformidad con el artículo 57 de la Ley, fijar los procedimientos a que se ajustarán esas elecciones;

Que es intención gubernamental que las elecciones se efectúen con las más amplias garantías para todas las partes interesadas, ocupándose el Estado principalmente de evitar todas aquellas perturbaciones que puedan perjudicar la autenticidad de los resultados de las mismas;

Que, por lo tanto, es conveniente dejar a cada organización profesional facultades para reorganizarse de conformidad con sus propios estatutos, interviniendo el Estado solamente en lo necesario para hacer factible, dentro de un estado de

derecho democrático , la realización eficaz de elecciones limpias;

Que, a ese efecto,las normas que a continuación se establecen se remiten, como fuente supletoria, a las disposiciones que han regido las elecciones nacionales de febrero de 1958;

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A:

Artículo 1º.- La renovación, elección y constitución de las autoridades directivas de las asociaciones profesionales de trabajadores a que se refiere el artículo 57 de la Ley Nº - 14.455(M) se ajustará a las disposiciones del presente decreto.

DEL OBJETO DE LAS ELECCIONES

Artículo 2º.- La elección tendrá por objeto la designación de:

1º) Los afiliados que desempeñarán los cargos electivos de los sindicatos o seccionales, de las uniones y de las federaciones;

2º) Los Delegados a Congresos o Asambleas en los supuestos a que se refiere el artículo 3º inciso 2º "in-fine";

3º) Los Delegados a Congresos o Asambleas de Confederaciones

Para determinar el número de Delegados a elegir para integrar los Congresos o Asambleas, se tendrá en cuenta la proporción que establecen los estatutos vigentes.-

FORMA DE LAS ELECCIONES

Artículo 3º).- Se elegirán por voto directo y secreto:

1º) Los integrantes de los cuerpos directivos de los sindicatos, Federaciones, Uniones y sus seccionales;

(M) Ver Decreto Administrativo Nº 6078

2º) Los integrantes de los Congresos y Asambleas de las Confederaciones cuando conforme a sus estatutos, los cuerpos directivos sean designados por los mismos.-

En las Uniones y Federaciones cuyos estatutos prevean la elección de los cuerpos directivos por Congresos o Asambleas podrá efectuarse la designación en la forma regulada en los mismos, si las características de la actividad representada y las prácticas seguidas con anterioridad así lo aconsejaren.-

Esta decisión deberá ser adoptada por el Delegado electoral a que se refiere el artículo 9º dentro de los cinco días de la fecha en que entre en posesión del cargo.-

DE LAS AUTORIDADES ELECTORALES

Artículo 4º.- A los efectos de la presente reglamentación serán autoridades electorales las siguientes:

1º) El Delegado Electoral;
2º) La Junta Electoral;
3º) El Tribunal Electoral.

Artículo 5º).-En cada organización profesional se nombrará un Delegado en la Asociación de grado superior.-

También se designarán Delegados en las Asociaciones o Seccionales que están vinculadas a una Asociación de grado superior.-

En las primeras, la designación será efectuada directamente por el Ministro de Trabajo y Seguridad Social, y en las restantes, a propuesta del Delegado que éste haya designado.

Tratándose de Sindicatos no adheridos a Federaciones o en Sindicatos sin seccionales, sólo será designado un Delegado.

La designación de los Delegados Electorales recaerá preferentemente en funcionarios, especializados en Derecho Sindical, del Estado Nacional o de las Provincias o en lo posible con título de abogado.-

No podrán ser Delegados quienes tengan o hayan tenido relación de dependencia con la asociación profesional de que se trate, o que sean o hayan sido afiliados a la misma.-

Los delegados en asociaciones de primero y segundo grado podrán ser impugnados hasta 10 días antes del acto eleccionario, con causa razonable, por los órganos de las asociaciones

en que actúen o por los apoderados de las listas oficializadas, ante el Tribunal Electoral que resolverá en definitiva.

Los delegados electorales podrán ser removidos de oficio por el Tribunal Electoral, mediando causa justificada.-

Artículo 6º.- En cada Sindicato o Seccional se constituirá una Junta Electoral integrada con dos miembros como mínimo. La Junta será integrada por un representante por cada fracción que presente lista al acto eleccionario.-

En el supuesto de que se presente una sola lista, la Junta se integrará con dos representantes de la misma.-

Artículo 7º.- Igualmente se designará una Junta Electoral Central, en las Uniones o Federaciones cuando la elección de los cuerpos directivos se efectúen por el voto directo de los afiliados.-

Cuando la elección de los cuerpos directivos de las Uniones o Federaciones se realice en Congresos o Asambleas a única autoridad electoral para entender en esa elección será el Delegado Electoral.-

No obstante se constituirá una Junta Electoral Central para entender en la elección de los delegados a los Congresos o Asambleas de las Confederaciones.-

La Junta Electoral Central que debe entender en la elección destinada a la designación de las personas que ocuparán los cargos directivos en las Uniones, Federaciones y de aquellas que actuarán como miembros en los Congresos o Asambleas de las Confederaciones se constituirá con un representante de cada fracción que presente lista para esa elección y tendrá un número mínimo de dos miembros.-

Artículo 8º.- En el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social se constituirá un Tribunal Electoral integrado por el Presidente del Consejo Nacional de Relaciones Profesionales y por los Asesores Letrados de los Departamentos de Estado de Interior, Educación y Justicia y Trabajo y Seguridad Social. Este Tribunal será presidido por el Ministro de Trabajo y Seguridad Social.-

DE LAS FACULTADES DE LOS DELEGADOS ELECTORALES

Artículo 9º.- Corresponderá al Delegado Electoral en Unio-

nes, Federaciones o Asociaciones de grado superior:

1º) La confección del registro electoral cuando ello le compete al órgano central conforme a los estatutos vigentes o así se hubiere procedido como práctica de la Asociación;

2º) Proveer lo conducente para evitar que los valores que forman parte del patrimonio social, como asimismo los demás bienes muebles que lo integran y los servicios que preste la Asociación sean utilizados con fines de propaganda electoral. A estos efectos estará facultado para ejercer un control previo a toda inversión de fondos, supervisar la utilización de los demás bienes y la prestación de esos servicios. Cuando de la referida fiscalización resultare que esos bienes y servicios se utilizan en forma incorrecta y con fines de propaganda electoral, el Delegado Electoral podrá vedar el uso de esos bienes a las autoridades sindicales o ejercitar la dirección de esos servicios;

3º) Adoptar medidas apropiadas para evitar que los afiliados sean autoridad sindical o no, y los terceros, ejecuten actos que perturben el proceso electoral. Para ello podrá llegar a vedar a las autoridades sindicales el ejercicio de aquellas facultades que hayan utilizado para obstruir el proceso electoral, en la medida que ello sea necesario para evitar la reincidencia;

4º) Disponer lo pertinente, a los efectos previstos por los artículos 1º y 3º de la ley nº 14.455 para impedir que las personas que intervengan en el proceso eleccionario ejecuten actos previstos por los artículos 1º y 3º adhesiones de carácter político lo hagan proselitismos mediante el uso de símbolos o distintivos pertenecientes a grupos o partidos políticos. En caso de infracción a esta disposición el Delegado Electoral tomará las medidas necesarias para que se ponga término a ese tipo de actividades. En el supuesto de reincidencia el Delegado Electoral remitirá los antecedentes al Tribunal Electoral el cual podrá anular la oficialización de la lista de candidatos correspondientes;

5º) Ejercer la facultad a que se refieren los dos últimos párrafos del artículo 3º del presente decreto;

6º) Supervisar la actuación de los Delegados a que se refiere el artículo siguiente.-
La decisión que se adopte disponiendo las medidas indicadas en los incisos 3º y 5º, deberá ser fundada. Las mismas serán recurribles mediante recursos igualmente fundados - dentro del término de tres días por ante el Tribunal Electoral.-

Artículo 10º.- A los delegados electorales en los sindicatos o seccionales les corresponderá:

1º) La confección del registro electoral cuando no le competa el órgano central de conformidad con el inciso 1º del artículo 9º;

2º) Entender en lo relativo a la oficialización de las listas conforme a lo regulado en esta reglamentación;

3º) Intervenir en la realización del escrutinio según se dispone en esta reglamentación:

4º) Presidir la Junta Electoral;

5º) Resolver todas las controversias que se susciten sobre el acto eleccionario, oída que sea la Junta Electoral respectiva;

6º) Ejercer las facultades a que se refiere el inciso 2º - del artículo anterior;

7º) Convalidar el certificado previsto por el artículo 17 inciso 2º de este decreto;

8º) Requerir al Delegado Electoral a que se refiere el artículo anterior la adopción de la medida prevista en el inciso 3º del mismo, cuando ella afecte a autoridades sindicales;

9º) Adoptar las medidas necesarias para posibilitar la emisión del sufragio al mayor número de afiliados, disponiendo la constitución de mesas en los lugares de tra-

bajo, en tanto lo considere factible y adecuado para la mejor concentración de los electores.-

Artículo 11º.- En los casos de sindicatos no adheridos a Uniones o Federaciones, el Delegado Electoral en el mismo tendrá en lo pertinente las facultades establecidas en los dos artículos precedentes.-

FACULTADES DE LA JUNTA ELECTORAL

Artículo 12º.- Son facultades de las Juntas Electorales:

1º) Designar los presidentes de las mesas receptoras de votos, determinar el lapso de duración del proceso electionario, y el horario de funcionamiento de esas mesas.

2º) Efectuar el escrutinio definitivo de las elecciones que controla, dictaminando sobre las impugnaciones que se sometan a su consideración:

3º) Dictaminar sobre las causas que a juicio de las mismas fundamentan la validez o nulidad de la elección;

4º) Proclamar a los que resulten electos;

5º) Ejercer las demás atribuciones que le asigna el presente decreto.-

FACULTADES DEL TRIBUNAL ELECTORAL

Artículo 13º.- Serán facultades del Tribunal Electoral:

a) Entender en las apelaciones a que se refieren los artículos 5º "in-fine" 9º "im-fine" y 26;

b) Resolver en el supuesto previsto en el inciso 4º del artículo 9º;

c) Pronunciarse sobre la validez o nulidad de las elecciones previo dictamen de la Junta Electoral emitido según lo dispuesto por el artículo 12 del presente decreto.-

DURACION DEL MANDATO DE LAS AUTORIDADES ELECTORALES

Artículo 14º.- Las autoridades electorales cesarán en sus funciones una vez constituído los cuerpos u organismos cuya elección controlaron.-

DE LA CONVOCATORIA A ELECCIONES

Artículo 15º.- La convocatoria a elecciones será efectuada por los Cuerpos directivos de las Uniones y Federaciones o de los Sindicatos cuando no estuvieren adheridos a una Federación, dentro de un término no mayor de 20 días, el que se computará a partir del día que entre en posesión del cargo el Delegado Electoral.

Si no es efectuada dentro de dicho término, la convocatoria será hecha por el citado Delegado.-

Se convocará a elecciones para que en un mismo acto se vote por los candidatos a ocupar los cargos que correspondan, en los Sindicatos Seccionales, Uniones o Federaciones y Confederaciones

Artículo 16º.- La convocatoria deberá indicar:

1º) Fecha, lugar y hora de la elección;

2º) Las autoridades a elegir expresándose los cargos que deban cubrirse conforme a las estructuras estatutarias vigentes.

DE LOS REQUISITOS PARA ELEGIR Y SER ELEGIDO

Artículo 17º.- Tendrán derecho al voto:

1º) Los afiliados mayores de 18 años, sin distinción de sexo que a la fecha de vigencia del presente decreto, tuvieren una antigüedad como afiliado no menor de tres meses;

2º) Los trabajadores que en el término de 5 años anteriores a la vigencia de este decreto, hubieren revestido el carácter de afiliado y no lo tengan al presente a condición de que:

a) Haya tenido una antigüedad como afiliado no menor de un

año;

b) En un lapso no superior a 30 días a partir de la vigencia de este decreto, se reafilien abonando, como mínimo, el importe de dos cuotas sociales.

A estos trabajadores les será expedido un certificado especial que les habilite para votar.-

Artículo 18º.- Tendrán derecho a ser electos los afiliados que reúnan los siguientes requisitos:

1º) Ser mayor de edad;

2º) Haber desempeñado la actividad durante un término no menor de dos años, cualquiera sea la época en que se hubiere cumplido;

3º) Llenar las condiciones exigidas para ser elector conforme a lo dispuesto en el artículo anterior.-

DEL PADRON ELECTORAL

Artículo 19.- El padrón será confeccionado por el Delegado Electoral por orden alfabético del apellido con indicación del número de afiliación.-

También podrá confeccionarse dando prevalencia al número de afiliación cuando ésa hubiera sido la práctica seguida en la Asociación.-

Se confeccionarán padrones separados por establecimiento salvo en los casos en que no sea posible por las características de la actividad de que se trate, la confección del padrón actualizado deberá realizarse en un término de 40 días, como máximo, contados a partir de la fecha en que entre en funciones el Delegado Electoral.-

Artículo 20º.- Los padrones electorales, confeccionados con arreglo a lo dispuesto en el artículo anterior, tendrán debida publicidad durante el término de 8 días a fin de que los interesados puedan solicitar se subsanen los errores o exclusiones injustificadas o cuestionar la inclusión de determinadas personas; en este último supuesto sólo se aceptarán como tachas las que versen sobre la falta de las calidades exigidas en el artículo 17.-

Artículo 21º.- Las reclamaciones a que se refiere el artículo anterior deberán ser formuladas por escrito, ante el Delegado Electoral, quien resolverá al respecto dentro del término de dos días contados a partir de la recepción de la denuncia, declarando la procedencia o improcedencia del reclamo deducido. Cuando se trate, de tachas, no podrá resolver sin oír previamente el descargo del afectado.-

Artículo 22º.- Cuando se hiciere lugar a la tacha, se excluirá al elector del registro procediéndose a testar su nombre y dejándose constancia marginal del número y fecha de la resolución que lo dispuso. Cuando se dispusiere la inclusión de un elector omitido, su nombre se consignará en un padrón suplementario.-

Artículo 23º.- La calidad de elector, a los fines del sufragio se tendrá por acreditado con la figuración en el padrón que se confeccione ajustándose a las disposiciones de este decreto.

DE LA OFICIALIZACION DE LISTAS DE CANDIDATOS

Artículo 24º.- Hasta 20 días antes del comienzo de la elección se podrá oficializar ante el Delegado Electoral las listas de los candidatos que pretendan concurrir al acto eleccionario.-

Artículo 25º.- Las listas se distinguirán por color debiendo indicar en forma precisa el nombre y apellido de cada uno de los candidatos y cargo para el cual postula.-

Artículo 26º.- Inmediatamente de ser presentadas las listas de candidatos, las mismas serán expuestas en la sede de la Asociación durante el término de 5 días a fin de dar lugar a impugnaciones si las hubiere, vencido ese plazo y no habiéndose recibido objección al respecto se tendrá la lista por aprobada.-

En caso de formulación de impugnaciones, el Delegado Electoral, oída la Junta Electoral y el apoderado de la lista impugnada se pronunciará dentro del término de dos días sobre su viabilidad decidiendo la aprobación o desestimación de la lista cuestionada. La decisión deberá ser fundada y será recurrible mediante recurso igualmente fundado dentro del término de tres días por ante el Tribunal Electoral. Cuando la impugnación se limite a uno o más candidatos de la lista, si se aceptara su -

viabilidad, los impugnados podrán ser reemplazados en el plazo de dos días.-

DE LOS APODERADOS Y FISCALES

Artículo 27º.- Cada agrupación que presente lista al acto electoral podrá designar hasta dos apoderados para que la representen ante las autoridades electorales de la organización e intervenga en la tramitación de cualquier reclamo.-
Podrán solicitar al Delegado Electoral un ejemplar de los padrones confeccionados de conformidad con las disposiciones del presente decreto.-
Las agrupaciones a que se refiere el presente artículo, también podrá designar un fiscal ante cada mesa receptora de votos.-
Artículo 28º.- Los fiscales a que se refiere la última parte del artículo anterior no tendrá otra misión que la de observadores del acto electoral, formalizando los reclamos que estimaren corresponder.-
Artículo 29º.- Para ser apoderado o fiscal, es necesario saber leer y escribir y estar inscripto en el Registro electoral. Los fiscales podrán votar en la mesa en que se desempeñen.-
Artículo 30º.- Los poderes de los fiscales serán otorgados en papel común por cualquiera de los apoderados acreditados y deberán ser presentados para su convalidación ante la Junta Electoral dentro de las 48 horas de oficializada la lista respectiva.-

DE LA OFICIALIZACION DE LAS BOLETAS DE SUFRAGIO

Artículo 31º.- En cada Asociación Prefesional el Delegado Electoral a que se refiere el artículo 10º, podrá adoptar las medidas necesarias para la debida impresión de las boletas de sufragio, en cantidad suficiente para satisfacer las necesidades del acto electoral.-

Las boletas irán impresas en papel de color que identificarán a las respectivas listas. Todas las boletas tendrán iguales dimensiones midiendo cada una 15 cms, por 20 cms, y

conteniendo tantas secciones, con dicho tamaño, como categorías de candidatos corresponde elegir, las secciones irán unidas entre sí por líneas de puntos que faciliten el doblez de papel y la rápida separación de las boletas por parte del elector o de los funcionarios encargados del escrutinio.-

Se designará además, en letras, el color que la identifica, como así también el nombre y apellido de cada candidato y cargo para el que postula.-

Artículo 32º.- El Delegado Electoral citado en el artículo anterior deberá adoptar las medidas necesarias para que en cada mesa habilitada haya dos ejemplares de boletas, de cada color, autenticada con su sello y firma.-

MESA RECEPTORA DE VOTOS

Artículo 33º.- La constitución y autoridades de las mesas receptoras de votos, se regirán por las disposiciones de los artículos 72, 73, 74, 75 y 76 de las leyes electorales vigentes, texto ordenado, con la siguiente modificación:

a) La Junta Electoral que corresponda, efectuará los nombramientos de Presidente y Suplentes con una antelación no menor de cinco días a la fecha del comicio.-

DE LOS DOCUMENTOS PARA ACREDITAR LA IDENTIDAD

Artículo 34º.- Se considerarán documentos habilitantes para acreditar la identidad en oportunidad de emitir el sufragio, los siguientes:

1º) El carnet sindical. En caso de extravío el Delegado Electoral expedirá un certificado que lo supliera para el acto del comicio. El mismo, para ser válido deberá estar suscripto por dos miembros como mínimo de la Junta Electoral;

2º) El certificado habilitante a que se refiere el artículo 17 inciso 2 del presente decreto con el requisito antes indicado.-

Cuando el Presidente de la mesa considere dudosa la identidad del compareciente podrá exigir al mismo que exhiba su documento de identidad (Libreta de enrolamiento o cédula).-

DEL ESCRUTINIO PROVISIONAL EN LA MESA

Artículo 35º.- Para el escrutinio provisional de la mesa se estará a lo dispuesto en los artículos 101, 102, 103 y 104 de las leyes electorales vigentes texto ordenado con la siguiente modificación.-

El Presidente se constituirá ante la Junta Electoral haciendo entrega de las urnas y actas respectivas, pudiendo acompañarle las restantes autoridades que desearen hacerlo.-

DEL ESCRUTINIO DEFINITIVO

Artículo 36º.- El escrutinio definitivo será realizado por la Junta Electoral en el local del Sindicato o Seccional correspondiente, reuniendo en una acta única los resultados de la elección. Dicho documento consignará:

a) La totalidad de votos emitidos;

b) Los votos obtenidos para cada lista, y

c) El número de votos en blanco y anulados.

El acta deberá ser suscripta por los miembros de la Junta Electoral y los apoderados de listas que así lo solicitaren.

La Junta Electoral elevará el acta con los resultados finales de la elección al Delegado Electoral y simultáneamente proclamará a los candidatos electos para ocupar los cargos directivos de los sindicatos, de las seccionales y en su caso de los integrantes de los Congresos o Asambleas de las Federaciones y de las Uniones.-

Artículo 37º.- Cuando el escrutinio definitivo se refiera a los candidatos a ocupar los cuerpos directivos (elegidos por voto directo) de las Uniones, Federaciones y de los Delegados a los Congresos de las Confederaciones, las respectivas Juntas Electorales remitirán el acta original a la Junta Electoral Central para que efectúe el cómputo definitivo de las -

elecciones.-

Artículo 38º.- La Junta Electoral Central reunirá en un acta única los resultados de las elecciones parciales. Dicha acta será suscripta por el Delegado Electoral y por los miembros de la Junta que así lo solicitaren.-

Artículo 39º.- Aprobada la totalidad de las actas y realizado el cómputo pertinente la Junta Electoral elevará el acta con los resultados finales de la elección al Delegado Electoral y, simultáneamente, proclamará a los candidatos electos.-

DE LA POSESION DE LOS CARGOS

Artículo 40º.- Veinticuatro horas después de proclamadas las autoridades electas, las mismas serán puestas en posesión de sus cargos por el Delegado Electoral.-

FACULTADES DEL INTERVENTOR EN LA CONFEDERACION GENERAL DEL TRABAJO

Artículo 41º.- Las facultades que el artículo 9º en lo pertinente, atribuye a los Delegados Electorales serán ejercidas en la Confederación General del Trabajo por el interventor en la misma.-

Artículo 42º.- Cinco días después de proclamados los Delegados al Comité Central Confederal de la Confederación General del Trabajo, serán puesto en posesión de sus cargos por el Interventor en la misma. Desde ese momento cesará la intervención dispuesta oportunamente por el Poder Ejecutivo Nacional.

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 43º.- A partir de la fecha del presente decreto y hasta 45 días antes del acto eleccionario queda abierta la afiliación en las asociaciones profesionales de trabajadores de todo el país. La afiliación se hará de conformidad con lo dispuesto en la ley nº 14.455 y este decreto.-

Artículo 44º.- A los efectos de la presente reglamentación, se considerarán vigentes los estatutos adoptados por los organismos competentes de las respectivas Asociaciones Profesionales que hubieren sido presentados para su aprobación a la au-

toridad de aplicación, antes de la fecha en que entre en vigencia la misma, en tanto en cuanto no se opongan a las disposiciones de la ley nº 14.455 y del presente decreto.-

Artículo 45º.- Las seccionales que se hubieren constituído en sindicatos, por pertenecer a Uniones transformadas en Federaciones, y que aún no contaran con estatutos aprobados por la Asamblea pertinente, elegirán una comisión de cinco miembros. Ello, sin perjuicio de que deban proceder de conformidad con lo dispuesto en el artículo 57 de la ley nº 14.455.-

Artículo 46º.- Los Congresos o Asambleas que deban elegir autoridades en las Federaciones o Uniones, podrán sesionar con la presencia de la mitad más uno de los miembros. En los casos que no se obtuviere "quórum" y los estatutos de la entidad no prevean la solución, se efectuaría una segunda convocatoria, oportunidad en que el Congreso o Asamblea funcionará con el número de delegados presentes.-

Artículo 47º.- Por intermedio del Ministerio del Interior se impartirán las órdenes pertinentes a efectos de que la Policía Federal, preste el auxilio que le sea recabado por los Delegados Electorales para el cumplimiento de sus funciones.-

El citado Ministerio, a su vez, solicitará a los poderes ejecutivos de las provincias presten la colaboración que les sea pedida a esos fines.-

Artículo 48º.- Para los supuestos no previstos en la presente reglamentación se aplicarán supletoriamente, en cuanto sean compatibles con su régimen, los principios y disposiciones de los Decretos-Leyes nºs. 4034/57, 15099/57 y 335/58, y decretos reglamentarios nºs. 5762/57, 15402/57 y 336/58, texto ordenado de Elecciones Nacionales.-

Artículo 49º.- El presente decreto será refrendado por los señores Ministros Secretarios en los Departamentos de Trabajo y Seguridad Social, Interior y Educación y Justicia.-

Artículo 50º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.-

FRONDIZI - Alfredo E. Allende - Alfredo R. Vítolo - Luis R. Mac Kay

DECRETO Nº 5822.-

Poder Ejecutivo Nacional
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº 878.-

JUBILACIONES - INCOMPATIBILIDADES

Buenos Aires, 24 de octubre de 1958.-

Visto que el Artículo 18 de la Ley Nº 14.499 (1) establece que " los jubilados que hubieren vuelto al servicio cesarán en la percepción de sus respectivas prestaciones", y que "si el desempeño comprendiere un período mínimo de cinco años y en sus remuneraciones se les hubieren practicado los descuentos jubilatorios, podrán al retirarse solicitar la reliquidación de su jubilación";

Que el Decreto-Ley 12.458 (*) suspendió por el término de dos años la incompatibilidad establecida en el primer párrafo del Artículo 26 de la ley nº 14.370, y acordó a las personas comprendidas en esa situación el derecho de solicitar el reajuste de la prestación mediante la computación de las remuneraciones percibidas en el ejercicio de la función, siempre que hubieren desempeñado tareas retribuídas por un período superior a un año, y

CONSIDERANDO:

Que el aludido Decreto-Ley 12.458/57, se fundamenta en el último párrafo del Artículo 26 de la Ley 14.370, por el cual "el Poder Ejecutivo podrá establecer en el futuro, por tiempo determinado, límites de compatibilidad en atención al carácter de las funciones que desempeñen los beneficiarios, atendiendo a razones de índole nacional o a exigencias de las necesidades sociales o económicas";

Que en sus considerandos, si bien se tuvo en cuenta que la buena doctrina indica la conveniencia de establecer el principio de incompatibilidad entre remuneraciones provenientes de cualquier actividad y el goce de prestaciones jubilatorias, también se estimó que esta norma, teóricamente inobjetable, debe

(1) Ver Digesto Administrativo Nº 621
(*) Ver Digesto Administrativo Nº 343

ceder ante la realidad social, si ésta impone soluciones que contemplen la situación eventual de quienes, por motivos diversos, se hallan en estado de pasividad con remuneraciones insuficientes y en condiciones físicas y mentales de prestar servicios eficientes;

Que el artículo 18 de la Ley nº 14.499 privaría aparentemente de los derechos reconocidos por el Decreto-Ley 12458/57, a las personas acogidas al mismo, por cuanto innova sustancialmente en la materia al no permitir la compatibilidad entre las remuneraciones provenientes de cualquier actividad y el goce de las prestaciones jubilatorias, a la vez que aparece revestido de efecto retroactivo al determinar que dichas personas cesarán en la percepción de sus respectivas prestaciones y fijar un período mínimo de cinco años de actividad para que las remuneraciones percibidas en ésta puedan considerarse a los efectos del reajuste jubilatorio, en lugar del período mínimo de un año establecido en el ordenamiento legal en último término citado;

Que la norma contenida en el Artículo 18 de la Ley nº 14499 no enerva los derechos reconocidos en virtud de ley anterior ya que entender lo contrario equivaldría a desconocer la atribución conferida al Poder Ejecutivo en el Artículo 26, último párrafo, de la ley 14.370, que se mantiene vigente, como asimismo el principio general establecido en el Artículo 3º del Código Civil;

Que interpretar que el Artículo 18 de la Ley número 14499 opera con efectos derogatorios sobre el Decreto-Ley 12.458/57, significaría colocar en situación de evidente desventaja a las personas acogidas al mismo respecto de los incuestionables beneficios que la ley citada en primer término reconoce a favor de los afiliados de las Cajas Nacionales de Previsión;

Por tanto,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA
D E C R E T A :

Artículo 1º.- Los jubilados que hubieren vuelto a la actividad y estuvieren amparados por los beneficios de la compatibilidad establecida en el Artículo 1º del Decreto-Ley 12.458/57, o cualquiera otra de carácter especial, otorgada por el Poder Ejecutivo en uso de facultad conferida por el Artículo 26, último párrafo de la ley nº 14.370, continuarán en el goce de la

jubilación hasta la extinción del plazo fijado en el Decreto Ley aludido o autorizado en el segundo caso.-

Artículo 2º.- El reajuste de las prestaciones de que son titulares las personas comprendidas en la situación prevista en el artículo anterior se efectuará con arreglo a las condiciones generales establecidas a dicho efecto en el Decreto-Ley nº 12.458/57.-

Artículo 3º.- Comuníquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas, publíquese y archívese.-

FRONDIZI - Alfredo E. Allende.

DECRETO Nº 8249.-

Poder Ejecutivo Nacional
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº 879.-

RECURSOS ADMINISTRATIVOS - RECURSO JERARQUICO - RECURSO DE REVOCATORIA

Buenos Aires, 30 de octubre de 1958.-

Vistos que el doctor Vicente Emilio Pérez, en su condición de locatario principal de la unidad Nº 2 de la finca ubicada en la calle Olleros 2420 de esta Capital, interpone recurso jerárquico contra el pronunciamiento de la Dirección General Inmobiliaria obrante a fojas 43 de la carpeta anexa al expediente nº 210.582/56, agregado, por el que se conforma un dictamen del Departamento de Coordinación y Asuntos Legales - que implica reconocer el derecho de comprador preferente de la unidad en cuestión al subinquilino y ocupante real de dicha unidad señor Raúl Cordero y solicita se le restituya igual derecho que le fuera otorgado con anterioridad al pronunciamiento recurrido (carpeta citada, fojas 17 y vta.), y

CONSIDERANDO:

Que el decreto nº 7520/44(1) exige, para que proceda la sustanciación del recurso que instituye, que previamente se haya solicitado revocatoria del pronunciamiento impugnado y que ésta haya sido denegada por la autoridad superior del funcionario u órgano administrativo del cual emanó la resolución recurrida, salvo que ésta provenga directamente de dicha autoridad superior (art. 2º inc. 3);

Que el pronunciamiento que el causante impugna es un dictamen del Departamento de Coordinación y Asuntos Legales conformado por la Dirección General Inmobiliaria, pronunciamiento que por carecer de los requisitos formales del acto administrativo no puede ser considerado resolución y que, además de acuerdo con lo resuelto reiteradamente por el ex- Ministe-

(1) Ver Digesto Administrativo nº 43

rio de Hacienda y esta Secretaría de Estado (ver entre otras, la Resolución Nº 1261/57 bis), mientras no haya emanado el acto administrativo adverso al peticionante, éste no puede interponer recurso jerárquico; no procediendo, en consecuencia, en el presente caso admitir que exista recurso jerárquico interpuesto conforme a la ley (decreto 7520/44, artículo 2º);

Que, a los efectos de salvar la situación expuesta, corresponde disponer que la repartición del ramo proceda a dictar de inmediato, con los debidos recaudos formales del caso, la resolución pertinente.

Por ello y oída la Dirección General de Asuntos Jurídicos

EL SECRETARIO DE HACIENDA
R E S U E L V E:

1º Desestimar el recurso interpuesto.

2º Publíquese, comuníquese y pase a la Dirección General Inmobiliaria a los fines indicados en el último considerando de la presente y demás efectos.-

Fdo: RICARDO LUMI.

RESOLUCION Nº 1368.-

Poder Ejecutivo Nacional
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº 880.-

PRESUPUESTO - ECONOMIAS

Buenos Aires, 11 de noviembre de 1958.-

Visto la iniciación del nuevo ejercicio financiero de la administración pública nacional, que de conformidad con las pertinentes disposiciones en vigencia abarca el período 1º - de noviembre de 1958 al 31 de octubre de 1959;

Atento que, no habiendo sido aún aprobado por el H. Congreso de la Nación el presupuesto general del Estado que debe regir en el citado año fiscal, cuyo proyecto se encuentra a consideración del Poder Legislativo, ha entrado automáticamente en aplicación - a los fines de la continuidad de los servicios - el plan de gastos que estuvo en vigencia en el anterior ejercicio 1957-1958 (Ley de Contabilidad, artículo 13) y,

CONSIDERANDO:

Que como ya lo ha hecho público este Gobierno las dificultades financieras por las que atraviesa el erario nacional imponen la necesidad ineludible de adoptar rigurosas medidas de contención de los gastos públicos, que deben materializarse gradualmente para mitigar los déficit presupuestarios, cuya repetición anual constituye uno de los principales factores de perturbación en el proceso de la recuperación económica del país;

Que, consecuente con el propósito enunciado, el Poder Ejecutivo se halla abocado al estudio de un programa integral - de normas cuya aplicación se estima factible en este nuevo ejercicio financiero, aún cuando por razones de tiempo y del lógico encadenamiento de esta clase de cuestiones, dicho programa deberá desarrollarse por etapas sucesivas que conformen un proceso de intensificación creciente, requiriéndose para su cumplimiento la adopción de medidas de características diversas y la utilización de distintos medios y conductos -

que posibiliten su efectivación;

Que en ese orden de ideas se impone, como una primera medida de carácter general establecer de inmediato una restricción para la utilización de los créditos que contengan los planes de gastos en vigor, estimándose prudente que tal restricción se disponga en razón de un percentaje de reducción, de aplicación uniforme sobre los presupuestos, de tal manera que el procedimiento facilite la consecución del propósito perseguido, con las menores dificultades que sea posible para las dependencias administrativas y contables a cuyo cargo se encuentre el cumplimiento y el contralor de las normas respectivas;

Que desde otro punto de vista, aunque igualmente encaminado a la obtención de resultados análogos, el Poder Ejecutivo estima conveniente dejar debidamente aclarado que en el nuevo ejercicio financiero 1958-1959 continúan en vigencia distintas normas de economía en los gastos públicos, que tuvieran aplicación en el año fiscal de 1957-1958 según el Decreto Ley Nº 16.990/57 (¹);

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA
D E C R E T A :

Artículo 1º.- Las autorizaciones para gastar del presupuesto general de la administración nacional para el ejercicio 1958-1959, vigentes en virtud del artículo 13 de la Ley de Contabilidad, se afectarán - con relación al monto total del crédito autorizado para cada anexo o jurisdicción - en la forma siguiente:

a) En el Veinte por ciento (20%) las correspondientes a la Sección 1a.-
Presupuesto de gastos, Título I
Servicios; y

b) En el Cuarenta por Ciento (40%) las correspondientes a la Sección 2a.-
Presupuesto de Inversiones Patrimoniales, Título I - Inversiones y Título II - Trabajos Públicos.

Las afectaciones indicadas precedentemente comprenden todas las financiaciones con que se atienden las respectivas erogaciones.-

Artículo 2º.- Dentro de los Veinte (20) días de la fecha de-

(¹) Ver Digesto Administrativo nº 409

publicación de este decreto, los servicios administrativos de cada uno de los Poderes, Ministerios, Secretarías de Estado - Tribunal de Cuentas de la Nación y Entidades Descentralizadas comunicarán directamente a la Contaduría General de la Nación, los montos de las afectaciones preventivas de los presupuestos que correspondan a sus respectivas jurisdicciones y los apartados de los mismos en que aquéllas se efectúen previamente certificados por las Delegaciones del Tribunal de Cuentas de la - Nación, indicando al propio tiempo las órdenes de disposición de fondos y los importes a afectar en estas últimas.-
Sobre la base de tales informaciones, la Contaduría General de la Nación procederá a afectar los créditos y órdenes de disposición que correspondan, y vigilará el cumplimiento de lo dispuesto mediante el análisis de los saldos que arrojen los estados mensuales de ejecución de los presupuestos, sin perjuicio de detener el curso de los libramientos en los casos de exceso con relación a las cifras globales de los créditos netos autorizados.-
Artículo 3º.- Los funcionarios titulares de las Direcciones - de Administración y organismos que hagan sus veces son directamente responsables del estricto cumplimiento de lo que establece el artículo 2º. Transcurrido el plazo a que el citado artículo se refiere, sin haberse remitido a la Contaduría General de la Nación la comunicación de que se trata, dicha Repartición no dará curso a ningún libramiento con cargo a los créditos del presupuesto correspondiente y dará cuenta de la transgresión al Tribunal de Cuentas de la Nación, a los fines que - procedan conforme con lo previsto en el inciso j) del artículo 84 de la Ley de Contabilidad.-
Igualmente son responsables los titulares de las Direcciones - de Administración y organismos que hagan sus veces de la adopción o proposición de medidas, en sus respectivas órbitas jurisdiccionales, que aseguren que las inversiones que emerjan de - las ejecuciones presupuestarias no excedan las disponibilidades crediticias netas que resulten luego de efectuadas las afectaciones que dispone el artículo 1º de este decreto.-
Artículo 4º.- Déjase establecido que, con la sola adaptación de fechas y de forma que fueran del caso, rigen en el ejercicio financiero 1958-1959 y hasta tanto otras normas de economía los sustituyan los siguientes artículos del Decreto-Ley nº 16.990/57: 21 a 25, 27 a 31, 33 y 34.-

Artículo 5º.- La Secretaría de Hacienda de la Nación dará las normas aclaratorias y de interpretación que se requieran para la más adecuada aplicación de este decreto.-

Artículo 6º.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda.-

Artículo 7º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y pase al Tribunal de Cuentas y a la Contaduría General de la Nación a sus efectos.-

FRONDIZI - Emilio Donato del Carril - Ricardo Lumi.

DECRETO Nº 9769.-

Poder Ejecutivo Nacional
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº 881.-

PROCURACION DEL TESORO - CUERPO DE ABOGADOS DEL ESTADO

Buenos Aires, 24 de octubre de 1958.-

Visto lo propuesto por el Procurador del Tesoro de la Nación, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 12 del Decreto número 14.546/43 (1) modificado por el Decreto Nº 8878/57 (Decreto-Ley Nº 9920/57) y el artículo 2º de la ley Nº 12.954; establecen la forma de reemplazar al Procurador del Tesoro en los casos de excusación, ausencia o impedimento;

Que por el artículo 3º del Decreto-Ley nº 8013/57 (") se autoriza a dicho funcionario a delegar determinadas funciones, representaciones o asuntos, en el Subprocurador; y que por los artículos 6º del Decreto Nº 14546/43 y 12 inciso e) del Decreto Nº 34952/47, reglamentario de la ley nº 12954, se le autoriza para hacerse representar en juicio por funcionarios letrados de la Procuración;

Que en razón de las múltiples tareas que cumple dicha Repartición para agilitar su servicio, es conveniente modificar parcialmente la reglamentación relativa a las funciones asignadas por delegación al Subprocurador al Abogado - Inspector y a la Oficina de Asuntos Judiciales,

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA
D E C R E T A :

(1) Ver Digesto Administrativo Nº 91
(") Ver Digesto Administrativo Nº 271

Artículo 1º.- El Subprocurador del Tesoro, sin perjuicio de las funciones que se le confieren por otras normas legales o reglamentarias:

a) Reemplaza al Procurador en casos de excusación, ausencia o impedimento;

b) Suscribe los dictámenes o escritos judiciales relativos a asuntos que, para su estudio o patrocinio, según el caso, le hubieren sido asignados por el Procurador con carácter general o especial.-

Artículo 2º.- El Abogado Inspector, sin perjuicio de las funciones que se le confieren por otras normas legales o reglamentarias:

a) Reemplaza al Subprocurador en casos de excusación, ausencia o impedimento, con todas las facultades previstas por el artículo precedente;

b) Es el Jefe del despacho teniendo a su cargo la vigilancia de las oficinas de asesoramiento y de atención de los juicios que integran la Procuración.-

Artículo 3º.- En caso de excusación, ausencia o impedimento del Procurador, Subprocurador y Abogado Inspector, será reemplazado por el abogado que siga a este último en orden jerárquico. En caso de haber dos o más abogados en el mismo orden jerárquico por el de mayor edad.-

Artículo 4º.- El Procurador del Tesoro podrá sustituir su representación en juicio, delegándola en el Abogado Inspector y/o en el Abogado Jefe de la Oficina de Asuntos Judiciales, excepto en los escritos de demanda, reconvención, formación de incidentes o sus correspondientes contestaciones, ofrecimientos de prueba, alegato, expresión de agravios y memoriales. En la asistencia a comparendos, audiencias y diligenciamientos de medidas probatorias o cautelares, podrá además, hacerse representar por otros funcionarios letrados de la Procuración. En todos los casos constituirá documento habilitante la nota poder que al efecto suscribe el Procurador, a cuyas instrucciones ajustarán su cometido los funcionarios mencionados.-

Artículo 5º.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario en el Departamento del Interior.-
Artículo 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.-

FRONDIZI - Alfredo R. Vítolo.

DECRETO Nº 8328.-

Poder Ejecutivo Nacional
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº 382.-

PASAJES OFICIALES Y ORDENES DE CARGA - INDEMNIZACION POR TRASLADO

///nos Aires, 13 de noviembre de 1958.-

El adjunto planteo se refiere al requerimiento formulado por el Ministerio del rubro, en el sentido de aclarar si corresponde otorgar órdenes de pasajes y carga a un profesor trasladado a su solicitud.

Atento que ninguna disposición se refiere expresamente a situaciones como la que trata el adjunto expediente, esta Secretaría entiende que en estos casos corresponde aplicar un criterio concordante con disposiciones similares del Decreto nº 18.989/56 (+), en las que el traslado de agentes se halle comprendido.

Al respecto el artículo 5º del citado pronunciamiento, que se refiere a la indemnización por traslado, establece que dicho beneficio es la asignación que corresponde al personal que sea trasladado con carácter permanente de su asiento habitual, siempre que el desplazamiento no se disponga a solicitar del agente.

Conforme a lo expresado, aplicando por analogía el principio sostenido por el artículo 5º para la liquidación de indemnización, al actor de los adjuntos actuados no le corresponde el otorgamiento de órdenes de pasajes y carga que solicita.

A mayor abundamiento esta Secretaría estima conveniente señalar que partiendo de la premisa cierta de que el Estado no es el causante del traslado a que alude el expediente agregado, no tiene porque hacerse cargo de un gasto resultante de un acto provocado por motivos extraños a su administración.

(+) Ver Digesto Administrativo Nº 14.-

Con la opinión expuesta a la que se asigna carácter de resolución aclaratoria de conformidad con los términos del artículo 17 del Decreto nº 18.989/56, vuelva al Ministerio de Educación y Justicia a los fines que estime corresponder, sirviendo la presente de atenta nota de remisión.-

Fdo. RICARDO LUMI
Secretario de Hacienda de la Nación

RESOLUCION Nº 304.-

Poder Ejecutivo Nacional
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº 883.-

ESTATUTO DEL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL (Art. 9º) - TRASLADOS - SANCIONES

Cde. Expediente nº 520.261/58
Providencia nº 276.-

//nos Aires, 17 de junio de 1959.-

Vuelva a la Dirección General de Contabilidad y Administración llevando a su conocimiento que esta Dirección General considera que la Dirección Nacional de Aduanas, atendiendo a la conveniencia de un mejor servicio, puede disponer el traslado de los causantes a otras tareas que no impliquen tarea de fiscalización, sin que ello signifique una sanción disciplinaria ni afecte su situación escalafonaria.

En efecto, tal procedimiento esta ajustado a las previsiones del Estatuto del Personal Civil, que implícitamente contempla el traslado de un agente a funciones distintas de aquellas en base a las cuales haya sido escalafonado, al disponerse en el art. 9º que "el derecho a la carrera administrativa se refiere siempre a la clase, grupo y categoría, y no a la función que se le haya asignado, si esta última no fuera inherente a aquéllos".

DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO CIVIL DE LA NACION.-

Fdo. JOSE LUIS FRANGI
Director General

Poder Ejecutivo Nacional
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nª 884.-

INDEMNIZACION POR TRASLADO - HORAS EXTRAS

Expediente nº 7.301 - 1958.-

Buenos Aires, setiembre 26 de 1958.-

Vuelva a la Secretaría de Agricultura y Ganadería para poner en su conocimiento con respecto al planteo a que se refiere el expediente adjunto, que esa Secretaría frente a lo dispuesto por el Decreto nº 10.190/57 y no obstante no aclararlo expresamente la Resolución (M.H.) nº 241/57 (+), entiende que a los efectos de determinar la remuneración básica a que se refiere el Decreto nº 18.989/56 (°) para liquidar indeminización por traslado y retribución por servicios extraordinarios, debe adoptarse por razones obvias, igual tratamiento que el aplicado para la liquidación de viático.

Sirva la presente de atenta nota de envío.-

Fdo. RICARDO LUMI
Secretario de Hacienda de la Nación

RESOLUCION Nª 226.-

(+) Ver Digesto Administrativo Nª 362.-
(°) Ver Digesto Administrativo Nª 14.-

Poder Ejecutivo Nacional
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº 885.-

ESTATUTO PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL (Art. 34º) - SANCIONES

Expediente nº 315.661/59.
Providencia nº 214

//nos Aires, 11 de mayo de 1959.-

Vuelvan las presentes actuaciones a la Dirección General de Suministros del Estado llevando a su conocimiento que no compete a este organismo entrar en la consideración de situaciones como la planteada en el art. 3º de la Resolución - de fojas 3. La graduación de las penalidades por faltas incurridas por el personal es privativa de cada Repartición, en función de las normas establecidas en el Estatuto del Personal Civil y su Reglamentación (art. 34º y sus correlativos).-

Fdo. JOSE LUIS FRANGI
Director General
Servicio Civil de la Nación

Poder Ejecutivo Nacional
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº 886.-

PROCURACION DEL TESORO

Buenos Aires, 13 de enero de 1959.-

Visto las funciones que cumple en la práctica el señor Procurador del Tesoro, en relación con la actividad específica de la dependencia a su cargo y los asuntos en que interviene por disposición expresa de la Presidencia de la Nación, y

CONSIDERANDO:

Que resulta conveniente determinar su jerarquía, dentro de la organización administrativa existente, así como adecuar a ésta su retribución,
Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA
D E C R E T A :

Artículo 1º.- El señor Procurador del Tesoro de la Nación tendrá jerarquía de Secretario de Estado, y gozará de la misma retribución prevista para éstos en el Presupuesto de la Nación.-
Artículo 2º.- La diferencia existente entre su sueldo actual y el fijado por el presente decreto, será imputada a Rentas Generales, hasta tanto se realice la modificación presupuestaria correspondiente.-
Artículo 3º.- El presente decreto será refrendado por los señores Ministros Secretarios en los Departamentos del Interior y de Economía y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda.-

Artículo 4º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.-

FRONDIZI - Emilio Donato del Carril - Alfredo R. Vítolo - Ricardo Lumi.

DECRETO Nº 354.-

Poder Ejecutivo Nacional
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº 887.-

DIVISAS - CAMBIOS - CONTRATACIONES EN EL EXTERIOR

Buenos Aires, 13 de enero de 1959.-

Visto el decreto nº 11.916/58, por el cual se establece un nuevo régimen de cambios, y

CONSIDERANDO:

Que han quedado eliminados todos los controles sobre comercio y pagos;
Que las Reparticiones Oficiales deberán ajustarse a las normas de carácter general dictadas en la materia,
Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA
D E C R E T A :

Artículo 1º.- Déjase sin efecto el Decreto nº 5757/57 que establece que las reparticiones públicas y empresas del Estado para la realización de compras de cambio en el mercado libre deben obtener una certificación, en el sentido de que la operación cuenta con los resguardos correspondientes
Artículo 2º.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado por los señores Secretarios de Finanzas y de Hacienda.-
Artículo 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.-

FRONDIZI - Emilio Donato del Carril -
Antonio López - Ricardo Lumi

DECRETO Nº 342.-

Poder Ejecutivo Nacional
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº 888.-

ESTATUTO PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL (Arts. 34º y 39º) - SANCIONES - SUSPENSION - SUMARIO - CESANTIA - EXONERACION

Expediente nº 90.058 - 1959.-
Providencia nº 152.-

//nos Aires, 2 de marzo de 1959.-

Vuelvan las presentes actuaciones a la Dirección General de Despacho de la Secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería llevando a su conocimiento que de conformidad con lo establecido en el art.39º del Estatuto del Personal Civil, el pago de haberes al personal suspendido por causas puramente administrativas, está sujeto a las siguientes normas:

1ª.- Cumplido el período de treinta (30) días de suspensión (art. 34º, inc. b) y 39º del Estatuto),el agente adquiere el derecho a percibir sus haberes, a partir de ese momento, aún en el supuesto de que finalizado el mismo, fuera imprescindible mantenerlo alejado del servicio, no obstante que del sumario no surgiera culpabilidad.

2ª.- Ese derecho no es aplicable en el caso de que la prueba acumulada en el sumario autorice disponer lo contrario, en cuyo caso ese lapso podrá extenderse hasta un máximo de noventa (90) días.

3ª.- Cuando el agente sea pasible de cesantía o exoneración no tendrá derecho a percibir los haberes por el lapso durante el cual estuvo suspendido.

4º.- En el caso de un agente que habiendo sido suspendido en los términos establecidos demuestre su absoluta inculpabilidad, o que quede debidamente comprobado por la autoridad competente que corresponde su rehabilitación, éste tendrá derecho a percibir la totalidad de las remuneraciones por el tiempo que permaneció suspendido.

Sirva la presente de atenta nota de remisión.-

Fdo. JOSE LUIS FRANGI
Director General
Servicio Civil de la Nación

Poder Ejecutivo Nacional
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº 889.-

ESTATUTO PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL (Arts. 38º y 39º) - SUSPENSION PROVISIONAL - SUMARIOS

Expediente nº 42.725 - 1958
Providencia nº 165.-

//nos Aires, 11 de marzo de 1959.-

Vuelvan las presentes actuaciones a la Dirección General de Contabilidad y Administración llevando a su conocimiento lo siguiente:

I) La suspensión que cumplió el causante corresponde considerarla en dos partes: del 14 de febrero al 26 de junio de 1957, y del 27 de junio de 1957 al 10 de setiembre de 1958.

En el primero de esos lapsos estaban en vigencia las normas del Estatuto aprobado por decreto nº 33.827/44; en el segundo, los de su similar puesto en vigencia por el decreto-ley nº 6.666/57 (+), publicado en el Boletín Oficial el 26 de junio de 1957, y por lo tanto (art. 2º del Código Civil) rige desde el día siguiente al citado.

II) El art. 38º del decreto nº 33.827/44 establecía que si fuera necesario para la sustanciación de la causa administrativa el agente podría ser suspendido preventivamente por un lapso no mayor de sesenta (60) días, vencido el cual sin que se hubiese dictado Resolución, seguiría apartado de sus funciones si resultare necesario, pero no podría ser privado de sus haberes. Si no mereciere sanción privativa de haberes, éstos le serían íntegramente abonados.

(+) Ver Digesto Administrativo Nº 254.-

El art. 34° del mismo decreto establecía que la suspensión de un agente no podría exceder de tres (3) meses.

III) Por su parte, el art. 39° del Estatuto vigente (decreto-ley n° 6.666/57) fija la suspensión del agente presuntivamente incurso en faltas, en un término no mayor de treinta (30) días, cumplido el cual sin que se hubiese dictado resolución en el sumario, podrá seguir apartado de sus funciones si resultare necesario, pero tendrá derecho a partir de entonces a la percepción de sus haberes, salvo que la prueba acumulada autorizara lo contrario. El total de la suspensión no puede exceder de noventa (90) días. Si la sanción definitiva no fuera privativa de haberes corresponde abonar éstos en forma íntegra, o en la proporción que corresponda, en caso contrario.

IV) De lo expuesto surge que ni uno ni otro Estatuto autorizan la prolongación de una suspensión por un lapso mayor de noventa (90) días, y en cuanto al cobro de haberes, lo disponen a partir de los sesenta (60) y treinta (30) días, respectivamente. Pero como no es posible adoptar en la resolución de un sumario dos normas distintas, se debe estar a lo que resulta de aplicar el art. 2° del Código Penal, esto es, que los sumarios instruídos con anterioridad a la vigencia del decreto-ley n° 6.666/57, deben resolverse con arreglo a sus disposiciones, siempre que se trate de la ley más benigna (dictamen del señor Procurador del Tesoro de la Nación, del 28/4/58).

En consecuencia, tratándose en el presente caso de un sumario resuelto íntegramente en la esfera administrativa, sin intervención alguna de la Justicia, cabe la aplicación lisa y llana del ya citado art. 39° del Estatuto del Personal Civil, del cual resulta que, siendo la sanción aplicada al causante, de un (1) mes de suspensión, sin goce de

haberes, procede el pago de los haberes por todo el restante, período en que permaneció separado de sus funciones.-

DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO CIVIL DE LA NACION.-

Fdo. JOSE LUIS FRANGI
Director General

Poder Ejecutivo Nacional
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº 890.-

ESTATUTO PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL (Art. 46º) - CANCELACION DE NOMBRAMIENTO

Act. nº 32.566/59.-
Providencia nº 216.

//nos Aires, 11 de mayo de 1959.-

Vuelvan las presentes actuaciones a la Dirección General de Contabilidad y Administración llevando a su conocimiento que el egreso del personal comprendido en los alcances del Estatuto del Personal Civil sólo puede hacerse efectivo de acuerdo con las normas resultantes del art. 46º del mismo. El personal que se encuentra en el período de prueba puede ser separado con la simple cancelación de su nombramiento.-

Fdo. JOSE LUIS FRANGI
Director General
Servicio Civil de la Nación

Poder Ejecutivo Nacional
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº 891.-

CAMBIO - DIVISAS

Buenos Aires, 30 de diciembre de 1958.-

Visto la necesidad de establecer el nuevo valor de nuestro signo monetario a raíz del programa de medidas económicas que encara en estos momentos el Poder Ejecutivo y,

CONSIDERANDO:

Que en la formación de dicho programa uno de los aspectos primordiales es el de adecuar las tasas de cambio a un nivel real y compatible con la estabilidad de nuestra economía;

Que de ello surge que debe encararse el establecimiento de un régimen único y libre de cambio, eliminándose así la excesiva intervención estatal que distorsiona el valor de nuestra moneda,

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA
D E C R E T A :

Artículo 1º.- La Secretaría de Estado de Finanzas por intermedio del Banco Central de la República Argentina dispondrá a partir de la fecha la suspensión de la actual paridad que se registra como tipo de cambio de m$n. 18 por dólar de los Estados Unidos de Norte América o sus equivalentes en otras monedas, para la compra y venta de divisas extranjeras en el mercado oficial.-

Artículo 2º.- Mientras dure esta situación y hasta tanto no se establezca la nueva paridad, prevista dentro de los acuerdos celebrados por nuestro país con el Fondo Monetario Internacional, todas las transacciones relacionadas con la compra y venta de divisas se efectuarán a través de un úni-

co mercado cambiario, cuyo nivel estará determinado por el libre juego de las fuerzas del mercado.-

Artículo 3º.- El Banco Central de la República Argentina adoptará todas las disposiciones relativas a la aplicación y ordenamiento de la nueva estructura cambiaria de acuerdo con lo establecido en el presente decreto.-

Artículo 4º.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado por el señor Secretario de Estado de Finanzas.-

Artículo 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.-

FRONDIZI - Emilio Donato del Carril - Antonio López

DECRETO Nº 11.916.-

Poder Ejecutivo Nacional
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº 892.-

SUBSIDIO FAMILIAR - DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA

Expediente nº 1.337 - 1959.-
Providencia nº 218.-

//ñor Secretario de Estado de Hacienda:

Si bien la Dirección General Impositiva no se halla encuadrada en ninguno de los dos supuestos del artículo 2º del decreto nº 4.631/59 (+), esta Dirección General considera que, siendo el subsidio familiar otorgado al personal de esa Repartición (art. 17º del decreto nº 7.738/58 (º) de carácter similar al determinado en el Escalafón aprobado por decreto nº 9.530/58, art. 26º, no existen inconvenientes en que la liquidación del mismo se haga efectiva en base a las normas complementarias sancionadas en el decreto citado en primer término.-

DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO CIVIL, 15 de mayo de 1959.-

Fdo. JOSE LUIS FRANGI
Director General

//nos Aires, 18 de mayo de 1959.-

APROBADO: vuelva a sus efectos a la Dirección General Impositiva.-

Fdo. RICARDO LUMI
Secretario de Estado de Hacienda

(+) Ver D.A.Nº 738.-
(º) Ver D.A.Nº 639.-

Poder Ejecutivo Nacional
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº 893.-

ESTATUTO PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL (Arts. 34°, 37° y 41°) - ABANDONO DEL SERVICIO

Expediente nº 39.702 - 1958.-
Providencia nº 166.-

//ñor Subsecretario de Hacienda:

La Dirección General de Contabilidad y Administración formula una consulta en el sentido de establecer si corresponde dar vista del sumario a un agente que, habiendo hecho abandono de su cargo, presentó su renuncia en una fecha muy posterior a la de cesación de servicios.

Al respecto, cabe destacar que el causante fué citado dos veces con el propósito de sustanciar el sumario administrativo respectivo (art. 41° del Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública Nacional y su Reglamentación) sin haberse presentado en ninguna de esas oportunidades.

La Junta de Disciplina correspondiente recusa la renuncia por no haber sido presentada en término y aconseja la cesantía, encuadrando al empleado cuestionado en las prescripciones de los arts. 34° inciso e) y 37° inciso c) del citado cuerpo legal.

Atento la consulta formulada, esta Dirección considera que el trámite seguido en estas actuaciones se ajusta a lo prescripto en el punto XVIII de la Reglamentación del artículo 41° del citado Estatuto, no resultando procedente

la vista al causante, que no se ha presentado a prestar declaración con anterioridad.-

DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO CIVIL, 13 de marzo de 1959.-

Fdo. JOSE LUIS FRANGI
Director General

Buenos Aires, 26 de marzo de 1959.-

Con lo informado precedentemente, pase a sus efectos a la Dirección General de Contabilidad y Administración.-

Fdo. RAFAEL RODOLFO AYALA
Subsecretario de Hacienda

Poder Ejecutivo Nacional
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº 894.-

ESTATUTO DEL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL (Art. 35º) - SANCIONES - SUSPENSIONES

Expediente nº 847.960 - 1958.-
Providencia nº 189.-

//nos Aires, 13 de abril de 1959.-

Vuelvan estas actuaciones a la Dirección General de Contabilidad y Administración llevando a su conocimiento, respecto de las cuestiones planteadas precedentemente, lo siguiente:

1ª.- Esta Dirección General considera que el artículo 35 del Estatuto del Personal Civil y de su Reglamentación al referirse a "organismos dependientes del Poder Ejecutivo" ha querido involucrar en esa expresión a los organismos no pertenecientes a la Administración Central de los Ministerios y Secretarías de Estado, vale decir, a los organismos descentralizados y/o autárquicos. De otra manera no se justificaría la diferenciación hecha al establecer que "la suspensión mayor de diez (10) días y la postergación, serán dispuestas por los Ministerios y autoridades superiores de los organismos, según corresponde", a través de la cual resulta evidente que la voluntad del Poder Ejecutivo fué determinar la autoridad de aplicación de las medidas disciplinarias comentadas, dentro de cada una de las dos ramas de la Administración Pública; organismos centralizados, y organismos descentralizados y/o autárquicos.

En consecuencia, se estima que en los organismos de la Secretaría de Hacienda que conforman su Administración Central, aquellas sanciones, que excedan de los diez (10)días de suspensión, deben ser aplicadas por el señor Secretario de Estado, mientras que en los restantes, lo serán por la autoridad máxima de cada uno de los mismos, sin ser necesario en este último caso ratificación o aprobación posterior alguna.

2ª.- Respecto del procedimiento previsto en el artículo 23º de la Disposición nº 469/58 de la Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos, esta Dirección General considera que, de no violar disposiciones expresas del Estatuto del Personal Civil y su Reglamentación y Resoluciones conexas, no corresponde formular objeción alguna al respecto, por tratarse de normas de procedimiento internas de un organismo, que deben suponerse adecuadas a sus necesidades y peculiaridades de funcionamiento.-

Fdo. JOSE LUIS FRANGI
Director General
Servicio Civil de la Nación

Poder Ejecutivo Nacional
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº 895.-

ESTATUTO PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL (Arts. 2º, inciso 1), 4º inciso d) y 39º) - NOMBRAMIENTO - INGRESO

Expediente nº 845.710 - 1958
Providencia nº 191.-

//ñor Subsecretario de Hacienda:

La Dirección General de Contabilidad y Administración solicita se emita opinión con relación a la situación planteada con un agente de la División Transportes, dependencia del ex-Instituto Nacional de Acción Social y posteriormente de la Oficina Decreto-Ley nº 12.029/57 (+), que fuera nombrado por decreto nº 1.840/58 (°), a partir del 1º de marzo de 1958, en la Dirección General de Suministros del Estado.

El causante fué suspendido provisionalmente, a raíz de un hecho delictuoso cometido en la repartición donde prestaba servicios, con anterioridad al 16 de diciembre de 1957, es decir cuando esta incorporado a la Cuenta Especial Cumplimiento Decreto-Ley nº 12.029/57, con dependencia funcional de la Dirección General de Contabilidad y Administración.

Al respecto, a fin de poder dilucidar el presente caso es necesario determinar la real situación de revista del empleado en el momento de producirse el hecho.

En efecto, si al causante se lo considera incluído dentro de los alcances del Estatuto del Personal Civil (decreto ley nº 6.666/57) ('), en su carácter de agente de la Cuenta

(+) Ver Digesto Administrativo Nº 335.-
(°) Ver Digesto Administrativo Nº 429.-
(') Ver Digesto Administrativo Nº 254.-

Especial recordada precedentemente, su nombramiento en la Dirección General de Suministros del Estado conformaría una transferencia, de acuerdo con el artículo 3°, apartado IV, de la Reglamentación de aquel cuerpo legal, y por lo tanto serían de aplicación las normas del artículo 39° del mismo y su correlativo reglamentario.

Si por el contrario el nombramiento referido constituyera un "ingreso" en la Administración Pública Nacional, el causante se hallaría comprendido en los términos del artículo 4°, inciso d) del Estatuto, y por consiguiente, inhibido para ese ingreso.

A este respecto cabe destacar que el art. 7° del decreto n° 13.115/57, aprobatorio de la creación de la Cuenta Especial Decreto-Ley 12.029/57, estableció que el personal de la misma revistará "hasta tanto se resuelva definitivamente sobre su destino, con arreglo a lo estatuído por el decreto-ley n° 6.666/57, Capítulo I, art. 2ª, apartado 1)". Vale decir, que dicho personal se encontraba excluído del ámbito de aplicación del citado Estatuto, y por lo tanto su designación en la Dirección General de Suministros del Estado constituyó un "ingreso" y no una "transferencia".

En consecuencia, considera esta Dirección General que en el presente caso es de aplicación la norma resultante del art. 4°, inciso d) del Estatuto del Personal Civil, según la cual no puede ingresar a la Administración Nacional el que tenga pendiente proceso criminal.-

DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO CIVIL, 14 de abril de 1959.-

Fdo. JOSE LUIS FRANGI
Director General

Poder Ejecutivo Nacional
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº 896.-

ESTATUTO DEL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL (Art. 35º) - SANCIONES - SUSPENSION - DESCUENTOS - LICENCIA

Expediente nº 250.394 - 1959
Providencia nº 193.-

//nos Aires, 16 de abril de 1959.-

Vuelvan las presentes actuaciones a la Dirección General Impositiva llevando a su conocimiento que, acerca de la situación planteada en estos actuados, se considera los siquiente:

a) el descuento a practicar sobre los haberes de un agente, como resultado de una medida disciplinaria de suspensión, no puede tener lugar hasta tanto dicha suspensión se haya efectivizado;

b) el art. 35º de la Reglamentación del Estatuto del Personal Civil establece en su apartado I) que las suspensiones, tanto correctivas como preventivas, se harán efectivas sin prestación de servicios, y sin goce de haberes. Encontrándose el agente en uso de licencia -por servicio militar u otra causa-, no puede tener lugar la materialización de la sanción disciplinaria comentada, para lo cual es menester que el agente se encuentre en actividad, pues de otra manera la sanción se reduciría al descuento de haberes y su anotación en la foja de servicios, pero sin dar cumplimiento a la norma destacada en el párrafo precedente.

c) en consecuencia, en los casos que dan origen a este expediente, corresponderá que los causantes hagan efectivas las suspensiones impuestas, al reintegrarse a sus tareas una vez cumplido el Servicio Militar Obligatorio, practicándose en esa oportunidad el descuento pertinente sobre sus haberes.

Sirva la presente de atenta nota de remisión.-

Fdo. JOSE LUIS FRANGI
Director General
Servicio Civil de la Nación

Poder Ejecutivo Nacional
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nª 897.-

ESTATUTO DEL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL (Art. 39ª)- SUSPENSION PROVISIONAL

Expediente nº 90.083 - 1959.-
Providencia nº 203.-

//nos Aires, 5 de mayo de 1959.-

Vuelvan las presentes actuaciones a la Dirección General de Personal del Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública de la Nación, informando respecto de las consultas formuladas, lo siguiente:

1ª.- Un agente que haya sido suspendido provisionalmente por encontrarse bajo proceso criminal, por imputación de delitos ajenos o no al servicio, no puede ser reintegrado al mismo hasta tanto demuestre su inculpabilidad con el testimonio de la sentencia firme recaída en la causa judicial conforme lo determina el artículo 39º punto I de la Reglamentación del Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública Nacional.

Al respecto es dable señalar que esta Dirección General ha propiciado (expediente nº 3.417/58) la modificación de dicha norma, en el sentido de reintegrar a sus funciones al agente que haya sido sobreseído provisionalmente, sin perjuicio de las penalidades posteriores que pudieran surgir en caso de reabrirse la causa, proposición que fué elevada a consideración del señor Procurador del Tesoro de la Nación con fecha 6 de marzo ppdo. Asimismo, y en base a lo sugerido por

la Dirección General de Asuntos Jurídicos de ese Ministerio en el expediente nº 98.257/58 se están realizando los estudios tendientes a propiciar una posible modificación de la norma referida, consistente en una diferenciación, en cuanto al término de la suspensión, en los casos de delitos, ya se califiquen éstos de dolosos o culposos. Mientras estas dos proposiciones no se concreten por la vía del pertinente, decreto del Poder Ejecutivo, deberá estarse al procedimiento taxativamente determinado en la reglamentación del artículo 39º del Estatuto.

Con referencia al pago de haberes, el señor Procurador del Tesoro dictaminó con fecha 1º de abril ppdo., que no corresponde la percepción de los mismos durante el tiempo que el empleado haya estado suspendido en virtud de un hecho delictuoso ajeno al servicio, aún cuando fuera sobreseído definitivamente.

2ª.- El artículo 39º, ya citado, no establece diferenciación alguna respecto de los delitos que puedan dar lugar a proceso criminal, y consecuentemente, con los recaudos que fundamenta el sobreseimiento definitivo del imputado. En consecuencia, el sobreseimiento definitivo opera el mismo efecto ya se alcance por declaración de inculpabilidad, por prescripción de la acción penal, o por pago de multa. La valoración de la conducta del agente no puede sino fundarse en el resultado del proceso judicial, cuya resolución definitiva hace cosa juzgada sobre la responsabilidad o irresponsabilidad del procesado toda vez que se trate de hechos ajenos al servicio.

3ª.- De acuerdo con el artículo 39º, a que se ha hecho referencia, existen dos supuestos: a) el agente privado de libertad; b) el sometido a proceso criminal. En el primer caso la suspensión dura hasta que recupere su libertad; en el

segundo, hasta que demuestre su inculpabilidad con el testimonio de la sentencia firme respectiva. En ninguno de los dos supuestos cabe el pago de haberes, por las razones expuestas al tratar el punto 1º).

4º.- Con lo consignado en los tres puntos anteriores queda contestada esta consulta.

Sirva la presente de atenta nota de remisión.-

Fdo. JOSE LUIS FRANGI
Director General
Servicio Civil de la Nación

Poder Ejecutivo Nacional
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº 898.-

ESCALAFON PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL (Punto 2º) - PROFESIONALES

Expediente nº 90.151 - 1959.-
Providencia nº 220.-

//nos Aires, 18 de mayo de 1959.-

Vuelvan estas actuaciones a la Secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería -Dirección General de Despacho- llevando a su conocimiento que el artículo 2º del Escalafón aprobado por decreto nº 9.530/58 establece que corresponde ubicar en la Clase C - "Personal Profesional", "a las profesiones con título universitario, ejercidas por agentes que se desempeñen en función reservada únicamente a su profesión".

No pueden incluirse por tanto en esa Clase a agentes con títulos que no hayan sido expedidos por Universidades Nacionales.

Sirva la presente de atenta nota de remisión.-

DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO CIVIL DE LA NACION.-

Fdo. JOSE LUIS FRANGI
Director General

Poder Ejecutivo Nacional
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº 899.-

ESTATUTO DEL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL (Arts. 41º y 44º) - SANCIONES - TRASLADO

Expediente nº 1.796 - 1958.-
Expediente nº 90.089 - 1959SH
Providencia nº 201.-

//nos Aires, 5 de mayo de 1959.-

Vuelvan las presentes actuaciones a la Dirección General de Personal del Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública llevando a su conocimiento que, como trámite previo a la adopción de las medidas disciplinarias que se estime corresponde aplicar en el presente caso, debe darse intervención en el mismo a la Junta de Disciplina de la respectiva jurisdicción, conforme lo establecen el art. 44º del Estatuto del Personal Civil, y art. 41º, punto XIII, 2º párrafo,y art. 44º de la Reglamentación del mismo, sin cuyo requisito sería legalmente objetable la decisión que se tomare al respecto.

Acerca del aspecto concreto de la consulta formulada precedentemente, cabe informar que el criterio sustentado por la Dirección General de Asuntos Jurídicos de ese Ministerio en el sentido de que resultaría procedente el traslado de la causante a otras funciones -no como sanción, sino por razones de conveniencia de los servicios- conservando su clase, grupo y categoría escalafonarios, está ajustado a las previsiones del recordado Estatuto, que implícitamente contemple el traslado de un agente a funciones distintas de aquellas en base a las cuales haya sido escalafonado, al disponer

se en el art. 9° que "el derecho a la carrera administrativa se refiere siempre a la clase, grupo y categoría, y no a la función que se le haya asignado, si esta última no fuere inherente a aquéllos".

Sirva la presente de atenta nota de remisión.-

DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO CIVIL DE LA NACION.-

Fdo. JOSE LUIS FRANGI
Director General

Poder Ejecutivo Nacional
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº 900.-

DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS

LEY Nº 14.792.-

Sancionada: enero 13-1959.-

POR CUANTO:

EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION ARGENTINA,

REUNIDOS EN CONGRESO, SANCIONAN CON FUERZA DE

L E Y :

ARTICULO 1º.- Modifícase la ley de aduana, texto ordenado en 1956, en la forma que se indica a continuación:

1º - Substitúyese el artículo 1º por el siguiente:

Artículo 1º.- La Dirección Nacional de Aduanas actuará en forma descentralizada en el orden administrativo, tanto en lo que se refiere a su organización y funcionamiento como en lo que atañe a la aplicación, percepción y fiscalización de los gravámenes a su cargo, sin perjuicio de la superintendencia general que ejercerá sobre ella la Secretaría de Hacienda.-
La Dirección tendrá a su cargo la superintendencia y dirección de las aduanas y receptorías y demás oficinas de su jurisdicción e intervendrá en todas las cuestiones que se promuevan en el orden aduanero, con arreglo a las atribuciones que le acuerdan las leyes de aduana.-
2º - Substitúyese el inciso d) del artículo 2º por el siguiente:

d) Resolver con carácter definitivo las apelaciones pre-

vistas en el artículo 52.-

3º - Substitúyese el artículo 7º por el siguiente:

Artículo 7º.- El director nacional está facultado para decidir sobre la organización y reglamentación interna de la Dirección Nacional de Aduanas y respecto de la creación supresión y funciones de sus dependencias.-

4º - Substitúyese el artículo 8º por el siguiente:

Artículo 8º.- El director Nacional de aduanas es autoridad competente para resolver y aprobar los gastos del organismo y para contratar trabajos o suministros con arreglo a las disposiciones de la ley de contabilidad y normas complementarias.-
Anualmente elevará a la Secretaría de Hacienda el proyecto de presupuesto de gastos de la Dirección.-

5º - Substitúyese el artículo 9º por el siguiente:

Artículo 9º.- Asimismo, el director nacional está autorizado para establecer el reglamento interno del personal - y para distribuir el fondo de estímulo con arreglo a la reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo.-
Los nombramientos, ascensos, remociones y sanciones del - personal serán dispuestos por el Poder Ejecutivo por intermedio de la Secretaría de Hacienda, a propuesta de la Dirección Nacional de Aduanas.-

6º - Substitúyese el artículo 11 por el siguiente:

Artículo 11º.- No podrán desempeñar cargos de ninguna categoría rentados o no en la Dirección Nacional de Aduanas u organismos que de ella dependan quienes tengan o hubieren tenido en los últimos dos años relaciones comerciales de cualquier naturaleza o de asesoramiento con firmas exportadoras y/o importadoras.-

7º - Substitúyese el artículo 36 por el siguiente:

Artículo 36º.- Deberán notificarse personalmente o por carta certificada con aviso especial de retorno o por telegrama colacionado:

a) La vista de las actuaciones y auto de apertura a prueba prescriptos en el artículo 46º;

b) El fallo que recaiga en el sumario;

c) La resolución que conceda o deniegue el recurso interpuesto para ante la Dirección Nacional de Aduanas, o ante la Justicia Federal.-

d) Las citaciones que señala el artículo 106 para el retiro de las mercaderías susceptibles de deterioro.-

8º - Substitúyese el artículo 46 por el siguiente:

Artículo 46º.- Dispuesta la instrucción del sumario, realizadas las medidas precautorias e indagatorias indispensables y levantado el secreto en el caso del artículo 44, la autoridad del sumario correrá vista de lo actuado a los denunciados o presuntos responsables y abrirá la causa a prueba. Los interesados dispondrán de diez días perentorios para tomar intervención en los autos y plantear en esa oportunidad todas las cuestiones que hicieran a su derecho.-

9º - Substitúyese el artículo 47 por el siguiente:

Artículo 47º.- Asimismo en esa presentación deberán los interesados ofrecer y pedir las pruebas que consideren conducentes, acompañando las que obren en su poder, e impugnar por defectos de forma las actuaciones sumariales cumplidas hasta ese momento, perdiendo en ambos casos el derecho de hacerlo en adelante.-

10º - Deróganse los artículos 48 y 49.

11º - Substitúyese el artículo 51 por el siguiente:

Artículo 51º.- Las partes podrán renunciar expresamente al término de prueba, ya sea en oportunidad de contestar la vista a que se refiere el artículo 46 o posteriormente, quedando las actuaciones para fallar.-
No obstante ese derecho, la autoridad del sumario podrá, de oficio y sin recurso alguno, mantener los autos abiertos a prueba. A petición justificada de una de las partes, podrá ampliar el término ordinario de prueba, con arreglo a las normas previstas en el Código de Procedimientos en lo Criminal del fuero federal.-

12º - Substitúyese el artículo 59 por el siguiente:

Artículo 59º.- Para el diligenciamiento de la prueba queda fijado en todos los casos el término de diez días, que empezara a correr automáticamente a partir del vencimiento del plazo determinado en el artículo 46, sin necesidad de nueva notificación.-

13º - Derógase el artículo 61.-

14º - Substitúyese el artículo 62 por el siguiente:

Artículo 62º.- Producida que sea la prueba o vencido el término fijado al efecto, quedará el sumario para fallar, previo informe de la oficina de sumarios o del funcionario a quien se encomendó su instrucción, el que deberá suministrarse en el término de 15 días corridos.-

15º - Substitúyese el artículo 67 por el siguiente:

Artículo 67º.- En los casos de los artículos 1054, 1056 y 1057 de las ordenanzas de aduana, el administrador o receptor someterá a la aprobación de la Dirección Nacional de Aduanas los fallos absolutorios que pronuncie en asuntos en que el monto de la sanción prevista por la ley para la infracción exceda de mil pesos moneda nacional.-

16º - Substitúyese el artículo 68 por el siguiente:

Artículo 68º.- Igual procedimiento se deberá observar en los casos en que se atenúe la pena en cualquier proporción siempre que el monto de la atenuación sea superior a mil pesos moneda nacional.-

17º - Substitúyese el artículo 69 por el siguiente:

Artículo 69º.- No será necesario requerir la aprobación a que se refieren los artículos 67 y 68 cuando se trate de casos que no dan lugar a pena por estar las diferencias - dentro de la tolerancia legal o en que la reducción de la sanción esté preceptuada por la ley en forma expresa y cuantitativa.-

18º - Substitúyese el artículo 73 por el siguiente:

Artículo 73º.- Si uno o varios de los denunciados optara por la vía judicial ésta será obligatoria para todos los recurrentes.-
Si todos los denunciados optaran por la vía administrativa ésta será obligatoria para los denunciantes.-
La opción que otorga la ley a los denunciantes sólo tendrá lugar si ninguno de los denunciados apelara de la sentencia.-

19º - Substitúyese el artículo 74 por el siguiente:

Artículo 74º.- Los denunciantes y aprehensores, ya sean - particulares, funcionarios o empleados de aduana o de otras reparticiones, cuando consideren lesionados sus derechos por resoluciones dictadas por el administrador o receptor podrán recurrir en grado de apelación ante la Dirección Nacional de Aduanas o a la justicia federal en la forma, plazos y condiciones establecidos por los artículos 70, 71, 72 y 73.-

20º - Substitúyese el artículo 114 por el siguiente:

Artículo 114º.- Las infracciones cometidas por los pasajeros con sus equipajes, cuando el valor en depósito de la mercadería no exceda de veinte mil pesos moneda nacional,

serán juzgadas en todos los casos por el procedimiento oral y actuado. Las infracciones relativas a equipajes que sobrepasen el valor antedicho y los contrabandos de menor cuantía previstos en el artículo 193, serán juzgados con arreglo al mismo procedimiento, salvo que los denunciados soliciten expresamente la adopción del ordinario.-

21º - Substitúyese el artículo 117 por el siguiente:

Artículo 117º.- El denunciado debe pedir con suficiente antelación a la audiencia todas las medidas indispensables para que la prueba se produzca en la misma y acompañar hasta esa oportunidad la que obre en su poder, perdiendo en ambos casos el derecho de hacerlo en adelante.

22º - Agrégase como segundo párrafo del artículo 118, el siguiente:

Asimismo en esta oportunidad, podrá el interesado plantear todas las cuestiones que hicieren a su derecho.-

23º - Agrégase como segundo párrafo del artículo 120 el siguiente:

En la Aduana de la Capital esta función será ejercida por el subadministrador, salvo el caso de ausencia, impedimento o vacancia, en cuyos supuestos la resolución de los juicios orales serán también competencia del administrador.-

24º - Incorpórase como tercer párrafo del artículo 120 el actual artículo 121.-

25º - Incorpórase como artículo 121 el siguiente:

Artículo 121º.- A los fines dispuestos en este capítulo, las reclamaciones, pedidos o diligencias de cualquier género que no hagan al fondo del sumario, como así también las actuaciones relacionadas con la venta de mercaderías

detenidas y con el retiro bajo fianza a que se refieren los artículos 106 a 109 se tramitarán por incidente separado y no obstarán la marcha regular del proceso principal, tanto en sede administrativa como en sede judicial.- A tal efecto la autoridad competente mandará se extraigan copias auténticas de los autos y de las constancias que sean indispensables para la substanciación del incidente.

26º - Deróganse los artículos 146 de la ley de aduana y 108 y 280 de las ordenanzas de aduana.-

27º - Substitúyese el último párrafo del artículo 167 por el siguiente:

Cuando el interesado manifieste expresa conformidad en el cuerpo del documento en que se haya verificado la diferencia y el monto del perjuicio fiscal no exceda de mil pesos moneda nacional no se instruirá sumario, formulándose el cargo por derechos y multas en la respectiva documentación

28º - Substitúyese el primer párrafo del artículo 174 por el siguiente:

Artículo 174º.- Cuando en buques, aeronaves y otros medios de transporte, de propiedad privada o de empresas estatales, se encuentren ocultas a bordo, o en poder de los tripulantes o empleados de los mismos o en los compartimientos que les son reservados y demás sitios de su acceso, mercaderías sin manifestar que, de acuerdo con las disposiciones aduaneras, debieron ser oportunamente declaradas, además del comiso irredimible de éstas, se impondrá una multa de dos a cinco veces el valor de las mercaderías en infracción al agente propietario o empresa, quienes a su vez podrán repetir el importe contra el o los tripulantes individualizados como responsables.-

29º - Substitúyese el artículo 175 por el siguiente:

Artículo 175º.- Serán aplicables las disposiciones sobre falsas manifestaciones a las mercaderías que no estando comprendidas dentro de los artículos 200 y 202 de las or-

denanzas de aduana, se presenten, sin embargo, ante las aduanas como si fueran muestras o encomiendas.-

30º - Substitúyese el artículo 182 por el siguiente:

Artículo 182º.- Cuando se importaren mercaderías convencionadas o de valor declarado, que en su clase, cantidad o valor difieran notoriamente de las autorizadas por los respectivos permisos o circulares de cambio y cuyas diferencias, por su importancia, hagan presumir el propósito de transgredir las normas cambiarias, la Dirección pondrá el hecho en conocimiento del Banco Central de la República Argentina para la intervención que fuese de su competencia.- Cuando la gravedad del caso lo justifique, la Dirección Nacional de Aduanas estará facultada:

a) Para adquirir las mercaderías mediante resolución dictada dentro de los 15 días de terminada la verificación aduanera, aún cuando no se configurase la situación prevista en el artículo 135, tomando posesión de las mismas sin otra formalidad que la de consignar a favor de su propietario y a la orden del Banco Central a las resultas de las actuaciones que el mismo instruya - con oportuna deducción de los derechos, servicios y multas aduaneros que corresponda cobrar - el importe del valor CIF documentado, calculado al tipo de cambio fijado para la operación, más un 10% en concepto de indemnización, o

b) Para proceder al remate de la mercadería en infracción afectando su producido - previa deducción de los derechos, servicios y multas aduaneros que corresponda cobrar - al pago del importe de la pena que se aplique con motivo de las infracciones al régimen de cambios.

31º - Substitúyese el artículo 183 por el siguiente:

Artículo 183º.- En los casos de mercaderías que por disposiciones legales deban ser subastadas, los remates serán efectuados directamente por las aduanas, quedando facultada la dirección nacional para regular la salida a remate de cada

lesquiera mercaderías, con el objeto de no perturbar el desenvolvimiento de la industria y el comercio de la plaza Cuando existan causas fundadas que lo justifiquen y no se trate de mercaderías comisadas o abandonadas con motivo de infracciones aduaneras en que exista derecho a adjudicación, la dirección nacional podrá autorizar en lugar de la subasta, la comercialización directa por organismos oficiales, pudiendo también adquirirlas para sí o para otras reparticiones del Estado, por su valor CIF o el que se estime en su defecto, más un 10% en concepto de bonificación. Los remates practicados quedarán sujetos a la aprobación de la respectiva autoridad aduanera, la cual, si considerase que el precio obtenido no es equitativo, podrá disponer nuevas subastas o solicitar de la Dirección su adquisición para sí o para otras reparticiones, por el importe ofrecido.-

32º - Substitúyense los artículos 187 a 199 por los siguientes:

Artículo 187º.- Constituye contrabando:

a) La introducción o extracción de mercaderías por lugares no habilitados por la ley o por disposición de autoridad competente; la que se desvíe de los caminos marcados para la realización de esas operaciones y la que se efectúe fuera de las horas señaladas;

b) Las operaciones de importación o exportación con mercaderías u objetos cuya entrada o salida estuviere prohibida;

c) Toda forma de ocultación, utilización de doble fondo y presentación de mercaderías en envases comunes o especiales de otras o mediante su acondicionamiento entre efectos de inferior especie o calidad;

d) Toda operación efectuada o que se intente efectuar mediando la comisión o tentativa de comisión de otro delito perpetrado con el propósito de cumplir o simular cumplir un requisito sin el cual la operación no

podría realizarse o perfeccionarse o de hacer variar el tratamiento fiscal, arancelario o penal aduanero aplicable de modo que resulte un beneficio ilícito al propietario y/ o documentante y/o importador;

e) La desviación o substitución total o parcial de bultos o su contenido, en las operaciones de importación, exportación, tránsito, reembarco o transbordo:

f) Todo otro acto u omisión tendiente a substraer mercaderías o efectos a la intervención aduanera o a impedir mediante ardid o engaño el adecuado ejercicio de las facultades que las leyes acuerdan a las aduanas.-

Artículo 188º.- Los autores, instigadores, cómplices y encubridores de contrabando serán sometidos a la justicia nacional y reprimidos con prisión de un mes a cinco años, salvo que correspondiera pena mayor por mediar concurso de delitos. Se considerará encubrimiento de contrabando los casos previstos en el artículo 277 del Código Penal, quedando comprendidos en el concepto de "efectos substraídos" los que fueron objeto del contrabando.-
Se impondrán además las inhabilitaciones previstas en el artículo 191.-
La sentencia dispondrá asimismo el comiso de todo medio o vehículo de transporte, animales y demás elementos y utensilios de propiedad de los autores, instigadores, cómplices y encubridores que fueren empleados para la comisión del delito.-
La Dirección Nacional de Aduanas determinará el destino de los bienes comisados y, en caso de decidir su venta o subasta, el producido ingresará a rentas generales.-
La tentativa de contrabando será reprimida como si el delito se hubiera consumado.-
Artículo 189º.- Se impondrá prisión de uno a ocho años en cualquiera de los siguientes supuestos:

a) Cuando intervinieren tres o más personas:

b) Cuando mediare participación de un funcionario o empleado público como autor, instigador, cómplice o encubri -

dor;

c) Cuando mediare violación de sellos o documentos, falsificación de sellos, timbres o marcas y/o falsificación de documentos públicos;

d) Cuando mediare intimidación, amenaza, exhibición de armas, violencia en las personas o fuerza física en las cosas;

e) Cuando el imputado fuere reincidente en el delito de contrabando;

f) Cuando se tratare de contrabando de armas, municiones, explosivos y afines, alcaloides, narcóticos o substancias o elementos de cualquier índole que puedan servir para atentar contra la seguridad o salud pública.-

Artículo 190º.- Además de las sanciones previstas en los artículos 188, 189 y 191, en las causas por contrabando deberá imponerse a las personas físicas y a las personas ideales las siguientes:

a) Pérdida de las concesiones, privilegios y prerrogativas de que gozare la persona física o ideal;

b) Retiro de la personería jurídica;

c) Cancelación de la inscripción en el Registro Público de Comercio, cuando se trate de sociedades comerciales sin personería jurídica;

d) Inhabilitación especial de uno a diez años, si se tratare de personas físicas que ejercen el comercio.

Artículo 191º.- Cuando el autor, instigador, cómplice o encubridor fuere funcionario o empleado público sufrirá, además de la pena de prisión, la de inhabilitación absoluta por doble tiempo del de la condena, y especial perpetua

si ejerciere funciones policiales, administrativas o de contralor, de carácter aduanero.-
Asimismo los condenados por delitos de contrabando serán inhabilitados para ejercer en el futuro actividades relacionadas con operaciones aduaneras y de comercio de importación y exportación.-
Artículo 192º.- Cuando el valor de las mercaderías objeto del contrabando no exceda de tres mil pesos moneda nacional, estimado sobre la base de los precios corrientes en plaza, no se instruirá causa criminal ni se aplicará pena privativa de libertad, limitándose la aduana a instruir el sumario e imponer las sanciones administrativas que, además del comiso de la mercadería, consistirán en una multa de dos a diez veces el valor de la misma, adjudicable al fisco.-
Sin embargo, procederá a instruir la causa administrativa y se dará intervención a la justicia a los efectos de la aplicación de la pena privativa de libertad y accesorias en los siguientes supuestos:

a) Si las mercaderías forman parte de una cantidad mayor destinada al mismo fin;

b) Si los hechos encuadran en la situación prevista en el artículo 189 de la presente ley, entendiéndose que para configurar la reincidencia serán computables los fallos administrativos firmes en que se hayan impuesto penas por contrabando comprendidos en el presente artículo;

c) Si existe concurso de delitos.

Cuando se trate de infracciones cometidas por pobladores de zonas fronterizas que hacen tráfico lícito habitual entre localidades limítrofes, siempre que el valor corriente de las mercaderías en plaza no exceda de quinientos pesos moneda nacional, sólo se considerará configurada la agravante prevista por el artículo 189, inciso e), cuando se incurra en tercera reincidencia.-

Artículo 193º.- Los procesados por el delito de contra-

bando no gozarán del beneficio de la excarcelación:

a) En los casos previstos por los incisos b), d), y e) del artículo 187;

b) En los supuestos determinados por el artículo 189;

c) Cuando el delito imputado se hubiere cometido por lugares no habilitados.

d) Cuando el delito consistiere en el tráfico de ganado en pie.

Ninguna condena aplicada por contrabando será susceptible de ejecución condicional.

Artículo 194º.- Para tener por probado el contrabando no es necesaria la aprehensión de la mercadería, siendo suficiente para ello los hechos acreditados en la causa. El cuerpo del delito podrá demostrarse por todos los medios de prueba admitidos por el Código de Procedimientos en lo Criminal.-

Artículo 195º.- La Dirección Nacional de Aduanas llevará un registro de implicados y condenados por contrabando.- El Poder Ejecutivo reglamentará oportunamente sus funciones y determinará sus relaciones con el Registro Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal y Carcelaría creado por ley nº 11.752.-

Artículo 196º.- Independientemente de la sentencia que recaiga en la causa criminal, la autoridad administrativa dispondrá el comiso irredimible de las mercaderías o efectos de contrabando.-

Cuando no pudieran aprehenderse las mercaderías o efectos el comiso se substituirá por una multa igual a su valor.- Deberá, además, imponer solidariamente a los autores, instigadores, cómplices o encubridores una multa accesoria con destino a rentas generales, de cuatro a veinte veces el valor de los efectos o mercaderías contrabandeados.-

Artículo 197º.- Los efectos comprendidos en el artículo 188 de la presente ley permanecerán secuestrados en la aduana respectiva a la orden de la autoridad judicial competente, con excepción de los que constituyan de por sí -

contrabando, cuya situación será resuelta en el fallo administrativo.-
Cuando dichos efectos, por sus condiciones o propiedades, ofrezcan peligro de deterioro o disminución de valor, podrán ser objeto de venta inmediata, en cuyo caso su producido se depositará a la orden del juzgado que correspondiere.-
Cuando los dueños de los animales secuestrados, intimados a ofrecer garantía por los gastos de su manutención, se rehusaren a prestarla o no comparecieran dentro del término perentorio de 10 días de la intimación, éstos serán subastados y su importe se depositará en la forma dispuesta en el párrafo precedente.-
Artículo 198º.- Todo despachante, consignatario, depositario, vendedor o cualquiera otra persona que por cualquier título tenga en su poder con fines de comercio o industrialización mercaderías extranjeras, está obligado a probar - ante la autoridad aduanera, cuando a juicio de ésta hubiere motivo de creer que se ha pretendido evadir los impuestos o requisitos de importación, la legitimidad de la introducción de las mercaderías.-
A los efectos de dicha comprobación sólo harán fe los documentos expedidos por la autoridad aduanera o el cumplimiento estricto de las normas que el Poder Ejecutivo dicte con el objeto de determinar la lícita procedencia de las mercaderías extranjeras que se encuentren en plaza, a cuyo efecto podrá exigir declaraciones juradas de existencias, marcación de mercaderías, contabilización en libros especiales, o todo otro medio o sistema que concurra a - asegurar que las mercaderías que se comercien en plaza han ingresado legalmente al país.-
Si las personas mencionadas en el párrafo primero no pudieran comprobar la legítima introducción de las mercaderías en su poder, sufrirán el comiso de las mismas conforme a lo prescripto en el artículo 196, sin perjuicio de una multa accesoria que oscilará entre 3 a 10 veces el valor de los efectos, debiendo ser sometidos a la justicia nacional a los efectos previstos en el artículo 188.-
La infracción a las normas que dicte el Poder Ejecutivo -

...contenidas en la autorización contenida en el pá-
...sancionadas con multa de $500 a $1.000.000
...de la aduana en cuya jurisdicción se haya co-
...metido la infracción.

Artículo 199º.- Facúltase a la autoridad aduanera para ...
...disponer la interdicción o el secuestro de las mercade-
...rías extranjeras, existentes en plaza, sobrepechadas de con-
...trabando o de otras infracciones, mientras se investiga
...su origen.
...La reglamentación determinará los funcionarios competen-
...tes para disponer la interdicción o secuestro, que en ni-
...ngún caso podrá exceder de un término mayor de 20 días há-
...biles.
...Tanto en este caso como en cualquier otro supuesto en que
...la aduana disponga el secuestro de mercaderías o efectos,
...si se dictare resolución los bienes secuestrados no tri-
...butarán suma alguna en concepto de tasas, servicios de
...almacenaje, eslingaje o similares. Aún cuando se dictare
...resolución confirmatoria sobre bienes interdictos por la
aduana, no sufrirán recargos en el pago de aquellos ser-
vicios que serán liquidados sobre la base del primer pe-
ríodo, debiendo procederse a computarlos recargos en la forma
ordinaria una vez transcurridos diez días de haber cesa-
do la interdicción.

13º - Sustitúyese el artículo 200 por el siguiente:

Artículo 200º.- Las falsas manifestaciones de cantidad, ...
...especie, calidad o valor que resulten de la verificación
...de las operaciones de exportación de mercaderías cuya sa-
...lida del país esté o no gravada, serán castigadas con
...multas de dos a diez veces el valor FOB de las diferen-
...cias, aún cuando no exista perjuicio fiscal.-
...Igual pena se aplicará por la falta de cualesquiera docu-
...mentos o declaraciones exigibles y que deban referirse a
la cantidad, especie, calidad y/o valor de mercaderías
...que se encuentren embarcadas, a la carga, al costado del
...transporte exportador, en balanzas o, en el caso parti-
...cular de las aeronaves, en las perturias cerradas y de las fronte-
...ras terrestres, dentro de la jurisdicción del resguardo.

Se hará pasible de la multa cada uno de los que hubiere intervenido en la operación, ya sea propietario, exportador, documentante, agente o capitán del buque, lanchero, camionero, arriero, barraquero, prensista, etcétera, a menos - que pruebe haber cumplido, por su parte, con las obligaciones que le correspondan.-
A los efectos de la aplicación de penas, se entenderá como diferencia punible la que surja de las declaraciones contenidas en los permisos de embarque, boletos de exportación, certificados de embarque para cambios, pasavantes, papeletas, remitos y todo otro documento complementario exigible para la realización de la exportación o entre cualquiera - de estas declaraciones y el resultado de la verificación.-
Se consideran actos de verificación oficial cualesquiera - comprobaciones relacionadas con la cantidad, especie, calidad y/o valor de las mercaderías que se destinen a la exportación, realizados con la intervención de la Aduana en depósitos fiscales. El Poder Ejecutivo podrá considerar - también actos de verificación oficial los que se realicen en depósitos particulares, barracas mercados, frigoríficos etcétera, fuera de la zona portuaria.-

34º - Substitúyese el artículo 201 por el siguiente:

Artículo 201º.- Créase la cuenta especial "Dirección Nacional de Aduanas - Fondo de Estímulo", que se acreditará con el tres por ciento de la recaudación de los derechos y servicios; el producido de las multas y comisos en la proporción establecida en el artículo 204; el monto que corresponda transferirle de la cuenta especial "Dirección Nacional de Aduanas - Gastos de Remate"; los saldos del ejercicio anterior y las sumas que se donen al fondo. Dicha cuenta se debitará por los importes que se destinen a los premios de estímulo al personal, que se instituyan sobre la base de la idoneidad, conducta y función que efectivamente cumpla, con prescindencia de la antigüedad y de la categoría en que reviste.-
El monto conjunto de éstos no podrá exceder del cincuenta por ciento del total de los gastos en personal, fijados en el presupuesto de la Dirección Nacional de Aduanas para el ejercicio 1957/58, más el importe que se origine por apli-

cación del artículo 11 de esta ley.-
Los saldos de la cuenta "Dirección Nacional de Aduanas - Fondo de Estímulo" al cierre de cada ejercicio serán transferidos al siguiente:

35º - Substitúyese el artículo 203 por el siguiente:

Artículo 203º.- La cuenta "Dirección Nacional de Aduanas - Fondo de Estímulo", se acreditará también con el cinco por ciento de las multas que ingresaren a rentas generales en virtud de denuncias y aprehensiones realizadas durante la vigencia del artículo 129 de la ley 12.964. Se debitará por las sumas que se establezcan para premiar al personal aduanero que haya intervenido en el carácter de denunciantes, y/o aprehensores, en proporción al monto de las multas y cargos que ingresen al fisco durante el ejercicio que corresponde a la liquidación.-
Los importes que se liquiden a cada beneficiario en la proporción determinada por aplicación de lo dispuesto precedentemente, no estarán sujetos a limitación alguna y se abonarán independientemente del premio istituído por el artículo 201, en cuya regulación no tendrán incidencia.-

36º - Substitúyese el artículo 204 por el siguiente, quedando derogado el decreto ley 985/58.-

Artículo 204º.- El importe de los comisos y multas que se impongan en las causas por contrabando o infracciones a las leyes de aduana, excepto el caso del artículo 188 y los que estén expresamente adjudicados al fisco por las disposiciones en vigor, se distribuirá previa deducción de los derechos y servicios y honorarios de los profesionales fiscales, judicialmente regulados en la siguiente forma:

a) El 50 % al fondo de estímulo;

b) El 50 % a denunciantes y aprehensores,

El importe adjudicable por el inciso b) se destinará únicamente a los aprehensores, si no hubiere mediado orden ex

presa y especial del jefe superior y no hubiere habido denunciantes. Cuando el comiso o multa resulte en virtud de orden expresa y especial de jefe superior, el valor se dividirá entre el jefe que dió la orden y los aprehensores por partes iguales.-
Se dividirá por mitad entre denunciantes y aprehensores cuando hubieren intervenido unos y otros, ya sea que el número de los primeros fuere igual, mayor o menor que el de los segundos.-
En el supuesto previsto en el inciso a) del artículo 187 no se realizará la deducción destinada al fondo de estímulo beneficiándose a denunciantes y aprehensores con el cien por ciento de las multas y/o comisos, aún cuando fueren de las expresamente adjudicables al fisco.-
No se considerará aprehensión la simple verificación o recuento de mercaderías previamente aprehendidas o cuyo despacho se encuentre ya detenido por mediar denuncia expresa.-
Tratándose de mercaderías previamente denunciadas, con respecto a las cuales no media un acto independiente de aprehensión, la parte asignada por la ley al aprehensor acrecerá el beneficio reconocido al denunciante.-

37º - Agréganse como incisos j) k) y l) del artículo 208 los siguientes:

j) Las normas de las ordenanzas de aduana relativas a los buques privilegiados serán aplicables a los buques sin privilegio, en las condiciones y con el alcance que determine la reglamentación;

k) Quedan modificadas las multas pecuniarias fijas determinadas en la sección quinta de las ordenanzas de aduana, substituyéndoselas en moneda nacional de curso legal de acuerdo a la siguiente escala: la de veinte pesos, por la de mil pesos; la de veinticinco pesos, por la de mil doscientos cincuenta pesos; la de cien pesos, por la de cinco mil pesos; la de cinco pesos fuertes, por la de quinientos pesos; la de diez pesos fuertes, por la de mil pesos; la de

veinte pesos fuertes, por la de dos mil pesos; la de veinticinco pesos fuertes, por la de dos mil quinientos pesos; la de cincuenta pesos fuertes, por la de cinco mil pesos; la de cien pesos fuertes, por la de diez mil, y la de doscientos cincuenta pesos fuertes, por la de veinticinco mil pesos;

1) Las multas automáticas fijadas en los artículos 929 y 952 de las ordenanzas de aduana se elevarán al 20% cuando la especie y calidad de las mercaderías documentadas difiera notoriamente de la determinada en la documentación de origen.-

ARTICULO 2º.- Queda prohibido a los pasajeros de cualquier categoría la introducción al país formando parte de su equipaje o conjuntamente con el mismo de mercaderías sujetas al pago de derechos, que no sean de las admitidas por las respectivas reglamentaciones aduaneras y cambiarias como incidente de viaje.-
La violación de esta norma y toda manifestación falsa, incompleta o ambigua mediante la cual se eludiere la prohibición, será sancionada con la pena de comiso irredimible de la mercadería en infracción y multa de dos a cinco veces el valor de la misma.-
ARTICULO 3º.- Los aforos o tablas de valores que fijan las leyes y los tratados y convenciones internacionales son determinados exclusivamente a los efectos de la liquidación, pago y percepción de los impuestos o tasas aduaneras y portuarias, devengados por las operaciones regulares.-
En todos los casos en que por disposición de las leyes penales aduaneras deba aplicarse multa igual al valor de la mercadería en infracción o considerarse tal valor a los efectos de la regulación de penas, se fijará el mismo, de acuerdo a la valuación que determine la aduana conforme al valor del día en plaza de la mercadería.-
ARTICULO 4º.- El Poder Ejecutivo adoptará las medidas necesarias para la coordinación de la labor de la Dirección Nacional de Aduanas, con la Administración General de Puertos de la Nación, Prefectura General Marítima, Gendarmería Nacional y Policía Federal. Asimismo podrá acordar con los gobiernos de

provincias convenios para la colaboración de las policías provinciales.-

ARTICULO 5º.- Los funcionarios o empleados públicos que intervengan en las tareas de impedir o reprimir el contrabando, deberán hacer pública manifestación de bienes y comunicarán toda evolución esencial de sus patrimonios, para lo cual el Poder Ejecutivo dictará la reglamentación respectiva.-

ARTICULO 6º.- Ninguna persona podrá impedir la verificación de sus bultos o equipajes a su entrada a la aduana.-

ARTICULO 7º.- En ningún caso podrá impedirse la visita de las brigadas de fondeo a los barcos, aviones y cualquier medio de transporte que entren o salgan del país y cualquiera sea su nacionalidad.-

ARTICULO 8º.- El Poder Ejecutivo adoptará las medidas necesarias a fin de reestructurar los servicios de la Dirección Nacional de Aduanas con el objeto de mejorar la fiscalización tendiente a la efectiva represión del contrabando y demás infracciones de orden aduanero.-

ARTICULO 9º.- El Poder Ejecutivo deberá dictar normas actualizando las formalidades y requisitos con arreglo a los cuales debe efectuarse la navegación y las operaciones de importación y exportación a que se refieren las ordenanzas de aduana, quedando investido de las facultades necesarias a tales efectos.-

ARTICULO 10º.- El Poder Ejecutivo queda facultado para concordar las disposiciones de la presente ley con las demás que rigen la materia, formulando al efecto, por intermedio de la Dirección Nacional de Aduanas, el texto ordenado que corresponda.-

ARTICULO 11º.- Autorízase al Poder Ejecutivo a incorporar al presupuesto de la Dirección Nacional de Aduanas los créditos necesarios para atender los mayores gastos que irrogue el cumplimiento de la presente ley.-

ARTICULO 12º.- Las falsas manifestaciones que se comprobaren en operaciones de importación y exportación que produzcan, o que de no ser advertidas oportunamente puedan producir, un menor ingreso en materia de recargos, retenciones o tributos derivados del tratamiento cambiario de las mercaderías, serán juzgadas con arreglo al procedimiento fijado por la ley de aduana para las infracciones aduaneras, debiendo reprimirse con una pena de dos a diez veces el monto de las diferencias de recargo,

retención o tributo resultantes, todo ello sin perjuicio de las sanciones previstas en el artículo 200 del citado texto legal y de las que fueran de aplicación por violación simultánea e independiente de normas de carácter aduanero.-

ARTICULO 13º.- Los importadores y/o documentantes deberán declarar en el cuerpo del documento respectivo el valor costo y flete de las mercaderías convencionadas o de aforo fijo, siendo de aplicación el artículo 135 de la ley de aduana (texto ordenado 1956) en los casos en que dichos valores fueran considerados por debajo de los reales.-

ARTICULO 14º.- Queda prohibida la compraventa para su comercialización dentro del territorio nacional o para su exportación de las mercaderías o efectos de procedencia extranjera, que hayan sido introducidos por pasajeros de cualquier categoría o en franquicia diplomática.-

Toda infracción será castigada con el comiso irredimible de la mercadería y una multa de dos a diez veces el valor de la misma que se aplicará a quienes las hayan introducido al país y al tenedor de los efectos. El perjudicado podrá accionar ante el vendedor en el supuesto de ignorar la infracción.-

ARTICULO 15º.- La Dirección Nacional de Aduanas tomará los recaudos necesarios para individualizar con cierres herméticos, numerados e inviolables, todas las mercaderías que se subasten por cuenta de sus dependencias, y en aquellos casos que la naturaleza de los objetos impida adoptar este temperamento, se lo reemplazará por otros que suplan el sistema en cuestión. En las boletas de remate se transcribirán los guarismos de referencia, sin perjuicio de especificar su especie, calidad, cantidad, nombre y domicilio y documento de identidad del comprador. Las personas que las adquieran para ser revendidas dejarán constancia en las facturas que extiendan del número del lote y el de los artículos.-

Con la adopción de este requisito, las boletas de remates de aduana no tienen término perentorio hasta la total liquidación de las mercaderías que ampara a los efectos de justificar su origen.-

ARTICULO 16º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.-

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a trece días del mes de enero del año mil nove

cientos cincuenta y nueve.-

J.M. GUIDO
Noé Jitrik

J. R. DECAVI
Eduardo T. Oliver

Buenos Aires, 16 de enero de 1959.

POR TANTO:

Téngase por Ley de la Nación, cúmplase, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.-

FRONDIZI - Emilio Donato del Carril - Ricardo Lumi.

DECRETO Nº 635.-

Poder Ejecutivo Nacional
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº 901.-

ESTATUTO PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL (Arts. 35°, 36° y 37°) - ASISTENCIA - SANCIONES - SUSPENSIONES - CESANTIA

Cde. Expediente nº 21.236 (S.P.)
Expediente nº 90.103/59 (Hacienda)
Providencia nº 267.-

//nos Aires, 15 de junio de 1959.-

Vuelvan estas actuaciones a la Dirección General de Personal del Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública llevando a su conocimiento lo siguiente:

a) las normas resultantes del art. 36° de la Reglamentación del Estatuto del Personal Civil (decreto nº 1.471/58(+) derogaron implícitamente toda reglamentación relacionada con sanciones por faltas de asistencia y puntualidad que se opusieran a las mismas;

b) el servicio de guardia del personal afectado a servicios asistenciales, por sus características peculiares, admite la existencia de un régimen especial en cuanto a las faltas de asistencia. Dicho régimen fué fijado por ese Ministerio mediante Resolución nº 231/54, y el mismo puede seguirse aplicando en cuanto no se oponga a las prescripciones del citado artículo 36° y demás normas del Estatuto y de su Reglamentación.

c) en tal sentido cabe destacar que la suspensión fijada en

(+) Ver Digesto Administrativo Nº 422.-

el art. 3° de la misma debe ser efectivizada sin prestación de servicios (art. 35° de la Reglamentación del Estatuto), y no como una simple sanción privativa de haberes, como surge del texto del artículo referido. En cuanto a la cesantía automática en caso de reincidencia, sólo podrá prosperar previo sumario, tendiente a determinar si las ausencias de la causante configuran la situación de abandono del servicio sin causa justificada, y por tanto su inclusión en el artículo 37°, inciso c) del aludido Estatuto.

Sirva la presente de atenta nota de remisión.-

DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO CIVIL DE LA NACION.-

Fdo. JOSE LUIS FRANGI
Director General

Poder Ejecutivo Nacional
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº 902.-

ESCALAFON PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL - SALARIO FAMILIAR (Punto III)

Expediente nº 1.457 - 1959.-
Providencia nº 229.-

//nos Aires, 29 de mayo de 1959.-

Pasen estas actuaciones a la Dirección General de Administración del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto llevando a su conocimiento que la expresión "renta" utilizada en el punto III de las normas complementarias del punto 26º del Escalafón aprobado por decreto número 9.530/58, debe entenderse como sinónimo de "entradas", vale decir que involucra todo tipo de ingresos, sean provenientes de sueldos, jubilaciones, pensiones, honorarios, intereses, etc.

En cuanto a la segunda parte de la consulta efectuada, se acompaña copia autenticada de la Resolución S.H. nº 7.142/59 (+), que delimita perfectamente la situación del "cónyuge a cargo".

Sirva la presente de atenta nota de remisión.-

Fdo. JOSE LUIS FRANGI
Director General
Servicio Civil de la Nación

(+) Ver Digesto Administrativo nº 781.-

Poder Ejecutivo Nacional
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº 903.-

ESTATUTO PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL (Art. 41º) - SUMARIOS

Cde. Expediente nº 34.407/59 (Aduanas)
Providencia nº 274.-

//nos Aires, 17 de junio de 1959.-

Vuelva a la Dirección General de Contabilidad y Administración informando que respecto a las declaraciones de distintos funcionarios de la Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos, esta Dirección General ratifica lo manifestado en el expediente nº 3.510/59 en el sentido de que el procedimiento seguido, aparte de no estar contemplado en el Estatuto del Personal Civil y su Reglamentación, se opone a lo prescripto en el art. 41º, apartado VII, de esta última que establece que "el declarante dictará por si mismo sus declaraciones, pero no podrá traerlas escritas de antemano".

Acerca de las declaraciones posteriores al cierre del sumario, se considera son improcedentes de acuerdo con lo estatuído en el citado artículo, apartado XIII, primer párrafo de dicha Reglamentación.-

DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO CIVIL DE LA NACION.-

Fdo. JOSE LUIS FRANGI
Director General

Poder Ejecutivo Nacional
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº 904.-

SERVICIO EXTERIOR DE LA NACION

Buenos Aires, 23 de junio de 1959.-

Visto el Decreto Nº 15.051 del 28 de junio de 1949, por el que se reglamentó la prestación de asistencia médica a los funcionarios y empleados del Servicio Exterior de la Nación que desempeñan sus tareas en el extranjero. Atento a que la práctica ha demostrado la necesidad de modificar las disposiciones contenidas en el mismo, a fin de equipararlas a los beneficios que goza el personal del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto que ejerce sus funciones en la Cancillería, y

CONSIDERANDO:

Que el presente reglamento coordina ampliamente con las disposiciones que rigen en concepto de asistencia médica en la Dirección de Obra Social del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, organismo al cual se halla incorporado el personal de la Cancillería. Que es imprescindible que, dentro de lo posible, los funcionarios y empleados de la Cancillería que se encuentren en el exterior, y los que transitoriamente se hallen en cumplimiento de misiones oficiales fuera del país, gocen de los mismos beneficios,

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA
D E C R E T A :

Artículo 1º.- Derógase el Decreto Número 15.051 del 28 de junio de 1949.-

Artículo 2º.- A los fines del presente decreto, los funcionarios y empleados del Servicio Exterior serán agrupados en tres

categorías "A", "B" y "C".-

Artículo 3º.- Están comprendidos en el grupo "A" los funcionarios del Art.2º de la Ley 12.951 del Servicio Exterior de la Nación, Embajadores Extraordinarios y Plenipotenciarios, Enviados Extraordinarios y Ministros Plenipotenciarios, Ministros Consejeros, Consejeros de 1ra. y 2da. clase, Cónsules Generales de 1ra. y 2da. clase, Secretarios de 1ra.y 2da. clase, Secretarios de 3ra. clase y Cónsules de 3ra. clase, - Agregados y Vicecónsules y aquellos que alude el Art. 2º de la citada ley, cuyos haberes fueron atendidos por el presupuesto del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.- Pertenecerán a la categoría "B" los empleados administrativos adscriptos al Servicio Exterior y, a la "C" el personal de servicio adscripto al Servicio Exterior.-

Artículo 4º.- Los miembros de familia comprendidos en el Art. 39 de la Ley 12.951 gozarán de los beneficios acordados por este decreto, a la misma categoría que el funcionario o empleado a cuyo cargo se encuentren.-

Artículo 5º.- Todo el personal del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto destacado en el exterior, tendrá derecho a asistencia médica, para lo cual las Representaciones Diplomáticas y Consulares, propondrán al Servicio Médico de la Cancillería para su aprobación, la nómina de facultativos en la siguiente forma y siendo el número máximo de tres por especialidad, Clínica Médica, Clínica Quirúrgica, Cardiología, Demartosifilografía, Electrocardiografía, Fisioterapia, Gastroenterología, Ginecología, Hematología, Kinesiología, Neurología Psiquiatría, Nutrición, Obstetricia, Oftalmología, Otorrinolaringología, Odontología, Pediatría, Radiodiagnóstico, Tisiología, Urología, Ortopedia y Traumatología; asimismo se informará de los honorarios de dichos facultativos y de los aranceles de los establecimientos hospitalarios o sanatoriales de la localidad, que no podrán exceder de tres.-

Artículo 6º.- Cuando un funcionario o empleado o familiar deba efectuar tratamiento médico por un tiempo prolongado más de cuarenta y cinco (45) días, será necesario requerir la autorización del Servicio Médico de la Cancillería.-

Al efectuarse este pedido, que en todos los casos será elevado por el Jefe de la Misión Diplomática o de la Oficina presu-

lar, deberá acompañarse una síntesis de la Historia Clínica del paciente, que permita establecer en forma clara y precisa la dolencia que lo aqueja.-
En igual forma procederá en los casos de intervenciones quirúrgicas no urgentes o de investigaciones y tratamientos especiales.-
Artículo 7º.- Cuando se trate de enfermedades agudas, infecciosas o traumáticas que hagan imprescindible una inmediata intervención quirúrgica, el Jefe de la Misión Diplomática o de la jurisdicción consular o el titular del Consulado si las distancias impiden rápidas comunicaciones, podrá disponer lo necesario para la debida atención médica debiendo - posteriormente informar al Servicio Médico de la Cancillería los motivos de la adopción de tal medida y acompañar todos los antecedentes clínicos y demás que considere útiles a fin de ser aprobado por el Servicio Médico.-
Artículo 8º .-Los funcionarios y empleados del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, destacados en el extranjero, como también sus familiares tendrán derecho a asistencia - odontológica para conservación y tratamiento de la dentadura.-
Estarán excluídos de este beneficio, la confección de aparatos de prótesis, incrustaciones y coronas efectuadas con materiales preciosos (oro, platino y plata). Los interesados deberán remitir al Servicio Médico en forma detallada, los trabajos realizados con el importe de cada uno, y si hubiese obturaciones el material empleado a tal efecto.-
Artículo 9º.- El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto reintegrará a los funcionarios y empleados del Servicio Exterior de la Nación que desempeñan sus funciones en el extranjero, el 50% de los gastos que incurran por tratamientos médicos odontológicos y por medicamentos.-
Artículo 10º.-Cuando se trate de intervenciones quirúrgicas el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto reintegrará a los funcionarios y empleados el 50% de las sumas abonadas en concepto de honorarios médicos, internación sanatorial y tratamiento médico integral del paciente. Se excluyen de estos beneficios los gastos abonados por el funcionario, en concepto de acompañante y comodidades asistenciales que no correspondan a su jerarquía; no se abonarán llamados

telefónicos o cualquier otro gasto que no se relacione directamente con la atención médica del paciente.-

Artículo 11º.- Todo tratamiento y medicación deberá ser prescripta por los médicos designados por la Misión Diplomática, u oficina consular, cuyo nombramiento haya sido aprobado por la Cancillería. Si por cualquier concepto el funcionario o empleado no cumpliese con esta disposición, perderá el derecho acordado por el Art. 9º de este decreto.-

Artículo 12º.- Los gastos de asistencia médica, serán abonados integramente por los interesados, quienes deberán solicitar el reintegro correspondiente, dentro de los seis (6) meses de efectuado el tratamiento, por intermedio del Jefe de la Misión Diplomática o de la jurisdicción consular a la que pertenezca. Dichos superiores jerárquicos certificarán que la misma ha sido prestada por el médico reconocido por la Cancillería. Los pedidos de reintegro se elevarán al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto acompañados de las recetas originales extendidas por los médicos respectivos con su correspondiente traducción y facturas.-

Artículo 13º.- El Servicio Médico del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto será el encargado de efectuar el contralor del cumplimiento de las disposiciones del presente decreto. Para tal fin, tendrá a su cargo las siguientes funciones:

a) Aconsejar la aprobación o rechazo de los profesionales propuestos por las Misiones Diplomáticas, oficinas consulares y de los establecimientos hospitalarios indicados para internación de funcionarios y empleados.-

b) Estudiar cada uno de los pedidos de reintegro de gastos por asistencia médica y provisión de medicamentos, y expedirse acerca de la procedencia del mismo.-

c) Recibir las historias clínicas señaladas en el Art.6º, las que deberán remitirse a dicho servicio médico en forma directa y con carácter "Secreto".-

d) Clasificar las historias clínicas recibidas a fin de -

que, en oportunidad de que el funcionario o empleado solicite el reintegro, le sea posible efectuar el respectivo contralor.
Artículo 14º.- Para la internación de los funcionarios y empleados y de los respectivos familiares deberán tenerse presente las siguientes normas:
Categoría "A" le corresponde habitación individual.-
Categoría "B" con derecho a habitación de dos pensionistas, va le decir que no tiene derecho a internación individual.-
Categoría "C" con derecho a que se encuentren más de dos pensionistas.
Artículo 15º.- Considérase incluído dentro de los beneficios del presente decreto, las recetas ópticas para los funcionarios y empleados del Servicio Exterior que desempeñan tareas en el extranjero. Se reintegrará el 50% de la suma invertida en la adquisición de cristales y armazones siempre que sean de tipo corriente y en cuya construcción no se utilicen metales preciosos.-
Artículo 16º.- Dentro de los sesenta (60) días posteriores a la fecha del presente decreto, los señores Jefes de Representaciones Diplomáticas y de jurisdicciones consulares remitirán al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto una nómina de los médicos y odontólogos que, a su juicio, deben ser designados como así también una información sobre los establecimientos hospitalarios en los que se asistirán los funcionarios y empleados en caso necesario, de acuerdo con sus categorías detallando los aranceles que rigen en los mismos, si en ellos se produjere alguna modificación deberá comunicarlo a la Cancillería para su aprobación.-
Artículo 17º.- Cuando el funcionario o empleado contrajere alguna enfermedad endémica estando por sus funciones en el extranjero tendrá derecho a que el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, por intermedio de su Servicio Médico apruebe el reintegro de los gastos en que hubiere incurrido en concepto de asistencia médica hospitalaria, y trasladado con un acompañante al o los centros médicos apropiados o su traslado a la República.-
Artículo 18º.- Los funcionarios y empleados destinados a cumplir funciones en países considerados insalubres o que tengan notorio atraso médico asistencial, podrán previa solicitud al Servi

cio Médico de la Cancillería solicitar su traslado a centros médicos apropiados, el que indicará a que país deberá ser trasladado el paciente. En los casos de urgencia extrema el Jefe de la Misión o Cónsul de la jurisdicción podrá autorizar el traslado bajo su responsabilidad debiendo enviar al Servicio Médico a la brevedad posible los motivos que determinaron la urgencia.-

Artículo 19º.- Estarán comprendidos dentro de los beneficios del presente decreto los funcionarios y empleados que revistando en el presupuesto del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, se encuentren transitoriamente en el exterior en cumplimiento de misiones oficiales, quienes deberán proceder en la misma forma que el personal estable de las Representaciones Diplomáticas, y Consulares.-

Gozarán asimismo de los beneficios del presente decreto los Correos Diplomáticos quedando incluídos dentro de la categoría "B".-

Artículo 20º.- Comuníquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas, publíquese y archívese.-

FRONDIZI - Diógenes Taboada.-

DECRETO Nº 7689.-

Poder Ejecutivo Nacional
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº 905.-

ADSCRIPCIONES

Buenos Aires, 13 de diciembre de 1957.-

MEMORANDUM PARA EL MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIA

Antes de considerar el adjunto proyecto de decreto-ley, este Departamento estima conveniente oír la opinión de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, de su dependencia, quién se ha expedido en los siguientes términos:

"El ejercicio, por el Presidente Provisional de la Nación, de las facultades legislativas que la Constitución acuerda al Congreso, incluídas las que son privativas de cada una de sus Cámaras, se funda, entre otras consideraciones que no hacen estrictamente a la materia del presente dictámen, en que es indispensable a la vida institucional del país asegurar el ejercicio ininterrumpido de los poderes previstos por la Constitución Nacional" y en que cohonestando esta exigencia de continuidad con la situación de acefalía determinada por la revocación de los poderes preexistentes, se hace necesario que la función legislativa sea asumida por un poder público que esté en condiciones de imponer en todo el territorio de la Nación la efectiva aplicación de sus mandatos" (Decreto-Ley Nº 42/55)".-

"Así, pues, parece claro que las facultades legislativas que ejerce el Poder Ejecutivo no son sino las que corresponden al Congreso, conforme a las atribuciones que le ha fijado la Constitución Nacional, entre las que no se encuentra, como es obvio, por no ser materia de legislación, la de establecer el destino del personal de la Administración, y menos aún cuando se trata de resolver

"casos particulares y no se sancionan normas de carácter "general. En consecuencia, el proyecto de decreto-ley que "se acompaña no sería "ley" sino en un sentido puramente "formal y carecería de la virtualidad jurídica de la ley "en sentido sustancial o material (v.Bielsa, "Derecho ad "ministrativo", Bs.As., 1955, t.I,p.171 y sgts., y Busso "Código Civil anotado", t.I, p.11 y sgts.), con lo que " importaría la adopción de una medida evidentemente anó "mala desde el punto de vista legislativo".-

"Si el Decreto-Ley nº 13.652/56, modificado por el De- "creto-Ley 3891/57 (1) por las razones de que ilustran - "acabadamente los fundamentos de este último, no autori- "za otras excepciones a la disposición que prohibe las "adscripciones de agentes entre los distintos organismos "del Poder Ejecutivo, fuera de las que taxativamente se "enumeran en el art. 35, inciso f), sería necesario, a "juicio de esta Dirección, la previa modificación de di- "cha norma para poder realizar válidamente adscripciones "como las indicadas en el proyecto de decreto-ley que se "acompaña. Y ello es así porque las leyes o normas juri- "dicas de carácter general no se pueden derogar válida - "mente para un caso particular, sino mediante actos de - "igual jerarquía que establezcan distintas normas"."Así "se lo ha recordado recientemente en el informe de 22 de "julio de 1957 de la Comisión Nacional Asesora que dicta "minó sobre la nulidad de las concesiones eléctricas de "la C.A.D.E. y la C.I.A.D.E. (v.publicación de la Secre- "taría de Prensa de la Presidencia de la Nación, p.32) , "donde se expresa:

> "Es criterio imperante en la doctrina y en la juris- "prudencia que los reglamentos administrativos no pue- "den, válidamente, derogarse para un caso particular. "Ver en este sentido el dictamen de la Procuración Ge- "neral de la Nación recaído en el expediente del Minis "terio de Agricultura número 156.889/43, que en la par "te pertinente dice: "Es doctrina uniformemente acepta "da, en efecto, que las normas contenidas en los regla

(1) Ver Digesto Administrativo Nº 213

"mentos dictados por la autoridad administrativa tie
"nen, mientras no sean sustituídas o derogadas por una
"nueva reglamentación, carácter obligatorio para la -
"misma autoridad de la cual emanaron".-

"Y ello es así porque los reglamentos, bajo el aspec
"to material u objetivo de su contenido intrínseco, son
"normas jurídicas, esto es, leyes -en sentido lato-, co
"mo tales, no pueden ser dejadas sin efecto sino mediante actos de igual jerarquía, que establezcan distin -
"tas normas".-

"Conforme:

"(Hauriou, Précis Elementaire de Droit Administratif, p.
"366 y sig., París, 1937)".-

"(Villegas Basavilbaso, Derecho Administrativo, I, p.
267)".-

"(Zanobini Guido, Sul fondamente giuridico della in-
"derogabilitá dei regolamenti, Rivista di Deritto Pu -
"bblico e della pubblica. Amministrazione in Italia, -
"1917, Parte I, P. 401 y siguientes; y Corso di Diri-
"tto Amministrativo, to. 1, P.61, 5a. edic. 1947)".-

"(Sayaguez Laso, Tratado de Derecho Administrativo, p.
"131).-

"DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS, 24 de octu-
"bre de 1957".-

Teniendo en cuenta lo dictaminado por la Dirección General de Asuntos Jurídicos, esta Secretaría de Estado se permite devolver sin firmar el adjunto proyecto de decreto-ley a los fines que ese Ministerio estime corresponder.-

Fdo. ADALBERT KRIEGER VASENA

MEMORANDUM Nº 1.327.-

Poder Ejecutivo Nacional
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº 906.-

SENTENCIAS JUDICIALES - DEMANDAS - JUICIOS

LEY Nº 3.952.-

Buenos Aires, 27 de septiembre de 1900.-

ARTICULO 1º.- Los tribunales federales y los jueces letrados de los Territorios Nacionales conocerán de las acciones civiles que se deduzcan contra la Nación en su carácter de persona jurídica, sin necesidad de autorización previa legislativa, pero no podrán darles curso sin que se acredite haber precedido la reclamación de los derechos controvertidos ante el Poder Ejecutivo, y su denegación por parte de éste.-

ARTICULO 2º.- Si la resolución de la Administración demorase por más de seis meses después de iniciado el reclamo ante ella, el interesado requerirá el pronto despacho y si transcurriesen otros tres meses sin producirse dicha resolución, la acción podrá ser llevada directamente ante los Tribunales, acreditándose el transcurso de dichos plazos.-

ARTICULO 3º.- La demanda se comunicará por oficio al Poder Ejecutivo, por conducto del ministerio respectivo y al Procurador Fiscal, el cual deberá proceder previa consulta y con sujeción a las instrucciones que le transmita dicho Ministerio.-

ARTICULO 4º.- El término para contestar será de treinta días, y el mayor que corresponda según las distancias con arreglo a las leyes vigentes si la demanda se dedujere fuera del territorio de la capital de la República.-
Dentro de igual término se deducirán las excepciones dilatorias que corresponda.-
Si se interpusiesen éstas, el término para contestar la demanda, una vez resueltas, será de quince días.-

ARTICULO 5º.- La Suprema Corte conocerá de los recursos

que se deduzcan contra las resoluciones definitivas de los jueces en los casos a que se refiere la presente ley, según el procedimiento señalado para la tramitación de las apelaciones concedidas libremente.-

ARTICULO 6º.- Los jueces letrados de los Territorios Nacionales elevarán en consulta, ante la Suprema Corte, aún cuando no se interponga apelación, todas las sentencias definitivas, que pronuncien en los casos comprendidos en la presente ley.-

ARTICULO 7º.- Las decisiones que se pronuncien en estos juicios cuando sean condenatorios contra la Nación, tendrán carácter meramente declaratorio, limitándose al simple reconocimiento del derecho que se pretenda.-

ARTICULO 8º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.-

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a 27 de Septiembre de 1900.-

Poder Ejecutivo Nacional
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº 907.-

VIATICOS

Buenos Aires, 18 de febrero de 1959.-

Ref: Banco Central de la República Argentina. Consulta si sobre los viáticos que abona dicha institución Bancaria a su personal corresponde efectuar aportes jubilatorios.-

Vuelva a la Secretaría de Finanzas para manifestarle que respecto al planteo que se formula en los presentes actuados, esta Secretaría entiende que con carácter general, sobre los viáticos que abonan a su personal los organismos que integran el sistema bancario oficial no corresponde efectuar aportes jubilatorios.-

Sirva la presente de atenta nota de envío.-

Fdo.: RICARDO LUMI
Secretario de Hacienda de la Nación

RESOLUCION Nº 36.-

Poder Ejecutivo Nacional
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº 908.-

ESTATUTO PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL (Arts. 34º al 40º) - ASISTENCIA - LICENCIAS - SANCIONES -

Nota nº 1.455/59 D.G.S.G.
Expediente nº 300.361/59 D.G.O.S.
Providencia nº 269.-

//nos Aires, 17 de junio de 1959.-

Vuelva a la Dirección General de Contahilidad y Administración llevando a su conocimiento que, de acuerdo con el criterio expuesto en la providencia nº 148, de fecha 24/2/59 respecto de las faltas por enfermedad que se consideren injustificadas está también en pugna con lo determinado en la Reglamentación del art. 36º, punto II, del Estatuto del Personal Civil, la escala de sanciones que el punto 91º de la Resolución 8.264/56 (+) fija para los casos en que el agente utilice una licencia para rendir exámenes y no presente, dentro del término estipulado en el punto 90º de la misma Resolución, el comprobante respectivo.

En cuanto a las demás transgresiones que la mencionada Resolución sanciona, cabe destacar que en todo lo que se refiera a sanciones por faltas de asistencia o puntualidad deberá estarse a lo determinado en el art. 36º de la Reglamentación

(+) Ver Digesto Administrativo Nº 16.-

del Estatuto: en lo que se trate de sanciones por violación de otros deberes del personal, será procedente la aplicación de las medidas establecidas en la citada Resolución Nº 8.264/56, pero sujetas a la limitación en cuanto al término de las suspensiones y graduación de otras medidas que resulten de aplicar las normas de los artículos 34º a 40º del Estatuto aludido y de su Reglamentación.-

Fdo. JOSE LUIS FRANGI
Director General
Servicio Civil de la Nación

Poder Ejecutivo Nacional
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº 909.-

ESTATUTO PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL - ESCALAFON PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL (Art. 56º a 59º) - NOMBRAMIENTOS - PERSONAL TRANSITORIO - BONIFICACION POR ANTIGUEDAD - SUBSIDIO FAMILIAR -

Expediente nº 90.214/59.- S.H.-
Providencia nº 270.-

//nos Aires, 17 de junio de 1959.-

Vuelva a la Dirección General de Administración de la Secretaría de Transportes, llevando a su conocimiento que, tal como lo establece la Resolución S.H. nº 7.814/58 (Boletín Oficial del 6/9/58), los nombramientos de personal en la Administración Pública Nacional invisten carácter permanente, salvo que expresamente señale lo contrario el acto por el cual se efectúa la designación, o que ello surja de la partida presupuestaria a la que se impute el gasto correspondiente a su sueldo o jornal.

Vale decir que la condición de retribución a sueldo o jornal no implica por si que se trate de un empleo de carácter permanente o transitorio, puede haber empleados permanentes retribuídos a jornal y agentes transitorios mensualizados.

Por consiguiente, previo a toda consideración se hace necesario se determine expresamente el carácter de las partidas presupuestarias con que se atiende la remuneración del personal jornalizado a que se hace referencia.

En caso de tratarse de jornalizados de carácter permanente, deberá proponerse la habilitación de los correspondientes grupos y escalas de categorías, de acuerdo con los puntos 56º a 59º del Escalafón establecido por decreto Nº 9.530/58, aprobados los cuales quedarán incorporados al mismo, con los beneficios por antigüedad y subsidio familiar que en él se establecen.

En el caso de jornalizados transitorios, están expresamente excluídos del referido Escalafón, y no les alcanzan tampoco los beneficios señalados en concepto de antigüedad y subsidio familiar, de acuerdo con lo establecido en el decreto-ley nº 6.666/57 (+) y decretos 9.530/58 y 4.631/59 (º).

Sirva la presente de atenta nota de envío.

Fdo. JOSE LUIS FRANGI
Director General
Servicio Civil de la Nación

(+) Ver Digesto Administrativo Nº 254.-
(º) Ver Digesto Administrativo Nº 738.-

Boletín Nº 910.-

INCOMPATIBILIDADES

Buenos Aires, 24 de abril de 1958.-

Visto lo propuesto por los señores Ministros Secretarios de Estado en los Departamentos de Marina; Aeronáutica e interino a cargo de la Cartera de Guerra, y al Jefe del Estado Mayor de Coordinación, y

CONSIDERANDO:

Que en los Ministerios Secretarías de Estado de las Fuerzas Armadas, existen diversos pronunciamientos legales que excluyen del régimen de incompatibilidades establecido por Decreto número 1.134 de fecha 23 de marzo de 1932, al personal docente civil de diversos institutos de enseñanza de dichas jurisdicciones;

Que el dictado de dichos decretos vienen sucediéndose como consecuencia directa del adelanto general que se ha impuesto a las Fuerzas Armadas, que hace necesario mantener al docente en excesivas jornadas, en detrimento pecuniario del mismo con respecto a la obtención de horas de clase en otros institutos ajenos al arma;

Que algunos institutos de las Fuerzas Armadas, si bien se encuentran en un mismo plano de igualdad, no gozan en la actualidad con respecto a su personal, del beneficio de la exclusión del régimen de incompatibilidad;

Que por Decreto Nº 15.230 de fecha 19 de noviembre de 1957 se incorporó a los agentes de la Carrera Personal Subprofesional de la Docencia, al ámbito del Estatuto para el Personal Civil de las Fuerzas Armadas;

Que la función que cumplen los agentes afectados a dicha Carrera, son considerados docentes, por cuanto los mismos desarrollan tareas vinculadas directamente con la enseñanza;

Que por todo ello, es de estricta justicia, homologar todas las funciones docentes y las de los auxiliares de la mis-

ma, cualesquiera sean los institutos donde el agente reviste;

Que asimismo, por razones de orden administrativo, se hace de imprescindible necesidad involucrar en un solo decreto las normas que regirán en lo que a incompatibilidades en la docencia respecta;

Que a fin de regularizar definitivamente las situaciones que se hubiesen planteado o se plantearen, corresponde dictar el pronunciamiento que normalice las mismas en las Fuerzas Armadas.-

EL PRESIDENTE PROVISIONAL DE LA NACION ARGENTINA
D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- Declárase excluído del régimen de incompatibilidades establecido por Decreto número 1.134 de fecha 23 de marzo de 1932 y sus complementarios, a todo el personal docente civil y auxiliar de la docencia que presta servicios en los institutos de enseñanza pertenecientes a las Secretarías de Estado de las Fuerzas Armadas, que revisten como tales y cuyos sueldos estén imputados en los respectivos presupuestos, como docentes, auxiliares de la docencia y/o de la Carrera - Personal Subprofesional de la Docencia.-

ARTICULO 2º.- Facúltase a los Ministerios Secretarías de Estado de las Fuerzas Armadas, a efectuar individualmente y de acuerdo a sus necesidades, las limitaciones, en lo que respecta a las horas de clase, cátedras y/o cargos de los agentes citados en el artículo 1º.-

ARTICULO 3º.- Déjase sin efecto toda disposición que se oponga a la aplicación del presente decreto.-

ARTICULO 4º.- El presente decreto será refrendado por los señores Ministros Secretarios de Estado en los Departamentos de MARINA; AERONAUTICA e interinamente a cargo de la Cartera de GUERRA y de HACIENDA.-

ARTICULO 5º.- Comuníquese, dése a la DIRECCION GENERAL DEL BOLETIN OFICIAL e IMPRENTAS, publíquese en los BOLETINES MILITAR, NAVAL y AERONAUTICO PUBLICO, respectivamente tome conocimiento el TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA NACION y archívese en el ESTADO MAYOR DE COORDINACION.-

DECRETO Nº 5950.-

ARAMBURU - T.Hartung - J.H. Ladabu ru - Adalbert Krieger Vasena.-

Poder Ejecutivo Nacional
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº 911.-

ESTATUTO PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL (Arts. 37º, 38º y 42º) - SANCIONES

Expediente nº 33.190/59.-
Providencia nº 294.-

//nos Aires, 29 de junio de 1959

Vuelvan estas actuaciones a la Dirección General de Contabilidad y Administración llevando a su conocimiento que, como ya lo expresara este organismo en anteriores oportunidades (v. gr. expte. nº 43.674) la gradación de las medidas disciplinarias impuestas al personal es privativa de las autoridades de la Repartición en cuya jurisdicción se cometieron los hechos, y -en su caso- de las autoridades superiores del Ministerio o Secretaría de Estado respectivos. A estos fines dichas autoridades deben ajustar su cometido a lo determinado en el artículo 42º del recordado Estatuto, que establece en su primer párrafo: "Toda sanción se graduará teniendo en cuenta la gravedad de la falta o infracción, los antecedentes del agente, y en su caso los perjuicios causados".-

Por otra parte, esta Dirección General considera que las causas enumeradas en el artículo 37º del Estatuto no invisten el carácter de imperativas en su aplicación: su comisión puede determinar la cesantía del causante, previos los recaudos del caso, pero no en forma automática; en todos los casos han de tenerse en cuenta las previsiones del artículo 42º, antes transcripto.-

Especialmente ello tiene vigencia para el caso del inciso h) del referido artículo 37º, que por su vastedad se presta a una amplia gama de consideraciones. No debe olvidarse tampoco que el artículo 38º del Estatuto, en su última parte, expresa que "las causales enunciadas en este artículo y los dos anteriores no excluyen otras que importen violación de los deberes

del personal"; vale decir que la actitud de los causantes, en el caso particular del presente expediente, podría conceptuarse como una falta a sus deberes específicos que, por su carácter, por sus consecuencias, y por los antecedentes de los actores, hiciera procedente la medida que para cada uno de ellos propiciara la Junta de Disciplina de la Dirección Nacional de Aduanas y aplicara en definitiva esa Repartición.-

En tal sentido, no corresponde efectuar a esta Dirección General la valoración del caso, por escapar a su cometido específico.-

DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO CIVIL.-

Fdo:. JOSE LUIS FRANGI
Director General

Poder Ejecutivo Nacional
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº 912.-

FONDO NACIONAL DE LAS ARTES

Buenos Aires, 28 de abril de 1958 .-

Siendo necesario reglamentar el Decreto-Ley Nº 1.224 del 3 de febrero de 1958 y sus modificaciones, en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 86, inciso 2º de la Constitución Nacional,

EL PRESIDENTE PROVISIONAL DE LA NACION ARGENTINA
D E C R E T A :

ARTICULO 1 º.- El Fondo Nacional de las Artes se regirá por el Decreto-Ley nº 1.224/58 y sus modificaciones, así como por las normas de la presente reglamentación.-
ARTICULO 2º .- El domicilio legal del Fondo Nacional de las Artes será el de su sede central en la ciudad de Buenos Aires, pudiendo el Directorio establecer filiales y/o delegaciones en el interior o en el exterior del país, conforme lo estime conveniente para el mejor cumplimiento de sus finalidades.-
ARTICULO 3º .- Por actividades artísticas y literarias se entiende las siguientes en todas sus formas y manifestaciones:

a) Las artes plásticas;
b) La arquitectura y el urbanismo en sus aspectos exclusivamente estéticos;
c) Las actividades teatrales definidas en el artículo 11 del Decreto-Ley Nº 1.251/58;
d) La cinematografía;
e) La radiofonía;
f) La televisión;
g) La música;
h) La danza;
i) Las letras;
j) Las artes aplicadas;
k) Las expresiones folklóricas.

Será requisito primordial para optar a los beneficios de esta ley, que las manifestaciones artísticas y literarias - precedentemente enunciadas y para las cuales se soliciten - los mismos, revelen aptitud para contribuir positivamente a la cultura del país.-

ARTICULO 4º.- El otorgamiento de créditos estará condicionado a que pueda asegurarse que no se desvirtuará, en el proceso de utilización de los inmuebles y maquinarias construídas o adquiridas con aquellos créditos, las altas finalidades de superación artística que persigue la creación del Fondo Nacional de las Artes.-

ARTICULO 5º.- El capital inicial aportado por el Gobierno Nacional en forma de títulos del Crédito Interno Argentino, salvo el caso de autorización especial del Poder Ejecutivo, no podrá afectarse a las operaciones del Fondo, para las cuales se utilizarán los intereses que dicho capital devengue, las utilidades líquidas anuales y los demás recursos que se recauden en concepto de fomento de las artes, cuya administración, fiscalización y distribución le compete.-

ARTICULO 6º.- Entiéndese por obras de dominio público sujetas al pago del derecho de autor, las comprendidas en el enunciado del artículo 1º de la Ley Nº 11.723 y en el artículo 5º de la misma y sus modificaciones.-

Facúltase al Fondo Nacional de las Artes para determinar la forma y oportunidad de percepción de estos derechos, así como a fijar el monto de los mismos, los que no podrán exceder de los vigentes para el dominio privado en virtud de la aplicación de la ley nº 11.723, sus modificaciones y decretos reglamentarios.-

ARTICULO 7 º.- Las obras de dominio público que a la fecha - de esta reglamentación se hallaren en comercio editadas, impresas o reproducidas por cualquier medio, estarán exentas - del pago del derecho por el plazo de dos años; pasado dicho lapso deberán abonar el correspondiente derecho de autor.-

Para gozar del beneficio de esta franquicia los interesados o responsables deberán presentar al Fondo Nacional de las Artes una declaración jurada detallando la cantidad y especie de obras en esas condiciones, dentro de los sesenta días de la fecha de la presente reglamentación, para poder acogerse a la exención.-

ARTICULO 8º .- Exceptúase del pago del derecho de autor de dominio público a los libros, publicaciones y textos de ense

ñanza primaria y secundaria que fuesen incluídos en los programas oficiales por los organismos competentes.-

ARTICULO 9º.- Serán responsables del impuesto establecido en el inciso b) del artículo 6º del Decreto-Ley 1.224/58, los propietarios, locatarios o concesionarios de los locales donde se efectúen bailables o reuniones danzantes, valiéndose de reproducciones musicales, fonoeléctricas, radiotelefónicas, por televisión o por cualquier otro medio conocido o a conocerse.- El gravamen se aplicará sobre el valor neto de la entrada o localidad, deducidos los impuestos que incidan directamente sobre ella e inclusive sobre las entradas llamadas "de favor" o "de prensa".-

Serán responsables, asimismo, del impuesto previsto en el inciso d) del artículo 6º las empresas concesionarias de radiofonía o televisión establecidas en el país. El gravamen se aplicará sobre el precio bruto de los avisos y, en su caso, sobre el importe total abonado por la difusión de programas, cualquiera fueran sus características. La aplicación, percepción y fiscalización de este impuesto estará a cargo de la Dirección General Impositiva y se regirá por la Ley 11.683, texto ordenado en 1956, y sus modificaciones, conforme a lo dispuesto por el artículo 2º, último párrafo, de la misma.-

Los responsables abonarán los impuestos a que se refiere el artículo 6º del decreto-ley que se reglamenta, en la forma y plazos que determine el Fondo Nacional de las Artes y, en su caso la Dirección General Impositiva.-

ARTICULO 10º.- Los recursos del Fondo deberán ser depositados por los organismos recaudadores, dentro de las 48 horas en las cuentas bancarias que en cada caso determine el Fondo Nacional de las Artes.-

ARTICULO 11º.- Para la fiscalización y percepción de sus recursos, el Fondo podrá convenir los servicios de reparticiones públicas o de sociedades profesionales autorales con personería jurídica, extendiendo a las mismas el carácter de Agentes de servicio público, con las obligaciones y responsabilidades inherentes a los mismos.-

ARTICULO 12º.- Entiéndese por recaudación proveniente de la Ley 11.723, las previstas por tasas de inscripción, en los artículos 61 y 67 y la proveniente de la aplicación de multas (artículos 73, 74 y 83 "in fine").-

ARTICULO 13º.- Los impuestos establecidos en los incisos b) y d) del artículo 6º del Decreto-Ley 1.224/58 comenzarán a regir el 1º de junio de 1958.-

ARTICULO 14º.- El Directorio del Fondo se reunirá ordinariamente una vez por semana y en forma extraordinaria, a convocatoria de la Presidencia o a pedido de por lo menos tres de sus directores. En este último caso deberán solicitarlo a la Presidencia, quien dispondrá la convocatoria en un plazo no mayor de tres (3) días, indicando el objeto de la misma.-

ARTICULO 15º.- El Directorio funcionará válidamente con un quórum de ocho de sus miembros, salvo para el caso de otorgamiento de préstamos hipotecarios, para lo cual se requerirá la presencia de por lo menos once directores.-

ARTICULO 16º.- A los efectos de lo que establece el artículo 18 del Decreto-Ley 1.224/58 "in fine" se entiende que los dos tercios de los miembros requeridos para reconsiderar una resolución del Directorio, se refiere a miembros presentes. Aclárase, asimismo, que para que pueda tratarse un pedido de reconsideración deberá estar presente en la reunión un número de directores igual o mayor al que estuvo en la oportunidad de dictarse la resolución cuya reconsideración se solicita.-

ARTICULO 17º.- El Presidente dirige la administración y le corresponde:

a) presidir las reuniones del Directorio;
b) designar los directores que compondrán las distintas comisiones;
c) resolver en general sobre los asuntos no atribuídos expresamente al Directorio;
d) autorizar los gastos e inversiones de acuerdo con las resoluciones del Directorio;
e) firmar las actas del Directorio refrendadas por dos directores.-

ARTICULO 18º.- En caso de ausencia, enfermedad u otro impedimento del Presidente, la Presidencia será desempeñada, interinamente, por el miembro del Directorio que actúe en representación del Banco Central de la República y en su defecto, el Directorio designará de entre sus miembros un Presidente "ad-hoc" por el tiempo que dure la acefalía.-

En caso de empate, el Presidente tendrá voto decisorio.-
ARTICULO 19º.- El Directorio dictará los reglamentos internos que juzgue necesarios, y mediante resolución expresa, podrá confiar a comisiones o subcomisiones, así como a los funcionarios del Fondo, el ejercicio de cualquiera de sus facultades propias que por su naturaleza pueda delegar.-
ARTICULO 20º.- A los efectos de lo previsto en el artículo 22 del Decreto-Ley 1.224/58 la Dirección General de Cultura deberá prestar su asesoramiento al Fondo en todas las ocasiones que su Directorio lo requiera.-
ARTICULO 21º.- El Instituto Nacional de Cinematografía transferirá al Fondo Nacional de las Artes, los fondos que haya recaudado hasta la fecha de la presente reglamentación con destino al fomento de la actividad teatral y al Museo Nacional de Bellas Artes, que se encontraban pendientes de imputación. A partir de la fecha precitada, el Instituto Nacional de Cinematografía liquidará diariamente al Fondo Nacional de las Artes la parte proporcional de sus recaudaciones afectada al destino antedicho.-
ARTICULO 22º.- A los efectos de lo establecido en el artículo 26 del Decreto-Ley 1.224/58 el Fondo Nacional de las Artes contribuirá al mantenimiento de la Casa del Teatro, cuando a su juicio los recursos propios de dicha institución sean insuficientes para cumplir las finalidades previstas en sus estatutos. El Fondo estará facultado para fiscalizar que la ayuda económica que preste a la Casa del Teatro sea invertida de conformidad esta disposición.-
ARTICULO 23º.- Las operaciones de crédito con garantía real destinadas a atender lo dispuesto en el artículo 2º, inciso b) del Decreto-Ley 1.224/58 sólo podrán acordarse para la construcción, ampliación, refección o modernización de inmuebles y para la compra de éstos, cuando se trate de edificios con menos de un año de antigüedad. Este último requisito no será exigible en aquellos casos en los que la denegatoria del crédito podría originar la desaparición de inmuebles afectados a actividades artísticas o la desintegración de unidades económicas, como asimismo en el supuesto previsto en el artículo 21, inciso b) del Decreto-Ley 1.224/58.-
Los créditos referidos precedentemente, se otorgarán únicamente con garantía real de hipoteca en primer grado sobre el bien que graven.-

Los créditos destinados a la adquisición o construcción de maquinarias y todo tipo de elementos o materiales se concederán con prenda sobre los mismos.-

ARTICULO 24º.- El Fondo otorgará préstamos ordinarios o de evolución para atender las necesidades circunstanciales y corrientes de las actividades artísticas y literarias y otorgará, asimismo préstamos de fomento, estas operaciones tendrán carácter de estímulo y sus condiciones generales se fijarán con la amplitud que requiere la naturaleza y características de las actividades a apoyar y teniendo en cuenta los fines perseguidos por el Fondo en materia de promoción y desarrollo.

-ARTICULO 25º.- El Directorio fijará tasa de interés, plazos, importes máximos a otorgar y todas las demás condiciones de las operaciones que realice.-

ARTICULO 26º.- El Directorio del Fondo fijará anualmente las proporciones en que se distribuirán los recursos destinados a préstamos para cada una de las actividades que deba atender.-

ARTICULO 27º.- El Fondo Nacional de las Artes prestará apoyo económico para la realización de certámenes, exposiciones y muestras diversas de las actividades artísticas, debiendo fijar tipo de interés, plazo y amortización del préstamo en aquellos que persigan fines de lucro.-

ARTICULO 28º.- El apoyo que prestará el Fondo con fines de recuperación industrial y comercial, se limitará exclusivamente a las manifestaciones artísticas que tengan relación directa con el objetivo del mismo.-

ARTICULO 29º.- El Fondo podrá requerir todos los antecedentes o informes, así como realizar inspecciones de carácter técnico-contable necesaria para sus operaciones y tomar las medidas de control, verificación y fiscalización posterior que considere adecuadas. Los gastos respectivos serán a cargo de los solicitantes o beneficiarios del crédito, con las excepciones que dispongan los reglamentos internos.-

ARTICULO 30º.- Para optar a las becas, subsidios, subvenciones y premios de estímulo a las actividades artísticas y literarias beneficiadas por la ley, los interesados deberán aceptar la fiscalización y demás requisitos que establezca el Directorio del Fondo.-

ARTICULO 31º.- Los bienes sobre los cuales se constituyen garantías reales deberán estar asegurados. Si durante la vigencia de las operaciones caducara el seguro y no fuera renovado

el Fondo podrá hacerlo por cuenta del deudor.-
ARTICULO 32º.- Los beneficiarios de los préstamos estarán obligados a destinar sus importes a los fines convenidos. Su incumplimiento dará lugar a la cancelación del préstamo otorgado y a exigir su reintegro de inmediato.-
ARTICULO 33º.- Deróganse todas las disposiciones que se opongan al presente decreto reglamentario.-
ARTICULO 34º.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario de Estado en el Departamento de Hacienda.-
ARTICULO 35º.- Publíquese, comuníquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.-

ARAMBURU - Adalbert Krieger Vasena.-

DECRETO Nº 6.255.-

Poder Ejecutivo Nacional
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín nº 913.-

ESCALAFON PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL (Pto. 26º. ap. IX y X) - SUBSIDIO FAMILIAR

Expediente 90.286/59 D.G.S.C.-
Expediente nº 105.016/59 T.C.N.
Providencia nº 303.-

//nos Aires 1º de julio de 1959.-

Vuelvan estos actuados al Tribunal de Cuentas de la Nación llevando a su conocimiento que el caso planteado es asimilable en términos muy generales, a la situación del agente casado, separado de hecho, que declara tener a su cargo a los hijos del matrimonio: en esas circunstancias, en que no es viable la certificación escrita de la existencia de tal situación, la liquidación del pertinente subsidio resultará de la declaración jurada del interesado, sujeta a las verificaciones previstas en los puntos IX y X de las normas complementarias del punto 26º del Escalafón (decreto nº 4631/59). La misma es susceptible, en caso de falsedad comprobada de la aplicación de lo determinado en el punto XIV de aquellas normas.-

Este procedimiento fué aprobado mediante Resolución S.H. nº 7.787/59 (Boletín Oficial del 25/VI/59).-

El agente deberá aportar además, los comprobantes sobre identidad, edad, estado civil, etc., de su madre y del hermano declarado como "a cargo".-

Sirva la presente de atenta nota de remisión.-

Fdo:. JOSE LUIS FRANGI
Director General
Servicio Civil de la Nación

Poder Ejecutivo Nacional
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº 914.-

ESTATUTO PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL (Art. 41º) - SUMARIOS -

Expediente nº 3.541/59 Reservado
Providencia nº 290.-

//nos Aires, 26 de junio de 1959.-

Vuelva a la Dirección General de Contabilidad y Administración llevando a su conocimiento que, acerca de la situación planteada en estos actuados, este organismo considera lo siguiente:

El art. 41º, punto II, de la Reglamentación del Estatuto del Personal Civil establece que "El instructor debe pertenecer a la misma jurisdicción en la que se ha producido el hecho".

En el presente caso cabe considerar que la "jurisdicción" de que habla dicho art. 41º, es la correspondiente a la Dirección General de Contabilidad y Administración (Departamento de Servicio Médico), ya que los hechos se produjeron durante el cumplimiento de una visita médica-domiciliaria, motivada por la ausencia de la causante a sus tareas; vale decir que en ese momento la empleada se encontraba sujeta, transitoriamente, al ámbito jurisdiccional de la dependencia nombrada. En efecto, supongamos que la empleada hubiera inasistido a sus tareas por enfermedad pero, en lugar de solicitar reconocimiento médico en su domicilio se hubiera presentado a los mismos fines en los consultorios del Servicio Médico. De producirse allí una situación que hiciera necesario el levantamiento de un sumario, no cabría duda alguna acerca de

a qúe jurisdicción correspondería disponer dicha diligencia.- En tales circunstancias se darían los mismos actuantes del caso concreto planteado en estos actuados; el empleado, perteneciente a la Dirección General Inmobiliaria; el médico, a la Dirección General de Contabilidad y Administración, y sólo variaría el lugar geográfico de los hechos.

En los dos casos, el real y el supuesto, la empleada estaba ausente de sus tareas: no correspondería en ningún caso que fuera la Dirección General Inmobiliaria el organismo que dispusiera la instrucción del sumario.- En cambio, en ambos, los hechos estarían vinculados al desarrollo de la misión específica de uno de los actuantes -el médico- y el organismo al que éste pertenece, y por cuya orden estaba efectuando la visita de reconocimiento, es al que corresponde instruir el procedimiento aludido, ya que el mismo se refiere pura y exclusivamente a situaciones que afectan a su función de contralor de las ausencias del personal.

Fdo. JOSE LUIS FRANGI
Director General
Servicio Civil de la Nación

Poder Ejecutivo Nacional
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº 915.-

ESTATUTO PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL (Art. 39º) - SANCIONES - SUSPENSION PROVISIONAL

Ref.: Expediente nº 61.190/59 M.
Expediente nº 300.348/57 T.
Providencia nº 289.-

//ñor Subsecretario

Esta Dirección General ha dictaminado en anteriores ocasiones (v.gr. providencia nº 152, del 13/6/58), en el expediente nº 90.089/58) que "los procesos judiciales y sumarios administrativos iniciados con anterioridad al decreto-ley nº 6.666/57(+)(Estatuto de Personal Civil de la Administración Pública Nacional) deben resolverse arreglo a sus disposiciones, siempre que encuadren en las disposiciones del artículo 2º del Código Penal, esto es, de que se trate de la ley más benigna.

Por consiguiente, en el caso en cuestión, la suspensión del causante no podía haberse extendido más allá del plazo máximo de noventa días previsto en el artículo 39º de dicho Estatuto, debiendo haberse limitado en tal forma y por una Resolución posterior la medida acordada mediante Resolución nº 114, dictada por la Caja Nacional de Previsión para Empresarios con fecha 18/6/57, momento en el que aún no regía el referido cuerpo legal.

El criterio expuesto en el primer párrafo ha sido compar

(+) Ver Digesto Administrativo Nº 254.-

tido en esencia por la Dirección General de Asuntos Jurídicos de esta Secretaría de Estado (dictamen del 25/11/58, en expediente nº 2.768/56), pero carece evidentemente, de fuerza imperativa, ya que no existe decreto, resolución ni acto dispositivo alguno que le asigne tal carácter. Es de destacar al respecto que, en atención a las consideraciones vertidas a fs. 19 del adjunto expediente nº 50.830/58 por la Asesoría Letrada del organismo interesado, sería conveniente conocer la opinión de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de esta Secretaría de Estado sobre las mismas.-

DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO CIVIL, 26 de junio de 1959.-

Fdo. JOSE LUIS FRANGI
Director General

Buenos Aires, 6 de julio de 1959.-

Pasen estos actuados a la Dirección General de Asuntos Jurídicos estimando su dictamen acerca del carácter de la aplicación del precepto contenido en el artículo 2º del Código Penal con referencia a las faltas de carácter puramente administrativas.-

Fdo. RAFAEL RODOLFO AYALA
Subsecretario de Hacienda

Poder Ejecutivo Nacional
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº 916.-

ESTATUTO PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL - ESCALAFON PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL

Buenos Aires, 24 de setiembre de 1959.-

Visto el Escalafón para el Personal Civil de la Administración Pública Nacional aprobado por Decreto Nº 9.530 de fecha 7 de noviembre de 1958, y

CONSIDERANDO:

Que es necesario dictar las normas que complementen las disposiciones que sobre "Carrera", "Cambio de Clase o Grupo", "Retribuciones", "Concursos" y "Calificaciones" instituye el mencionado escalafón en sus Capítulos III, IV, VI, VII y VIII respectivamente;

Que corresponde dejar establecido el procedimiento a seguir en lo que respecta a la asignación de funciones al personal comprendido en el escalafón de referencia;

Que asimismo se ha observado que en los puntos 20º, 21º y 22º de dicho instrumento, al referirse al pase de grupo de los agentes que revistan en los sub-grupos: "cadetes administrativos", "aspirantes" y "aprendices", con sueldos que van desde m$n. 1.600.- a m$n. 2.100.- ; desde m$n. 1.400.- a m$n. 2.000 y desde m$n. 1.300.- a m$n. 1.800.-, en las Clases "D", "E" y "F", respectivamente, se establece la exigencia de dieciocho (18) años de edad y dos (2) de antigüedad en la Clase, además de condicionarse dicho pase a la existencia de la vacante correspondiente en el último grupo de la Clase;

Que dichas normas traen como consecuencia que agentes con

dieciocho (18) años de edad deban prolongar su permanencia en el "subgrupo", mientras no se verifiquen los restantes extremos exigidos, lo cual contrasta con el principio sostenido en el escalafón mencionado al establecer en dos mil seiscientos pesos ($ 2.600.-) el sueldo mínimo para los agentes mayores de dieciocho (18) años;

Que de acuerdo con dicho principio debe modificarse la disposición de referencia de tal manera que el acceso a la retribución mínima fijada se produzca automáticamente al cumplir el agente la edad exigida y demás condiciones inherentes a su Clase;

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA
D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- Apruébanse las normas complementarias de los puntos 7º, 8º, 11º, 15º, 28º, 29º, 30º, 31º, 32º, 33º, 34º, 38º, 40º, 41º, 46º, 47º, 48º, 49º, y 50º del "Escalafón para el Personal Civil de la Administración Pública Nacional", aprobado por Decreto nº 9.530 de fecha 7 de noviembre de 1958, que forman parte integrante del presente decreto.-

ARTICULO 2º.- Las funciones del personal comprendido en el Escalafón para el Personal Civil de la Administración Pública Nacional, serán asignadas en la forma que a continuación se indica:

AUTORIDAD	HASTA CLASE	HASTA GRUPO
Poder Ejecutivo o autoridad competente para efectuar nombramientos en estos cargos.	A	I
Ministros, Secretarios de Estado, Secretarios de la Presidencia de la Nación o autoridad competente para efectuar nombramientos en estos cargos.-	A	III
Funcionario que ejerza la jefatura de un organismo principal(Clase A- grupo I) .-	B	I

Funcionario que ejerza la jefatura de cada una de las dependencias principales (A-IV) o los funcionarios de las Clases A ó B en quienes los jefes de los organismos principales (A-I) o los jefes de las dependencias principales (A-II) deleguen estas atribuciones.-	D; E; E y F	I

ARTICULO 3º.- Solamente podrán asignarse funciones previstas en el agrupamiento funcional aprobado por el Poder Ejecutivo para cada jurisdicción y corresponderá adjudicarlas al personal que reviste en la clase y grupo pertinente.-
El Tribunal de Cuentas de la Nación fiscalizará el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente, sin cuya conformidad la asignación de funciones respectiva no tendrá validez.-
ARTICULO 4º.- Substitúyese el texto de los puntos 20, 21º y 22º del Escalafón aprobado por el decreto nº 9.530/58, por - el que se indica a continuación:

Punto 20: "Cuando se produzca una vacante en cualquiera de "los grupos" y el "subgrupo" de la Clase "D", se "llamará a concurso de oposición en el cual podrán "participar los integrantes de dicha "Clase", y "los de la "E" y "F" que reúnan las condiciones ne "cesarias para el ingreso a la "Clase" establecidas en el Capítulo V. Fracasado este procedimiento se llamará a un nuevo concurso de oposición en "las condiciones previstas en el segundo párrafo - "del punto 15º. Cuando los integrantes del "subgrupo" - cadetes administrativos - cumplan dieciocho "(18) años de edad pasarán automáticamente al gru- "po VIII, o sus equivalentes en horarios reducidos "para proseguir desde allí su carrera en lo sucesivo, en las mismas condiciones que los integrantes "de dicho grupo. No regirá en tales casos lo dis - "puesto en el inciso c) del punto 12º. A este fin "y de no existir en tal oportunidad la vacante co- "rrespondiente en el respectivo item presupuestario, se le liquidará la diferencia entre su retribución como cadete administrativo y la que diera "origen su nueva situación de revista, mediante una

"partida global, hasta tanto se produzca dicha va "cante".

Punto 21º: "Cuando se produzca una vacante en cualquiera de "los grupos de la Clase "E", excepto en el VIII , "se seleccionará al agente mejor calificado entre "los de la respectiva repartición que revisten en "el grupo inmediato inferior, que pertenezcan a "la especialidad y tengan una antigüedad en el - "grupo superior a tres (3) años. Fracasado este - "procedimiento o bien para llenar las vacantes - "que se produzcan en el grupo VIII y en el subgru "po "aprendices", se realizará concurso de oposi- "ción, en las condiciones fijadas por el segundo "párrafo del punto 15º. Cuando los integrantes del "subgrupo "aprendices cumplen dieciocho (18) años "de edad, pasarán automáticamente al grupo VIII,- "para proseguir desde allí su carrera en lo sucesi "vo, en las mismas condiciones que los integran - "tes del grupo. No regirá en tales casos lo dis - "puesto en el inciso C) del punto 12º. A este fin "y de no existir en tal oportunidad la vacante co "rrespondiente en el respectivo item presupuesta- "rio, se le liquidará la diferencia entre su re - "tribución y la que diera origen su nueva situa - "ción de revista, mediante una partida global,has "ta tanto se produzca dicha vacante".-

Punto 22º: "Cuando se produzca una vacante en cualquiera de "los grupos de la Clase "F", excepto en el VI, se "seleccionará al agente mejor calificado entre los "de la respectiva repartición que revista en el - "grupo inmediato inferior y que tengan una anti - "güedad en el grupo superior a tres (3) años.Fra- "casado este procedimiento o bien para llenar las "vacantes que se produzcan en el grupo VI - y en "el subgrupo "aspirantes", se realizará una prue- "ba de aptitud en las condiciones fijadas por el "segundo párrafo del punto 15º.-
"Cuando los integrantes del subgrupo "aspirantes" "cumplan dieciocho (18) años de edad, pasarán au-

"tomáticamente al grupo VI -, para proseguir desde "allí su carrera en lo sucesivo, en las mismas con "diciones que los integrantes del grupo. No regirá "en tales casos lo dispuesto en el inciso c) del "punto 12º. A este fin y de no existir en tal opor "tunidad la vacante correspondiente en el respecti "vo item presupuestario, se le liquidará la dife - "rencia entre su retribución y la que diera origen "su nueva situación de revista, mediante una parti "da global, hasta tanto se produzca dicha vacante".

ARTICULO 5º.- La exigencia establecida por el inciso c) del punto 12º del Escalafón, se considera en suspenso hasta el 31 de octubre de 1960. Mientras tanto, bastará a los fines pertinentes que la calificación obtenida durante el primer período calificable dentro del régimen aprobado por el decreto nº - 9.530/58 alcance un promedio no inferior a siete (7) puntos.- La antigüedad de tres (3) años en el grupo, exigida por los - puntos 21º y 22º, podrá ser substituída por antigüedad total de servicios, hasta tanto transcurra igual lapso de vigencia del Escalafón.-

ARTICULO 6º.- Facúltase a la Secretaría de Hacienda para dictar las normas reglamentarias, complementarias y aclaratorias e interpretativas que se requieran para el mejor cumplimiento de las disposiciones de este decreto.-

ARTICULO 7º.- El presente decreto será refrendado por el se - ñor Ministro Secretario en el Departamento de ECONOMIA, y firmado por el señor Secretario de Estado de HACIENDA.-

ARTICULO 8º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION GENERAL DEL BOLETIN OFICIAL e IMPRENTAS, y pase a la Secretaría de Estado de Hacienda para su conocimiento, y al TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA NACION y a la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION a sus efectos.-

FRONDIZI - Alvaro Alsogaray - Guillermo Walter Klein.-

DECRETO Nº 11.941.-

NORMAS COMPLEMENTARIAS DE LOS PUNTOS DEL ESCALAFON APROBADO POR EL DECRETO Nº 9530/58

PUNTO 7º - I) La promoción (pase de categoría) del personal de la Clase "A" y de los subgrupos de las Clases "D", "E" y "F", se efectuará automáticamente al cumplirse el año de antigüedad en la categoría y tendrá vigor a partir del día 1º del mes siguiente a aquél durante el cual hubiera cumplido dicho período.-
A estos fines se deducirán de la antigüedad:

a) las suspensiones firmes;
b) las licencias sin goce de haberes superiores a quince (15) días, continuos o discontinuos.-

II) El personal comprendido en el artículo 39º - del Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública Nacional y su reglamentación no será promovido hasta tanto se resuelva definitivamente su situación administrativa y, en ese caso, con sujeción a lo previsto en el inciso a) del apartado I).-

PUNTO 8º - La promoción del personal regido por el sistema de módulos que hubiera alcanzado el puntaje exigido, se llevará a cabo en forma automática el 1º de noviembre de cada año.-
Cuando el puntaje acumulado alcanzara al doble del módulo exigido, el agente promoverá - dos (2) categorías.-

PUNTO 11º - El agente que hubiera obtenido una calificación inferior a cuatro (4) puntos durante dos (2) períodos consecutivos, será retrogradado en una (1) categoría, aunque con los puntos acumulados hubiera totalizado el módulo necesario para promover. Dichos puntos recién podrán

computársele en el período siguiente, siempre que no se verifique la situación prevista en el artículo 37º inc. g) del Estatuto.

PUNTO 15º - I) La designación de un agente en una vacante de la misma Clase y Grupo, constituye un cambio de destino o de función, no rigiendo por lo tanto las disposiciones del Capítulo IV, excepto las establecidas en el inciso b) del punto 12º.-

II) Cuando como consecuencia de la reestructuración de un organismo éste adquiera mayor jerarquía, los cargos que resulten con este motivo deberán ser cubiertos mediante el procedimiento de concurso, previsto en el escalafón.-
Dichos concursos deberán llevarse a cabo una vez aprobada la reestructuración por la autoridad competente y con antelación al correspondiente reajuste presupuestario, quedando supeditados los mismos al otorgamiento de los créditos necesarios.-

III) Al solo efecto de los concursos, el personal de las Secretarías y organismos dependientes directamente de la Presidencia de la Nación se considerarán como pertenecientes a una sola jurisdicción.-

PUNTO 28º - I) Se entiende por agentes "con función jerárquica" a los efectos del adicional por título, a aquellos agentes de las Clases "A","B","E" y "F" que ejerzan la Jefatura (en todos sus grados) de un servicio o dependencia y cuenten con personal afectado a sus órdenes.-

II) Se considerarán como "funciones propias de la especialidad" y por lo tanto con derecho a la percepción de los adicionales por título, a aquellas tareas para cuyo desempeño, aún cuando no sea imprescindible la posesión de título, si el agente lo posee, estará en condiciones de cumplirlas con mayor eficacia, por a -

plicar conocimientos adquiridos mediante los estudios cursados, relativos a la materia específica del servicio.-
A los fines señalados precedentemente, los Ministros, Secretarios de Estado, Secretarios de la Presidencia de la Nación y el Tribunal de Cuentas, dictarán para cada repartición u organismo - a su propuesta - la resolución fijando los títulos bonificables para cada función.-
Declárase asimismo que no será indispensable que las resoluciones mencionadas contengan la nómina de todos los títulos posibles inherentes a cada función, bastando en cambio que las mismas dispongan sobre los que posean los agentes en actividad.-

III) Cuando para el desempeño de un cargo, no perteneciente a la Clase "A" o "B", el agente deba poseer indispensablemente el título universitario respectivo, no corresponderá el pago del adicional por título, sino la inclusión del agente en la Clase "C".-

IV) Las tareas administrativas en general, serán consideradas como inherentes a los títulos de bachiller, maestro normal y perito mercantil.-

V) Se considerarán títulos habilitantes comprendidos en el

Inciso a) bachilleres, peritos mercantiles, maestros, técnicos de escuelas industriales, y todos aquellos otros expedidos por establecimientos oficialmente reconocidos, para cuya obtención, se requiera el cumplimiento de un plan de estudios no inferior a tres (3) años y haber cursado el ciclo completo de enseñanza primaria (6º grado).-

Inciso b) Títulos universitarios que comprendan normalmente un ciclo de estudios de uno (1) a tres (3) años;

Inciso c) Títulos universitarios que comprendan normalmente un ciclo de estudios de cuatro (4) años.-

Inciso d) Títulos universitarios que comprendan normalmente un ciclo de estudios de cinco (5) o más años.

En los casos señalados en los incisos b), c) y d), se considerarán únicamente aquellos títulos correspondientes a carreras universitarias que exijan la posesión previa de estudios secundarios completos.-

VI) Los agentes comprendidos en las Clases "E" y "F" tienen derecho a los adicionales enunciados en los incisos a), b), c) y d), siempre que se cumplan los extremos previstos en las presentes normas.-

VII) No podrá bonificarse más que un título o certificado de capacitación por agente en un mismo empleo. Cuando el agente posea más de uno, se le reconocerá aquél que esté bonificado con mayor suma, siempre que la función desempeñada sea propia de su especialidad de acuerdo con las presentes disposiciones; de lo contrario se reconocerá únicamente aquél que sea inherente a la tarea que cumple.-

VIII) A los efectos del reconocimiento de los títulos respectivos el agente deberá presentar la documentación que acredite su posesión.-

IX) Los títulos obtenidos con anterioridad al 1º de noviembre de 1958 serán reconocidos a partir de la fecha citada.-

X) Los títulos obtenidos con posterioridad al 1º de noviembre de 1958, serán reconocidos a partir del 1º del mes siguiente a la fe-

cha de su obtención.-

XI) Unicamente se bonificarán títulos reconocidos por los organismos oficiales competentes.-

XII) El adicional por título no se considera integrante del sueldo o jornal del agente y en consecuencia no estará sujeto a aportes o descuentos en concepto de jubilaciones, préstamos o créditos y obra social. Tampoco se lo considerará a los efectos del sueldo anual complementario ni para el pago de indemnizaciones o sobreasigraciones establecidas o que se establezcan en función del sueldo o jornal.-En cambio sufrirán proporcionalmente los mismos descuentos que correspondan efectuar sobre los sueldos o jornales con motivo de licencias, inasistencias y suspensiones.-

PUNTO 29º - Los llamados a concursos deben realizarse por intermedio del servicio de personal de las respectivas reparticiones, previa autorización dictada por resolución de los Ministros, Secretarios de Estado, Secretarios de la Presidencia, el Tribunal de Cuentas o los funcionarios en quienes ellos deleguen expresamente tales facultades.-

PUNTO 30º - I) Si realizado el concurso, la autoridad competente para efectuar nombramientos decidiera no suscribir el acto respectivo, se reservarán las propuestas a fin de volverlas a considerar automáticamente, previa consulta a los interesados, si desaparecieran las causas que impidieron concretar tales designaciones. Mientras no se decida dicho concurso y salvo que desistieran los candidatos seleccionados, no podrá realizarse nuevo concurso para proveer los cargos en cuestión.-

II) Lo dispuesto en el apartado que antecede de-

berá ser puesto en conocimiento de todo aspirante junto con las condiciones y base para los concursos.-

PUNTO 31º - Las publicaciones, afiches, carteleras y avisos murales llamando a concurso, deberán mantenerse por lo menos durante dos (2)días hábiles consecutivos.-

PUNTO 32º - I) Los concursos serán según el caso, de antecedentes o de oposición.-

II) En los consursos de antecedentes se valorarán:

a) Funciones y cargos desempeñados y que desempeña el candidato;
b) Títulos profesionales y habilitantes y certificados de capacitación obtenidos;
c) Estudios cursados y que cursa;
d) Conocimientos especiales adquiridos;
e) Trabajos realizados exclusivamente por el candidato;
f) Trabajos en cuya elaboración colaboró el candidato;
g) Menciones obtenidas;
h) Foja de servicios de cada uno de los empleos desempeñados y que desempeña;
i) Foja de calificaciones o conceptos correspondientes a cada uno de los empleos desempeñados o que desempeña;
j) Antigüedad en el cargo actual;
k) Antigüedad total de servicios discriminados por empleo.-

Los antecedentes indicados en los incisos - b);c);d);e); y f) se ponderarán siempre que los mismos estén directamente relacionados con la función del cargo a proveer.-

III) Los concursos de oposición serán teóricos y /o prácticos.-

Los exámenes teóricos serán siempre escritos y también los prácticos cuando ello fuera posible.-
Los concursos de oposición se ajustarán a las especificaciones particulares que se determinen en cada jurisdicción para cada Clase, Grupo, y función, con sujeción a los siguientes tópicos generales, condicionados y graduados, en orden a la naturaleza y especialidad del cargo a proveer:

a) Conocimientos específicos inherentes a la función y cargo a desempeñar;
b) Derecho administrativo general y/o disposiciones legales y/o reglamentarias de aplicación en la tarea;
c) Ley orgánica de los Ministerios Nacionales;
d) Organización y funciones del Ministerio, Secretaría de Estado o jurisdicción respectiva;
e) Organización y funciones del organismo en que el agente cumplirá sus funciones;
f) Demostración de aptitudes en la resolución de problemas prácticos vinculados con asuntos inherentes a la función, cargo y especialidad.-

IV) Los concursos escritos se regirán por el siguiente procedimiento:

a) Una vez comprobada la identidad de los aspirantes, se les entregarán las hojas necesarias de papel oficial, selladas y firmadas por todos los miembros de la Junta Examinadora;
b) El tema será igual para todos los aspirantes a una misma vacante y se les hará conocer al iniciarse la prueba;

c) La prueba tendrá una duración máxima de dos (2) horas; será obligatorio la escritura con tinta;
d) Al finalizar la prueba el examinado firmará cada una de las hojas que haya usado y devolverá las no utilizadas;
e) Los temas de exámenes serán confeccionados en relación a la Clase, Grupo y especialidad del cargo a proveer;
f) Estos temas serán sometidos a la aprobación de la misma autoridad que resolvió el llamado a concurso, cumplido lo cual se enviarán en sobre sellado y lacrado a los integrantes de la Junta Examinadora, quienes procederán a abrirlo en presencia de los aspirantes y en el momento de iniciarse el examen;
g) La preparación de los temas de exámenes y su posterior trámite hasta el momento de ponerlos en conocimiento de los aspirantes, tendrá carácter de secreto y toda infidencia al respecto dará lugar a la instrucción del correspondiente sumario administrativo, tendiente a establecer las consiguientes responsabilidades.-

V) La calificación en los concursos de antecedentes y de oposición, será numérica, de uno (1) a diez (10) puntos y la misma será discernida acto seguido por la Junta Examinadora, que a tal efecto continuará reunida en sesión permanente, labrándose el acta respectiva.-

VI) La interposición de reclamos por el orden de prioridad asignado, será ante la Junta Examinadora. Denegado el reclamo podrá apelarse en última instancia.- Esta apelación deberá efectuarse dentro de los dos (2) días hábiles desde la fecha de notificación de la denegatoria y será considerada en la oportunidad de efectuarse la designación y por la au

toridad competente para hacerla.-

VII) La interposición de reclamos provocará la interrupción del trámite de la designación correspondiente hasta su resolución definitiva.-

VIII) Los Ministros, Secretarios de Estado, Secretarios de la Presidencia, el Tribunal de Cuentas de la Nación, los Jefes de las entidades descentralizadas o autárquicas o los funcionarios en quienes ellos deleguen esta facultad, podrán declarar desiertos los concursos, que se realicen en sus respectivas jurisdicciones por:

a) falta de aspirantes;
b) insuficiencia de méritos en los candidatos presentados.-

Esta declaración será inapelable y deberá notificarse a los interesados;

IX) La declaración a que alude el apartado VIII dará lugar al llamado a nuevo concurso, cuyos resultados serán analizados y elevados juntamente con los del desechado.-

PUNTO 33º - I) Los integrantes de las Juntas Examinadoras que intervengan en los concursos para cubrir cargos de la Clase "A", serán designados por los Ministros o Secretarios de Estado, Secretarios de la Presidencia y el Tribunal de Cuentas.-
Para los cargos correspondientes a las restantes "Clases", los integrantes de la Junta Examinadora serán designados por los Jefes de los respectivos organismos.-

II) Los integrantes de las Juntas Examinadoras deberán pertenecer a grupos superiores al correspondiente al cargo a proveer. Cuando dentro de la jurisdicción en que se realiza el concurso (Ministerio, Secretaría de Estado, Secretaría de la Presidencia o Tribunal

de Cuentas) no existieran candidatos para integrar la Junta respectiva, que reúnan el requisito señalado precedentemente, podrá designarse a agentes que pertenezcan al mismo grupo del cargo a proveer.-

III) Cuando dentro de la jurisdicción en que se realiza el concurso no existan agentes para integrar la Junta Examinadora, pertenecientes a la especialidad del cargo a proveer, podrán ser substituídos con aquellos que posean las especialidades más afines.-

IV) La Junta clasificará los exámenes o antecedentes, en su caso, y establecerá el orden de prioridad, remitiendo luego toda la documentación al respectivo servicio de personal quien notificará y dará vista de dicho orden de prioridad a cada uno de los interesados, por el término de dos (2) días hábiles.- Vencido este plazo, sin que se hubiera producido reclamo alguno, se dará por aceptado y confeccionará la correspondiente propuesta de designación.-

PUNTO 34º - I) La calificación abarcará el período comprendido entre el 1º de septiembre y 31 de agosto.-

II) Ningún agente podrá ser designado para calificar a personal que no mantenga con él relación de dependencia.-

III) Los agentes designados para calificar al personal en cada una de las respectivas instancias, deberán tener una antigüedad mínima en la función de seis (6) meses. Cuando el titular del cargo correspondiente carezca de dicho requisito, la autoridad competente deberá designar al agente que intervendrá en la calificación.-

IV) El calificador está obligado a excusarse cuando lo una al calificado un vínculo de parentesco o cuando medie alguna otra causal -

que hiciera dudar de su imparcialidad. En esta circunstancia se procederá en la forma indicada en el segundo párrafo del apartado III.-

PUNTO 38º - I) El personal que no reúna seis (6) meses de antigüedad en el cargo a la fecha de la calificación, no será calificado, pero en la foja correspondiente el período siguiente se le considerará la antigüedad que quede sin calificar juntamente con la de dicho período.-

II) El personal comprendido en el artículo 39º del Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública Nacional y su reglamentación, no será calificado hasta tanto se resuelva su situación administrativa. Una vez producida dicha resolución se procederá a calificarle por él o los períodos correspondientes, dejando constancia de dicha situación.-

PUNTO 40º - I) La calificación de "CONCEPTOS" (apartado III de la foja de calificaciones) del agente adscripto o trasladado, se establecerá efectuando un promedio ponderado en función del tiempo en que revistó en cada destino, dentro del lapso que abarca esa calificación. A tal fin el servicio de personal de la jurisdicción de revista presupuestaria, seguirá el siguiente procedimiento:

a) Multiplicará la calificación obtenida en cada destino por el número de días laborables comprendidos en el período durante el cual hubiera permanecido en el mismo.-

b) Sumará luego los resultados obtenidos del procedimiento señalado en el inciso a).-

c) El total que resulte de b) lo dividirá por el número de días laborables que abarca el período de calificación y esta cifra será la correspondiente al valor "C" del aparta do II de la Foja de Calificaciones.-

II) Los datos que correspondan a "ANTECEDENTES", serán proporcionados al servicio de personal, por las autoridades correspondientes a los or ganismos donde el agente se desempeñó durante el lapso que abarca la calificación, a fin de considerarlos en conjunto.-

III) La calificación de "CONCEPTOS" y los datos re feridos a "ANTECEDENTES" correspondientes a los agentes adscriptos o trasladados, serán remitidos al servicio de personal de la juris dicción de revista presupuestaria, para su - consideración, al producirse el traslado o en el momento de finalizar la adscripción, si es to último ocurre antes del 1º de septiembre - o bien durante la primera quincena de dicho - mes si la adscripción se prolongare.-

PUNTO 41º - I) A los fines de la calificación se utilizarán, para cada clase los formularios que los anexos respectivos especifican, y que se agregan al presente.-

II) Déjase establecido que cuando alguna de las - causales comprendidas en el rubro "Asistencia y Puntualidad" y "Embargos", hubieran origina do sanciones de apercibimiento o suspensión - durante el respectivo período de calificación no deberá computárselos en dichos rubros, sino únicamente, en el correspondiente a "Disciplina".-

III) Los resultados parciales y totales se anota - rán hasta el centésimo únicamente.-

IV) A los efectos de llenar la respectiva foja de calificaciones, se seguirá el siguiente proce dimiento:

a) Los servicios de personal llenarán el apar

tado I, y remitirán la foja de calificaciones a los calificadores. Una vez que el calificador que intervenga en última instancia se hubiere pronunciado (apartados III y V) volverá la foja correspondiente al servicio de personal, que procederá a llenar los apartados II y IV.-

b) En el apartado II se especificarán los siguientes valores correspondientes a las letras que en cada caso se indica:
A = Suma de los puntos que resultaren del cuadro 1º) del apartado IV;
C = Suma de puntos que resulten del cuadro del apartado III;
T = Suma de días correspondientes al período de actividad, que resulten del cuadro 2º del apartado IV;
E = Suma de puntos que resulten del cuadro 3º del apartado IV.-

c) La "Calificación parcial" (X) se obtendrá de restar al valor de C el de A y dividir el resultado por nueve (9) que representa el número de "Condiciones " calificadas en el apartado III.-

d) La "Calificación por actividad" (Y), se obtendrá de multiplicar el valor X por el de T y dividir el resultado por el valor de "P.c." que representa la cantidad de días laborables que, en virtud del régimen de servicios, estén contenidos en el período comprendido entre el 1º de septiembre al 31 de agosto.-

e) La "Calificación final" (Z) será el resultado de deducir del valor de Y el de E.-

f) En el apartado IV, se seguirá el siguiente procedimiento para los cuadros que en cada caso se indican:

CUADRO 1º -
En la primera columna ("Cantidad") se anotará el número de llegadas tarde, inasistencias, apercibimientos y suspensiones incurridas por el agente durante el "Lapso que abarca la calificación", que excedan la tolerancia que, en los casos previstos, se especifica.-
En la tercera columna ("Puntos") se anotará la cifra que resulte de multiplicar la cantidad de la primera por los coeficientes establecidos en la segunda.-
En la última columna ("Suma de puntos"), luego de sumar separadamente los parciales de la tercera columna del rubro "Asistencia y Puntualidad" y "Disciplina", se efectuará la suma total, estableciendo al pie el resultado.-
CUADRO 2º -
En la primera columna se anotará la cantidad de días laborables para el respectivo servicio durante los cuales el agente hubiera permanecido en inactividad durante el "Lapso que abarca la calificación", por las causas que en cada caso se indican.-
La agregación de nuevas causas no podrá hacerse sino con carácter general para todos los agentes comprendidos en este régimen.-
En la primera casilla de la última columna ("Lapso que abarca la calificación") se anotará el total de días laborables contenidos en el lapso que el agente registre revistando en la categoría durante el período comprendido entre el 1º de septiembre al 31 de agosto, de acuerdo con la modalidad del servicio en que se desempeña. A esta cantidad se adicionará el remanente de días laborables correspondiente al período anterior que no hubiera podido considerarse por encontrarse el agente comprendido en la situación prevista,

en el apartado I del punto 38º. Cuando se verifique esta circunstancia, las novedades producidas en dicho período remanente, se tendrán en cuenta también a los fines de las registraciones previstas en los distintos cuadros de este apartado de la Foja de Calificación.-

En la segunda casilla ("Menos las licencias que afectan a T"), se anotará el total de días laborables obtenidos de la columna correspondiente al rubro "Licencias que afectan el período de actividad T". En la última casilla ("Período de actividad T"), se anotará la cifra que resulte de deducir a la cantidad anotada en la primera casilla, la correspondiente a la segunda.-

CUADRO 3º -

Se anotarán los embargos trabados al agente con excepción de aquellos motivados por alimentos o "Litis expensas", que no se computarán. Luego de establecido el lapso que haya durado el embargo, se multiplicará esa cantidad por el coeficiente correspondiente anotándose en la última columna los puntos que de ello surja.-

A los fines de multiplicar el coeficiente respectivo por la duración del embargo, no se considerarán las fracciones inferiores a quince (15) días, computándose como mes entero los períodos que excedan ese término.-

En todos los casos se limitará el cómputo de los embargos al "Lapso que abarca la calificación", debiendo el remanente, si se prolongara considerarse en el período siguiente.-

g) Los calificadores llenarán los apartados III y V.-

Los funcionarios que califiquen en la. y 2da instancia establecerán su calificación mediante una "X" en rojo el primero, y en a -

zul el segundo, sobre el número correspondiente establecido en cada casilla. El funcionario que califique en última instancia asentará su concepto para cada una de las condiciones establecidas en las casillas correspondientes de la última columna, fijando al final la suma de puntos obtenidos. La calificación que se efectúe en esta instancia será numérica de uno (1) a diez (10) puntos (números enteros).-

PUNTO 46º - Las resoluciones de la Junta de Calificaciones en materia de reclamos por escalafonamiento, serán declarativas y no causarán estado hasta tanto se dicte el pronunciamiento definitivo que, en todos los casos, será por decreto del Poder Ejecutivo.-
La competencia de la Junta en estos reclamos estará limitada a la consideración del escalafonamiento del agente recurrente, en las funciones ordenadas previamente por el Poder Ejecutivo en las clases y grupos previstos por el Escalafón, sin entrar al análisis del agrupamiento funcional en sí.-

PUNTO 47º - Será indispensable la prueba de competencia, cuando la función del recurrente figure con idéntica denominación en distintos grupos, en razón a un orden de grados de importancia o complejidad de la tarea o de la eficiencia, conocimientos, etc., exigidos al agente para su desempeño, y el peticionante invoque su derecho a figurar en un grupo superior a aquel donde fué escalafonado.-

PUNTO 48º - Los reclamos interpuestos por razones de escalafonamiento deberán ser individuales y en la presentación respectiva el agente hará constar además de cualquier otro antecedente que se le requiera:

a) descripción de la función que cumplía al 1º de noviembre de 1958;

b) denominación, clase y grupo que a dicha función acuerda el agrupamiento funcional dispuesto por el Poder Ejecutivo;

c) denominación de la función, clase y grupo en que ha sido escalafonado;

d) clase y grupo en que estima debió ser escalafonado y razones en las cuales funda su reclamo.-

PUNTO 4º - El informe de la repartición contendrá la opinión de ésta sobre el reclamo formulado y las razones y fundamentos que decidieron el escalafonamiento del recurrente en la correspondiente clase y grupo.-

PUNTO 5º - Una vez notificada la resolución al interesado y a la repartición, la Junta la remitirá directamente, con sus antecedentes e informes, a la Dirección General del Servicio Civil de la Nación, la cual, luego de su análisis y cuando así corresponda, propondrá el acto respectivo al Poder Ejecutivo por intermedio de la Secretaría de Hacienda.-

---- o ----

Poder Ejecutivo Nacional
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº 917.-

AUMENTO DE EMERGENCIA

Expediente Nº 8.008/58.-

//nos Aires, 24 de Septiembre de 1958.-

Vuelva al Ministerio de Defensa Nacional para manifestarle que, respecto a las aclaraciones solicitadas acerca de la aplicación de las mejoras instituídas por la Ley Nº 14.456 (+) esta Secretaría debe informar lo siguiente:

1º.- Al personal Civil de las Fuerzas Armadas corresponde liquidarle como complemento adicional la suma m$n. 400, hasta las remuneraciones totales de m$n. 6.699 aplicándose a partir de esa suma - la parte pertinente de la escala prevista en el art. 2º del Decreto Nº 4.476/58. Si dicha cantidad resultara inferior al equivalente del 60% del total de retribuciones que los agentes tenían asignadas en concepto de remuneración mensual básica y bonificación por costo de vida al 1º de - julio de 1956, deberá liquidarse como complemento adicional la diferencia hasta alcanzar ese nivel. En consecuencia, la liquidación de dicho beneficio deberá efectuarse sobre la base de la situación del personal al 1º de mayo ppdo. (2º caso de los ejemplos que se consignan en el memorándum de fs. 3).

2º.- Con referencia al aspecto de si las promociones del personal escalafonado, por ascensos automáti-

(+) Ver Digesto Administrativo Nº 589.-

cos por calificación se consideran para la pérdida del derecho a percibir el complemento adicional que establece la parte "in fine" del artículo 6º del Decreto Nº 4.476/58, cabe manifestar que efectivamente deben considerarse, sin perjuicio de la aplicación del procedimiento estatuído por la última parte del artículo 8º de dicho decreto cuando se opere la situación que allí se contempla.

3º.- En cuanto al personal contratado, aclárase que no le son de aplicación los beneficios emergentes de la Ley Nº 14.456, aún en aquellos casos en que dicho personal efectúe aportes jubilatorios, ya que prácticamente, conforme a las disposiciones contenidas en el artículo 30º del Decreto-Ley nº 16.990/57 (*), no puede disponerse la contratación de agentes cuando los mismos sean destinados a cumplir funciones a realizar tareas comunes y permanentes que deben atenderse con cargos estables de presupuesto. La variabilidad en la remuneración de esa clase de personal sólo es factible siempre que en el contrato se determine en forma expresa que el locador tendrá las mismas obligaciones que determine el Estatuto para el Personal Civil de las Fuerzas Armadas y su reglamentación para con los agentes comprendidos en dicho estatuto.

4º.- Para los agentes civiles que ingresen a las Fuerzas Armadas, corresponde liquidarle en concepto de aumento de emergencia la suma de m$n 400 mensuales.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18º del Decreto Nº 4.476 de fecha 22 de agosto de 1958, dése a la presente el carácter de resolución aclaratoria a las

(*) Ver Digesto Administrativo Nº 409.-

disposiciones del citado decreto.

Sirva la presente de atenta nota de envío.-

Fdo. RICARDO LUMI

RESOLUCION Nº 213.-

Poder Ejecutivo Nacional
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº 918.-

COEFICIENTES

Buenos Aires, Marzo 19 de 1959.-

Visto el Decreto Nº 11.916 del 30 de diciembre de 1958 (+) por el que se establecen reformas al régimen cambiario a partir del 1º de enero de 1959, y

CONSIDERANDO:

Que a fin de que las reformas referidas no alteren el desenvolvimiento del Servicio Exterior de la Secretaría de Estado de Comercio, corresponde arbitrar transitoriamente los medios necesarios al logro de tal finalidad;

Que con el objeto de mantener una unidad de criterio en la solución de idénticos problemas, se estima conveniente aplicar al de la Secretaría de Estado de Comercio las mismas normas que las dadas para el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto por Decreto Nº 554 del 16 de enero último;

Que hasta tanto se adopten las medidas definitivas que permitan reajustar las asignaciones y coeficientes en vigor, se considera prudente asegurar el desarrollo normal de dicho servicio hasta donde lo permitan los créditos vigentes al 31 de octubre de 1958, en el Anexo 54;

Por ello y lo propuesto por la Secretaría de Estado de Comercio,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA
D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- Facúltase transitoriamente a la Secretaría de

(+) Ver Digesto Administrativo Nº 891.-

Estado de Comercio a aplicar sobre los coeficientes vigentes a la fecha para las remesas de haberes, y para los gastos, girados o a girar al exterior, a partir del 1° de enero de 1959, el factor de multiplicación 3.50, hasta tanto se dicten las normas definitivas al respecto, en cuya oportunidad deberán practicarse los ajustes correspondientes.

ARTICULO 2°.- El gasto que demande la aplicación de lo dispuesto en el artículo anterior, se hará efectivo hasta el límite de la totalidad de los créditos vigentes al 31/10/58 del presupuesto de gastos, Sección 1°, Título X, Servicios, Sector 2 A), Erogaciones a financiar con recursos de Rentas Generales N° 1, Secretaría de Comercio N° 54, que quedan habilitados para el presente ejercicio 1958-1959, de conformidad a lo instituído por el artículo 13° de la Ley de Contabilidad.

ARTICULO 3°.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro en el Departamento de Economía y firmado por los señores Secretarios de Estado de Comercio, de Hacienda y de Finanzas.

ARTICULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.

FRONDIZI - Emilio Donato del Carril - José C. Orfila - Antonio López - Ricardo Lumi.-

DECRETO N° 3.315.-

Boletín nº 919.-

LOTERIA DE BENEFICENCIA NACIONAL Y CASINOS - ESTATUTO DEL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL (Art. 2º, inc. 1)

Buenos Aires, setiembre 19 de 1958.

Visto el expediente nº 42.166/58 por el cual la Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos gestiona la designación de don Alberto Alfredo Franco, para desempeñarse como "Niño Cantor", y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 1º del Decreto nº 14.670 del 23 de junio de 1949 determina que los niños a los que se le encomiende esas tareas, deberán ser mayores de doce años y menores de diecisiete, circunstancia por la cual procede dejar establecido que cesarán en sus funciones al cumplir esta última edad;

Que en virtud del régimen especial fijado por el decreto citado, corresponde determinar que ese personal se encuentra incluído en las disposiciones del Capítulo I, artículo 2º, inciso 1) del Decreto-Ley nº 6.666/57 (+);

Por ello y atento lo prescripto en los artículos 23º y 27º del Decreto-Ley nº 16.990/57 (º),

---

(+) Ver Digesto Administrativo nº 254.-
(º) Ver Digesto Administrativo nº 409.-

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A

ARTICULO 1º.- Nómbrase "Niño Cantor" de la Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos (2 - 1 - 52 - 7 - 97 - 0 - 9 - 13 - 0 - 0 - 828 - 0), con un jornal de $ 50.- más la suma que corresponda por aplicación del artículo 24º del Decreto-Ley nº 23.573/56 ("), incorporado a la Ley nº 11.672 por el artículo 36º del Decreto-Ley nº 16.990 del año 1957, a don Alberto Alfredo FRANCO (Cl.1944,C.I.5.123.408 Capital Federal).

ARTICULO 2º.- El agente designado en el artículo anterior, como así también los que se nombren en lo sucesivo para desempeñar análogas tareas, cesarán en sus funciones al cumplir la edad de diecisiete años, dejándose establecido que los mismos se encuentran incluídos en las disposiciones del Capítulo I, Artículo 2º, Inciso 1), del Decreto-Ley número 6.666/57.

ARTICULO 3º.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda.

ARTICULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.-

FRONDIZI - Emilio Donato del Carril - Ricardo Lumi.-

DECRETO Nº 6.119.-

(") Ver Digesto Administrativo nº 141.-

Poder Ejecutivo Nacional
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº 920.-

SUBSIDIO FAMILIAR

Ref.: Consejo Nacional de Educación: consulta s/aplicación Decreto-Ley número 14.984/57.-

//nos Aires, 19 de Diciembre de 1958.-

Con referencia a la consulta formulada por la Dirección General de Administración del Consejo Nacional de Educación en el sentido de aclarar la procedencia del beneficio por asignación familiar instituída por el Decreto-Ley Nº14.984(+), vuelva a la Dirección General citada para manifestarle lo siguiente:

1.- El Decreto-Ley Nº 14.984/57 legisla respecto de las relaciones laborales entre la Administración Pública Nacional y sus agentes, no correspondiendo en consecuencia omitir opinión de cuestiones que hacen al fuero de la actividad privada.

2.- En ese orden de ideas y conforme lo resuelto en oportunidades anteriores esta Dirección General de Finanzas, entiende que, dentro de las limitaciones impuestas por el citado Decreto-Ley y la Resolución número 48/57 (M. de H.), el beneficio de la asignación familiar es precedente en el caso de la Sra. María A. G. de Mota, toda vez que no supere el monto de m$n. 5.400.- como asignación mensual nominal percibida en

(+) Ver Digesto Administrativo Nº 369.-

la Administración Pública Nacional y que el esposo no sea agente del Estado Nacional.

Sirva la presente de atenta nota de envío.

Fdo. ALVARO OSCAR **VIZCARGUENAGA**
Subdirector General de Finanzas

PROVIDENCIA Nº 566.-

Poder Ejecutivo Nacional
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº 921.-

PREMIO POR ASISTENCIA

Ref.: Se solicita aclaración respecto a la aplicación de la "Bonificación por Eficiencia" al personal designado con carácter transitorio en los Mercados Nacionales que funcionan en jurisdicción de la Secretaría de Comercio.-

//nos Aires, 14 de Noviembre de 1958.-

Vuelva al TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA NACION a efectos de poner en su conocimiento, con referencia al planteamiento formulado por la Secretaría de Comercio, que:

1º.- De la redacción del artículo 5º del Decreto número 12.963/57 e incisos 2º y 4º de la "Reglamentación" adjunta al mismo, se desprende - a juicio de esta Secretaría - que no es factible conformar la variante propuesta por cuanto los tres resortes legales precitados determinan que la mejora alcanza sólo al personal que preste servicio con carácter permanente y quedará anulada por cualquier clase de inasistencia en que incurra el agente, aún cuando exista causa de enfermedad o cualquier otra que estuviera debidamente justificada.-

Como es dado observar para percibir el beneficio aludido deben acreditarse dos condiciones indispensables:
a) Ser designado con carácter permanente, y

b) Observar una asistencia perfecta.

2°.- De lo expuesto surge que tampoco es factible aplicar, en este caso, la facultad conferida por el Inciso 5° de la Reglamentación en cuanto se refiere a"... introducir las modificaciones de forma que la práctica aconseje...", pues la alternativa que se propicia importaría exceder las limitaciones impuestas por el artículo 5° del precepto legal citado en el punto 1° y su pertinente reglamentación.

Sirva la presente de atenta nota de envío.-

Fdo. RAFAEL RODOLFO AYALA
Subsecretario de Hacienda

MEMORANDUM

ASUNTO: Tribunal de Cuentas de la Nación - Solicita aclaración respecto al personal transitorio de la Secretaría de Comercio a los efectos de la aplicación de la bonificación por eficiencia.-

ANTECEDENTES:

Por Decreto N° 12.963 del 17 de octubre de 1957 se estatuyó -artículo 5°- el beneficio aludido en el epígrafe, prescribiendo textualmente:

"Art. 5°.- Establécese, a partir del 1° del mes siguiente de la sanción del presente decreto, para el personal obrero, maestranza y de servicio de carácter permanente de los organismos del MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIA que realicen actividades de carácter comercial y/o industrial, cuyos haberes se imputen al presupuesto de Cuentas Especiales, una "bonificación por eficiencia, de conformidad con la reglamentación que figura en planillas anexas al presente artículo".

A su vez el artículo 2º de la reglamentación determina que:

"2º.- Tendrá derecho a la bonificación por eficien "cia el personal obrero y de maestranza y/o de servicio "de los organismos aludidos, que tengan una antigüedad "superior a seis (6) meses y preste servicio con carác- "ter permanente.

Igualmente se transcribe el inciso 4º de la reglamenta ción aludida por resultar intimamente ligada a lo manifesta do a fs. 1 de los actuados:

"Inc.4º.- La condición de asistencia perfecta, que "dá derecho a la percepción del 100 % de la bonificación, "debe entenderse en una forma total y absoluta, y la mis- "ma quedará automáticamente invalidada por cualquier "clase de inasistencia en que incurra el agente - sal- "vo las que sean consecuencia de la licencia anual re- "glamentaria - aún cuando exista causa de enfermedad o "cualquier otra que estuviera debidamente justicada".-

La situación expuesta motivó una serie de reclamos por parte del personal designado en forma transitoria por el término de UN (1) año y de otros agentes nombrados por NO VENTA (90) días, manifestándose que en un principio se acor dó que el beneficio correspondía a la totalidad de los agen tes designados por el término de UN año y al transitorio que tuviera una antigüedad superior a los SEIS (6) meses cum plida en forma continua o discontinua, quedando excluídos los obreros nombrados por un plazo de 90 días, situación és ta que no fue contemplada en la reglamentación del ya nom- brado artículo 5º.

Se prosigue indicando que en mérito a la particularidad de los servicios de los Mercados Nacionales de Papas, Fru- tas y de Hortalizas el personal nombrado por un año puede suspendérsele en sus funciones por razones de fuerza mayor y no imputables a los mismos. Tal estado de cosas obligan a

concretar las quitas establecidas en la precitada reglamentación.

Por las causales invocadas se propicia establecer que:

1º.- Si las suspensiones las afectúa un mercado determinado por razones de fuerza mayor, corresponde establecer una excepción en la reglamentación para no perjudicar económicamente a los obreros;

2º.- Abonar al personal la parte proporcional que le corresponde de bonificación por asistencia, es decir que siendo el premio de m$n. 250 mensuales y sobre la base de 25 días de labor, incrementar el jornal diario en m$n. 10.-

Atento lo singular del problema que se trata la Secretaría de Comercio elevó el expediente al Tribunal de Cuentas de la Nación organismo que a su vez lo gira a este Departamento de Estado solicitando se dilucide si el personal designado por un año, cuyo período de nombramiento es prorrogado sucesivamente sin interrupción de tareas, puede considerarse como de carácter permanente a los efectos de la aplicación de la "bonificación por eficiencia".

OPINION DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y C. FINANCIERO:

Con referencia a la cuestión promovida cabe formular las siguientes consideraciones:

1º.- De la redacción del artículo 5º del Decreto Número 12.963/57 e incisos 2º y 4º de la reglamentación, se desprende que no es factible conformar la variante propuesta por cuanto el primero como los otros dos determinan en forma clara y precisa que la mejora alcanza sólo al personal que preste servicio con carácter permanente y quedará anulada por cualquier clase de inasistencia en que incurra el agente, aún cuando exista causa de enfermedad o

cualquier otra que estuviera debidamente justificada.

2º.- De lo expuesto precedentemente surge que tampoco es factible aplicar, en este caso, la facultad conferida por el inciso 5º de la reglamentación en cuanto se refiere a introducir las modificaciones de forma que la práctica aconseje..., pues la variante que se propicia importaría exceder las limitaciones impuestas por el artículo 5º del Decreto Nº 12.963/57 antes citado y su pertinente reglamentación en materia de otorgamiento del beneficio denominado "Bonificación por eficiencia".

En base a los argumentos concretados se eleva a consideración de la Superioridad - por si la misma comparte el criterio que se sustenta - la respectiva providencia para el Tribunal de Cuentas de la Nación.-

Fdo. JAVIER DIAZ
Jefe de Departamento de
Presupuesto C. Financiero

PROVIDENCIA 529.-

Poder Ejecutivo Nacional
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº 922.-

LEY DE CONTABILIDAD - RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL DE CUENTAS - PRESUPUESTO - CONTADORES FISCALES

Buenos Aires, 14 de julio de 1959.-

Visto lo dispuesto por los artículos 73, inciso b) y 77 de la ley de contabilidad y su reglamentación pertinente, y

CONSIDERANDO:

Que al sancionarse la actual ley de contabilidad este cuerpo estimó conveniente mantener transitoriamente las disposiciones emanadas de la Contaduría General de la Nación durante su anterior organización, dictando a tales efectos la resolución nº 3/57 (+), medida resuelta hasta tanto las circunstancias hicieran posible el análisis detenido de cada una de aquellas disposiciones;

Que entre ellas se encuentra la resolución nº 480/53 que reglamenta la intervención de los contadores fiscales delegados en los estados relativos a la ejecución del presupuesto;

Que si bien el decreto nº 8.705/54, modificatorio del artículo 26º del decreto nº 33.236/49, establece que el delegado de la Contaduría General de la Nación destacado ante los distintos organismos comprobará la exactitud de los estados demostrativos de la ejecución del presupuesto que presentan los servicios administrativos, la ley de contabilidad ha reservado al Tribunal de Cuentas el control de la hacienda pública;

(+) Ver Digesto Administrativo Nº 112.-

Que la materia vinculada con las registraciones contables y los estados referidos a las mismas hacen a la esencia del control interno a cargo de la Contaduría General de la Nación;

Que por las razones expuestas es necesario delimitar el ámbito de competencia del Tribunal de Cuentas sobre el particular;

Por ello y en uso de la atribución conferida por el artículo 84, inciso o) de la ley de contabilidad,

EL TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA NACION

R E S U E L V E :

ARTICULO 1º.- Los señores contadores fiscales dejarán de tomar intervención en los estados demostrativos de la ejecución del presupuesto a partir del correspondiente al mes de julio en curso.

ARTICULO 2º.- Derógase la resolución nº 480/53.

ARTICULO 3º.-Comuníquese, dése al Digesto Administrativo y pase a la Contaduría General de la Nación a sus efectos, cumplido, archívese.-

JOSE M. FERNANDEZ FARIÑA - Damián Figueroa - Rodolfo J. Tarelli - Wifredo Dedeu - Eusebio E. Villar (voc. acc.) Juan Carlos Pastene -Secretario-

RESOLUCION Nº 1.294.-

Poder Ejecutivo Nacional
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nª 923.-

LEY DE CONTABILIDAD - RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL DE CUENTAS - PRESUPUESTO - CONTADORES FISCALES - CUENTAS ESPECIALES

Buenos Aires, 16 de setiembre de 1959.-

Visto la resolución nº 1.294/59 (+) mediante la que se dispuso que los señores contadores fiscales dejarían de tomar intervención en los estados demostrativos de la ejecución del presupuesto, y

CONSIDERANDO:

Que han surgido dudas con respecto al alcance de esa resolución en relación a la intervención que cabe tomar a los citados funcionarios en los estados mensuales de ingresos y egresos de cuentas especiales con administración directa autorizada, cuya presentación está reglamentada por resolución 1.107/49;

Que los fundamentos expuestos en los considerandos de la resolución mencionada en el preámbulo de la presente son perfectamente aplicables al caso en cuestión;

Que, por otra parte, estuvo en la intención de este cuerpo comprender en la medida que se comenta todos los estados demostrativos de movimientos de créditos, recaudaciones y egresos relacionados con el presupuesto general de gastos de la Nación;

Por ello,

(+) Ver Digesto Administrativo Nª 922.-

EL TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA NACION

R E S U E L V E:

ARTICULO 1º.- Déjase aclarado que lo dispuesto en el artículo 1º de la resolución nº 1.294/59 comprende igualmente a los estados de cuentas especiales citados en la resolución nº 1.107/49.

ARTICULO 2º.- Derógase la resolución nº 1.107/49 en cuanto se oponga a la presente.

ARTICULO 3º.-Remítase copia de la presente resolución a la Contaduría General de la Nación, dése al Digesto Administrativo, comuníquese a los distintos responsables y, cumplido, archívese.-

JOSE M. FERNANDEZ FARIÑA - Damián Figueroa - Rodolfo J. Tarelli - Wifredo Dedeu - Antonio M. Pérez Arango - Juan Carlos Pastene -Secretario-

RESOLUCION Nº 1.657.-

Poder Ejecutivo Nacional
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº 924.-

ESCALAFON PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL - (pto.26) - SUBSIDIO FAMILIAR - COMPENSACION POR DESARRAIGO

Buenos Aires, 23 de septiembre de 1959.

Vista la consulta efectuada por la Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos en el expediente nº 390.845/59, sobre la aplicación del subsidio familiar (decreto nº 9.530/58), - complemento del sueldo por ubicación, y por promoción calificada o automática, y asignación por desarraigo (decreto 870/59) (1), atento a lo informado por las Direcciones Generales de Contabilidad y Administración y del Servicio Civil de la Nación,

CONSIDERANDO:

Que el punto 57º del Escalafón aprobado por decreto nº 9.530/58 determina expresamente el procedimiento a seguir para la fijación de las retribuciones, adicionales y subsidios correspondientes al personal jornalizado;

Que de acuerdo con dicha norma, aquéllos resultarán de la proporción que surja de dividir los importes que le hubiera correspondido idealmente por dichos conceptos en el Escalafón, por el número de días que cumple normalmente la generalidad del personal mensualizado del organismo en el cual - presta servicio;

Que, por lo tanto, la determinación del monto del subsi-

---

(1) Ver Digesto Administrativo Nº 808.-

dio, adicional o retribución de que se trate, estará dada por la cantidad de días trabajados, sin limitación alguna en los conceptos respectivos en cuanto a máximo de días a considerar;

Que en lo que concierne a la liquidación por desarraigo, al establecer el decreto nº 870/59 que se aplicará sobre el "jornal básico", ha querido significar por tal al inicial de la Clase y Grupo en que reviste el personal afectado, con exclusión de otros adicionales.

Que de no ser así se hubiese efectuado la pertinente aclaración, en la misma forma que el decreto nº 6.170/59 (*), al referirse a la liquidación de viáticos, especificó que se haría "en función de la retribución mensual, total y permanente del agente";

Por todo ello, y de conformidad con las facultades conferidas por los decretos nºs. 9.530/58 (art.13º), 4.631/59 (art. 5º) (^) y 18.989/56 (art.13º) (£),

EL SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA
R E S U E L V E :

1º.- La liquidación del subsidio familiar y de los complementos de sueldo por ubicación y por promoción calificada o automática, previstos en el Escalafón aprobado por decreto nº 9.530/58, deberán ser liquidados al personal jornalizado en base al procedimiento fijado en el punto 57º del mismo, es decir, en proporción a los días efectivamente trabajados, con abstracción de topes máximos.

2º.- A efectos de la liquidación de la compensación por desarraigo, instituída por decreto nº 870/59, para el personal jornalizado de la Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos que sea destinado a prestar servicios en los casinos dependientes de dicha Repartición, deberá considerarse como "jornal básico" el inicial de la Clase y Grupo respectivo.-

3º.- Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, y archívese.-

RESOLUCION Nº 8.109.- Fdo. GUILLERMO WALTER KLEIN

(*) Ver Digesto Administrativo Nº 786.-
(^) Ver Digesto Administrativo Nº 738.-
(£) Ver Digesto Administrativo Nº 14.-

Poder Ejecutivo Nacional
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº 925.-

PRESUPUESTO - GASTOS "SECRETOS" y "RESERVADOS" - CREDITO DE - EMERGENCIA - LEY DE CONTABILIDAD (art. 5º)

Buenos Aires, 21 de julio de 1958.

MEMORANDUM PARA EL TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA NACION

Solicitándole quiera tener a bien prestar su asesoramiento acerca del planteo siguiente:

1º) El Decreto-Ley Nº 5.315 (Secreto) del 22 de mayo de 1956 que reglamenta todo lo relativo a las partidas presupuestarias de "gastos reservados" y "gastos secretos", dice en su artículo "2º que: "Los créditos de carácter reservado y/o secreto sólo podrán acordarse o modificarse por ley y su registración se ajustará a las disposiciones - del presente decreto-ley".

2º) Como puede apreciarse a partir de esa fecha las partidas de gastos de que se trata sólo podían modificarse por - Ley (decreto-ley).-

3º) Al dictarse la Ley de Contabilidad (Decreto-Ley Nº 23354 del 31 de diciembre de 1956), su artículo 5º instituye - el "crédito global de emergencia", reglando su utiliza - ción de modo que puede ser aplicado al refuerzo de partidas del presupuesto (excepto las que se refieran a gastos en personal y al plan de obras públicas).-

4º) Este nuevo régimen de incrementación de partidas que autoriza la Ley de Contabilidad, con exclusión de las que expresamente menciona dicho cuerpo legal, hace suponer -

fundadamente que, en materia de incrementos, ha quedado derogada la parte pertinente del Decreto-Ley Nº 5.315/56 (Secreto). En otros términos, que los créditos para "gastos reservados o secretos" contenidos en el presupuesto general de la administración nacional y que integran el Sector 2 - Servicios del mismo, pueden ser aumentados por vía del crédito de emergencia mediante el pertinente decreto de refuerzo que dice el Poder Ejecutivo en uso de la atribución que acuerda el artículo 5º de la Ley de Contabilidad.-

5º) Es sobre la legalidad del procedimiento que queda señalado que se recaba la opinión de ese Tribunal.-

Hace propicia la circunstancia para saludar con la consideración más distinguida.-

Fdo. RAFAEL RODOLFO AYALA
Subsecretario de Hacienda

//nos Aires, 31 de julio de 1958.-

Vuelvan las presentes actuaciones a la Secretaría de Hacienda para manifestarle, en relación con la consulta formulada a fojas 1/2, que este Tribunal de Cuentas entiende que el crédito de emergencia no puede ser utilizado a fin de reforzar las partidas para "gastos reservados o secretos".-

Se funda esta opinión en la vigencia del Decreto-Ley Nº 5.315 (secreto) del 22 de marzo de 1956, que instituye un régimen especial para la atención de gastos cuya naturaleza obliga a tipificarlos como de carácter reservado o secreto. - Ahora bien, si se interpretara que el mismo ha quedado derogado por la ley de contabilidad, ello supondría que tales gastos deben ajustarse íntegramente a las disposiciones de ésta, no sólo en cuanto se refiere al modo en que deben modificarse los créditos, sino también en su tratamiento hasta la rendición de cuentas, con lo que quedarían desvirtuados los propósitos que se tuvieron en vista al dictar el Decreto-Ley Nº

5.315 (secreto) citado.-

La ley de contabilidad, por otra parte, no contiene disposición alguna que sea aplicable a la naturaleza particular de los gastos reservados o secretos, razón por la cual debe considerarse vigente, en todas sus partes, el prealudido decreto-ley.-

Sirva la presente de atenta nota de envío.-

Fdo. RODOLFO J. TARELLI
Presidente del
Tribunal de Cuentas de la Nación

PROVIDENCIA Nº 4.121.-

Poder Ejecutivo Nacional
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº 926.-

ESTATUTO PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL (art. 41º) - SUMARIOS

EXPEDIENTE Nº 34.407/59 - Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos - César A. Carreño Vallejo - Estatuto del Personal Civil - Sumario - Las declaraciones de funcionarios con poder disciplinario no exigen, por su carácter, las formalidades de las prestadas por testigos y denunciantes - Artículo 41 del Estatuto y art. 41, apartado XIII, primer párrafo, del decreto reglamentario - Interpretación de ambas normas.-

//ñor Subsecretario de Hacienda:

1º.- En diversas visitas de inspección practicadas en el casino de Miramar por el Presidente de la Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos y funcionarios superiores de la misma, se comprobó que el gerente de aquél casino estaba ausente de su puesto en circunstancias que hacían indispensable su presencia (recuento de valores).-

En tal virtud, el Presidente del organismo dictó la disposición reservada nº 3, del 14 de enero del año en curso (aprobada luego por el Secretario de Hacienda), por la cual se suspendió al gerente del casino de Miramar por el término de treinta días a contar de dicha fecha, al mismo tiempo que ordenaba la instrucción del sumario respectivo.-

Durante la sustanciación de éste, el instructor re-

quirió declaraciones por escrito de los funcionarios que comprobaron la infracción y luego de dar vista al imputado de las conclusiones que resultaban de lo actuado, tomó nuevas declaraciones, medidas ambas acerca de cuya legitimidad se solicita el dictamen de esta Dirección.-

2º.- El art. 41 de la reglamentación del Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública Nacional, fija las normas de procedimiento a que debe ajustarse la instrucción del sumario y establece en el apartado VII: "El declarante dictará por sí mismo sus declaraciones, pero no podrá traerlas escritas de antemano".-

Trátase de determinar si el principio se viola cuando, como ha ocurrido en el presente caso, se le ha tomado declaración a los funcionarios aludidos por medio de informes.

Las declaraciones en el sumario administrativo a que hace referencia el artículo 41 de la reglamentación, son exclusivamente aquellas que prestan el denunciante, el agente imputado de haber cometido una infracción, - que viene a ser lo que en derecho procesal penal se denomina "declaración indagatoria" - y las que se toman a los testigos, es decir, a las "personas capaces, extrañas al juicio, llamadas a declarar sobre hechos que han caído bajo el dominio de sus sentidos" (ALSINA, Hugo, "Tratado teórico práctico de derecho procesal civil y comercial", Bs.As., 1942, p.395).-

El sumario en cuestión no se ha iniciado como consecuencia de una denuncia, sino de oficio, ante la comprobación de las autoridades de la conducta irregular observada por un agente de su jurisdicción.-

No pueden tener, en consecuencia, dichas autoridades el carácter de denunciantes a quienes se les exige la debida ratificación de la denuncia escrita (artículo 41 de la reglamentación).-

Tampoco han podido deponer como testigos, porque tratándose de funcionarios investidos del poder disciplinario - con el alcance derivado de su grado de jerarquía -, pueden ejercer determinadas facultades dentro del sumario que resultan institucionalmente incompatibles con la función testifical en el mismo.-

Así como el juez y el representante del ministerio

fiscal no pueden ser testigos en el proceso, en igual situación se encuentra el Presidente de la Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos que impuso la suspensión del agente imputado, norma también aplicable a los demás funcionarios que verificaron la infracción (Gerente General de Casinos, Jefe Departamento de Casinos y Jefe del Despacho General), ya que eventualmente podrían tener acceso al ejercicio del poder disciplinario (suspensiones de hasta 10 días).-

Por todo lo expuesto, considera esta Dirección que las declaraciones de los funcionarios de referencia, calificadas erróneamente como disposiciones de testigos por la instrucción sumarial, sólo tienen el valor de informes para simples aclaraciones y al solo objeto de la indagación sumarial, por lo cual han podido ser tomadas sin las formalidades previstas para los denunciantes, sumariados y testigos en el art. 41 de la reglamentación del Estatuto.-

Es de buena administración que las autoridades superiores fiscalicen el funcionamiento de las dependencias que tienen a su cargo, y si en su cometido comprueban hechos anómalos, es ínsita a sus funciones la facultad de adoptar medidas preventivas que, como la suspensión, tienden a alejar al agente de la actividad en cuyo desempeño se ha verificado su conducta censurable.-

El sumario que en esas circunstancias se ordena instruir tiene por objeto determinar el grado de responsabilidad del agente y como no interviene en su dirección la autoridad que comprobó el hecho irregular, dotada a su vez de poder disciplinario, puede en ciertas ocasiones ser indispensable conocer de ella detalles vinculados con lo que se investiga.-

Pero cabe insistir en que los informes que de tal suerte expida el funcionario, no pueden tener el carácter de testimonio porque no se concibe que al dictar resolución en la causa, deba apreciar el mérito de su propio testimonio.-

3º.- Con relación a las declaraciones tomadas por el instructor, luego de dar vista al imputado de las conclusiones que resultaban del sumario, se consulta si el procedimiento contraviene la norma del art. 41, apartado XIII, primer párrafo de la reglamentación del Estatuto que dice: "Cuando el instructor disponga el cierre del sumario, formulará las conclusiones que resulten de lo actuado, luego de lo cual dará vis-

ta al imputado para que presente su alegato de defensa, sobre la base concreta de las imputaciones y cargos consignados en el informe del instructor, dentro del término establecido en el artículo 41 del Estatuto".-

Se interpreta que la vista se confiere luego de cerrado el sumario y que una vez contestada, el instructor queda desligado del procedimiento, debiendo limitarse a remitir las actuaciones a la Junta de Disciplina, conforme así lo dispone el segundo párrafo del apartado XIII.-

Pero lo cierto es que el sentido exacto del texto debe ser desentrañado relacionándolo con la norma del Estatuto que reglamenta y que dice así: "Art. 41. El sumario será secreto hasta que el sumariante dé por terminada la prueba de cargo. En ese estado se dará vista de tres a diez días al inculpado para que el mismo efectúe sus descargos y proponga las medidas que crea oportunas para su defensa".-

El juego armónico de ambas disposiciones lleva a discurrir de la siguiente manera: el inculpado toma vista del sumario y propone medidas para su defensa (en el caso presente, nuevas declaraciones); el instructor provee de conformidad con lo solicitado y de hecho se produce la ampliación del mismo; cumplidas las medidas solicitadas, debe ampliar también las conclusiones que le sugiere el sumario y dar nueva vista al imputado, hecho lo cual corresponde el pase de las actuaciones a la Junta de Disciplina.-

En otras palabras, una interpretación coherente del art. 41 del Estatuto y de la respectiva norma reglamentaria, lleva a la conclusión de que no puede disponerse el cierre del sumario mientras no se hayan practicado todas las diligencias de prueba que se consideren pertinentes. Luego, si al contestar la vista el imputado propone medidas y se dispone su realización, tanto en el caso de la ampliación del sumario como en el de la adopción de otras medidas para mejor proveer (art. 44 de la reglamentación), el principio de bilateralidad de la prueba que es esencial en el procedimiento, exige que se corra vista al sumariado de las nuevas diligencias, ya que el contralor de ellas que en esa oportunidad se le ofrece, constituye la garantía necesaria para la defensa de sus derechos.-

Como, en el caso, el instructor no amplió las conclu-

siones del sumario; debe subsanarse el error de procedimiento que de ello deriva, sin perjuicio de la ulterior vista al imputado, de acuerdo con las conclusiones expuestas.-

DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS, 22 de julio de 1959.-

CARLOS ALBERTO HUERTAS
Subdirector General

Poder Ejecutivo Nacional
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº 927.-

ESTATUTO DEL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL (Art. 39º) - SUSPENSIONES

Expediente nº 535.969 - 1958.-

M E M O R A N D U M

Tratan las presentes actuaciones, de la situación del Oficial 1º de la Dirección Nacional de Aduanas, don RUFINO ISMAEL CANAVERIS.

- - - - - - - - - - - - - - -

De las constancias reunidas en autos, se desprende que el causante -que se encuentra en uso de la licencia prevista en el artículo 14º del decreto nº 12.720/53 (+), desde el 6 de diciembre de 1957 hasta el 10 de setiembre de 1958-, fué involucrado en un procedimiento llevado a cabo, con fecha 5 abril último, por el Departamento Inspección de la Administración de la Aduana de la Capital en la Base Aérea de "El Palomar", que culminó con la intervención de la Justicia, incoándose la causa nº 5.656 de 1958 caratulada "DAIAN, Dina y CANAVERIS, Rufino Ismael S/ contrabando", en la que el magistrado actuante dictó auto de prisión preventiva contra el aludido agente, como autor responsable "prima facie" del delito de contrabando.

La Dirección Nacional de Aduanas y el Instructor Sumariante -designado con el objeto de deslindar las responsabilidades emergentes de los hechos materia de autos- consideran que el caso sub-examen se halla encuadrado en la causal prevista en el punto I) de la reglamentación (decreto nº 1.471 de 10 de febrero de 1958)(º) del artículo 39º del Estatuto del Personal

(+) Ver Digesto Administrativo nº 15.-
(º) Ver Digesto Administrativo nº 422.-

Civil de la Administración Publica Nacional -aprobado por decreto-ley nº 6.666 de 17 de junio de 1957 (')-, en mérito de lo cual y en atención a la especial situación de revista del interesado (en uso de licencia con cargo al art. 14º del decreto nº 12.720/53), dicha repartición eleva en consulta estos obrados, estimando que la medida precautoria de referencia debería hacerse efectiva al término de los beneficios de que se trata.

Sobre el particular, entiende esta Dirección General que el hecho de que el empleado Canaveris se encuentre en uso de los beneficios comentados, no lo exime ni lo desvincula del cumplimiento y de la fiel observancia de los deberes y obligaciones que su condición de agente del Estado le impone, razón por la cual considera que, habiéndose configurado la causal a que alude la Dirección Nacional de Aduanas, corresponde disponer la medida precautoria de referencia a partir de la fecha en que el interesado fué detenido y/o puesto a disposición de la Justicia.

No obstante lo expuesto, estímase que, previo al dictado del pronunciamiento respectivo, correspondería recabar de la Dirección General de Asuntos Jurídicos dictamen sobre el particular.-

Buenos Aires, 7 de agosto de 1958.-

Fdo. ANGEL BOTTERO TORRES
Director General de
Contabilidad y Administración

//nos Aires, 19 de setiembre de 1958.-

Vuelva a la Dirección General de Contabilidad y Administración llevando a su conocimiento que se comparte plenamen-

(') Ver Digesto Administrativo nº 254

Poder Ejecutivo Nacional
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº 928 -

EMPRESAS DEL ESTADO - ENTIDADES DESCENTRALIZADAS - ENTIDADES AUTARQUICAS

1º.- Los organismos descentralizados del Estado son creaciones legales y su personalidad deriva directamente de la ley, correspondiendo, en consecuencia, el análisis de las disposiciones pertinentes, a los efectos de determinar si llenan los requisitos que la doctrina y la jurisprudencia exigen para tener el carácter de entidad autárquica, ya que como sujetos que ejercen una administración indirecta del Estado, integran su individualidad por medio de tres elementos fundamentales: 1) Personalidad jurídica; 2) Fin público, y 3) Elemento financiero patrimonial.-

2º.- Los organismos descentralizados son distintos del Estado, pero están inseparablemente unidos a él por el vínculo de la autarquía, lo que necesariamente supone el contralor legal directo que sobre dichas entidades ejerce el Poder central especialmente el Poder Ejecutivo, como jefe de la Administración.-

3º.- Si se trata del pago de tasas municipales que deben tributarse en el lugar del asiento del ente que presta y percibe los servicios correspondientes, es competente el tribunal del lugar para entender en la contienda judicial.-

4º.- La norma legal aplicable para la prescripción con respecto a las tasas municipales, es la legislada en el art. 4027, inc. 3º del Cód. Civil.-

CFed. RESISTENCIA, abril 15-958.- Municip. de Formosa c.F.C. N. Gral. Belgrano y/u otros.-

2a. Instancia.- Resistencia, abril 15 de 1958.-

1º - En cuanto a la nulidad. No habiendo sido sostenida en esta instancia y no advirtiéndose vicios que invaliden la sentencia, corresponde declarar que la misma se ajusta a derecho.-

2º - En cuanto a la apelación.

a) Nulidad de la ejecución. Que el apelante al contestar la demanda promueve incidente de nulidad alegando que la Nación no puede ser demandada, sin que previamente se cumplan los requisitos exigidos por la ley 3952 (ADLA, 1889-1919, p. 490) (art. 1º, modificado por la ley 11.634 (ADLA, 1920-1940 p.268) y art. 2º), por entender que el F.C.N.Gral. Belgrano, es una empresa estatal, que no reviste el carácter de entidad autárquica, por ser un organismo dependiente del Ministerio de Transporte de la Nación.-

Que los organismos descentralizados del Estado son creaciones legales y su personalidad deriva directamente de la ley, correspondiendo, en consecuencia, el análisis de las disposiciones pertinentes, a los efectos de determinar si llenan los requisitos que la doctrina y la jurisprudencia exigen para tener el carácter de entidad autárquica, ya que como sujetos que ejercen una administración indirecta del Estado, integran su individualidad por medio de tres elementos fundamentales:

1) Personalidad jurídica; 2) Fin público, y 3) Elemento financiero-patrimonial (Rafael Bielsa, "Derecho administrativo" t.2, p.14; Benjamín Villegas Basavilbaso, "Derecho administrativo", t. 2, p. 693).-

Que en estos autos no aparece controvertida la prestación de un servicio público ni la afectación legal de recursos económicos-financieros, sino se discute la personalidad jurídica del ente, su calidad de sujeto de derecho, vale decir, la posibilidad de obligarse y actuar en juicio activo y pasivamente.-

Que en cuanto a la alegación formulada, cabe destacar que la ley 13.653 (ADLA, IX-A, p. 353), que fija el régimen de -

(1) Ver Digesto Administrativo nº 906.-

2a. Instancia.- Resistencia, abril 15 de 1958.-

1º - En cuanto a la nulidad. No habiendo sido sostenida en esta instancia y no advirtiéndose vicios que invaliden la sentencia, corresponde declarar que la misma se ajusta a derecho.-

2º - En cuanto a la apelación.

a) Nulidad de la ejecución. Que el apelante al contestar la demanda promueve incidente de nulidad alegando que la Nación no puede ser demandada, sin que previamente se cumplan los requisitos exigidos por la ley 3952 (ADLA, 1889-1919, p. 490) (art. 1º, modificado por la ley 11.634 (ADLA, 1920-1940 p.268) y art. 2º), por entender que el F.C.N.Gral. Belgrano, es una empresa estatal, que no reviste el carácter de entidad autárquica, por ser un organismo dependiente del Ministerio de Transporte de la Nación.-

Que los organismos descentralizados del Estado son creaciones legales y su personalidad deriva directamente de la ley, correspondiendo, en consecuencia, el análisis de las disposiciones pertinentes, a los efectos de determinar si llenan los requisitos que la doctrina y la jurisprudencia exigen para tener el carácter de entidad autárquica, ya que como sujetos que ejercen una administración indirecta del Estado, integran su individualidad por medio de tres elementos fundamentales:

1) Personalidad jurídica; 2) Fin público, y 3) Elemento financiero-patrimonial (Rafael Bielsa, "Derecho administrativo" t.2, p.14; Benjamín Villegas Basavilbaso, "Derecho administrativo", t. 2, p. 693).-

Que en estos autos no aparece controvertida la prestación de un servicio público ni la afectación legal de recursos económicos-financieros, sino se discute la personalidad jurídica del ente, su calidad de sujeto de derecho, vale decir, la posibilidad de obligarse y actuar en juicio activo y pasivamente.-

Que en cuanto a la alegación formulada, cabe destacar que la ley 13.653 (ADLA, IX-A, p. 353), que fija el régimen de -

(1) Ver Digesto Administrativo nº 906.-

las entidades descentralizadas del Estado, faculta al Poder administrador, para determinar la capacidad jurídica de los entes autárquicos en cada caso particular.-

Que el decreto 20.024/50 (ADLA, X-A, p. 608) que fija el estatuto orgá[illegible]s de las empresas ferroviarias, establece que pueden actuar privada y públicamente, y en su art. 5º, se acuerda al gerente general la representación legal de la empresa, con capacidad para estar en juicio, facultades que posteriormente fueron ratificadas por el decreto 4218-52 (ADLA,XII -A, p. 331) y decreto -ley 15.778/56, XVI-A, p.896),disposiciones legales que fundamentan la personería acreditada con los mandatos de fs. 20 vta. y 68/69 vuelta.-

Que carece asimismo de fundamento la objeción formulada - en la expresión de agravios de fs. 72/74 vta., en el sentido de que las empresas del Estado funcionan bajo el control directo del Poder Ejecutivo (art. 3º, ley 13.653), resultando - que cualquier acción promovida contra una empresa del Estado es una acción promovida contra la Nación, ya que precisamente los organismos descentralizados son distintos del Estado,pero están inseparablemente unidos a él por el vínculo de la autarquía, lo que necesariamente supone el contralor legal directo que sobre dichas entidades ejerce el Poder central, especialmente el Poder Ejecutivo, como jefe de la Administración(Biellsa, p. 15 y Villegas Basavilbaso, ob. cits., p.306).-

b) Que con referencia a la competencia del juzgado nacional para entender en la acción instaurada y tratándose del pago de tasas municipales que deben tributarse en el lugar del asiento del ente que presta y percibe los servicios correspondientes, por principio procesal la excepción deducida no puede prosperar (art. 4º, Cód. de Proced.; Raymundo L. Fernández p. 88, nota del referido artículo), no siendo óbice a ello,la circunstancia de que la demanda se haya notificado en el asiento de la estación ferroviaria de la ciudad de Formosa, ya que su oportuna presentación en juicio revela el conocimiento de la misma, no constando - por otra parte -, que se haya ocasionado ningún perjuicio, por lo que no procede la declaración - de nulidad.-

c) Que en cuanto a la excepción de falta de personería opuesta, debe ser desestimada por los mismos fundamentos expresados "ut supra", toda vez que se funda en que la demandada no reviste el carácter de ente autárquico, punto que ha sido analizado al tratar la nulidad deducida.-

d) Que de acuerdo a la fecha de interposición de la demanda, es justo el pronunciamiento judicial en cuanto hace lugar a la excepción parcial de la prescripción con respecto a las cuentas de los años 1940 hasta 1950 inclusive, en virtud del art. 4027, inc. 3º del Cód. Civil, siendo de notar - que la sentencia en cuanto hace lugar a dicha prescripción - por los años referidos, ha sido consentida por la parte actora.-

e) Que en cuanto a las costas, la excepción opuesta - facultativa para la demandada - ha prosperado parcialmente, motivo por el cual las costas de la. instancia debieron correr a cargo de la demandada, pero como la actora no ha cuestionado la sentencia, en cuanto las impone en un 30% a su cargo, debe también confirmarse el pronunciamiento atacado en lo que a las costas se refiere. En cuanto a las de esta instancia, se declaran a cargo del vencido por no haber prosperado ninguna de sus defensas.-

Atento lo que resulta de lo precedentemente expuesto se resuelve confirmar en todas sus partes la sentencia recurrida, confirmándose asimismo los honorarios regulados en la - misma por considerarse equitativos. El doctor Gallino Yanzi no vota por encontrarse en uso de licencia.-

HORACIO N. CARIEN - LEOPOLDO A. VIRASORO - Ante mí: MANUEL SOLARI OIMOS.-

Rev. LA LEY del 13/4/59 - Págs. 3 y 4.-

Poder Ejecutivo Nacional
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº 929.-

LICENCIAS - LOTERIA DE BENEFICENCIA NACIONAL Y CASINOS - CASINOS

Buenos Aires, 15 de octubre de 1958.-

Visto el expediente nº 37.939/57, del registro del ex Ministerio de Hacienda, por el que la Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos tramita la reglamentación de las licencias para el personal jornalizado que presta servicios en los Casinos de su dependencia, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 1º del decreto nº 12.720 de fecha 14 de julio de 1953, (*) que estableció el régimen de licencias para el personal civil dependiente del Poder Ejecutivo Nacional excluye de sus disposiciones al que se encuentre sometido a regímenes especiales;

Que tal es el caso del personal que presta servicios en los distintos Casinos dependientes del organismo antes citado, ya que se reunen en el caso factores diversos, tales como la modalidad peculiar de la prestación de los servicios y su retribución, que justifican un régimen especial;

Que la reglamentación propuesta, sin apartarse de las disposiciones del antes citado decreto reglamentario, condiciona sus normas a las que resultan de aplicación para el personal de que se trata;

Por ello,

(*) Ver Digesto Administrativo nº 15 -

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA
D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- Fíjase el siguiente régimen de licencias para el personal jornalizado de los Casinos dependientes de la Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos, sobre la base de los beneficios que se detallan a continuación:

I): Licencia por vacaciones:

a) De la licencia;
b) Del término;
c) De la antigüedad;
d) De las licencias no utilizadas;
e) De las licencias simultáneas;
f) De la interrupción de las licencias.-

II): Licencias para tratamientos de la salud y por accidente del trabajo y enfermedades profesionales:

a) De la licencia por causal que imponga corto tratamiento de la salud;
b) De la licencia por causal que imponga largo tratamiento de la salud;
c) De la licencia por accidentes del trabajo y enfermedades profesionales;
d) Del procedimiento;
e) De la asistencia médica gratuita;
f) Del alta.-

III): Licencia por maternidad y permiso para la atención del lactante:

a) De la licencia;
b) Del permiso.-

IV): Licencia por servicio militar.-

V): Licencia para desempeñar cargos electivos o de representación política, gremial y/o sindical.-

VI): Licencia por asunto familiar o particular:

a) De la licencia por asunto de familia;
b) De la licencia por asunto particular.-

VII): Licencia y permiso para estudiantes:

a) Licencia para rendir exámenes;
b) Permiso para asistir a clase, cursos prácticos, etc.-

VIII): Licencia para realizar estudios o actividades culturales en el país o en el extranjero:

a) Con auspicio oficial;
b) Sin auspicio oficial.-

IX): Justificación de inasistencias.-

X): Disposiciones generales.-

CAPITULO I

LICENCIA POR VACACIONES

a) De la licencia

ARTICULO 2º.- La licencia anual será obligatoria y comportará el goce de jornal; podrá ser fraccionada en dos períodos a juicio de la autoridad competente, aún en el caso de que por la excepción del artículo 9º se acumule la del año anterior.- Se acordará por año calendario dentro de las épocas y con arreglo de los turnos que se establezcan en cada Casino.

b) Del término

ARTICULO 3º.- El término de la licencia anual será:

a) De diez (10) días cuando la antigüedad del agente sea mayor de ciento veinte (120) jornadas y no exceda de cinco (5) años;

b) De quince (15) días cuando la antigüedad del agente sea mayor de cinco (5) años y no exceda de diez (10);
c) De veinte (20) días cuando la antigüedad del agente sea mayor de diez (10) años y no exceda de quince (15);
d) De veinticinco (25) días cuando la antigüedad del agente sea mayor de quince (15) años y no exceda de veinte;
e) De treinta (30) días cuando la antigüedad del agente sea mayor de veinte (20) años.-

ARTICULO 4º.- Cuando el agente se hallare cumpliendo una comisión o misión oficial, fuera del lugar habitual donde desempeña sus tareas no se computará a los términos del artículo precedente el tiempo normal empleado en los viajes de ida y vuelta que le ocasionen los traslados, aunque la licencia se fraccione en dos períodos.- Al término de la licencia deberá justificar su traslado mediante certificación de una dependencia de la Repartición, si la hubiere, o por la Policía de la localidad.-

c) De la antigüedad

ARTICULO 5º.- Para establecer la antigüedad del agente se computarán los años de servicios prestados en la Administración Pública Nacional, Provincial, Municipal o en entidades privadas cuando en este último caso se haya hecho el cómputo de servicios en la respectiva Caja de Previsión Social.- A los efectos del reconocimiento de la antigüedad acreditada en entidades privadas y hasta tanto la correspondiente Caja extienda las respectivas certificaciones, los agentes deben presentar una declaración jurada, acompañada de una constancia extendida por el o los empleadores, sujeta a la pertinente certificación documental en la que se justifiquen los servicios prestados a partir de los dieciocho (18) años de edad.
ARTICULO 6º.- Al personal retirado o dado de baja en las Fuerzas Armadas de la Nación, Gendarmería Nacional, Cuerpo Penitenciario, Policía Federal y Bomberos y Prefectura Nacio

nal Marítima, lo mismo que a jubilados y retirados de la administración Nacional, Provincial y Municipal que ocupen cargos en los Casinos se computará su anterior antigüedad. A este fin se tendrá en cuenta el tiempo por el cual el agente percibió haberes por año calendario.-

ARTICULO 7º.- A los efectos de la antigüedad como personal jornalizado de los Casinos se computará un año, a todo agente al que se le hayan liquidado, como mínimo, doscientos cuarenta (240) jornales.- Los días liquidados en el año, que excedan el mínimo establecido precedentemente, no serán acumulables para años posteriores.-

ARTICULO 8º.- En caso de que dentro del año calendario el agente cumpliese una antigüedad que diera derecho a un término mayor de licencia anual, se computará el término mayor para el otorgamiento de la licencia respectiva.-

d) De las licencias no utilizadas

ARTICULO 9º.- Los períodos de licencia por vacaciones no son acumulables. Cuando el agente no hubiera podido usar de su licencia anual por disposición de autoridad competente, fundada en razones de servicio, tendrá derecho a que en el próximo período se le otorgue la licencia reglamentaria con más los días que correspondían a la licencia no usada en el año anterior.- No podrá aplazarse una misma licencia del agente dos años consecutivos.-

e) De la licencia simultánea

ARTICULO 10º.- Al agente que sea titular de más de un cargo rentado ya sea de dependencia centralizada o descentralizada, siempre que las necesidades del servicio lo permitan se le concederá la licencia por descanso en forma simultánea.-

f) De la interrupción de las licencias

ARTICULO 11º.- La licencia anual del agente se interrumpe en los casos siguientes:

a) Por accidente;

b) Por enfermedad;

c) Por razones imperiosas del servicio.-

En los casos a) y b), será de aplicación lo establecido en los artículos 12º y 13º y en el caso c), lo dispuesto en el artículo 9º, si en el transcurso del año no se le pudiera completar su licencia reglamentaria.-

CAPITULO II

LICENCIAS PARA TRATAMIENTO DE LA SALUD Y POR ACCIDENTE DEL TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES

a) De la licencia por causal que imponga corto tratamiento de la salud.-

ARTICULO 12º.- Se concederá hasta cuarenta y cinco (45) días de licencia por año calendario, en forma continua o discontinua, con percepción de jornales, para el tratamiento de afecciones comunes o por accidentes acaecidos fuera del servicio. Vencido este plazo, podrán ser extendidos hasta completar el año calendario, sin derecho a jornal, salvo lo previsto en el artículo 13º.-

b) De la licencia por causal que imponga largo tratamiento de la salud.-

ARTICULO 13º.- Por afecciones que impongan largo tratamiento de la salud, o por motivos que aconsejen la hospitalización o el alejamiento del agente por razones de profilaxis y seguridad, se concederá hasta dos (2) años de licencia, en forma contínua o discontinua, para una misma o distinta afección, con percepción íntegra de haberes.-
Vencido este plazo, subsistiendo la causal que determinó la licencia, se considerará ampliación de la misma por el término de un año en que el agente percibirá la mitad de su remuneración. Cumplida la prórroga, será reconocido por una Junta Médica en el Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública, la que determinará, de acuerdo a la capacidad labora-

tiva del agente, las funciones que podrá desempeñar en la Administración Nacional.- En caso de incapacidad total, se aplicarán las leyes de previsión y ayuda social correspondientes.

ARTICULO 14º.- Para acordar licencia, a los fines del artículo anterior, se considerarán causales las siguientes: enfermedades infecciosas, cardíacas, degenerativas, progresivas o blastomatosas, del sistema nervioso, de los sentidos, traumatismos y/o sus secuelas, malformaciones, intoxicaciones, intervenciones quirúrgicas.- Esta enumeración no es taxativa, quedando a juicio del Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública la consideración a otras causales. Para conceder la licencia de acuerdo al presente artículo deberá comprobarse que dichas causales imposibilitan al agente el normal cumplimiento de sus funciones.-

ARTICULO 15º.- La presunción diagnóstica, suficientemente fundada, de una enfermedad contagiosa, justificará el otorgamiento de licencia hasta tanto se determine el estado de salud del agente. El diagnóstico definitivo deberá producirse en el menor tiempo posible, con intervención del Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública.-

c) De la licencia por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.-

ARTICULO 16º.- En caso de enfermedad profesional, contraída en acto de servicio o de incapacidad temporaria originada por el hecho o en ocasión del trabajo, se concederá hasta dos (2) años de licencia con goce de haberes, prorrogable en iguales condiciones por otro año.-

Si de cualesquiera de estos casos se derivara una incapacidad parcial permanente deberán adecuarse las tareas del agente a su nuevo estado.-

d) Del procedimiento

ARTICULO 17º.- Los agentes que por razones de salud no puedan desempeñar sus tareas o deban interrumpir la licencia anual están obligados a comunicar en el día esta circunstancia al Casino en que presten servicios.-

ARTICULO 18º.- En todos los casos los Servicios Médicos tendrán á su cargo el control de la situación declarada por los agentes, para lo cual contarán con la colaboración del Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública.-
El agente que no se sometiera a tratamiento médico, perderá su derecho á las licencias y beneficios que otorga el presente decreto.-
ARTICULO 19º.- En los casos de accidente del trabajo, enfermedad profesional o afecciones que requieran largo tratamiento de la salud, es imprescindible la intervención del Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública para la determinación y certificación de la importancia y naturaleza de las causales de dicha licencia.-
ARTICULO 20º.- Si el agente se encontrara en el interior del país en lugar en que no hubiera médico del Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública de la Nación o de la Repartición, o de otra Repartición Nacional, Provincial o Municipal, con sede en la localidad, deberá presentar certificado del médico de policía del lugar y si no lo hubiere, de médico particular, con historia clínica y demás elementos de juicio médico que permitan certificar la existencia real de la causal invocada.-
El certificado médico no perteneciente a una de las Reparticiones citadas debe ser autenticado por la autoridad policial local.-
ARTICULO 21º.- Los agentes en uso de licencia por enfermedad, no podrán ausentarse del país sin autorización de la Repartición y conocimiento del Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública de la Nación.-

e) De la asistencia médica gratuita

ARTICULO 22º.- En los casos a que se refiere el artículo 16 la Dirección General de Obra Social o en su defecto el Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública, proveerán gratuitamente la asistencia médica y los elementos terapéuticos necesarios.-

f) Del alta

ARTICULO 23º.- En los casos de licencias concedidas por aplicación de los artículos 13º y 16º, el agente no podrá ser incorporado a su empleo hasta tanto el Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública no otorgue el certificado de alta. El mismo Ministerio podrá aconsejar, que, antes de reanudar sus tareas, se le asigne al agente, durante un lapso determinado, funciones adecuadas para completar su restablecimiento, o que las mismas se desenvuelvan en un lugar apropiado a esa finalidad.-

CAPITULO III

LICENCIA POR MATERNIDAD Y PERMISO PARA LA ATENCION DEL LACTANTE

a) De la licencia

ARTICULO 24º.- Por maternidad se acordará licencia remunerada de doce (12) semanas divididas en dos (2) períodos preferentemente iguales, uno anterior y otro posterior al parto, el último de los cuales no será inferior a seis (6) semanas. Los períodos son acumulables. En los casos anormales se aumentará el término de licencia de acuerdo a lo establecido en el artículo 12º o en su caso el artículo 13º. En caso de nacimiento múltiple esta licencia podrá ampliarse a un total de quince (15) semanas con un período posterior al parto no menor de nueve (9) semanas.-

ARTICULO 25º.- A petición de parte y previa certificación de autoridad competente, que así lo aconseje, podrá acordarse cambio de tareas a partir de la concepción hasta el comienzo de la licencia por maternidad.-

b) Del permiso

ARTICULO 26º.- De acuerdo a lo establecido en la Ley nº 12.568, toda madre de lactante tendrá derecho a optar por :

a) Disponer de dos descansos de media hora cada uno para amamantar a su hijo en el transcurso de la

ARTICULO 23º.- En los casos de licencias concedidas por aplicación de los artículos 13º y 16º, el agente no podrá ser incorporado a su empleo hasta tanto el Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública no otorgue el certificado de alta. El mismo Ministerio podrá aconsejar, que, antes de reanudar sus tareas, se le asigne al agente, durante un lapso determinado, funciones adecuadas para completar su restablecimiento, o que las mismas se desenvuelvan en un lugar apropiado a esa finalidad.-

CAPITULO III

LICENCIA POR MATERNIDAD Y PERMISO PARA LA ATENCION DEL LACTANTE

a) De la licencia

ARTICULO 24º.- Por maternidad se acordará licencia remunerada de doce (12) semanas divididas en dos (2) períodos preferentemente iguales, uno anterior y otro posterior al parto, el último de los cuales no será inferior a seis (6) semanas. Los períodos son acumulables. En los casos anormales se aumentará el término de licencia de acuerdo a lo establecido en el artículo 12º o en su caso el artículo 13º. En caso de nacimiento múltiple esta licencia podrá ampliarse a un total de quince (15) semanas con un período posterior al parto no menor de nueve (9) semanas.-

ARTICULO 25º.- A petición de parte y previa certificación de autoridad competente, que así lo aconseje, podrá acordarse cambio de tareas a partir de la concepción hasta el comienzo de la licencia por maternidad.-

b) Del permiso

ARTICULO 26º.- De acuerdo a lo establecido en la Ley nº 12.568, toda madre de lactante tendrá derecho a optar por :

a) Disponer de dos descansos de media hora cada uno para amamantar a su hijo en el transcurso de la

jornada de trabajo;

b) O disminuir en una hora diaria su jornada de trabajo, ya sea iniciando su labor una hora después del horario de entrada o finalizando una hora antes;
c) O disponer de una hora en el transcurso de la jornada de trabajo.-

CAPITULO IV

LICENCIA POR SERVICIO MILITAR

ARTICULO 27º.- Los agentes que deban incorporarse al Servicio Militar, tendrán derecho a las siguientes licencias, con el 50% de su remuneración:

a) Desde la fecha de su incorporación, hasta cinco (5) días después del día de la baja, asentada en su libreta de enrolamiento, en los casos en que el agente hubiera sido declarado inapto o fuera exceptuado;
b) Desde la fecha de su incorporación hasta quince (15) días después de haber sido dado de baja, si hubiere cumplido el período para el cual fué convocado y este fuera mayor de seis (6) meses.-
c) Desde la fecha de su incorporación y hasta cinco (5) días después de haber sido dado de baja, si hubiera cumplido el período para el que fué convocado y este fuera inferior a seis (6) meses.-

El personal que en carácter de reservista sea incorporado transitoriamente a las Fuerzas Armadas de la Nación, tendrá derecho a usar licencia y a percibir mientras dure su incorporación como única retribución, la correspondiente a su grado, en caso de ser oficial o sub-oficial de la reserva; cuando el sueldo del cargo civil sea mayor que dicha retribución la dependencia liquidará la diferencia.-

ARTICULO 28º.- Asimismo se concederá licencia sin percepción de jornal para cumplir con el servicio militar obligatorio en la Policía Federal, debiendo reintegrarse a su cargo hasta quince (15) días después de asentada la baja en su libreta de

enrolamiento.-

CAPITULO V

LICENCIA PARA DESEMPEÑAR CARGOS ELECTIVOS O DE REPRESENTACION POLITICA, GREMIAL Y/O SINDICAL

ARTICULO 29º.- El personal jornalizado de los Casinos podrá gozar de licencia especial en los siguientes casos:

I) Cargos electivos o de representación política en el orden nacional, provincial o municipal; cuando fuera designado para desempeñar estos cargos el agente utilizará la licencia prescripta en el artículo 14º del Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública Nacional y decreto reglamentario.-

2) Cargos de representación gremial y/o sindical:

a) Cuando fuera designado para desempeñar un cargo de esta naturaleza representando a la Repartición no retribuído por la entidad gremial o sindical, tendrá derecho a usar de licencia con goce de sueldo, en la medida necesaria mientras dure su mandato, debiendo reintegrarse a su puesto administrativo, al término del mismo;

b) Cuando fuera designado para desempeñar un cargo de esta naturaleza, retribuído por la entidad gremial o sindical sólo tendrá derecho a usar de licencia sin goce de sueldo mientras dure su mandato, debiendo reintegrarse al servicio dentro de los treinta (30) días siguientes al vencimiento de éste;

c) El otorgamiento de la licencia a que se refieren los apartados a) y b) quedará supeditado a las comunicaciones que efectúe la Secretaría General de la Confederación General del Trabajo, o el sindicato respectivo sin personería gremial al organismo competente de la Secretaría de Hacienda.-

CAPITULO VI

LICENCIA POR ASUNTO FAMILIAR O PARTICULAR

a) De la licencia por asunto de familia

ARTICULO 30º.- Desde el día de su ingreso, el agente tendrá derecho a usar de licencia remunerada en los casos y por el término de días siguientes:

1) Matrimonio:
   a) Del agente, diez (10) días;
   b) De sus hijos, un (1) día;

2) Nacimiento:
   a) De hijos del agente varón, dos (2) días;

3) Fallecimiento:

   a) Del cónyuge o parientes consanguíneos de primer grado, cinco (5) días;
   b) De parientes afines de primer grado y consanguíneos o afines de segundo grado, dos (2) días;

4) Enfermedad de un miembro del grupo familiar:
   a) Para consagrarse a la atención de un miembro enfermo del grupo familiar constituído en el hogar, hasta veinte (20) días contínuos o discontínuos por año calendario. A este fin el agente deberá expresar, por declaración jurada, que es indispensable su asistencia o que el estado del paciente reviste extrema gravedad. Estas causales podrán ser comprobadas por el Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública o el respectivo Servicio Médico del Casino.-

b) De la licencia por asunto particular

ARTICULO 31º.- En el transcurso de cada decenio el agente podrá usar de licencia, sin remuneración, por el término de

un año fraccionable en dos (2) períodos.- El término de licencia no utilizado en un decenio, no puede ser acumulado a los decenios subsiguientes. Para tener derecho a esta licencia en distintos decenios, deberá transcurrir un plazo mínimo de dos (2) años entre la terminación de una y la iniciación de la otra.-
El Secretario de Estado de Hacienda podrá conceder licencia, sin remuneración, en casos de fuerza mayor o graves asuntos de familia, debidamente comprobados, por términos que no excedan de tres (3) meses en el año calendario.-

CAPITULO VII

LICENCIA Y PERMISO PARA ESTUDIANTES

a) Licencia para rendir examen

ARTICULO 32º.- Se concederá licencia con goce de haberes por veintiocho (28) días anuales, a los agentes que cursen estudios en establecimientos oficiales o incorporados (nacionales, provinciales o municipales) para rendir examen en los turnos fijados oficialmente, debiendo presentar constancia del exámen rendido, otorgada por las autoridades del establecimiento educacional respectivo.-Este beneficio será acordado en plazos máximos de hasta siete (7) días cada vez.-

b) Permisos para asistir a clase, cursos prácticos, etc.

ARTICULO 33º.- Los agentes tendrán derecho a obtener permiso dentro del horario de trabajo, cuando sea imprescindible su asistencia a clase, cursos prácticos y demás exigencias inherentes a su calidad de estudiante y no fuera posible adaptar su horario a aquella necesidad. Deberán acreditar:

a) Su condición de estudiantes en cursos oficiales o incorporados;
b) La necesidad de asistir al establecimiento educacional en horas de oficina.-

CAPITULO VIII

LICENCIA PARA REALIZAR ESTUDIOS O ACTIVIDAD CULTURAL EN EL PAIS O EN EL EXTRANJERO

ARTICULO 34º.- El agente tendrá derecho a usar de licencia sin goce de haberes por el término máximo de dos (2) años, cuando deba realizar estudios, investigaciones, trabajos científicos, técnicos o artísticos, o participar en conferencias o congresos de esa índole, en el país o en el extranjero. Igual beneficio podrá concederse para mejorar la preparación técnica o profesional del agente o para cumplir actividades culturales o deportivas.-

ARTICULO 35º.- Las licencias a que se refiere el artículo 34º podrán ser concedidas con goce de sueldo, pero por un término no mayor de un año cuando existan probadas razones de interés público en el cometido a cumplir por el agente o éste actúe representando al país. Cuando el agente deba trasladarse al extranjero, el beneficio deberá ser acordado por el Poder Ejecutivo, previa conformidad del Consejo de Gabinete; de lo contrario y en el supuesto previsto en el artículo anterior, el mismo será resuelto directamente por el titular de la Secretaría de Hacienda. En todos los casos se tendrán en cuenta las condiciones, títulos y aptitudes del empleado y determinarán, asimismo, sus obligaciones a favor del Estado en el cumplimiento de su misión.-

CAPITULO IX

JUSTIFICACION DE INASISTENCIAS

ARTICULO 36º.- Fuera de los casos de licencia contemplados expresamente en el presente decreto, podrán justificarse excepcionalmente y con goce de haberes, las inasistencias del personal motivadas por razones atendibles o de fuerza mayor. No excederán de dos (2) cada veinte (20) jornales trabajados ni de diez (10) días por cada doscientos cuarenta (240) jorna

les trabajados.-

CAPITULO X

DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 37º.- El agente tendrá derecho a usar desde la fecha de su incorporación, las licencias regladas en el presente decreto, excepto las contempladas en los artículos 2º,31º 34º y 35º, en que deberán tenerse en cuenta ciento veinte - (120) jornales liquidados como mínimo.-
La licencia prevista por el artículo 29º, apartado I), se acordará una vez alcanzada la antigüedad de tres (3) años exigida por el artículo 14º del Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública Nacional.-
ARTICULO 38º.- Todas las licencias concedidas por causa de enfermedad o accidentes quedarán canceladas por el restablecimiento del agente.-
El agente deberá en todos los casos solicitar la reincorporación a sus funciones, aún cuando no hubiere vencido el término de su licencia, siempre que se encontrare en condiciones necesarias de acuerdo a la reglamentación presente.-
ARTICULO 39º.- Se considerará falta grave toda simulación - realizada con el fin de obtener licencia o justificación de inasistencias.-
El agente se hará pasible de suspensión por dos (2) meses sin goce de sueldo o cesantía en caso de reincidencia. Igual sanción se aplicará al médico funcionario público que extienda certificación falsa.-
ARTICULO 40º.- En los casos de licencias previstas en los artículos 12º, 13º, 16º, 24º, 27º, 29º y 35º, el agente percibirá el jornal por los días que le hubiera correspondido - laborar, y a los efectos del cómputo, se contabilizará por - el total de los días prescriptos.-
ARTICULO 41º.- La Secretaría de Estado de Hacienda dictará las normas reglamentarias, aclaratorias y toda otra que sea menester para la aplicación del presente régimen de licencias.
ARTICULO 42º.- Derógase toda disposición que se oponga al presente.-

ARTICULO 43º.- El presente decreto será refrendado por los señores Ministros Secretarios en los Departamentos de Interior a cargo interinamente del de Economía y Asistencia Social y Salud Pública y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda.-

ARTICULO 44º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.-

FRONDIZI - Alfredo R. Vítolo -
Héctor V. Noblia - Ricardo Lumi.-

DECRETO Nº 7.511.-

Poder Ejecutivo Nacional
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº 930.

TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR - SUELDOS - COEFICIENTES - VIATICOS - INDEMNIZACIONES - MISIONES AL EXTERIOR - COMISIONES AL EXTERIOR

Buenos Aires, 22 de abril de 1959.-

Visto lo propuesto por el Ministerio de Defensa Nacional, y

CONSIDERANDO:

Que por decreto Nº 980 de fecha 30 de enero de 1959 (+) se estableció que hasta tanto se determinaran los nuevos coeficientes o formas de liquidación al personal militar que revista en el exterior se liquidarían los mismos por los importes en divisas que para cada situación representaban con anterioridad a las vigencias del decreto número 11.916/58 (');

Que a la referida medida de transición se le fijó por el artículo 1º del mencionado decreto 980/59 como plazo máximo de aplicación el 30 de abril de 1959;

Que a la fecha no se ha concretado en forma definitiva el estudio integral de las remuneraciones en el exterior;

Que por ello es indispensable la prórroga de la medida aludida, para poder transferir el próximo trimestre de haberes y gastos;

(+) Ver Digesto Administrativo Nº 705.-

(') Ver Digesto Administrativo Nº 891.-

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- Prorrógase hasta el 31 de julio de 1959 el régimen de liquidación de haberes, viáticos e indemnizaciones del personal militar destacado o comisionado en el exterior, instituído por el decreto Nº 980 del 30 de enero de 1959.

ARTICULO 2º.- Facúltase a hacer extensivo tal régimen a las remesas efectuadas en concepto de gastos de funcionamiento o a las que se realicen en el futuro y hasta dicho plazo, correspondientes a los conceptos comprendidos en tal designación.

ARTICULO 3º.- El presente decreto será refrendado por los señores Ministros Secretarios en las carteras de Defensa Nacional, y de Economía y firmado por los señores Secretarios de Estado de Guerra, de Marina, de Aeronáutica, de Finanzas y de Hacienda.

ARTICULO 4º.- Comuníquese, dése a la Dirección Nacional del Boletín Oficial e Imprentas, tome nota el Tribunal de Cuentas de la Nación y archívese en el Ministerio de Defensa Nacional.-

FRONDIZI - Gabriel del Mazo
Emilio Donato del Carril -
Héctor Solanas Pacheco - Ramón A.Abrahín - Antonio López - Ricardo Lumi - Adolfo B.Estévez.-

DECRETO Nº 4634.-

Poder Ejecutivo Nacional
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº 931.-

TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR - SUELDOS - COEFICIENTES - VIATICOS - INDEMNIZACIONES - MISIONES AL EXTERIOR - COMISIONES AL EXTERIOR

Buenos Aires, 15 de setiembre de 1959.-

Visto los Decretos Nros. 980 del 30 de enero de 1959 (1), y 4.634 del 22 de abril del mismo año, y

CONSIDERANDO:

Que se mantiene la situación mencionada en ambos decretos por cuanto a la fecha no se ha producido el régimen de pago de haberes en el exterior en concordancia con la anulación del mercado de cambio oficial;

Que por lo mismo, subsisten las causas que motivaran la sanción del referido Decreto Nº 980/59, y su posterior prórroga hasta el 31 de julio de 1959;

Que es necesario prever el mantenimiento de dicho régimen, hasta tanto no tenga fuerza legal el nuevo sistema de pago de haberes, actualmente en estudio;

Que en cuanto a viáticos, debe aplicarse el régimen fijado por superior Decreto número 10.545/59 (") en los casos que ello signifique realmente una menor inversión;

Por ello;

---

(1) Ver Digesto Administrativo Nº 705.-

(") Ver Digesto Administrativo Nº 872.-

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA
D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- Prorrógase hasta la sanción definitiva del nuevo reglamento de liquidación de haberes en el exterior, el régimen de pago de haberes e indemnizaciones del personal militar destacado o comisionado en el extranjero, instituído por el Decreto Nº 980 del 30 de enero de 1959.
ARTICULO 2º.- Para la liquidación de viáticos al personal destacado o comisionado en el exterior se aplicará el régimen fijado por Superior Decreto Nº 10.545 del 28 de agosto de 1959, salvo que por el régimen instituído por el Decreto Nº 980 citado, resultara una suma menor, en cuyo caso se liquidará la menor.
ARTICULO 3º.- Prorrógase por el mismo término que el indicado en el artículo 1º, la facultad otorgada por el artículo 2º del Decreto Nº 4.634 del 22 de abril de 1959.
ARTICULO 4º.- El presente decreto será refrendado por los señores Ministros Secretarios en los Departamentos de Defensa Nacional y de Economía y firmado por los señores Secretarios de Estado de Guerra, de Marina, de Aeronáutica, de Hacienda y de Finanzas.
ARTICULO 5º.- Comuníquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas, publíquese, tome nota el Tribunal de Cuentas de la Nación y archívese en el Ministerio de Defensa Nacional.-

FRONDIZI - Justo P.Villar - Alvaro Alsogaray - Rodolfo A.Larcher - Gastón Carlos Clement - Ramón A. Abrahín - Guillermo W.Klein - Eustaquio A. Méndez Delfino.

DECRETO Nº 11.292.-

Poder Ejecutivo Nacional
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº 932.-

LIMITACION DE SERVICIOS - CESANTIAS

Buenos Aires, 25 de Septiembre de 1959.-

Visto que el Decreto Nº 10.115/59 (1) estableció el proceso que deberá llevarse a cabo para concretar las disposiciones contenidas en el artículo 13º de la Ley 14.794 (2), y

CONSIDERANDO:

Que dicho decreto estructuró el régimen respectivo determinado por su artículo 4º su concreción en plazos que responden a la necesidad perentoria de resolver un problema fundamental para el adecuado ordenamiento de la organización del Estado;

Que la lógica estrictez de tal estimación ha sido superada en la práctica en medida que puede ser aceptada ante la real magnitud del volumen de labor que su realización implica labor que a la fecha ha sido llevada a cabo en su mayor parte de acuerdo con las informaciones suministradas al Poder Ejecutivo por los Ministerios y Secretarías de Estado;

Que, en consecuencia, frente a tal hecho concreto que permite encuadrar el proceso pertinente dentro de términos precisos, es conveniente adecuar determinados plazos que fija la disposición de que se trata a la referida circunstancia;

Por ello,

---

(1) Ver Digesto Administrativo nº 855.-

(2) Ver Digesto Administrativo nº 688.-

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA
D E C R E T A :

ARTICULO 1º.- Prorrógase el plazo fijado por el artículo 4º del Decreto número 10.115/59 hasta el 22 de octubre de 1959.
ARTICULO 2º.- Como consecuencia de lo dispuesto en el artículo 1º el Tribunal de Cuentas de la Nación no dará curso, en los casos a que se refiere el artículo 6º del Decreto nº - 10.115/59, a las liquidaciones correspondientes al mes de octubre y subsiguientes.-
ARTICULO 3º.- A los efectos de ascenso califícase con mención especial la tarea extraordinaria desarrollada por el personal a que se refiere el artículo 6º del Decreto número 10.115/59, perteneciente a los organismos que, de acuerdo - con las comunicaciones cursadas por el Comité Ejecutivo del Plan de Racionalización y Austeridad (C.E.P.R.A.) al Tribunal de Cuentas de la Nación, hubieran cumplido el cometido - que le correspondiera dentro de los términos que fijó la aludida disposición legal y bonifícase a tales fines la calificación pertinente de acuerdo con el artículo 16º del Decreto nº 1.471/58 (£), reglamentario del Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública Nacional.-
ARTICULO 4º.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro de Economía y firmado por el señor Secretario - de Estado de Hacienda.-
ARTICULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y pase al Tribunal - de Cuentas de la Nación a sus efectos.-

FRONDIZI - Alvaro Alsogaray - Guillermo W. Klein.-

DECRETO Nº 11.962.-

(£) Ver Digesto Administrativo nº 422.-

Poder Ejecutivo Nacional
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín nº 933.-

INSTRUMENTOS PUBLICOS - JUICIO EJECUTIVO - DEUDAS (Su determinación por acto del P.E.) - CREDITOS A FAVOR DEL ESTADO

1.- Los decretos del Poder Ejecutivo que declaran la existencia de determinados créditos a beneficio del fisco, si bien son instrumentos públicos, no tienen el alcance de autorizar la vía ejecutiva, cuando el fisco no procede como poder público, sino como persona jurídica, regida en sus relaciones contractuales por el derecho común.-

2.- Las cuentas sacadas de los libros fiscales, si bien pueden equipararse a los documentos ejecutivos a que alude el art. 249 de la ley 50, ello es cuando se refieren a impuestos, es decir, obligaciones emergentes de la ley, pero no a las que suponen la conformidad del obligado.-

3.- Cuando el fisco pretende el cobro de sumas resultantes del uso que hacen los particulares de las tierras de su dominio privado, como son las denominadas fiscales (art. 2342, inc. 1º, Cód.Civil), actúa en carácter de persona jurídica y no es aceptable que fije por su sola autoridad el monto de las deudas de los particulares.-

4.- Dado que resulta de los expedientes administrativos, que el cálculo de la deuda de los ejecutados - en el caso, por cobro del uso de tierras fiscales -, está hecho en base de informes de las oficinas públicas, sin intervención alguna de aquéllos, de manera que se trata de precios o valores fijados unilateralmente, sería contrario a todo principio jurídico tenerlos por

valederos, por el solo hecho de tratarse de valuaciones hechas por funcionarios del Estado, permitiendo así la exigencia de una suma cuantiosa, sin posibilidad de defensa alguna para los deudores.-

5.- Si al iniciarse la demanda estaba en vigencia una ley que permitía el procedimiento de apremio para el cobro de ciertos créditos por parte del Estado, corresponde exceptuar a éste del pago de las costas del juicio, solución excepcional en el juicio ejecutivo, que se justifica por el hecho también nada común, de la vigencia de una mala ley, derogada durante el juicio.-

CNESPECIAL, julio 31-957.- Gobierno nacional c. Cornet D'Hunval, José y otro.-

la. Instancia.- Buenos Aires, julio 31 de 1956.-

CONSIDERANDO:

Que las excepciones de inhabilidad de título y de prescripción opuestas por los demandados no están comprendidas entre las que autoriza el art. 315 de la ley 50, por cuyo motivo con sujeción estricta a la ley cabría rechazarlas de plano, solución que en principio no afectaría a los demandados atento el derecho que les corresponde para plantear en el pertinente juicio ordinario todas las cuestiones prohibidas en el apremio.-

Que con ese criterio es que el suscripto considera que por interesantes o importantes que sean las razones en que los demandados fundan la excepción de inhabilidad de título, no pueden ser discutidas y decididas en el sub júdice, pues hacerlo comportaría desnaturalizar el procedimiento de apremio.-

Que en cambio y aunque el art. 315 de la ley 50 no la menciona, es pertinente a juicio del suscripto, resolver en el caso acerca de la prescripción invocada. En efecto, es explicable que el art. 315 no la incluya como excepción viable, porque el legislador de la ley 50 reprodujo exactamente la

fuente en que se inspiró, o sea el art. 358 de la ley de enjuiciamiento comercial española de 1830, pero no es tan explicable que, dictado con posterioridad nuestro Cód. Civil respecto a cuyo art. 3962 ha comentado la Corte Suprema que la prescripción es un medio de extinción de las obligaciones; tiene carácter de medida de orden público, pues de oponerse en cualquier estado del juicio (Corte Sup., Fallos, t.162, p.376 t.185, p. 193), se pueda sostener válidamente que una norma procesal tenga preeminencia sobre una disposición de fondo que como la aludida tiene un alcance general, que debe ser respetado y aplicado a toda clase de juicios sin excepción. Si a ello se agrega que no solamente la doctrina vernácula moderna, sino también las leyes que con posterioridad a la ley 50 han establecido el beneficio del procedimiento de apremio a favor del Estado nacional, admiten como procedente la excepción de prescripción (v. su detalle en "La Ley 50", de José Sartorio, ed.1955, p. 710), es tanto más irrazonable aferrarse a interpretaciones casuísticas que conducen a agravios innecesarios - pues los hay para aquel que tiene que soportar la ejecución de sus bienes para recuperarlos luego accionando por prescripción - y que no traducen un progreso en la ciencia del derecho sino un verdadero estancamiento y una posterga ción antieconómica en la solución de los negocios jurídicos sin que puedan aducirse en su favor motivos fundamentales de orden institucional.-

Que en vista de lo que antecede corresponde determinar cuál es el plazo de prescripción aplicable al caso. Sobre el particular el suscripto se atiene a lo resuelto por la cámara en caso análogo (Rev. LA LEY, t. 56, p.714) y, en consecuencia decide aplicar al sub júdice el plazo de 10 años fijado por el art. 4023 del Cód. Civil.-

Que a los fines de determinar el importe por el que prospera el apremio se hace necesario que el fisco proceda a una discriminación de algunos importes globales que figuran en las boletas de deuda.-

Por ello, resuelvo rechazar la excepción de inhabilidad de título y declarar prescripta la acción en cuanto a los pastajes, usufructos, etc. anteriores en los años a la fecha de iniciación de esta demanda, mandando siga el apremio adelante hasta hacerse íntegro pago al fisco actor de la suma que re

sulte de la liquidación a efectuarse a cuyo efecto recábese de la actora la discriminación indicada en el considerando precedente. Intereses y costas a cargo de los demandados.-

César R. Verrier.

2a. Instancia.- Buenos Aires, julio 31 de 1957.-

CONSIDERANDO:

Que a fojas 96 este tribunal declaró mal denegados los recursos interpuestos a fs. 66 y sigts. en razón de estar derogada la ley que autorizaba la vía excepcional del apremio para el cobro de créditos como los que se reclaman en autos.-

Que derogada esa ley la 13.995 por fundamentos tan serios como los que se adujeron para ello, el tribunal se encuentra en este caso particular ante una situación de excepción, que obliga a considerar con toda amplitud las defensas opuestas, pues de no hacerlo así y aferrarse a la cerrada interpretación de la ley que reglamenta las defensas admisibles en esta clase de juicios, se daría validez a una notoria injusticia.-

En tal situación, sólo queda por examinar si procede la vía ejecutiva, pues los demandados han opuesto la excepción de inhabilidad de título.-

Que se trata del cobro de diversas sumas en concepto de pasaje y usufructo de mejoras correspondientes a distintos campos fiscales, utilizados, según el fisco, por los demandados.

Que la Corte Suprema ha dicho, hace ya muchos años, que los decretos del Poder Ejecutivo que declaran la existencia de determinados créditos a beneficio del fisco, si bien son instrumentos públicos, no tienen el alcance de autorizar la vía ejecutiva, cuando el fisco no procede como poder público, sino como persona jurídica, regida en sus relaciones contractuales por el derecho común. Las cuentas sacadas de los libros fiscales - agregó el alto tribunal -, si bien pueden equipararse a los documentos ejecutivos a que alude el art. 249 de la ley 50 ello es cuando se refieren a impuestos, es decir a obligaciones emergentes de la ley; pero no a las que suponen la confor-

Poder Ejecutivo Nacional
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín nº 934.-

SUELDO - AFECTACIONES Y EMBARGOS

1.- No viola el principio de igualdad (art. 16, Constitución nacional) la inembargabilidad de los sueldos de los empleados públicos, establecida por el decreto nº 6754/43, pues tal igualdad considera o ampara a todos los individuos que se encuentran en las mismas condiciones; pero no los coloca en igual categoría cuando están en situaciones diferentes. La distinción que establece el decreto es asimismo razonable.-

2.- El decreto 6754/43 no viola la garantía constitucional de propiedad, porque los acreedores por préstamos efectuados con anterioridad al mismo quedan excluídos de su régimen y los interesados a los cuales no convenga la solución del decreto pueden abstenerse de celebrar la operación.-

3.- El decreto 6754/43 no difiere de otras leyes similares, que excluyen del embargo los muebles indispensables para la vivienda o el trabajo, los inmuebles comprendidos en la ley del hogar, los créditos de jubilaciones y pensiones, etcétera.-

CNCOM., SALA B, diciembre 4-957.- Mazzobre, Antonio J.c. Seglie, Juan A. y otro.-

Opinión del agente fiscal.- Antonio J. Mazzobre impugna de inconstitucional el decreto 6754/43 por entender que el mismo crea una situación de privilegio para un determinado sector de habitantes del país (los empleados públicos), lesionando los principios de igualdad y propiedad establecidos y garantizados por los arts. 16 y 17 de la Constitución nacional.-

Con respecto al primero, cabe advertir que, como todos -

los otros derechos y garantías que la Constitución asegura, el principio de la igualdad no es absoluto y su carácter de relativo surge de su propia esencia.-

En efecto, pretender la vigencia de una igualdad absoluta, sin consideración a las diferencias naturales que median entre los individuos o a las condiciones, zonas, lugares, etc. en que desarrollan sus actividades, implicaría por lo arbitrario y utópico de tal nivelación, desvirtuar en su esencia el fundamento de la igualdad, que no puede ser otro que el de otorgar a todos y por igual, una adecuada protección de sus derechos.-

Es por ello que atendiendo a la imperiosa necesidad de - guardar la debida consideración a las aludidas diferencias ya naturales, ya referidas a la actividad de las personas, las cuales no pueden ser desconocidas por nadie, la Corte Sup. de Justicia de la Nación ha precisado el principio de igualdad - como la obligación de tratar legalmente "de un modo igual a los iguales en iguales circunstancias", no comportando violación de dicha garantía constitucional, el establecimiento de un régimen especial igual para todos los empleados de una especie particular de trabajo (Fallos, t. 208, p.430; t. 214, p. 104; t. 215, p. 400; t. 222, p. 352, etc.).-

El mero hecho de que la ley tenga por objeto reglar de un modo especial una situación particular o un cierto caso o casos determinados, no hace de ella, por esa sola circunstancia un acto arbitrario o inconstitucional. La arbitrariedad, cuando la ley en tales supuestos no proviene de la particularizada finalidad de la norma sino de la sinrazón de su particularidad, puesto que la diversidad de circunstancias justifica - en principio la diversidad del tratamiento legal.-

Para que todos sean iguales ante la ley, es preciso que ésta los iguale compensando con sus disposiciones los desequilibrios que resultan violentos al orden natural. Y como la desigual condición o las desiguales circunstancias pueden concernir sólo a algunos, la ley que se haga cargo de ello y tenga - por esa razón un alcance que podría denominarse individualista o destinado a un grupo determinado de personas, será justa, no obstante su singularidad, o más bien, precisamente por razón de ella y tal es el caso del decreto 6754/43, que contempla -

la situación de un determinado sector de individuos y les establece un régimen especial igual para todos los empleados de una especie particular de trabajo (los empleados públicos).-

Asimismo debe advertirse que la citada disposición legal se fundó en la necesidad de combatir eficazmente el grave mal social de la usura y de organizar fuentes sanas de crédito, y sólo por la amplitud y complejidad del problema que no permitía resolverlo en toda su extensión y establecer un régimen definitivo para todos los empleados y obreros, es que sus disposiciones se limitaron al personal de la Administración pública, a título de ensayo y para recoger la necesaria experiencia (consids. 1º y 2º).-

Por último, cabe agregar que, conforme lo ha declarado también reiteradamente la Corte Suprema, la infracción al principio de igualdad sólo puede ser alegada por aquel a quien se pretendiera imponer condiciones que no gravitaran sobre otros en idénticas circunstancias, o sea por la víctima de dicha violación (Fallos, t. 144, p. 85; t. 208, p. 71) o por aquel a quien se pretendiera excluir de un beneficio acordado a otros. Y el actor acreedor no se halla en estas situaciones, puesto que la hipotética desigualdad no existiría con respecto a él, sino con relación a los empleados y obreros que no pertenezcan a la Administración pública.-

Que tampoco el aludido decreto 6754/43 es violatorio de las normas constitucionales referentes al derecho de propiedad, por cuanto ni este derecho ni la inviolabilidad de la defensa en juicio obstan a la reglamentación de los procesos liquidatorios de los bienes, en resguardo de todos los intereses privados o públicos comprometidos en ellos (Fallos, t. 185, p. 242).-

Si bien tal decreto no es propiamente liquidatorio, tiene analogía con las disposiciones de la ley de quiebras o de concursos civiles, que reiteradamente se ha declarado no son violatorios del derecho de propiedad. Asimismo, dicho decreto en manera alguna priva al actor de obtener el pago de lo que es debido sino que se limita a establecer los requisitos que deben ser cumplidos por los acreedores para obtener el pago de sus créditos con embargos sobre los sueldos de sus deudores, dejando expresamente a salvo los derechos de aquéllos para ejecutar la obligación, conforme a las disposiciones legales vigentes, sobre otros bienes o recursos de que puedan ser titulares los empleados de la Administración pública (art. 13).-

Por lo expuesto, considero que V.E. debe desestimar la impugnación de inconstitucionalidad que a fs. 15 se efectúa al decreto 6754/43, no haciendo lugar al libramiento de nuevo oficio de embargo que allí se solicita.-

EDUARDO M. GUZMAN.-

la. Instancia.- Buenos Aires, julio 8 de 1957.-

Por los fundamentos del dictamen del agente fiscal, resuelvo no hacer lugar a la declaración de inconstitucionalidad y al libramiento de oficio solicitado a fs. 16.-

ABELARDO F. ROSSI. (Sec.: MARIO LASSAGA).

Opinión del fiscal de cámara.- En su dictamen de fs.17 el agente fiscal hace un ponderado análisis de la garantía constitucional de igualdad ante la ley y de como esa garantía no ha sido infringida por el decreto cuya impugnación, por ser repugnante a ella, promueve el recurrente a fs. 15.-

Su síntesis es la doctrina misma de la regla del art. 16 de la Constitución nacional, a cuyo respecto alguien ha dicho que "no se ha querido someter a los habitantes de la República a un lecho procusto" (Jofré, "Manual de procedimientos", t. 1, p. 19 b), expresión que concuerda con el concepto fijado por la Corte Sup. de Justicia de la Nación en estos términos: "Esta Corte, en repetidas causas, al señalar el alcance de la susodicha garantía, ha expresado que con arreglo a ella, todas las personas sujetas a una legislación determinada dentro del territorio de la Nación, deben ser tratadas del mismo modo, siempre que se encontrasen en idénticas condiciones y circunstancias. Agregando que aquélla, por su naturaleza no comporta una inflexible y rígida igualdad, sino, por el contrario, una amplia latitud para ordenar y agrupar, distinguiendo y clasificando los objetos de la legis

lación, siempre que esta facultad de clasificar se base en alguna diferencia razonable y no en una selección puramente arbitraria" (Fallos, t. 144, p. 43).-

Por eso, en oportunidades anteriores ya la misma Corte había decidido que el art. 10, tít. 4, cap. 1º de la ley número 4707 que declara inembargable las pensiones militares, no es repugnante al principio de igualdad establecido por el art. 16 de la Constitución nacional (Fallos, t. 124, p.122).-

Y como el decreto 6754/43 - que declara la inembargabilidad de sueldos, salarios, pensiones y jubilaciones de empleados y obreros de la Administración nacional, provincial y municipal, y de las entidades autárquicas, por obligaciones emergentes de préstamos en dinero o de compra de mercaderías salvo en la proporción y condiciones que se determinan - encuadra en la doctrina a que se ha hecho referencia, y no veda al recurrente, por otra parte, proceder sobre los otros bienes de sus deudores, el suscripto considera que la impugnación de fs. 15 es improcedente. Debe, pues, V.E. confirmar el auto apelado.-

LUIS U. de IRIONDO.-

2a. Instancia.- Buenos Aires, diciembre 4 de 1957.-

CONSIDERANDO:

El decreto 6754/43, ratificado por la ley 13.894, cuya constitucionalidad se impugna, instituye un régimen de inembargabilidad de sueldos, salarios, pensiones y jubilaciones de los empleados y obreros de la Administración nacional, provincial y municipal, y de las entidades autárquicas, por obligaciones emergentes de préstamos en dinero o de compra de mercaderías, salvo la proporción y condiciones que el mismo establece (art. 1º).-

Estatuye también un privilegio a favor de los acreedores que se hayan acogido a su régimen (art. 2º) y una serie de normas, tendientes todas a resguardar el sueldo de los empleados públicos y los derechos de las personas que les conceden

créditos regulares, en proporción a las retribuciones que perciben.-

Nada hay en el decreto que sea violatorio de norma constitucional alguna; por el contrario, sus disposiciones se limitan a proteger la retribución del empleado, dejando intacto el derecho de los acreedores para perseguir otros bienes (art. 13).-

En estas condiciones, esta ley no difiere de otras similares que excluyen del embargo de bienes muebles indispensables a la vivienda o al trabajo (ley 12.296 y art. 480, Cód. de Proced.), o inmuebles comprendidos en la ley del hogar 10284 (art. 2º).-

"Los créditos de jubilaciones y pensiones - dice Bielsa - dado el carácter alimentario que tienen, son también inembargables, por regla general, total o parcialmente, pues ello depende del respectivo monto. Se trata de evitar que el titular del crédito caiga en la indigencia; es, pues, una razón de humanidad la que justifica la exención. La jurisprudencia ha declarado que ese privilegio de la inembargabilidad no es anticonstitucional (Fallos, t. 169, p. 40; t. 163 p. 276)" (Bielsa, "Derecho constitucional", 1954, p. 201).-

Dentro de esos mismos principios se ha declarado la inembargabilidad de los inmuebles adquiridos con fondos depositados en la Caja Nac. de Ahorro Postal (ley 9527, art. 18); - véase Corte Sup. de la Nación, J.A., t. 51, p. 10; las jubilaciones ferroviarias (ley 10.650, art. 14); las jubilaciones bancarias (leyes 11.232, art. 22 y 11.575, art. 16); v. Corte Sup. de Justicia de la Nación; las jubilaciones de la ley 11.110 (art. 56), etcétera.-

Esta exclusión de los sueldos de los empleados y obreros de la Administración, no viola el principio contemplado en el art. 16 de la Constitución nacional desde que la igualdad ante la ley allí mencionada, considera o ampara a todos los individuos en las mismas condiciones; pero no coloca en igual categoría a personas o individuos que están en situaciones diferentes.-

La distinción que establece el decreto impugnado es una - clasificación razonable, porque los requisitos establecidos por sus normas sólo caben para esta categoría de empleados -

(permanencia, certificación, retenciones) sin cargos adicionales para los empleadores.-

No se viola en modo alguno, tampoco, el derecho de propiedad (art. 17, Constitución nacional) ya que los acreedores - por préstamos a los empleados, efectuados con anterioridad - al decreto, quedan excluídos de su régimen (art. 7º). Las - personas ante las cuales comparezcan los empleados, después de la ley, a solicitar préstamos y a los cuales no convenga la solución del decreto 6754/43, pueden abstenerse de hacer toda operación.-

En modo alguno se altera o cercena, entonces, el derecho de propiedad. La argumentación de la recurrente no tiene, en consecuencia, base legal.-

Por ello y lo dictaminado por el fiscal de cámara, se confirma la resolución apelada, con costas.-

ISAAC HALPERIN - CARLOS J.ZAVALA RODRIGUEZ - ALEJANDRO A. VASQUEZ. (Sec.: Federico González del Solar).-

Rev. LA LEY del 13-10-58 - págs. 2 y 3.-

Poder Ejecutivo Nacional
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº 935.-

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION SOCIAL - APORTE JUBILATORIO - JUBILACIONES

1.- Los tribunales del trabajo son incompetentes para conocer en los juicios promovidos por el Instituto Nac. de Previsión Social o Cajas de previsión, por vía de apremio, para perseguir el cobro de sumas que han de ingresar al fondo de recursos de éstas.

2.- La competencia atribuída a los tribunales del trabajo por el art. 3º del decreto-ley 32.347/44 (ley 12948) se refiere al campo del derecho del trabajo, sea en conflictos de derecho en causas regladas por disposiciones contractuales, sea en las contenciosas en las cuales se ejercitan acciones legales o reglamentarias. En materia de derecho de previsión no es necesaria ni esencial la relación de trabajo, por no serlo la existencia de los sujetos empleador y empleado.

3.- Los aportes a las Cajas de previsión no son de propiedad de los afiliados sino de la Caja respectiva. El derecho reconocido a éstos es el correspondiente a una indemnización, constituyendo los descuentos una contribución forzada. La apelación ante la Cám. de Apel. del Trabajo, en materia de previsión social, está limitada a las resoluciones de los directorios de las Cajas aludidas en el art. 11 de la ley 14.236.

4.- Los fallos de la Corte Suprema sólo obligan moralmente a los tribunales inferiores -de Trabajo de la Capital, en el caso-, quienes deben ajustar los suyos a los de aquélla en tanto no existan nuevos fundamen

tos en virtud de los cuales puedan sostenerse criterios distintos.

CNTrab., Sala III, julio 11-957 - Caja Nac. de Previsión para el personal del comercio y actividades civiles c. Heintze Hnos. (Soc. de Resp. Ltda.).

2a. Instancia.- Buenos Aires, julio 11 de 1957. El doctor Videla Morón dijo:

1º.-El problema, cuya dilucidación se pretende, es el siguiente: una Caja Nac.de Previsión se presenta ante el tribunal de la. instancia de la justicia nacional del trabajo de la Capital Federal y promueve acción ejecutiva de pesos contra la empresa empleadora, afiliada a su régimen, en razón de haber incurrido ésta en el incumplimiento de ingresar al fondo de recursos, en tiempo y forma, las contribuciones mensuales obligatorias a su cargo, conforme con lo dispuesto por su ley orgánica, el certificado comprobatorio de lo debido por tal concepto y lo previsto por el art. 15 de la ley 14.236, usando, a ese efecto, la vía de apremio y, en su consecuencia, ajustándose al procedimiento señalado por las normas del cap. XXV de la ley 50 aplicable a esta clase especial de juicio, sin someterse al trámite previo indicado por los arts. 46 y sigts. de la ley 12.948, o sea, el debido por ante la Comisión de conciliación, por ser, respecto a dicho procedimiento improcedente.

El juez interviniente se declara, de oficio, incompetente para entender en la demanda, la Caja actora apela de esa decisión y, concedido el recurso, el procurador general manifiesta, en su dictamen, hallar bien acordado éste y ser procedente la incompetencia declarada.

2º.-David Lascano, en su obra "Jurisdicción y competencia" (ed. Guillermo Kraft Ltda., Buenos Aires, 1941, -

p. 43), enseña: "La competencia es la capacidad del órgano del Estado para ejercer la función jurisdiccional y la jurisdicción es por el contrario, la función misma, o sea, la actividad que despliega el Estado para satisfacer los intereses tutelados por el derecho, cuando la norma jurídica no ha sido o podido ser cumplida..." y, más adelante, agrega: "La limitación de la jurisdicción, en cualquier órgano que se encuentre investida, sea del orden judicial, sea del orden administrativo, no constituye la competencia, sino que la determina, lo que es cosa bien distinta. La parte de jurisdicción que ejerce determinado juez, no es la competencia del mismo, porque la jurisdicción aunque esté limitada o fraccionada, es siempre una función, una actividad y la competencia no pasa de ser un poder, una facultad".

El mismo autor (op. cit., p. 215), aclara estos conceptos, diciendo: "...definimos la competencia como la capacidad reconocida a ciertos jueces para ejercer jurisdicción en determinados casos. Con ello, dejamos establecida la distinción entre jurisdicción y competencia, que no responde a un criterio de cantidad sino de sustancia o calidad. Es decir que, la competencia no es una porción o parte de la jurisdicción, como algunos han sostenido, sino que es una cosa distinta. Técnicamente la jurisdicción es una función y la competencia la aptitud para ejercerla; aquélla supone una actividad, ésta una facultad, o si se quiere, un poder para desarrollarla".

"El concepto de competencia contiene, sin duda alguna, la idea de limitación, en cuanto supone una capacidad circunscripta a cierta actividad y de ahí que se haya podido decir que es el límite de la jurisdicción; pero precisamente por ser el límite no puede ser la cosa limitada...".

"La competencia es un concepto relacionado con el sujeto que ejerce la jurisdicción; ésta en cambio, tiene que ver con la actividad que desarrolla el sujeto que la ejerza. La competencia supone más de un sujeto con capacidad para ejercer la jurisdicción, ésta puede existir con sólo un órgano que la ponga en movimiento. En realidad la competencia delimita o regula las relaciones de los tribunales entre sí, en lo que al ejercicio de la jurisdicción se refiere.

"Por eso hay más propiedad en definir la competencia según lo hacen autorizados tratadistas, como la porción de poder jurisdiccional poseída por los magistrados. En efecto, una parte de poder para ejercer la función ya no es una parte de la función misma, sino algo que se necesita para ejercerla...".

3º.- Los tribunales nacionales de la justicia del trabajo de la Capital Federal fueron creados por decreto-ley 32.347/44, (ley 12.948), estableciéndose para su funcionamiento un trámite previo por ante la Comisión de conciliación, órgano administrativo, y dos instancias judiciales.

La porción de poder jurisdiccional, o sea, la competencia reconocida a los magistrados del fuero por la ley, está dada, en dos formas distintas: a) con carácter de facultad originaria, por los arts. 3º y 4º del referido decreto-ley, y b) con carácter de facultad delegada, por vía de apelación, conforme con el art. 19 del mismo.

La facultad originaria la ejerce, en forma inmediata el juez de la. instancia y mediata, el de segunda, como consecuencia de la alzada; más, en ambas situaciones, la capacidad del magistrado en el ejercicio del poder jurisdiccional se encuentra circunscripto a la actividad determinada en los citados arts. 3º y 4º.

El art. 3º, el de nuestro interés, ordena: "Serán de competencia de la jurisdicción del trabajo las causas que se susciten entre empleadores y trabajadores por conflictos de derecho, fundadas en disposiciones de los contratos de trabajo, de empleo, de aprendizaje o de ajuste de servicios y todas aquellas otras, contenciosas, en que se ejerciten acciones derivadas de disposiciones legales o reglamentarias del derecho del trabajo".

4º.- Las cuestiones contempladas por el mencionado art.3º pertenecen, sin duda alguna, al campo del derecho del trabajo, ya se trate de conflictos de derecho, en causas regladas por disposiciones contractuales, ya de las contenciosas, en las cuales se ejerciten acciones legales o reglamentarias.

Esta conclusión surge del texto legal referido, pues nada dicen, a ese respecto, los fundamentos del decreto-ley 32.347/44 y en las "consideraciones generales" del 1º de noviembre de 1944, en cuyo mérito se encomendó la proyectación del mismo, el cap. IV, relativo a la competencia de los jueces del fuero, contiene idéntica determinación.

En ambas situaciones, la proveniente del contrato y la de la ley o reglamento, para configurarse la relación jurídica de tipo laboral, se hace necesaria la existencia de los dos sujetos integrantes de ella, el empleador y el empleado, pues sin su presencia no habría tal vinculación, o sea, la llamada "relación de trabajo", caracterizantes del "derecho del trabajo".

En materia de derecho de previsión no es necesaria ni esencial esta relación, por no serlo la existencia de esos dos sujetos, como puede, sin esfuerzo, advertirse en diversos regímenes jubilatorios, en donde se reconoce el derecho a la protección tanto a los patronos o empresarios como a quienes ejer

cen profesiones liberales, trabajo independiente, por su cuenta o cuenta propia. En estos casos, no existe la mentada "relación de trabajo", sino una "relación con el trabajo, directa e inmediata".

5º.- La vieja concepción de ser el aporte propiedad de los afiliados, ha sido abandonada ya por la doctrina y la jurisprudencia, y últimamente la legislación ha ido suprimiendo el instituto de la "devolución de aportes", por ser contrario a los principios informantes del sistema, y sustituyéndolo, aunque a veces bajo el mismo nombre, por otro configurante de un beneficio de carácter indemnizatorio.

Los aportes efectuados a un fondo de previsión pasan a ser propiedad de la caja respectiva, perdiendo el afiliado todo derecho sobre los mismos, salvo el expresamente reconocido por la ley y este derecho no es el de propiedad o dominio legislado por el Cód. Civil, sino el correspondiente a una indemnización, pues los decuentos tienen por destino el pago de los beneficios acordados y a concederse, constituyendo una contribución forzada por superiores razones de orden y previsión social con miras al interés general.

El hecho de no haber ingresado la "contribución mensual obligatoria"", debida por el empleador, al fondo de la caja, no la priva de su naturaleza jurídica ni deja, por ello, de ser propiedad de la acreedora, pues ésta no pierde su derecho a la misma en razón del incumplimiento del deudor, quien, en todo caso, se hallaría incurso en una infracción legal.

La naturaleza jurídica del aporte, nos lleva más bien a calificarla de obligación derivada de disposiciones de derecho público, si no admitimos la existencia de una tercera rama del derecho, o sea, la social, en la cual se encuentra enrolado el suscripto.

No podría, entonces, hablarse de obligaciones nacidas del contrato laboral ni del ejercicio de accio-

nes derivadas de leyes o reglamentos del derecho del trabajo para atribuir competencia a los jueces de la. instancia de la justicia del trabajo, conforme con el art. 3º del decreto -ley 32.347/44 (ley - - 12.948), en las acciones ejecutivas por cobro de pesos, en razón de no haber ingresado en tiempo y forma, al fondo de recursos de una caja de previsión, lo debido en concepto de contribuciones mensuales obligatorias.

6º.- La competencia delegada, conferida al tribunal de 2a. instancia del fuero, por vía de apelación, está consagrada en el inc. b) del art. 19 del citado decreto-ley. Dice, así: "La Cam. de Apelaciones conocerá: De los recursos de apelación que se interpongan en los casos autorizados por las leyes de previsión social".

En verdad, la competencia nace de la pertinente disposición de la ley de previsión, por ser ésta quien fija el recurso de alzada contra las resoluciones del órgano administrativo encargado de aplicar la ley, en la primera etapa del proceso.

Se trata, por cierto, de causas de tipo contencioso administrativo, en donde actúa de tribunal de la. instancia el órgano ejecutivo de la previsión, y en segunda, la Cám. de Apelaciones, con facultad de ejercer la porción de poder jurisdiccional acordado por la ley especial, pues según reza en el art. 102 del decreto-ley 32.347/44 (ley 12.948): "En los casos a que se refieren los incs. b) y c) del art. 19 la cámara ajustará el procedimiento al que determinan las leyes especiales por las que se autorice el recurso de apelación".

La Cám. de Apelaciones, por lo tanto, sólo tiene la competencia nacida en mérito al recurso de apelación autorizado por las leyes especiales de previ-

sión, o sea, por los arts. 14 y 21, inc. c) de la ley 14.236.

El art. 14 citado, dice: "Las resoluciones del Instituto serán apelables ante la Cám. Nac. de Apel. de la Justicia del Trabajo... El recurso deberá ser fundado y sólo podrá interponerse aduciéndose inaplicabilidad de ley o doctrina legal. Interpuesto el recurso las actuaciones se remitirán de inmediato a la cámara..., la que resolverá sin más trámite, como tribunal de derecho, decidiendo en primer término acerca de la procedencia del recurso y en su caso sobre la aplicabilidad de la ley o de la doctrina...".

La Cám. de Apelaciones, resulta, de esta manera, competente para decidir sobre la procedencia o no del recurso y respecto a la aplicabilidad o no de la ley o de la doctrina.

El art. 21 dispone, en su inc. c), lo siguiente: "Las penalidades previstas (se refiere a las establecidas por los arts. 17 y sigts.) se aplicarán por las Cajas nacionales de previsión en la forma que establezca la reglamentación de acuerdo a las siguientes normas: Las resoluciones administrativas condenatorias cuando el monto de la multa exceda el mínimo que determina la reglamentación, podrán apelarse por ante la Cám. Nac. de Apel. del Trabajo de la Capital Federal. Dicho recurso se concederá previo pago de la multa o dación de fianza suficiente".

En este caso, la competencia de la cámara está condicionada al previo pago de la multa, pues recién nace con el acuerdo del recurso.

Ahora bien, la competencia del Instituto, en cuanto como órgano con poder jurisdiccional, proviene del art. 13 de la ley 14.236, en cuanto dispone: "Contra las resoluciones de los directorios, los interesados podrán interponer el recurso de revocato-

ria ante la Caja y de apelación en subsidio o de apelación indirectamente... El recurso de apelación se substanciará por ante el Instituto Nac. de Previsión Social... Entenderá asimismo el Instituto por vía de apelación, en las resoluciones que acuerdan o deniegan prestaciones, cuando por la importancia o particularidad del caso el presidente, el sector de los directores representantes de los afiliados o el director representante de los empleadores planteara el consiguiente recurso en la misma sesión en que se adoptaren aquéllas...".

Surge, atento lo transcripto, que son apelables - por los interesados todas las resoluciones de los directorios de las Cajas y, por lo tanto, para conocer la competencia del Instituto, ha de saber cuál es la de aquéllas.

El art. 11 de la ley 14.236, expresa: "Son atribuciones de los directorios de las cajas de previsión: d) resolver todo lo concerniente al otorgamiento de prestaciones e inclusión en el respectivo régimen legal, de personas o entidades en el carácter de afiliados o empleadores y g) resolver a los fines del otorgamiento de las prestaciones toda cuestión de nombres, comprobaciones de edad y de servicios y otros requisitos referentes a la afiliación o a la calidad de causahabientes, de conformidad con lo que disponga la reglamentación, la que deberá establecer qué hecho o circunstancia podrán ser probados mediante - juramento o información testimonial previa. Y el art. 21, ya estudiado, le otorga a dichos directorios la facultad de aplicar las referidas sanciones.

Fácil resulta, por cierto, inferir cuál es la competencia dada por la ley a la Cám. de Apelaciones, por vía de apelación y no es otra si no la de entender en las "resoluciones" del Instituto Nac. de Pre-

visión Social, en cuanto se trate de la procedencia o no del recurso deducido contra ellas, o respecto a la aplicabilidad o no de la ley o la doctrina legal; o cuando el monto de la multa exceda del mínimo determinado por la ley.

Las "resoluciones" sólo pueden versar sobre el otorgamiento o denegación de prestación, inclusión o no en la ley de personas o entidades como afiliados o empleadores y demás situaciones señaladas precedentemente. En ningún caso se le atribuye competencia para entender en acciones promovidas por los organismos de previsión o contra ellos.

7º.- La ley 13.998, cuando trata, en su art. 39, de la Cám. Nac. de Apel. del Trabajo de la Capital Federal, dice: "... será tribunal de alzada respecto de los jueces nacionales de la. instancia del trabajo de la Capital Federal" y en el 47, respecto a estos "...tendrán la competencia que les atribuye la ley 12.948, aun en las causas en que sea parte la Nación, sus reparticiones autárquicas o la municipalidad".

Estas disposiciones no alteran las conclusiones anteriormente logradas, pues la competencia, a la cual alude el art. 47 de la ley 13.998, es la dada por la 12.948 y las causas en donde "la Nación, sus reparticiones autárquicas o la municipalidad" pueda ser parte son las previstas por el art. 3º de la última ley citada.

8º.- La Corte Sup. de Justicia de la Nación in re "Instituto Nac. de Previsión Social c. Radio Belgrano", fallo del 15 de dicembre de 1948 (Corte Sup. de Justicia, Fallos, t. 212, p. 444 declaró competente a la justicia del trabajo en esta clase de acciones, argumentando lo siguiente: El título ejecutivo, en cuyo mérito el Instituto demanda por vía de apremio, tiene por origen una resolución suya. Las resoluciones de

este organismo, de acuerdo con el inc. b) del art. 19 del decreto-ley 32.347/44, son apelables por ante la Cám. Nac. de Apel. de la Justicia del Trabajo de la Capital Federal. Esta competencia en la alzada demostraría la de los jueces de la. instancia del fuero, pues en razón de aquella competencia se hallaría incluída la causa (acción ejecutiva por cobro de contribuciones) entre las previstas por el art. 3º del citado decreto-ley. Sería contradictorio atribuir a la cámara competencia respecto a las resoluciones del Instituto, cuando éstas imponen obligaciones al empleador y negársela cuando demanda para hacerlas efectivas por vía de apremio.

La referida sentencia, en cuyo mérito se consideró habilitada la competencia de la justicia del trabajo para entender en estas causas, no se ajusta a las normas rectoras del caso ni a su adecuada interpretación.

Los fallos de la Corte Suprema, según lo ha declarado este alto tribunal, sólo obligan moralmente a los tribunales inferiores, quienes deben ajustar los suyos a las de aquélla, en tanto no existen nuevos fundamentos, en virtud de los cuales puedan sostenerse criterios distintos. Esta cámara, en razón de lo expuesto, ha resuelto, por intermedio de las salas I y IV, no serle de acatamiento forzoso la doctrina de esos fallos, si en el caso a juzgamiento habrían argumentos valederos para apartarse de la misma, tal como sucede en el presente, pues del estudio precedentemente realizado se desprende una solución contraria a la lograda en el fallo prealudido.

9º.- Y aún más: las cajas de previsión, antes de la sanción del decreto-ley 29.176/44, por el cual se creó el Instituto Nac. de Previsión Social, no tenían u-

nificado el procedimiento para la alzada. Así, pues, la ley 4349 disponía la apelación de las resoluciones de la Junta de administración por ante el Poder Ejecutivo nacional, quedando en caso de negación, abierta la vía judicial para demandar a la Nación. Las leyes 10.650, 11.232, y 11.575 y decreto-ley 14.535/44 establecían el recurso por ante la Cám. Fed. de Apel. de la Capital Federal y las leyes 11.110 y 12.581, en cambio, lo concedían por ante el juez en lo civil de la Capital Federal, en turno, o en la forma dispuesta por las Legislaturas, en las provincias, según el caso.

El decreto-ley 29.176/44, unificó el procedimiento y estableció un único tribunal de alzada, la Cám. Fed. de Apel. de la Capital Federal, conforme con lo dispuesto en el art. 53; más, al crearse los tribunales del trabajo, por decreto-ley 32.347/44, en virtud del inc. b) del art. 19, pasó la competencia referida a la cámara de este fuero.

Las leyes de previsión han sido, en materia del referido recurso, claras y precisas, señalando cuál era el tribunal competente, con especificación terminante del mismo.

Esas mismas leyes han otorgado, ya sea a los directorios de las cajas, ya a los presidentes de éstas y, últimamente, al del Instituto Nac. de Previsión Social, la facultad necesaria para iniciar las acciones ejecutivas correspondientes por cobro de sumas adeudadas por los empleadores, en concepto de contribuciones, aportes o servicios de préstamos, indicando como procedimiento a seguir el del juicio de apremio; más, en ninguna de las disposiciones pertinentes se señala el juez competente para entender en dichas causas, excepto en el caso especial del decreto-ley 14.535/44, en cuyo art. 111 se expresa concre

tamente ha de ser el juez federal quien intervenga en los juicios, sea la Caja actora o demandada, cualquiera sea el monto por el cual se litigue y en el art. 45 se refiere a la prealudida facultad de accionar, común a todas las Cajas (arts. 55, ley 10.650; 12, ley 11.110; 19, ley 11.232; 31, ley 11.575; 23, ley 12.581; 23, ley 12.612.

Esta falta de determinación de la competencia, no obstante la unificación del procedimiento y de la alzada, se mantuvo aún después de las sanciones del decreto-ley 29.176/44 (art. 55) y de la ley 14.236 (art. 15), reproduciéndose en éstos, con más o menos ligera variante, los textos usados en las disposiciones análogas de las leyes precitadas.

El legislador, consecuente en su criterio, fué repitiendo la fórmula consagrada en esas leyes en las posteriores sanciones y, evidentemente, dejó librado el problema relativo a la competencia a las disposiciones de carácter general sobre la materia, - pues de haber querido acordar esa facultad al tribunal escogido para la alzada, lo habría dicho, ya sea cuando trató el tema de los recursos, ya cuando se refirió a las acciones ejecutivas. La fórmula - "juez competente", importa una remisión a la ley correspondiente y no a disposiciones del propio régimen, y este supuesto queda confirmado con la excepción ya referida, art. 111 del decreto-ley 14.535/44.

Por lo expuesto, voto en el sentido siguiente: 1) tener por bien concedido el recurso interpuesto contra la resolución de fs. 10/13, y 2) confirmar dicha decisión en cuanto declara la incompetencia del tribunal del trabajo para conocer en los juicios - promovidos por el Instituto Nac. de Previsión Social o Cajas de previsión, por vía de apremio, debiendo

recurrir la actora ante quien corresponda.

Los doctores Santos y Machera, compartiendo los fundamentos de hecho y derecho expuestos en su voto por el doctor Videla Morón, adhirieron al mismo.

Por lo que resulta del precedente acuerdo el tribunal resuelve: 1) tener por bien concedido el recurso interpuesto contra la resolución de fs. 10/13 y 2) confirmar dicha decisión en cuanto declara la incompetencia del tribunal de trabajo para conocer en los juicios promovidos por el Instituto Nac. de Previsión Social, o Cajas de previsión, por vía de apremio, debiendo recurrir la actora ante quien corresponda.-

ARMANDO D.MACHERA - ELECTO SANTOS - MARIO E. VIDELA MORON. (Sec.: ROBERTO O. DEFRANCHI).

Rev. LA LEY del 15/8/58 - pág. 2/4.-

Poder Ejecutivo Nacional
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº 936.-

OBRAS SOCIALES - PERSONAL - ESTATUTO DEL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL

Buenos Aires, 7 de julio de 1950.-

A.S.E. el señor Ministro de Marina
Almirante Enrique B. García
S/D.-

Tengo el agrado de dirigirme a V.E. en contestación a la nota nº 1722 (I-S-10644/49), relacionada con la Obra Social del Departamento a vuestro cargo.

En la prestación de los servicios de asistencia médica y previsión social en las Reparticiones Nacionales y entidades autárquicas, se observan distintas etapas de evolución que se reseñan sintéticamente a continuación.

En primer lugar nos encontramos con la prestación de dichos servicios asistenciales por asociaciones mutualistas puramente privadas, vale decir, con prescindencia de aporte estatal, fuera de algún subsidio o subvención esporádica, ni de otra intervención que la que presupone el otorgamiento de la personería jurídica y el contralor que ejerce la Dirección de Mutualidades del Ministerio de Trabajo y Previsión.

En segundo término, hallamos la prestación de los servicios de asistencia médica y previsión social organizadas sobre la base de un sistema de asociaciones de tipo mutualista mixto-privado-estatal, dentro de esta categoría se dan casos en que el Estado realiza aportes en dinero o especie o en el suministro a su costa de ciertos servicios

y otros en los que sólo lo hace bajo el régimen de subsidios o subvenciones, pero siempre reservándose el contralor interno de la asociación, mediante tres procedimientos utilizados conjunta, o separada e independiente: 1°) nombramientos de determinados miembros de la comisión directiva o consejo de administración; 2°) designación de la totalidad o parte de los miembros de comisiones, juntas u órganos de fiscalización; 3°) sumisión de ciertos actos de la entidad a autorización o aprobación de los funcionarios administrativos.

Por último se llega a la etapa de la oficialización de los servicios asistenciales a que nos venimos refiriendo, y su prestación por entidades con personalidad jurídica (pública o privada) o por Reparticiones administrativas.

Dicha oficialización importa atribuirle a esos servicios el carácter de servicios públicos, cualquiera sea el sistema de prestación que se adopta, a saber: a) entidades u organismos con personalidad jurídica o b) reparticiones u órganos administrativos.

La discriminación en cada concreto, de si se trata de un ente de derecho público, persona jurídica o de una Repartición administrativa (órgano del Estado) - prescindiendo de las controversias a que el punto ha dado lugar, aún aceptando la teoría de la personalidad jurídica parcial de los órganos administrativos, exteriorizada solamente en relaciones interorgánicas y no frente al Estado con quien se identifican, a pesar de ser difícil, sobre todo en los casos de órganos con autonomía financiera, es posible efectuarla (Federaro S. "Contributo alla teorica della personalita degli organidello Stato", 1941, pág. 100/22 y 172/222 Federaro S. "Stato e persone giuridiche publlice", 1941, pág. 11/2).

Examinadas, de acuerdo con el criterio y antecedentes expuestos, las distintas disposiciones que crean y

estructuran la Obra Social de ese Departamento (decreto nº 12.833/44, nº 35.367/44, nº 5.488/45 y nº 23.250/47), cabe concluir que la misma revista la forma de una Repartición u órgano administrativo, con un fondo integrado - por los recursos provenientes del Presupuesto General y recursos propios de origen privado, afectados al pago de las erogaciones del servicio respectivo.

En este sentido, el régimen administrativo contable diferenciado, establecido para el manejo de los fondos - provenientes de recursos de Presupuesto General y de los fondos provenientes de las cotizaciones de los afiliados y demás fondos de naturaleza privada de la Dirección General de Sanidad y Obra Social Naval, al prever la apertura de una cuenta de orden cuyo funcionamiento se especifica reglamentariamente, se halla encuadrado en mi concepto- en el art. 4º de la Ley de Contabilidad nº 12961.

Organizada, pues, oficialmente, la prestación de los servicios mediante una Repartición administrativa, el - personal técnico administrativo y de servicio, desde luego con prescindencia de los servicios técnicos contratados, cualquiera sea la fuente de los recursos con que se los retribuyan, no dejará por eso, de formar parte del - personal civil de la Administración, y por ende, de hallarse sometido en forma integral a su régimen jurídico.

A la repartición u órgano administrativo nombrado si bien no es posible desconocerle una así llamada personalidad administrativa, en cambio carece, de acuerdo con - las normas de su creación, de personalidad jurídica que haga procedente su representación autónoma en juicio.

En los términos expresados dejo expuesta mi opinión acerca de la naturaleza jurídica de la Obra Social del - Departamento a vuestro cargo.-

Dios guarde a V.E.

Fdo.Enrique C. PETRACCHI

Procurador del Tesoro de la Nación

Expte. nº 31.350-1950 - Dr. José M. Moret. S/incompatibilidad. Mrio.de Hacienda.-

//nos Aires, 8 de septiembre de 1950.-

Señor Ministro de Hacienda:

I. Cuestiónase en estas actuaciones la naturaleza privada o pública de las Obras Sociales de los Ministerio de Ejército y de Marina, como factor que permitiría discriminar si el personal que presta servicios en las mismas son agentes de la Administración Pública -funcionarios o empleados-, o empleados privados, y de consiguiente que régimen jurídico corresponde aplicarles en puntos a incompatibilidades.

II. Con relación al encuadramiento jurídico de la Obra Social de Marina he tenido oportunidad de emitir opinión en la nota de fecha julio 7 de 1950 de la que agrego copia y cuyo contenido reitero aquí en todos sus términos.

III. A la Obra Social del Ministerio de Guerra, hoy - de Ejército, le son aplicadas en lo sustancial las razones expuestas respecto de la Obra Social del Departamento de Marina.

Sin embargo, la disparidad de opiniones jurídicas sobre la naturaleza pública o privada de la Obra Social del Ministerio de Guerra, puntualizada por la Contaduría General de la Nación en su nota 2317 de fecha 28 de febrero - de 1950 (fs. 1/2) y la existencia del decreto nº 8167/47, me ha impulsado a realizar un estudio particularizado del encuadramiento jurídico de esta entidad, cuyas conclusiones paso a exponer.

Como premisa debo reconocer las dificultades a veces

insalvables con que se tropieza cuando se intenta calificar la naturaleza privada o pública del ente que presta servicios públicos de esta índole, o si se quiere y para no presentar puntos vulnerables a la crítica, producto de discrepancias terminológicas, servicios administrativos, pues no puede negarse por lo menos este último carácter a los que prestan las Obras Sociales exclusivamente a los agentes de la Administración, funcionarios, empleados y obreros y sus respectivos núcleos familiares.

El carácter de servicios públicos que se ha atribuído al de asistencia médica y previsión social complementaria, dada la forma como se encuentra organizada en la etapa de su oficialización, no nos proporciona un criterio suficientemente eficaz para distinguir si el ente que lo presta es público o privado. Es oportuno recordar aquí las siguientes palabras de Ferrara, respecto de una situación similar: "El servicio de pensiones para los empleados de un ente -dice este autor- puede hacer surgir un ente paraestatal de naturaleza esencialmente pública, una persona jurídica de carácter privado (caja - pensión) o un fondo de gestión sin personalidad jurídica. (" Le persone giuridiche" 1938, p. 108).

Por otra parte, dentro del grupo de las personas jurídicas de derecho público, existen indudablemente, numerosos tipos que van desde las entidades autárquicas, es decir, aquellas que se encuentran en el extremo más próximo a la categoría de las personas jurídicas necesarias (el Estado, el municipio, etc.) y se rigen por las mismas normas de derecho público aplicables a éstas, hasta las personas jurídicas públicas de tipo económico-industrial, ubicadas en el otro extremo de la serie, que guardan estrecha analogía con las entidades privadas, (sociedades civiles y comerciales) y a las que se aplica un régimen jurídico especial, que si bien en cierto aspecto es de derecho público, para facilitar su gestión y la

consecución de los fines de su creación, en muchos otros aspectos, como administración, percepción, inversión, contabilización de los fondos, régimen del personal, régimen de contratación de obras, servicios de suministros, etc., es de derecho privado (Menotti de Francesco, "persone giuridiche pubblicho e loro eclessificazioni en Raccola de - scritti de diritto pubblico in onore di Giovani Vacchelli" 1938 p.203 y sig. Foderaro S., "Statp e persone giuridi - che pubbliche", p. 9/11.).

Todo ello explica las vacilaciones que han existido - en la doctrina y jurisprudencia contemporánea, tanto en Italia como en Francia, para clasificar los entes de asistencia social, beneficencia, socorros mutuos,seguros contra accidentes, caja de ahorro, etc. Con relación al primer país puede apreciarse las diversas posiciones adoptadas por la jurisprudencia y la doctrina, en los trabajos del Profesor Forti "Administrazione pubblica e attiviará economico privata. Sui caratteri distintivi delle persone giuridiche pubbliche", reunidos en el primer volumen de - "Studi di diritto pubblico", 1937, p. 281 y sigts. y 299 y sigts.

En Francia, en los casos de las cajas primarias de seguros sociales, el Consejo de Estado en su fallo del 13 de mayo de 1938, distingue nítidamente entre servicio público prestado - seguro social - y la naturaleza del organismo que la hipótesis considera organismo privado, (Laubadere A.de, "Manuel de droit administratif", París 1947, p. 21 y 224; Waline M. "Manuel élementaire de droit administratif", 4a. ed., 1945 p. 220).-

Tampoco nos basta la mera calificación mutualidades - oficiales, a las creadas por el Estado a favor de sus empleados, utilizada por algunos autores (Cerdá y Richart B."Teoría y doctrina del mutualismo", Barcelona, 1943 p. 66 y 149) para desentrañar la naturaleza del ente que - presta los servicios.

En los casos en que la naturaleza privada o pública de la entidad no se encuentre expresamente determinada - en el acto de su creación (ley o decreto), es menester - realizar una labor interpretativa del conjunto de los preceptos que la rigen para investigar cual ha sido la voluntad del legislador, si encuadrar el ente creado dentro del grupo de derecho público o bien dentro de la categoría de las personas jurídicas de derecho privado.

El artículo 5º de la ley 12.913 que aprobó el texto único en reemplazo de los decretos 11.890/45, 12.519/46, 13.500/46 dispuso la creación de una entidad mutual dependiente directamente del Ministerio de Guerra (art.1º) con dos categorías de afiliados: a) de carácter obligatorio y b) de carácter facultativo (art. 2º) y encomendó - al Poder Ejecutivo reglamentar su funcionamiento, los servicios a prestar, las contribuciones del Estado y de los afiliados y la agrupación a la citada entidad de los institutos oficiales o privados dedicados a fines de mutualidad, cooperación o proveduría (art. 3º).

En ejecución de esta ley se dictó el decreto número 2.196/45, cuyo art. 1º asigna a la entidad el carácter de repartición bajo la dependencia directa que la ley le fija y la denominación reglamentaria de Dirección General de Obra Social del Ministerio de Guerra. (art. 1º).

La Administración estará a cargo de un Consejo Administrativo cuyos miembros son íntegramente designados - por el Poder Ejecutivo y dos Consejos: uno de Información y otro de Asesoramiento, integrados respectivamente, por delegados representantes de los mutualistas y por técnicos (art. 6º).

El presupuesto debe ser aprobado por el Poder Ejecutivo y remitido al Congreso para su conocimiento (art.5º). La percepción e inversión de los fondos se efectuará mediante régimen especial y la contabilización en cuenta - especial organizada (art. 5º). La Dirección de Adminis -

tración informará sobre la Memoria, balance y estado financiero de la entidad.

En cuanto a la formación del fondo social, además de las cuotas y aportes de los afiliados, los subsidios, donaciones, legados e importes obtenidos por retribución de servicios, figuran las sumas que anualmente fije el Presupuesto General para la atención de servicios oficiales a prestar por este organismo (art. 4º).

El art. 13 encomienda al Consejo Administrativo la elaboración del reglamento de la entidad.

Por decreto nº 6167/47 se estableció que la Dirección General de Obra Social del Ministerio de Guerra funcionaría como entidad privada (art. 1º), previéndose un régimen provisorio de funcionamiento, mientras se aprobaran sus estatutos (art. 2º). La esencia de este decreto se concreta en su segundo considerando que transcribe a continuación: "...Que por su ley de creación por la especial naturaleza de los servicios a su cargo, de carácter privado, como así también por la procedencia de sus recursos... el expresado organismo es una entidad de tal carácter, puesta por razones de gobierno y disciplina, bajo la tutela del Ministerio de Guerra y se encuentra en consecuencia, liberada de las exigencias comunes de la Administración Nacional sin perjuicio de la debida fiscalización".

Cabe señalar que aprobado con posterioridad el Reglamento Interno de la Dirección por decreto nº 27.367/47, de su articulado no surge que se haya mantenido el carácter de entidad privada que pretendía asignarle el decreto nº 8167/47, pués logicamente el Reglamento se ajustó a los preceptos de la ley 12.913 y su decreto reglamentario nº 2196/47.

El decreto nº 8167/47 ha encuadrado en mi concepto, inexactamente al organismo como entidad privada, con el propósito de facilitar su gestión económico-financiera, liberándola, como el mismo dice, de ciertas exigencias -

comunes a la Administración Nacional, especialmente del régimen de la Ley de Contabilidad. En suma, aunque se trata a mi juicio de un ente público que se halla sometido en este aspecto a un régimen jurídico social, que lo equipara a las entidades públicas de un tipo económico - industrial, bancos, etc.

Aplicando los criterios expuestos precedentemente, - llego a las siguientes conclusiones;

La obra social del Ministerio de Guerra sustancialmente es un organismo de derecho público -persona jurídica- por: a) su origen (creación estatal); b) designación de sus autoridades (Consejo Administrativo) integramente por el Estado, excepto el consejo de Información y Asesoramiento, formado por delegados representantes de los mutualistas; c) recursos, formados en parte por la contribución del Estado y en parte con el aporte de los afiliados; d) servicios y beneficios prestados bajo convicciones de monopolios de iure o de facto, por lo menos con - relación a aquello más importante, al establecer la obligatoriedad de la afiliación y del aporte y la posibilidad de agrupar a la entidad creada otras entidades oficiales o privadas, con fines de mutualidad o cooperación, es decir, potestad acordada por la ley al Poder Ejecutivo para absorver, concentrar, reagrupar, o fusionar otras entidades con la creada oficialmente; e) contralor administrativo del ente por la Dirección General de Administración del Ministerio de Guerra y por el Poder Ejecutivo, especialmente en lo relativo a su gestión financiera (comp. Menotti de Francesco, op. cit. págs. 192 y 206/7; Ferrara, op. cit. nº 51 pág. 139 y sigtes., en particular pág. 143/4).

Aparte del aspecto considerado, régimen jurídico de la Administración de la entidad- interesa la calificación de la naturaleza jurídica o privada del ente, para establecer si el régimen del personal es el del empleo -

público o del empleo privado con todas sus consecuencias en punto a sueldos y accesorios, bonificaciones, asignaciones, salario familiar, viático, etc. Régimen disciplinario, régimen jubilatorio, incompatibilidades. No cabe duda que ese personal está sometido al mismo régimen común, aplicable al personal civil de las Fuerzas Armadas.

Lo expuesto, no es óbice para que, por razones de conveniencia del servicio, fuese necesario excluir al personal idóneo y técnico-profesional de las obras sociales del régimen de incompatibilidades, el Poder Ejecutivo puede disponerlo, conforme a la tesis que sustentara en dictámen emitido el 23 de junio ppdo., del que agrego copia.-

Fdo.Enrique C. PETRACCHI
Procurador del Tesoro de la Nación

Expediente nº 43.917/57
Providencia nº 258

//nos Aires, 16 de diciembre de 1958.-

Vuelvan las presentes actuaciones a la Dirección General de Contabilidad y Administración llevando a su conocimiento que se comparte el criterio expuesto precedentemente en el sentido de que si la Dirección General de Obra Social de la Secretaría de Estado de Hacienda fuera declarada "hacienda para-estatal", de conformidad con lo previsto en el art. 138º de la Ley de Contabilidad y su Reglamentación, su personal quedaría excluído del ámbito

de aplicación del Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública Nacional. Para ello, correspondería precisar la naturaleza jurídica del organismo en cuestión, lo cual no es de competencia de esta Dirección General, causa por la que se encuentra imposibilitada de emitir su opinión al respecto.

Sin perjuicio de lo expuesto, cabe destacar que de acuerdo con el art. 4º del decreto nº 9530/58, aprobatorio del Escalafón para el Personal Civil de la Administración Pública Nacional, las obras sociales de las distintas jurisdicciones son incluídas entre los organismos cuyo personal comprende dicha medida, y consecuentemente deben someter a la aprobación del Poder Ejecutivo las estructuras presupuestarias que resulten de la ubicación de sus agentes en las Clases y Grupos previstos en dicho Escalafón. De ello se interfiere que el propósito del Poder Ejecutivo sería considerar al personal de esas entidades en un pié de igualdad con el de los distintos organismos del Estado, y en estas condiciones también entrarían dentro del ámbito de aplicación del Estatuto aprobado por decreto-ley 6666/57 (').

De definirse en este sentido la situación particular de la Dirección General de Obra Social de esta Secretaría de Estado, cabría considerar el caso planteado acerca de las inasistencias incurridas, entre el 22 de mayo y el 2 de junio de 1957, por el agente de la misma D. Julio César ABITABILE. Sugiriendo dicho organismo la justificación, sin goce de haberes, de las inasistencias citadas, corresponde considerar sólamente la medida correctiva de tres días de suspensión con prestación de servicios, propuesta a fs. 4 vuelta. A este respecto cabe aplicar el criterio sustentado por el señor Procurador del Tesoro de la Nación en su dictámen del 28 de abril ppdo., es de

(') Ver Digesto Administrativo nº 254.-

cir, resolver la situación con arreglo a las normas del - Estatuto del Personal Civil, por tratarse en este caso - particular de la ley más benigna, y tal como lo preveé el art. 2º del Código Penal. En tales condiciones, y en consonancia con lo previsto en el punto 1º de la reglamentación del art. 35º de aquel cuerpo legal (decreto-ley nº 6666/57), la suspensión del causante no podría efectivizarse con prestación de servicios, ya que explicitamente indica dicho articulado: "Las suspensiones, tanto preventivas como correctivas, se harán efectivas sin prestación de servicios y sin percepción de haberes".-

Fdo. José Luis FRANGI.
Director General
Servicio Civil de la Nación

Expediente nº 43.917/57

//ñor Director General:

El Departamento de Personal y Servicios Generales solicita opinión a este Departamento acerca de la consulta planteada por la Dirección General del Servicio Civil de la Nación, respecto de los siguientes puntos:

I) Si la Dirección General de Obra Social de Hacienda es organismo dependiente del Poder Ejecutivo;

II) Si el nombramiento del personal que presta servicios en dicha Dirección emana de autoridad competente.-

El interrogante planteado en primer término puede ser respondido en forma afirmativa a juicio de este Departa-

mento. Funda su opinión en los siguientes elementos de juicio:

- El Decreto nº 40.947/47 creó en el Ministerio de Hacienda la División de Ayuda Social bajo dependencia directa del Subsecretario, el que a ese fin debía ser asistido por un Consejo Consultivo, con facultades de contralor e integrado por funcionarios del Ministerio. (arts. 1º y 3º).-

-Luego dicho acto fué derogado por el decreto nº 8.854/49, que al organizar la Dirección de Obra Social no modificó aquella relación de dependencia. El artículo 4º - del citado decreto determina: "La Obra Social podrá realizar, sin otras limitaciones que las que dictare el Ministerio de Hacienda, todos los actos y operaciones tendientes a la consecución de sus fines...". A través del decreto que se comenta surge en forma evidente las amplias facultades que posee el Ministerio de Hacienda para regir y reglamentar el funcionamiento de la dependencia, aprobar su presupuesto anual de gastos, memoria y balance, efectuar las designaciones y promociones del - personal -excepto Director y Subdirector-, fijar las cuotas de afiliación, crear servicios, celebrar convenios, etc.

-Finalmente, el decreto nº 21.644/56 (') reestructura - nuevamente la organización y funcionamiento de la que entonces pasa a ser Dirección General de Obra Social y si bien a través de ello adquiere ésta mayores facultades, las mismas son a expensas del llamado Consejo Consultivo y no del Ministerio de Hacienda, quién sigue manteniendo el control directo de la dependencia.

-Por otro lado cabe consignar que el decreto número - 3.881/53 ('') , primero y el nº 17.071/56 (+), luego, se-

(') Ver Digesto Administrativo nº 110.-
('')Ver Digesto Administrativo nº 21.-
(+) Ver Digesto Administrativo nº 23.-

ñalan a la Dirección de Obra Social como organismo integrante de la organización interna del Ministerio y Subsecretaría del Ministerio, respectivamente.

Los antecedentes expuestos parecen significar que, desde el punto de vista funcional, la Dirección General de Obra Social depende del Ministerio de Hacienda y por lo tanto, del Poder Ejecutivo Nacional.

Sin embargo, no se oculta a este Departamento que la consulta formulada por la Dirección General del Servicio Civil de la Nación está dirigida a determinar si el personal integrante de la repartición nombrada se halla comprendida o nó en el Estatuto aprobado por el Decreto-Ley nº 6.666/57.

Para aclarar ese aspecto es necesario previamente establecer cual es la naturaleza del organismo. En este sentido debemos observar primeramente que la repartición de que se trata presenta caracteres peculiares que la diferencian de los organismos comunes de la Administración Nacional, según surge de los siguientes elementos de juicio:

Presupuesto:

La Dirección General de Obra Social no figura en el Presupuesto de esta Secretaría de Estado y desde luego tampoco en el Presupuesto General de la Nación.

Su aprobación se hace directamente por resolución del Ministro de Hacienda, por facultad otorgada por el Poder Ejecutivo.

Los recursos de dicho presupuesto están dados por: a) aportes del Estado en carácter de subsidio; b) recaudación por cuotas de afiliación; c) aportes de las Cuentas Especiales y d) recaudación por explotación de servicios.

Personal:

Es nombrado directamente por el Ministro, salvo el Director y Subdirector que, por figurar en el Presupuesto del Ministerio, son designados por el Poder Ejecutivo. La

facultad para efectuar los nombramientos ha sido concedida al Ministro de Hacienda por el Poder Ejecutivo Nacional. (1).

(1). Estas facultades resultarían de dudosa legalidad si se diera en considerar a la Obra Social como organismo estatal, toda vez que el P.E. no puede en este supuesto delegar atribuciones que, en el 1er. caso no tiene ni para sí y en el 2do. sólo mediante el dictado de una Ley --aunque también discutible- ya que el poder para nombrar y remover al personal le ha sido dado al Presidente de la Nación, como Jefe de la Administración Nacional, por la propia Constitución Nacional.

Régimen administrativo-contable.

No le son de aplicación las disposiciones comunes de la Ley de Contabilidad, aún cuando el Tribunal de Cuentas puede fiscalizar y vigilar su actividad económica. La rendición de cuentas que se efectúe directamente al Tribunal de Cuentas, comprende a los fondos únicamente aportados por el Estado.

La administración del organismo, se hace con sujeción exclusiva a sus estatutos y disposiciones internas. Las autoridades gozan de facultades para resolver por sí todo acto de disposición de bienes, muebles e inmuebles, celebración de contratos de compra-venta, locación de obras y servicios, etc.

Desde el punto de vista fiscal del Tribunal de Cuentas, al serle sometida a consulta una actuación (expediente nº 70.579/57) relacionada con las disposiciones que debían aplicarse a la Obra Social para la realización de contrataciones, luego de señalar que la situación jurídica institucional de las Obras Sociales no ha sido definida por un acto positivo de autoridad competente, dando ello lugar a que la ex-Contaduría General de la Nación en expediente nº 112.807/52 M.H. y posteriores pronuncia-

mientos, se expidiera en el sentido que, hasta tanto se defina concretamente la situación de dichos organismos - podían continuar desenvolviéndose en las condiciones previstas en las disposiciones que los crearon y organizaron, luego de dicha aclaración, se reitera, el Cuerpo - mencionado expresó: "La nueva Ley de Contabilidad no ha modificado la situación, por cuanto si bien las Obras Sociales están comprendidas entre las denominadas haciendas para-estatales, referidas en su art. 138º y por lo - tanto, sometidas a jurisdicción del Tribunal de Cuentas de la Nación, en cambio no ha fijado un régimen especial para su funcionamiento ni tampoco les ha impuesto la obligatoriedad de ajustar sú cometido a las disposiciones generales de la Ley. Por lo tanto, hasta tanto se dicte una disposición positiva en tal sentido, no existen inconvenientes en que las Obras Sociales continúen aplicando el régimen establecido por sus pronunciamientos de creación y organización".

Dejando de lado entonces el problema relacionado con la omisión de la Ley de Contabilidad respecto al régimen administrativo-contable a que deben ajustarse las Obras Sociales, vemos que el Tribunal de Cuentas considera a las Obras Sociales como organismos para-estatales. De acuerdo con la definición del art. 138º de la Ley de Contabilidad tienen tal carácter las entidades de derecho - privado de cuya dirección o administración tenga responsabilidad el Estado, o a las cuales éste se hubiera asociado, garantizando materialmente su solvencia o utilidad, les haya acordado concesiones o privilegios, o subsidios para su instalación o funcionamiento.

En el comentario de este Artículo de la Ley de Contabilidad, Adolfo Atchabahian y Guillermo Massier expresan: "Las haciendas conexas, semipúblicas o paraestatales -denominación esta última que adopta el decreto-ley- son - los organismos económicos que corresponden a sujetos ju-

rídicos con patrimonio y/o recursos propios, independientes éstos del Estado, y que cumplen funciones similares a las que atañen a los fines del Estado, o en cuya marcha el poder público está interesado por razones de diversa índole.- Es decir que las dos características esenciales de estos entes residen en su independencia económica y/o financiera del Estado y en el carácter de sus funciones o de su actuación, que las conduce a ser fiscalizadas publicamente.- En principio, se trata entonces de entidades de derecho privado o sujetos privados, pero que el Estado, en salvaguardia de sus intereses, o los de la colectividad, interviene o fiscaliza..." ("Comentario de la Nueva Ley de Contabilidad y Organización del Tribunal de Cuentas de la Nación y de la Contaduría General de la Nación". edic. 1957, pág. 90/91).

Evidentemente la naturaleza del organismo y los servicios que presta hace apropiada su ubicación en la especie definida por el comentado art. 138º y en razón de ello correspondería al dictado del pertinente decreto del Poder Ejecutivo que así lo declare, tal como lo establece la reglamentación de la disposición aludida, aprobada por el decreto nº 13.100/57 (').

Una vez producida esta declaración parece obvio insistir en que ya no quedará duda en que la Dirección General de Obra Social debe ser excluída del ámbito de aplicación del Estatuto, conforme lo prevé el inc. 1) de su artículo 2º, toda vez que no será suficiente para su permanencia la relativa dependencia que el organismo guarda con el Poder Ejecutivo, ya que la cuestión principal reside en el hecho de no considerarse al organismo un ente estrictamente estatal. Desde luego que ese criterio debería aplicarse con carácter general para todos los organismos de esta naturaleza que presenten identidad de ca-

(') Ver Digesto Administrativo nº 487.-

racteres.

Con relación al punto 2º de la consulta realizada y aunque se estima que la respuesta al mismo va implícita en las consideraciones formuladas precedentemente, debe señalarse que efectivamente el nombramiento de este personal emana de autoridad competente, en virtud de lo dispuesto por el decreto nº 21.644/56 (art. 5º inc. m).

Finalmente y atento la naturaleza de la cuestión planteada, este Departamento estima conveniente oir el autorizado dictámen de la Dirección General de Asuntos Jurídicos.-

DEPARTAMENTO DE SECRETARIA, 30 de junio de 1958.-

Mem. D.S. nº 3474/58.-

Fdo.Norberto P. DENARI
Jefe de Departamento

Expediente nº 43.917/57.-
P.Nº 3475/58

//nos Aires, 30 de junio de 1958.-

Con el informe que antecede, producido por el Departamento de Secretaría, que esta Dirección General hace suyo, pase a la Dirección General de Asuntos Jurídicos encareciéndole su dictamen.-

Fdo.Angel BOTTERO TORRES
Director General
de Contabilidad y Administración

Expte. nº 43.917/57 - Dirección General de Obra Social - Naturaleza de la entidad - Organismo de derecho público - Dependencia del Poder Ejecutivo Nacional- Situación de sus empleados como agentes del Estado.-

//ñor Secretario de Hacienda:

1.- La Dirección General de Obra Social de Hacienda- tuvo su origen en el decreto nº 40.947/47, por el cual - se dispuso la creación de la División de Ayuda Social, y en la ley 13.215, cuyo art. 9º autorizó al Poder Ejecutivo para reglamentar los servicios asistenciales y el funcionamiento de dicha Obra Social, para establecer la afiliación obligatoria del personal del Ministerio, y para otorgarle hasta la suma de m$n 10.000.000 en préstamo. Su creación y organización determinadas luego por el decreto 8.854/49 son, así, de carácter netamente estatal, como también su dependencia, puesto que el decreto 17.071/56 la incluye como Dirección integrante de la Subsecretaría del Ministerio de Hacienda.

2.- Conforme con el decreto nº 25.644/56, arts. 2º y 3º, la administración del organismo estará a cargo de un Director General y de un Subdirector General, nombrados por el Poder Ejecutivo a propuesta del Ministerio de Hacienda, el que está facultado para reglamentar su organización y los servicios que debe prestar, y para designar, promover y remover a su personal. Asimismo, los arts. 8º y 9º establecen la afiliación obligatoria de los agentes en actividad y la contribución del Estado Nacional.

3.- Todo lo expuesto permite llegar a la conclusión de que la entidad en cuestión es un organismo de derecho público con dependencia directa del ex-Ministerio de Hacienda -hoy Secretaría de Hacienda- y, por ende, del Po-

der Ejecutivo de la Nación.

4.- No se le oculta a esta Dirección que la circunstancia de que el presupuesto de la entidad no se incluya en el presupuesto general de la Nación podría interpretarse en contra de la conclusión expuesta; como tampoco, que según el art. 46 de la Res. nº 7078 (') -reglamentación del Estatuto Orgánico, decreto nº 21.644/56 se la considera como organismo "para-estatal" - (art. 138 del decreto-ley nº 23.354/56), es decir como entidad de derecho privado a los efectos presupuestarios. Pero de cualquier modo, mientras no exista una norma positiva expresa que defina concretamente su naturaleza jurídica como órgano de derecho privado, excluído de los cuadros de la administración activa, no se la puede considerar sino como un órgano de dicha administración, con todas sus naturales consecuencias, entre las cuales se encuentra el "status" legal a que se halla sometido su personal.

5.- Por lo demás, cabe tener en cuenta como precedente interpretativo de la cuestión planteada a fs. 11 por la Dirección General del Servicio Civil de la Nación, que el personal de la entidad ha sido considerado, hasta ahora, como agente del Estado a los efectos de los regímenes de licencias, de previsión social, de incompatibilidades, de seguro de vida obligatorio, de préstamos para los empleados públicos, etc.; por todo lo cual resultaría indudablemente anómalo que no se lo considerara comprendido en el Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública (decreto-ley nº 6.666/57 y su reglamentación) y que se le denegaran, por lo tanto, sus beneficios, sin que previamente se lo declare comprendido en otro régimen mediante una norma positiva expresa, porque ello significaría colocarlo en una situación de incertidumbre y desamparo que no resultaría, de manera alguna,

(') Ver Digesto Administrativo nº 176.-

equitativa.

6.- A mayor abundamiento, respecto de las Obras Sociales de los Ministerios de Guerra y de Marina, que no presentan características tan definidas de organismos de derecho público como las de la entidad sub-estudio, la Procuración del Tesoro se ha pronunciado en el mismo sentido, conforme a los términos de que enteran los dictámenes cuyas copias se acompañan para mejor ilustración.

DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS, 12-9-58.-

Fdo. Cristián GIMENEZ DEMARIA
Director General

Poder Ejecutivo Nacional
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº 937.-

EMPRESAS DEL ESTADO - PERSONAL

Señor Gerente General:

Las presentes actuaciones tratan de la reclamación interpuesta por el ex-Subgerente de Manufactura Algodonera Argentina E. N. Dr. José A. Ramos, que dejara de prestar servicios en la mencionada empresa con fecha 21 de diciembre de 1955.-

De entre los distintos rubros que contiene el citado reclamo, se destaca, principalmente el correspondiente a las gratificaciones del año ppdo., razón por la cual, estas actuaciones se mantuvieron en reserva a la espera de conocer la doctrina que en definitiva sentaría la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo reunida en pleno a fin de unificar la contradictoria jurisprudencia existente en la materia específica de las llamadas "gratificaciones".-

El esperado fallo, finalmente dictado y publicado recién el día 6 del corriente en la revista "Jurisprudencia Argentina" sentó una doctrina que permitió aclarar el panorama con respecto a los dependientes de empresas sujetos al régimen privado de la ley 11.729 y concordantes. Por aplicación de la misma, "las gratificaciones otorgadas en forma habitual dan derecho, en principio a reclamar su pago en períodos sucesivos, y por consiguiente autorizan a recurrir a la vía judicial para exigirlas compulsivamente".-

No obstante lo expresado, necesario es destacar la posición que esta Asesoría ha mantenido con respecto al problema de la "naturaleza jurídica" de los gerentes y subgerentes de las empresas dependientes de esta Comisión, en el sentido de considerarlos "funcionarios públicos", a mérito de los fundamentos y consideraciones expuestas en los dictámenes números 611 del 27/8/54 y 1787 del 19/10/56, en el último de los cuales, producido, a raíz de una reclamación formulada por el

ex-Subgerente de Santa Rosa Estancias E.N., se aconsejó solicitar la opinión del Señor Procurador del Tesoro de la Nación, con respecto al problema allí planteado.-

En este orden de ideas, la condición de funcionarios públicos del presentante excluiría la posibilidad de la intervención del Fuero Laboral para obtener -por aplicación del Fallo Plenario comentado- el reconocimiento del derecho a las gratificaciones reclamadas.-

Todo lo expuesto, mueve a esta Asesoría a reiterar la necesidad de oir la opinión del Procurador del Tesoro de la Nación, sobre el carácter que revisten los funcionarios citados, frente al ordenamiento jurídico-laboral por una parte, y las normas de derecho administrativo, por la otra.-

Cabe destacar, para determinar precisamente el alcance del planteo formulado, que dichos funcionarios, por aplicación de lo establecido en el art. 21 inc. c) del Estatuto Orgánico han percibido también en años anteriores, gratificaciones, y que, a los funcionarios y empleados del organismo central, cuyo carácter de dependientes estatales nadie discute, también han sido beneficiados habitualmente con el otorgamiento de sumas anuales en concepto de gratificaciones.-

Necesario es, en consecuencia, se determine si al igual que en el caso de los empleados privados, dichas sumas, también otorgadas en forma habitual, integran la remuneración de los empleados y funcionarios estatales, y si en consecuencia, la falta de pago de las mismas habilita a gestionar judicialmente su otorgamiento.-

Los demás rubros que contiene la nota del Dr. Ramos, dependen también del carácter que en definitiva, se concluya revisten los nombrados funcionarios y su ubicación frente al problema esbozado por lo que no es dable expedirse, con excepción de los correspondientes a "diferencia de sueldo por actuación como gerente interino" e "intereses", que esta Asesoría estima improcedente, el primero por ser el subgerente de acuerdo al Estatuto Orgánico, el reemplazante natural del gerente, y el segundo por que aquellos -los intereses- rección comenzarían a correr a partir de una intimación judicial

que constituyera en mora a la deudora, en este caso, la Comisión.-

ASESORIA LETRADA, 29 de octubre de 1956.-

EXP: VS. 1510 - A.L.7/1823
VS.1923-1

Fdo. Santiago Bignone
Asesor Letrado
de la
Comisión Administradora Bienes Ley 14.122

//ñor Subsecretario:

Las presentes actuaciones se refieren a la presentación efectuada por el ex-Subgerente de Manufactura Algodonera Argentina E.N., doctor José A. Ramos, -que dejara de prestar servicio en esa Empresa el 21 de diciembre de 1955-, mediante la cual reclama el pago de la gratificación por el año 1955 y diferencia de sueldo.-

Para considerar el rubro citado en primer término y atento que en fecha 6 de octubre de 1956, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, reunida en pleno, sentó doctrina en la materia específica de las llamadas "gratificaciones" que alcancen a los dependientes de empresas sujetas al régimen privado de la ley 11.729 y concordantes, Asesoría Letrada estima necesario a los efectos de determinar la naturaleza jurídica de los Gerentes y Subgerentes de las empresas dependientes de la Comisión Administradora Bienes Ley 14.122, conocer la opinión del señor Procurador del Tesoro de la Nación sobre el carácter que revisten los funcionarios citados, frente al ordenamiento jurídico laboral por una parte y las normas del derecho administrativo por la otra.-

Gerencia General, 16 de noviembre de 1956.-

Fdo. Argentino Malla
Gerente General

VS. 1923-Comisión Adm. Ley 14.122
MINISTERIO DE HACIENDA

Vuelva a la SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE HACIENDA, haciéndole presente que, previo al dictamen de la Procuración del Tesoro, debe expedirse en estas actuaciones la Dirección General de Asuntos Jurídicos de ese Departamento de Estado, de conformidad con las disposiciones vigentes (arts. 1, 3 y 4 Decreto nº 14546/43 (1); 6º Ley 12.954 y 8º inc. a) Decreto nº 33.952/47).-

Noviembre 23 de 1956.

Fdo. Ricardo Colombres
Procurador del Tesoro de la Nación

Buenos Aires, 26 de noviembre de 1956.-

Pase a la Dirección General de Asuntos Jurídicos a sus efectos.-

Fdo. Julio Broide
Subsecretario de Hacienda

(1) Ver Digesto Administrativo nº 91.

Expte. Vs. 1.923/56.-Comisión Administradora Bienes Ley 14.122 - Reclamación de José Alberto Ramos - Régimen legal que comprende a los gerentes y subgerentes de las Empresas.-

//ñor Secretario de Hacienda:

Según el Estatuto Orgánico de la Comisión Administradora Bienes Ley 14.122, "La Comisión..., dependiente del Ministerio de Hacienda, funcionará con el carácter de empresa del Estado y actuará como persona del derecho público en las relaciones jerárquico-administrativas y como persona de derecho privado en las relaciones u operaciones correspondientes a la gestión o administración de las distintas explotaciones que comprenden su conjunto económico" (art. 1º del Estatuto aprobado por decreto nº 26.157/53, cuyo texto se repite, con ligeras variantes, en el aprobado por decreto nº 5.500/58)(1).

Tal disposición reconoce como antecedente, en cuanto a la naturaleza de la Comisión como "empresa del Estado", se regirá por las disposiciones de la ley 13.653, del presente decreto, y de su estatuto orgánico ...".-

Por su parte, el art. 1º, segundo párrafo, de la ley nº 13.653 (t.o. por decreto 4053/55) dispone que "Las empresas del Estado quedan sometidas: a) al derecho privado en todo lo que se refiere a sus actividades específicas; y b) al derecho público en todo lo que atañe a sus relaciones con la Administración o al servicio público que se hallare a su cargo". A su vez, el art. 8º de la misma ley, determina que "Las responsabilidades de las autoridades de las empresas del Estado se determinarán según las normas aplicables a los funcionarios públicos y a las que rigen para los directores de las sociedades anónimas en cuanto importe una mayor protección jurídica para el interés lesionado. Todo el personal de las empresas del Estado se halla sujeto a los juicios de responsabilidad, conforme a la ley de contabilidad nº 12.961".-

(1) Ver Digesto Administrativo nº 504.-

Asimismo, el art. 17 del D.R. 5883/55 establece que "Las autoridades de las empresas responden personal y solidaria - mente para con el Estado y los terceros por la enajenación o mal desempeño del mandato y por la violación de las leyes, estatutos y reglamentos. Quedan excentas de esta responsabilidad las autoridades que no hubieran tomado parte en la respectiva retención o que hubieren dejado constancia escrita - de su disidencia".-

Del juego armónico de estas disposiciones y de las contenidas en el Estatuto Orgánico de la Comisión respecto de los gerentes y subgerentes de las empresas que la integran (arts. 17, 18 y 19 del estatuto aprobado por decreto 26157/53; arts. 16, 17 y 18 del aprobado por decreto 5500/58), resulta, sin lugar a dudas, el carácter de agentes del Estado que aque - llos invisten y la cuestión que se ventila en las presentes actuaciones se reduce, pues, a establecer si, no obstante dicha condición de "agentes del Estado", se hallan o no comprendidos en el régimen legal instituído para el personal de las entidades de derecho privado o en el que rige para los - empleados y funcionarios públicos.-

Fuera de que las disposiciones mencionadas consideran a los gerentes y subgerentes de las empresas como funcionarios que dependen, a través de la Gerencia General, del Consejo - de Administración de la entidad, es principio aceptado por - la doctrina y jurisprudencia imperantes que el personal de los organismos del Estado queda comprendido en el régimen ordinario vigente para los agentes del mismo, a no ser que medie decisión expresa en sentido contrario, como ha ocurrido, por ejemplo, con el personal de las empresas y establecimientos que se incorporaron a la Dirección Nacional de Industrias del Estado (decreto 24.562/47, ratificado por la ley 13.215, art. 11), y con el personal de las empresas de Transportes - incorporadas al dominio del Estado (decreto 22.768/48). Es así como sólo ha podido aplicarse las disposiciones de las - leyes 11.729 y 12.921 (decreto 33.302/45) al personal de ciertas empresas de transportes en virtud, precisamente, de las prescripciones del decreto 22.768/48 (v. Fallos de la Corte - Suprema de Justicia de la Nación, t. 226, p. 478).-

En el mismo orden de ideas, y por lo que atañe al personal comprendido en convenciones colectivas de trabajo el de

creto 6.582/54 (") (reglamentario de la ley 14.250 sobre tales convenciones) determina en su art. 19 que "no se regulará mediante convenciones colectivas el régimen de trabajo del personal ocupado por la Administración Pública - nacional, provincial o municipal -, con excepción de aquellas actividades donde por acto expreso del poder público, en cada caso, se admita su aplicación". Concordantemente, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo ha decidido que la Flota Mercante del Estado constituya una repartición pública y, por consiguiente, su personal no puede reclamar las indemnizaciones previstas por el decreto 33302/45 y la ley 11.729 (v. "Derecho del Trabajo", t.9, p. 194). Y en dicho pronunciamiento judicial se destaca "lo dispuesto por el art. 2º del decreto 33.302/45 (ley 12.921) que excluye de su régimen a los empleados u obreros del Estado".-

Y si esto es así, como principio general, para quienes se desempeñan como empleados subordinados, con tanta mayor razón cabe aplicarle al personal directivo que, como en este caso, depende directamente del Consejo de Administración de la Comisión Administradora Bienes Ley 14.122.-

A mayor abundamiento, este criterio a venido a ser corroborado por el Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública Nacional (decreto-ley 6666/57) (º), según el cual se halla excluído del régimen establecido por el mismo "el personal de las empresas del Estado, como así también el de organismos regidos por convenios colectivos de trabajo" (art. 2º, inc. j), con lo que es de suyo evidente que si no mediara esta disposición, ese personal estaría comprendido en el referido Estatuto.-

En síntesis, entiende esta Dirección que, en defecto de disposiciones expresas en contrario -como la recién citada del Estatuto del Personal Civil de la Administración-, los gerentes y subgerentes de empresas de la Comisión Administradora Bienes Ley 14.122 gozan del "status" legal ordinario establecido por el derecho administrativo en vigor para los agentes del Estado, pues " ... las relaciones entre el Estado y sus agentes no se encuentran regidas por el derecho privado -

(") Ver Digesto Administrativo nº 394.-
(º) Ver Digesto Administrativo nº 254.-

sino por el derecho público administrativo" (Bielsa, "Derecho Administrativo", ed. 1947, t.2, p.89 y sgtes.). La jurisprudencia nacional es abundante en el mismo sentido (Fallos de la Corte Suprema, t. 166, p. 264; t. 169, p. 394; t. 187; p. 116; t. 189, p. 128; t. 191, p. 263; t. 192, p. 436; t. 193, p. 352; t. 195, p. 210; t. 204, p. 72; etc.).-

DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS, 25 de septiembre 1958.

Fdo. Cristián Giménez Demaría
Director General

Expediente nº 79.158/58 - P/
Nº 5.368 -
Ref.: Ramos, José Alberto
Reclamación.-

//nos Aires, 27 de octubre de 1958.-

Habiéndose expedido en las presentes actuaciones la Dirección General de Asuntos Jurídicos, pase al señor Procurador del Tesoro de la Nación, estimándole quiera servirse emitir dictamen.-

Fdo. Ricardo Lumi
Secretario de E. de Hacienda

Expediente nº 79.168/58.Ramos José Alberto, solicita pago - gratificación año 1955. SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA.-

Señor Secretario de Estado de Hacienda;

I.- En las presentes actuaciones el ex-Subgerente de Manufactura Algodonera Argentina E.N., dependiente de la Comisión Administradora Bienes Ley 14.122, Dr. José Alberto Ramos solicita los siguientes beneficios: a) gratificación correspondiente al año 1955 conforme a lo dispuesto en el Estatuto Orgánico de la citada Comisión, entonces vigente; b) diferencia de sueldos, desde el 23/11/55 al 21/12/55, por su desempeño como gerente de la mencionada empresa y c) bonificaciones por costo de vida y antigüedad correspondientes al período - comprendido entre el 1º/6/54 al 21/12/55 (fs. 5/6).-

II.-Coincido en un todo con el criterio sustentado por la Dirección General de Asuntos Jurídicos de esa Secretaría de Estado en su dictamen de fs. 14/16, sólo debe agregar, atento que la investidura del interesado era la de un empleado público, que habrán de ser las pertinentes normas que contemplaban en la oportunidad los derechos y beneficios de los agentes públicos, las que deben tenerse en cuenta a los efectos del reclamo formulado por el Dr. Ramos, al que corresponderá acceder siempre y cuando se encuentren cumplidos los presupuestos previstos por aquéllas.-

Diciembre 31 de 1958.

Fdo. Ricardo Colombres
Procurador del Tesoro de la Nación

Poder Ejecutivo Nacional
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº 938.-

SUSPENSION PREVENTIVA - SUELDO - PERSONAL - ESTATUTO PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL

Expediente nº 670/958 TCN.
Providencia nº 976/959 -
Presupuesto e Incompatibilidades.-

//nos Aires, 25 de febrero de 1959.-

El empleado Alfredo Abraham José de la Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos, fué sancionado por la Policía Económica de la Provincia de Buenos Aires (previo sumario incoado por la misma) con una multa de m$n. 4.000 por haber infringido la ley 12.830, artículo 6º (préstamos usurarios).-

A raíz de ello la Lotería de Beneficencia solicitó la cesantía del referido empleado, el que fuera suspendido en sus funciones a partir del 3 de diciembre de 1954. Posteriormente, la misma repartición en mayo 16/57 y luego en octubre - 3/57 expresó que era de opinión que correspondía levantar la inhibición que pesaba sobre el causante, reincorporándoselo al cargo que desempeñaba, y considerando asimismo suficiente sanción el prolongado lapso en que el citado agente se encontró separado de su cargo.-

En ese estado de cosas y frente a que ese empleado no registraba otros antecedentes desfavorables, el Ministro de Hacienda por resolución de diciembre 12/57 levantó, a partir - de esa fecha, la suspensión provisional que le fuera impuesta al causante, dejando pendiente la consideración de la retención de los haberes correspondientes al tiempo en que duró el alejamiento del mismo, a determinados asesoramientos -

posteriores.-

La conducta decorosa de los empleados ha sido contemplada tanto en el anterior estatuto (decreto 33.827/44, art. 28 inc. d) como en el actual (decreto-ley 6.666/57 (&), art. 6, inc. b), debiendo hacerse notar que en este último (art. 37, inc. f) es causa de cesantía la "inconducta notoria".-

Según el artículo 39 - I) de la reglamentación del estatuto en vigor, los agentes sometidos a proceso criminal por hechos ajenos al servicio, pueden ser suspendidos hasta que demuestren su inculpabilidad con el testimonio de la sentencia firme respectiva. Este procedimiento es asimilable al de autos.-

En este caso el causante no ha demostrado su inculpabilidad, por el contrario resulta culpable y confeso según estas actuaciones. En esas condiciones y si bien por los atenuantes que se expusieron no se ha dispuesto la cesantía del empleado nombrado, en cambio frente a hechos positivos resultantes de su culpabilidad no puede considerarse el caso como si no hubiera pasado nada y pagársele servicios que no ha prestado durante el tiempo de su suspensión.-

En virtud de ello y por lo solicitado por la propia repartición interesada y por la doctrina que surge de los dictámenes que a continuación se transcriben, el Tribunal de Cuentas de la Nación entiende que no procede abonar los haberes respectivos al período que no hubo prestación de servicios.-

DICTAMEN DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACION:

"Excmo. señor: De los antecedentes que han sido agrega-
"dos, resulta que no se ha producido un desacato por parte
"del recurrente, como se dijo en el decreto de fecha 27 de di
"ciembre de 1915, desde que no envuelve ese carácter la soli
"citud de revocatoria presentada al Juez que ordenó la entre
"ga del protocolo, y ésta fue realizada en forma, ante el re
"querimiento hecho por el Oficial de Justicia.

(&) Ver Digesto Administrativo nº 254.-

"De manera que corresponde que V.E. tome conocimiento de di
"cho antecedente para resolver la reconsideración pedida.-

"Debo agregar que, aún en el supuesto de que se repusiese
"al recurrente en el cargo que desempeña, no habría lugar al
"pago de los sueldos correspondientes al tiempo que estuvo -
"suspendido, por cuanto no habiendo servicio prestado no hay
"lugar a remuneración, según lo ha resuelto la jurisprudencia
"administrativa en repetidas ocasiones". Fdo. Dr. Julio Botet
Junio 13/1917.-

DICTAMEN DEL PROCURADOR DEL TESORO:

"Señor Ministro: Las disposiciones del art. 38 del Esta-
"tuto del Personal Civil de la Administración Nacional son a
"plicables al caso de situaciones en que el empleado se ve co
"locado por causas de servicio o imputables al mismo.-

"Pero cuando, por razón de hechos ajenos a la función ad
"ministrativa, el agente debe ser alejado del servicio esta -
"suspensión no puede regirse por las previsiones del referido
"Estatuto, que se ha establecido para reglar los derechos y
"obligaciones propias del empleado público con relación exclu-
"siva al servicio que presta.-

"Si, como ocurre en el caso, el alejamiento del agente -
"se impuso en defensa del decoro y prestigio de la función, -
"por estar sometido a proceso criminal por hechos ajenos al
"servicio, no concurre la causa que determinó, en el régimen
"del Estatuto, el procedimiento a seguir en materia de suspen
"siones y pago de haberes.-

"Creo, por lo expresado, que corresponde mantener la sus
"pensión hasta que se dicte sentencia definitiva y que cual -
"quiera sea el resultado del proceso, no procede abonar los
"haberes respectivos". Fdo. Bernardo Velar de Irigoyen. Mayo
14 de 1946.-

Con lo expuesto, vuelvan estas actuaciones a la Secreta-
ría de Hacienda, sirviendo la presente de atenta nota de en -
vío.-

Fdo. José M. Fernández Fariña
Presidente del
TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA NACION

Expediente nº 2390/57.Alfredo - Abraham José s/suspensión preventiva por hecho ajeno al servicio.SECRETARIA DE ESTADO DE - HACIENDA.-

Señor Secretario de Estado de Hacienda:

I.- Con motivo de las actuaciones incoadas por la Policía Económica de la Provincia de Buenos Aires, contra el agente - de la Lotería de Beneficencia y Casinos don Alfredo Abraham - José, se dispuso su suspensión a partir del día 4 de diciembre de 1954 y hasta tanto quedara dilucidada su situación(fs. 66).-

Habiéndose tenido conocimiento de su condena en la causa que se le siguió, mediante la Disposición nº 86 del organismo mencionado, se resolvió solicitar al Ministerio de Hacienda - la cesantía del nombrado agente (fs. 17).-

II.-Dicho pedido de cesantía no fué resuelto y en cambio en diciembre 12 de 1957 (R.M. nº 5567) el Ministerio de Hacienda, en consideración a lo informado por Lotería de Beneficencia a fs. 63, resuelve levantar a partir de esa fecha, la suspensión aplicada sin pronunciarse sobre el pago de los haberes correspondientes al lapso de suspensión, porque "la retención de haberes correspondientes al tiempo que duró su alejamiento, excede las prescripciones del Estatuto del Personal Civil de la Administración Nacional -pendiente de reglamentación- aprobado por decreto-ley nº 6.666 de fecha 17 de junio de 1957..", por lo cual se dispuso que previamente debía solicitarse la opinión de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y del Tribunal de Cuentas de la Nación.-

La primera repartición dictamina a fs. 77 sosteniendo, en síntesis, que a partir del 27 de junio de 1957, fecha en que entró en vigencia el Estatuto Decreto-Ley 6.666/57 por su publicación en el Boletín Oficial, no puede privarse al recurrente de sus haberes, temperamento que no comparte el Tribunal - de Cuentas que niega todo derecho a su pago - (fs.84)-,motivo

por el cual se solicita dictamen a esta Procuración sobre la cuestión planteada.-

III.- Está acreditado en autos que el agente Alfredo Abraham José, fué condenado por resolución del 21 de septiembre de 1954 del Director de la Policía Económica de la Provincia de Buenos Aires, a pagar una multa de m$n. 4.000, pena que se le aplicó por considerarse que había infringido el art. 6º de la ley 12.830, al comprobarse fehacientemente que efectuó un préstamo de m$n. 5.000 al usurario interés del 8% mensual, o sea, el 96% anual (fs. 14). Dicha multa fué oportunamente oblada por el infractor (fs. 13).-

Con posterioridad a la condena se produjo la suspensión a que se ha hecho referencia adoptada por el Gerente General de la Lotería, invocando órdenes de la superioridad (fs.66 y 67) resolviéndose a los pocos días, cuando dicho organismo tuvo conocimiento cabal de los hechos, solicitar la cesantía del agente mediante la disposición también citada (fs. 1/17).-

Al tiempo de suceder los hechos regía el Estatuto aprobado por decreto nº 33.824/44, derogado en parte por el decreto ley nº 10.126/45. Cabe señalar con respecto al art. 38 que estatuye en materia de suspensiones preventivas dispuestas en causas administrativas o con motivo de causas criminales, que esta Procuración en dictamen de fecha 8 de junio del corriente año (Expte. nº 322-58 Mº de Obras y Servicios Públicos) admitió en los siguientes términos, que dicho artículo se encontraba derogado, debiendo aplicarse el decreto del 16 de enero de 1913: "Al tiempo de ser suspendido el recurrente regía el "decreto nº 33.827/44, cuyo artículo 38 le reconocía el dere-"cho a percibir los haberes durante el lapso de suspensión".-

"Pero es el caso de advertir que el Poder Ejecutivo, con "motivo de una consulta formulada por la Dirección General Im"positiva de la Secretaría de Estado de Hacienda para resol-"ver varios casos particulares, dictó en el expediente número "25.886/50, el decreto nº 25.584/50, mediante el cual, por "considerar que el decreto nº 10.126/45 ratificado por ley nº "13.895 había derogado el art. 38 del decreto nº 33.827/44, re"vocó por razones de legalidad todos los decretos y resolucio"nes dictados reconociendo derechos a percibir haberes funda"dos en esta norma".-

"Es evidente que el decreto nº 25.584, por su redacción "y contenido, tiene el carácter de instrucciones expedidas - "por el Poder Ejecutivo para la aplicación y ejecución de - "sus propios reglamentos, de modo que corresponde su acata - "miento".-

"En la parte dispositiva de este decreto, se establece "que los reclamos de los interesados que se denegaron por es "timarse derogado el art. 38 del decreto 33.827/44, debían - "ser nuevamente estudiados de conformidad con el régimen que "se menciona en el considerando 6º de aquel decreto".-

"Allí se hace referencia al régimen del decreto del 16 "de enero de 1913, que de tal modo se estimó vigente".-

"Por consiguiente, cabe concluir que, en la materia, ha "de considerarse que el art. 38 del decreto nº 33.827/44 - "fué derogado por el que lleva el nº 10.126/45 ratificado - "por ley 13.895, y que para esas situaciones rigen las dispo "siciones pertinentes del decreto del 16 de enero de 1913, - "las que por tanto deben aplicarse para resolver el caso a "estudio".-

Con respecto a la suspensión aplicada al recurrente, la que evidentemente tuvo el carácter de preventiva o proviso - ria, pues se declaró sujeta a la dilucidación de la situación de aquél, estimo que la Administración, no existiendo norma prohibitiva, tiene facultad innegable de hacerlo en "defensa del decoro y prestigio de la función, cuando el agente está sometido a proceso criminal por hechos ajenos al servicio. Es de advertir que el Estatuto vigente impone obligatoriamente la suspensión (art. 39 de su reglamentación).-

El Estatuto vigente cuando sucedieron los hechos, facultaba en su art. 36 a los Jefes de oficina a suspender provisionalmente a sus empleados cuando la falta apareciese manifiesta y las necesidades del servicio la impusieren, en cuyo caso debía dar cuenta de inmediato al superior.-

En el caso a estudio se ha comprobado la suspensión y su causa, y si bien es cierto que la comunicación al superior - no está acreditada en igual forma, ella resulta probada porque en la disposición que la aplicó se invoca la orden de la superioridad (fs. 66) y al poco tiempo esa superioridad, en

consonancia con su proceder, dispuso solicitar la cesantía del agente, la que a mi juicio se justificaba plenamente por la inmoralidad de los hechos de que fué autor el empleado suspendido.-

Entiendo por tanto que la suspensión preventiva aplicada al recurrente fué en uso de facultades indiscutibles de la Administración y conforme al procedimiento vigente en su oportunidad.-

IV.- Corresponde, por tanto, establecer si el recurrente, por haberse dispuesto el levantamiento de dicha suspensión, tiene derecho a percibir haberes durante el lapso que la misma duró, no obstante no haber prestado servicios.-

Para ello debe tenerse en cuenta que la suspensión fué aplicada por autoridad que tenía competencia al efecto, en resguardo del decoro y prestigio de la función, por hechos ajenos al servicio cuyo juzgamiento terminó con la condena del procesado por autoridad competente (Ley 5680 Pcia. de Buenos Aires).-

Según se vió en el punto III, para determinar el derecho a percibir haberes, corresponde aplicar el decreto del 16 de enero de 1913. Sin entrar a considerar si las suspensiones que autoriza el art. 19 de este decreto en sus incs. 1º y 2º deben dictarse en sumario administrativo y/o cuando se trate de esclarecer hechos relacionados exclusivamente con el servicio, lo cierto es que en cualquier hipótesis, el art. 22 de dicho decreto exige como condición necesaria para que surja el derecho del agente a percibir haberes durante el lapso de suspensión, que se compruebe su inocencia, requisito también exigido por el apartado I del art. 39 de la reglamentación del Estatuto Decreto-Ley 6666/57, que no se cumple en este caso.-

Por tanto, no existiendo norma que establezca ese derecho entiendo que no hay lugar al pago de haberes, por cuanto no habiendo servicio prestado la remuneración no corresponde.-

V.- Por lo expuesto, compartiendo el criterio sustentado en el caso por el Tribunal de Cuentas de la Nación, opino que

no procede abonar al señor Alfredo Abraham José haberes por el período durante el cual no hubo prestación de servicios.-

Julio 23 de 1959.-

Fdo. ALEJANDRO R. AHUMADA
Sub-Procurador del Tesoro de la Nación

Boletín Nº 939.-

ESTATUTO DEL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL -(art. 19) CESANTIA - ESTABILIDAD

1.- El recurso que autoriza el art. 24 del decreto - ley 6666/57 (') se circunscribe a los casos de cesantía o exoneración dispuestas como sanción disciplinaria.

2.- El art. 19 del decreto-ley 6666/57 es claro en cuanto asegura la estabilidad de los empleados públicos mientras no hayan transcurrido dos años desde que aparecen cumplidos los requisitos para la jubilación ordinaria sin que pueda hablerse de irretroactividad, toda vez que no se priva a los recurrentes de derecho alguno establecido por una ley anterior.

3.- La nueva garantía a la estabilidad del empleado público incluída por la Convención de Santa Fe de 1957, en la Constitución nacional, como todas las demás,no es absoluta, pudiendo ser reglamentada en forma razonable y acorde con su espíritu, por lo que no cabe sostener que haya derogado el art. 19 del decreto-ley 6666/57 o, que por lo menos, le haya hecho perder validez y es evidente que esta disposición se ajusta a esas exigencias, toda vez que respeta la estabilidad hasta que hayan pasado dos años desde que los empleados estuvieran en condiciones de obtener la jubilación ordinaria, o sea, hasta que su cesación no les cause perjuicio grave con lo que a la vez se contemplan sus justos intereses y el derecho de la Administración a seleccionar las personas que

(') Ver Digesto Administrativo nº 254.-

han de servirla.

4.- Es legal la resolución de la Dir. Nac. de Vialidad Nacional que por aplicación del art. 19 del decreto - - ley 6666/57 dió por terminados los servicios de em- - pleados que tenían la edad y la antigüedad necesarias para obtener la jubilación ordinaria desde dos años antes, por lo menos.

CNFed. Capital, Sala en lo Contencioso-Administrativo, setiembre 11-958 - Garzón, Félix T.M. y otros.

2a. Instancia. - Buenos Aires, setiembre 11 de 1958.-

CONSIDERANDO:

Que varios agentes de la Dir. Nac. de Vialidad Nacional recurren de hecho contra dos resoluciones de esa repartición. Por la primera se dió "por terminado su cometido considerando que a la fecha (de su emisión) se encontraban en condiciones de obtener los beneficios de la jubilación". Por la segunda -dicen- les fué rechazado el recurso que interpusieron ante esta cámara.

Que como afirma el fiscal de cámara en su dictamen de fs. 27, el recurso que autoriza el art. 24 del decreto - ley 6666/57 se circunscribe a los casos de cesantía o exoneración dispuestas como sanción disciplinaria. En el caso a estudio, la Dir. Nac. de Vialidad no ha pretendido hacer uso de sus facultades disciplinarias, sino que ha entendido estar autorizada para dar por terminados los contratos de empleo de los recurrentes, en atención a que los mismos se hallaban en la situación prevista por el - art. 19 del estatuto del personal civil de la Administración pública nacional (decreto-ley 6666/57), es decir, tenían la edad y la antigüedad necesarias para obtener jubilación ordinaria desde 2 años antes, por lo menos.

Que, por ello, para que procediese el recurso intenta

do se debió haber demostrado que la razón invocada no era exacta y que, por lo tanto, la limitación de los servicios impuesta importaba, en los hechos, una cesantía sin sumario previo.

Que con ese objeto se sostiene por los recurrentes que el art. 19 del estatuto, en cuanto dispone que, "el personal no podrá ser obligado a jubilarse hasta transcurridos dos años de haber cumplido los extremos necesarios para obtener su jubilación ordinaria, no tiene carácter retroactivo y, en consecuencia, el plazo referido debe contarse a partir de la entrada en vigencia de dicho estatuto. De aceptarse la interpretación hecha por la Dir. de Vialidad -prosigue- debe interpretarse que el art. 19 ha quedado derogado por la inclusión de la garantía de la estabilidad del empleado público en la Constitución nacional o, en todo caso, que es inconstitucional por oponerse a esa garantía.

Que, a juicio del tribunal, el art. 19 es claro en cuanto asegura la estabilidad de los empleados públicos mientras no hayan transcurrido dos años desde que aparecen cumplidos los requisitos para la jubilación ordinaria sin que pueda hablarse de irretroactividad, toda vez que no se priva a los recurrentes de derecho alguno establecido por una ley anterior, como se dice acertadamente a fs. 160.

Que en cuanto a la nueva garantía incluída por la Convención de Santa Fe de 1957, no cabe sostener que haya derogado el art. 19, o que por lo menos le haya hecho perder validez, ya que dicha garantía, como todas las demás de la Constitución, no es absoluta pudiendo ser reglamentada en forma razonable y acorde con su espíritu (art. 28, Constitución nacional).

Que parece evidente que la disposición del art. 19 se ajusta a esas exigencias, toda vez que respeta la estabilidad de los empleados hasta que hayan pasado dos a-

ños desde que estuvieran en condiciones de obtener jubilación ordinaria, o sea, hasta que su cesación en las funciones no les signifique un perjuicio grave, con lo que a la vez se contemplan sus justos intereses y el derecho de la administración a seleccionar las personas que han de servirlo.

Que, por lo tanto, no pudiendo considerarse que las resoluciones impugnadas por la Dir. Nac. de Vialidad sean ilegales, es de aplicación lo dispuesto por el art. 24 del estatuto, de acuerdo con el cual la queja precedente debe ser desestimada. Así se resuelve.

El doctor Heredia no suscribe la presente, en razón de hallarse en uso de licencia (art. 109, reglamento para la justicia nacional).

JUAN C. BECCAR VARELA
ADOLFO R. GABRIELLI.

Rev. LA LEY del 4/12/58 - pág. 6.-

CONTRATACIONES - MULTAS

1.- No es lo mismo pactar directamente un interés punitorio del 52% anual, que decir que por cada semana de retardo se pagará multa del 1%, ya que es inadmisible que un proveedor -en el caso, por un contrato de suministro al Estado-, retrase sus compromisos - en forma de elevar así esta última, que no recae sobre el monto de la operación, sino sobre la parte - no suministrada en tiempo.-

2.- La cláusula penal, además de la finalidad de fijar contractualmente el monto de los daños y perjuicios tiene la de constituir para el acreedor un medio - más para asegurar el cumplimiento por el deudor de sus obligaciones.-

3.- No es ilícita la contratación de una multa, si el contrato se refiere al suministro de víveres para enfermos internados en una institución del Estado , el cual tenía sumo interés en su entrega puntual.-

CN FED.CAPITAL, SALA EN LO CIVIL Y COM., julio 30-958.-
Gobierno nacional c. Jolodovsky e Hijo (Soc. de Resp.Ltda)

la. Instancia.- Buenos Aires, septiembre 26 de 1955.-
El Gobierno nacional pide se condene a Jolodovsky e Hijo (Soc. de Resp. Ltda.) a pagarle $ 8.654,68 con intereses y costas, fundada en los siguientes hechos: dice que

a raíz de un contrato de suministro celebrado con la demandada y en virtud de las demoras en que ésta incurrió, de conformidad al pliego de condiciones, se le aplicó una multa por la suma que reclama. Acompaña las respectivas actuaciones administrativas.-

La demandada compareció a autos pero perdió el derecho de contestar la demanda por haberlo hecho fuera del plazo de la ley.-

CONSIDERANDO:

1° - No se discute la existencia de un contrato de suministro entre la actora y la empresa demandada, consistente en proveer al Centro Tisiológico de Villaguay (Prov. de Entre Ríos) las mercaderías que se detallan en la orden núm. 1108 que figura a fs. 5 de las actuaciones administrativas glosadas en los autos, tampoco se halla en debate el cumplimiento de dicho contrato ni que las entregas se produjeron con retardo. La demandada, empero, ha tratado de probar que tal hecho obedeció a fuerza mayor, debido a las dificultades en que se halló para embarcar los suministros en los vagones de ferrocarril, dado que no era factible hacerlo sino con considerables retrasos. Alega también que ningún perjuicio sufrió la repartición administrativa a la que estaban destinados los embarques, pues tratándose de dulces, mercadería perecedera, no era posible enviarlos sino en forma paulatina, en la medida de su consumo, para evitar que quedaran fuera de uso.-

Las defensas que en su alegato esgrime la firma Jolodovsky, en cuanto no sean relevables de oficio por estar interesado el orden público, no son atendibles pues debieron articularse en plazo, al tiempo de la traba de la litis, situación que no se produjo por culpa propia de la demandada que dejó correr el plazo de traslado sin presen-

tar el escrito de responde.-

Es indudable que la defensa de fuerza mayor en la que pretende la demandada fundamentarla, mora en que incurrió en el cumplimiento de sus obligaciones no es de orden público y, por ende, el suscripto no puede tomarla en consideración ya que con ello alteraría la situación de igualdad que debe presidir en todo proceso (art. 13, ley 50.- Y tan no es relevable de oficio que el art. 513 del Cód. Civil, prevé la posibilidad de que el mismo deudor se comprometa a responder por el caso fortuito o la fuerza mayor,lo que significa que la exoneración prevista en la primera parte de dicha disposición legal es renunciable y, por ende, no se halla incurso en el art. 21.-

Sin duda que la pérdida del derecho de contestar la demanda no puede significar lisa y llanamente la condena del demandado, pero cuando, como ocurre en el caso, se limita la prueba de éste a defensas que no excluyen los hechos fundamentales de la acción deducida, sino que se trata de acreditar un hecho impeditivo que sirve de justificación a la mora incurrida, se está en presencia de la prueba de una defensa cuya articulación debió efectuarse en la etapa procesal adecuada. Jolodovsky admite la mora en el cumplimiento; tampoco niega la existencia de la cláusula penal; no objeta el monto a que asciende la multa incurrida. Se limita a tratar de probar que la mora se produjo por fuerza mayor y luego en su alegato ataca la validez de dicha cláusula en virtud de tratarse de un contrato de adhesión, de haberle sido impuesta la asistencia a la licitación por ser obligatoria la inscripción en el registro de proveedores estatales y la concurrencia a los llamados respectivos,que la actora no sufrió daño alguno por la demora. Finalmente, alega que la pena o multa es exagerada.Salvo esta última cuestión que suscita en su alegato, las demás defensas no pueden ser oídas por la razón expuesta párrafos arriba.-

Empero aun considerando la de fuerza mayor cabe señalar que conforme se desprende de las declaraciones de Etlis , desde 1948 fué difícil hallar vagones. Horowicz, manifiesta que desde 1950 en adelante el transporte se hacía con mucho atraso. Tagliani, dice que en 1951 se conseguían vagones en el Ferrocarril Gral. Urquiza con muchas dificultades. Y la orden de provisión número 1108 tiene fecha del 31 de agosto de 1951, o sea que al tiempo de presentarse a la licitación en el mes de abril, o bien al de celebrarse el contrato la firma demandada debía saber ya, qué dificultades iba a hallar para efectuar los envíos y sin embargo, no hizo gestión alguna para evitar la aplicación del art. 19 del pliego de condiciones. Y no se dijo que la demandada debía aceptar a pie juntillas todas las cláusulas del pliego de la licitación ya que la resolución núm. 277 del 19 de marzo de 1951 (I. y C.) (Anales de Leg. Argentina, XI-A, ps. 657 y 658), si bien considera la falta de concurrencia a una licitación pública o privada de las personas que enuncia en su art. 1º y que tuviesen en su poder mercaderías disponibles de las solicitadas, como una restricción de la oferta y encuadrada en el art. 6º de la ley número 12.830, ello no significa que la repartición administrativa pertinente puede imponer al proveedor cualquier cláusula que en definitiva éste no pueda cumplir. A lo imposible nadie está obligado y no hay duda que si Jolodovsky consintió en efectuar las entregas en los plazos fijados en el art. 19 del citado pliego, aun sabiendo que existían dificultades para hallar vagones que condujeran la mercadería a destino, lo hizo por su cuenta y riesgo, ya que no existía disposición legal alguna que le impidiera discutir el alcance de esos plazos, en presencia de la situación que atravesaba el transporte.-

Lo que ha pasado en realidad no halla justificativo jurídico alguno por cuanto el álea de los contratos debe pe

sar sobre las partes (arts. 1197 y 1198, Cód.Civil) y, por ende, la falta de previsión de una de ellas al concertarlos no puede servir de excusa al incumplimiento o a la mora en el cumplimiento de las obligaciones a su cargo.Ni tampoco es posible argüir que ha habido abuso de derecho, ejercicio antifuncional del mismo (art. 35, Constitución nacional, atento a que no resulta justificado que un comerciante o un industrial haya pactado la entrega o envíos de las remesas en determinados plazos, a sabiendas de las dificultades que iba a encontrar para su transporte.-

Añádese a ello que el art. 654 del Cód. Civil impone la pena estipulada cuando el deudor no ha cumplido la obligación en el tiempo convenido, aunque por justas causas no hubiese podido verificarlo. Si bien ese artículo no puede interpretarse en el sentido de que pone a cargo del deudor la fuerza mayor o el caso fortuito, es evidente que como enseña Salvat ("Obligaciones", t.1, Buenos Aires, 1946, núm. 221, p. 125), "la frase final del art.654 sólo tiene el alcance de imponer al deudor una responsabilidad más severa y estricta, y hacerlo responsable de la inejecución o retardo en el cumplimiento de la obligación aún cuando él pudiera alegar, para justificar su conducta razones más o menos excusables ..." Señala Colmo ("Obligaciones", Buenos Aires, 1944, núm. 180, p. 140), que "habrá que referirse ..., no a lo extraordinario y objetivo del caso fortuito, sino a lo ordinario y subjetivo de las dificultades y obstáculos en que el deudor se haya encontrado para cumplir el tiempo". Por lo demás como indica este autor, si los tribunales admiten la excepción de caso fortuito, exigen que se lo acredite plenamente. Y en autos ni ha ocurrido esto último, ni tampoco ha justificado el demandado que los atrasos producidos en el transporte reunieran siquiera la apariencia de caso fortuito o fuerza mayor, atento a que como ya se ha dicho, pudo pre

ver perfectamente esa situación, que imperaba al tiempo de celebrarse el contrato, no obstante lo cual admitió la cláusula que le imponía ciertos plazos para la entrega y envío de la mercadería.-

2º - Siempre a mayor abundamiento, en virtud de que la demandada no ha interpuesto la pertinente defensa, cabe señalar que no es menester justificar daño alguno para que la cláusula penal sea aplicable, conforme lo establece en forma expresa el art. 656 del Cód. Civil.-

3º - En cuanto a que la misma resulte ilícita por su desproporción, lo que haría jugar los artículos 502,953 y correlativos del Cód. Civil, aplicables aún de oficio (art. 21), es de tener en cuenta que pactado el 1% mensual del valor de los elementos no entregados en plazo, representa el 12% anual y, por ende, dentro de lo lícito y normal. No se trata de un monto exagerado, único que justificaría la reducción del mismo. No hay pues, motivo alguno para atender en este sentido la queja que formula la demandada en su alegato.-

4º - Corresponde, en consecuencia, hacer lugar a la demanda con intereses y costas.-

Por ello y en virtud de lo dispuesto en los arts. 1197 1198, 654, 656 y correlativos del Cód. Civil, y 13 de la ley 50, fallo haciendo lugar a la demanda y condeno a Jolodovsky e Hijo (Soc. de Resp. Ltda.) a pagar al Fisco nacional $ 8.654,68, con intereses desde la notificación de la demanda y las costas del juicio.-

JOSE C. SARTORIO.
(Sec.: Carlos E. Ambrosioni).

2a. Instancia.- Buenos Aires, julio 30 de 1958.-
El doctor Bidau dijo:
La pretensión del demandado de que se lo exima de cum

plir la cláusula penal pactada se funda, en primer término en que el cumplimiento tardío de parte de sus obligaciones se debió a la escasez de vagones y dificultades en el tráfico ferroviario; pero eso no puede ser fuerza mayor, no solamente porque esas dificultades eran previsibles en el momento de contratar, sino también porque en ninguna parte del contrato se estipuló que el transporte se hiciera en ferrocarril.-

Agrega la misma parte que la cláusula penal no es válida porque se vió obligada a entrar en la respectiva licitación a raíz de la resolución núm. 277 del Ministerio de Comercio del 19 de marzo de 1951, que obligaba a todo proveedor a presentarse a las licitaciones públicas. Dice que, como consecuencia de ello, su consentimiento estaba viciado, pero ello hubiera, en todo caso, permitido al actor pedir la anulación del acto, cosa que no puede pretender ahora, puesto que lo cumplió, o sea que lo confirmó tácitamente (art. 1063, Cód. Civil) y, por supuesto, no puede pretender la nulidad parcial circunscripta a la cláusula penal, porque, como ocurre en general en los contratos, al ser entre sí interdependientes sus distintas cláusulas, no son separables y, por tanto, no cabe aceptar dicha nulidad parcial (art. 1039, mismo código). Por otra parte, es indudable que la obligación de concurrir a la licitación no impedía al demandado oponerse a exigencias de imposible cumplimiento.-

Por último, sostiene que la cláusula penal cuestionada es ilícita, por excesiva, desde que, al imponer una multa del 1% sobre la parte de la mercadería no entregada en tiempo por cada semana de retardo (no cada mes, como erróneamente dice el a quo), significaría un interés del 52% anual. Pero es que no puede argumentarse eficazmente en esa forma, puesto que no es lo mismo pactar directamente un interés punitorio del 52% anual, que decir que por cada se

mana de retardo se pagará la citada multa, ya que es inadmisible que un proveedor retrase sus compromisos en forma de elevar así esta última que, como he dicho no recae sobre el monto de la operación, sino sólo sobre la parte no suministrada en tiempo. No debe perderse de vista que la cláusula penal, además de la finalidad de fijar contractualmente el monto de los daños y perjuicios, tiene la de constituir para el acreedor un medio más para asegurar el cumplimiento por el deudor de sus obligaciones y, entonces, no veo porqué ha de ser ilícita la contratación de una multa en un caso como el de autos, en que el contrato se refiere al suministro de víveres para enfermos internados en una institución del Estado, el cual tenía entonces sumo interés en su puntual entrega. Para mí, en tales circunstancias, la cláusula es perfectamente admisible. Por ello, voto por la confirmación, con costas de la sentencia apelada.-

Los doctores Ortiz Basualdo y Vocos adhirieron al voto que antecede.-

Conforme al acuerdo precedente, se confirma la sentencia en todas sus partes. Las costas de esta instancia, también a cargo de la demandada.-

FRANCISCO J. VOCOS - EDUARDO A. ORTIZ BASUALDO - JOSE F. BIDAU.-

Rev. LA LEY del 5/12/58 - págs. 3 y 4.-

Poder Ejecutivo Nacional
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín nº 941.

EMPRESAS DEL ESTADO - PERSONAL

1.- Si la demandada es una entidad autárquica nacional, que tiene a su cargo la prestación de diversos servicios públicos y se halla sometida al régimen legal de las empresas del Estado, ello basta para hacer surtir la competencia de la justicia federal y atribuirle el conocimiento en el caso de demanda - por pago de indemnización a sus empleados.-

2.- Cuando la demanda deriva de la relación de empleo - público que vincula al demandante con la Nación y éste es funcionario sujeto al régimen de incompatibilidades, responsabilidad, normas de la ley de contabilidad y restricciones legales el funcionario se encuentra en la esfera federal en caso de contienda.

3.- Procede el fuero federal si la demandada es parte - como poder público en razón de que la contienda versa sobre derechos que se dicen emergentes de una relación jurídica de empleo público.-

4.- La jurisdicción federal constituye un privilegio específico e indesconocible, al que debe desestimársele afectado cuando media pronunciamiento denegatorio de la competencia especial designada por la ley.

CS, noviembre 14-958.- Yofre, Felipe A.c. Empresa Nacional de Telecomunicaciones.-

Opinión del procurador general de la Nación.-

La formalidad prevista por el art. 113 del reglamento para la justicia nacional ha sido substituída por el recurso que establece el art. 28 del decreto-ley 1285/58 - (ADLA, del 14 de marzo de 1958. Bol. nº 2, p. 11).-

En lo demás, la decisión apelada no comporta denegatoria de fuero federal dado el carácter igualmente nacional de todos los jueces de la Capital.-

El recurso extraordinario es, por tanto, improcedente y así corresponde declararlo.- Junio 2 de 1958.-

Ramón Lascano.-

Buenos Aires, noviembre 14 de 1958.-

CONSIDERANDO:

Que, invocando su calidad de ex-vocal del Consejo de administración de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, el actor demandó la suma de $ 36.960 que, según pretende, le es adeudada por dicha empresa, de acuerdo con la resolución que ella dictara el 22 de noviembre de - 1956 asignando "a los señores miembros del Consejo que residen en el interior, una compensación de $ 180 diarios por cada día de permanencia en la Capital Federal, tomando a su cargo la empresa los gastos de traslado a la Capital y regreso a su domicilio". Habiéndose radicado la demanda ante el juez a cargo del juzgado nacional de la. instancia en lo civil núm. 17 de esta Capital, el representante de la accionada sostuvo la incompetencia - de ese magistrado para entender en la causa e interpuso la excepción pertinente, que fundó en lo dispuesto por las leyes 48 (ADLA, 1852-1880, p. 364, con nota) (art.2º inc. 6º); 13.998 (ADLA, X-A, p. 221) (art. 41) y 13.653

(ADLA, IX-A, p. 353), con arreglo a las cuales reclamó la protección del fuero federal, aduciendo a tal efecto que su representada es "una entidad que forma parte del Gobierno - de la Nación". El juez de la. instancia y el tribunal a quo desestimaron la excepción y, consecuentemente , denegaron - el fuero federal, con el argumento de que la Empresa Nacional de Telecomunicaciones no es el Estado nacional, sino - una empresa descentralizada y sujeta al derecho privado en todo lo atinente al cumplimiento de su objeto específico.- Contra este pronunciamiento se interpuso recurso extraordinario, que fué concedido por la Cámara Nacional de Apela - ción Civil.-

Que el recurso es procedente conforme a lo preceptuado - por el art. 14 de la ley 48 y, en virtud de ello, corresponde desechar las observaciones que el actor formula sobre el punto. Tal decisión se impone debido a que la apelación extraordinaria de fs. 39, ha sido deducida con base en disposiciones nacionales y contra sentencia denegatoria del fuero federal, oportunamente invocado por el recurrente.-

Que la demandada es una entidad autárquica nacional, que tiene a su cargo la prestación de diversos servicios públicos y se halla sometida al régimen legal de las empresas - del Estado (decreto 310/56 (ADLA, XVI-A, p. 102); leyes - 13.653 y 14.380 (ADLA, XIV-A, p. 185), t. o. por el decreto 4053/55 (ADLA, XV-A, p. 99), decreto reglamentario 5883-55, (ADLA, XV-A, p. 147). De conformidad con la constante jurisprudencia del tribunal, ello es bastante para hacer surtir la competencia de la justicia federal y atribuirle el conocimiento de la presente causa (Fallos, t. 239, p. 196; y además: Fallos, t. 233, p. 191; t. 238, ps. 226 y 385; t.240 p.22.-

Que las consideraciones expuestas por el procurador general, en el sentido de que el fallo apelado no comporta denegatoria del fuero federal, "dado el carácter igualmente na

cional de todos los jueces de la Capital", no resultan - admisibles, habida cuenta de las particularidades del caso.-

Que, en efecto, la demanda interpuesta deriva de la relación de empleo público que, desde el 1º de abril de 1956 al 12 de marzo de 1957, vinculó a la Nación con el actor. El carácter de funcionario público investido por éste, surge, con plena certeza, de las pertinentes disposiciones legales y, en especial, de las que reglan: a)la designación de los miembros del Consejo de administración de la empresa; b) la responsabilidad que incumbe a sus "autoridades"; c) el régimen de incompatibilidades a que se encuentran sujetas; d) el sometimiento de esas - "autoridades" a las previsiones de la ley 12.961 (ADLA, VII, p. 217) y a las normas establecidas por la Contaduría General de la Nación; e) las restricciones impuestas al "funcionario" de la empresa respecto de las operaciones en que tenga intereses contrarios a los de la entidad (arts. 5º, 9º y 14, inc. c) del estatuto aprobado - por el decreto 310/56; arts. 2º, inc. 6º; 17, 18, párrafo 2º y 19º, decreto 5883/55).-

Que, en consecuencia, debe hacerse extensiva al sub lite la doctrina declarada por esta Corte, con fecha 8 de agosto del corriente año, en el caso "Fasola Castaño, Marcos F.M. c. Obra Social del Poder Judicial". Téngase presente, en efecto, que la sentencia recurrida es contraria al derecho federal invocado en autos y que la demandada es parte como poder público, en razón de que la contienda versa sobre derechos que se dicen emergentes de una relación jurídica de empleo público. De ello se sigue que la jurisdicción federal constituye un privilegio específico e indesconocible, al que debe estimárselo afectado cuando media pronunciamiento denegatorio de la competencia especial designada por la ley. Por tal moti-

vo, el principio a que se refiere el procurador general es inaplicable en la especie.-

Por ello, habiendo dictaminado el procurador general, se revoca la sentencia apelada y, de acuerdo con el art. 16º, 2a. parte de la ley 48, por no ser necesaria más sustanciación, se declara que el juez a cargo del juzgado nacional de la. instancia civil número 17 de esta Capital - es incompetente para conocer de la presente causa.-

BENJAMIN VILLEGAS BASAVILBASO.-
ARISTOBULO D. ARAOZ de LAMADRID
LUIS M. BOFFI BOGGERO. JULIO - OYHANARTE.-

Rev. LA LEY del 2-4-959 - págs. 1 y 2.-

Poder Ejecutivo Nacional
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº 942.-

JUBILACIONES - COMPUTO DE SERVICIOS - SERVICIOS HONORARIOS - SERVICIOS DE MENORES

1.- Los servicios "ad honorem" prestados con anterioridad a los 18 años de edad, no son computables dentro del régimen de la ley 4349.
2.- El concepto de la jubilación como derecho creditorio, fundado en la copropiedad del afiliado sobre los bienes que ingresaron a la Caja (ley 4349) ha sido sustituído, a través de la doctrina, legislación y jurisprudencia, por el de derecho a la protección social, reputándose que la obligación de aportar impuesta por la ley, lo es en razón del empleo detentado, con prescindencia del derecho reconocido a un beneficio previsional (Voto del doctor Videla Morón).

CNTrab., EN PLENO, setiembre 26-958. - Miranda, Pedro I.

Buenos Aires, setiembre 26 de 1958 - Cuestión:

"Son computables o no, dentro del régimen de la ley 4349, los servicios "ad honorem" prestados cuando aún no tenía 18 años de edad el recurrente?".

El doctor Sureda Graells dijo:

Respecto a la cuestión materia de convocatoria a tribunal plenario, voy a mantener la opinión que emitiera en el caso "Sarrabayrousse Varangot, José M." y la doctrina que posteriormente sentara la Corte Sup. de Justicia de la Nación en el citado caso, según sentencia publicada en Fallos de ese alto tribunal, t. 230, p. 497, reforzándola con otros argumentos que me ha sugerido el conocimiento de otras opiniones en contrario.

El art. 26 de la ley 4349 dispone, que no se computarán servicios prestados antes de la edad de 18 años, salvo para los que desde su incorporación hubieren sufrido el descuento a que se refiere el inc. 1º del art. 4º, en sus sueldos.

La norma, como surge de su simple lectura, establece un principio general, en el sentido de la no computabilidad de servicios prestados con anterioridad a la edad de 18 años, más, tal principio, no funciona con carácter absoluto, desde que, reconoce una excepción, en favor de los agentes de la Administración pública, que no obstante no contar con aquella edad, hubieren ingresado como empleados y se les hubiere efectuado los respectivos descuentos en sus sueldos en concepto de aportes. La inclusión al régimen de la ley 4349, por vía de excepción, se produjo, entonces, por el hecho de haber aportado a la Caja, sin tenerse en cuenta la edad del empleado, dado que malgrado la circunstancia de no contar con 18 años, la computación de servicios se hacía viable, en razón de haber contribuído al fondo de la Caja, efectuando los respectivos aportes.

Posteriormente se sanciona la ley 11.027 (previsión social: recopilación de leyes, decretos, ordenanzas, resoluciones, etc. Publicación oficial de la Cám. de Diputados de la Nación, t. 2, apéndice, p. 1665) y por intermedio del art. 21 se dispuso, que la Caja Nac. de Jubilaciones y Pensiones Civiles formularía cargo, sin interés, a los empleados, jubilados y pensionistas, por el importe del 5% de los sueldos no descontados, en cualquier época de la prestación de servicios, con excepción de los jubilados por ley 1909, prohibiéndose desde la vigencia de la ley, la computación de servicios, sobre cuya asignación no se hubiere efectuado el descuento del 5% o formulado el cargo que correspondiere. Sigue así privando el crite-

rio de la computación de servicios, en orden del factor aportes, diluyéndose el factor edad, toda vez, que la ley aludía a la falta de aportes por servicios prestados en cualquier época y no con posterioridad a los 18 años.

Dijo la Corte Suprema en el referido caso aludiendo a la norma antes mencionada, que "el mandato no se refirió a los aportes que se hubieren debido efectuar, pues para eso, no era necesario un mandato especial de la ley, sino a los que hubieren podido omitirse sin incumplimiento legal. El descuento debió, pues, hacerse también sobre el importe de los sueldos percibidos por servidores de la Administración antes de cumplir 18 años. Con ello estos vinieron a quedar comprendidos en el principio precedentemente enunciado, a que responde la excepción del art. 26 de la ley 4349.

Vale decir, que los empleados públicos con edad inferior a 18 años, que en virtud del principio excepcional consignado en el art. 26 de la ley 4349, podían computar sus servicios, a condición de que hubieren efectuado aportes, igualmente podían hacerlo a partir de la ley - 11.027, cuando hubieren omitido la contribución, con tal que se les formulara cargo, sin interés, quedando descartada dicha computación para lo sucesivo, en el caso de - que no se les descontara de sus asignaciones el aporte - respectivo. Puede así apreciarse que la inclusión excepcional que en un principio dispuso el art. 26, se extendió después, por medio de la ley 11.027, aun para los - que hasta entonces, no habrían sufrido descuentos en concepto de aportes.

Claro está, que de acuerdo a los textos legales invocados, la computación de servicios, sólo era factible en favor de los agentes rentados de la Administración pública, toda vez, que los descuentos o cargos a formularse, debían hacerse en base a las remuneraciones asignadas - por presupuesto, lo que indudablemente, determinaba la

exclusión de los que habían prestado servicios con carácter honorario, pero, así como mediante la ley 11.027, se extendió los beneficios a los servidores del Estado, que no habían sufrido descuentos de aportes en sus sueldos, una ley posterior, la 14.069, en su art. 9º declaró computables para todos los efectos de la ley 4349 y sus complementarias, los servicios de carácter honorario prestados a la Nación o en organismos directamente vinculados a las ramas de los poderes públicos nacionales.

Desde que dicha norma, no hacía distingos de ninguna naturaleza, con relación a determinados servicios o personas y el reconocimiento se efectuaba para "todos los efectos de la ley 4349", no resulta dudoso concluir, que también involucraba servicios prestados en carácter honorario, con anterioridad a los 18 años de edad.

Observamos así, que el primitivo texto del art. 26 de la ley 4349, en cuanto al principio general sentado en su primera parte, fué cediendo en su rigorismo, desde que, lo que en un comienzo constituyó una prohibición, casi absoluta, fué atemperándose, no sólo por la primer excepción que contenía la norma, sino también por la posterior extensión que le otorgó el art. 21 de la ley 11.027, a punto tal, que los servicios rentados prestados en tiempo inferior a la edad de 18 años, se declararon computables, aun en el supuesto de no haberse efectuado aportes, pensándose en una posterior etapa, que también debieron serlo, los de carácter honorario, si es que no había razón, para excluírlos, por no haber contribuído al fondo de la Caja, ya que la edad no era factor gravitante de la desprotección legal, en ninguno de los casos.

Eso fué lo que consagró la ley 14.069, por medio de su art. 9º, el que, al igual que la ley 11.027 y a los efectos de no descapitalizar a la Caja, impuso la obligación del aporte, por los servicios prestados en carácter honorario, en cualquier tiempo, sobre la base de las remu

neraciones que hubiere devengado el empleado que a esa época se desempeñaba en iguales o similares condiciones, de acuerdo a las leyes respectivas.

En mi sentir, si debe tenerse por aceptado que la ley 14.069, no contenía una derogación expresa del art. 26 de la ley 4349, ello no puede ser óbice para tenerlo por tal, ya que, por el art. 17 del Cód. Civil, las leyes sólo pueden ser derogadas por otras leyes, no importando, que tal derogación pueda producirse por manifestación expresa, o bien, en forma tácita, cuando la nueva ley establezca un precepto que se le oponga a la anterior, tal, como a mi juicio, ha ocurrido con el art. 9º de la ley 14.069.

Los servicios honorarios reconocidos por esta ley, alcanzan a los prestados en cualquier tiempo y no a los que se hubieren desempeñado desde los 18 años en adelante, pues, si esa hubiera sido la intención del legislador, nada se oponía, a que así lo hubiera expresado en la ley. Al no haberse aclarado, ni discriminado, el principio elemental que gobierna el caso -"ubis lex non distingue, nec non distinguere debemus"- es aplicable en todo su contenido.

Se argumenta en contrario -dictamen del procurador general de la Nación en el caso referido- que la obligación impuesta por las leyes 11.027, 11.260 y 11.923, se refiere a los aportes cuyo pago hubiera correspondido en virtud de alguna disposición de la ley 4349, pero no puede extenderse a aquellos servicios por los que nunca correspondió efectuar aportes, por lo que, si dichas leyes no derogaron el art. 26 de la ley 4349, tampoco pudo hacerlo, sin duda el art. 9º de la ley 14.069, ya que éste al determinar la computación de los servicios honorarios, a todos los efectos de la ley 4349, no puede tener otro alcance que dar a dichos servicios el mismo valor que si hubiesen sido retribuídos, mas no concederle el -

privilegio de hacer computables tareas que no lo son, cuando dan lugar a remuneración, lo cual sería evidentemente absurdo.

Con todo el respeto que me merece tan autorizada opinión, considero que el argumento no es inconmovible. En efecto, no hay problema cuando se tratare de servicios rentados prestados con anterioridad a la edad de 18 años, toda vez, que la propia ley ordenó su computación, aun en el caso de no haberse efectuado aportes, pero es que precisamente, la ley 14.069 vino a colocar en un mismo pie de igualdad a los empleados honorarios con menos de aquella edad y que, por consiguiente, no habían contribuído al fondo de la Caja, es decir, que les asignó a tales servicios "el mismo valor que si hubiesen sido retribuídos", obligándolos a efectuar aportes en igual proporción a la que lo hacían los de igual o similar categoría. Salvado el obstáculo que significaba la omisión del pago de aportes, tal como se había salvado para los empleados rentados menores de 18 años, qué dificultad se oponía a la computación de esos servicios, con idéntica fuerza que a los empleados remunerados?...Evidentemente ninguna.

Si la edad no era óbice para la computación de servicios rentados, para quienes no habían sufrido descuentos por contribución de aportes, tampoco podía serlo, para el cómputo por servicios honorarios, si es que se les consideraba como retribuídos, a los efectos de imponer la obligación de ese aporte.

La ley 4349 pudo establecer el mínimo de edad, para quedar bajo el amparo de su régimen, mas, también pudo otra ley, no sólo extender los efectos de la excepción contenida en el art. 26 a otros supuestos, sino también derogar esta última disposición, incluyendo en aquel sistema, a los que hubieran prestado servicios de carácter honorario, con antelación a la edad de 18 años, máxime si se tiene en cuenta, que el art. 9º de la ley 14.069, no hizo

distingos, declarando por el contrario computables para todos los efectos de la ley 4349, los servicios honorarios, vale decir, computables para la obtención de cualquiera de los beneficios en ella reconocidos, sin el límite impuesto por el referido art. 26.

Por estas consideraciones es que mi opinión respecto a lo que ha sido materia de convocatoria a tribunal plenario es la siguiente: son computables dentro del régimen de la ley 4349, los servicios "ad honorem" prestados, cuando aún no tenía 18 años de edad el recurrente.

El doctor Videla Morón dijo:

La presente convocatoria a tribunal en pleno versa sobre lo siguiente: Son computables o no, dentro del régimen de la ley 4349, los servicios "ad honorem" prestados cuando aún no tenía 18 años de edad el recurrente?

La ley 2219, promulgada el 5 de diciembre de 1887, creó el primer régimen jubilatorio para los empleados permanentes de la Administración Genral de la Nación, directamente retribuídos por el Estado, disponiendo en su art. 24: "Mientras no hayan sido incluídas en el presupuesto general de gastos, las jubilaciones que se concedan de conformidad a la presente ley se pagarán de rentas generales y se imputarán a la misma".

Se trataba, por cierto, de un sistema previsional de tipo no contributivo. Este criterio perduró hasta la sanción de la ley 3976, promulgada el 28 de noviembre de 1900, correspondiente al presupuesto general de gastos de la Nación para el año 1901, en cuyo art. 7º, se dispuso: "Desde el 1º de enero de 1901, se deducirá el 5% del sueldo de todos los empleados de la Administración y de los jubilados, comprendiéndose los maestros y jubilados del Consejo Nacional de Educación. Mientras no se dicte la ley de montepío civil y no se reforme la 1909, se depositará en el Banco de la Nación el descuento que corresponde a los empleados civiles y jubilados de la Administra -

ción, y se agregará a sus fondos de jubilación el que corresponda a los empleados y jubilados del Consejo nacional".

Con esta disposición quedó establecida la obligatoriedad del aporte personal del afiliado, creándose, de esta manera, el fondo de recursos para responder al pago de los beneficios emergentes de la ley 2219.

La norma precedentemente transcripta fué reproducida, en su esencia, por los arts. 9º de la ley 4069; 11º de la 4160 y 7º de la 4302, correspondientes a los presupuestos generales de gastos para los años 1902, 1903 y 1904, respectivamente.

El 20 de setiembre de 1904 se promulgó la ley 4349 - siendo publicada el 27 de ese mismo mes y año, siendo ella la prometida ley de montepío civil. En el art. 1º, se disponía: "Créase una Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones para funcionarios, empleados y agentes civiles de que habla el art. 2º. Declárase que los fondos y rentas de esa Caja son de propiedad de las personas comprendidas en las disposiciones de la presente ley y que con ella se atenderá el pago de las jubilaciones concedidas en virtud de las leyes 1909, 2219 y 3744, y al de las jubilaciones y pensiones que en lo sucesivo se acuerdan en conformidad a la presente".

El espíritu informante de las leyes anteriores, evidentemente, habíase abandonado. La jubilación dejó de ser un derecho inherente a la función desempeñada, con prescindencia de toda otra consideración para transformarse - en un derecho creditorio, ejercitable contra un determinado instituto previsional, encargado de administrar un fondo de recursos afectado al cumplimiento de la ley. El derecho a la jubilación estaba, entonces, referido a la aportación hecha, a la circunstancia de ser copropietario de dicho fondo el afiliado, dado su carácter de contribuyente. La ley enumeraba expresamente a quiénes incluía y

sólo éstos podían sufrir descuentos.

Así, pues, la ley 4349 en su art. 2º, estableció la enumeración taxativa de las personas comprendidas en su ámbito de aplicación y en el art. 26, entre otros, dispuso la exclusión de aquéllas no contempladas por su régimen.

El aludido art. 26, dice: "No se computarán los servicios prestados -antes de la edad de 18 años, salvo para los que desde su incorporación al servicio con esa edad hayan sufrido descuentos del 5% en sus sueldos-".

Esta disposición contenía dos preceptos: una regla prohibitiva de carácter general y permanente, y una excepción a esa regla, de índole circuntancial y transitoria. La regla excluída del régimen a aquellos servicios prestados con anterioridad a los 18 años de edad: era la edad la causa determinante de la exclusión; la excepción, cuya interpretación debe hacerse con sentido rigorista, procuraba salvar el derecho ya adquirido de los contribuyentes al fondo de recurso de acuerdo a lo dispuesto por leyes anteriores, quienes habían sufrido descuentos y, por lo tanto, transferidos esos aportes a la Caja creada por la ley 4349, no podía oponérseles la norma prohibitiva.

La tesis favorable a la computación se apoya en el principio de existir una tácita derogación del art. 26 de la ley 4349, por haberse consagrado en leyes posteriores el derecho a la computación de servicios sobre cuyos sueldos no se hubieran practicado oportunamante los descuentos de ley, condicionando la computación a la formulación de cargos para la amortización de lo debido por ese concepto (arts. 21, ley 11.027; 20 de la ley 11.260 y 9º de la 11.923); más estas disposiciones se referían, indudablemente, a servicios comprendidos dentro del régimen, computables por estar incluídos en el sistema y no a los excluídos de él.

Así, pues, el art. 21 de la ley 11.027, decía: "La Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles formulará cargo, sin interés, a los empleados, jubilados y pensionistas, por el importe del 5% de los sueldos no descontados, en cualquier época de la prestación de servicios con excepción de los jubilados de la ley 1909. Dicho cargo será amortizado con el descuento del 3% del haber correspondiente. Desde la vigencia de este artículo no se computarán los servicios sobre cuya asignación no se haya efectuado el descuento del 5% formulado el cargo que corresponde".

La ley 11.260 reproduce, en su art. 20, el precitado texto y la 11.923 en el 9º suyo, expresa: "En ningún caso se computarían servicios posteriores a la promulgación de la presente ley, por los que no se hubiesen efectuado los aportes correspondientes en la oportunidad del cobro de los haberes. Fíjase un plazo de un año desde la promulgación de la presente ley, para que los funcionarios, empleados y obreros comprendidos en ella que no hubiesen sufrido descuentos sobre el total o parte de sus servicios, soliciten de la Caja la formulación del cargo correspondiente. La Caja fijará un plazo no mayor de 3 años ni menor de 6 meses, dentro del cual deberá abonarse el importe de los aportes no efectuados. El personal accidental o transitorio sólo podrá hacer computar los servicios por los cuales efectúe los aportes, a cuyo efecto, cuando ingrese a la Administración deberá hacer declaración expresa para que se le practique los descuentos".

Estas disposiciones, como puede fácilmente advertirse, aluden a servicios comprendidos en la ley, sobre los cuales se debió practicar descuentos, por ser obligatoria la aportación y no a los expresamente excluídos del régimen, como lo son los prestados antes de los 18 años de edad (art. 26, ley 4349), o en las municipalidades o en las administraciones de provincias, o los desempeñados en el e-

jército, cuando han sido retribuídos con retiro militar, (art. 58, ley cit.).

Las mencionadas leyes 11.027, 11.260 y 11.923 nada dicen ni puede, por vía de interpretación judicial, extraerse de ellas para concluir en una afirmación tan categórica, como es la de la tácita derogación del art. 26 de la ley 4349.

El argumento basado en el art. 9º de la ley 14.069, adolece, a mi entender, de idéntica falta de fundamento lógico jurídico, pues dice: "Declárase computables para todos los efectos de la ley 4349 y sus complementarias, los servicios de carácter honorario prestados a la Nación o en organismos directamente vinculados a las ramas de los poderes públicos nacionales. Dichos servicios podrán comprobarse incluso por medio de información sumaria. A los efectos de establecer las correspondientes sumas por aportes jubilatorios no ingresados, se considerarán como devengados por el agente durante la prestación honoraria de servicios los sueldos que para iguales o similares servicios rigieron en las épocas respectivas. El aporte patronal será abonado por el organismo pertinente y el aporte personal por el funcionario, empleado u obrero".

El criterio de ser la jubilación un derecho creditorio, fundado en el hecho del aporte individual al fondo de recursos y, por lo tanto, basado en copropiedad de esos bienes, había sido ya sustituído por la legislación, jurisprudencia y doctrina por el del derecho a la protección social, y la obligación de aportar, impuesta por la ley, lo era en razón del empleo detentado, con prescindencia del derecho reconocido a un beneficio previsional. No era el sujeto titular del cargo quien aportaba, sino el sueldo el afectado por el descuento, estuviese o no cubierto, perteneciendo los fondos a la institución y no a sus afiliados.

El art. 9º de la ley 14.069 nada aclara respecto a la cuestión materia de este acuerdo, pues se refiere a no ser posible la computación, dentro del régimen de la ley 4349 y sus complementarias, por no haberse aportado y esto no se había realizado por falta de base para hacerlo, por no haber sido remunerados los servicios. Siempre estamos dentro del supuesto de servicios comprendidos en la ley, los cuales, de haber estado rentados, habrían sufrido descuentos los sueldos percibidos; mas los anteriores a la edad de 18 años, fueran o no retribuídos con sueldo o salario, no tenían por qué sufrir descuentos ni existían obligación de aportar por ellos, por no ser computables, como tampoco lo eran, rentados o no, los contemplados por el art. 58 de la ley 4349.

Bueno es señalar, para aclarar conceptos, se ajusta este criterio mío a la orientación seguida por la legislación de previsión actual, de más reciente sanción y no puede hallarse divorciada la ley 14.069 de sus análogas. Consecuentes con el criterio expresado en el art. 26 de la ley 4349, excluyen de la computación los servicios prestados antes de los 18 años de edad, las siguientes disposiciones: art. 3º, inc. a), decreto-ley 31.665/44 (personal de comercio); art. 3º, inc. a), decreto-ley 6395/46 (personal de la marina mercante y aeronavegantes); art. 3º, inc. a), decreto-ley 13.937/46 (personal de la industria); art. 2º, ley 14.397 (trabajadores independientes, empresarios y profesionales); art. 2º, ley 14.399 (trabajadores rurales) y art. 2º, decreto-ley 11.911/56 (trabajadores del servicio doméstico).

Estimo de acuerdo a lo expuesto, equivocado el planteo y, por ello, errónea la conclusión extraída como consecuencia, pues los servicios prestados con anterioridad a la edad de 18 años no son computables, dentro del régimen de la ley 4349, por hallarse expresamente excluídos -

en razón de la edad y no por otra causa. El hecho de haber sido remunerados o "ad honorem" y de haber o no sufrido descuentos no los incluye en la ley. La excepción hecha por al art. 26 de dicha ley fué circunstancial y transitoria, frente al derecho adquirido de los ya contribuyentes. En mérito a lo dicho, me pronuncio en sentido negativo.

El doctor Machera dijo:

Circunscripto el problema a si son computables o no, dentro del régimen de la ley 4349, los servicios "ad honorem" prestados cuando aún no tenía 18 años de edad el recurrente, no encuentro razones de mérito para apartarme de lo decidido por la sala III de este tribunal, con mi voto, en la causa "Calderón de la Barca, Horacio T. s/ jubilación". A fin de no redundar innecesariamente me remito a los fundamentos del caso precitado y a los concordantes del voto del juez preopinante, doctor Videla Morón, para expedirme por la negativa. Así lo voto.

El doctor Santos dijo:

Que habiendo suscripto el fallo citado de "Calderón de la Barca, Horacio T. s/ jubilación" y por las mismas razones aducidas por el doctor Machera es que adhiero al voto del doctor Videla Morón. Tal mi voto.

El doctor Allocati dijo:

1º - El art. 26 de la ley 4349 dispone: "No se computarán los servicios prestados antes de la edad de 18 años, salvo para los que desde su incorporación hayan sufrido el descuento del inciso 1º en sus sueldos".

Como con acierto lo destacó el procurador general de la Nación, doctor Carlos G. Delfino en su dictamen en el caso "Sarrabayrouse Varangot", el artículo sienta un principio de carácter general y el beneficio que el mismo contiene "a quienes hubieran sufrido descuento sobre sus haberes", es evidentemente una excepción fundada en motivos circunstanciales anteriores a la sanción de la ley 4349.

Ello surge claramente de la discusión parlamentaria y en especial de las palabras del diputado Gómez, quien se refirió a la situación de muchos empleados de correos y policía que habían empezado a servir a los 12 ó 14 años de edad y cuyos haberes habían sufrido descuento del 5% establecido desde algunos años antes por las leyes de presupuesto de 1901 a 1903. V.D. de sesiones de diputados, año 1903, t.I, p. 291 (Corte Sup., Fallos, t. 230, p. 497).

No han derogado aquel principio ni el art. 21 de la ley 11.027 de presupuesto para el año 1920, ni el art. 20 de la ley 11.260 de presupuesto para el año 1923, al establecer ambos que "la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles, formulará cargo sin interés a los empleados, jubilados y pensionistas, por el importe del 5% de los sueldos no descontados en cualquier época de la prestación de servicios, con excepción de los jubilados por la ley 1909", como tampoco el art. 9º de la ley 11.923 que dispone: "En ningún caso se computarán servicios posteriores a la promulgación de la presente ley, por los que no se hubiera efectuado los aportes correspondientes en la oportunidad del cobro de los haberes. Fíjase el plazo de un año desde la promulgación de la presente ley, para que los funcionarios, empleados y obreros comprendidos en ella, que no hubiesen sufrido descuento sobre el total o parte de sus servicios soliciten de la Caja la formulación del cargo correspondiente". "Ellas se refieren, sin duda, a los aportes que hubieran debido efectuar quienes se hallaban dentro del ámbito personal de la ley 4349 y no a quienes, como hemos dicho, quedaban por definición fuera de él. La obligación impuesta por dichas leyes se refiere a los aportes cuyo pago hubiera correspondido en virtud de alguna disposición de la ley 4349, o sus complementarias, pero no puede extenderse, a mi juicio, a aquellos servicios por los que nunca correspondió efectuar aportes" (dictamen y ps. cits.).

Ahora bien, el art. 9º de la ley 14.069, que modificó diversas leyes de jubilaciones, declaró "computables para todos los efectos de la ley 4349 y sus complementarias, los servicios de carácter honorario prestados a la Nación o en organismos directamente vinculados a las ramas de los poderes públicos nacionales".

Tampoco la norma transcripta ha derogado el principio general del art. 26 de la ley 4349. Cuando el art. 9º de la ley 14.069 expresa que serán computables para todos los efectos de la ley 4349 y sus complementarias los servicios de carácter honorario, ha dado a esos servicios el mismo valor que si hubiesen sido retribuídos.

Estimo que si el legislador hubiera querido derogar el principio general del art. 26 de la ley 4349, tanto al sancionar las leyes 11.027, 11.260, 11.923, como la 14.069, habría hecho una manifestación expresa en ese sentido. No podrá pretenderse que ha existido derogación tácita toda vez que para que ello suceda las normas que se han mencionado debían resultar incompatibles con la del art. 26 lo que, a mi juicio, no ocurre.

Quiero destacar como antecedentes ilustrativos: a) que en el texto ordenado de la ley 4349 y sus modificatorias, inserto en la "Recopilación de leyes, decretos, ordenanzas y resoluciones relativos a jubilaciones, pensiones, retiros, Dirección de Asistencia Social y Seguro de Maternidad", publicado por la Cámara de Diputados de la Nación en 1952, el art. 26 aparece en la redacción que le dió el legislador originariamente, sin modificación alguna (t. I, la. parte, p. 181); b) que aparece en igual forma en "Previsión Social Argentina", de Pedro F. Prado, publicado en 1950 (p. 81), en el Digesto Ediar de Legislación Argentina, y en Anales de Legislación Argentina (Complemento 1889-1919, p. 622, publicado en 1954), y c) que Goñi Moreno, en su último libro "Derecho de la Previsión Social", expresa: "Las leyes reconocen los ser

vicios prestados después de los 18 años" (t. 2,p. 494) y en la nota 26 menciona expresamente la ley 4349.

El único autor de los que he podido compulsar que daría razón al recurrente es Ramírez Gronda, en su libro - "Régimen jurídico de las jubilaciones". Si bien al consignar el texto actualizado de la ley 4349 transcribe el art. 26 sin considerarlo derogado (p. 167; v. advertencia, p. 153), con anterioridad había dicho: "Esta norma no ha sido derogada en forma expresa, pero aparece modificada en alguna medida por el art. 9º de la ley 11.923, en cuanto dispone con carácter general que debería efectuarse los aportes correspondientes a todos los servicios prestados - con anterioridad, fijando un plazo para ser abonados a la Caja. Parece, pues, que no existe el límite mínimo de edad como requisitos para el ingreso a la Caja a efecto de adquirir la calidad de afiliado" (p. 44).

2º - Es cierto que la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso citado al comienzo de este voto, se pronunció en sentido contrario al criterio que sustento. Pero si bien se ha sostenido que las decisiones de la Corte son obligatorias moralmente para los jueces (Fallos, t.11, p. 53; t. 15, p. 366), nueva integración de ese tribunal me decide a expresar mi opinión sobre el problema y a resolverlo de acuerdo a mi convicción.

3º - Por las consideraciones precedentes, que ya expusiera al emitir mi voto, in re "Dorado, José c.Instituto Nacional de Previsión Social", sentencia núm. 15.840 del 20 de marzo de 1958 de la sala que integro y las muy acertadas del doctor Videla Morón, me pronuncio por la negativa.

El doctor Valotta dijo:

Por razones análogas a las aducidas por el doctor Allocati, voto en el mismo sentido.

El doctor Córdoba dijo:

Compartiendo los fundamentos del voto emitido por el

doctor Allocati, adhiero al mismo.

El doctor Eisler dijo:

Los fundamentos que se dieron por la Corte Suprema - en el caso "Sarrabayrouse Varangot, José M.A." y los que, con mayor extensión lucen en el dictamen del procurador-general del trabajo, que comparto, me determinan a votar por la afirmativa.

El doctor Ratti dijo:

A partir de la sentencia dictada en los autos "Corrado de Scavo, Josefina c. Talleres Argentinos de Uniformes", la sala que integro se ha apartado de la doctrina de interpretación sostenida por la Corte Suprema Nacional, cuando existen nuevos argumentos que pueden llevar a sustentar criterios distintos.

Como lo demuestran los doctores Videla Morón y Allocati en sus respectivos votos, el art. 26 de la ley 4349, en lo que respecta a la no computación de servicios prestados antes de la edad de 18 años, no ha sido derogado - por las normas legales posteriores. Los arts. 21 de la - ley 11.027, 20 de la ley 11.260 y 9º de la ley 11.923, - contemplan el caso de servicios comprendidos en la ley - 4349 respecto de los cuales no se practicó el oportuno aporte, y el art. 9º de la ley 14.069 se refiere a los servicios de carácter honorario, pero las mencionadas - normas, acerca de los servicios prestados antes de la edad de 18 años, nada disponen que pueda considerarse incompatible con lo establecido por el art. 26 de la ley - 4349, como hubiera sido necesario para interpretar que este último artículo ha sido tácitamente derogado (doct. art. 17, Cód. Civil).

Por ello y fundamentos sustentados por los doctores Videla Morón y Allocati, a los que adhiero, doy mi voto en el mismo sentido.

El doctor Rebullida adhirió al voto del doctor Ratti, por sus fundamentos.

El doctor Míguez dijo:

Que contrariamente a lo que sostiene la mayoría de los vocales de este tribunal y concordante con lo opinado por el procurador general del trabajo, considero que cuando las leyes 11.027, 11.268 y 11.923 autorizaron a computar servicios sobre los cuales no se habían efectuado aportes siempre que se formulara cargo, alcanzó a la situación de aquellas personas que hubieran prestado servicios no cumplidos aún los 18 años de edad, puesto que el art. 4º de la ley 4349 dispone el descuento forzoso sobre todos los sueldos sin distinguir que el personal tenga menos o más de la edad indicada, situación reafirmada por el art. 1º de la ley 12.887, art. 27 de la 4349, texto concordado. Es decir, tan obligados estaban a hacer la aportación los menores como los mayores de 18 años y como el art. 26 de la ley últimamente citada exceptúa de la prohibición de computar servicios a los menores cuando hayan sufrido los descuentos y siendo obligatorios los mismos, va de suyo que es regla general y permanente hasta su modificación, que los menores podían computar servicios y ello no era sólo un beneficio para aquellas personas que se encontraran en tal situación al momento de la sanción de la ley 4349.

Sentado lo precedente y declarando la ley 14.069 en su art. 9º computables "para todos los efectos de la ley 4349 y sus complementarias" los servicios de carácter honorario prestados, se infiere lógicamente que alcanza a aquellos servicios efectuados honorariamente por menores de 18 años, que ya tenían derecho al cómputo si hubieran hecho aportes o no habiéndolos realizado se les formularan cargo, es decir, se colocaran en las situaciones previstas por las leyes citadas.

En definitiva, por las razones que anteceden, las dadas por la Corte Suprema de Justicia en el fallo indicado en el voto del doctor Eisler y dictámen del procurador ge

neral, declaro que manteniendo el criterio sustentado por esta sala, in re "Imbrogno, Ricardo c. Instituto Nacional de Previsión Social s./cómputo de servicios; ley 14.069" (sentencia núm. 17.769, marzo 19 de 1958), voto por la afirmativa.

El doctor Pettoruti dijo:

Como vocal de la sala II de este tribunal, suscribí el fallo in re "Imbrogno, Ricardo c. Instituto Nacional de Previsión Social s./cómputo de servicios; ley 14.069" (sentencia núm. 17.769, marzo 19 de 1958), decisión que refirmo en esta oportunidad.

Por ello y concordando mi sentir con lo expresado en el dictamen por el procurador general y voto del doctor Míguez, me decido por la afirmativa. Así lo voto.

Habiéndose arribado según el resultado de los votos emitidos, a la siguiente doctrina: "Los servicios "ad honorem" prestados con anterioridad a los 18 años de edad no son computables dentro del régimen de la ley 4349". -

GUILLERMO C. VALOTTA - AMADEO ALLOCATI - ALFREDO DEL C.M. CORDOBA - GUILLERMO C. R.L. EISLER - JORGE A.F. RATTI - OSVALDO F. REBULLIDA - MANUEL G. MIGUEZ - ORESTE PETTORUTI - MARIO E. VIDELA MORON - ARMANDO D. MACHERA - ELECTO SANTOS - VICTOR A. SUREDA GRAELLS. (Sec.: Alberto G. TRUEBA).

Rev. LA LEY del 14-11-58 - págs. 4, 5 y 6.-

Poder Ejecutivo Nacional
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº 943.-

JUICIOS - DEMANDAS - PROCURACION DEL TESORO - REPRESENTACION EN JUICIO - LITIGIOS - ACCIONES JUDICIALES -

Buenos Aires, 25 de septiembre de 1959.-

Visto las distintas normas que reglamentan la defensa en juicio de los derechos del Estado, y

CONSIDERANDO:

Que es necesario actualizar, con ciertas modificaciones esas normas reglamentarias de modo que se facilite la más rápida y eficaz defensa del Estado, no existiendo razón, por ello, para que la Oficina de Asuntos Fiscales dependiente de la Procuración del Tesoro de la Nación, funcione separadamente de la Oficina de Asuntos Judiciales, que atiende los juicios directamente encargados al señor Procurador del Tesoro;

Por ello y de acuerdo a lo propuesto por el señor Procurador del Tesoro de la Nación,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA
D E C R E T A :

Artículo 1º.- El Procurador del Tesoro representará a la Nación en los casos previstos por los arts. 1º de la ley nº 3.367 y 5º, inc. a) de la ley nº 12.954, cuando el Poder Ejecutivo lo considere necesario o conveniente, dictando el correspondiente decreto.-

Artículo 2º.- Los Procuradores Fiscales ante los Tribunales Federales o Letrados, o los Agentes Fiscales ante los Tribunales locales, representarán a la Nación y a las reparticiones sin personería jurídica y a los organismos autárquicos que no tuvieren representantes judiciales, en los demás casos y en general, en los no previstos por leyes especiales o en el Decreto Nº 34.952 de noviembre 8 de 1947. Los aludidos representantes fiscales serán facultados mediante resolución del Ministerio o Secretaría interesados si el monto del juicio no excediera de un millón de pesos; si excediera dicha suma o se tratara de un juicio de monto indeterminado, mediante decreto del Poder Ejecutivo; en ambos casos, con intervención de la Dirección de Asuntos Jurídicos o Asesoría Letrada correspondiente.-

Artículo 3º.- La Oficina de Asuntos Fiscales creada por Decreto Nº 13.925, de diciembre 7 de 1932, funcionará en la Procuración del Tesoro de la Nación integrando con la Oficina de Asuntos Judiciales de esa Repartición, una sola dependencia, que en adelante se denominará Oficina de Asuntos Judiciales y Fiscales.-

Artículo 4º.- Sin perjuicio de las funciones propias que corresponden a la actual Oficina de Asuntos Judiciales, la nueva Oficina podrá:

1º) Suscribir las providencias de mero trámite;

2º) Ejercer -por sí o por intermedio de los representantes fiscales- el contralor administrativo y procesal de los juicios en que la Nación sea parte o tenga interés en cualquier fuero, jurisdicción o instancia;

3º) Practicar las inspecciones que sean necesarias para la mejor defensa de los derechos del Estado

en la época y forma que indique el Procurador del Tesoro;

4º) Solicitar a los Procuradores y Agentes Fiscales - todas las informaciones que estime pertinentes;

5º) Requerir directamente de las distintas reparticiones centralizadas o descentralizadas de la Administración Pública, las actuaciones administrativas, antecedentes, informes, instrucciones, pruebas y elementos que estimare conveniente para la defensa del Estado en juicio;

6º) Llevar constancia detallada de cada juicio, a cuyo efecto los citados representantes fiscales comunicarán a la oficina:

a) dentro de tercero día, la fecha de promoción - de los juicios y de las contestaciones de demandas, con indicación del Juzgado y Secretaría intervinientes;

b) semestralmente, a contar del 1º de enero de cada año, un detalle del movimiento de los juicios consignando su estado, repartición de origen y número y año del expediente administrativo correspondiente;

c) la sentencia dictada en la causa, con síntesis de la misma;

d) las resoluciones que fueren de interés y aquellas que aconseje la importancia del asunto.-

Artículo 5º.- Cuando la Nación deba concurrir a juicio, el Ministerio o Secretaría de Estado interesados remitirán - las actuaciones administrativas, antecedentes, informes, - instrucciones, pruebas y demás elementos que fueren necesa

rios para la atención de la causa, a la Oficina de Asuntos Judiciales y Fiscales, con prudente anticipación, sobre todo con relación a plazos de caducidad o prescripción con el decreto o la resolución que corresponda; esta Oficina los girará, a sus efectos, al representante fiscal competente.-

Si fuere necesario oponer excepciones al progreso de una acción, el Ministerio o Secretaría respectivos lo consignarán expresamente en las instrucciones aludidas, sin perjuicio de que los representantes fiscales las opongan directamente en caso de estimarlo necesario.-

Artículo 6º.- Los representantes fiscales deberán promover o contestar las demandas dentro de los diez días de recibidas las actuaciones respectivas, salvo que existan motivos fundados para hacerlo antes o cuando sea necesario evitar una prescripción o caducidad.-

Actuarán de acuerdo a las instrucciones que les imparta el Poder Ejecutivo o el Procurador del Tesoro y en su defecto, lo harán en la forma que mejor contemple la defensa del Estado dentro de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables ; el no recibir instrucciones o recibirlas fuera de término no justificará cualquier vencimiento de plazos.-

Artículo 7º.- Los representantes fiscales requerirán directamente del Ministerio, Secretaría de Estado o repartición interesados, por intermedio del organismo que tenga a su cargo las funciones de asesoramiento jurídico la remisión de aquellas actuaciones administrativas, antecedentes, informes, pruebas, elementos, etc., que reputen necesarios para la tramitación de las causas en que intervengan. En tales casos, las reparticiones administrativas mencionadas se comunicarán también directamente con los representantes fiscales.-

Fuera de estos supuestos, y los que determine con ca

rácter general el Procurador del Tesoro, las comunicaciones se realizarán a través de la Oficina de Asuntos Judiciales y Fiscales.-

Asimismo los representantes fiscales, previa opinión sobre el caso, podrán solicitar al señor Procurador del Tesoro por intermedio de la Oficina, instrucciones especiales de carácter jurídico que interesen a la tramitación de los juicios.-

Artículo 8º.- Se reputará falta administrativa grave, que dará lugar a la aplicación de sanciones y a lo dispuesto por el artículo 1.112 del Código Civil, toda perención de instancia, caducidad, prescripción o dilación injustificada que se produzcan en los juicios en que actúen los representantes fiscales, debiendo intervenir en tales casos el Ministerio de Educación y Justicia.-

Artículo 9º.- Las peticiones sobre hechos y antecedentes a que se refieren los artículos 4º inc. 5), y 7º serán formuladas con la debida anticipación y deberán ser satisfechas por el organismo requerido dentro del término perentorio de 10 días hábiles, salvo impedimento debidamente justificado, so pena de la responsabilidad disciplinaria y civil que pudiera corresponder por los perjuicios que sufriese la Nación.-

Artículo 10º.- Facúltase al Procurador del Tesoro de la Nación para dictar disposiciones complementarias, aclaratorias o interpretativas e impartir directivas básicas para el mejor cumplimiento del presente, así como las necesarias para la organización de la Oficina de Asuntos Judiciales y Fiscales.-

Artículo 11º.- Deróganse los decretos números 13.925 de diciembre 7 de 1932; 4.369 de diciembre 1º de 1955 (') y

---

(') Ver Digesto Administrativo nº 2.-

24 de febrero 11 de 1957; los artículos 15, 16, 17, 18,19 y 20 del Decreto Nº 14.546 de noviembre 20 de 1943 (*); - los artículos 14, 17 y 19 del Decreto Nº 34.952 de noviembre 8 de 1947; el artículo 22, ap. 4) del reglamento aprobado por Decreto Nº 13.100 de octubre 21 de 1957 (&), en lo que fuere incompatible con el presente, y toda norma - reglamentaria que se oponga a este decreto.-

Artículo 12º.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario de Estado en el Departamento de Educación y Justicia.-

Artículo 13º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprenta y archívese.-

FRONDIZI - LUIS R. MAC KAY.-

DECRETO Nº 11.972.-

(*) Ver Digesto Administrativo nº 91.-
(&) Ver Digesto Administrativo nº 487.-

Poder Ejecutivo Nacional
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº 944.-

RECURSO JERARQUICO

Expediente nº 38.280 - 1957.- S/recurso jerárquico extemporáneamente interpuesto.- SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA.-

Señor Secretario de Estado de Hacienda:

El señor Ecio René Ferrero, Verificador de 3ra.de la Dirección General Impositiva -Delegación Córdoba- interpone recurso jerárquico contra la resolución de la citada Delegación de fecha 29 de Marzo de 1957, por la que,- en virtud del planteo irrespetuoso que hiciera de cuestiones escalafonarias, se le apercibió seriamente y se lo trasladó a otras funciones distintas a las que desempeñara hasta entonces.-

-I- Resulta de las actuaciones e informes producidos que el recurso jerárquico de que se trata ha sido interpuesto una vez vencido con exceso el plazo de 15 días hábiles, posteriores a la denegatoria tácita, previsto en el art. 4º del decreto nº 7520/44 (').

En tales condiciones y conforme al criterio de esta Procuración expuesto en ocasión de dictaminar, entre otros, en el expediente nº 4984/53 del ex-Ministerio de Finanzas (Dictámenes T. 51, pág. 262), es de toda evidencia que el recurso interpuesto no puede en modo alguno prosperar.-

(') Ver Digesto Administrativo Nº 43.-

-II- Ello no obsta que el interesado, una vez que obtenga pronunciamiento denegatorio expreso de la autoridad administrativa competente, vuelva a plantear, si lo estima del caso, nuevo recurso jerárquico.

Setiembre 15 de 1959.-

Fdo. ALEJANDRO R. AHUMADA
Sub-Procurador del Tesoro de la Nación.

Poder Ejecutivo Nacional
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº 945.-

ESTATUTO PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PU - BLICA NACIONAL (art. 35º) - SANCIONES - SUSPENSIONES - FACULTAD MINISTERIAL

Expediente nº 36.190-1958 Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos Dep. Hipódromos José Norberto Dodero - Sumario Administrativo. Intervención de la Junta de Disciplina. SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA.-

Señor Secretario de Estado de Hacienda:

Con motivo de la maniobra que realizara don José Norberto Dodero, Auxiliar Mayor y Empleado a Jornal por Reunión de Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos, tendiente a postergar el reintegro de una determinada suma de dinero, la nombrada dependencia solicita se le sancione con una suspensión de 30 días como agente mensualizado y por la cantidad de reuniones comprendidas en dicho lapso, en su carácter de agente jornalizado de los Hipódromos de Palermo y San Isidro.

Frente a dicho pedido y en vista de lo determinado a fs. 39 por la Dirección General de Asuntos Jurídicos de esa Secretaría de Estado, la Dirección General de Contabilidad y Administración, en sus Memorandums de fs. 20 y 44,

plantea implícitamente las tres siguientes cuestiones:

1a. Si el señor Presidente de la Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos tiene o no competencia para disponer suspensiones del personal mayores de 10 días;

2a. Si la suspensión de un empleado de la repartición que se desempeña como jornalizado en los hipódromos y que al mismo tiempo es empleado mensualizado de la Administración del organismo, puede disponerse con efectos en ambas funciones, a pesar de que la sanción se origina en una falta cometida en una de ellas;

3a. Si el Secretario de Hacienda, de acuerdo con lo establecido en los arts. 2º inc. 8º y 18 de la ley 14.439 (1), Orgánica de los Ministerios Nacionales, puede rever de oficio, sanciones aplicadas por los organismos de su dependencia.

I.- En primer término conviene tener presente que, conforme a lo dispuesto en el decreto nº 34.186 del 31 de diciembre de 1950 -cuya copia autenticada se agrega- Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos es una dependencia de esa Secretaría de Estado.

En esas condiciones y en vista del criterio de esta Procuración expuesto en ocasión de dictaminar en el expediente nº 30.138-959 (S.E.H.), en el sentido de que los organismos a que se refiere el art. 35 del Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública Nacional son las entidades autárquicas o aquéllas que funcionan en forma descentralizada en el orden administrativo, es evidente que el señor Presidente de Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos no tiene competencia para aplicar al personal sanciones superiores a 10 días, desde que se trata

(1) Ver Digesto Administrativo Nº 505.-

de un organismo que no funciona en ninguna de las formas señaladas.

II.- En lo que respecta a la posibilidad de extender a otro empleo la sanción que pudiera corresponderle a un agente, que presta servicios simultáneos y compatibles - en una misma o distinta jurisdicción, por falta o delito cometidos en uno de ellos, esta Procuración entiende que tal extensión sólo es legítimamente posible, cuando existiendo causal de cesantía, sea de una gravedad tal que afecta el concepto del empleado tanto en una como en otra función, de manera que se justifique la expulsión de los dos empleos (por ejemplo: el quebrantamiento de las prohibiciones especificadas en el art. 7º del Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública Nacional; delitos contra la Administración; indignidad moral, etc.).

En dicho supuesto, la decisión que se adoptase no constituiría doble sanción, ya que se trataría exclusivamente de la desvinculación del agente de la Administración, por no poseer las necesarias condiciones morales y de conducta.

Dicho criterio no es de aplicación en el caso en que correspondiese apercibimiento, suspensión, postergación en el ascenso o retrogradación de categoría en el empleo en razón de que, en tales supuestos, podría válidamente sostenerse que existe doble sanción por un solo y mismo hecho, en pugna con lo prescripto por el art. 42 del Estatuto vigente.

III.- Por último y en lo que se refiere a la cuestión de saber si el señor Secretario de Estado está facultado para rever de oficio las sanciones disciplinarias aplicadas por organismos de su dependencia, el suscripto se pronuncia por la afirmativa, condicionada a que tenga competencia para ello en razón de la naturaleza y grado de la sanción y a que la revisión se produzca por los mo

tivos de legitimidad y no de mérito.

Setiembre 22 de 1959.-

Fdo.ALEJANDRO R.AHUMADA
Sub-Procurador del Tesoro de la Nación

Poder Ejecutivo Nacional
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº 946.-

ESTATUTO PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL (Arts. 41º y 34º) - SUMARIOS - SANCIONES - INHABILITACION

Expediente nº 529.261/958. Antonio Pernas y Miguel A. Fiorentino. S/inhabilitación desemp. tareas fiscalización. HACIENDA.-

Señor Secretario de Estado de Hacienda:

Dos son las cuestiones sobre las que debe dictaminar.

I. Si cuando se inculpa a un empleado de hechos que pueden constituír delito criminal, debe o no instruirse sumario administrativo, independientemente del proceso - criminal.

II. Si procede inhabilitar al agente para el desempeño de determinadas funciones, en los casos en que aparezca inconveniente mantenerlos en las mismas.

I. El apartado XIV del art. 41 del decreto reglamentario del Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública Nacional (Decreto-Ley 6666/957)(*), establece que la sustanciación de los sumarios administrativos que pudieran configurar delitos -redacción impropia, porque el sumario en sí no podría configurarlo y la aplicación de sanciones pertinentes en el orden administrativo,

(*) Ver Digesto Administrativo Nº 254.-

Poder Ejecutivo Nacional
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín nº 947.

CONTRATACIONES (Variabilidad de Precios)

1.- Corresponde se indemnice, en la medida que haya probado que se le ha perjudicado, al proveedor de una repartición del Estado que, adjudicatario de una licitación para la provisión de avena, estableció sus precios conforme con los establecidos como mínimos por el Estado antes de la recolección de la cosecha y que posteriormente fueron variados en más.-

2.- Si no media inestabilidad o inseguridad que, conforme al decreto 36.506/48, autoriza a prever - en las licitaciones y contratos de suministros, un ulterior reajuste de precios, es justa y razonable la aplicación analógica del art. 39 de la ley 13.064 sobre contratos de obras públicas y con arreglo al cual se ponen a cargo de la Administración los perjuicios sufridos por el contratista, que tengan causa directa en actos de aquélla, no previstos en los pliegos de licitación.-

CNFED. CAPITAL, SALA EN LO CIVIL Y COM., junio 12-958.- Reisz, Carlos y Cía. (Soc. de Resp. Ltda.) c. Gobierno - nacional.-

la. Instancia.- Buenos Aires, abril 25 de 1956.-

-a) Se presenta la actora, Carlos Reisz y Cía.(Soc. de Resp. Ltda.) por medio de apoderado, iniciando demanda contra la Nación, por el cobro de la suma de $ 101.458,97,sus intereses y costas, o la que en más o en menos resulte de las probanzas de autos.-

Manifiesta que su mandante se presentó a una licitación pública en el Ministerio de Ejército y que, hallándose en vigor el término de mantenimiento de la oferta, el Poder Ejecutivo anunció radiotelefónicamente un aumento de los precios que pagaría a los productores de avena, por lo cual Carlos Reisz y Cía. (Soc. de Resp.Ltda.) solicitó se le aumentaran los cotizados en la licitación, en un monto igual al que se prometía a los mencionados productores,por la avena correspondiente a la cosecha 1950/51.-

No obstante ello, por resolución del 26 de enero de 1951, se le adjudicó a su parte la provisión de 4.082 toneladas del cereal citado, y, hallándose firme el contrato , el mismo Poder Ejecutivo modificó los precios que debían abonarse a los productores por decreto 1736/51, en virtud del cual se aumentaba en $ 2,50, por cada 100 kilogramos , el precio que sirvió de base a su mandante para calcular los de su propuesta, con el consiguiente perjuicio que ello le irrogaba.-

Agrega que no obstante la existencia de dictámenes legales a su favor, fué denegado el pedido de su representada en la esfera administrativa, por lo cual, se ve obligada a iniciar demanda judicial en defensa de sus derechos.-

Finalmente, impugna los fundamentos legales del decreto 6476/52, por el cual se denegó a su mandante el aumento de precios, citando principios jurisprudenciales sentados por la Corte Suprema de Justicia Nacional, de acuerdo con los cuales no pueden suprimirse o alterarse las obligaciones de los contratos en general y que el Estado, cuando contrata, no puede invocar soberanía para justificar un ac

to subsiguiente tendiente a alterar las obligaciones nacidas del acto jurídico realizado.-

Cita también en su favor las disposiciones de la ley 12.910 (ADLA, VII, p. 40), del decreto 33.817-49, y, especialmente, las del decreto 17.884/51, de fecha posterior a la adjudicación de avena a su mandante, en el cual se autoriza al Ministerio de Ejército a reajustar los precios establecidos cuando su variación obedezca a medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo o autoridad competente del lugar en que debe realizarse el suministro.-

b) Que corrido traslado de la demanda la contesta el procurador fiscal pidiendo su rechazo con costas y negando todos y cada uno de los hechos en que se basa y que no sean expresamente reconocidos en su escrito o por el Poder Ejecutivo con carácter definitivo en resoluciones administrativas atinentes a la causa. Señala que el decreto 1736/51 es una medida de gobierno emanada en virtud de principios dicrecionales referentes a la conducción económica y financiera del país, actuando el estado como ente de derecho público distinto al de persona de derecho privado que invistió en el contrato celebrado con el actor.-

Funda el derecho de su parte en el decreto 36.506/48, y los arts. 1197 y 1198 y concs. del Cód. Civil.-

CONSIDERANDO:

1º - Que según resulta de lo manifestado por las partes y de las probanzas de autos, aquéllas celebraron un contrato de suministro para la provisión de 4.082 toneladas de avena destinada al Ministerio de Ejército, al precio medio de $ 18.50 habiéndose recibido de conformidad la mercadería por el citado Departamento de Estado. Consta igualmente que, con posterioridad al perfeccionamiento del contrato, el Poder Ejecutivo por decreto 1736/51 publi

cado en el Boletín Oficial del 7 de febrero de 1951, elevó el precio que podían cobrar los productores de avena, razón por la cual Carlos Reisz y Cía. (Soc. de Resp.Ltda) debió abonar $ 2,50 más, los 100 kilogramos.-

2º - Que analizando lo solicitado por la actora se advierte que no pretende se le excuse del cumplimiento de lo pactado sino que, por lo contrario, su demanda presupone ese cumplimiento, lo que como se destacó consta en autos.-

Al respecto cabe señalar que existen antecedentes en el sentido de que debe contemplarse la situación de los deudores que cumplen su obligación no obstante las circunstancias desfavorables que han sobrevenido a la realización del convenio, habiendo tenido esa tendencia concreción legal en nuestro país a raíz de la sanción de la ley 13.064 (ADLA, VII, p. 404) (Bielsa, "Principios de derecho administrativo", 2a. ed., p. 184; "Derecho administrativo", 5a. ed., t. 2, p. 358; Salvat-Galli, "Obligaciones" t. 1, ps. 184/85).-

Como se ha expresado anteriormente, en la esfera administrativa se resolvió que precedía el pago de la indemnización pretendida, en razón de lo dispuesto por el art.22 del decreto 36.506/48 (ADLA, VIII, p. 830).-

Ello no obstante, estima el suscripto que sea disposición reglamentaria no contempla la situación planteada en el caso sub lite, y, por ende, que su solución habrá de buscarse en otras normas positivas.-

En efecto, el art. 22, párr. 2º del decreto 36.506/48 se refiere únicamente a los errores u omisiones en que hubiere incurrido el oferente o a los cambios experimentados por el valor de la mano de obra o de los materiales.- Tampoco el art. 21 al que alude aquél, puede ser útil para resolver el caso de autos, pues ha sido dictado con mi

ra a situaciones de emergencia o en las que, por motivos excepcionales, exista fluctuación de precios.-

Pero en la presente causa se trata de las modificaciones de las condiciones del contrato, por actos del propio Poder Ejecutivo, posteriores a su celebración, lo que, como resulta obvio destacarlo, no pudo ser previsto en él.-

Debe entonces recurrirse a las normas positivas y principios de derecho atinentes al punto en discusión, teniendo presente que las partes han celebrado un contrato de suministro que, como tal, está sujeto a las disposiciones esenciales de derecho administrativo (Bielsa, "Derecho administrativo", 5a. ed. t. 2, p. 375).-

3º - Que nada obsta a que la cuestión suscitada sea resuelta de acuerdo con las disposiciones de la ley 13.064 referente a los contratos de obras públicas, que contempla expresamente la situación y cuya aplicación analógica debe reputarse procedente, ya que se ha reconocido doctrinariamente que el contrato de suministro y el de obras públicas están sometidas al mismo régimen, en lo que respecta a su formación y ejecución, y regidos por las mismas normas, (Bielsa, "Derecho administrativo", 5, ed. ps. 302 y 375; - "Principios de derecho administrativo", 2a. ed.,p. 196).-

El art. 39 de la ley señalada, establece que las pérdidas, averías o perjuicios sufridos por el contratista, serán soportados por la Administración pública, cuando provengan de fuerza mayor o caso fortuito, disponiendo que deberán entenderse por tales los que tengan causa directa en actos de la Administración no previstos en los pliegos de licitación.-

Como puede advertirse, en esos casos la mayor onerosidad ha sido causada por actos del propio Poder Ejecutivo, tal como ocurre sin ninguna duda en el caso de autos, lo que hace procedente la aplicación del art. 39 de la ley nº 13.064 que da fundamento suficiente a las pretenciones de

la parte actora (Salvat-Galli, "Obligaciones", t.1,p. 181).

4º - Que en autos no ha sido contradicha la pretensión de la actora en cuanto a la oportunidad y la forma como la ha efectuado, restando sólo decidir sobre el monto reclamado en concepto de indemnización.-

Al respecto,estima el suscripto que la existencia del perjuicio se encuentra legalmente comprobada, atento el informe de la Bolsa de Cereales de fs. 116/17, y las conclusiones del perito contador de fs. 120/25, especialmente la respuesta al punto 8º, lo que justifica, en virtud de lo dispuesto en el art. 37 de la ley 14.237 (ADLA, XIII-A,p. 168), de aplicación supletoria, que se fije su monto en una suma igual a la reclamada en la demanda.-

Por las consideraciones expuestas, fallo haciendo lugar a la demanda y declarando que la Nación deberá pagar a la firma Carlos Reisz (Soc. de Resp. Ltda.), la suma de $ 101.458,97. Con costas e intereses que se computarán desde la fecha de notificación de la demanda.-

CARLOS E. GONZALEZ BONORINO.
(Sec.: Leandro Rodríguez Jáuregui).

2a. Instancia.- Buenos Aires, junio 12 de 1958.-

-El doctor Ortiz Basualdo dijo:

Dos son los agravios que expresa el gobierno demandado contra la sentencia. Uno, principal, es el que sostiene la improcedencia de toda indemnización y el otro, subsidiario, se relaciona con el monto de la misma.-

Respecto al primero, se afirma que tratándose de un contrato de suministro no son aplicables las disposiciones de la ley 13.064, que regla lo referente a la contratación de obras públicas, porque aquella clase de contratos está sometida a las normas establecidas en el decreto 36.506/48, cuyo

art. 21 prevé expresamente la cuestión suscitada en autos.

Creo, como el juez, que esa disposición reglamentaria no contempla la situación aquí planteada.-

El citado art. 21 autoriza que en situaciones de emergencia o en que, por motivos excepcionales, la fluctuación de precios no permita establecer su invariabilidad en el contrato, y cuando el Poder Ejecutivo haya reconocido la existencia de hechos extraordinarios que lo justifiquen, se pueda prever en las bases o pliegos de condiciones, el ajuste ulterior de esos precios, en la forma y condiciones que deben determinarse en aquellos documentos.-

Es el único caso en que la reglamentación autoriza la modificación ulterior de los precios estipulados en el contrato y así lo dice expresamente el art. 22, que declara invariables esos precios, cualesquiera que fueren los errores en que hubiere incurrido el contratista o los cambios experimentados por el valor de la mano de obra o de los materiales.-

Se trata aquí de la variación ocurrida en el precio de adquisición del artículo que el contratista se comprometió a proveer y aun cuando, a primera vista, pareciera que ello coloca el caso bajo la prohibición de alterar el precio convenido, ya que esa contingencia no estaba prevista en el contrato ni en el pliego de condiciones que le sirvió de base, ha mediado una circunstancia excepcional, originada en un acto del propio estado contratante, posterior a la celebración del contrato, que hace inaplicables esas disposiciones administrativas.-

En efecto. La compraventa de cereales estaba sujeta a un régimen de precios mínimos y con arreglo al mismo, los precios se establecían y se hacían públicos antes de la recolección de la cosecha. Así, en septiembre 19 de 1950, por decreto 19.557 (ADLA, X-A, p. 601), se fijaron los precios mínimos de compra para la cosecha 1950/51. El precio allí establecido para la avena amarilla, grado núm. 2, base

47 kilogramos, fué de $ 18,50 los 100 kilos brutos, embolsados y sobre vagón dársena.-

Es en base a esos precios que el contratista hizo sus cálculos y se presentó a la licitación. Habrá tenido en cuenta las oscilaciones normales del mercado, producidas por la demanda para el consumo y para la exportación, que unidas al rendimiento obtenido en la cosecha, es decir, la cantidad de cereal disponible, son los factores que regulan su precio. Si se hubiera equivocado en esos cálculos y como consecuencia hubiera tenido quebranto, nada podría reclamar, porque los precios estipulados contractualmente son invariables, conforme a la norma arriba citada y porque así lo exigen la fijeza y la seguridad de los contratos. Pero la circunstancia que aquí se invoca es otra, debida única y exclusivamente a un acto del gobierno contratante. El 30 de enero de 1951, después de adjudicada la licitación a los actores, por decreto 1736, se aumentó en $ 2,50 el precio básico anterior para la producción de avena de la misma cosecha 1950/51. Ese precio básico subió, así, de $ 18,50 a $ 21 los 100 kilos brutos.-

Antes de dictarse el decreto, al hacerse público el propósito del gobierno nacional de elevar los precios básicos, los actores comunicaron por telegrama colacionado a la autoridad militar que quedaba entendido que los precios ofrecidos por ellos en la licitación para la provisión de avena, debían ser aumentados en la misma cantidad de $2,50 los 100 kilogramos. Ocho días más tarde, el 26 de enero de 1951, se notificó a los actores, por telegrama de fs. 10, que se les había adjudicado en forma definitiva la provisión de avena y cuatro días después se dictaba el decreto 1736/51.-

Desde el momento en que se fijó el nuevo precio, las compras a los productores debieron hacerse con arreglo a él. Venía, así, este acto del gobierno a incidir en forma

indudable en las compras de avena que los actores debían efectuar para poder proveer las cantidades asignadas en la licitación. Se alteraron de ese modo, por obra del propio gobierno contratante, las condiciones en que se celebró el contrato. El contratista, antes de que se materializara ese aumento y antes de que le fuera adjudicada la licitación, planteó su reclamo al gobierno, cuyo acto venía a modificar las bases de esa licitación, a las cuales había ajustado su propuesta. Sin embargo, no se tuvo en cuenta el reclamo y se le adjudicó la provisión de avena a los precios ofrecidos en la primitiva presentación y luego, cuando se presentó reclamando el pago por la diferencia que dice haber tenido que pagar en más a los productores, se le rechazó de plano su reclamación, sin entrar a considerar si está o no probado ese perjuicio, invocando sólo, como único argumento, la invariabilidad de los precios impuesta por el decreto 36.506/48.-

La posición del gobierno demandado es inaceptable. La buena fe debe presidir la ejecución de los contratos y conforme a ese principio no puede exigirse el cumplimiento de la prestación comprometida, en condiciones más onerosas para el contratista, como consecuencia, única y exclusivamente, de un acto emanado de la Administración. No ha mediado imprevisión o error por parte del contratista, que formuló su propuesta en base al precio mínimo que poco antes se había fijado para la avena? Pudo acaso, prever, que pocos meses después y en plena recolección de la cosecha, se elevaría ese precio mínimo, por un nuevo acto de gobierno? No creo que nada autorice semejante suposición. Lo cierto es que ese acto se produjo, que ha sido completamente ajeno a su producción, que con él se alteraron las bases del contrato y que, como consecuencia, se le ha ocasionado un perjuicio. En esas condiciones me parece indudable su derecho a ser indemnizado, en la medida en que haya probado que se le ha perjudicado. Dada la forma en que se han pro-

ducido los hechos, no son, entonces, aplicables las disposiciones del decreto 36.506/48, porque no se trata de ninguna de las situaciones que allí se contemplan, desde que no concurría ninguno de los supuestos previstos en el art. 21 sino todo lo contrario, pues la determinación de un precio mínimo, por un acto anterior del Estado, daba fijeza y seguridad a los precios, como que era ese el fin que se perseguía, en beneficio de los agricultores. No mediaba entonces, la inestabilidad o inseguridad que, conforme a esa disposición administrativa, autoriza a prever en las licitaciones y contratos de suministros, un ulterior reajuste de precios y por eso, razonablemente, no se incluyó ninguna cláusula que lo autorizara. Descartada, entonces, esa norma administrativa, encuentro justa y razonable la aplicación analógica que se hace en la sentencia, del art. 39 de la ley 13.064, sobre contratos de obras públicas y con arreglo al cual se ponen a cargo de la Administración los perjuicios sufridos por el contratista, que tengan causa directa en actos de aquélla, no previstos en los pliegos de la licitación. Desestimado ese agravio principal, paso a ocuparme del otro, que se relaciona con el monto de la indemnización.-

En primer término, se imputa al perito contador, en el memorial de fs. 153, inexactitud en su informe sobre el precio medio de la avena al 1º de diciembre de 1950. La impugnación se basa en el informe de la Bolsa de Cereales según el cual el precio promedio era en esa fecha de $ 19,71 y se atribuye al perito haber consignado para la misma fecha, un precio promedio de $ 18,50. La impugnación es infundada y parte de un error. El precio de $ 18,50 que menciona el perito en el punto 1º de su informe, no es el precio medio de venta en el mercado, sino el precio mínimo oficial. Luego, en el punto 2º, transcribe los precios máximos y mínimos que se registraron en el mercado durante los días hábiles del mes de noviembre de 1950 y de ellos -

resulta un precio promedio de $ 19,93, coincidente con el que suministra la Bolsa de Cereales, como no podía ser de otro modo, dado que es en base a las operaciones registradas en esa institución que el perito ha confeccionado su cuadro de precios.-

Las otras impugnaciones del apelante no creo que tengan valor para modificar las conclusiones de la sentencia, frente a una comprobación indudable que surge de las constancias de los libros de comercio de la actora y es la de los precios a que compró la avena, antes y después de la aparición del decreto 1736/51. Las compras anteriores al decreto fueron hechas al precio de $ 17,30 y las posteriores, que ascienden a 4.013 toneladas, lo fueron al precio promedio de $ 21. Si bien la diferencia entre esos precios promedios es de $ 3,70, no puede fijarse la indemnización en una cantidad superior a los $ 2,50, que fué el aumento real que originó el decreto, pues todo lo que exceda de esa cantidad sólo puede atribuirse a otras causas, ajenas al acto administrativo y propias de las fluctuaciones naturales del mercado. El monto total que así resulta es de $ 100.325 y por esa suma debe confirmarse la sentencia con las costas de esta instancia a cargo del demandado. En ese sentido doy mi voto.-

Los doctores Bidau y Vocos adhirieron al voto que antecede.-

Conforme al acuerdo precedente, se confirma en lo principal la sentencia apelada, modificándose el monto de la condena, el que queda fijado en la suma de $ 100.325, confirmándose también lo referente a intereses y costas de la alzada.-

FRANCISCO J. VOCOS - EDUARDO A. ORTIZ BASUALDO - JOSE F. BIDAU.

Rev. LA LEY del 4-7-959 - págs. 2,3 y 4.-

Poder Ejecutivo Nacional
SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº 948.-

ESTATUTO DEL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL - RENUNCIA - NOMBRAMIENTOS - RETENCION DEL CARGO.

Expte. R. 583.902/58.-

BUENOS AIRES, agosto 6 de 1958.-

OBJETO: Pedido Lic. extraordinaria Ing. JOSE MARIA RUBIO.-

SEÑOR ABOGADO JEFE:

La situación planteada en estas actuaciones es de particular interés en el orden administrativo, desde el momento que se vincula con la estabilidad de los agentes de la administración del Estado. Además, la falta de antecedentes relativos a casos similares, convierten al que consideraremos, en un precedente de importancia para el futuro.

Efectivamente, si bien es cierto que la presentación de fs. 1 tiene por objeto un pedido de licencia, en realidad presenta una cuestión de previa resolución, que es la situación del Ing. RUBIO dentro de la Administración Nacional.

Facilmente se percibe que si se considera al causante excluído de la misma, -a raíz de las circuntancias que -

examinaremos más adelante-, es innecesario entrar a estudiar la procedencia o improcedencia del pedido de licencia. Y viceversa, recién si se resuelve que el Ing. RUBIO sigue revistando calidad de agente del Estado, corresponderá tratar la solicitud de licencia.

Comenzaremos, pues, por referirnos al primero de los aspectos.

-I-

1º) Antecedentes: El Ing. JOSE MARIA RUBIO ingresó en la Comisión Nacional de la Energía Atómica el 12 de noviembre de 1952. Por Decreto Nº 11.809/56 le fué asignada la categoría de Jefe de División de 1ra., con anterioridad al día 1/1/55. Posteriormente, por Decreto Nº 384/55, del 6/X/55 fué designado miembro de dicha Comisión y a continuación, por Decreto Nº 6.010/56, se le asignó la categoría de Jefe de Departamento de 1ra. Luego, por Decreto Nº 22.499/56, del 19/12/56, fué nombrado miembro del Directorio de la actual Comisión, y finalmente por Decreto Nº 1.012, del 9 de junio del año en curso, le fué aceptada la renuncia que presentara a este último cargo.

Obsérvese que su categoría escalafonaria le va siendo dada por los Decretos Nº 11.809/55 y 6.010/56. Corresponde entonces aclarar, que si bien ulteriormente se lo refiere a otras categorías dentro del escalafón de la C.N.E.A., ello es al solo efecto de la fijación de sus remuneraciones. En este sentido, hemos tenido a la vista el memorandum 1902 bis, del señor Presidente del Directorio al señor Jefe del Departamento de Administración, donde claramente se indica que a los Directores se les fija la remuneración "correspondiente a Oficial Superior Principal-categoría 2", pero no que se les asigne esta categoría escalafonaria.

Advertimos, asimismo, que es preciso no dejarse inducir a error al examinar la planilla de "Promociones o modificación de remuneraciones" del legajo personal del causante, la cual, por una necesidad de síntesis, no consigna claramente las circunstancias antedichas.

Hechas las aclaraciones precedentes, se nos presenta este interrogante: Continúa el Ing. RUBIO perteneciendo al personal de la C.N.E.A. y, en caso afirmativo, en qué categoría?.

2º) Falta de normas legales que resuelvan este interrogante: No existe ninguna disposición de orden legal que contemple el caso en estudio. Tampoco nos ha sido posible encontrar antecedentes administrativos al respecto, por lo cual resulta forzoso recurrir a la vía interpretativa para dilucidar la cuestión.

Advertiremos, que a la fecha de nombramiento del Ing. RUBIO como Director de la C.N.E.A., (19/XII/1956), aún no se encontraba en vigencia el Estatuto para el Personal Civil de la Administración Pública Nacional, cuyos artículos 2, inc. d), 13, 14 y 15, evitan cualquier duda respecto casos similares, producidos posteriormente a su sanción.

Por las disposiciones citadas en el párrafo precedente, que "brevitatis causa" omitimos transcribir, cualquier designación de empleados públicos para cargos colegiados temporarios, debe ser efectuada con expresa mención de lo que es con retención de su categoría, para que el agente pueda ser restituído a la misma a la finalización de sus funciones temporarias (art. 13, Decreto-Ley nº 6666/57) (¹).

Pero esta norma legal, como dejamos dicho, no es aplicable al caso sometido a dictamen, por cuanto el 19/XII/56, fecha en que se designó al Ing. RUBIO miem

(¹) Ver Digesto Administrativo Nº 254.-

bro del Directorio de la C.N.E.A. aún no había sido sancionada.

Ante la falta de preceptos legales que rijan el caso, es conveniente hacer una referencia doctrinaria, aunque sea escueta, de la situación jurídico-administrativa de los funcionarios públicos, especialmente en cuanto a su derecho a la estabilidad en el empleo.

3º) La estabilidad de los agentes de la administración del Estado: Es preciso hacer notar la distinción conceptual existente entre "categoría" y "cargo". La primera se refiere exclusivamente a la calidad o situación jurídica de una persona, que se traduce en una determinada ubicación dentro del escalafón. En cambio, el cargo está condicionado al desempeño de una función específica. De donde resulta posible tener categoría (calidad o condición) de agente del Estado, sin desempeñar un cargo específico dentro de la Administración, pero no lo inverso.

El derecho de la estabilidad dentro de la función pública, debe considerarse un desideratum, como bien lo indican los tratadistas BIELSA y VILLEGAS BASAVILBASO, este último actual Ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Por otra parte, tal estabilidad ha sido legalmente consagrada en el orden nacional por el Decreto-Ley Nº 6666/57 e integra la plataforma política del Poder Ejecutivo de la Nación.

Pero, este derecho a la estabilidad no ampara el cargo (cuyo desempeño puede estar condicionado a diversos factores circunstanciales), sino que proteje exclusivamente la calidad o condición de empleado o funcionario del Estado y está intimamente ligado al derecho a la carrera, que también está reconocido por la doctrina administrativa y consagrado por la Ley.

El legislador ha dado tanta importancia a estos derechos, que los ha asegurado permitiendo el recurso -

judicial en los casos en que son negados.

En consecuencia, estimamos que se debe ser sumamente prudente al considerar situaciones cuya resolución pueda implicar una negación de estos principios.

4º) Consideración concreta de la situación planteada: En el caso que examinamos se plantea un importante interrogante y es el relativo a la categoría a la cual perteneció el Ing. RUBIO mientras desempeñó su función temporaria como Director de la C.N.E.A.

En el escalafón de la Administración Nacional no existe la categoría de "Director de Repartición Autárquica", dado que no se trata de una categoría sino de un cargo, tampoco existe en el escalafón aplicable a la Institución, aprobado por el Directorio por Resolución Nº 80/58.

Respecto este último escalafón, es de hacer notar que, toda vez que no ha sido aprobado por el Poder Ejecutivo, sólo puede tener valor en el orden interno y en consecuencia, deben ser tenidas en cuenta las categorías establecidas en el escalafón general para la Administración Nacional.

De donde se desprende, que mientras fué Director, el Ing. RUBIO revistó en el escalafón de la Administración Nacional como Jefe de Departamento de 1ra. (Decreto Nº 6.010/56). En consecuencia, al dejar su cargo temporario, continúa en aquella categoría, tanto más cuanto, como se ha dicho más arriba, en la fecha en que se dictó el Decreto de nombramiento para el cargo temporario, no existía disposición legal que exigiese manifestación expresa de retención de categoría.

Es de importancia señalar que el Decreto-Ley 6666/57 indica taxativamente las causales por las cuales los agentes de la Administración Pública dejan de pertenecer a la misma, y ellas son: renuncia, cesan-

tía y exoneración.

Puede considerarse que el presentante de fs. 1 se - halla involucrado en alguna de estas tres situaciones?

Evidentemente no.

Descartando la cesantía y exoneración, que no vie - nen al caso, quedaría por considerar la renuncia. Es cierto que el Ing. RUBIO la presentó con fecha 2 de - mayo del año en curso, pero la misma y su aceptación por Decreto Nº 1.012/58 lo fueron al cargo de Direc - tor de la C.N.E.A.

Como comentario final debe considerarse que si un a gente de la administración nacional es designado para el desempeño de un alto cargo temporario en la misma, debe presumirse que ello ha sido consecuencia del re- conocimiento de su idoneidad, y resultaría un contra- sentido que tal nombramiento temporario significase - la pérdida o forzoso abandono de la carrera adminis - trativa, al producirse la finalización de las funcio- nes temporarias que le fueron confiadas.

Por lo tanto, a juicio de los suscriptos debe consi derarse que el Ing. JOSE MARIA RUBIO continúa revis - tando en la Administración Nacional, con la categoría de Jefe de Departamento de 1ra., para la cual fué de- sigando por Decreto Nº 6.010/56 y de la que no ha si- do privado por ninguna disposición legal, ni por re - nuncia.

-II-

Concluyéndose que el causante sigue revistando su - calidad de agente del Estado, corresponde considerar la procedencia del pedido de licencia extraordinaria.

A criterio de los suscriptos, debe hacerse lugar a la misma, en mérito de lo expuesto por el art. 31 del

Decreto Nº 12.720/53 (¹), modificado por el 13.800/56.-

Fdo. DR. ENRIQUE ZALDIVAR
Asesor Letrado

Fdo. DR. JUAN E. BAZET
Asesor Letrado

Expte. R. 583.902/58.-

BUENOS AIRES, agosto 7 de 1958.-

OBJETO: Pedido Lic. extraordinaria Ing. JOSE MARIA RUBIO.-

SEÑOR PRESIDENTE:

Atento a la circunstancia de que la Disposición Nº 1 adoptada por el suscripto referida al trámite interno en esta Asesoría ha motivado una situación no resuelta hasta la fecha y al pedido con carácter urgente, de este dictamen, acompaño el correspondiente a los Dres. Juan E. BAZET y Enrique ZALDIVAR, producido en el día de ayer.

Ambos, después de analizar detalladamente los antecedentes de la actuación administrativa del interesado, Ing. JOSE MARIA RUBIO, realizan una construcción jurídica, y concretamente consideran el caso planteado llegando a la conclusión de que "sigue revistando su calidad de agente del Estado".

(¹) Ver Digesto Administrativo Nº 15.-

Por mi parte, entiendo que la solicitud de licencia - con que se inicia este expediente estaría encuadrada en el artículo 31 del Reglamento de Licencia si el interesado fuera, actualmente, funcionario de esta Comisión Nacional.

Aclarar su situación administrativa, determinando con precisión si el recurrente -después de la aceptación de - su renuncia al cargo de miembro del Directorio- sigue siendo o no funcionario de este Organismo, traerá como lógica consecuencia la posibilidad legal de acordar o no la licencia solicitada.

El ingreso del Ing. RUBIO a este Organismo se produce en noviembre de 1952 (fs. 6).

Posteriormente, por decreto 11.809 del 25 de julio de 1955 (fs. 7) es nombrado Jefe de División de 1ra. y desempeña ese cargo hasta su designación como miembro de la C. N.E.A. dispuesta por decreto 384 del 6 de octubre de 1955 (fs. 8 y 9).

El decreto 22.499 del 19 de diciembre de 1956 (fs. 10) nombra al Ing. RUBIO miembro del Directorio de la Comisión Nacional de Energía Atómica.

Entre las fechas de los dos últimos decretos: 25 de - julio de 1955 y 19 de diciembre de 1956, se dicta el decreto 6010/56, presumiblemente de abril de 1956 -cuya copia no ha sido posible obtener- por el cual el interesado ha sido promovido al cargo de Jefe de Departamento.

Su aceptación y el desempeño del cargo de miembro de la Comisión (Decreto 384, fs. 8 y 9) produjo una transformación en la relación jurídica existente entre la Comisión Nacional y él, extinguiendo el denominado contrato - administrativo de empleo o función pública, de Jefe de División, que desempeñaba hasta ese momento.

Su promoción al cargo de Jefe de Departamento (Decreto 6010/56) dictado mientras actuaba en su calidad de miembro del Directorio, no modifica la situación de fondo, que

se encuentra en el hecho de poder, o no, ejercer un cargo superior (miembro del Directorio) manteniendo la posibilidad legal de ejercer a posteriori otro inferior (Jefe de Departamento).

Podría, al respecto, razonarse que la extinción de que se ha hablado no se ha operado por falta de una renuncia expresa al cargo de Jefe de División, por la falta de la aceptación consiguiente; por su promoción a Jefe de Departamento y la falta de renuncia al mismo, pero, tal como lo sostiene VILLEGAS BASAVILBASO en su tratado de Derecho Administrativo, Tomo III, pág. 573: "La voluntad del dimisionario puede ser expresa o presunta, esto es, manifestada por escrito o por hechos. La dimisión presunta emergente ex rebus ipsis, de abandonar definitivamente el servicio, da derecho a la administración pública a tenerla como presentada, y a proceder unilateralmente"; y en la página 567 refuerza este criterio al sostener que "si el nombramiento es el acto administrativo formal mediante el cual se crea la relación jurídica de empleo o función, su extinción, en todos los casos, no requiere un acto formal determinado, pero es indispensable la existencia de una causa legal". Estimo, de acuerdo con lo transcripto que los hechos que manifiestan la dimisión al cargo de Jefe de División y la causa legal existente que determinó la extinción de esa relación jurídica se encuentra en la aceptación y en el desempeño del cargo de miembro de la Comisión.

El cargo de Jefe de Departamento no fué desempeñado por el recurrente por lo cual puede aplicársele la misma argumentación.

Tanto el Poder administrador (mediante el decreto Nº 384) como el interesado (en virtud de la aceptación y desempeño en el nuevo cargo) han considerado -sin otra formalidad- extinguida la relación jurídica que existía cuando el interesado actuaba como Jefe de División.

Ello es evidente, en lo que respecta al primero, porque cuando el Poder administrador considera que no debe cesar esa relación jurídica de empleo, lo deja expresamente establecido.

En verdad, no existían normas que así lo dispusieran pero la Reglamentación del Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública (art. 13) que dice: "La retención de categoría a que se refieren los arts. 13 y 14 del Estatuto, será facultativa del empleado en todos los casos en que el nombramiento en un nuevo cargo, emane del Poder Ejecutivo o de autoridad competente y debe hacerse constar en forma expresa", vino a ratificar y legalizar la costumbre administrativa seguida en distintas épocas.

Los ejemplos que traigo a colación confirman lo manifestado precedentemente:

1º) Por Decreto Nº 2.369 de 1950 fué designado Director General de Migraciones el señor Edmundo Gnavi, con retención del cargo de Inspector de Región que desempeñaba en la Dirección General de Enseñanza Primaria. Esa previsión de "retención del cargo" le permitió al terminar su gestión en Migraciones volver a su anterior puesto.

2º) A fs. 11 acompaño copia del Decreto-Ley Nº 15.713 del año 1956 cuyo art. 5 expresamente establece que "Las personas que se designen por el art. 1 que desempeñen otros cargos en la Administración Pública Nacional, retendrán éstos mientras duren las funciones que se les encomiendan por el presente decreto-ley". También, en virtud de esta disposición por la que se retienen sus cargos anteriores pudieron ellos, nuevamente desempeñarlos, al cesar como miembros del Consejo Nacional de Educación.

A fs. 12 agrego la publicación de esa misma Reparti ción, en la que se transcribe el Decreto Nº 1.652 del año 1957, con idéntica reserva.

En cambio, cuando el Poder Administrador no estatuye expresamente la retención del puesto que el agente o funcionario ejercía, aquél queda vacante y como consecuencia puede nombrarse a otro funcionario titular en su reemplazo.

Entendiéndolo así, el mismo Consejo Nacional de Educación pudo, por Resolución de junio del corriente año, llenar la vacante de Inspector Técnico General de Escuelas Particulares producida como resultado del nombramiento de su ex-Inspectora Técnica General Srta. María Tizón (Decreto Nº 598, Fs. 13) en carácter de vocal.

La Srta. Tizón, una vez que termine su actuación de vocal no podrá volver a ejercer el puesto de Inspectora General, ya cubierto por otro titular, pues ha optado --por dimisión en los hechos- por el desempeño del cargo de vocal.

Por otra parte, es indiscutible que el ejercicio en un mismo organismo administrativo de un cargo superior y el de otro inferior configura incompatibilidad. Lo dispone entre las inhabilidades para ser Director de la Comisión Nacional el art. 8 punto 1) del Decreto 22.498/56 - para aquéllos que "ejerzan otra función o empleo", y lo establece el art. 1 del Decreto 1134 de 1932 al decir que "Una misma persona no podrá desempeñar más de un empleo sea este nacional, provincial o municipal..."

Refiriéndose a la interpretación que debe darse a la incompatibilidad parte BIELSA (Derecho Administrativo T. II, pág. 156) de presupuestos lógicos que los sintetiza en reglas, cuya primera es la siguiente: "Cuando se trata de dos o más empleos, uno de los cuales es jerárquicamente inferior al otro, ellos no pueden ser desempeñados por la misma persona; por ejemplo, profesor en una cátedra y a la vez auxiliar o ayudante de la misma".

Pero, aunque en el caso sub-examen no hubo desempeño contemporáneo de dos cargos, uno subordinado o inferior

jerárquicamente al otro, existiría, de todos modos, una especie de incompatibilidad entre el ejercicio efectivo de un cargo y la latente o potencial posibilidad de ejercer el otro.

La costumbre administrativa de que dan cuenta los decretos acompañados hace que la designación con reserva o "retención del puesto" a que se obliga el Poder Administrador deje sin efecto esa especie de incompatibilidad.

Queda por manifestar que por parte del interesado tampoco hubo reserva oportuna, expresada en alguna forma a su aspiración de conservar su puesto anterior, que pudiera justificar aunque en mínima parte la adopción de una medida acorde con sus deseos, por todo lo cual considero que el recurrente, Capitán de Fragata JOSE MARIA RUBIO ha dejado de ser funcionario de esta Comisión Nacional no siendo procedente, entonces, otorgar la licencia solicitada a fs. 1.

Desde otro punto de vista, considero que una persona que ha sido honrada y distinguida con la designación de miembro del Directorio de la Comisión Nacional de la Energía Atómica y ha desempeñado con capacidad y dedicación el cargo, no tendría que verse perjudicada, precisamente, por haberlo desempeñado. Hay una falta de equidad que podría subsanarse con una reincorporación oportuna, mediante nuevo nombramiento, si ella fuere factible.-

Fdo. DR. ELISEO C. LEGASA
Jefe Asesoría Letrada

Expediente Nº 3.461/58 (Reservado).
Providencia Nº 199.-

//nos Aires, 24 de septiembre de 1958.-

Vuelva a la Comisión Nacional de la Energía Atómica llevando a su conocimiento que la situación administrativa del Capitán de Fragata (R.E.) don JOSE MARIA RUBIO no puede ser resuelta en base a las prescripciones del Estatuto del Personal Civil, por ser anterior a la sanción de éste, y no tener sus normas alcances retroactivos.

No siéndole, pues, aplicables las disposiciones contenidas en el artículo 13º de dicho cuerpo legal y su reglamentación, debe considerase el caso recurriendo a la vía interpretativa, a efectos de suplir la inexistencia de antecedentes administrativos que sirvan de base para esos efectos.

En tal sentido, esta Dirección General considera que si bien el interesado no hizo renuncia expresa de su cargo de Jefe de División al ser designado miembro del Directorio de la Comisión Nacional de la Energía Atómica, la misma está implícita en la aceptación, y consecuente desempeño, del cargo aludido.

Este razonamiento es aplicable al cargo de Jefe de Departamento, que le fué conferido mientras ejercía el de Director de la Comisión Nacional, y que no llegó a desempeñar.

En consecuencia, se comparte el dictamen obrante a fs. 14/17 de estos actuados, cuyas citas no hacen sino confirmar el criterio sustentado, concluyéndose que, al

no existir expresa mención de que la designación en el cargo de miembro del Directorio de ese organismo se efectuase con retención del puesto que ocupaba el causante en el escalafón jerárquico respectivo, el mismo ha dejado de pertenecer a la dotación de la Comisión Nacional al hacer renuncia al cargo antedicho.

Sirva la presente de atenta nota de remisión.-

Fdo. JOSE LUIS FRANGI
Director General
Servicio Civil de la Nación.

Boletín Nº 949.-

SUELDO (Prescripción)

1.- La prescripción de cinco años establecida en el art. 4027, inc. 3º del Código Civil, rige respecto de los estipendios de los funcionarios públicos mientras,no exista disposición administrativa que establezca o - tra cosa.

2.- El término de prescripción de la acción de un emplea do público por cobro de haberes, comienza a correr - desde que ha nacido el derecho que ejerce, es decir, desde el momento mismo en que por la prestación del servicio se le debió hacer efectiva la asignación - mensual correspondiente y no se lo hizo.

3.- El hecho de que el empleado público continúe en funciones, no constituye impedimento que suspenda la prescripción de la acción por cobro de haberes, pues ninguna norma constitucional, legal o reglamentaria le prohibe reclamar el reconocimiento de sus dere- - chos por vía administrativa o judicial.

SC B.AIRES, abril 14-959. - Pla, Carmelo J. c. Prov. de Buenos Aires.

La Plata, abril 14 de 1959. - 1a. Es fundada la defensa de prescripción? Caso negativo: 2a. Lo es la demanda?.

1a. cuestión. - El doctor Acuña Anzorena dijo:

El doctor Carmelo J.Pla, por derecho propio, deduce demanda contenciosoadministrativa contra el Poder Ejecutivo, solicitando de esta Corte revoque el decreto 17896, de fecha 2 de octubre de 1957, dictado en el expte. Nº.

2306-108165, del mismo año, por el cual no se hace lugar - al reconocimiento de los servicios prestados por él a la Administración provincial y correlativo pago de la diferencia de haberes.

Expone, que por disposición 2156 del 5 de febrero de 1948, fué designado secretario general, interino, de la Dirección General de Rentas. En tal oportunidad revistaba como oficial 1º con una asignación mensual de $ 850, siendo que el cargo de secretario general estaba considerado funcionalmente en la ley de presupuesto vigente entonces, con una retribución de $ 1.200 por mes.

Dicho interinato -agrega- se prolongó hasta el 15 de - noviembre de 1948, fecha en que por decreto del Poder Ejecutivo fué designado titular en el cargo que venía ocupando, pero sin que en el lapso que duró aquél se le computara el sueldo a que tenía derecho, de acuerdo al presupuesto que entonces regía, por lo cual el 18 de febrero de 1957 promovió el expte. 2306-108165, reclamando el pago de diferencia de haberes correspondientes.

Esta solicitud -advierte- fué declarada procedente por la Dirección General de Administración del ministerio del ramo, por el contador general de la provincia y por el asesor general de gobierno, pero llegado el expediente en vista al fiscal de Estado, este funcionario se expide por la improcedencia de la reclamación fundado únicamente en las normas de prescripción establecidas en los arts. 3951 y - 4027, inc. 3º del Código Civil, y en atención a este dictamen, el decreto 17.896/57, cuya eficacia jurídica cuestiona, le niega el derecho a la percepción de la diferencia - de haberes referida.

Luego de sostener la procedencia de la acción contencioadministrativa, se ocupa de la prescripción que sirve de fundamento al decreto denegatorio, la que estima inoperante, en primer lugar, por ser la común de 10 años a que alude el art. 4023 del citado Código la que corresponde; en -

segundo lugar, porque aun admitiendo que fuese la prescripción corta la aplicable, su término recién empezaría a correr desde el momento en que se practique la liquidación de las diferencias, lo que recién tuvo lugar en estos actuados, y en tercer lugar, porque si el fundamento de la prescripción de 5 años no es otro que "el peligro de que el deudor sea llevado a la ruina por la acumulación durante un largo número de años de las obligaciones correspondientes a los diversos períodos", ese peligro no se da en el caso por lo ínfimo de la suma que se reclama con relación al patrimonio económico del Estado.

Al contestar la demanda, el fiscal de Estado solicita su rechazo, con costas. Alega la prescripción de la acción instaurada por considerar que desde el momento en que cesó en el desempeño que motiva el reclamo hasta el 18 de febrero de 1957, fecha de promoción del expediente administrativo, ha transcurrido con exceso el plazo que determina el art. 4027, inc. 3º del Código Civil.

Aduce, asimismo, que el término de esta prescripción comienza a correr desde que el actor cesó en su situación de interino y no desde su separación del servicio, según pretende, porque no se trata aquí del estipendio normal del empleado o funcionario, sino de diferencias de sueldos por haberse desempeñado, sin acto formal de nombramiento, en un cargo de mayor jerarquía.

Estimo procedente la defensa de prescripción opuesta. Por lo que hace a la disposición aplicable, es doctrina imperante (Salvat, "Obligaciones", ed. 6º, por Galli, t. 3, núm. 2199, letra "b", p. 551; Baudry-Lacantinerie y Tissier, núm. 776; Laurent, t. 32, núm. 441; Planiol, t. 2, núm. 639), que esta Corte ha seguido con criterio invariable (Ac. y Sent., serie 20a., t. 7, p. 32; serie 21a., t. 8, p. 484; serie 22a., t. 1, ps. 34 y 42, entre otros), que la prescripción de 5 años establecida en el art. 4027, inc. 3º del Código Civil rige respecto de los

estipendios de los funcionarios públicos mientras no exista disposición administrativa que establezca otra cosa.

Tampoco es para mí dado que su plazo comienza a correr, conforme al art. 3956 del Código citado, desde la fecha del título de la obligación, esto es, como lo tiene declarado la Corte Suprema Nacional in re "Raíces, Eduardo H. c. Gobierno nacional", octubre 23 de 1944, desde que ha nacido el derecho que el actor ejerce en esta demanda, o sea, desde el momento mismo en que por la prestación del servicio se le debió hacer efectiva la asignación mensual correspondiente y no se le hizo (Ac. y Sent., serie 22a., t. 1, ps. 34 y 42).

En el escrito de fs. 15 bis se sostiene que "el empleado público, en tanto, en cuanto se encuentre desempeñando funciones, se halla inhibido de intentar cuestiones contra la Administración cuyo elenco integra". No lo entiendo así. Ninguna norma constitucional, legal o reglamentaria prohibe a un empleado de la Administración el reclamo ante ella o ante la justicia contra lo que entiende como un desconocimiento de sus derechos.

En consideración a lo expuesto y teniendo en cuenta que las diferencias de haberes cuyo pago se reclama, se habrían devengado desde el 5 de febrero de 1948 hasta el 15 de noviembre del mismo año y que las actuaciones administrativas gestionando su cobro se iniciaron el 15 de febrero de 1957, el plazo de 5 años que señala el art.4027, se encontraría cumplido con exceso, razón por la cual voto a la cuestión planteada por la afirmativa.

Los doctores Martocci, Trigo Viera, Nápoli, Fernández, Portas y Quijano, votaron por la afirmativa, por fundamentos del doctor Acuña Anzorena.

Atento el resultado obtenido al votarse la la. cuestión planteada, el tribunal resolvió no considerar la 2a. cuestión planteada.

Por ello, y lo expuesto en el acuerdo que antecede - se rechaza la demanda interpuesta; reponga el sellado la parte actora (art. 72, Código de Proced.).-

ARTURO ACUÑA ANZORENA - JOSE M.MARTOCCI - FELIX F. TRIGO VIERA - RODOLFO A. NAPOLI - VICTOR M. FERNANDEZ - NESTOR L. PORTAS - ANTONIO P. QUIJANO.-

Rev. LA LEY del 9-7-959 - pág. 3.-

Poder Ejecutivo Nacional
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín N° 950.-

ESTATUTO PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL (Arts. 34, 35 y 40) - RETROGRADACION - SANCIONES

Cde. Exp. 33.077/57

Señor Director de Servicios Sociales:

Por las presentes actuaciones el señor Emilio J.L.Mateos agente de la ex-Dirección de Combustibles Vegetales y Derivados que fué incorporado a este Ministerio por Decreto nº 7.296/57, en la categoría de Oficial 6° (m$n. 1.700.-), interpone reclamo por entender que tal designación implica una rebaja de sus remuneraciones y una retrogradación prohibida por los artículos 8°, 15° y 17° del Decreto nº 33827/44.

Al respecto esta Dirección General se permite manifestar:

1° - El citado Decreto nº 33.827/44 no está en vigencia pues, desde el 17 de junio último, rige el Estatuto del Personal Civil de la Administración Nacional, aprobado por Decreto-Ley nº 6.666/57(¹);

2° - El punto de vista del recurrente es, de todas maneras, equivocado, ya que el artículo 15° del Decreto 33827/44 mencionado precedentemente, establecía que: "ningún agente podrá ser privado de sus haberes ni sufrir des

(¹) Ver Digesto Administrativo nº 254.-

cuentos en los mismos salvo en los casos previstos - por las leyes y reglamentos", no especificando, con - trariamente a lo aducido por el recurrente, que se - trataran de sueldos "básicos".Los artículos 8° y 17°, también citados, no tienen relación ninguna en el ca so de qué se trata, pues el primero se refería a una posible indemnización en caso de cesantía y el segundo a las condiciones que debían mediar para la provisión de cargos directivos;

3° - Por otra parte viene a reforzar la convicción de que no se ha producido rebaja del sueldo básico lo dispues to por el art. 4° del Decreto n° 6.673 del 17 de ju - nio último - aprobatorio del presupuesto de este Mi - nisterio- que establece el reglamento de adicionales por escalafonamiento para el personal administrativo, y técnico, el cual, en su punto 2°, aclara que:" los adicionales de que trata el punto 1°, serán considera dos como parte integrante de la remuneración básica - mensual, a todos los efectos establecidos por las dis posiciones en vigor". Por lo tanto la remuneración bá sica del recurrente es de m$n. 2.000.- superior a la que tenía anteriormente en la ex-Dirección de Combus- tibles Vegetales y Derivados (m$n. 1.920.-);

4° - A mayor abundamiento, cabe recordar que el Tribunal - de Cuentas de la Nación, por Resolución n° 770/57 (") ha ratificado el concepto de que dicho adicional tie- ne el carácter de remuneración básica mensual;

5° - También si se consideran las remuneraciones totales - percibidas en la actualidad por el agente, se observa que este resulta beneficiado con la incorporación. En

(") Ver Digesto Administrativo n° 266.-

efecto, sus remuneraciones mensuales en la ex-Dirección de Combustibles Vegetales y Derivados totalizaban $ 2.262.- y en su nueva situación de revista $ 2.640.-;

6º - Todo lo que precede documenta que no existe perjuicio en el haber del agente recurrente. En cuanto a la legalidad del procedimiento en sí mismo, está confirmada por numerosos casos similares de incorporaciones de adscriptos que el Poder Ejecutivo ha sancionado sin observación, previa intervención de todos los organismos fiscales pertinentes;

7º - Y es que, desde el punto de vista práctico, no puede caber otra solución para ese tipo de situaciones.- En efecto, debe tenerse en cuenta que se trata de materializar la incorporación del agente, logrando la equivalencia de remuneraciones que se componen de elementos completamente distintos, pues corresponden a regímenes de retribuciones básicas y adicionales también distintos;

8º - El Decreto nº 7.025/51, en su artículo 21º párrafo 2º y 3º, ya había consagrado la legalidad de un procedimiento similar al disponer:

"Para los nombramientos de agentes que se efectúen en lo sucesivo, los distintos Ministerios y Reparticiones deberán considerar la remuneración total con que deba retribuirse la tarea del agente a designar, de forma tal que dicha remuneración sea la que resulte de la suma del sueldo o jornal básico de la designación, con más los beneficios del Decreto nº 7.025/51. Así por ejemplo: si para el desempeño de una tarea de

terminada se considera equitativo asignar al agente una retribución total de m$n. 600.- mensuales,no deberá designársele en esta categoría de presupuesto - sino en la de m$n. 500.-, ya que aplicando a dicha - categoría el porcentaje del 20% del Decreto nº 7025/51, se obtiene la retribución de m$n. 600.- considerada.-

Norma que cabe aplicar por extensión en el presente caso, en que se produce, en realidad, un "nombramiento" en una repartición distinta.-

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION, agosto 29 de 1957.-

Fdo. ABEL I. GOUFFIER
Director General de Administración

Expte. nº 33.077/57.-

Señor Director de Servicios Sociales:

Se relacionan las presentes actuaciones con el reclamo efectuado por el agente, don Emilio L.J. Mateos, con motivo de que por Decreto nº 7296 de fecha 27/6/57 fuera absorbido por el presupuesto del Ministerio con sueldo - básico de m$n. 1.700.- situación que lo perjudica en virtud de que su sueldo básico en el E.N.D.E. era de m$n. - 1.920.-

El citado agente apoya su petición en lo dispuesto -

por los arts. 8, 15 y 17 del Decreto nº 33.827/44.-

La Dirección General de Administración se opone a lo solicitado argumentando que el citado Decreto nº 33.827/44 - no estaba en vigencia al dictarse el Decreto nº 7296/57 - que incorporó al agente al Ministerio.-

Sostiene, además, que no se ha producido rebaja en el sueldo básico, porque de conformidad con lo dispuesto en el art. 2º del Reglamento de adicionales por escalafonamiento, el adicional es considerado como parte integrante, de la remuneración básica mensual a todos los efectos establecidos por las disposiciones en vigor, y que en consecuencia la remuneración básica del recurrente es de m$n. - 2.000.- superior a la que tenía en la ex-Dirección de Combustibles Vegetales y Derivados que era de m$n. 1.920.-

Por lo tanto, concluye, no ha existido perjuicio para el citado agente, el que por lo contrario, ha resultado beneficiado ya que con la incorporación percibe en total m$n 2.640.- en vez de m$n. 2.262.- que percibía con anterioridad.-

Esta Dirección General no comparte el criterio sustentado por la Dirección General de Administración con respecto a lo que debe entenderse por sueldo básico.-

A su juicio y de conformidad con la doctrina y lo dispuesto en el art. 23 del Decreto Ley nº 23.573/56 (&) debe entenderse por sueldo básico la asignación fijada para la categoría presupuestaria pertinente.-

Por lo tanto, el sueldo básico de un agente será el que corresponda a la categoría en que fué designado o en la cual revista.-

El Reglamento anexo al art. 4º del Decreto Ley nº 6673/57 acuerda por el punto 1º un adiconal por escalafonamiento, que de conformidad con el ordenamiento de la planilla,

---

(&) Ver Digesto Administrativo nº 137.-

anexa nº 1, su monto queda determinado precisamente por el sueldo básico.-

Dicho adicional no tiene el carácter de sueldo básico y así lo entiende el punto 2º del citado Reglamento al disponer que será considerado como parte integrante de éste a los efectos de lo establecido en las disposiciones en vigor.-

Pero aún así, pese a la generalidad de sus términos, lo dispuesto en el punto 2º no podrá ser de aplicación en todos los casos, ya que sería inaplicable en situaciones como la que se contempla en el anexo 1º en donde el adicional no tiene los efectos de producir a su vez adicional,- como el básico.-

Por lo tanto, estima esta Dirección General que el señor Mateos, ha sido retrogradado en la categoría en el empleo.-

Como dicho acto significa de conformidad con lo dispuesto en el art. 34 del Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública Nacional aprobado por Decreto - Ley nº 6666/57 la aplicación de una medida disciplinaria, la que solo podría disponerse previa instrucción de sumario, con intervención del inculpado, lo que no consta en las actuaciones, cabe concluir que el mismo carece de legalidad por haberse violado el art. 40 del citado Estatuto.-

DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS, 12-6-958.-

Fdo. LUCAS SILVANO PENNA
Subdirector General de Asuntos Jurídicos

Dictamen nº 12.393.-

Expediente nº 7198/58.-
Providencia nº 207.-

//nos Aires, 30 de Septiembre de 1958.-

Vuelvan las presentes actuaciones a la Dirección General de Finanzas llevando a su conocimiento lo siguiente:

El Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública Nacional (Decreto-Ley nº 6666/57), al mencionar la retrogradación de un agente como medida disciplinaria - (arts. 34º, 35º, 40º) especifica "retrogradación de categoría".- Debe pues determinarse claramente, ya que ello no surge de lo actuado precedentemente, si la categoría - remunerada con un sueldo básico de $ 1.920.- en Combustibles Vegetales y Derivados (E.N.D.E.), era jerárquicamente equivalente, superior o inferior, a la de Oficial 6º - del ex-Ministerio de Comercio e Industria, a la que le corresponde un sueldo básico de $ 1.700.-, con un adicional técnico de $ 300.-, que conforma parte integrante de la - remuneración básica mensual.-

A este último respecto, esta Dirección General disiente con lo expresado a fs. 8 por la Dirección General de Asuntos Jurídicos de aquella jurisdicción, ya que el adicional técnico produce a su vez un adicional, pues incide en la determinación de la Bonificación por costo de vida- que juega en base a la suma de sueldo básico y adicional técnico-, siendo computable a efectos jubilatorios, sueldo anual complementario, etc.- No podría, lógicamente, pretenderse que el adicional técnico, al sumarse al básico , engendrara a su vez un nuevo adicional técnico, ya que de esta manera se determinaría una sucesión sin límites de nuevos adicionales, que se irían sumando a la remunera -

ción básica mensual.-

En consecuencia, de no determinarse en forma concreta una rebaja de categoría, no le son aplicables al causante disposiciones de amparo surgidas del Estatuto del Personal Civil y su Reglamentación.-

Fdo. JOSE LUIS FRANGI
Director General
Servicio Civil de la Nación

Poder Ejecutivo Nacional
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº 951.-

ESTATUTO PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL (Art. 39) - SUSPENSIONES - SANCIONES

Expediente Nº 78.939/57
y agregados.-

Señor Jefe del Departamento de Sumarios:

Atento a lo informado a fs. 3 vta. por la Dirección General de Asuntos Jurídicos, cumplo en poner en conocimiento del señor Jefe, el estado que se encuentra el expediente 78.939/57 y agregados.

Por R.M. nº 2603 de fecha 5 de Septiembre de 1957, el Dr. AVELINO BARRIO, fué destacado en comisión de servicios por el término de 45 días, a la región Noroeste Argentino a fin de realizar estudios de la fauna Herpetológicas y Ponzoñas.

En el diario "LA RAZON", en su sexta edición de fecha 7 de Octubre de 1957, publicó un artículo en el cual se hace referencia a un presunto hecho delictuoso perpetrado por el Dr. AVELINO BARRIO PEREZ, por supuesta sustracción de la parte central del cuadro "El Juicio Final", del pintor Melchor Pérez Olguín, en el Templo de San Lorenzo, siendo a raíz de ello detenido por las autoridades policiales de la ciudad de La Paz (Bolivia).

Ordenada por la Dirección General de Asuntos Jurídicos, con fecha 22 de Noviembre de 1957, la instrucción del sumario correspondiente, como primera medida se procede a tomar declaración indagatoria al Dr. AVELINO BA-

RRIO, quién manifiesta que fué autorizado por R.M. Nº2603 de fecha 5 de Septiembre de 1957, a realizar un viaje de estudio referente a los animales venenosos por el Noroeste Argentino; asimismo destaca que se trasladó, a la República de Bolivia, por autorización verbal del Dr. PIROSKY, a efectuar investigaciones zoogeográficas relativas a la fauna herpetológica. Por otra parte, dice, existía la posibilidad de aprovechar el ferrocarril Yacuiba-Santa Cruz de la Sierra próximo a inaugurarse, para el transporte de ejemplares desde Bolivia a la Argentina de serpientes y arañas, que de acuerdo a un convenio en elaboración, se remitirían a Buenos Aires en canje por sueros antiofídicos y antiarácnidos elaborados por el Instituto Malbrán; siguiendo entonces ese plan se trasladó hasta la ciudad de Santa Cruz de la Sierra ubicada en la zona sub-tropical boliviana, estudiando y coleccionando abundante material de la región.

El Dr. BARRIO, expone asimismo que en el relato del diario "LA RAZON", referente a los hechos ocurridos en Potosí (Bolivia), no se ajustan a la verdad, por cuanto el mencionado profesional, no cercenó ni hurtó el citado cuadro, pués solamente se limitó a comprar un trozo de un lienzo cuyo valor y procedencia desconocía, a una persona de Potosí.

Agrega que fué llamado a declarar por la Policía de Potosí, por haber sido denunciado por la misma persona que le vendió el trozo del cuadro. Aclarados los hechos, como resultado del sumario policial, fué sobreseído por falta de mérito. La documentación correspondiente se encuentra actualmente en Bolivia según él, para ser legalizada como corresponde y que será elevada oportunamente a este Departamento de Sumarios.

Como conclusión y salvo mejor opinión de la Superioridad esta Instrucción ratifica lo expuesto a fs. 3 de las presentes actuaciones, ya que no se tiene conocimiento o-

ficial del sobreseimiento a que se refiere el Dr. BARRIO, situación que hace aconsejable mantener su condición de suspendido en el ejercicio del cargo.-

DEPARTAMENTO DE SUMARIOS, 19 de Agosto de 1958.-

Fdo. JUAN P. DIAZ
Instructor Sumariante

Dirección General de Despacho:

Por expediente Nº 78.939/57 y agregados tramitan actuaciones sumariales tendientes a investigar la conducta del Dr. D. AVELINO BARRIO (h) el cual fué sometido a proceso en la vecina República de Bolivia, acusado de la substracción de un cuadro en un templo de la Ciudad de La Paz.

Por tal causa fué suspendido preventivamente en sus funciones por R.M. Nº 3457 del 8 de noviembre de 1957.

Consta asimismo a fs. 3 que por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores se han efectuado gestiones para obtener testimonio de la sentencia que se hubiese dictado en la causa, el cual todavía no se ha logrado.

En su declaración indagatoria el Dr. AVELINO BARRIO manifestó que había sido sobreseído por falta de mérito, pero hasta el presente no se ha podido confirmar esa aseveración.

El artículo 39º, apartado I del Decreto Nº 1471/58(*)

(*) Ver Digesto Administrativo Nº 422.-

reglamentario del Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública establece que "cuando el agente se encontrare privado de la libertad o sometido a proceso criminal por hechos ajenos al servicio, será suspendido preventivamente en su cargo administrativo. La suspensión durará, en el primer caso, hasta que demuestre su inculpabilidad con el testimonio de la sentencia firme respectiva".

Por consiguiente la cuestión que se plantea en el presente caso es si el Dr. BARRIO debe continuar suspendido preventivamente de acuerdo al precitado texto legal, no obstante que el presunto delito que le imputa habría sido cometido en el extranjero. Sobre este último aspecto nada dice el Decreto-Ley Nº 6666/57(1) ni su reglamentación.

En ausencia de toda norma aclaratoria al respecto esta Dirección General estima que cabe tener presente, por analogía, las disposiciones del artículo 1º del Código Penal, referentes al ámbito de aplicación de la ley penal. Establece ese artículo que el Código Penal Argentino se aplicará: 1º) Por delitos cometidos o cuyos efectos deban producirse en el territorio de la Nación Argentina, o en los lugares sometidos a su jurisdicción. 2º) Por delitos cometidos en el extranjero por agentes o empleados de autoridades argentinas en el desempeño de su cargo.

De acuerdo a esta norma legal el Dr. BARRIO no se encontraría en ninguna de las hipótesis que ella contempla pues el presunto delito se habría cometido fuera de la jurisdicción nacional, actuando el causante no como agente del Estado en ejercicio de un cargo sino como un simple particular.

Asimismo cabe hacer notar que en las actuaciones sumariales no existen constancias oficiales emanadas de las autoridades bolivianas o argentinas relativas a la real existencia de un proceso contra el Dr. BARRIO, habiéndose iniciado el sumario administrativo en virtud de una noti-

---

(1) Ver Digesto Administrativo Nº 254.-

cia publicada en el diario "La Razón" de esta Capital. Si bien el causante reconoce haber estado sometido a proceso, no puede descartarse la posibilidad que en definitiva no hubiera existido auto de procedimiento contra él.

Por otra parte se observa que la suspensión preventiva del Dr. BARRIO se prolonga demasiado (desde el 8 de noviembre de 1957) por dificultades en la obtención, en el vecino país, del testimonio de la sentencia que se hubiere dictado en la causa, lo cual puede errogar perjuicio fiscal si después de transcurrido un largo lapso hubiese que abonarle la totalidad de sus haberes por resultar absuelto o simplemente por eso mediar auto de procesamiento (decreto-ley Nº 6666/57), artículo 39º y su reglamentación. Por todo lo expuesto esta Dirección General estima que por tratarse de un presunto delito cometido en el extranjero, del cual no existe ninguna constancia oficial, no es de aplicación lo dispuesto por el artículo 39º apartado I del Decreto 1471/58, y que por lo tanto corresponde el levantamiento de la suspensión preventiva del Dr. BARRIO, sin perjuicio de adoptarse las medidas que sean pertinentes una vez que se obtenga el testimonio de la sentencia, pero que antes de adoptarse esa decisión será prudente remitir las actuaciones a la Dirección General del Servicio Civil de la Nación - Secretaría de Hacienda- de acuerdo a lo preceptuado por el Decreto Nº 2477/58 (1), solicitando su opinión sobre el punto.

Nº 1290 - D.

Setiembre 4 de 1958.-

Fdo. JUAN G. DE SOUZA LOBO
Director General
de Asuntos Jurídicos

---

(1) Ver Digesto Administrativo Nº 432.-

D.A. Nº 951.-

Expediente Nº 90.178.-
Providencia Nº 204.-

//nos Aires, 30 de septiembre de 1958.-

Vuelvan las presentes actuaciones a la Dirección General de Despacho del Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública manifestando, acerca de la situación planteada por la suspensión preventiva del Dr. AVELINO BARRIO, - por presunta comisión de un delito en la República de Bolivia, que esta Dirección General considera lo siguiente:

El caso de referencia debe resolverse frente a las disposiciones del artículo 39º del Decreto Nº 1471/58, reglamentario del Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública Nacional, aprobado por Decreto-Ley Nº 6666/57.

El artículo anotado precedentemente no contempla en - forma expresa casos como el que se analiza, es decir procesos de naturaleza penal que se tramitan en países ex- - tranjeros. No obstante si tal proceso existiera, y la persona que dió lugar al mismo estuviera representando al Estado en alguna misión oficial, la aplicación del mismo resulta procedente.

Atento la naturaleza punitiva que revisten las disposiciones legales contenidas en las leyes citadas en el - primer párrafo, su aplicación debe hacerse con carácter - restrictivo, y siempre teniendo en cuenta los principios generales del derecho en materia penal, es decir que en - caso de duda debe estarse a favor del procesado.

Por lo expuesto se considera, teniendo en cuenta lo manifestado por el agente de referencia y las gestiones realizadas para obtener los elementos de prueba que rati-

fiquen lo por él declarado, que podría reintegrarse a sus funciones con carácter provisorio y ad-referendum de lo que resulte en definitiva al tener a la vista los informes requeridos oportunamente.

Sirva la presente de atenta nota de remisión.-

Fdo. JOSE LUIS FRANGI
Director General
Servicio Civil de la Nación.

Poder Ejecutivo Nacional
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº 952.-

ESTATUTO PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL (Art. 41) - SUMARIOS

Expediente Nº 90.177/58.-
Providencia Nº 202.-

//ñor Subsecretario de Hacienda:

En las presentes actuaciones, la Secretaría de Obras Públicas solicita la interpretación que debe darse al apartado XIII, art. 41 del Decreto Nº 1471/58 (1), reglamentario del Decreto-Ley Nº 6666/57 (2), que aprueba el Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública, frente a lo dispuesto en el art. 45 del Decreto Nº 34952/47, reglamentario de la Ley Nº 12.954, que estatuye sobre las funciones del Cuerpo de Abogados del Estado.

El art. 2º del anotado Decreto Nº 1471/58, establece que se derogan todas las disposiciones anteriores que se opongan a las normas que se dan en la reglamentación aprobada.

En virtud de esta norma se considera que si existiera contradicción entre las prescripciones que regían antes que ella, éstas últimas no son aplicables.

Con respecto al procedimiento para la instrucción del

(1) Ver Digesto Administrativo Nº 422.-

(2) Ver Digesto Administrativo Nº 254.-

sumario, esta Dirección General estima que el indicado a fs. 5 por el Director General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Estado de Obras Públicas, se ajusta a derecho.-

DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO CIVIL DE LA NACION. 29-9-58.-

Fdo. JOSE LUIS FRANGI.
Director General

Expte. Nº 90.177/58.-

Buenos Aires, 30 de Setiembre de 1958.-

Señor Subsecretario:

Tengo el agrado de dirigirme al señor Subsecretario - en respuesta a su nota nº 123, de fecha 10 de setiembre - en curso, referente a la interpretación que debe darse al apartado XIII del artículo 41º del Decreto Nº 1471/58, - frente a lo dispuesto en el artículo 45º del Decreto Nº - 34.952/47, reglamentario de la Ley Nº 12.954, que estatuye las funciones del Cuerpo de Abogados del Estado.

Al respecto cumplo en manifestarle que, al establecer el artículo 2º del referido Decreto Nº 1471/58, que quedan derogadas todas las normas anteriores que se opongan a - las establecidas en la reglamentación que el mismo aprueba, se considera que si existiera contradicción entre las

prescripciones que regían antes que ella, éstas últimas no son aplicables.

Finalmente se informa que en cuanto concierne al procedimiento para la instrucción del sumario, el expuesto por el señor Director General de Asuntos Jurídicos de esa Secretaría de Estado en el expediente Nº 2442/58, con fecha 13 de agosto del año en curso, adecuado a las normas extablecidas en el recordado Decreto Nº 1471/58, está ajustado a derecho.

Hago propicia la oportunidad para saludar al señor Subsecretario con distinguida consideración.-

Fdo. RAFAEL RODOLFO AYALA
Subsecretario de Hacienda

Al señor Subsecretario de Estado de Obras Públicas
Doctor D. JUAN OVIDIO ZAVALA
S / D.

Poder Ejecutivo Nacional
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº 953.-

ESTATUTO PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL (Art. 37º, inc. a) y c) - SANCIONES - CESANTIA - ASISTENCIA - ABANDONO DEL SERVICIO

Expte. Nº 39.702/58 - Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos - S/cesantía agente Horacio Sánchez Lloveras - Estatuto del Personal Civil - Obligatoriedad de la vista ordenada por el art. 41 aunque el sumariado no haya concurrido a las notificaciones. Abandono del servicio e inasistencias injustificadas - Distinción entre ambos supuestos.-

//ñor Secretario de Hacienda:

1.- La Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos solicita la cesantía, por abandono del servicio, del agente de la misma don Horacio Lisandro Sánchez Lloveras.

El nombrado no compareció a prestar declaración en el sumario administrativo que se le instruyó, pese a que se le cursaron las dos citaciones que prescribe la reglamentación (art. 41, apartado XVIII) del Estatuto del Personal Civil de la Administración Nacional (decreto - ley Nº 6666/57) (1), y se consulta a esta Dirección si ante esa circunstancia corresponde darle vista de lo actuado para que efectúe sus descargos.

La referida vista la ordenan categóricamente los -

(1) Ver Digesto Administrativo Nº 254.-

arts. 41 del Estatuto y 41, apartado XIII, de su reglamentación, y no puede ser óbice legal para que dicho trámite se cumpla, el hecho de que la reglamentación disponga que la no concurrencia del sumariado a las notificaciones confirmará, en los casos de "abandono del servicio", la comisión de la falta (art. 41, apartado XVIII, citado). Por lo contrario, las normas que ordenan la vista generalizan el procedimiento, e interpretar que en estos supuestos corresponde prescindir de dicha diligencia, equivale a hacer distinciones que la índole de tales normas no admiten con la consiguiente mengua del derecho de defensa que le asiste al sumariado y que no le puede ser coartado por vía de una particularización no establecida en la ley.

2.- La opinión que se ha expuesto corresponde a la consulta que le ha sido formulada a esta Dirección. Sin embargo, entiende la misma que lo que aquí se sustancia es en realidad, en caso de inasistencias injustificadas que exceden de 10 (diez) días en el año y que pueden dar lugar a la cesantía del agente incurso en esa falta, sin previa formación del sumario (art. 37, inc. a) y art. 40 del Estatuto), en cuya virtud, no caben las citaciones al imputado que las normas estatutarias exigen cuando existe la obligación de instruir causa administrativa.

El señor Lloveras debió asumir sus funciones el día 19 de enero de 1958, en que finalizó la licencia que tenía acordada, pero en esa fecha no se reintegró al cargo y nada se supo de él hasta el 18 de junio del mismo año, en que presentó la renuncia de fs. 1 (expte. 10.390/58 agregado) en la que manifiesta "que deberá hacerse efectiva a partir del día 19 de enero del año en curso", confirmando de este modo las inasistencias en que había incurrido sin ninguna justificación por su parte.

El Código Penal establece en el art. 252: "Será reprimido con multa de 50 a 500 pesos e inhabilitación de un mes a un año, el funcionario público que, sin habérsele admitido la renuncia de su destino, lo abandonara, con da

ño del servicio público", y esta norma, a la que se acomoda la del art. 6º, inc. h) del Estatuto, constituye el típico abandono del servicio, cargo, empleo o destino, o como quiera llamársele, pero naturalmente desde el punto de vista del derecho penal.

Sin embargo, en el campo del derecho administrativo o, más precisamente, dentro del sistema del Estatuto, no es tan restringido el alcance de la expresión "abandono de servicios" o "abandono del servicio" empleadas en este último, como que en derecho penal, para que exista el delito de abandono del cargo es indispensable que el acto se traduzca en un daño en el servicio público, condición que en aquella órbita no se prevé.

Por lo demás, en materia penal la apreciación del daño debe hacerse tomando en cuenta la eficiencia ordinaria del servicio administrativo, y con este criterio deben determinarse cuándo la inasistencia constituye abandono (conf. SOLER, "Derecho penal argentino", t. V, p. 166, ed. 1946), a cuyo efecto la duración de la no concurrencia del funcionario, cuando éste ni siquiera presentó su renuncia, puede ser factor para decidir en uno u otro sentido.

Pero la distinción entre "inasistencia" y "abandono de servicios" no ofrece iguales dificultades en derecho administrativo, si se atiende a la acepción de ambas expresiones, corroborada por el juego armónico de las disposiciones del Estatuto que sancionan uno y otro tipo de faltas y establecen el procedimiento previo a seguir para cada caso.

En la vida administrativa, no podrá negarse que hace abandono del servicio quien en forma inusitada se retira del lugar o destino en que realiza sus tareas diarias, habida cuenta de que no es congruente hablar del abandono de un servicio cuyo desempeño aún no se ha asumido.

En principio, abandonar el puesto constituye una falta más grave que la inasistencia injustificada, dado que

al no ser previsto el evento por el jefe del servicio, ha de producir mayores trastornos que cuando el agente no concurre a hacerse cargo de sus tareas, lo que permite a aquél arbitrar las medidas necesarias para cubrir la inasistencia. Implica, además, un notorio quebrantamiento de la disciplina, que no cabe presumir en la mera inasistencia injustificada.

Va de suyo que en esta materia ha de entenderse que no sólo el "abandono físico" del lugar de las tareas configura el "abandono del servicio", sino también todo acto del agente que implique dejación, descuido, desidia o, más precisamente, la desatención de las obligaciones inherentes a su empleo, y así incurrirá en abandono del servicio el encargado de vigilar el funcionamiento de una máquina, tanto si se aleja insólitamente del lugar de su trabajo como si permanece en él pero entregado al sueño.

El Estatuto prevé, entre otras causas de cesantía, las inasistencias injustificadas que excedan de 10 (diez) días en el año, contínuas o discontínuas (art. 37, inc. a) y el abandono de servicios sin causa justificada (art. 37, inc. c), y si en la hipótesis primera es posible decretar la cesantía del agente sin sumario previo, en tanto que en la segunda es menester sustanciarlo, resulta de sumo interés determinar en qué circuntancias se da uno u otro supuesto.

Considera esta Dirección que el sentido que, a su juicio, corresponde atribuir a la expresión "abandono del servicio", conforme a lo expuesto, sirve para definir que ha de entenderse por "inasistencia" la no concurrencia del agente a asumir su tarea diaria habitual.

A medida que el agente incurre en faltas injustificadas durante el año que no excedan de diez (10) se hará pasible, sin previo sumario, de las sanciones establecidas en el art. 36-II de la reglamentación del Estatuto, e inmediatamente [illegible] excederse en el año de ese número de inasistencias incurrirá en causa de cesantía, también sin su

mario previo (arts. 37, inc. a), y 40 del Estatuto).

En estos casos, la no exigencia de sumario obedece a que la ley aplica un sistema de valorización objetiva de la gravedad de este tipo de infracciones que, por su naturaleza, es perfectamente lógico y sólo es menester para la aplicación de la medida las informaciones necesarias sobre la falta de justificación de las inasistencias.

Pero tratándose de "abandono del servicio", sea por haberse alejado el agente del sitio donde habitualmente desempeñaba sus tareas, sea porque se hallaba en él, pero desatendiendo en absoluto las obligaciones inherentes a su empleo, la instrucción del sumario exigida por el Estatuto es indispensable para medir el grado de responsabilidad del infractor, pues es necesario conocer los motivos que determinaron el abandono del puesto y en qué medida esa actitud ha dañado la prestación regular del servicio. En otras palabras, la gravedad de la infracción depende de los resultados que arroje la investigación del caso, para el que no se cuenta, como en el supuesto de las inasistencias, con una valorización objetiva preestablecida.

Si no se hicieran estas distinciones serían letra muerta las disposiciones que autorizan a decretar la cesantía "sin sumario previo", en los casos de inasistencias reiteradas y sin justificación alguna más allá del límite fijado por el Estatuto.

DIRECCION GRAL. DE ASUNTOS JURIDICOS, setiembre 15 de 1959.

Fdo. CARLOS ALBERTO HUERTAS
Subdirector General

Expte. 531.847/58 - Dirección Nacional de Aduanas - S/cesantía agente Diógenes López - Estatuto del Personal Civil - Abandono del Servicio e inasistencias injustificadas - Distinción entre ambos supuestos.-

//Ñor Subsecretario de Hacienda:

En el dictamen de fecha 15 del corriente mes, que en copia se acompaña, esta Dirección ha analizado las diferencias existentes entre las inasistencias "injustificadas" y el "abandono del servicio" a que se refiere el Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública Nacional aprobado por decreto-ley Nº 6666/57, y a cuyas conclusiones se remite en obsequio a la brevedad.

DIRECCION GRAL. DE ASUNTOS JURIDICOS, setiembre 16 de 1959.

Fdo. CARLOS ALBERTO HUERTAS
Subdirector General

M E M O R A N D U M

Esta Dirección General, en atención a las opiniones vertidas en autos, se permite, con el objeto de aportar elementos de juicio que posibiliten una mejor dilucidación del caso en consulta, exponer lo siguiente:

Una prolongada práctica administrativa, anterior y posterior a la vigencia del Estatuto del Personal Civil de la Administración Nacional -aprobado por decreto - ley Nº 6666 de 17 de junio de 1957-, ha sentado el principio

de que la causal establecida en el inciso c) del artículo 37º de dicho cuerpo legal (abandono de servicios sin causa justificada), se refiere a la situación de aquellos agentes que, evidenciando un total desinterés por conservar el cargo que ocupan, se alejan de sus funciones.

Tal es así, que al reglamentarse (decreto Nº 1.471/58) (*) el artículo 41º del citado Estatuto, dicho concepto fué consagrado en la parte "in-fine" de su punto XVIII), en la que expresamente se estableció: "...que la no concurrencia, su silencio o negativa a declarar, no harán presunción alguna en contra del agente en el sumario respectivo, salvo que éste se instruya por abandono del servicio, en cuyo caso la no concurrencia confirmará la comisión del hecho".

Ahora bien, para aplicar la medida separativa que prevé el inciso a) del artículo 37º de la norma legal citada, deben cumplirse previamente los siguientes requisitos:

1º) Reintegrarse el agente a sus tareas y, consecuentemente, solicitar la justificación de las inasistencias en que hubiere incurrido, a efectos de que la autoridad competente pueda valorar su conducta y decidir con relación a la penalidad a que se ha hecho pasible.

2º) Aplicarse las sanciones previstas en el punto II) de la reglamentación del artículo 36º del Estatuto de referencia, que evidentemente tienen un carácter correctivo.

De procederse en la forma indicada por las Direcciones Generales del Servicio Civil de la Nación y de Asuntos Jurídicos, se produciría incuestionablemente un tratamiento dispar para juzgar lo que a juicio de esta Dirección, constituyen dos casos completamente distintos.

Sobre el particular, es dable señalar la desigualdad de tratamiento que se brindaría por aplicación de la citada disposición (art. 37º, inc. a), en los siguientes casos:

(*) Ver Digesto Administrativo Nº 422.-

a) Agente cuya separación se dispone por haber incurrido en la undécima falta discontínua.
b) Agente cuya separación se dispone por haber incurrido en la undécima falta contínua.

En el primer caso, el agente ha sido sancionado -por lo menos una vez- de manera correctiva, en la forma prevista por el punto II) de la reglamentación del artículo 36º del citado Estatuto, vale decir, fué alertado sobre las consecuencias disciplinarias en que lo ha ubicado su actitud.

En el otro, si bien es cierto que no puede ni debe admitirse ignorancia sobre el precepto de referencia, podría idealmente correrse el riesgo de calificar como "inasistencias injustificadas", alguna imposibilidad de concurrencia a tareas en tiempo y forma, factible tal vez, de justificación posterior.

Como corolario de ello, se quiere significar que, desde el comienzo del planteo efectuado por esta Dirección, lo que se persigue es la verdadera delimitación, por la vía del procedimiento, de las distintas causales consignadas en los incisos a) y c) del artículo 37º citado.

Aunque pareciera redundante, esta Dirección General hace notar que mientras el "abandono del cargo" se configura a través de un desinterés por conservarlo y se evidencia luego de substanciado el correspondiente sumario, la causal prescripta en el inciso a), debe también, acreditarse fehacientemente con más de diez inasistencias injustificadas. Es decir, que mal podría disponerse una cesantía con imputación al recordado inciso a), por el sólo hecho de configurar la undécima falta de asistencia, sin brindar al causante la oportunidad de justificar las mismas.

Buenos Aires, octubre 6 de 1959.-

Fdo. ANGEL BOTTERO TORRES
Director General
de
Contabilidad y Administración

//nos Aires, octubre 6 de 1959.-

Atento lo actuado, pase al señor Procurador del Tesoro de la Nación estimándole quiera servirse dictaminar.

Fdo. GUILLERMO WALTER KLEIN
Secretario de Hacienda
de la Nación

Expediente Nº 531.847 - 1958 - S/ cesantía agente de la Dirección Nacional de Aduanas - Diógenes López. SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA.-

Señor Secretario de Estado de Hacienda:

Con motivo de la situación del agente de la Direcc- ción Nacional de Aduanas D. Diógenes López, que incurriera en inasistencias, oportunamente declaradas "no justificadas", se plantea en autos la interpretación de los - incisos a) y c) del art. 37º del Estatuto del Personal - Civil de la Nación aprobado por Decreto - Ley Nº 6666/57, que contemplan las "inasistencias injustificadas que excedan de diez días" y el abandono de servicio, respectivamente, como causas para la cesantía.

Sobre la cuestión planteada coincido totalmente con el criterio sentado en el dictamen de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de esa Secretaría de Estado, cuya copia corre a fs. 17/21, producido en el expediente - Nº 39.702/58, con fecha 15 de setiembre ppdo.

Haciéndome cargo de la inquietud puesta de manifiesto por el señor Director General de Contabilidad y Administración en el Memorándum de fs. 22, por la injusticia

que podría producirse de aplicarse rígida y literalmente el art. 37º, inc. a), en los casos de inasistencias continuas, es de presumir que antes de disponer una medida tan grave como la cesantía del agente, la prudencia guíe a la autoridad de aplicación, y por cualquier medio adecuado y razonable a su alcance, averigüe si prima facie existe causal para las faltas o practique alguna intimación previa, a las que no obliga el Estatuto pero tampoco prohibe.

Por lo demás, aún en la hipótesis de declararse la cesantía, como ésta debe indudablemente notificarse al agente afectado, tiene una última oportunidad de provocar la revocación de la medida, ejerciendo el derecho del art.24 del Estatuto que da lugar a la Administración de revocar el acto por contrario imperio (art. 25).-

Noviembre 13 de 1959.-

Fdo. ALEJANDRO H. AHUMADA
Sub-Procurador del Tesoro
de la Nación

Expediente Nº 531.847/58.-
Providencia Nº 236.-

//ñor Subsecretario de Hacienda:

Se plantea en las presentes actuaciones una situación relativa a la interpretación del artículo 37º, incisos a) y c), del Estatuto del Personal Civil, que establece las causas para la cesantía del agente. El primero de dichos incisos establece que es causa para tal medida el registrar inasistencias injustificadas que excedan de diez (10) días en el año, ya sean contínuas o discontínuas; el inci

so c), por su parte, fija como otra causal el abandono de servicios sin causa justificada. Por otra parte, y de acuerdo con el artículo 40 del mismo cuerpo legal, en el caso previsto en el inciso c) comentado, la cesantía sólo podrá disponerse previo sumario, requisito que no se exige para el caso del citado inciso a).

La Dirección General de Contabilidad y Administración estima necesario se aclare, por vía reglamentaria, en que casos se configura la causal prevista en el inciso a), y cuándo la del inciso c).

Esta Dirección General estima que en lo que respecta al inciso a) del artículo 37º no pueden existir dudas para su determinación: si el agente registra, ya sea en forma contínua o discontínua, más de diez (10) inasistencias sin justificar, en el año, procede su cesantía sin otra formalidad que la comunicación por escrito al interesado, con indicación de las causas determinantes de la medida - (artículo 40º del Estatuto).

La causal del inciso c) "abandono del servicio" ofrece en cambio un campo más amplio para su análisis. El abandono del servicio sería, considerado en una forma muy amplia y general, la situación de aquellos agentes que se alejen de su empleo u ocupación sin hacer renuncia formal de su puesto. Pero también configuraría esta causal la actitud de un agente encargado de la atención ineludible de un servicio esencial (una guardia de hospital, un encargado de la atención de una caldera, un sereno, etc.), que dejaran su puesto por un día, o una hora, o el tiempo suficiente para producir un perjuicio, actitud que, analizada y valorada a través de un sumario, podría dar lugar a la cesantía del causante por aplicación del artículo 37º, inciso c), del Estatuto.

Es decir, que definir "a priori" cuáles actos o situaciones configuran el abandono del servicio constituye una labor expuesta a inexactitudes y omisiones, y en tal sen-

tido, corresponde que, en cada caso, el organismo al que toque juzgar una situación sea el que determine con sujeción a que inciso del artículo 37º del Estatuto debe resolverse el mismo.

En el caso particular planteado en estas actuaciones, el interesado no dió cumplimiento a normas que reglamentan la justificación de inasistencias por enfermedad, cuyo conocimiento debe conceptuarse como obligatorio; en consecuencia, dichas faltas no fueron justificadas por el Servicio Médico, medida ratificada por la Dirección Nacional de Aduanas (fs. 9 y 9 vta.). Consecuentemente, el causante ha excedido el límite de diez (10) inasistencias sin justificar dentro del año, y por lo tanto, su situación encuadra perfectamente dentro del inciso a) del art. 37º del Estatuto del Personal Civil.-

DIRECCION GRAL. DEL SERVICIO CIVIL DE LA NACION, 16-11-59.

Fdo. JOSE LUIS FRANGI
Director General

Poder Ejecutivo Nacional
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº 954.-

ESTATUTO PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL - CESANTIA - SANCIONES - JUNTAS DE DISCIPLINA

Expte. nº 562.894/57 - Dirección Nacional de Aduanas - Leonildo Victorio Ghio - Cesantía - Dictamen de la Junta de Disciplina y del Interventor en la Dirección Nacional de Aduanas - Estatuto del Personal Civil de la Administración.-

//ñor Subsecretario de Hacienda:

Según las disposiciones del Estatuto, con el dictamen de la Junta de Disciplina queda conclusa la causa para su resolución por la autoridad competente. El dictamen del órgano administrativo a que pertenece el agente, en discrepancia con el de la Junta de Disciplina, resulta, en consecuencia, una diligencia no autorizada por el Estatuto.-

En el presente caso, ambos dictámenes concuerdan en la sanción de cesantía; pero mientras la Junta de Disciplina considera que el comportamiento del agente puede ser calificado a tenor de lo dispuesto por el art. 37, inc

f) (inconducta notoria), la Dirección Nacional de Aduanas entiende que la sanción debe fundarse en el art. 37, inc. h) (incumplimiento de las obligaciones determinadas en el art. 6 y no sancionadas en el art. 36) y última parte del art. 38 (causales no enunciadas en los arts. 36, 37 y 38, pero que importen violación de los deberes del personal).

En tal virtud, parece claro que para la debida aplicación del art. 37, inc. h) y última parte del art. 38, debiera puntualizarse previamente cuál es la obligación no cumplida por el agente, en relación con las determinadas en el art. 6 y no sancionadas en el art. 36, o cuál sería la causal no enunciada por los arts. 36, 37 y 38.-

DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS, 1°-9-958.-

Fdo. CRISTIAN GIMENEZ DEMARIA
Director General de Asuntos Jurídicos

Expte.n° 562.894/957.

//nos Aires, octubre 8 de 1958.-

Vuelva a la Dirección General de Contabilidad y Administración, puntualizando seguidamente las causales constatadas en autos para la debida aplicación al inculpado de los artículos 37°, inciso h, y 38°, parte in-fine, del Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública Nacional:

1º - "Incumplimiento de las obligaciones determinadas - en el artículo 6º y no sancionadas en el artículo 36º"(Art. 37º -h):

a) El agente Ghío ha infringido las obligaciones esta - tuídas en el artículo 6º (Cap. III - Deberes - y su reglamentación) al no actuar con eficiencia, capacidad, máximo de diligencia, y, observar en sus tareas de guarda aduanero una conducta no digna de la con - fianza que su estado oficial exige.-

b) Los motivos precitados no están comprendidos en las causas a sancionar por el artículo 36º, siendo éstas: incumplimientos al horario, inasistencias injustificadas, falta de respecto, negligencia en las funciones y calificación deficiente.-

c) De tal manera, se configura la imputabilidad adecuada al inciso h del artículo 37º.-

2º - Causales no enunciadas en los artículos 36º, 37º y 38º, "que importan violación de los deberes del "personal " (Art. 38º, parte in-fine):

a) La ubicuidad punitiva de los artículos 36º y 37º ha sido expuesta en los párrafos precedentes; y, respecto a los cinco incisos del 38º -por benignidad para no frustar los beneficios de previsión social en razón de los buenos antecedentes del causante- se atenuaron para propiciar la penalidad de cesantía en lugar de exoneración sin excluir otras causales (parte in-fine) que importando violación de los deberes fiscales acumulan cargos para separar a Ghío de la Administración Pública Nacional.-

b) El mencionado guarda revisador no actuó de conformidad con las disposiciones que reglan el despacho de equipajes, ni ajustó su cometido a las normas fijadas para las tareas de contralor aduanero y cambiario, en defensa de los derechos fiscales, los cuales hubieran sido malogrados de no mediar la intervención de la Prefectura Nacional Marítima.-

c) Así, quedan determinadas las causales no enunciadas en los artículos de referencia, pero de importancia para significar el accionar malicioso de Ghío, aunque sin lograrse comprobación delictuosa.-

Al proporcionar este solicitado informe aclaratorio, considérase necesario significar la determinación jerárquica, de este organismo estatal en la situación tratada, y, de las emergentes de autos.-

Esa Dirección General y la de Asuntos Jurídicos, expresan en sus respectivos informes de fojas 25 y 26, existir discrepancia entre lo aconsejado por la Junta de Disciplina, y lo propiciado en su informe nº 110 por esta Repartición, en razón de lo cual, se retornaron estos actuados para obtener las puntualizaciones y causales suministradas precedentemente, abarcadas ya en los fundamentos de la elevatoria a la Secretaría de Estado de Hacienda de la Nación.

Esta Dirección Nacional al considerar en ejercicio de su potestad administrativa y disciplinaria el dictamen nº 1 de la Junta de Disciplina, emitido como órgano jurisdiccional en instancia de asesoramiento, examinó y juzgó el hecho de autos, aprobando propiciar la resultante penalidad expulsiva, pero determinando las reales causales de la imputabilidad adjudicada jerárquicamente al causante y ajustadas plenamente a las comprobaciones obtenidas.-

Unicamente ha existido el respectivo ejercicio del poder jerárquico, mediante las formalidades de competencia - legal y estatutaria para dar a este caso de imputación disciplinaria a un subordinado, el correspondiente estado de transición ante la autoridad decisoria que tiene la facultad de remoción.-

La Junta de Disciplina posee las más amplias garantías para pronunciarse libremente en los sumarios administrativos, pero su función concluyente es la de producir dictámenes, los cuales pueden ser aceptados o desestimados, total o parcialmente, según sean las determinaciones a que arriba después del estudio integral de la causa la autoridad - superior de la Repartición, por ser inherente a sus atribuciones el juzgar a sus agentes sometidos a sumarios.-

La Ley de Aduana (texto ordenado en 1956) establece en su artículo 10º que: "El Director Nacional es el jefe máximo y superior jerárquico de todos los funcionarios y empleados de la entidad".-

En virtud de esta facultad irrenunciable, acciona disciplinariamente la Dirección Nacional de Aduanas, y, encuadrándose en todas las garantías preceptuadas por el Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública Nacional para juzgar a los agentes sumariados, y, emitiendo oportunamente su opinión funcional indivisible cuando las sanciones a dictarse competen al Poder Ejecutivo Nacional.-

Los dictámenes de la Junta de Disciplina no siempre - pueden ser compartidos por la jefatura máxima de la Repartición, como tampoco la opinión de ésta ser aprobada por la autoridad superior a cuya decisión recurre. Indudablemente, así, se produce el libre desarrollo del poder disciplinario inherente a cada instancia jerárquica.-

En las conclusiones del presente caso en cuestión, esta Dirección considera al empleado Chío incurso en las graves causales puntualizadas al comenzar este informe, y, no, en inconducta notoria, como se expide la Junta de Disciplina,-

dado que registra una intachable foja de servicio, y su primera falta es la juzgada actualmente en este sumario, por incumplimientos a sus obligaciones administrativas y fiscales como guarda aduanero.-

Además, por lo expuesto, no se comparte el criterio sostenido en el párrafo primero del informe de la Dirección General de Asuntos Jurídicos (fojas 26), de ser una diligencia no autorizada por el Estatuto la elevatoria de esta Repartición a la Secretaría de Estado de Hacienda, por quedar conclusa la causa para su resolución por la autoridad competente al dictaminar la Junta de Disciplina.-

En ninguna disposición del Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública Nacional se prohibe a los directores de reparticiones el tomar intervención y expedirse en las actuaciones sumariales a ser concluídas en sanciones mayores de las autorizadas para aplicarlas directamente a los subordinados, dado que esto significaría anularles las facultades acordadas por disposiciones legales y la privación de opinar en las soluciones de la estabilidad acondicionada del plantel de agentes.-

Tales son los conceptos sustentados por esta Dirección Nacional sobre el asunto en materia, señalando que por no estar aún concluso el caso de autos, dado que después del dictamen de la Junta de Disciplina han tomado intervención esa Dirección General y la de Asuntos Jurídicos, y ésta en el párrafo último de su comentado informe indica que debemos puntualizar lo ahora contestado después del retorno dispuesto, lo cual origina esta nueva diligencia en la tramitación de la causa, permite todavía continuar ante la Dirección General del Servicio Civil de la Nación, atento a las funciones que le incumben (decreto nº 2.477/958)(*)

(*) Ver Digesto Administrativo nº 432.-

en la aplicación e interpretación de normas establecidas - por el Estatuto del Personal Civil de la Administración - Pública Nacional.-

INFORME Nº 189.-

Fdo. ARMANDO H. PRADA
Dirección Nacional de Aduanas
Interventor

Expediente nº 562.894/57
Providencia nº 256.

//nos Aires, 2 de diciembre de 1958.-

Vuelvan las presentes actuaciones a la Dirección General de Contabilidad y Administración llevando a su conocimiento que se comparte el criterio sustentado a fs. 26 - último párrafo - por su similar de Asuntos Jurídicos, - acerca de la necesidad de puntualizar debidamente cuál de las obligaciones establecidas en el art. 6º del Estatuto del Personal Civil no ha sido cumplida por el causante, a efectos de encuadrar el caso dentro de las previsiones - del art. 37º, inciso h), y última parte del art. 38º del mismo.-

Habiendo satisfecho la Dirección Nacional de Aduanas dicho requisito, en su informe de fs. 28/30, considera esta Dirección General, que lo actuado se ajusta a las disposiciones del citado cuerpo legal (decreto-ley nº 6.666/57) (") y su Reglamentación, no existiendo en consecuencia impedimentos para dar curso al pedido de cesantía del causante, en las condiciones fijadas en el último párrafo de fs. 23.-

Fdo. JOSE LUIS FRANGI
Director General
Servicio Civil de la Nación

(") Ver Digesto Administrativo nº 254.-

Poder Ejecutivo Nacional
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº 955.-

EXPROPIACIONES -INDEMNIZACIONES

1.- No es aplicable en los juicios de expropiación, lo dispuesto en el art. 7º de la ley 3952(1) según el cual las sentencias dictadas contra la Nación son meramente declarativas.

2.- El hecho de que el expropiado perciba, sin formular salvedad alguna, la suma depositada al comienzo del juicio por el expropiador, no puede ser interpretada como renuncia a los procedimientos legales ulteriores.

CS, abril 28-958. - Gobierno nacional c. Gregorini, L.R. y otra.

Buenos Aires, abril 28 de 1958.-

CONSIDERANDO:

Que en esta causa la sentencia de la. instancia, confirmada por las de segunda y de esta Corte, declaró que la Nación debía pagar, como saldo del precio y total indemnización correspondientes al inmueble expropiado, la suma de $ 1.372.400, con más sus intereses desde la fecha que indica y las costas del juicio. El demandado formuló seguidamente la liquidación, que a su juicio correspondía, del capital, intereses y costas a cargo de la actora, que fué observada por el representante de ésta, aprobándose posteriormente, por conformidad de partes, la que corre a fs. 193 vta. y luego, actualizada,la

(1) Ver Digesto Administrativo Nº 906.-

de fs. 195, que asciende a la suma de $ 2.119.815. El demandado inició ejecución de sentencia y pidió se librara mandamiento de intimación de pago y embargo, disponiéndose así por el juzgado. No pagada la deuda, solicitó el demandado la citación de remate al representante del Fisco nacional, lo que el tribunal proveyó de conformidad. En esta oportunidad, el procurador fiscal opuso, como excepción, el de ser la sentencia dictada meramente declarativa, no pudiendo, en consecuencia, ser ejecutada contra la Nación; que conforme a la sentencia que cita de esta Corte (Fallos, t. 186, p. 151), la única excepción admisible es la de ejecutar los recursos destinados por el expropiante para el pago de la indemnización, suma que fué oportunamente depositada en este juicio y percibida por el expropiado; que no habiendo otros bienes sobre los que pueda hacerse efectiva la ejecución, ésta carecía de objeto. Contestada la excepción por el ejecutante, el juzgado resolvió rechazar la defensa opuesta por no encontrarse prevista en el art. 270 de la ley 50 (ADLA, 1852-1880, p.391) y señalando que no se trata en los autos "de la excusión de bienes en particular, sino del reconocimiento del derecho de excutirlos" y que sólo "cuando se pretende hacer efectiva la ejecución sobre bienes determinados habría llegado el momento de determinar si es viable o no". Apelada esta sentencia por el procurador fiscal, fué confirmada por el tribunal de apelación. Contra esta sentencia se trae el presente recurso ordinario.

Que las circunstancias de hecho y de derecho de esta causa son así análogas a las que consideró esta Corte en Fallos, t. 186, p. 151 cuyos fundamentos el tribunal, en su actual composición, comparte y da por reproducidos en lo pertinente. No se opone a esta conclusión el hecho, invocado en el dictamen precedente por el procurador general, de que el demandado percibiera pura y simplemente, sin formular salvedad alguna la suma depositada al comien

zo del juicio por el expropiante, pues tal circunstancia no puede ser legalmente interpretada como una renuncia a los procedimientos legales ulteriores.

Por lo tanto, se confirma la sentencia apelada en todo cuanto ha sido objeto del recurso. Con costas al apelante.-

ALFREDO ORGAZ - ENRIQUE V. GALLI - BENJAMIN VILLEGAS BASAVILBASO.

Rev. LA LEY del 29-9-959. Págs. 4 y 5.-

Poder Ejecutivo Nacional
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº 956.-

DAÑOS Y PERJUICIOS - RESPONSABILIDAD DEL ESTADO - RESPONSABILIDAD DEL FUNCIONARIO PUBLICO - INDEMNIZACIONES

1.- Cuando el principal responde por el delito criminal o civil del subordinado, responde también por "un hecho ilícito que no es delito" con respecto a él mismo, aunque sea un delito criminal o civil con respecto al dependiente.

2.- La responsabilidad civil del Estado funciona cuando el daño se ha producido por el mal funcionamiento de un servicio público, con independencia de la culpa del funcionario y, además cuando proviniere de un hecho culpable del agente cometido durante el servicio o con motivo del mismo, pero no cuando provenga de un acto extraño a la función, aunque se realice durante aquél.

3.- La totalidad de los tribunales del país se inclinan a sentar la regla de la responsabilidad extracontractual del Estado, aun en los casos en que actúa como poder público, por los daños que ocasionen los actos de sus funcionarios o empleados con motivo del desempeño de sus funciones, de la misma manera que en las personas jurídicas del derecho privado.

4.- El principal responde de los daños derivados de los actos ilícitos del dependiente realizados con motivo o en ocasión de sus funciones, entendiéndose por tal no sólo el cumplido en ejercicio de las mismas, sino

aquel que, de no mediar la relación de dependencia, no hubiera podido realizarse.

5.- Al preceptuar el art. 1112 del Código Civil que las disposiciones del tít. IX son aplicables a los supuestos comprendidos en esa norma legal, es de estricta observancia la responsabilidad indirecta señalada en el art. 1113 de dicho código. No queda el Estado, por consiguiente, liberado de su responsabilidad refleja, no obstante lo establecido en la primera de las disposiciones citadas.

6.- La responsabilidad del principal tiene carácter objetivo, no tanto fundado en la idea de su culpa, sino como obligación legal de garantía impuesta por consideraciones de justicia distributiva y de interés social, y como medio de brindar a la víctima una más eficáz protección ante la posible insolvencia del autor directo del daño.

7.- El hecho de que haya sido un tercero ajeno a la Administración pública el autor material del hecho ilícito -cometido, en el caso, por un automóvil prestado por el funcionario a cuyo servicio estaba afectado-, no exime al Estado de su responsabilidad refleja en virtud de los arts. 1112 y 1113 del Código Civil, - pues ejercía la guarda jurídica del vehículo a través de tal funcionario, dependiente suyo, y el hecho del tercero sólo se hizo posible por la conducta irregular del dependiente.

8.- El depósito, por el culpable de un accidente de tránsito, de la multa impuesta por la justicia en lo criminal, equivale a un reconocimiento de culpabilidad y, por lo tanto, en lo que respecta al daño moral, es de aplicación la doctrina de que sólo en los delitos criminales, juzgados tales por los tribunales -

competentes, procede la reparación de dicho daño.

9.- Admitida la responsabilidad del Estado por el hecho de un tercero, derivada de la actitud culpable de un funcionario público, debe admitirse también que quien resulta civilmente responsable de las consecuencias del delito debe cargar con la indemnización del daño moral.

10.- La indemnización puede ser aumentada para responder a la desvalorización de la moneda durante el transcurso del pleito.

CNCiv., SALA F, junio 2-959. - Davina Pagliera, Carmen C. c. Gobierno nacional.

2a. Instancia.- Buenos Aires, junio 2 de 1959.
La sentencia apelada, es arreglada a derecho?

El doctor Demaría dijo:

En estos autos se demandó el pago de los daños y perjuicios ocasionados a la actora en un accidente de tránsito, en el cual fué atropellada por un "jeep" del Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública, que era conducido por un tercero extraño a dicho ministerio, pero a quien le había sido facilitado por la jefa de uno de los servicios del mismo, a cuyo uso estaba afectado.

La sentencia de fs. 191 acogió favorablemente la demanda, considerando probada la culpabilidad del conductor y admitiendo la responsabilidad civil del Estado por el hecho de su agente, que lo es la persona que prestó el vehículo al conductor que chocó.

La actora se agravia de la sentencia solamente en cuanto al monto que manda pagar; el agente fiscal, en nombre del Estado nacional, la impugna por cuanto la misma, si bien admite que el conductor del "jeep" no tenía relación de dependencia con el Estado, funda la responsabilidad de

éste en el hecho del indebido préstamo del vehículo por parte de la señorita Muller, que era la que lo tenía a su cargo, sosteniendo que los arts. 1113 y 1122 invocados en la sentencia son inaplicables al caso de autos.

Afirma también que el caso debe equipararse al de sustracción ilícita de un automotor a su dueño, en cuyo caso éste es irresponsable del accidente y considera también - que la responsabilidad delictual del conductor no puede - legalmente trasladarse a su conferente.

Al entrar al examen de las cuestiones planteadas en autos he de señalar, en primer término, que el demandado, en su escrito de responde admitió que el accidente sufrido por la actora había sido la consecuencia de un delito cometido por su conductor, Edgardo Carbone. Estaría, pues de más, examinar la prueba traída para demostrar la culpa de éste, y que comprende el proceso seguido contra el aludido Carbone ante el juzgado correccional, agregado por - cuerda, en el que aquél obtuvo el sobreseimiento definitivo y la declaración de que estaba extinguida la acción, - por haber depositado el máximo de la multa que pudo co- - rresponderle por el delito (art. 64, Código Penal). Ello equivale a una admisión de culpabilidad y así se ha reconocido en casos análogos y se desprende también del hecho que el sobreseimiento no está acompañado por la declara - ción del art. 437 del Código de Procedimiento Criminal, no obstante el pedido del procesado. Confirman también esa - conclusión las declaraciones de fs. 119, 193 y 150 de estos autos.

Fué igualmente reconocido por el Estado demandado que el "jeep" que ocasionó el accidente había sido facilitado a Carbone por Laura G. Muller, jefa del servicio de extensión hospitalaria en el Instituto de Neurocirugía, a cuyo uso exclusivo estaba afectado, y en ese hecho finca su defensa, pues sostiene que no puede ser reprochable de las consecuencias de un delito y que, además, en ningún caso,

puede serlo del acto ilícito de quien no tenía con él relación de dependencia.

Pero estimo que la variante que ofrece el problema planteado en autos justifica un estudio algo más detenido del fundamento de la responsabilidad indirecta del Estado por los actos de sus funcionarios o empleados y su aplicación a este caso.

Ante todo y en lo que se refiere a la falta de responsabilidad del Estado por los delitos cometidos por sus agentes, en virtud de la disposición del art. 43 del Código Civil invocado por el agente fiscal y sin que sea aquí necesario entrar al análisis de la redacción defectuosa de dicho artículo que, según lo han señalado los autores, es una traducción inexacta del art. 300 del "Esbogo" de Freitas, hoy se admite con carácter general, que el mismo se refiere a los delitos cometidos por los miembros o administradores de las personas jurídicas a que el mismo se refiere, pero no a los de sus dependientes o empleados (Salvat y Romero del Prado, "Parte general, T. 1, p. 712; Aguiar, "Hechos y actos jurídicos", t. 3, ps. 158 y sigts.). En este caso, cuando el acto, ya sea doloso o culposo no proviene de un representante de la persona jurídica, sino de un dependiente, y se acciona en virtud de la responsabilidad indirecta, la acción procede porque es inherente tanto a las personas jurídicas como a las naturales por los hechos ajenos.

Por lo demás, sostener que tratándose de un delito de acción pública previsto en el Código Penal, conforme al art. 43 del Código Civil no puede ejercerse contra el Estado, como persona de existencia ideal, acción civil por indemnización de daños y perjuicios, importa tanto como desconocer que el art. 1113 de dicho código no legisla sobre la responsabilidad directa, sino que se refiere solamente a la del principal por un hecho ajeno (el del subordinado o dependiente), o responsabilidad in

directa, la que, como tal, nunca puede ser delictual para el patrón. En otros términos, cuando el principal responde por el delito criminal o civil del subordinado, responde también por "un hecho ilícito que no es delito" con respecto a él mismo, aunque sea un delito criminal o civil con respecto al dependiente.

Como se ha visto, en autos se busca la declaración de la responsabilidad civil del Estado como tercero responsable del accidente. La mayoría de los autores aceptan tradicionalmente que la culpa de este último consiste siempre en no haber cumplido, como debía la obligación de vigilancia a que estaba obligado respecto del autor del hecho (culpa "in vigilando") o en la mala elección del dependiente autor del mismo (culpa "in eligendo"), o en la falta de cuidado de las cosas cuya guarda le está encomendada (culpa "in custodiendo"). O sea los casos previstos y que obligan la responsabilidad indirecta conforme al art. 1113 del Código Civil.

Pero en autos está demostrado que el autor directo del hecho dañoso no era dependiente del Estado e indudablemente no se trata tampoco de un hecho de la cosa misma, atento a la forma en que el accidente se produjo, de modo que estaría también excluída la aplicación de la responsabilidad emergente del art. 1133. De ahí las dificultades especiales del caso.

Tratándose del daño que puede ser ocasionado por el Estado o sus dependientes, el mismo puede ser consecuencia de un acto de autoridad o de uso de gestión y provenir, en primer lugar, del hecho de que un servicio dado funcionó mal (culpa "in comittendo"). Puede provenir también de que el servicio no haya funcionado o lo haya hecho tardíamente, casos éstos que no interesan en el sub lite. Siempre que el daño proviniere del mal funcionamiento del servicio, ello será debido a que los funcionarios encargados del mismo descuidaron alguna medida necesaria para su

buen funcionamiento y de ahí que el hecho dañoso habrá sido siempre determinado por una imprudencia, falta de diligencia o descuido de un funcionario o agente. En tales casos se engendra la responsabilidad del Estado, tanto más si el daño es causado por un funcionario que es posible individualizar, durante el servicio y con motivo de él, o sea el caso previsto por el art. 1112 del Código Civil, al referirse a los hechos u omisiones de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, por no cumplir sino de una manera irregular las obligaciones legales que les están impuestas.

El daño puede provenir también del acto culpable de un agente del Estado realizado durante el servicio, pero extraño a éste, en cuyo caso el hecho en sí mismo demostrará si tuvo o no una finalidad distinta a la función misma.

Se ha debatido mucho la cuestión de la responsabilidad del Estado respecto de los actos de autoridad, la que, conforme lo sostiene Bielsa, no podría existir sin una ley que la establezca, pero ello no obstante se admite hoy en general que la responsabilidad civil del Estado funciona cuando el daño se ha producido por el mal funcionamiento de un servicio público, con independencia de la culpa del funcionario y, además, cuando proviniere de un hecho culpable del agente cometido durante el servicio y con motivo del mismo, pero no cuando provenga de un acto extraño a la función, aunque se realice durante aquél (Aguiar, op. cit., t. 3, ps. 175 y sigts.; Salvat y Acuña Anzorena, "Hechos ilícitos", ps. 289 y sigts.).

La jurisprudencia de nuestra Corte Suprema se mantuvo durante muchos años fiel al principio de no reconocer la responsabilidad del Estado cuando actuase en el carácter de poder público y de admitir su responsabilidad como persona jurídica sólo contractualmente, de conformidad con la citada doctrina de Bielsa.

Pero a partir del fallo dictado en el caso Devoto (Fallos, t. 169, p. 111; J.A., t. 43, p. 416) la Corte y, como consecuencia puede decirse que la totalidad de los tribunales del país, se inclinaron a sentar la regla de la responsabilidad extracontractual del Estado, aun en los casos en que actúa como poder público, por los daños que ocasionen los actos de sus funcionarios o empleados, con motivo del desempeño de sus funciones, de la misma manera que en las personas jurídicas, como antes del derecho privado (veáse, entre otros, J/A/, 1948-II, p. 99 (Rev. La Ley, t. 50, p. 699, fallo núm. 24.528); 1949-IV, p. 37(Rev. La Ley, t. 57,p.15, fallo núm. 27.369); 1956-III, p. 343 (Rev. La Ley, t. 82, p. 51, fallo núm. 38.639), con nota de Spota; Rev. La Ley, t. 12,p.122;t.24,p.82).

Más recientemente la sala "D" de esta cámara, en el juicio "Lago de Cela c. Ponce" ha dictado una interesante sentencia acerca de la responsabilidad indirecta del principal por los actos de sus empleados, aunque sin referencia especial al Estado.

En dicho fallo el vocal preopinante doctor Fleitas, en un voto en el que analiza exhaustivamente la doctrina de los autores sobre el tema, lleva la aplicación de la responsabilidad indirecta a los extremos más amplios expuestos hasta ahora en los fallos de nuestros tribunales y sostiene que el art. 1113 del Código Civil carece de un criterio general orientador que permite establecer cuándo el daño producido por un acto ilícito del empleado compromete la responsabilidad indirecta del principal, y después de calificar de anacronismo al fundamento de la culpa "in eligendo" o "in vigilando" y otras teorías análogas, afirma que la responsabilidad del principal en tales casos tiene un carácter objetivo y, por tanto, no se funda en nuestro derecho en una idea de culpa de aquél, sino que es una simple obligación legal de garantía impuesta por consideraciones de justicia y de interés social, y co

mo medio de brindar una más eficaz protección a la víctima, ante la posible insolvencia del autor directo del daño.

Después de referirse a quienes propugnan una tesis restricta, que sólo admite la responsabilidad del principal por actos ilícitos realizados por el dependiente en el ejercicio de sus funciones, aun cuando éste fuese irregular o abusivo, se inclina por la tesis amplia, según la cual el principal responde también de todo acto ilícito de su dependiente, realizado con motivo o en ocasión de sus funciones.

El voto de los otros dos integrantes de la sala, doctores Sánchez de Bustamante y Cichero adhiere a lo expuesto por el doctor Fleitas, pero expresa que a su juicio la solución que propicia el primer voto, además de ser justa, está encuadrada en el art. 1113 del Código Civil. Y agrega que esa opinión se funda en diversas circunstancias, acreditadas en autos, que revelaban la existencia de una estrecha conexión entre el ejercicio de las funciones de inspector que desempeñaba su autor, con el penoso hecho que determinó la muerte del esposo de la actora en aquel juicio.

Spota, en la nota mencionada más arriba y refiriéndose a los accidentes de tránsito producidos por vehículos conducidos por agentes administrativos, señala que el solo hecho de conducir un vehículo de la Administración pública debe considerase como un ejercicio de sus funciones, o que está por lo menos dentro de la esfera aparente de las mismas. Corresponde a la Administración en ese caso, acreditar que el hecho del agente es totalmente ajeno y separable de la función o servicio público, para exonerarse de responsabilidad. Y agrega que "el ente colectivo sólo no responde de aquellos delitos de sus dependientes u órganos totalmente separables de la incumbencia o de la función", y que como consecuencia de ello

debe admitirse la responsabilidad extracontractual del Estado por los actos ilícitos de sus agentes, sea que "ocurran ellos en la esfera real de la incumbencia o en su esfera aparente" (J.A., 1956-III, p. 343).

Por su parte, Orgaz, con la claridad y precisión que lo caracterizan, en "Responsabilidad extracontractual por hecho ajeno" (Estudios de Derecho Civil, p. 325), después de referirse a la amplitud que debe darse al art. 1113, - pues éste no habla de delitos ni cuasidelitos, sino de - "los daños que causaren" los dependientes, examina la responsabilidad patronal dentro del sistema inaugurado por - el Código francés y seguido por el nuestro, y puntualiza, para aclarar las confusiones surgidas a veces del rótulo del tít. IX del Código Civil, que el art. 1113 no legisla sobre la responsabilidad directa o por hecho propio del dependiente, que está regulada en otras disposiciones, sino que sólo tiene en vista la responsabilidad del patrón por un hecho ajeno, o indirecta, la que no puede ser delictual para el patrón. Concluye que conforme lo enseña la - mayoría de los autores, basta para engendrar esa responsabilidad que el acto ilícito del dependiente haya sido - practicado en ocasión de las funciones.

Añade a continuación que "dentro de ese criterio, demasiado amplio y vago, quedan, por tanto comprendidos no solamente los actos ilícitos que corresponden por su naturaleza a la función, sino también los ajenos a la función - misma, pero que sólo han podido ser practicados por el dependiente en esa calidad y con motivo de sus funciones". Y manifiestan que obligan también al patrón "los actos ilícitos cumplidos por el subordinado con abuso de las funciones que le fueron confiadas, sea que haya obrado contrariando expresas instrucciones del patrón, sea que haya asumido una tarea que no le correspondía" (cit. de Josserand, "Cours", t. 2, núm. 512).

Es decir que, de conformidad con este moderno planteo

de la cuestión, el principal responde de los daños derivados del acto ilícito del dependiente realizado con motivo o en ocasión de sus funciones, entendiéndose por tal no sólo el cumplido en el ejercicio de las mismas, sino aquel que, de no mediar la relación de dependencia, no hubiera podido realizarse.

El estudio de las disposiciones pertinentes del Código Civil conduce, a mi modo de ver, a las mismas conclusiones.

El art. 1109 del Código Civil contiene el principio general de que todo el que ejecuta un hecho, que por su culpa o negligencia ocasiona un daño a otro, está obligado a la reparación del perjuicio, y el art. 1112 señala que las disposiciones del título comprenden los hechos y las omisiones de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, por no cumplir sino de una manera irregular las obligaciones legales que les están impuestas.

Es verdad que esta última disposición legal importa consagrar la responsabilidad directa de los funcionarios públicos y según recordada opinión de Bielsa (v.nota en J.A., t. 43, p. 416), ello impediría desplazar la responsabilidad de los funcionarios hacia el Estado, para lo cual sería necesario dictar leyes que establezcan la acumulación de responsabilidad del Estado y de sus funcionarios y empleados.

Por mi parte, considero que al preceptuar el art.1112 del Código Civil que las disposiciones del tít. IX son aplicables a los supuestos comprendidos en la citada norma legal, es de estricta observancia la responsabilidad indirecta o refleja señalada en el art. 1113 del Código Civil en cuanto determina que la obligación del que ha causado un daño se extiende a los daños que causaren los que están bajo su dependencia, o por las cosas de que se sirven, o que tienen a su cuidado (Orgaz, op.cit.). No -

queda, por lo tanto, liberado el Estado de su responsabilidad refleja, no obstante lo establecido en el art. 1112 del Código Civil.

En efecto, los funcionarios públicos -término comprensivo de toda clase de empleados al servicio del Estado- son personas dependientes en el sentido del art. 1113 del Código Civil por la forma de su nombramiento y elección - por el principal y por su vínculo de subordinación que - los obliga a cumplir las órdenes o instrucciones que se - le impartan para el desempeño de sus funciones o empleo.

En casos como el de autos, en que deben armonizarse - los preceptos contenidos en los artículos 1109, 1112,1113, 1122 y 1133 del Código Civil, la responsabilidad del principal tiene un carácter objetivo, no tanto fundada en la idea de su culpa, sino como una obligación legal de garantía impuesta por consideraciones de justicia distributiva y de interés social, y como medio de brindar a la víctima una más eficaz protección ante la posible insolvencia del autor directo del daño, según las ya recordadas palabras del voto del doctor Fleitas en caso "Lago de Cela". Igual conclusión se desprende de la nota de Orgaz, cuando señala que la responsabilidad objetiva del patrón garantiza - "ministerio legis" ante la víctima, la culpa de sus subordinados.

Se dan en este juicio los supuestos señalados en los considerandos que anteceden para determinar la responsabilidad indirecta?

Ya he dicho que está probado en autos, que el "jeep" que ocasionó el accidente estaba afectado al uso exclusivo de Luisa G.Muller, en su función de jefa "ad honorem"- del servicio de extensión hospitalaria en la filial instalada en el Instituto de Neurocirugía, Pabellón Costa Bueno, por resolución del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, y que de acuerdo con las disposiciones reglamentarias vigentes existe la prohibición de emplear los

automotores del ministerio para otros fines que los determinados específicamente respecto del desempeño de los empleados autorizados a usarlos.

Pero, como lo establece la sentencia, el vehículo fué facilitado al autor material del hecho delictuoso por la señorita Müller, no obstante la prohibición reglamentaria aludida.

El juez, al admitir la responsabilidad del Estado, consideró que éste, por medio de su agente (la señorita Müller) creó el riesgo del que derivó el perjuicio sufrido por la actora, la que por ello, y de conformidad con el art. 1122, lo demandó directamente sin traer a juicio al autor del hecho.

La parte demandada, el Estado, colocándose dentro de la tesis clásica restrictiva, basada exclusivamente en la idea de la culpa, afirma que no es lógico ni justo que el principal responda por un acto extraño a la función del dependiente.

Pero es de advertir que la señorita Müller prestó el automotor al tiempo y con motivo de sus funciones, aunque haya abusado de ellas. De no haber existido su relación de dependencia con el Estado, no habría podido facilitar al tercero el vehículo, ya que el mismo estaba afectado a su uso exclusivo o, como dice Orgaz, ese préstamo sólo pudo cumplirse por el dependiente en su calidad de tal y con motivo de sus funciones. Han sido, pues, esa calidad y esas funciones las que crearon la situación de la que derivó como corolario el accidente. El acto de la señorita Müller estaba evidentemente comprendido para los terceros, dentro de la esfera de sus funciones.

Por otra parte, el hecho de que haya sido un tercero ajeno a la Administración pública el autor material del hecho ilícito, no exime al Estado de su responsabilidad refleja en virtud de los arts. 1112 y 1113 del Código Civil, pues él ejercía la guarda jurídica del vehículo a -

través de un funcionario dependiente suyo, y ese hecho - del tercero sólo se hizo posible por la conducta irregular del dependiente.

El Estado, para la realización de sus funciones, utiliza elementos o cosas cuya peligrosidad potencial no puede desconocerse en nuestros tiempos y estas cosas de que se sirve para el desarrollo de sus actividades comporta - sin duda alguna la creación de un riesgo cuyas consecuencias debe soportar. (Borda, "Fundamentos de la responsabilidad extracontractual").

Por todo ello, estimo que la demanda debe prosperar y que, por ende, la sentencia debe ser confirmada en cuanto establece la responsabilidad del Estado demandado en el - accidente de que fué víctima la actora.

En cuanto al resto de las cuestiones planteadas, o - sea naturaleza y gravedad de las lesiones sufridas, monto de la indemnización y daño moral, estimo que el juez a - quo las ha resuelto también acertadamente.

Las primeras resultan suficientemente acreditadas con la pericia de fs. 153, informe de fs. 98 y declaraciones de los doctores Cabrera, Vera y Pagliere. Por lo demás, este aspecto de la sentencia no fué observado en la expresión de agravios de la demandada.

De la pericia médica e informe aludidos se desprende que un año y medio después del accidente la señorita Davina seguía totalmente imposibilitada para el trabajo, y a la fecha del examen pericial, casi 4 años después del hecho, los médicos le atribuyen una incapacidad definitiva equivalente al 60% de su capacidad laborativa total. En tales circunstancias no es necesario acreditar la cesantía para que corresponda indemnizar las consecuencias de las lesiones, pues el daño es real y permanente, siendo a mi juicio equitativa la suma fijada al efecto por el juez, para la fecha en que fué fijada.

En cuanto a los gastos de asistencia médica y farmacéu

tica, si bien resulta del informe de fs. 173 que la primera fué gratuita, la segunda no lo fué, sino sólo con el descuento correspondiente a las farmacias del Centro Asistencial del Ministerio de Ejército. Teniendo en cuenta lo prolongado de la asistencia, como consta en la pericia y en el citado informe de fs. 98, así como la necesidad en que se vió la actora de someterse a masajes, resulta de aplicación el principio del art. 37 de la ley 14.237 (ADLA, XIII-A, p. 168), pues los perjuicios están legalmente acreditados, aunque no su monto. Creo justa también la suma fijada al efecto por el a quo.

En cuanto al daño moral, he dicho al comienzo de este voto que el depósito de la multa hecha por el culpable del accidente equivalió a un reconocimiento de culpabilidad y, por tanto, es de aplicación la doctrina sentada por las cámaras civiles en pleno (J.A. 1943-I, p.844) de que sólo en los delitos criminales, juzgados tales por los tribunales competentes, procede la reparación del agravio moral.

Pero el agente fiscal se agravia por no tratarse de un delito cometido por el Estado, que no puede cometerlo, sino por un tercero. Admitida la responsabilidad de aquél por el hecho de éste, en virtud de las consideraciones que he formulado precedentemente y derivada de la actitud culpable de un funcionario, debe admitirse que quien resulta civilmente responsable de las consecuencias del delito, debe cargar también con la indemnización del daño moral (J.A., 1952-I, p. 206; 1952-IV, p. 123). Y para fijar el monto de la misma debe tenerse en cuenta la naturaleza de las lesiones sufridas por la actora, los padecimientos que ha debido soportar y las consecuencias permanentes de aquéllas (J.A., 1952-IV, p. 97). La cantidad fijada resultaba prudente, como las anteriores, a la fecha de su fijación.

Esta sala tiene resuelto ya en casos análogos, que el

monto de la indemnización puede ser aumentado para responder a la desvalorización de la moneda durante el transcurso del pleito, sin que se pueda estar atado a los términos estrictos del signo monetario, no es posible prever el que tendrá años después, al terminar el juicio, y la indemnización debe cubrir la reparación de los daños a la fecha en que ella se hace efectiva, si aquellos valores se han modificado sustancialmente durante su tramitación.

La sentencia apelada fijó en $ 46.500 el monto total de la indemnización al 22 de mayo de 1958. En el año transcurrido desde entonces, la caída de nuestra moneda ha sido más rápida que nunca, por lo que estimo justo elevar en alguna medida el monto de la condena, a fin de compensar hasta cierto punto esa desvalorización. Pero habiendo solicitado concretamente la actora en su expresión de agravios se condene al Estado al pago de suma reclamada en la demanda, propongo elevar a dicha cantidad, ó sea $ 54.500 el importe que manda pagar la sentencia.

Voto, pues, en definitiva por la confirmación de la sentencia, con la salvedad de que el importe de la condena debe ser elevado a la suma indicada.

Los doctores Argúas y Collazo, por razones análogas a las aducidas por el doctor Demaría, votaron en el mismo sentido.

Por lo que resulta de la votación de que instruye el acuerdo que antecede, se confirma en lo principal la sentencia recurrida, elevándose el monto de la condena que contiene a la suma de $ 54.500. Las costas de la alzada a cargo de la Nación. Ajustados que sean los honorarios de la. instancia de conformidad con la cantidad fijada en ésta, vuelva para regular los de la alzada.-

RAFAEL M. DEMARIA - ANTONIO COLLAZO - MARGARITA ARGUAS.
(Sec.: Andrés A. CARNEVALE).

Rev. LA LEY del 26-9-959 - págs. 4, 5 y 6.-

Poder Ejecutivo Nacional
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº 957.-

ESTATUTO PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL (Art. 27º) - REINCORPORACION

Buenos Aires, 6 de octubre de 1959.-

Visto el expediente nº 34.591/58 de esta Secretaría de Estado, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 27º del Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública Nacional (decreto-ley nº 6666/57) (*) establece que en los casos de los agentes separados de sus cargos, cuando el fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo disponga su reincorporación, ésta deberá efectuarse en distinta dependencia de aquélla en la que se desempeñaban reconociéndoseles los haberes devengados desde la fecha que se dispuso el cese de la prestación de servicios;

Que la reincorporación del empleado "en distinta dependencia" no se refiere, en realidad, sino a su reincorporación en otro destino distinto de aquél en que se desempeñaba antes de su separación, como un acto de prudencia que tiende a preservar el orden y prevenir que se susciten nuevas cuestiones entre el empleado reincorporado y los funcionarios con quienes se encontraba en relación de dependencia inmediata, e intervinieron o pudieron intervenir en la sepa

(*) Ver Digesto Administrativo nº 254.-

ración del agente, luego revocada por decisión judicial ;

Que tal es la razón de ser de la disposición a que se hace referencia y es, pues, esta "relación de dependencia" inmediata la que debe modificarse, sin necesidad del traslado del agente a otro organismo de la Administración;

Que cabe concluir en consecuencia, que el término "dependencia", utilizado en dicho artículo, se refiere a las estructuras o divisiones internas de los organismos que componen la Administración Pública Nacional;

Que, por otra parte, por razones presupuestarias no podría darse el caso de que un agente fuera reincorporado en un organismo distinto de aquel en cuyo presupuesto revistaba al momento de la baja, y en el que se reservó la vacante necesaria, de acuerdo con el artículo 28° del Estatuto;

Que el pago de haberes por el lapso en que el agente permaneció separado corresponde efectuarlo con todas las asignaciones inherentes al cargo presupuestario que ocupaba al momento de la baja, incluídas aquellas que, con carácter general, se hubieran acordado con posterioridad a aquella fecha, ya que cualquier privación significaría tanto como una nueva sanción improcedente;

Que tal temperamento implica abonar al agente los mismos emolumentos que le hubieran correspondido de estar en actividad, que es precisamente el criterio resultante del artículo 27° del Estatuto al consagrar expresamente " el reconocimiento de los haberes devengados desde la fecha que se dispuso el cese de la prestación de servicios";

Por ello, atento a lo aconsejado por la Dirección General del Servicio Civil de la Nación, lo dictaminado por su similar de Asuntos Jurídicos y por el Tribunal de Cuentas de la Nación, y de conformidad con la competencia asignada a esta Secretaría de Estado por el decreto-ley nº 797/58 (*),

(*) Ver Digesto Administrativo nº 419.-

EL SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA
R E S U E L V E :

Artículo 1º.- Aclárase que la reincorporación de los agentes de la Administración Pública Nacional, en las condiciones resultantes del artículo 27º del Estatuto del Personal Civil (decreto-ley nº 6666/57), debe hacerse efectiva dentro del mismo organismo en que revistaban presupuestariamente al momento de la baja, en una dependencia del mismo distinta de aquella en la que prestaban servicios.-

Artículo 2º.- El pago de haberes por el lapso en que el agente estuvo separado de su empleo, y es reincorporado en los términos del artículo 27º del Estatuto, debe hacerse efectivo considerando todas las asignaciones inherentes al cargo presupuestario que ocupaba el causante al momento de su baja, incluídas todas aquéllas que, con carácter general, se hubieran acordado con posterioridad a aquella fecha.

Artículo 3º.- Comuníquese a quienes corresponda, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.-

Fdo. GUILLERMO WALTER KLEIN
Secretario de Estado de Hacienda

RESOLUCION Nº 8.159.-

Poder Ejecutivo Nacional
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº 958.-

DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION - DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO CIVIL DE LA NACION - ESTATUTO PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL - ESCALAFON PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL

Buenos Aires, 13 de octubre de 1959

Atento a la necesidad de uniformar los trámites relacionados con consultas referentes al Estatuto del Personal Civil, Escalafón y demás regímenes aplicables al personal, dentro de esta Secretaría de Estado,

EL SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA
R E S U E L V E :

1º.- En todos los casos en que se presenten dudas sobre la interpretación o aplicación de normas del Estatuto del Personal Civil, Escalafón (decreto nº 9530/58) o demás regímenes aplicables al personal, los distintos organismos dependientes de esta Secretaría de Estado cursarán las actuaciones respectivas a la Dirección General de Contabilidad y Administración, la que deberá resolver en cada caso en base a las normas existentes.-

2°.- Si la aludida Dirección General no contara con la disposición expresa que permita dar solución a la cuestión planteada, o si existieran dudas sobre la interpretación de las existentes, girará las actuaciones a la Dirección General del Servicio Civil de la Nación, dejando expresada su opinión sobre el asunto en cuestión.-

3°.- En los casos en que resulte necesario para propiciar el acto administrativo que corresponda, la Dirección General del Servicio Civil de la Nación, podrá requerir directamente de su similar de Asuntos Jurídicos el dictamen o asesoramiento legal que sea menester en la materia de que se trate.-

4°.- Comuníquese a quienes corresponda, y archívese.-

Fdo. GUILLERMO WALTER KLEIN
Secretario de Estado de Hacienda

RESOLUCION N° 8.244.-

Poder Ejecutivo Nacional
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº 959.-

ESTATUTO PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL - ESCALAFON PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL - ENTIDADES DESCENTRALIZADAS

Cde.Expte.nº 90.225/59 S.H.-
Providencia nº 245

Señor Subsecretario:

La Junta Nacional de Carnes plantea en estas actuaciones la cuestión relativa a su situación respecto del Estatuto del Personal Civil (decreto-ley nº 6.666/57) (1), y consecuentemente, del Escalafón aprobado por decreto nº 9.530/58.-

Basando su presentación en distintas normas emergentes del decreto-ley nº 8.509/56, considera que no le alcanzan las prescripciones de dichos cuerpos normativos, en disidencia con el criterio sustentado por esta Secretaría de Estado, del que informa la nota de fecha 18 de marzo de 1959 (fs. 1).-

En consecuencia, considera necesario esta Dirección General que, a efectos de deslindar perfectamente esta situación, se requiera el pertinente dictamen del señor Procurador del Tesoro de la Nación acerca de si, en base a la

(1) Ver Digesto Administrativo nº 254.-

situación jurídica de dicha Junta, la misma está excluída del ámbito de aplicación del referido Estatuto, y por tanto no alcanzan a su personal las disposiciones del Escalafón para el Personal Civil de la Administración Pública Nacional.-

Como medida previa a dicho dictamen resultaría conveniente contar con el pronunciamiento de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de esta Secretaría de Estado sobre el mismo planteo, el que por sus derivaciones hace necesario se imprima a estas actuaciones carácter de preferente despacho.-

DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO CIVIL DE LA NACION, 12-6-59

Fdo. JOSE LUIS FRANGI
Director General

//nos Aires, 17 de junio de 1959.-

Pase a la Dirección General de Asuntos Jurídicos estimando su dictamen acerca de si la Junta Nacional de Carnes dada su situación jurídica (decreto-ley nº 8.509/56), está comprendida dentro del ámbito de aplicación del Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública Nacional (decreto-ley nº 6.666/57).-

Fdo. RAFAEL RODOLFO AYALA
Subsecretario de Hacienda

Expte.90.225/59 - Junta Nacional de Carnes - Inclusión de su personal en el régimen del Estatuto y Escalafón para el Personal de la Administración Pública Nacional - Entidades autár - quicas u organismos descentralizados Su naturaleza como integrantes de la administración pública - Aplicación de dicho régimen al personal de las entidades autárquicas - Jurisprudencia y normas del decreto-ley 6666/57 y del decreto nº 9.530/58.-

//ñor Subsecretario de Hacienda:

1.- Se trata de establecer aquí si el personal de la - Junta Nacional de Carnes se encuentra comprendido en las - disposiciones del Estatuto (decreto-ley 6.666/57) y del Escalafón (decreto 9.530/58), en vista de la naturaleza jurídica de la entidad, según resulta de los preceptos de su - Carta Orgánica (decreto-ley 8.509/56, que continúa en vigor en virtud de lo establecido por la ley nº 14.467) (") y de lo expuesto por la Junta en las presentes actuaciones (fs . 2/5).-

2.- Según el artículo 1º del decreto-ley 8.509/56, la Junta Nacional de Carnes "...funcionará como entidad autárquica". Queda, con ello, perfectamente caracterizada la naturaleza jurídica e institucional de la Junta, y las demás disposiciones que se citan en la nota de fs.2/5 no son sino consecuencias o aplicaciones específicas de los principios

(") Ver Digesto Administrativo nº 609.-

generales y comunes a los entes autárquicos como personas jurídicas públicas distintas del Estado (latu sensu), pero inseparablemente unidas a él por el vínculo de la autar - quía, u organismos descentralizados a quienes la ley les confía la gestión de un determinado servicio público o de un conjunto de servicios públicos, afectándoles un patrimonio y proveyéndoles de una estructura orgánica administrativa (v. VILLEGAS BASAVILBASO, "Derecho administrativo" t. 2, p. 182, ed. 1950).-

Sin necesidad de abundar en mayores consideraciones - sobre el particular, pues se trata de conceptos que son ya de doctrina común, no puede dejar de señalarse que - esas personas jurídicas, típicamente administrativas, no son sino organismos "descentralizados" del Estado y que, por ende, son consideradas en su actividad como administración "indirecta" del Estado (VILLEGAS BASAVILBASO, obra citada, p. 183). "Las entidades autárquicas (enseña BIELSA, con su acostumbrada precisión, v. "La Nación y sus entidades autárquicas", en "Estudios de derecho público, t. 1, p. 409, ed. 1950) son personas de derecho público que forman parte de la administración pública (administración descentralizada, pero administración pública siempre). Consecuencia de esto es que ellas deben ser creadas directamente por ley y no por decreto del Poder Ejecutivo, a diferencia de las personas jurídicas regidas por el derecho civil".-

"Las entidades autárquicas -agrega- realizan servicios públicos sujetos a un régimen administrativo que se extiende no solo a los servicios, sino a los propios funcionarios y empleados, que son empleados públicos..."

Es sabido, en fin, que el Presidente de la República "es el jefe supremo de la Nación y tiene a su cargo la administración general del país" (C.N., art. 86, inc. 1º) y nombra y remueve por sí solo a los ministros del despacho, los oficiales de sus secretarías, los agentes consu-

lares " y demás empleados de la Administración cuyo nombramiento no está reglado de otra manera por esta Constitución" (C.N., art. 86, inc. 10), a tal punto que la doctrina más autorizada considera que la facultad de nombrar y remover a sus empleados, que las leyes otorgan comunmente a las entidades autárquicas, resulta violatoria de aquellos principios (v. VILLEGAS BASAVILBASO, "Derecho administrativo", t. 2, p. 695; BIELSA, "Derecho administrativo", t. 2, p. 27, ed 1947). Sea de ello lo que fuere, lo cierto es que no existen órganos de la administración nacional que no dependan, directa o indirectamente, del Poder Ejecutivo, y ello explica que, según normas expresas, los actos administrativos de las entidades autárquicas, cuando no obran como personas jurídicas civiles -esto es, en el derecho privado-, sean revisibles por el Poder Ejecutivo por la vía del recurso jerárquico (decreto nº 7.520/44) (&) o el contralor de legitimidad.-

Nadie duda, en consecuencia, de que las entidades autárquicas, cualquiera sea la amplitud de sus atribuciones de acuerdo con la autarquía conferida por sus cartas orgánicas forman parte de la "Administración Pública Nacional". Es obvio, por lo demás, que, dentro de nuestro ordenamiento jurídico-institucional y derecho público administrativo, no puede concebirse ningún órgano "administrativo" que no dependa jurisdiccionalmente de alguno de los tres poderes que integran el Gobierno Federal (Legislativo, Ejecutivo y Judicial) y no se necesita, pues, ningún esfuerzo de dialéctica para poder afirmar, en conclusión, que la Junta Nacional de Carnes es entidad autárquica integrante de la Administración Pública Nacional y depende, institucional y jurisdiccionalmente, del Poder Ejecutivo de la Nación, pues aunque el decreto-ley nº 8.509/56 no contenga una norma expresa sobre el particular, ella se deduce sin violencia de diversas -

(&) Ver Digesto Administrativo nº 43.-

disposiciones del mismo cuerpo legal (art. 1º, por el cual la Junta estará integrada por 10 miembros nombrados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado; el Presidente será designado a propuesta del Ministerio de Agricultura y Ganadería, y la incompatibilidad general establecida para los funcionarios y empleados públicos alcanzará a todo el personal del organismo, sin perjuicio de las incompatibilidades propias establecidas por la misma norma; artículo 5º, por el cual el presupuesto de la Junta debe ser elevado para su consideración al Poder Ejecutivo, a cuya aprobación queda subordinado, asimismo, el ejercicio de diversas atribuciones por parte de la Junta; artículo 7º, por el cual la Junta debe proponer al Poder Ejecutivo la contribución que se cobrará dentro del límite establecido en el inciso a) del artículo anterior; artículo 9º, por el cual la disposición de los fondos de la entidad debe ser sometida a la aprobación del Poder Ejecutivo; artículo 36º, por el cual los actos derivados de las atribuciones conferidas en dicha ley que requieran aprobación del Poder Ejecutivo, tramitarán por conducto del Ministerio de Agricultura y Ganadería, etcétera).-

Lo expuesto en el dictamen del señor Procurador del Tesoro de la Nación que se cita a fs. 3, no puede interpretarse, a juicio de esta Dirección, sino en el sentido estricto de que la Junta Nacional de Carnes tiene personería propia para actuar en juicio y no depende, a tal efecto, de los representantes que debe designar el Poder Ejecutivo o de los representantes de la Nación en el caso de los organismos no autárquicos cuando, a su vez, no tienen personería para actuar en juicio. No se trata, pues, de una conclusión de carácter general sino particular y con un alcance perfectamente limitado.-

3.- El Estatuto que rige para el personal de la Administración Pública Nacional (decreto-ley nº 6.666/57) comprende a todas las personas que, en virtud de nombramiento ema

nado de autoridad competente, prestan servicios remunerados en organismos dependientes del Poder Ejecutivo (art. 1º), - sin más excepciones que las taxativamente enumeradas por el artículo 2º.-

Ahora bien: con respecto al personal de las entidades - autárquicas y a su inclusión dentro del régimen del Estatuto, ya ha tenido ocasión de pronunciarse sobre el particular la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Federal y Contencioso-Administrativo de la Capital, in re "De la Torre - Peña, Héctor c/Banco Industrial de la República Argentina", según fallo de 27/11/58 que puede verse en LA LEY de 4/3/59. A propósito de lo sostenido por el Banco Industrial, en el sentido de que el Estatuto no tenía vigencia para esa institución porque su Carta Orgánica le confiere amplia autarquía institucional y presupuestaria y sólo se halla sujeto a las directivas fundamentales del Gobierno Nacional en el orden económico y financiero, la Cámara dijo lo siguiente:

"Cuando el decreto-ley nº 6666/57 habla de 'Organismo - "no perteneciente a su administración central' (art. 43) alu "de precisamente a las entidades autárquicas: por otra par- "te, no dice que éstas deban de pertenecer a los ministe - "rios con el sentido que se le quiere dar, sino que forman "parte de la jurisdicción de alguno de los ministerios na - "cionales, como ocurre con la mayoría de esas entidades y "también con este banco, que en tal sentido entra dentro de "la órbita del Ministerio de Finanzas de la Nación. Lo que "se desea significar con tal expresión u otras semejantes - "que se suelen utilizar en los textos legales, es que las "relaciones de dichos entes con el poder central se reali - "zan por conducto de tal o cual ministerio, y esas relacio- "nes son las que integran el contralor a que se encuentran "sometidas todas ellas, y que es de la naturaleza misma de "la relación de autarquía, la cual confiere, por una parte, "al ente la atribución de autoadministrarse y, por la otra, "al poder central la de controlarlo".-

"Dice también el representante del Banco, con el mismo fin, que todo lo relativo al régimen disciplinario ha sido atribuído expresamente a las autoridades del Banco (arts. 16, inc. m, y 13, inciso e), y que sólo la falta del ejercicio de esta atribución reglamentaria lo ha determinado en el interín a aceptar la aplicación del estatuto del personal civil, 'por tratarse de agentes ligados por una relación de derecho público', pero que ello no importa la aceptación 'in totum' de las disposiciones del mismo. Este aceptar de manera parcial el régimen de estabilidad no resulta de ninguna disposición adoptada por el Banco, sino tan sólo del dicho de su representante en estos autos. De la actuación de su mandante se desprende, en cambio, lo contrario, ya que tan pronto le fué interpuesto el recurso que ahora se considera, lo concedió sin ningún género de reservas.- Por otra parte, el propio decreto-ley 6666/57 prevé en su art. 2º los supuestos de su no aplicación. Entre los diversos casos allí contemplados, los únicos que podrían comprender al presente, serían los previstos en los incs. j) y l). El primero, en cuanto se refiere al personal de las empresas del Estado; éstas son las regidas por la ley nº 13.653 y su modificatoria 14.380. Sobre la base de las normas contenidas en tales leyes, se podría afirmar que el banco en cuestión queda comprendido en sus términos, pero es el caso que el art. 11 de la primera excluye expresamente de ese régimen a las instituciones que integran el 'sistema bancario oficial'. El segundo, determina que no queda sometido al Estatuto 'El personal de organismos que por sus funciones propias exija un régimen especial, cuando así lo resuelva el Poder Ejecutivo'. Como se ve, quien debe decidir la exclusión es el Poder Ejecutivo y no la entidad interesada.- Podrá afirmarse que éste así lo resolvió al autorizar por decreto-ley al directorio para 'reglamentar las con

"diciones de ingreso, retribución, promoción, licencias y "régimen disciplinario del personal y en general todo lo re "lativo a la carrera y perfeccionamiento de los empleados , "incluso el otorgamiento de becas' (art. 16, inc. m). Sin - "embargo, esto no es así, dado que si su propósito hubiera "sido efectuar la exclusión prevista lo habría hecho en for "ma expresa; además, y tan pronto excluyera del Estatuto a "cierto personal que ya gozaba efectivamente de la estabili "dad debería establecer otro régimen que la asegurase igual "mente, toda vez que este principio ha adquirido jerarquía "constitucional con la reforma de la Carta Magna reciente - "mente sancionada en la última Convención Constituyente.- "Es de buenos principios interpretar las leyes de manera - "que no resulten en pugna con la Constitución Nacional y "dentro de este orden de ideas, lo lógico es admitir que lo "que el directorio del Banco puede hacer es dictar normas - "reglamentarias que se ajusten a las disposiciones del de - "creto-ley 6666/57 y dentro del margen que las mismas le de- "jan".-

Esta Dirección concuerda enteramente con tales fundamentos y entiende que, "mutatis mutandis", son de estricta aplicación a la Junta Nacional de Carnes.-

4.- Por su parte, el artículo 2º del decreto 9530/58 establece que el Escalafón aprobado por el artículo 1º "será de aplicación, a partir del 1º de noviembre de 1958, para todo el personal comprendido en el Estatuto para el personal civil de la Administración Pública Nacional, que con posterioridad al 11 de agosto de 1958 no haya obtenido la sanción de un escalafón particular o que, aun cuando ello hubiera ocurrido, el acto respectivo dispusiera su incorporación al presente régimen en la oportunidad de ser aprobado". A su vez, el artículo 4º determina que "los Ministerios, Secretarías de Estado, Secretarías de la Presidencia de la Nación y Tribunal de Cuentas de la Nación (administración central, servicios de cuentas especiales, organismos descentra-

lizados y obras sociales), procederán a ubicar las funciones, de conformidad con las prescripciones contenidas en el texto que se aprueba, y propondrán al Poder Ejecutivo - dentro de los treinta días de la fecha - la pertinente medida aprobatoria que se sustanciará con intervención de la Secretaría de Hacienda . . . . ".

Como puede verse, el personal de las entidades autárquicas u organismos descentralizados se halla expresamente comprendido en las disposiciones del decreto 9530/58, en tanto no haya obtenido la sanción de un escalafón particular, así como en el régimen del Estatuto mientras no sea - excluído de él por resolución del Poder Ejecutivo si éste considera que sus funciones propias exigen un régimen especial (Estatuto, artículo 2º, inciso 1).-

5.- No existe en las presentes actuaciones constancia alguna en el sentido de que el personal de la Junta Nacional de Carnes goce de regímenes propios en cuanto a su estabilidad y escalafonamiento y, por lo tanto, atento a lo que resulta de las conclusiones que anteceden, esta Dirección estima que el régimen general establecido por el decreto-ley 6666/57 y por el decreto 9530/58 tiene plena vigencia con respecto a dicho personal.-

DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS, 22 de junio de 1959

Fdo:. CRISTIAN GIMENEZ DEMARIA
Director General

Actuación nº 3.074/59-M.A.
Expediente nº 90225/59-M.H.
Providencia nº 323

//nos Aires, 20 de julio de 1959

Remítanse estos actuados al señor Procurador del Tesoro de la Nación solicitándole quiera tener a bien dictaminar - si, dada la situación jurídica resultante del decreto- ley nº 8.509/56, la Junta Nacional de Carnes está incluída dentro del ámbito de aplicación del Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública Nacional (decreto-ley nº 6.666/57).-

En consideración a que al referido pronunciamiento queda supeditada la inclusión del personal del organismo en cuestión en el Escalafón aprobado por decreto nº 9.530/58, se encarece se asigne al presente requerimiento carácter de preferente despacho.-

Sirva la presente de atenta nota de remisión.-

Fdo. GUILLERMO WALTER KLEIN
Secretario de Estado de Hacienda

Expediente nº 90.225/59.-
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA

Señor Secretario de Estado de Hacienda:

I - Se refieren las presentes actuaciones al planteamiento que formula la Junta Nacional de Carnes respecto a la aplicación, para el personal de su dependencia, del Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública Nacional aprobado por el Decreto Ley nº 6.666/57 y consecuentemente, del Escalafón (decreto nº 9.530/58).-

El presidente de la Junta de referencia entiende que los institutos citados no son de aplicación al personal de la misma, dado, entre otros motivos a que alude a fs. 2/3, el carácter autárquico de aquélla que hace de la misma una entidad "independiente de todo organismo constitutivo del Poder Ejecutivo Nacional".-

II - Coincidiendo en un todo con el criterio sustentado por la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Estado a cargo de V.E., en su dictamen que corre a fs. 7/13 de estos actuados -por lo tanto también sobre la interpretación que allí se da respecto al dictamen de esta Procuración a que se hace referencia a fs. 3-cabe igualmente concluir que el régimen general establecido por el Estatuto del Decreto-Ley nº 6666/57 y Escalafón del Decreto nº 9.530/58 es aplicable al personal dependiente de la Junta Nacional de Carnes.-

Ello resulta concordante asimismo con lo dictaminado por el suscripto el día 15 del mes en curso, en actua

ción nº 185/59 de la Presidencia de la Nación sobre la situación jurídica de la Junta Nacional de Carnes.-

Julio 23 de 1959.-

Fdo. Ricardo Colombres
Procurador del Tesoro de la Nación

Poder Ejecutivo Nacional
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº 960.-

RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL DE CUENTAS - PRESUPUESTO - CONTADORES FISCALES - CUENTAS ESPECIALES

Buenos Aires, 9 de octubre de 1959.-

Visto la resolución nº 1.294/59 (') mediante la que se dispuso que los señores contadores fiscales dejaran de tomar intervención en los estados demostrativos de la ejecución del presupuesto de las distintas reparticiones fiscalizadas, y

CONSIDERANDO:

Que la citada medida fué dispuesta considerando "que "la materia vinculada con las registraciones contables y "los estado referidos a las mismas hacen a la esencia "del control interno a cargo de la Contaduría General de "la Nación";

Que posteriormente, por resolución nº 1.657/59 ("), se aclaró que lo dispuesto por la mencionada resolución nº 1.294/59 alcanzaba también a los estados mensuales demostrativos de los ingresos y egresos de las cuentas especiales con administración directa;

Que al tomar conocimiento la Contaduría General de la Nación de lo dispuesto por esa resolución nº 1.657/59 cursó a este Cuerpo la nota nº 72/59 puntualizando en ella los inconvenientes que tal sanción creaba al restar el respaldo legal que significa la intervención del con-

(') Ver Digesto Administrativo Nº 922.-
(") Ver Digesto Administrativo Nº 923.-

tador fiscal;

Que esa falta de certificación por parte del representante del Tribunal de Cuentas podría ser salvada mediante una comunicación a la Contaduría General en cada oportunidad que se operara un movimiento de fondos, solución que evidentemente no resultaría práctica en razón del movimiento de documentación e intervenciones que provocaría;

Que frente a la situación expuesta razones de buen gobierno aconsejan dejar sin efecto la resolución nº 1.657/59;

Por ello,

EL TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA NACION
R E S U E L V E :

Artículo 1º.- Déjase sin efecto la resolución nº 1.657/59.
Artículo 2º.- Los estados mensuales demostrativos de los ingresos y egresos operados en las cuentas especiales con administración directa que deben presentar las Direcciones Generales de Administración u organismos que hagan sus veces, serán certificados en sus cifras por los señores representantes del Tribunal de Cuentas y remitidos por conducto de la repartición fiscalizada a la Contaduría General de la Nación.-
Artículo 3º.- La intervención dispuesta en el artículo anterior se cumplirá también en aquellos estados que, a raíz de la resolución nº 1.657/59 que se deja sin efecto, hayan sido cursados a la Contaduría General de la Nación sin certificación de los contadores fiscales respectivos.-
Artículo 4º.- Remítase copia de la presente resolución a la Contaduría General de la Nación, dése al Digesto Administrativo, comuníquese a los distintos responsables y, cumplido, archívese.-

JOSE M.FERNANDEZ FARIÑA - Damián Figueroa - Rodolfo J.Tarelli - Wifredo Dedeu - Antonio M.Pérez Arango - Juan Carlos Pastene -Secretario-

RESOLUCION Nº1859/59.-

Poder Ejecutivo Nacional
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº 961.-

ESTATUTO PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL - REINGRESO - REHABILITACION - SANCIONES - INDULTO - CONMUTACION

Expte.nº 42.097/58 - Contaduría General de la Nación - Osvaldo Santiago Manes - Condena Penal - Indulto y Conmutación - Exoneración - Estatuto del Personal Civil - Rehabilitación.-

//ñor Secretario de Hacienda:

El indulto remite el cumplimiento de la pena y sus respectivos efectos (Oderigo, "Código penal anotado", págs. 91 y sigts.). La facultad de conmutar es paralela a la de indultar, y las consecuencias de la conmutación son las mismas que las del indulto, diferenciándose solamente en que se trata de un perdón parcial y no total (Soler, "Derecho penal argentino", t. III, p. 521).

Las normas del Estatuto (art. 4º, inc. b) y su reglamentación (art. 3º-IX) deben interpretarse en el sentido de que entre la separación del agente o cesación en el servicio y su reincorporación debe mediar un lapso no inferior a 5 años. En el presente caso, si se tiene en cuenta que la condena del agente Osvaldo Santiago Manes se pronunció por sentencia definitiva de 28 de julio de 1953 y que es entonces cuando debió procederse a resolver la situación administrativa del mismo, la circunstancia de

que la respectiva decisión (decreto 2216/58) no se adoptara sino el 10 de julio de 1958, por razones cuya dilucidación no es de este lugar, no puede alterar el verdadero - significado de las normas en cuestión. A ello se agrega - que la exoneración se decretó "a partir del 12 de noviembre de 1952", con lo que ha transcurrido con exceso el - plazo de 5 años establecido por la reglamentación del Estatuto para que el agente pueda gestionar su rehabilitación.-

DIRECCION GRAL. DE ASUNTOS JURIDICOS, noviembre 26 de 1958.-

Fdo. CRISTIAN GIMENEZ DEMARIA
Director General

Expediente nº 42.097/58.-
Providencia nº 265.-

//ñor Subsecretario:

Esta Dirección General nada tiene que agregar respecto de lo dictaminado precedentemente por su similar de Asuntos Jurídicos acerca de la cuestión planteada a fs. 10, compartiendo plenamente los términos en que se expide.

Cabe dejar constancia, sin embargo que, atento a la aprobación del Escalafón para el Personal Civil de la Administración Pública Nacional (decreto nº 9.530/58), el -

reingreso del causante, previa rehabilitación de acuerdo con el art. 4º, inciso f), del Estatuto del Personal Civil, se operaría previo concurso y en vacante producida con posterioridad al encasillamiento actual del personal de la dependencia respectiva.-

DIR.GRAL.DEL SERVICIO CIVIL DE LA NACION, 26-12-1958.-

Fdo. JOSE LUIS FRANGI
Director General

//nos Aires, 29 de diciembre de 1958.-

Con lo informado a fs. 12 y 13, pase a sus efectos a la Dirección General de Contabilidad y Administración.-

Fdo. RAFAEL RODOLFO AYALA
Subsecretario de Hacienda

Poder Ejecutivo Nacional
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº 962.-

ESTATUTO PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL (Art. 3º) - INGRESO - NOMBRAMIENTOS

Expte.Nº 1075/57 - Dict. Nº 17220- Pago de haberes al empleado argentino Bernardo Fittipaldi, suspendido por encontrarse bajo detención policial y proceso y resultar absuelto de culpa y cargo.-

Sr.Presidente:

1. El artículo 39 del decreto 1471/58 (1), reglamentario del decreto-ley 6666/57 (2), que prevé el caso de suspensión del agente objeto de un proceso criminal no contiene previsión alguna relativa a la percepción de haberes correspondientes al período de dicha suspensión.

En tales condiciones estimo de aplicación al caso la doctrina sustentada por esta dependencia en el dictamen 10.666, del 13/4/53, recaído en el expediente 2894/52, que en copia se acompaña, y conforme al cual no corresponde, en casos como el presente, el pago de los haberes que se solicita a fs. 23.

En cuanto a los alcances del artículo 39 del Estatuto del Personal Civil entiendo que sus previsiones sólo comprenden las suspensiones por faltas administrativas. El caso que nos ocupa se halla expresamente previsto en el art. 39 del decreto reglamentario, que, aunque vicioso, en cuanto amplía evidentemente el texto del decreto-

(1) Ver Digesto Administrativo Nº 422.-
(2) Ver Digesto Administrativo Nº 254.-

ley, es, no obstante, de aplicación inexcusable (v.dict. de la fecha recaído en el expediente 1830/56).

2. Sin perjuicio de lo expuesto, y atento a la competencia atribuída al Ministerio de Hacienda de la Nación - por decreto-ley nº 797/58 (*) en todo lo que se refiere a la interpretación de las normas del precitado decreto nº 6666/57, del Estatuto del Personal Civil de la Administración, opino, atento a la naturaleza del asunto, que estos actuados podrían girarse, si es que la H. Junta estima necesario el aporte de otros elementos de juicio, al dictamen de dicho Ministerio.

ASUNTOS JURIDICOS, 6 de junio de 1958.-

Fdo. ARMANDO H. CERRUTTI
Jefe

Expediente Nº 90.165/58.-
Providencia Nº 197.-

//nos Aires, 22 de setiembre de 1958.-

Vuelva a la Junta Nacional de Granos llevando a su conocimiento que esta Dirección General comparte el criterio sustentado a fs. 28 por el Servicio de Asuntos Jurídicos de ese Organismo en cuanto concierne al pago de haberes - por el lapso que abarcara la suspensión del agente, de a - cuerdo con lo establecido en la reglamentación del art. -

(*) Ver Digesto Administrativo Nº 419.-

39º del Estatuto del Personal Civil.

Dicho temperamento se encuentra avalado por el dictamen que, en un caso similar al presente, emitió la Dirección General de Asuntos Jurídicos de esta Secretaría de Estado, y cuya parte pertinente se transcribe a continuación:"En cuanto al pago de haberes en cada una de las si "tuaciones enunciadas, debería procederse, a juicio de - "esta Dirección, en la siguiente forma:

"a) Condena. "En los casos en que el personal fuera san- "cionado con exoneración o cesantía -dice textualmente - "el artículo 39-II de la Reglamentación del Estatuto- no "tendrá derecho a la percepción de los haberes correspon "dientes al lapso durante el cual permaneció suspendido". "Entiende esta Dirección que esta norma no sólo debe apli "carse cuando se trata de la resolución correspondiente- "a una causa administrativa, sino también cuando se tra- "ta de la separación del agente por hechos ajenos al ser "vicio y según el resultado de una causa criminal. En e- "fecto, si la suspensión provisional o preventiva se con "vierte en sanción definitiva y la separación (exonera - "ción o cesantía) puede retrotraerse a la fecha de la - "suspensión, con lo que, como es obvio, cesa a su vez el "derecho a la percepción de haberes.

"b) Absolución o sobreseimiento definitivo. No está cla- "ro si el precepto contenido en el artículo 39-II de la "reglamentación del Estatuto impone, interpretándolo "a "contrario sensu", el pago de los haberes, puesto que no "media sanción disciplinaria, sino el levantamiento de "la suspensión y el reintegro del agente a sus funciones. "Si redactáramos "a contrario" el artículo 39-II de la - "reglamentación del Estatuto, diría lo siguiente: "En - "los casos en que el personal no fuera sancionado con - "exoneración o cesantía tendrá derecho a la percepción - "de los haberes correspondientes al lapso durante el cual "permaneció suspendido".

"Como se ve, tal interpretación eliminaría en forma inad-
"misible los casos en que (en virtud de la naturaleza de
"los hechos o de las circunstancias en que se cometieron),
"se considerara que la condena del agente no hace incompa
"tible con ella su permanencia en el cargo, pero justifi-
"ca una sanción de menor gravedad (suspensión privativa -
"de haberes o retrogradación).
"En consecuencia, no puede decirse categóricamente que si
"el agente no fuera sancionado -por haber sido absuelto o
"sobreseído definitivamente- tendrá derecho a la percep -
"ción de los haberes correspondientes al lapso durante el
"cual permaneció suspendido, en virtud de la interpreta -
"ción "a contrario" del artículo 39-II de la reglamenta -
"ción del Estatuto.
"Podría sin duda argumentarse que, si no media sanción ad
"ministrativa, no sería equitativo que el agente sufriera
"las consecuencias de una suspensión preventiva por una -
"causa judicial que ha terminado con la absolución o el
"sobreseimiento definitivo, esto es, con el reconocimien-
"to de su inculpabilidad; pero, a su vez, como la suspen -
"sión se ha impuesto por razones que hacen al decoro y
"prestigio de la Administración y en resguardo de sus le-
"gítimos intereses de orden ético-administrativo, ésta no
"tendría porqué sufrir las consecuencias de esa situación
"y de las contingencias sobrevenidas al agente en su vida
"privada y no se hallaría obligada al pago de haberes sin
"la correlativa prestación de servicios. Es decir que, de
"acuerdo con este criterio, la norma del artículo 39 "in
"fine" del Estatuto ("Si la sanción no fuera privativa de
"haberes, éstos le serán íntegramente abonados; en su de-
"fecto, le serán pagados en la proporción correspondien -
"te") sólo regiría en el caso de situaciones en que el a-
"gente se ve colocado por causas del servicio o imputa- -
"bles al mismo y no existiría, en rigor, ni en el Estatu-
"to ni en su reglamentación, una norma que resuelva el -

"punto en cuestión, relativo al derecho a la percepción "de los haberes correspondientes al lapso durante el - "cual el agente permaneció suspendido, por hechos ajenos "al servicio, en el caso de inculpabilidad.
"La doctrina que ha prevalecido hasta ahora en la mate - "ria es la de que en el caso de agentes suspendidos en "defensa del decoro y prestigio del cargo que desempeñan, "por imputárseles hechos delictuosos ajenos a la función "administrativa, no corresponde el pago de los haberes - "respectivos, cualquiera sea el pronunciamiento de la - "justicia (cfr.dictamen del Procurador del Tesoro de 14 "de mayo de 1946, en "jurisprudencia Administrativa Na - "cional", Buenos Aires, 1952, Vol. I, p. 26).
"En tal virtud y en vista de la importancia del asunto y "del precedente que sentará la resolución del caso de au "tos, entiende esta Dirección que corresponde requerir - "el oportuno dictamen del señor Procurador del Tesoro de "la Nación".

En oportunidad de contarse con el pronunciamiento del señor Procurador del Tesoro de la Nación, se pondrá el - mismo en conocimiento de esa Junta Nacional a los fines pertinentes.

Sirva la presente de atenta nota de remisión.-

Fdo. JOSE LUIS FRANGI.
Director General
Servicio Civil de la Nación.

Poder Ejecutivo Nacional
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº 963.-

ADSCRIPCIONES

Buenos Aires, 13 de octubre de 1959.-

Visto la consulta formulada por la Comisión de Organización y Métodos del Ministerio de Educación y Justicia con respecto a la adscripción a funciones administrativas de horas de cátedra y cargos docentes, y

CONSIDERANDO:

Que la adscripción es por su naturaleza un régimen anormal pues el agente percibe su retribución por su cargo y sin embargo desempeña otro. Se viola así lo establecido en el artículo 24 in-fine de la ley de contabilidad, de modo que la interpretación de las excepciones admitidas debe ser absolutamente restrictiva;

Que el Decreto-Ley Nº 3.891/57 (*) admite las adscripciones de cargos a la Presidencia de la Nación y entre organismos de la misma jurisdicción ministerial, disposición concordante con la contenida en el Estatuto del Docente;

Que para todo otro caso el decreto-ley citado prohibe cualquier adscripción, por cuya razón la consulta formulada se limita al problema de horas de cátedra adscriptas a la Presidencia de la Nación o bien a organismos de jurisdicción del Ministerio de Educación y Justicia, ya que cualquiera otra sería ilegal;

Que aun en los casos de adscripciones admitidas, el

(*) Ver Digesto Administrativo Nº 213.-

C.E.P.R.A. estima que no comprenden las horas de cátedra ni los cargos docentes. En efecto, el mismo Decreto-Ley 3.891/57 que trata la materia, acepta la redistribución de agentes dentro de la misma jurisdicción ministerial pero con vistas a una mejor distribución del trabajo y por un sólo ejercicio, por cuanto supone que en el ejercicio siguiente se ha podido corregir la anormalidad mediante una reforma presupuestaria. Ello significa que la labor del agente adscripto no es necesaria en el organismo en que está designado y así lo es en el lugar de adscripción. Consecuentemente, hay una sóla función y una única retribución, aunque esta última con distinta imputación. La otra excepción, es decir, adscripto a la Presidencia, es admisible por tratarse de un organismo común a la administración nacional. La función en el lugar de designación es absorbida por otros agentes que concurren así al deber de colaboración con la primera autoridad de la Nación. Pero la función del adscripto tiene una sola retribución que es soportada por el organismo de designación;

Que estos supuestos no se dan en el caso de las funciones docentes u horas de cátedra. La tarea docente debe cumplirse inevitablemente y entonces se cubre el cargo del adscripto con el fondo de suplencias. Se produce entonces una doble retribución por un mismo cargo de un agente en actividad lo que es un contrasentido y se aparta de todo principio de racionalidad en la inversión de los fondos públicos, aparte de que ello significa que las horas o el cargo docente adscripto siguen siendo indispensables en el lugar de designación, de modo que resulta imposible la redistribución que el Decreto-Ley 3.891/57 acepta como fundamento de las adscripciones;

Que por otra parte, se da frecuentemente el caso de que las horas de cátedra o cargo docente se adscriben simultáneamente con otro cargo de la administración, superponiendo así ambas funciones en violación de lo estableci

do en los decretos sobre horarios;

Que finalmente, el C.E.P.R.A. debe hacer notar que las adscripciones en ningún momento deben significar un cambio en la actividad específica del agente. El administrativo actuará en otra dependencia como administrativo; el técnico será adscripto precisamente por su capacitación técnica. Pero el docente pierde su función de impartir enseñanza y pasa a otra actividad administrativa o técnica. Ello es inadmisible, quiere decir que lo que se adscribe no es la actividad específica del agente sino su sueldo;

Que por estas consideraciones el C.E.P.R.A. estima que no corresponde considerar incluídas en las excepciones del Decreto-Ley 3.891/57 las adscripciones de horas de cátedra o de cargos docentes;

Por ello y atento las facultades acordadas al Comité Ejecutivo del Plan de Racionalización y Austeridad por el artículo 2º del Decreto Nº 11.708/58 (") con el fin de dar cumplimiento integral al citado plan,

EL COMITE EJECUTIVO DEL
PLAN DE RACIONALIZACION Y AUSTERIDAD,

R E S U E L V E :

Artículo 1º.- Aclárase que las adscripciones de cargos que admite el Decreto-Ley 3.891/57 no comprenden las horas de cátedra ni los cargos docentes.-

Artículo 2º.- Comuníquese al Ministerio de Educación y Justicia y al Tribunal de Cuentas de la Nación, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.

Fdo. JUAN OVIDIO ZAVALA
Secretario Técnico de la
Presidencia de la Nación

RESOLUCION Nº 9.-

(") Ver Digesto Administrativo Nº 690.-

Poder Ejecutivo Nacional
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín N° 964.-

ESCALAFON PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PU - BLICA NACIONAL (Cap. IV) - PROFESIONALES

Expediente n° 37123/59
Providencia n° 337

//nos Aires, 31 de julio de 1959.

Vuelva a la Dirección General de Contabilidad y Admi - nistración llevando a su conocimiento que:

a) la resolución n° 7.023/59 (1), fué dictada para aclarar el procedimiento a seguir para el encasillamiento de - los profesionales. Sus efectos se limitan, en consecuencia, a aquel momento y no podría basarse en ella un derecho permanente para modificar el agrupamiento de esos agentes, toda vez que el mismo, una vez producido el escalafonamiento, debe regirse por las disposiciones del capítulo IV del Escalafón aprobado por el Decreto 9530/58.-
b) En el presente caso se trata del cambio de grupo de un agente (Grupo I a grupo IV de la clase C) debiéndose cumplir los extremos previstos en el Capítulo IV sin que - la conformidad del interesado y del servicio y la cir - cunstancia de que la retribución sea menor permitan una excepción a dichas normas.-

DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO CIVIL DE LA NACION.

Fdo. JOSE LUIS FRANGI
Director General-

(1) Ver Digesto Administrativo n° 678.-



Poder Ejecutivo Nacional
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº 965.-

JUBILACIONES

1.- La confrontación del art. 26 de la ley nº 4349 con lo que estatuye el art. 21 de la ley nº 11.027 (ADLA, 1889-1919, 620 y 1920-1940, 25), revela que este último, en cuanto dispone que se formule cargo, sin interés, "a los empleados, jubilados y pensionistas, por el importe del 5% de los sueldos no descontados en cualquier época de la prestación de servicios", derogó, de manera implícita pero incuestionable, la cláusula de no computabilidad de los servicios prestados antes de la edad de 18 años.-

2.- Los servicios prestados antes de los 18 años de edad por el afiliado al régimen de la ley 4349 (ADLA, 1889-1919, 620) son computables, sin que la circunstancia de tratarse de servicios honorarios impida la computación, habida cuenta de lo que establece el art. 9º de la ley 14.069 (ADLA, XI-A, 171).-

3.- El solo hecho de la nueva composición de los ministros integrantes de la Corte Suprema, no es razón jurídica atendible para desconocer sus fallos anteriores o alzarse contra la doctrina legal sustentada por ella con resoluciones carentes de sustentación legal (doctrina de la Cámara del Trabajo).-

CS, agosto 12-959.- Imbrogno, Ricardo.-

2a. Instancia.- Buenos Aires, marzo 19 de 1958.-

El doctor Cattáneo dijo:

CONSIDERANDO:

Para resolver la apelación deducida. Reclama el peticionante se le reconozcan en el régimen de la ley 4349 (ADLA, 1889-1919, 620), los servicios y honorarios que prestó en el Colegio Nacional Bernardino Rivadavia con anterioridad a la edad de 18 años; pero tanto la Caja seccional como el Instituto Nacional de Previsión Social interpretando el art. 26 de la ley 4349, resuelven desestimar sus requerimientos en razón de que tales servicios no estuvieron sujetos a descuentos ni tenían remuneración, motivos éstos por los que no encuadrarían en la norma legal citada. Además argumenta el Instituto Nacional de Previsión Social que habiendo variado la nueva composición del Superior tribunal de la Nación, correspondería obtener un nuevo pronunciamiento que mantuviera o dejara sin efecto la doctrina sentada en el caso "Sarrabayrouse Varangot". Considera el suscripto que el solo hecho de la nueva composición de los ministros integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no es razón jurídica atendible para desconocer sus fallos anteriores o alzarse contra la doctrina legal sustentada por ella con resoluciones carentes de sustentación legal. En cuanto el examen interpretativo del art. 26 de la ley 4349, art. 21 de la ley 11.027 y art. 9° de la ley 14.069 (ADLA, 1920-1940, 25 y XI-A, 171) realizado por el supremo tribunal de la Nación en el caso jurisprudencial citado -mediante sentencia de fecha 20 de diciembre de 1954 registrada en el t. 230, ps. 503/505 mantiene su actualidad, pues surge ajustada a derecho y acorde al espíritu y letra de las normas previsionales indicadas. Ello justifica el reclamo del apelante y autoriza el cómputo de servi-

cios solicitados, imponiendo la revocatoria de fs. 27 vta. en cuanto ha sido materia de recurso. A mayor abundamiento cabe destacar que el escrito de fs.32 satisface los recaudos técnicos procesales necesarios para la viabilidad de la apelación (art. 14, ley 14.236 (ADLA, XIII-A, 164). En mérito a lo expuesto, voto por la revocatoria de la resolución de fs. 27 vta. en cuanto ha sido materia de recurso, declarar la computabilidad de los servicios que acreditare haber prestado el recurrente en el Colegio Nacional Bernardino Rivadavia, con anterioridad a los 18 años de edad, en mérito a lo dispuesto por el art. 9º de la ley 14.069. Sin costas atenta la naturaleza de la causa (art. 92, ley orgánica (ADLA, V, 4 y VII, 203).-

Los doctores Pettoruti y Míguez adhirieron al voto del doctor Cattáneo, por las consideraciones que lo fundamentan.-

Por ello y como resultado de la votación que antecede, se resuelve revocar la resolución apelada en cuanto ha sido materia de recurso, declarando la computabilidad de los servicios que acreditare el recurrente haber prestado en el Colegio Nacional Bernardino Rivadavia con anterioridad a los 18 años. Sin costas atento la naturaleza de la causa.

OSCAR M. A. CATTANEO - ORESTE PETTORUTI - MIGUEL G. MIGUEZ (Sec.: Eduardo D. Echazú).-

Opinión del procurador general de la Nación.-

El recurso extraordinario interpuesto a fs. 41 es procedente, toda vez que se ha puesto en cuestión la inteligencia de normas federales y la sentencia definitiva es ad-

versa a las pretensiones del apelante.-

En cuanto al fondo del asunto, compartiendo la doctrina sentada en un caso similar al presente en la sentencia registrada en el t. 230, p.503 de la colección de los fallos de V.E., opino que corresponde confirmar la sentencia apelada en cuanto pudo ser materia de recurso.- Junio 12 de 1958.-

RAMON LASCANO.

Buenos Aires, agosto 12 de 1959.-

CONSIDERANDO:

Que el tribunal a quo, revocando el anterior pronunciamiento del Instituto Nacional de Previsión Social, declaró "la computabilidad de los servicios que acreditare el recurrente haber prestado en el Colegio Nacional Bernardino Rivadavia con anterioridad a los 18 años", servicios que fueron honorarios, según se halla acreditado en autos sin que medie controversia sobre el punto.

Que, contra esa sentencia, el apoderado del Instituto Nacional de Previsión Social dedujo recurso extraordinario el que le ha sido concedido, y es procedente en razón de haberse cuestionado la inteligencia de disposiciones federales y por ser la decisión judicial contraria al derecho que el apelante funda en dichas disposiciones.

Que son dos las cuestiones cuya consideración impone el presente recurso:

a) subsistencia, dentro del derecho público argentino, de la norma la confrontación del precitado art. 26 de la ley 4349 con lo que estatuye el art. 21 de la ley 11.027 contenida en el art. 25 de la ley 4349 (ADLA, 1889-1919, -

620) sobre no computabilidad de servicios prestados antes de la edad de 18 años; y, para el caso de que esta primera cuestión resolviere negativamente;

b) aplicabilidad, en el sub lite, de lo prescripto por el art. 9º de la ley 14.069 (ADLA, XI-A, 171) con relación a los servicios de carácter honorario.-

Que respecto de la primera de esas cuestiones, (ADLA, 1920-1940, p. 25) revela que este último, en cuanto dispone que se formule cargo, sin interés, "a los empleados, jubilados y pensionistas, por el importe del 5% de los sueldos no descontados en cualquier época de la prestación de servicios . . .", derogó, de manera implícita pero incuestionable, la cláusula de no computabilidad antes referida.-

Que, en consecuencia, debiendo tenerse por inexistente esa cláusula legal a los fines que aquí interesan, la única circunstancia que podría obstar a la procedencia del reclamo del afiliado sería, en todo caso, la proveniente del carácter honorario de los servicios en cuestión. Ella, sin embargo, carece de valor impeditivo, habida cuenta de lo que establece el art. 9º de la ley 14.069 con arreglo a cuyo texto: "Decláranse computables para todos los efectos de la ley 4349 y sus complementarias, los servicios de carácter honorario prestados a la Nación o en organismos directamente vinculados a las ramas de los poderes públicos nacionales". Frente a este precepto y a su letra expresa, ninguna objeción puede fundarse en la índole de los servicios que se alegan.-

En su mérito, habiendo dictaminado el procurador general se confirma la sentencia apelada, en cuanto ha sido materia del recurso extraordinario.-

ALFREDO ORGAZ - BENJAMIN VILLEGAS BASAVILBASO - LUIS M. BOFFI BOGGERO - JULIO OYHANARTE.-

Rev. LA LEY del 17-10-59 - págs. 4 y 5.-

Poder Ejecutivo Nacional
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº 966.-

ESTATUTO PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL (Art. 41º y 44º) - SUMARIOS - JUNTA DE DISCIPLINA

Expte. Nº 22.409/57.-
Expte. Nº317.352/59.-
Providencia Nº 335.-

//ñor Subsecretario:

I - El caso que tratan estos actuados se refiere a - hechos ocurridos a principios de 1957, que motivaron el levantamiento de un sumario, cuyas conclusiones se elevaron el 28 de febrero del mismo año, y cuyo acto resolutivo tiene fecha del 5 de abril de 1957; la Dirección General de Contabilidad y Administración formuló diversas objeciones a las medidas adoptadas -cuya ratificación ministerial solicitaba la Dirección General de Suministros - del Estado- como así también a distintos aspectos formales del procedimiento sumarial, requiriéndose en la emergencia el dictamen de la Dirección General de Asuntos Jurídicos con fecha 7 de mayo de 1957. Vale decir que todo este aspecto de la cuestión se desarrolló antes de que - fuera sancionado el Estatuto del Personal Civil (Decreto-Ley Nº 6666 de 17/VI/57) (').

La Dirección General nombrada en último término se - expide, con fecha 4 de septiembre de 1958, dictaminando

(') Ver Digesto Administrativo Nº 254.-

que en virtud de normas jurídicas existentes, fallos de la Corte Suprema de Justicia, y opiniones de tratadistas en la materia, resultan de aplicación al caso las disposiciones del art. 44º del citado Estatuto y arts. 41º punto XIII y 44º de su Reglamentación, que disponen la intervención de la Junta de Disciplina de la respectiva Repartición. No se pronuncia, de tal modo, sobre los vicios de procedimiento a que alude el informe de la Dirección General de Contabilidad y Administración en su Memorandum a fs. 101/102.

Cabe inferir de ello que se consideraría que el acto formal del sumario realizado, por estar cerrado a la fecha de sanción del Estatuto, no sería susceptible de una nueva realización en sujeción a todas las normas que aquel cuerpo estatuyera, procediendo solamente dar intervención en lo actuado a la Junta de Disciplina ya que, como manifiesta a fs. 104 "se trata de un sumario administrativo en el que no ha recaído todavía resolución, y durante el trámite del cual, se ha creado un nuevo órgano disciplinario competente para dictaminar, en forma tal que ninguno de los actos procesales cumplidos con anterioridad pueda considerarse afectado por la aplicación de la nueva norma".

Dicha Junta, valida de las atribuciones que le confiere el art. 44º del Estatuto y el correlativo de su Reglamentación, podrá aconsejar -si así lo considera procedente- que se amplíe el sumario, o se adopten las medidas necesarias para mejor proveer. En ese caso, la ampliación del sumario tendría necesariamente que efectuarse siguiendo todas las normas del art. 41º del Estatuto y su Reglamentación.

II - Si bien esta Dirección General informó con fecha 20 de febrero del año en curso, en el expte. Nº 204.635/58 (Providencia nº 138)(*), que "la sustanciación de los

(*) Ver Digesto Administrativo Nº 707.-

sumarios administrativos debe ajustarse estrictamente a todas y cada una de las normas contenidas en el art. 41º del Estatuto del Personal Civil y su Reglamentación, ya que en caso contrario quedaría invalidado todo lo actuado",dicha norma, por lo expuesto precedentemente,no podría aplicarse en forma automática al caso en cuestión, ya que ello significaría rehacer todo un sumario efectuado hace más de dos años, con los inconvenientes de todo orden que no sería del caso puntualizar. Las deficiencias que el mismo revela, en cuanto a insuficiencia de ciertas averiguaciones, pueden quedar subsanadas en una ampliación que solicite la Junta de Disciplina correspondiente; las formales,relativas a la falta de designación expresa de Instructor Sumariante y Secretario Actuante, no justificarían un sumario completamente nuevo, ya que debe considerarse muy especialmente que a la fecha de su realización, no se había dictado aún el Estatuto del Personal Civil, y esta Dirección General no tiene conocimiento de que existiese un reglamento expreso en la materia, dentro del entonces Ministerio de Hacienda.

Por todo lo expuesto se estima procedente dar traslado de estos actuados, en su estado actual, a la Junta de Disciplina de la Dirección General de Suministros del Estado.-

DIRECCION GRAL.DEL SERVICIO CIVIL DE LA NACION, 30-7-59.-

Fdo. JOSE LUIS FRANGI
Director General

Poder Ejecutivo Nacional
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº 967.-

ESCALAFON PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL - (Punto 26) - SUBSIDIO FAMILIAR

Buenos Aires, 4 de junio de 1959.-

Señor Subsecretario:

Tengo el agrado de dirigirme al señor Subsecretario con motivo de una consulta referente a liquidaciones particulares del salario familiar instituído por Decreto Nº 9.530/58.

Entiende esta Secretaría que, concorde con lo establecido por los Decretos Nros. 24.815/45 y 14.984/57 y sus sucesivas actualizaciones, el salario familiar comprende exclusivamente al personal que presta servicios en el territorio de la República.

No obstante lo expuesto, esta Secretaría tiene personal que, prestando servicios en unidades que navegan en aguas no territoriales, que no perciben haberes en divisas, y que dada su tarea tiene la familia radicada en el país, a los cuales entiende correspondería por todo ello la liquidación de referencia, mientras se cumplimentaran los requisitos de dicho decreto Nº 9.530/58, y se mantuvieran las condiciones de revista y pago indicados.

Abona en favor de esa opinión, el hecho de que la revista en cuestión se efectúa en el país, de que dicho personal -insisto- percibe sus haberes en pesos moneda nacional sin que medie liquidación en divisas, y que menos aún se les abona el suplemento que en concepto de "Bene-

ficio de Familia" establece el decreto Nº 17.156/53.

Por lo expuesto, solicito del señor Subsecretario - quiera tener a bien disponer se dictamine sobre lo apunta do precedentemente.

Hago propicia la oportunidad para reiterar a V.S. las expresiones de mi consideración más dintinguida.

Fdo. ELADIO M. VAZQUEZ
Capitán de Navío
Subsecretario de Marina

A S.S. el señor Subsecretario de Hacienda
D. RAFAEL R. AYALA
S / D.

Expte. Nº 90.283/59 (Hacienda)
Providencia Nº 306.-

Señor Subsecretario:

El régimen de subsidio familiar instituído por el pun to 26º del Escalafón para el Personal Civil de la Adminis tración Pública Nacional y reglamentado por decreto mímero 4.631/59 (1), no contiene disposición alguna que esta blezca la obligatoriedad de residir en el país para perci bir ese beneficio.

(1) Ver Digesto Administrativo Nº 738.-

Ello no obstante, y de considerarse subsistente ese requisito, fijado en el decreto Nº 24.815/45 y decreto-ley 14.984/57 (*), estima esta Dirección General que el personal de la Secretaría de Estado de Marina involucrado en los alcances de la referida norma, que se halle prestando servicios en unidades navales fuera de aguas territoriales argentinas, está asimilado al personal que reside en el país, por cuanto al estar el buque bajo pabellón nacional debe considerárselo como parte integrante de su territorio. Este temperamento es aplicable únicamente en el caso concreto que expone la citada Secretaría, vale decir, cuando ese personal tiene su familia radicada en el país, y sus haberes se liquidan en moneda nacional, y en ningún caso correspondería aplicar coeficiente alguno sobre su monto.-

DIRECCION GRAL. DEL SERVICIO CIVIL, 2 de julio de 1959.-

Fdo. JOSE LUIS FRANGI
Director General

Expediente Nº 90.283/59.-

Buenos Aires, 12 de agosto de 1959.-

Señor Subsecretario:

Tengo el agrado de dirigirme al señor Subsecretario en respuesta a la consulta que formulara esa Secretaría -

(*) Ver Digesto Administrativo Nº 369.-

de Estado mediante nota Nº 479/59, relativa a la liquidación del subsidio familiar instituído por el punto 26º del Escalafón aprobado por decreto Nº 9.530/58 y decreto Nº - 4.631/59, al personal que presta servicio en unidades que navegan en aguas no territoriales.

En tal sentido llevo a su conocimiento que el Escalafón para el Personal Civil innova con respecto a la aplicación del "Subsidio familiar" y en consecuencia sustituye a las disposiciones vigentes con anterioridad.

El decreto Nº 4.631/59 dictado en uso de la facultad de los artículos 1º y 4º de la Ley 14.794 (1) declara que el "Subsidio familiar" de referencia alcanza, entre otros, al personal comprendido en la Ley del servicio exterior de - la Nación (Ley 12.951) (inciso e) y al personal comprendido en la Ley para el Personal Militar (Ley 13.996) (inciso f).

Por ello, desde cualquiera de esas situaciones en que se considere al personal motivo de la consulta les corresponde el "subsidio familiar", sin entrar a relacionarlas con los procedimientos anteriores.

Saludo al señor Subsecretario con atenta consideración.-

Fdo. RAFAEL RODOLFO AYALA
Subsecretario de Hacienda

Al señor Subsecretario de Marina
Capitán de Navío D.ELADIO M. VAZQUEZ
S / D.

(1) Ver Digesto Administrativo Nº 688.-

Boletín Nº 968.-

INDEMNIZACION POR TRASLADO - VIATICOS

Expediente Nº 31.143/59.-

Señor Director General:

Por decreto Nº 1.229 de fecha 3 de febrero de 1958, se dejó sin efecto la autorización acordada por su similar Nº 3.328 de 1954, para que la Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos instalara en la ciudad de Mar del Plata, una agencia de apuestas hípicas en coordinación con los Hipódromos de Palermo y San Isidro.

A raíz de lo dispuesto en el artículo 2º del decreto citado en primer término, se procedió a transferir a los hipódromos mencionados, el personal, muebles, útiles, enseres y documentación correspondiente a la agencia que se suprimió, situación que motivara diversas presentaciones de los agentes que prestaban servicios en la dependencia, alegando que le correspondían los beneficios e indemnizaciones establecidos por los decretos números 18.989/56 (*) y 6.666/57 (**).

Remitidas las actuaciones a opinión de la División Asuntos Legales del Departamento Hipódromos, ésta se manifiesta en el sentido de que los actos legales a que se hace referencia, no respaldan fehacientemente lo solicitado, puesto que el decreto Nº 18.989/56 es de aplicación en los casos en que exista comisión de servicio y el decreto Nº 6.666/57, rige para el supuesto de trasla-

(*) Ver Digesto Administrativo Nº 14.-
(**) Ver Digesto Administrativo Nº 254.-

dos permanentes del personal, donde los viáticos se abonan una sola vez. Entiende además, que el traslado dispuesto estaba dentro de las facultades de la Administración, puesto que habiendo sido designados los agentes para desempeñarse en el Departamento de Hipódromos, dependiente de la Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos, puede asignárseles funciones en los lugares donde se desarrollan actividades hípicas, lo que no significa una comisión de servicio, ni un traslado permanente, sino el desempeño de tareas jornalizadas, conforme a la naturaleza de la actividad. En términos semejantes la Presidencia de la Repartición referida, resuelve no hacer lugar a lo solicitado.

En nuevas presentaciones efectuadas, los agentes de que se trata, ponen de manifiesto la procedencia de aplicar el régimen de viáticos establecidos por el decreto Nº 18.989/56, produciéndose a tal efecto una ratificación a lo anteriormente resuelto, por parte de las autoridades de la Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos.

Debido al recurso que interpusieron los causantes, se giran las presentes actuaciones a esta Secretaría de Estado a fin de resolver sobre el temperamento a aplicar en la emergencia.

Al respecto, cabe considerar la situación planteada a efectos de establecer la procedencia de aplicación del régimen de indemnización por traslado, que acuerda el art. 5º del decreto Nº 18.989/56. A tal fin debe señalarse conforme al texto normativo citado, que corresponde dicho beneficio al personal que sea trasladado con carácter permanente de su asiento habitual, siempre que el desplazamiento no se disponga a solicitud del agente. En consecuencia habría que determinar si dentro de los términos "traslado permanente", se encuadra la situación presente.

Es evidente que la disposición del decreto Nº1229/58, configura la supresión de un "asiento habitual", conforme a lo que se entiende por tal, para la aplicación del

decreto Nº 18.989/56 (la localidad donde se encuentra - instalada la oficina en la cual se preste efectiva y permanente servicio, segundo párrafo del art. 2º), creándose en esta forma una situación especial no contemplada - en las reglamentaciones vigentes, pero que, por vía de - interpretación, conformaría una situación similar a la de traslado permanente.

En consecuencia, este Departamento es de opinión que la única indemnización que correspondería reconocer en esta emergencia, es la acordada por el artículo 5º del - decreto Nº 18.989/56, ratificando en lo que respecta a - la procedencia de los viáticos solicitados, lo manifestado por la División Asuntos Legales del Departamento Hipódromos, no obstante lo cual estima conveniente, dada la naturaleza de la situación planteada y la competencia específica en la materia, dar intervención a la Dirección General de Finanzas.-

DEPARTAMENTO DE SECRETARIA, 16 de febrero de 1959.-

Fdo. NORBERTO P. DENARI
Jefe de Departamento

//nos Aires, 16 de febrero de 1959.-

Atento lo manifestado precedentemente por el Departamento de Secretaría, pase a la Dirección General de Finanzas, estimándole quiera servirse emitir opinión.-

Fdo. ANGEL BOTTERO TORRES
Director General de
Contabilidad y Administración

Expte. Nº 31143/59.- Indemnización por traslado reclamado por el personal de la Agencia Hípica de Apuestas Mutuas Nº 1 de Mar del Plata.-

//nos Aires, 13 de agosto de 1959.-

Vuelva a la Dirección General de Contabilidad y Administración para manifestarle, respecto a la reclamación interpuesta por personal de la Agencia Hípica de Apuestas Mutuas Nº 1 de la ciudad de Mar del Plata, que esta Dirección General comparte el temperamento expuesto por esa Repartición a fojas 27 y 28 de las adjuntas actuaciones, por cuanto las disposiciones del decreto Nº 1229/58, determinaron la supresión de un "asiento habitual", situación esta que por analogía encuadra en las normas emergentes del artículo 5º del decreto Nº 18.989/56, que regía en aquella oportunidad.

Sirva la presente de atenta nota de envío.-

Fdo. ALVARO OSCAR VIZCARGUENAGA
Subdirector General de Finanzas.

Expte. Nº 31143/59.- Indemnización por traslado reclamada por personal de la Agencia Hípica de Apuestas Mutuas de Mar del Plata.-

//nos Aires, 25 de agosto de 1959.-

Visto y de conformidad con el temperamento expuesto por la Dirección General de Contabilidad y Administración

y la Dirección General de Finanzas respecto de la reclamación interpuesta en estos actuados por personal de la Agencia Hípica de Apuestas Mutuas Nº 1 de Mar del Plata, pase a la Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos a fin de que proceda a resolver la situación planteada en orden al criterio sustentado por las referidas reparticiones.-

Fdo. RAFAEL RODOLFO AYALA
Subsecretario de Hacienda

RESOLUCION Nº 8002.-

Boletín Nº 969.-

LICENCIAS - RENUNCIA

Expediente nº 32531/59 (Hacienda)
252262/58 (J.N.G.).
Providencia nº 301

Señor Subsecretario:

El art. 41º del decreto nº 12.720/53 (º), por el que se fijó el régimen de licencias para el personal civil dependiente del Poder Ejecutivo Nacional, encomendó a los Ministerios la reglamentación del mismo, conforme con las necesidades de los servicios respectivos.-

En esta Secretaría de Estado -entonces Ministerio- dicha reglamentación se aprobó mediante Resolución nº 8264 / 56 (ºº), en la que no existe norma alguna que contemple la situación planteada a fs. 1 por la Dirección Nacional de Química.-

Por consiguiente, y pese a estimar fundadas las consideraciones vertidas a fs. 4/5 por la Delegación Fiscalía del Tribunal de Cuentas de la Nación, debe llegarse a la conclusión de que no existiendo una norma reglamentaria que impida conceder licencia al personal cuando éste simultáneamente presenta su renuncia al cargo, no resultaría procedente aplicar tal temperamento en el caso en cuestión.

(º) Ver Digesto Administrativo nº 15.-
(ºº) Ver Digesto Administrativo nº 16.-

Ello no obstante, cabe destacar que la concesión de licencia por vacaciones está supeditada a las necesidades del servicio de cada dependencia (art. 3° del decreto n° 12.720/53, y puntos 33° y 47° de la Resolución 8.264/56), causal que podría invocar la Dirección Nacional de Química a efectos de no conceder la licencia que solicitara la causante, o para interrumpirla en su transcurso (art. 12° del decreto n° 12.720/53), pero que no consta en estos actuados.-

Sin perjuicio de lo manifestado en el tercer párrafo de la presente, cabe destacar que, de estimarlo procedente esa Superioridad, podría encararse la implantación de un régimen que contemplara estas situaciones, el que debería ser proyectado por la Dirección General de Contabilidad y Administración, a cuyo cargo está lo referente al control de licencias del personal, sin perjuicio de la intervención que le compete a esta Dirección General de acuerdo con los decretos números 860 (&) y 2.477/58 ($).-

En lo que concierne al expediente n° 252.262/58 de la Junta Nacional de Granos, agregado a estas actuaciones, cabe informar que si dicho organismo tiene facultades para reglamentar, dentro de su ámbito de acción, la aplicación del decreto n° 12.720/53 - lo cual no surge del art. 41° - del mismo - no cabrían objeciones de fondo a la Resolución n° 664, del 28 de abril de 1958, de esa Junta, salvo en lo referente al carácter retroactivo que se dá a la misma en su art. 4°, que esta Dirección General considera improcedente, por estar en pugna con principios básicos de derecho.-

DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO CIVIL DE LA NACION, 29-6-59.

Fdo. JOSE LUIS FRANGI
Director General

(&) Ver Digesto Administrativo n° 420.-
($) Ver Digesto Administrativo n° 432.-

Poder Ejecutivo Nacional
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº 970.-

ESTATUTO PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL (art. 4º inc. d) - INGRESO

Expediente nº 44.167/58

//ñor Secretario de Hacienda:

Según el art. 4º, inc. d) del Estatuto del Personal Civil (decreto-ley 6.666/57) (1), no podrá ingresar en la Administración Nacional "el que tenga pendiente proceso criminal".-

Entiende esta Dirección que dicha norma se refiere al proceso "pendiente de resolución", esto es, a la causa aún no terminada por sentencia firme, y halla su fundamento en que ello plantea una situación de duda respecto de las condiciones morales del procesado a los efectos de poder confiarle el desempeño de un empleo público. Se trata, en suma, de una medida preventiva, en defensa del decoro y prestigio de la Administración, ya que no se puede abrir juicio acerca de la idoneidad moral de quien pretende ingresar en la Administración mientras se encuentre sometido a proceso criminal.-

Aquí nos encontramos con un sumario que terminó el 24 de marzo de 1949, con el auto de sobreseimiento provisional. El principal efecto del sobreseimiento provisional -

(1) Ver Digesto Administrativo nº 254.-

consiste en la detención de los procedimientos, bajo la condición resolutoria consistente en la aparición de nuevos elementos de juicio que autoricen a modificar la situación creada, pues "el sobreseimiento provisional deja el juicio abierto hasta la aparición de nuevos datos o comprobantes , salvo el caso de prescripción" (Código de Procedimientos en lo Criminal, art. 436, última parte). Una vez firme el auto de sobreseimiento provisional y salvo el caso de reapertura del sumario, no cabe ninguna otra actividad procesal con relación a los hechos que fueron materia de aquel pronunciamiento, y cumplida la prescripción de la acción penal, no es precisa la reapertura del sumario para convertir el sobreseimiento de provisional, en definitivo (cfr. ODERIGO, "Derecho procesal penal", t.2, p.96, ed. 1952).-

En tal virtud, considera esta Dirección que, en el caso, no nos encontramos en presencia de un proceso "pendiente de resolución", sino concluído y resuelto en 1949 de acuerdo con las normas procesales establecidas al efecto,lo que no impide que la Administración, teniendo en cuenta la naturaleza de los hechos, el tiempo transcurrido, la edad del interesado, la función a desempeñar por el mismo, etc., determine por sí, según su libre, discreta y razonable apreciación, si se cumple o no con el requisito de idoneidad moral que establece el art. 3° del Estatuto.-

Sin perjuicio de lo expuesto, y para la mejor resolución del caso de autos, estima esta Dirección que corresponde requerir al interesado, Antonio Eduardo Poma, la presentación de un certificado del juzgado ante el cual tramitó el sumario a que se refiere el testimonio de fs. 8, en el que se haga constar si el auto de sobreseimiento provisional se encuentra firme y si se ha convertido o no en sobreseimiento definitivo, como parecería desprenderse del tiempo transcurrido (diez años) y de las disposiciones -

del código penal (arts. 42 y 119) que serían de aplicación en el caso.-

DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS, 24 de marzo 1959.

Fdo. CRISTIAN G. DEMARIA
Director General

Expediente nº 44.167/58
Providencia nº 316

//nos Aires, 17 de Julio de 1959

En virtud de las actuaciones producidas, vuelva a la - Dirección General de Contabilidad y Administración infor - mando que esta Dirección General estima procedente concre- tar el temperamento adoptado por la Lotería de Beneficen - cia Nacional y Casinos, ratificando la disposición 2/959 - Rda., dado que conforme a los testimonios obrantes a fojas 8 y 21 y al dictamen de la Dirección General de Asuntos Ju rídicos de fs. 16/17, no sería de aplicación en este caso la norma del art. 4º, inciso d) del Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública Nacional.-

Fdo. JOSE LUIS FRANGI
Director General
Servicio Civil de la Nación-

Boletín Nº 971.-

ESTATUTO PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL (Art. 17º) - LICENCIAS

Expediente Nº 90.330/59.-

Señor Subsecretario:

Tengo el agrado de dirigirme a V.E. con referencia a la situación planteada por la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación en el expediente Nº 98/59, relacionada con la licencia gremial sin goce de haberes solicitada por el agente D.RODOLFO QUINTANA, a fin de asistir a las reuniones de la Federación Argentina de Trabajadores del Turf, entidad no estatal a la que se encontraba afiliado.

De la letra del apartado 2º del artículo 29º del Decreto Nº 12.720/53 (1), modificado por el Decreto número 17.609/56, no surge claramente si la licencia se otorga a los representantes gremiales o sindicales de cualquier profesión o asociación o solamente a los que representan a agentes del Estado, perciban o no retribución de la entidad representada.

En consecuencia, atento que el artículo 17º del Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública Nacional no ha sido aún reglamentado por el Poder Ejecutivo y de acuerdo con la facultad conferida a esa Secretaría de Estado por Decreto Nº 797/58, el suscripto solici

(1) Ver Digesto Administrativo Nº 15.-

ta se dicten las normas aclaratorias con respecto a la - cuestión expuesta.

Buenos Aires, 21 de julio de 1959.-

Fdo. FEDERICO A. E. RATROSSE
Subsecretario de Obras Públicas

A S.S. el señor Subsecretario de Estado de Hacienda
D. RAFAEL RODOLFO AYALA
S / D.

Expediente Nº 90.330/59.-
Providencia Nº 338.-

//ñor Subsecretario:

El artículo 29º del decreto Nº 12.720/53, modificado por su similar Nº 17.609/56, cuya vigencia resulta de lo establecido en el artículo 17º del Estatuto del Personal Civil, establece que el personal civil dependiente de la Administración Nacional podrá gozar de licencia especial cuando fuera designado para desempeñar un cargo de representación gremial y/o sindical, representando a agentes - del Estado, en la medida necesaria, y mientras dure su - mandato.

En el caso presente se habla (fs. 1) de una licencia para asistir a las reuniones de la Federación Argentina de Trabajadores del Turf, entidad no estatal, a la que - el recurrente se encontraría afiliado.

Se trata evidentemente de una situación completamente al margen de la prevista en el decreto general de licencias:1) el interesado no representa a agentes del Estado -por lo menos a los de la Repartición a la que pertenece y que nada tiene que ver con la actividad de los integrantes del aludido gremio-; 2) no tiene por tanto - mandato alguno conferido por el personal de su Reparti - ción. En consecuencia, no corresponde incluír su solicitud en los beneficios resultantes del aludido artículo - 29º del decreto Nº 12.720/53.

DIRECCION GRAL. DEL SERVICIO CIVIL DE LA NACION, 3-8-59.-

Fdo. JOSE LUIS FRANGI
Director General

//nos Aires, 4 de agosto de 1959.-

Con lo informado precedentemente por la Dirección General del Servicio Civil de la Nación, vuelva a sus efectos a la Secretaría de Estado de Obras Públicas.

Sirva la presente de atenta nota de remisión.-

Fdo. RAFAEL RODOLFO AYALA
Subsecretario de Hacienda

Poder Ejecutivo Nacional
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº 972.-

ESCALAFON PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL (Punto 52º) - ANTIGUEDAD

Expediente Nº 90.342/59 S.H.-
Expediente Nº 35.795/59 y Nº 31.301/59 A.S.S.P.-
Providencia Nº 352.-

Señor Subsecretario:

Se plantea en estas actuaciones el caso de un agente del Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública quien, al 1º de noviembre de 1958 -en que comenzó a regir el Escalafón aprobado por decreto Nº 9.530/58- ocupaba simultáneamente con el cargo de ese Dpto. de Estado, otro de Auxiliar de 1ra. en la Escuela de Técnicos para la Sanidad, dependiente de la Universidad Nacional del Litoral, en el que se encontraba en uso de licencia extraordinaria sin goce de haberes desde el 16 de junio del mismo año.

Con fecha 16 de junio de 1959 le fué aceptada a la causante su renuncia a este último cargo.

El caso a considerar estriba en el cómputo de servicios prestados en la aludida Escuela entre el 1º de julio de 1948 y la fecha de su incorporación al Ministerio referido, a los fines previstos, en el punto 52º del Escalafón para el Personal Civil. Las normas complementarias de dicha disposición, aprobadas por decreto Nº 4632/59 (1) establecen en su punto III que en los casos de que el agente desempeñe más de un puesto en organismos comprendi

(1) Ver Digesto Administrativo Nº 709.-

dos en el Escalafón, se computarán exclusivamente en cada empleo los años de servicio cumplidos por el agente en el mismo.

En el caso en cuestión, la circunstancia de encontrarse en uso de licencia sin goce de haberes no desvinculaba a la interesada de su empleo en la Universidad Nacional del Litoral, y por consiguiente, no habiendo cesado en ese empleo no resulta procedente computar los servicios prestados en el mismo al ser escalafonada en el Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública.

Recién a partir de la fecha de aceptación de su renuncia en aquella ocupación (fs. 11) corresponde aplicar el procedimiento fijado en el inciso c) del punto III de las normas complementarias ya citadas (decreto Nº 4632/59), computando los servicios prestados desde el 1º de julio de 1948.

Es, pues, correcta la interpretación que hacen las Direcciones Generales de Personal y de Asuntos Jurídicos del referido Departamento de Estado acerca de las normas en cuestión.-

DIRECCION GRAL. DEL SERVICIO CIVIL DE LA NACION, 13-8-59.-

Fdo. JOSE LUIS FRANGI
Director General

//nos Aires, 18 de agosto de 1959.-

Visto lo informado precedentemente por la Dirección General del Servicio Civil de la Nación, vuelva al Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública.

Sirva la presente de atenta nota de remisión.-

Fdo. RAFAEL RODOLFO AYALA
Subsecretario de Hacienda

Poder Ejecutivo Nacional
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº 973.-

ESCALAFON PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL (punto 26º) - SUBSIDIO FAMILIAR

Expediente nº 90.312/59
Providencia nº 322

//ñor Subsecretario:

El Ministerio del Interior solicita se le informe si le alcanzan los beneficios del subsidio familiar al sobrino o sobrino político que por sentencia judicial se encuentra a cargo del agente.-

Sobre el aspecto concreto de la consulta, cabe destacar que en el punto 26º del Escalafón aprobado por decreto número 9.530/58 y ratificado por ley nº 14.794 (º), se determina en forma taxativa los parientes y familiares a quienes alcanza tal beneficio, no considerando a esos efectos a los sobrinos o sobrinos políticos, aún cuando se encuentre perfectamente establecido que estén a cargo del agente.-

Por otra parte, el decreto nº 4.631/59 (ºº) de fecha 22 de abril ppdo. aprobatorio de las normas complementarias del mencionado punto 26º, especifica expresamente las condiciones esenciales que deben cumplir parientes y familiares a fin de que al agente le corresponda el pago de dicho subsidio.-

(º) Ver Digesto Administrativo nº 688.-
(ºº) Ver Digesto Administrativo nº 738.-

Por lo expresado, no procede abonar salario familiar al empleado, por el hecho de tener a su cargo un sobrino o sobrino político, aún cuando ello pueda ser demostrado fehacientemente.-

DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO CIVIL, 17 de julio de 1959

Fdo. JOSE LUIS FRANGI
Director General

//nos Aires, 20 de Julio de 1959

Con lo informado por la Dirección General del Servicio Civil de la Nación, vuelva al Ministerio del Interior a sus efectos.-

Fdo. RAFAEL RODOLFO AYALA
Subsecretario de Hacienda

Poder Ejecutivo Nacional
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº 974.-

SUMARIOS - RENUNCIA (sus efectos a los fines disciplina - rios) - SANCIONES

Ref: actuación irregular del ex - cobrador fiscal Oscar A. Salvadores: Administrativo:271 58.-

Señor Director General:

Trata el presente expediente sobre la actuación irregular en que habría incurrido el ex-cobrador fiscal don Oscar A. Salvadores "en cuanto su desatención casi total de la cartera de juicios a su cargo habría producido un perjuicio fiscal de cuantioso monto".-

Así lo deja expresado el Departamento de Asuntos Legales (fs. 59), el que también hace notar dos circunstancias; a) que por Decreto nº 6.438/58 le ha sido aceptada la renuncia y b) que la responsabilidad del referido ex-funcionario debe ser tenida en cuenta desde tres puntos de vista: administrativo, civil y penal.-

Desde el punto de vista civil y si bien se documentan las impugnaciones formuladas por el sucesor del ex-agente, (fs. 15 a 48), se hace resaltar que a la fecha se está tratando de concretar la cifra definitiva que informará sobre la magnitud del daño causado, lo que determinaría el monto de la demanda.-

A efectos de entablar la demanda, el Departamento de Asuntos Legales sugiere esperar a conocer el monto del perjuicio, o bien promover desde ya la acción por intermedio

del Procurador Fiscal. De adoptarse este último criterio, correspondería instruirlo en el sentido de que la demanda se plantearía según el ajuste final de las cantidades.-

Si la Superioridad lo compartiese, estímase oportuno recurrir a lo sugerido en segundo término e imponiendo a la División Cobradores Fiscales el procedimiento adoptado a - fin de poder conocer urgentemente el monto al cual asciende el perjuicio.-

En cuanto a la responsabilidad penal, se comparte lo - opinado a fs. 59 (punto III), en el sentido de promover la correspondiente denuncia con arreglo al art. 164 del Código respectivo.-

Referente a la responsabilidad administrativa, el Departamento de Asuntos Legales manifiesta que al habérsele aceptado la renuncia sería improcedente instruir sumario administrativo (ver fs. 59, punto I), toda vez que para prosperar, debe referirse a un agente que reviste en los cuadros de la Administración Pública.-

En el aspecto referido, si bien esta Dirección considera improcedente la iniciación de un sumario conforme las - disposiciones del Decreto-Ley nº 6666/57 (*) y su reglamentación, -atento lo que establece el art. 1º de aquél- por - no prestar servicios en la actualidad el Sr. Salvadores, se estima necesario, sin embargo, se constaten fehacientemente los hechos, por cuya razón ha de fundamentarse a continuación los motivos que así deciden a opinar.-

El Estatuto del Personal Civil de la Administración Nacional buscó dignificar la Administración Pública "y con - ello, la de quienes la integran y dedican sus esfuerzos mediante el desempeño de una función o empleo, que a la par - de ennoblecer implica deberes de cumplimiento ineludible.-

---

(*) Ver Digesto Administrativo nº 254.-

Fué la conquista de una administración sana y honrada.- La Administración Pública -léase "de la cosa pública"- se desarrolla a través de la actividad de sujetos cuyo cometido debe ser satisfecho con honestidad, lealtad y eficacia. Una administración, cualquiera sea, pública o privada, sólo será eficiente en la medida de la responsabilidad de quienes administren. En cuanto a la pública, sólo es buen funcionario o empleado aquél que cumple con las disposiciones legales y es fiel realizador de los deberes impuestos a la actividad administrativa, en beneficio de los intereses que administra.-

Y los derechos y garantías que consagra el Decreto-Ley nº 6666/57 no han tenido otra finalidad, además de razones de justicia, que asegurar la existencia de un cuadro de agentes responsables, con conciencia sobre lo que es "la cosa Pública", el "interés público", desde que no debe olvidarse la figura jurídica de la administración pública como gestora de los intereses de terceros, a quienes se sirve.-

La citada norma nos dice (ver art. 3, punto VII y IX) : el personal que hubiere dejado de pertenecer a la Administración, por renuncia, podrá reingresar nuevamente. El reingreso se efectuará en la categoría, clase y grupo en que actuaba al egresar siempre y cuando haya acreditado méritos suficientes para ello durante su actuación anterior. El agente exonerado de la Administración podrá reingresar, si a tal fin hubiera obtenido su rehabilitación y satisfaga los requisitos comunes de ingreso. A continuación, el art. 4º - señala a quienes no pueden ingresar a la Administración Pública.-

Visto tal posibilidad de reingreso, podría echarse un manto de olvido sobre la eventual actuación irregular y consiguiente responsabilidad de quien habría llevado a cabo deficientemente la función que tenía encomendada?

Es indudable que si bien el poder administrador debe ser un fiel ejecutor de la ley y custodio práctico e inme-

diato de los intereses que contienen las normas, también debe custodiar en forma práctica y jurídica el interés público.-

Aplicando lo dicho al tema en examen, no debe olvidarse que el Sr. Salvadores fué un funcionario del Estado, que en esencia y en el ejercicio de sus funciones, debié cuidar los intereses puestos bajo su atención, que eran los de la colectividad.-

Y la tutela de la "cosa pública" impone la necesidad (ante la posibilidad futura de un reintegro del agente, que hoy voluntariamente se apartó de la Administración) de una constatación de los hechos que se le imputan, los que fehacientemente comprobados y aparejando sanción, ésta debe quedar registrada como antecedente personal, aunque haya cesado la relación por renuncia, y el poder administrador, comprobado lo que se imputa, podrá, entonces, revocar con fundamento el acto administrativo anterior.-

La revocación, decisión dirigida a extinguir un acto administrativo anterior, es una manifestación de la voluntad - administrativa modificatoria de una precedente. El acto administrativo en principio, es revocable. Máxime, cuando concurren causas legales para ello; cuando existen razones de conveniencia, a efectos de resguardar los intereses públicos, - creando para tal fin, una inhabilidad al agente que no obró conforme con los deberes que su gestión le imponía y de lo - que deberá rehabilitarse en caso de pretender reincorporarse en el futuro (ver Decreto-Ley nº 6666/57 art. 3º, puntos - VIII-IX y art. 4º).-

Y esta revocación (potestad de policía del poder administrador sobre sus propios actos; supervisión de la labor ya - cumplida), que hace factible retirar la norma o acto inoportuno, para substituirle por otro que contemple la satisfac - ción necesaria y justa que merece el interés público, encuentra su objeto en el mismo fin a que tiende la ley: el Estatuto, desde el momento que si éste buscó dignificar a quienes

integran la Administración Pública, también les asignó deberes de ineludible cumplimiento, los que el Sr. Salvadores no habría observado.-

Pero el nuevo acto revocatorio no se justificaría; a) si dentro del orden jurídico no tuviera una causa justa - como razón de su existencia. b) si antes de ser dictado , no se desarrollara una labor intelectiva de conocimiento de los motivos que lo determinan, es decir, de un proceso que permita conocer las circunstancias motivantes, las - que necesariamente deben tener relación con el fin que debe satisfacer: en el caso, la salvaguarda futura del interés público (de lo que la Administración Pública es gestora), que hoy lesionado podría en el mañana estar nuevamente en manos del agente que no habría observado los deberes más esenciales del gestor.-

El proceder aconsejado y posterior revocación del primer acto, no significa otorgar un salvoconducto al poder administrador para que haga algo ilegal. El estado de derecho no puede repudiar legítimos procesos, cuando se hallan de por medio intereses superiores. La política jurídica del estado moderno confirma esta necesidad cuando - ello no implica arbitrariedad. Al contrario, la justifica y le concede vida jurídica, porque se trata de prevenir , de salvaguardar el peligro de que la gestión administrativa pueda nuevamente caer en quien habría observado un proceder irregular en el cuidado y atención de la cosa pública.-

Mas, como rodear de garantías al nuevo acto a dictarse, si no podrían aplicarse las normas del Estatuto que - disponen sobre la instrucción sumarial, desde que el agente ya no pertenece a la Administración Nacional? (ver art. 1º del Decreto-ley 6666/57). Sería extensible el citado - procedimiento al caso examinado, o bien deberá procederse a una constatación de hechos, como se ha venido hablando, a los efectos de que el Poder Ejecutivo también posea fun

damentos para dictar el acto revocatorio, si fuese necesario hacerlo, de llegarse a constatar responsabilidad?

Por ello y ante la necesidad de llegar a conocer fehacientemente los hechos imputados al ex-agente Salvadores,- es que esta Dirección -si así lo compartiese la Superioridad y en mérito a todo lo dicho-, estima que correspondería requerir opinión a la Dirección General del Servicio Civil (Decreto nº 2.477/58) (') sobre cuál sería el mejor procedimiento a adoptar en el caso, sin perjuicio de lo ya expresado sobre la responsabilidad civil y penal en los primeros párrafos del presente dictamen, procedimiento que la Superioridad debería adoptar con urgencia.-

DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS, 30 de diciembre de 1958.-

Fdo. CARLOS FUNCK MORENO
Director

Expediente nº 90.306/59.
Providencia nº 326.-

Señor Subsecretario de Hacienda:

En las presentes actuaciones la Dirección General Impositiva solicita se le informe el procedimiento administrativo que corresponde seguir respecto de un empleado al que se le ha aceptado la renuncia con posterioridad a lo cual surgen sospechas de su culpabilidad en un hecho delictuoso

(') Ver Digesto Administrativo nº 432.-

que significó perjuicio para el Estado.-

Esta Dirección General considera que la circunstancia de haber cesado la relación de dependencia de un empleado con el organismo administrativo al cual perteneció, ya sea por jubilación, renuncia, cesantía etc., no lo excluye de ser juzgado por hechos irregulares cometidos durante su gestión como agente del Personal Civil; admitir lo contrario, implicaría inhibición para iniciar causa o bien obligatoriedad de disponer el archivo de la que se le hubiera incoado, quedando el imputado exento de toda responsabilidad por el hecho de haber cesado en su prestación de servicios.-

Por otra parte, para el caso eventual de que el agente colocado en las condiciones a que alude el punto anterior lograse por una contingencia cualquiera ingresar nuevamente en la Administración Pública, nos encontraríamos con que el mismo no registraría ningún antecedente en su legajo personal, en lo que a penalidades se refiere, libre éste de toda constancia vinculada a sanciones y por ende colocado aquél en condiciones de competir con otros servidores responsables, correctos y cumplidores de su deber, consumándose de tal suerte una sensible injusticia.-

Por lo expuesto, esta Dirección General estima que aún después de aceptada la renuncia de un agente, puede ser sometido el mismo a procedimientos disciplinarios, tal como ocurre cuando la formaliza para eludir sanciones a raíz de la comisión de un delito o falta.-

DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO CIVIL DE LA NACION, 22-7-59

Fdo. JOSE LUIS FRANGI
Director General

D.A. nº 974.-

Expediente nº 90.306/59

//nos Aires, 27 de julio de 1959.-

Con lo informado precedentemente por la Dirección General del Servicio Civil de la Nación, pase a sus efectos a la Dirección General Impositiva.-

Fdo. RAFAEL RODOLFO AYALA
Subsecretario de Hacienda

Poder Ejecutivo Nacional
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº 975.-

ESCALAFON PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL (Punto 26º) - SUBSIDIO FAMILIAR

Buenos Aires, 28 de agosto de 1959.-

Señor Director General:

Tengo el agrado de dirigirme al señor Director General, con referencia a la aplicación de las normas para el pago del subsidio familiar, que fueron aprobadas por decretos 9530/58 y 4631/59 (').

Al respecto se solicita que ese Organismo, en cumplimiento de las funciones que le asigna el decreto 2477/58 ("), quiera tener a bien emitir su opinión con respecto a la procedencia del pago del citado beneficio en las situaciones que se han planteado y que seguidamente se consultan:

a) Por hijos declarados por agentes femeninos, en aquellos casos en que el esposo no percibe dicho beneficio.

b) Por hermanos menores de edad o impedidos, cuando el padre se halla incapacitado y a cargo, y la madre no se halla encuadrada por las disposiciones que acuerdan tal beneficio.

c) Por hermanos menores de edad o incapacitados, cuan

(') Ver Digesto Administrativo Nº 738.-
(") Ver Digesto Administrativo Nº 432.-

do la madre del declarante que no está impedida, es viuda, separada de hecho, separada legalmente o divorciada, teniendo en cuenta que el padre es considerado cabeza de familia.

d) Por el esposo, cuando ambos cónyuges revistan en la Administración Nacional y aquél ha sido suspendido preventivamente en sus funciones.

Saludo al señor Director General con mi consideración más distinguida.-

Fdo. MARCOS WAISSMAN
Director de Administración
de la Dirección General Impositiva

Expediente Nº 62.771/59.-
P. Nº 7728/59.-

//nos Aires, 29 de septiembre de 1959.-

Vuelva a la Dirección General del Servicio Civil de la Nación, manifestándole que esta Dirección General mantiene en las diversas situaciones planteadas a fs. 1 por la Dirección General Impositiva, la opinión que en cada caso se pasa a exponer:

a) El caso de hijos declarados por agentes femeninos, cuando el esposo no percibe en su actividad dicho beneficio, está contemplado en el apartado b), punto VI del decreto Nº 4631/59, que aprobó las normas aclaratorias del Escalafón para el Personal Civil de la Administración Pública Nacional

y el punto 4º de la resolución Nº 7787/59 (*);

b) En este supuesto, la solución está dada por el punto 7º de la Resolución Ministerial Nº 7787 de fecha 16 de junio de 1959;

c) Con relación a los hermanos menores de 18 años o mayores impedidos, corresponderá la liquidación del beneficio cuando, como en el caso anterior, el agente demuestre que aquéllos se hallan a su cargo;

d) El titular del beneficio, por aplicación del apartado a) punto VI del decreto Nº 4631/59 es el esposo, sólo podrá percibirlo la esposa, cuando aquél se encuentre en la situación especificada en el punto b) del mismo apartado del citado decreto Nº 4631/59.- En el caso, la liquidación del subsidio quedaría supeditada a las resultas del sumario incoado y en cuya razón el agente haya sido suspendido preventivamente en sus funciones.-

Fdo. ANGEL BOTTERO TORRES
Director General
de Contabilidad y Administración

Buenos Aires, 9 de octubre de 1959.-

Señor Subdirector General de Impositiva
D. RENE SAN MIGUEL
S / D.

Tengo el agrado de dirigirme al señor Subdirector General en respuesta a su nota de fecha 28 de agosto ppdo.,

(*) Ver Digesto Administrativo Nº 816.-

en la que formulaba distintas consultas referentes a la liquidación del subsidio familiar. (Decretos Nos. 9530/58 y 4631/59). Al respecto, llevo a su conocimiento lo siguiente:

Caso a): La liquidación debe ajustarse a las normas del punto VI, inciso b) de las normas complementarias aprobadas por decreto Nº 4631/59, vale decir que el agente femenino debe probar que su cónyuge ha renunciado o no tiene derecho a percibir en su empleo el beneficio por la misma causa.

Caso b): La liquidación resultará procedente cuando se cumplan los requisitos fijados en los puntos III y IV (incisos e y f) de las aludidas normas complementarias, es decir, que se trate de hermanos menores de edad o impedidos, y estén a cargo del causante, para lo cual no deberán poseer una renta superior a $ 1.000.- mensuales, y estar su alimentación, vestido y educación obligatoria atendidos por el titular del subsidio de que se trata.

Caso c): La liquidación estará sujeta a los mismos requisitos del caso anterior.

Caso d): En el caso planteado la liquidación del subsidio quedará supeditada a las conclusiones del sumario incoado. Si del mismo resulta la procedencia del pago de haberes al agente sumariado, no corresponde la liquidación del subsidio a su esposa; si por el contrario el sumario concluye con una medida, sancionatoria, el pago de subsidio por cónyuge al agente mujer deberá ajustarse a lo estipulado en la Resolución S.H. Nº 7142/59 (+).

Saludo al señor Subdirector General con atenta consideración.-

Fdo. JOSE LUIS FRANGI
Director General
Servicio Civil de la Nación

(+) Ver Digesto Administrativo Nº 781.-

en la que formulaba distintas consultas referentes a la liquidación del subsidio familiar. (Decretos Nos. 9530/58 y 4631/59). Al respecto, llevo a su conocimiento lo siguiente:

Caso a): La liquidación debe ajustarse a las normas del punto VI, inciso b) de las normas complementarias aprobadas por decreto Nº 4631/59, vale decir que el agente femenino debe probar que su cónyuge ha renunciado o no tiene derecho a percibir en su empleo el beneficio por la misma causa.

Caso b): La liquidación resultará procedente cuando se cumplan los requisitos fijados en los puntos III y IV (incisos e y f) de las aludidas normas complementarias, es decir, que se trate de hermanos menores de edad o impedidos, y estén a cargo del causante, para lo cual no deberán poseer una renta superior a $ 1.000.- mensuales, y estar su alimentación, vestido y educación obligatoria atendidos por el titular del subsidio de que se trata.

Caso c): La liquidación estará sujeta a los mismos requisitos del caso anterior.

Caso d): En el caso planteado la liquidación del subsidio quedará supeditada a las conclusiones del sumario incoado. Si del mismo resulta la procedencia del pago de haberes al agente sumariado, no corresponde la liquidación del subsidio a su esposa; si por el contrario el sumario concluye con una medida sancionatoria, el pago de subsidio por cónyuge al agente mujer deberá ajustarse a lo estipulado en la Resolución S.H. Nº 7142/59 (+).

Saludo al señor Subdirector General con atenta consideración.-

Fdo. JOSE LUIS FRANGI
Director General
Servicio Civil de la Nación

(+) Ver Digesto Administrativo Nº 781.-

Poder Ejecutivo Nacional
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº 976.-

ESCALAFON PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL - CALIFICACIONES

Buenos Aires, 23 de octubre de 1959.-

Visto lo determinado por el punto 34° del Escalafón para el Personal Civil de la Administración Pública Nacional y las normas complementarias aprobadas por el Decreto nº 11.941/59(1) respecto del régimen de calificaciones del personal;

EL DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION

D I S P O N E :

1º.- Determínase en la forma cuyo detalle se consigna seguidamente, las tres instancias jerárquicas a través de las cuales se efectuará la calificación del personal que presta servicios en la repartición:

(1) Ver Digesto Administrativo nº 916.-

Personal que dependa directamente de una Jefatura de Sección.	1a.Instancia Jefe de Sección (x)	2a.Instancia Jefe de Dpto. (xx)	3a.Instancia Director General.
Personal que dependa directamente de una Jefatura de División.	Jefe de División	Jefe de Dpto.	Director General.
Personal que dependa directamente de una Jefatura de Departamento.	Jefe de Departamento.	Subdirector General.	Director General.
Personal que dependa directamente de la Dirección General.	Subdirector General	-	Director General.

(x) Para el caso de la Sección Gestoría que depende directamente del Jefe del Departamento de Secretaría, en esta instancia calificará al Jefe de la dependencia el Jefe del Departamento.-

(xx) Para el caso previsto precedentemente, en esta instancia calificará el Subdirector General.-

2º.- Para los supuestos previstos en los apartados III y IV de las normas complementarias del referido punto 34º del Escalafón, los reemplazantes naturales de los funcionarios calificadores especificados substituirán a éstos, en cada caso, en las instancias respectivas.-

3º.- Comuníquese a quienes corresponda y archívese.-

Fdo. ANGEL BOTTERO TORRES
Director General
de Contabilidad y Administración

DISPOSICION Nº 8346.-

Poder Ejecutivo Nacional
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº 977.-

ESCALAFON PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL (Punto 52º) - TITULOS

Buenos Aires, 21 de octubre de 1959.-

Visto el Escalafón para el Personal Civil de la Administración Pública Nacional aprobado por Decreto Nº 9530 de fecha 7 de noviembre de 1958 y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 28º del referido instrumento determina el importe de las bonificaciones que corresponde abonar por la posesión de los títulos habilitantes o certificados de capacitación que detalle a aquellos agentes que se desempeñen en funciones propias de su especialidad y que no revisten en la clase C;

Que existen en vigor regímenes distintos al referido, que otorgan bonificaciones mayores y/o bonifican títulos o certificados no comprendidos en éste;

Que es menester precisar el procedimiento a seguirse para ubicar al personal amparado por dichos regímenes en el Escalafón aprobado por Decreto 9.530/58 sin desmedro de su actual retribución total;

Por todo ello atento lo propuesto por la Secretaría de Hacienda de la Nación, de acuerdo con la competencia que le atribuyen el Decreto-Ley Nº 797/58 (') y el artículo 20 inciso 12 de la Ley Nº 14.489,

(') Ver Digesto Administrativo Nº 419.-

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

Artículo 1º.- Agrégase al inciso a) del artículo 52º del capítulo X del Escalafón para el Personal Civil de la Administración Pública Nacional aprobado por Decreto Nº - 9.530, del 7 de noviembre de 1958 el siguiente párrafo: "Para el personal que percibiera una bonificación por la "posesión de un título que por aplicación del artículo 28º "de este Escalafón no correspondiera bonificar, o estuvie "ra previsto con un importe menor, se computará también - "la diferencia entre ambos regímenes".

Artículo 2º.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda.

Artículo 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y pase a la Secretaría de Estado de Hacienda a sus efectos.-

FRONDIZI - Alvaro C. Alsogaray - Guillermo Walter Klein.

DECRETO Nº 13.116.-

Poder Ejecutivo Nacional
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº 978.-

LICENCIAS

Buenos Aires, Octubre 19 de 1959.-

Visto el decreto Nº 12.720 del 14 de julio de 1953 (*), por el cual se fija el régimen de licencias para el personal de la Administración Nacional; y

CONSIDERANDO:

Que dicho acto de gobierno no prevé la situación de aquellos agentes que, debiendo tener que someterse a diversos exámenes médicos previos a su incorporación a las filas de las fuerzas armadas, en cumplimiento del servicio militar obligatorio, deben inasistir a sus tareas;

Que si bien el artículo 36º de dicho acto de gobierno contempla, para su justificación, las inasistencias del personal motivadas por razones atendibles o de fuerza mayor, la limitación introducida por el mismo a esos efectos (dos por mes, sin que excedan de diez por año) determina la imposibilidad de considerar con arreglo a esa disposición, la situación de los agentes en las condiciones señaladas, ya que, la mayoría de los mismos, se ven precisados a no concurrir a sus tareas durante períodos superiores al previsto mensualmente en dicha norma;

Que en ese orden de ideas y teniendo en cuenta las razones especiales que obligan al personal de que se trata a estar ausente de sus tareas los días en que deben -

(*) Ver Digesto Administrativo Nº 15.-

someterse a los exámenes médicos aludidos, se estima procedente modificar el artículo 28º del aludido decreto Nº - 12.720/53, reemplazado por el número 13.800 del 1º de agosto de 1956, contemplando en el mismo la situación expuesta;

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

Artículo 1º.- Modifícase el artículo 28º del decreto número 12.720/53, reemplazado por el Nº 13.800/56, en la siguiente forma:

"Artículo 28º.- Los agentes que deban incorporarse al "servicio militar tendrán derecho a las siguientes li"cencias con el 50% de su remuneración; desde la fecha "de su incorporación hasta cinco (5) días después del "día de la baja asentada en la libreta de enrolamien-"to, en los casos en que el agente hubiera sido decla"rado inapto o fuera exceptuado; y hasta quince (15) "días después de haber sido dado de baja si hubiera - "cumplido el período para el cual fué convocado y és-"te fuera mayor de seis meses. Igualmente se concede-"rá licencia de cinco (5) días, con la remuneración - "expresada, cuando el período fuera inferior a seis - "meses.

"Las inasistencias en que incurra el personal por te-"ner que concurrir a someterse a los exámenes médicos, "previos a su incorporación a las filas de las fuer - "zas armadas, en cumplimiento del servicio militar o-"bligatorio, serán justificadas con goce de haberes.

"El personal que en carácter de reservista sea incor-"porado transitoriamente a las Fuerzas Armadas de la "Nación tendrá derecho a usar la licencia y a perci -

"bir, mientras dure su incorporación como única re - "tribución la correspondiente a su grado en caso de "ser oficial o suboficial de la Reserva; cuando el "sueldo del cargo civil sea mayor que dicha remunera "ción, la dependencia a la cual pertenece liquidará "la diferencia".

Artículo 2º.- El presente decreto será refrendado por los señores Ministros Secretarios en los Departamentos de Economía, del Interior y de Asistencia Social y Salud Pública y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda.

Artículo 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.

FRONDIZI - Alvaro C.
Alsogaray - Alfredo
R.Vítolo - Héctor V.
Noblía - Guillermo
W. Klein.

DECRETO Nº 13.004.-

Poder Ejecutivo Nacional
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº 979.-

ESCALAFON PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL (punto 52º) - ANTIGÜEDAD

Expte. nº 157.506/58.-

Señor Director General de Personal:

I.- Las presentes actuaciones se relacionan con una presentación del agente don LUIS ALBERTO VOSO, mediante la cual solicita que se le liquide como lo fué hasta el 31 de Marzo de 1958 la bonificación respectiva que desde el mes de Abril de 1958 no percibe (fs. 1/2).-

Funda su petición en que por Resolución de fecha 9 de Abril de 1948 del Banco Central de la República Argentina que en copia obra a fs. 22/24 fueron acreditados a todos los efectos que hubiere lugar la antigüedad de servicios prestados en las firmas o empresas propietarias de elevadores y otras instalaciones, expropiadas en virtud de los decretos nros. 10.107/44 y 9.626/46.-

De conformidad con lo que surge de lo actuado se trata de lo siguiente:

El personal de empresas particulares, que prestaban servicios en instalaciones que fueron declaradas de utilidad pública por el Decreto nº 10.107/44 pasó a prestar servicios en la ex-Comisión de Granos y Elevadores de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 del mismo (fs. 7).-

Por Decretos nros. 11.853 del 30 de Mayo de 1945 y -

7.365 del 20 de Marzo de 1947 se reconoció a dicho personal la antigüedad en las empresas originarias, pero al sólo efecto de la licencia anual reglamentaria (considerandos de la resolución de fs. 22).-

Al tratarse el escalafón por la Comisión Nacional de Granos y Elevadores, el Banco Central de la República Argentina, en cuya órbita se encontraba dicha Comisión, reconoció por Resolución de fecha 9 de Abril de 1948 (fs.23/24) a todos los efectos que hubiese lugar, la antigüedad de servicios prestados en las firmas o empresas propietarias de elevadores y otras instalaciones expropiadas por Decretos nros. 10.107/44 y 9.626/46.-

En virtud de ello la Comisión Nacional de Granos y Elevadores computó al señor LUIS ALBERTO VOSO una antigüedad de quince años diez meses y un día por servicios prestados en la firma LUIS DE RIDDER LTDA. S.A. Comercial (informe de fs. 27).-

El citado agente pasó luego a prestar servicios en calidad de adscripto al Instituto Argentino de Promoción del Intercambio (en liquidación), el que reconoció a los efectos del adicional por antigüedad los servicios prestados en la citada firma en virtud de lo dispuesto por Resolución "A" nº 1.119 de fecha 11 de Octubre de 1948 que en copia obra a fs. 28.- Cabe destacar que dicho Instituto a la fecha de esa Resolución estaba con respecto al Banco Central, en situación análoga a la de la Comisión de Granos y Elevadores.-

Posteriormente por Decreto nº 6.312/58 el señor VOSO fué incorporado al ex-Ministerio de Comercio e Industria a partir del 1/4/58 oportunidad en que se le convirtió en sueldo el adicional que por antigüedad percibía en dicho Instituto (informe de fs. 29).-

En su presentación de fs. 1/2 el citado agente reclama que se le computen los 15 años 10 meses y 1 día de servi-

cios prestados en la firma LUIS DE RIDDER LTDA. S.A. Comercial para liquidarle la bonificación por antigüedad.-

Corresponde dejar aclarado, que los reconocimientos de antigüedad dispuestos por el Banco Central de la República Argentina y cómputos efectuados por la Comisión Nacional de Granos y Elevadores y el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio (en liquidación) -y con respecto a los cuales funda su pedido el agente recurrente- fueron hechos por dichos organismos en la esfera de su competencia con fines determinados, no teniendo consecuencia alguna con respecto al cómputo de antigüedad que, a los fines de la liquidación de la bonificación, corresponde hacer en esta Secretaría de Estado.-

II.- La disposición legal aplicable a esta Secretaría de Estado y mediante la cual se acuerda bonificación por antigüedad al personal de la misma es el Decreto nº 13.540/49 cuyo artículo 5º establece que: "a los efectos del adicional calculado en la forma que se determina en el artículo anterior, se considerará como antigüedad el total de años de servicios prestados por los agentes en la Administración Pública Nacional, ya sea en forma ininterrumpida o alternada" completado por lo dispuesto por el Decreto nº 12.439/56 (¹) que reconoce los servicios prestados en la Municipalidad de Buenos Aires y por el Decreto nº 556/58 (") de fecha 20 de Enero de 1958 que reconoce al sólo efecto de la bonificación por antigüedad, los servicios prestados con anterioridad a la fecha de su nacionalización, en empresas, entidades o instituciones que hubieran pasado a formar parte del Patrimonio del Estado.-

Como los servicios que cuestiona el señor VOSO fueron prestados en una entidad privada, corresponde establecer si ellos encuadran en la última de las disposiciones citadas.-

---

(¹) Ver Digesto Administrativo nº 62.-

(") Ver Digesto Administrativo nº 416.-

Por decreto nº 10.107/44 el Estado declaró de utilidad pública el uso de las instalaciones, elevadores, cargadores galpones, etc., que fueran utilizados o susceptibles de utilizarse para la recepción, almacenamiento etc. de granos y luego por decreto nº 9.626/46 expropió todos esos bienes incluyendo terrenos, edificios etc.-

Dichas expropiaciones si bien abarcaban gran extención de los elementos que utilizaban las empresas para el desempeño de sus funciones no significaron la nacionalización de las mismas, razón por la cual se estima que el caso del señor VOSO no estaría encuadrado dentro de las disposiciones del artículo 1º del Decreto nº 556/58 a la luz de una aplicación estricta y formal.-

Ahora bien, dada la magnitud de las expropiaciones, por vía de interpretación, podría llegarse a considerarlo incluído en sus beneficios. Así se cumpliría con los fines de la ley.-

III.- Empero, como la antigüedad que se cuestiona tendría sólo efectos en el período comprendido entre el 1/4/58, fecha en que el señor VOSO fué incorporado a esta Secretaría de Estado y el 31 de Octubre ppdo., en virtud de que a partir del 1º de Noviembre de 1958, se aplicaría el Escalafón para el Personal Civil de la Administración Pública Nacional y que el inc. c) del artículo 52 de éste establece un procedimiento análogo para el cómputo de antigüedad, se estima necesario dar intervención al Ministerio de Hacienda de conformidad con lo dispuesto por el Decreto-ley nº 797/58 (&).-

DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS, 5 de junio de 1959.

Fdo. LUCAS SILVANO PENNA
Director General

(&) Ver Digesto Administrativo nº 419.-

Expediente nº 90.316/59 (Hacienda)
157.506/58 (Comercio)
Providencia nº 328.-

Señor Subsecretario de Hacienda:

La Secretaría de Estado de Comercio solicita se le informe si corresponde reconocer a los efectos de la liquidación del beneficio establecido por el punto 52º del Escalafón aprobado por decreto nº 9.530/58, los servicios prestados por un agente en la compañía Luis De Ridder Ltda. S.A. Comercial, que fuera expropiada por la Comisión Nacional de Granos y Elevadores.-

Dicho agente pasó, posteriormente, a depender del Instituto Argentino de Promoción del Intercambio, y en oportunidad de la liquidación del mismo, fué transferido a la Secretaría de Comercio, organismo que lo incorporó a su presupuesto a partir del 1º de abril de 1958.-

Atento la consulta formulada, quedarían dos períodos perfectamente delimitados a considerar: el que va desde la fecha citada hasta el 31 de octubre del mismo año, que se regiría por las disposiciones del decreto nº 13.540 del 9 de junio de 1949, aprobatorio del régimen de bonificaciones por antigüedad para el personal de la citada Secretaría, y su reglamentación, y sus complementarios nº 12439 / 56 y 556/58; y el que comienza el 1º de noviembre de 1958, entrando ya en el ámbito de aplicación de las normas del mencionado punto 52º del Escalafón y del decreto nº 4.632/59 ($).-

Si bien bajo la dependencia del I.A.P.I., le fueron re

($) Ver Digesto Administrativo nº 709.-

conocidos al interesado, a todos los fines, los servicios computados, en virtud de la resolución de fecha 9 de abril de 1948, dictada por el Banco Central de la República Argentina, tal temperamento no puede aplicarse cuando el empleado es designado en la Secretaría de Comercio ya que desde ese momento se encuentra comprendido en las prescripciones del decreto nº 13.540/49 y sus complementarios nros. 12.439/56 y 556/58, de acuerdo con los cuales sólo se computan los servicios nacionales y los cumplidos en la Municipalidad de Buenos Aires y aquellos prestados en empresas nacionalizadas con anterioridad a la fecha en que hubieran pasado al patrimonio estatal, vale decir que en este caso especial únicamente pueden considerarse útiles los servicios prestados en la Comisión Nacional de Granos y Elevadores y en el I.A.P.I., en razón de que la referida empresa no fué nacionalizada, sino parcialmente expropiada, aún cuando parte de su personal haya sido transferido conjuntamente. Sin perjuicio de ello la totalidad de los servicios prestados pueden acumularse para licencia u otros fines.-

En el segundo lapso son aplicables las normas del punto 52º, inciso c), del citado Escalafón, que establecen que la antigüedad que registre el agente se determinará "sobre la base de los servicios prestados en organismos nacionales, provinciales o municipales o en instituciones, entidades o empresas privadas que hubieran sido incorporadas al patrimonio nacional, provincial o municipal".-

De tal manera, en ninguno de los dos períodos considerados, pueden computarse al causante, a efectos de la bonificación por antigüedad, los servicios prestados en la empresa privada a que se hizo referencia.-

Buenos Aires, 22 de julio de 1959.-

Fdo. JOSE LUIS FRANGI
Director General
Servicio Civil de la Nación

//nos Aires, 27 de julio de 1959.-

Con lo informado precedentemente por la Dirección General del Servicio Civil de la Nación, pase a sus efectos a la Secretaría de Estado de Comercio.-

Fdo. RAFAEL RODOLFO AYALA
Subsecretario de Hacienda

Poder Ejecutivo Nacional
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº 980.-

ESTATUTO PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL (arts. 41º y 44º) - SUMARIOS

Expediente nº 317.352/59(º).
Expte. nº 35.419/57 - Dirección General de Suministros del Estado - Alfonso Casini - Juan - Carlos Galardi - Sumario administrativo - Estatuto del Personal Civil - Nueva norma procesal - Aplicación - Intervención de la Junta de Disciplina

//ñor Secretario de Hacienda:

Esta Dirección entiende que si bien el presente sumario fue iniciado con fecha 11 de enero de 1957 -ver fs. 3- y las normas del Estatuto del Personal Civil de la Administración y su reglamentación comenzaron a tener vigencia - desde el 27 de junio de 1957 y 13 de febrero de 1958, respectivamente, son aplicables en el caso los preceptos contenidos en el Estatuto (art. 44) y su reglamentación (arts. 41-XIII y 44), que disponen la intervención de la Junta de Disciplina en todo sumario iniciado por razones disciplinarias.-

(º) Ver Digesto Administrativo nº 966.-

Es indudable, desde el punto de vista técnico-jurídico que tales normas son instrumentales o formales (conf. ALSINA, Hugo, "Tratado Teórico Práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial", t.1, p.38, Bs.As., 1941, y CARNELUTTI, Francisco, "Sistema de Derecho Procesal Civil", Bs.As., 1944, t.1, p.93), ya que "regulan los medios para dictar la solución e imponerla, atribuyendo para el efecto un poder jurídico a un determinado sujeto" y que, por lo tanto, no resuelven directamente un conflicto, actuando sobre la litis imponiendo obligaciones, es decir que no son "sustantivas o materiales".-

En efecto, dichas normas crean un nuevo órgano administrativo con competencia para dictaminar en todos los sumarios disciplinarios y establecen la forma en que deberá intervenir.-

Tratándose, entonces, de verdaderas normas procesales, es criterio reiterado de la doctrina y jurisprudencia que "no hay derecho adquirido a ser juzgado con arreglo a determinado procedimiento, y las leyes que lo reglan son aplicables a las causas pendientes mientras no afecten los actos concluídos o dejen sin efecto lo actuado con arreglo a leyes anteriores" (S.C.N., Fallos, Vol. 220, año 1951, t. 2, p. 729 y los allí citados).-

En el caso presente, se trata de un sumario administrativo en el que no ha recaído todavía resolución, y durante el trámite del cual se ha creado un nuevo órgano disciplinario competente para dictaminar, en forma tal que ninguno de los actos procesales cumplidos con anterioridad puede considerarse afectado por la aplicación de la nueva norma.

Atento a lo que resulta de las conclusiones que anteceden, estima, en síntesis, esta Dirección que debe procederse al envío de las presentes actuaciones a la Junta de Disciplina de la jurisdicción que corresponda, de acuerdo

con las normas que rigen en la actualidad (Estatuto del - Personal Civil, art. 44 y su reglamentación, arts. 41-XIII y 44).-

DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS, 4-9-958.-

Fdo. CRISTIAN GIMENEZ DEMARIA
Director General

Poder Ejecutivo Nacional
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº 981.-

LICENCIAS

M E M O R A N D U M

Producido por: Jefe del Departamento de Personal.-

Para información del: Señor Director General de Contabilidad y Administración.-

---

Por las presentes actuaciones el agente de la Dirección Nacional de Estadística y Censos, don PEDRO RODOLFO ALTEMIR (Clase D - Grupo III), solicita se le considere como licencia sin goce de haberes, las inasistencias en que incurrió desde el 30 de setiembre hasta el 22 de diciembre de 1958.

Al causante, en virtud de haber sido favorecido con una beca otorgada por la F.A.O. y la Administración Técnica de las Naciones Unidas, para realizar estudios en los Estados Unidos de América, relacionados especialmente, en métodos de muestreo agrícola, se le concedieron, a partir del 10 de setiembre de 1957, once meses de licencia con goce de haberes y con imputación al artículo 35º del Decreto Nº 12.720/53, modificado por el Nº 13.800/56, mediante Decreto Nº 11.132(S.H. 4.877) de fecha 16 de setiembre de 1957.

El citado agente, en virtud de haber sido notificado con posterioridad a la fecha en la cual debía iniciar el uso del aludido beneficio, comenzó a hacer efectivo el mismo a partir del 26 de setiembre de 1957, procediéndo-

se a rectificar el pronunciamiento que le acordó la mencionada licencia, por Decreto Nº 7.021 (S.H. 3.830), del 10 del actual.

Al término de la misma, la precitada Dirección Nacional, procedió a concederle licencia anual reglamentaria, desde el 26 de agosto hasta el 29 de setiembre último (fs. 4 vta.), no existiendo en este Departamento constancia de haber solicitado autorización para permanecer en el extranjero, transgrediendo así lo dispuesto en el punto 102º del Reglamento de Asistencia y Licencias, aprobado por Resolución Nº 8.264/56.

Habiendo finalizado la beca que le fuera otorgada en su oportunidad y ante la posibilidad de continuar sus estudios, el agente ALTEMIR continuó en los EE.UU., motivo por el cual solicita se le considere el período comprendido desde el 30 de setiembre hasta el 22 de diciembre de 1958, como licencia sin goce de haberes.

Frente a la situación que se señala, este Departamento estima conveniente requerir opinión al Tribunal de Cuentas de la Nación (Delegación Fiscalía ante la Secretaría de Hacienda), sobre la procedencia de la concesión que se efectuó al causante, del beneficio que establece el artículo 4º del Decreto Nº 12.720/53, por entender que si bien existe la obligatoriedad del descanso del agente luego de un lapso prudencial de tareas, que se gradúa según los años de servicios y teniendo en cuenta el propósito higiénico que motivara su implantación, su otorgamiento se encuentra supeditado, no solamente a que el agente se halle en actividad, sino además, en pleno ejercicio de las funciones inherentes a su cargo.

Buenos Aires, junio 24 de 1959.-

Fdo.ARMANDO A.TORNESE
Jefe
Departamento de Personal

Expediente Nº 963.249/58.-
Providencia Nº 339.-

//nos Aires, 3 de agosto de 1959.-

Vuelvan las presentes actuaciones a la Dirección General de Contabilidad y Administración llevando a su conocimiento lo siguiente:

I) Se cuestiona en el Memorándum de fs. 14/15 la procedencia de la concesión de licencia por vacaciones al causante, agente de la Dirección Nacional de Estadística y Censos, al término del lapso en que usufructuó de un beneficio similar, originado en la obtención de una beca para realizar estudios de perfeccionamiento estadístico en los Estados Unidos.- Se expresa en dicho informe que el otorgamiento de la licencia por vacaciones "se encuentra supeditado, no sólo a que el agente se halle en actividad, sino además en pleno ejercicio de las funciones inherentes a su cargo", temperamento que es compartido plenamente por esta Dirección General.

Cabe pues analizar cual era la situación del interesado mientras utilizara la licencia acordada por Decretos Nos. 11.132/57 y 7.021/59.

a) La beca acordada no fué la resultante de una gestión personal del empleado en cuestión. La Dirección Nacional de Estadística y Censos puntualiza en su informe de fs. 18/19 el proceso de la misma, originada en la realización, durante el año 1955, de un Centro Latinoamericano de Demostración de Técnicas de Muestreo Agrícola, bajo el auspicio conjunto del Gobierno Argentino y la Organización de las Naciones Unidas. Dicho convenio estipula la asignación de becas de especialización para los mejores alumnos del curso, habiendo recaído una de ellas en el causante, enviado a dicho curso por la aludida Repartición, a cuya dotación de agentes pertenecía.

Vale decir que la beca era una resultante de su condición de agente del Estado, intimamente relacionada con su tarea específica, a la cual eran de aplicación los estudios de especialización estadística a realizar, motivo por el cual la Repartición aludida consideró de suma utilidad el aprovechamiento integral de la beca ofrecida.

b) El art. 2º del decreto Nº 11.132/57 encargó al agente de referencia la realización de un informe vinculado con el estudio a realizar, con miras a la aplicación en nuestro medio de los conocimientos que adquiriese, el que debió ser presentado a la Repartición en que revistaba dentro de los 30 días hábiles de su regreso al país.

Es decir que el resultado de sus estudios debió ser puesto en conocimiento del organismo al que pertenecía, para su aprovechamiento en lo que fuera conveniente.

De los expuesto en los puntos a) y b) resulta en forma evidente que la licencia usufructuada ha tenido, en su gestión previa y en sus consecuencias inmediatas, una íntima relación con la situación del causante como empleado de la Dirección Nacional de Estadística y Censos. Debe inferirse de ello que la misma, durante el usufructo de la beca, no lo desligaba en manera alguna de su condición de agente al servicio activo del Estado, al que debía rendir cuenta de sus estudios, con el objeto de aplicar los conocimientos adquiridos.

Entiende esta Dirección General, en consecuencia, que su situación era similar a la de los agentes que prestaban servicio efectivo, y por lo tanto la licencia por vacaciones resultaba procedente al término de la beca otorgada.

II) Respecto del incumplimiento de la norma del punto 102º de la Resolución M.H. 8.264/56 (') (autorización para trasladarse al exterior durante el lapso que dure la licencia por vacaciones), se estima que no sería de apli-

(') Ver Digesto Administrativo Nº 16.-

cación estricta en el caso en cuestión, toda vez que el interesado ya se encontraba fuera del país, como resulta do de una autorización en tal sentido otorgada por el Po der Ejecutivo Nacional, el que dispuso asimismo el otorgamiento del pasaje correspondiente hasta el lugar de destino del becario.-

DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO CIVIL DE LA NACION.

Fdo. JOSE LUIS FRANGI
Director General

Poder Ejecutivo Nacional
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº 982.-

ESCALAFON PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL (punto 26º) - SUBSIDIO FAMILIAR

Buenos Aires, 28 de Septiembre de 1959.-

Visto el Expediente nº 90.382/59 (D.N.M. 610.874/59), y

CONSIDERANDO:

Que la Resolución S.H. nº 7.142/59 (1) establece, a los fines de la liquidación del subsidio familiar, que se considera "a cargo" al cónyuge cuando conviva con el agente y éste atienda su subsistencia;

Que el requisito de la convivencia fué establecido como una norma general, con vista a las situaciones de matrimonios separados de hecho, por propia voluntad;

Que en el caso planteado en el expediente a que se hace referencia, el agente recurrente, casado en el extranjero, ha solicitado y obtenido de las autoridades migratorias de nuestro país el permiso de ingreso al mismo de su esposa, el que no puede efectivizarse por la circunstancia de que las autoridades del país en que reside aquélla no permiten su salida;

Que en tales condiciones, debidamente documentadas, la no convivencia de los cónyuges no puede ser atribuída a la voluntad del recurrente ni de su esposa, no existiendo así una separación voluntaria;

(1) Ver Digesto Administrativo nº 781.-

Que el causante ha presentado comprobantes de las remesas de dinero que efectúa periódicamente a su esposa, lo que resultaría probanza de que atiende a su subsistencia ;

Que la Dirección General del Servicio Civil de la Nación considera que las circunstancias apuntadas son suficientes como para determinar la procedencia del beneficio cuestionado, por sus características excepcionales;

Por ello, y atento a las facultades conferidas por los Decretos nros. 9530/58 (art. 13°) y 4631/59 (") (artículo - 5°);

EL SECRETARIO DE HACIENDA
R E S U E L V E:

1° - Considerar procedente la liquidación del subsidio familiar (punto 26° del Escalafón aprobado por Decreto n° 9.530/58) dentro de las condiciones y formalidades establecidas en el Decreto n° 4.631/59, en el caso del agente del Ministerio del Interior - Dirección Nacional de Migraciones-, D. Juan Durcansky, quien deberá acreditar periódicamente, ante el servicio administrativo correspondiente, el envío de ayuda pecuniaria a su cónyuge.-

2° - Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, y archívese.-

Fdo. GUILLERMO W. KLEIN.

RESOLUCION N° 8.119.-

(") Ver Digesto Administrativo n° 738.-

Poder Ejecutivo Nacional
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº 983.-

ASISTENCIA

Buenos Aires, 9 de Octubre de 1959.-

Visto el pedido formulado por la Junta Central de la - Acción Católica Argentina para que se autorice la justificación de las inasistencias en que incurra el personal del Estado con motivo de su participación en el VIº Congreso - Eucarístico Nacional a realizarse en la ciudad de Córdoba entre los días 7 y 11 del corriente mes de octubre, y

CONSIDERANDO:

Que dada la formación católica de la mayoría del pue - blo argentino debe descontarse la concurrencia a esa magna asamblea de numerosos agentes de la ciudad de Córdoba y de otros puntos del país;

Que es deseo del Poder Ejecutive facilitar esa partici pación en la medida en que no se perjudique la prestación de los servicios a cargo del Estado;

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA
D E C R E T A :

Artículo 1º.- Autorízase a los Ministerios, Secretarías - de Estado, organismos descentralizados y empresas del Esta do a justificar con goce de haberes las inasistencias en que incurra su personal para participar en el VIº Congreso

Eucarístico Nacional.-

Artículo 2º.- Dicha justificación podrá incluir hasta dos días posteriores a la clausura del Congreso, cuando se trate de personal que se ha trasladado desde lugares alejados de la sede del mismo.-

Artículo 3º.- Los organismos mencionados en el artículo - 1º verificarán por los medios de control a su alcance la efectiva participación en el Congreso de los agentes que - se acojan a estos beneficios.-

Artículo 4º.- Las ausencias deberán ser previamente autorizadas por los organismos competentes, quienes deberán adoptar las medidas pertinentes para asegurar la debida prestación de los servicios.-

Artículo 5º.- El presente decreto será refrendado por los señores Ministros Secretarios en los Departamentos de Interior y de Relaciones Exteriores y Culto.-

Artículo 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.-

FRONDIZI - Alfredo R. Vítolo
Diógenes Taboada.-

DECRETO Nº 12.648.-

Boletín Nº 984.-

DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO CIVIL DE LA NACION - PERSONAL - BOLSA DE TRABAJO

Buenos Aires, 23 de octubre de 1959.-

Visto estas actuaciones en las que el Tribunal de Cuentas de la Nación en uso de las facultades que le han sido acordadas por el Artículo 85ºa) de la Ley de Contabilidad, observa el Decreto Nº 9.718/59 (') por entender que las transferencias previstas en sus Artículos 6ºy 7º enervan lo expresamente dispuesto en el Artículo 35º del Decreto-Ley Nº 23.573/56 (") modificado por su similar Nº 3.891/57 (•), en cuanto que el personal debe desempeñarse en la función para cuyo fin ha sido prevista la partida con cargo a la cual se atiende su remuneración y prohibe las adscripciones entre los distintos Ministerios, y

CONSIDERANDO:

Que las disposiciones del mencionado Artículo 35º están orientadas principalmente a impedir el discrecionalismo en materia de adscripciones, a fin de evitar que el uso indiscriminado de ese sistema de afectación de personal perturbe el normal desenvolvimiento de los planes de trabajo;

Que el propósito que anima a las cláusulas observadas, además del de coadyuvar a la reducción de los gastos pú-

(') Ver Digesto Administrativo Nº 854.-
(") Ver Digesto Administrativo Nº 141.-
(•) Ver Digesto Administrativo Nº 213.-

blicos promoviendo el desplazamiento de agentes hacia la actividad privada, es el de posibilitar una racional distribución de personal con miras a lograr una mayor efectividad y mejores condiciones de trabajo, extremos éstos que resultan concordantes con los perseguidos por el aludido Artículo 35°, en mérito a que ambos resultan instrumentos que conducen a un solo objetivo principal, cual es el de perfeccionar el mecanismo funcional de la Administración Pública Nacional;

Que por otra parte el Artículo 7° del Decreto número 9.718/59 al determinar que el agente que sea motivo de traslado se desempeñará en su nuevo destino "en comisión", hasta tanto sea incorporado al presupuesto respectivo, ya sea mediante la transferencia del cargo o habilitación de la vacante necesaria, fija procedimientos que conducen a regularizar su situación de revista, circunstancia que en su esencia define un propósito coincidente con el espíritu del precitado Artículo 35°;

Por ello, y atento lo propuesto por la Secretaría de Estado de Hacienda,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

Artículo 1°.- Insístese en el cumplimiento del Decreto N° 9.718 de fecha 12 de agosto de 1959.

Artículo 2°.- El presente Decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda.

Artículo 3°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y pase al Tribunal de Cuentas de la Nación para su conocimiento y demás efectos.-

FRONDIZI - Alvaro C. Alsogaray - Guillermo W. Klein.

DECRETO N° 13.387.-

Poder Ejecutivo Nacional
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº 985.-

ESCALAFON PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL (punto 52º) - ANTIGÜEDAD - LOTERIA DE BENEFICENCIA NACIONAL Y CASINOS (CASINOS)

Buenos Aires, 23 de octubre de 1959.-

Visto los expedientes nros. 52.798/59 y 90.247/59, de la Secretaría de Estado de Hacienda, en los que se plantea el reconocimiento de servicios a personal de la Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos, y de la Junta Nacional de Granos, y

CONSIDERANDO:

Que el punto 52º, inciso c), del Escalafón aprobado por decreto nº 9.530/58 establece que la antigüedad que registra cada agente se determinará tomando en cuenta, entre otros, los servicios prestados en instituciones, entidades o empresas privadas incorporadas al patrimonio nacional, provincial o municipal;

Que el caso de las Reparticiones a que se hace referencia, no es exactamente el previsto en el aludido Escalafón;

Que en lo concerniente a la Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos, mediante decreto nº 31.090/44 se declaró la caducidad de las concesiones otorgadas por los gobiernos provinciales a empresas o personas jurídicas privadas, para la explotación de casinos o salas de juego, declarando de utilidad pública y sujetos a expropiación los inmue-

bles, muebles y demás enseres afectados a este servicio, y posteriormente, por decreto nº 7.865/46, se encargó à la aludida Repartición la explotación, manejo y administración de los mismos, facultándose al Ministerio del Interior para convenir el arrendamiento, cesión o utilización temporaria de los inmuebles hasta tanto se decidiera su expropiación;

Que dichas medidas de gobierno no establecieron expresamente el régimen de incorporación del personal afectado a las mismas, pese a lo cual, y a efectos de que el aludido organismo pudiera dar cumplimiento a la misión que le fijaba el decreto nº 7.865/46, se produjo la incorporación del citado personal al presupuesto de la cuenta que atendió las erogaciones emergentes del cumplimiento del referido acto legal;

Que en tales condiciones la situación de dicho personal es similar al de las empresas, instituciones o entidades privadas que fueron incorporadas al patrimonio del Estado, ya que no se produjo discontinuidad en la prestación del servicio por parte del personal afectado, que continuó en su misma tarea y con sus mismas obligaciones, cambiando solamente su dependencia, que pasó a ser el Estado;

Que en el caso de la Junta Nacional de Granos se reproduce, con algunas variantes, esta misma situación; ya que por decreto nº 10.107/44 se declaró de utilidad pública el uso de todas las instalaciones destinadas al comercio de granos ubicadas en zonas portuarias, la caducidad de los arrendamientos y cesiones de depósitos para el almacenamiento de los mismos y otras medidas conexas, todo lo cual pasó a poder de la Comisión Nacional de Granos y Elevadores, determinándose en el art. 14º del citado decreto que dicha Comisión mantendría todo o parte del personal permanente que prestaba servicios a la fecha del pronunciamiento, el que quedaría en comisión por el término de un año;

Que los servicios prestados por el personal afectado en las empresas incluídas en los decretos nros. 10.107/44 y 9.626/46 -que complementó al anterior-, le fueron reconocidos, a todos los efectos, mediante Resolución del Banco Central de la República, de fecha 9 de abril de 1948, dentro de determinadas condiciones que en la misma se especifican, situación que se ha mantenido a través de los sucesivos escalafones otorgados al personal de aquella Junta mediante decretos nros. 23.471/56 y nº 5.848/58.

Que en tales condiciones, no resultaría equitativo restringir tales beneficios al incorporar a dicho personal al Escalafón aprobado por decreto nº 9.530/58, pues se afectarían de tal modo derechos que han sido plenamente ejercitados;

Que, en consecuencia, y de acuerdo con lo propuesto por la Secretaría de Estado de Hacienda, corresponde determinar la procedencia del cómputo de servicios a que se ha hecho referencia, mediante el pronunciamiento que amplía la norma del punto 52º, inciso c), del Escalafón,

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA
D E C R E T A :

Artículo 1º.- A los fines del cómputo de antigüedad previsto en el punto 52º, inciso c), del Escalafón aprobado por decreto nº 9.530/58 considérase comprendidos, en las condiciones establecidas en el mismo, los servicios del personal de los Casinos y Salas de Juego cuyas concesiones fueran declaradas caducas mediante decreto nº 31.090/44, que prestaban servicio en los mismos a la fecha del referido pronunciamiento.-

Artículo 2º.- Reconócese, asimismo, a los fines indicados en el art. 1º, en las condiciones fijadas en el punto 52º, inciso c), del Escalafón, los servicios prestados en las

firmas o empresas propietarias de elevadores y otras instalaciones expropiadas en virtud de los decretos nros.10.107/44 y 9.626/46, o de otros dictados en consecuencia del art. 14º de la ley nº 11.742, por los empleados y obreros, y los jornaleros accidentales con un mínimo de doscientos días de trabajo efectivo por año, que a la fecha del acto gubernativo que dispuso la expropiación se hallaban prestando servicio en las mismas. Queda comprendido en el beneficio que se establece precedentemente el personal que por las causas indicadas en el mismo hubiera sido incorporado a la Junta Nacional de Granos, en las siguientes condiciones:

1º.- El personal que prestaba servicios en las instalaciones expropiadas o en tareas complementarias vinculadas a la explotación de esas instalaciones en las oficinas administrativas de las firmas propietarias;

2º.- El personal que prestaba servicios en dichas empresas en el ramo de cereales o en tareas vinculadas a la explotación de las instalaciones expropiadas y que hubiere sido destinado o trasladado por aquéllas, como consecuencia de la expropiación, a firmas filiales directas o subsidiarias computándose tanto los servicios prestados en el orden indicado, como los que se hubieren prestado en la firma filial o subsidiaria con anterioridad o con posterioridad a la fecha de la expropiación y los que se hubieren prestado en forma alternativa;

3º.- El personal proveniente de firmas o empresas que no fueren propietarias de elevadores u otras instalaciones expropiadas, pero que por razón de su actividad en el ramo hubieren estado vinculadas a la explotación o conservación de dichas instalaciones;

4º.- El personal que como consecuencia de la expropiación hubiere sido suspendido o separado de sus funciones y que hubiere ingresado posteriormente a la mencionada Junta Na-

cional.-

Artículo 3º.- A los fines determinados en los dos artículos precedentes no serán computados los lapsos de servicio que hubieran dado lugar a pago de indemnización por despido, de acuerdo con la ley nº 11.729.-

Artículo 4º.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía, y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda.-

Artículo 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y Archívese.-

FRONDIZI - Alvaro C. Alsogaray
Guillermo W. Klein.-

DECRETO Nº 13.380.-

Poder Ejecutivo Nacional
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº 986.-

LEY DE CONTABILIDAD - CONTRATACIONES

Buenos Aires, 7 de octubre de 1959.-

Visto el inciso 22 de la reglamentación del artículo 61 de la Ley de Contabilidad aprobada por Decreto número 9.400/57, que dispone que las contrataciones deberán formalizarse en una sola vez para cada ejercicio o por períodos semestrales o trimestrales según la naturaleza, y

CONSIDERANDO:

Que el Estado, no obstante las severas medidas de economía actualmente en ejecución, constituye -dentro de la plaza- un comprador de importancia, por el volumen y monto total de las adquisiciones y servicios que, normalmente, debe contratar;

Que, dentro de las diversas medidas integrantes del plan de estabilización, se estima llegado el momento de considerar al Estado, precisamente en esa situación de adquirente, con miras a evitar que -por el gran volumen y simultaneidad de esas contrataciones- pueda influir en determinados casos en forma desfavorable para la política de estabilización en que se halla empeñado el Poder Ejecutivo Nacional;

Que, en tal sentido, se estima conveniente autorizar contrataciones por plazos menores que los previstos en el inciso 22 de la reglamentación vigente del artículo 61 de la Ley de Contabilidad;

Que, en tal forma podrá lograrse una mayor competencia, al haber mayor cantidad de oferentes atento los pla

zos más reducidos, como asimismo se obtendrán mejores precios para el Estado. También como consecuencia de esos menores plazos los proveedores habituales o de rutina, deberán enfrentar esa mayor competencia, con la cual se logrará una reactivación saludable, tanto para el Estado como para los particulares proveedores;

Que, con el procedimiento de que se trata, se dá solución de carácter práctico y dentro de las normas legales, a diversos problemas que motivaron distintas gestiones de Ministerios, Secretarías y Reparticiones Nacionales;

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

Artículo 1º.- Las contrataciones que tengan por objeto - los suministros en general o prestaciones de servicios, a cumplirse en el ejercicio 1959/60, podrán concretarse por períodos trimestrales.

Artículo 2º.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario en el Departamento del Interior, a cargo interinamente del Ministerio de Economía y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda.

Artículo 3º.- Tómese nota, comuníquese al Tribunal de Cuentas de la Nación, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y vuelva a la Dirección - General de Suministros del Estado, a sus efectos.

FRONDIZI - Alfredo R.
Vítolo - Guillermo W.
Klein.

DECRETO Nº 12.606.-

Poder Ejecutivo Nacional
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO.

Boletín Nº 987.-

CONTRATACIONES (Rescisión)

Buenos Aires, 22 de Octubre de 1959.-

Visto las actuaciones acumuladas en el Expediente nº 1.579/59 del registro de la Secretaría de Hacienda, y

CONSIDERANDO:

Que por decreto nº 9.026 del 29 de Julio de 1959 (1), se facultó a las reparticiones de la Administración Pública Nacional para rescindir los contratos de suministros, servicios u otros conceptos, concertados hasta el 31 de diciembre de 1958, o posteriormente, si el acto de apertura de las respectivas propuestas se hubiera realizado hasta esa fecha;

Que ha provocado algunas dudas el ámbito de aplicación de dicho decreto en cuanto a si el mismo alcanza a las empresas del Estado, por lo que resulta conveniente definir afirmativamente la cuestión en razón de que ese es el espíritu del mencionado decreto nº 9.026/59, cuyos efectos deben involucrar por igual a todos los contratantes con el Estado, cualquiera sea la naturaleza jurídico-administrativa de las dependencias, reparticiones o entidades con las cuales hubiesen concertado operaciones, siempre que se reunan los requisitos y condiciones que aquel decreto regla expresamente;

---

(1) Ver Digesto Administrativo nº 844.-

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA
D E C R E T A :

Artículo 1º.- Aclárase que las disposiciones del Decreto nº 9.026 de fecha 29 de julio de 1959 son de aplicación en todos los organismos integrantes de la Administración Pública Nacional, inclusive los entes descentralizados y las empresas del Estado.-

Artículo 2º.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda.-

Artículo 3º.- Comuníquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.-

FRONDIZI - Alvaro C. Alsogaray - Guillermo W. Klein.-

DECRETO Nº 13.334.-

Poder Ejecutivo Nacional
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº 988.-

PASAJES OFICIALES - ORDENES DE CARGA

Buenos Aires, 22 de octubre de 1959.-

Visto el expediente Nº 10.184 (D.N.A.C.), Nº 23.655 Cde. 11 (S.A.), lo solicitado por el señor Secretario de Estado de Aeronáutica, y lo propuesto por el señor Ministro Secretario en el Departamento de Defensa Nacional, y

CONSIDERANDO;

Que por Decreto Nº 15.896/49 (') existe la obligatoriedad de utilizar los medios de transporte de propiedad del Estado, en los desplazamientos que deban realizar los funcionarios del Estado en misión oficial, tanto dentro como fuera del país, criterio que también debe regir para el despacho de cargas, equipajes y efectos;

Que, en lo concerniente al transporte aéreo, la demora en los pagos por parte de los organismos de la Administración origina problemas de carácter financiero, agravados considerablemente en lo que a Aerolíneas Argentinas respecta, por los pagos que a su vez dicha Empresa del Estado debe realizar en plazos perentorios a terceros transportadores aéreos, en divisas extranjeras, cuando se trata de transporte fuera de sus propias líneas o en conexión con sectores más allá de los servicios cubiertos por la red de dicha Empresa;

Que las circunstancias apuntadas hacen necesario dictar normas complementarias de las que rigen conforme al

(') Ver Digesto Administrativo Nº 106.-

Decreto Nº 15.896/49, a efectos de evitar los perjuicios de orden económico-financiero que originan a Aerolíneas Argentinas las demoras en los pagos y las diferencias de cambio entre las tarifas originalmente aplicadas y las que deben satisfacerse a otros transportadores aéreos en los vuelos en conexión con Aerolíneas Argentinas o sobre sectores no comprendidos en la red de servicios de dicha Empresa del Estado,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

Artículo 1º.- Los ministerios, secretarías de Estado, organismos autárquicos, empresas del Estado y, en general todos los organismos oficiales que dependan del Estado Nacional, deberán acordar a la Empresa del Estado Aerolíneas Argentinas la preferencia establecida por Decreto Nº15896/49, en todos los casos en que deben realizarse viajes de funcionarios o transportes de materiales o efectos por vía aérea, tanto dentro como fuera del país.

Artículo 2º.- La Empresa del Estado Aerolíneas Argentinas facturará los importes respectivos a las tarifas en vigor a la fecha de concretarse el transporte, debiendo dichas facturas ser abonadas indefectiblemente dentro de los treinta (30) días de presentadas ante el Ministerio, Secretaría, Repartición u organismo que originó el transporte.

Artículo 3º.- Cuando el transporte se refiera a servicios de otros transportadores, por tramos en conexión o no volados por los servicios propios de Aerolíneas Argentinas, el valor de tal transporte será facturado por Aerolíneas Argentinas, y abonado a ésta por el mismo importe total y clase de moneda en que el transportador correspondiente formule el cargo respectivo a dicha Empresa del Estado de acuerdo a las tarifas básicas que rijan para el viaje o

sector involucrado.

Artículo 4º.- El presente decreto será refrendado por los señores ministros secretarios en los departamentos de Defensa Nacional, de Interior, de Relaciones Exteriores y Culto, de Economía e interino de Trabajo y Seguridad Social, de Educación y Justicia, de Asistencia Social y Salud Pública y de Obras y Servicios Públicos y firmado por el señor Secretario de Estado de Aeronáutica.

Artículo 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y vuelva a la Secretaría de Aeronáutica.

FRONDIZI - Alberto R. Costantini - Héctor V. Noblía - Luis R.Mac Kay - Alvaro C. Alsogaray - Justo P. Villar - Diógenes Taboada - Alfredo R. Vítolo - Ramón A. Abrahín.

DECRETO Nº 13.134.-

Poder Ejecutivo Nacional

SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA

DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº 989.-

PRESUPUESTO - OBRA SOCIAL - RESOLUCION DEL TRIBUNAL DE - CUENTAS DE LA NACION

Buenos Aires, 27 de octubre de 1959.-

Visto las dificultades con que tropieza el Tribunal de Cuentas para el cumplimiento de su cometido en todo cuanto se refiere a la fiscalización que ejerce sobre el aporte - estatal a las obras sociales que funcionan en las reparticiones de la Administración Pública, y

CONSIDERANDO:

Que tales inconvenientes son motivados en gran parte - por la diversidad de matices que ofrece la citada contribución oficial;

Que comprobaciones realizadas al efecto permiten dar - algunos ejemplos de las distintas formas que concretan la ayuda del Estado y que pueden así expresarse:

1) figuración en el presupuesto general como una dependencia más dentro del anexo respectivo;

2) inclusión de partidas específicas tanto en gastos - en personal como en gastos generales;

3) contribuciones globales expresas consignadas en el anexo pertinente;

4) asignación de créditos tomados de las partidas generales de presupuesto mediante distribuciones ju-

risdiccionales, aun cuando aquéllas no citen expresamente esta finalidad;

5) adscripción informal de personal que revista en las partidas generales de la repartición;

6) utilización de edificios y locales fiscales o alquilados por el Estado, uso de mobiliario, útiles, automotores, combustibles y bienes en general adquiridos con partidas no asignadas para las obras sociales.-

Que al hecho de no haberse determinado aun por una ley específica la naturaleza jurídica de las obras sociales en general, se suma el problema que crea las distintas caracterizaciones legales con que se distinguen a esas entidades, puesto que existen aquellas que actúan como organizaciones de derecho privado y otras que han sido instituídas expresamente como de derecho público por sus respectivas disposiciones de creación;

Que las circunstancias apuntadas en los considerandos anteriores dificultan la correcta fiscalización por parte de las representaciones de este cuerpo;

Que frente a la urgente necesidad de regularizar esta situación el Tribunal de Cuentas -por nota nº 139/I.A. de fecha 3 de julio del año en curso- la sometió a consideración de la Secretaría de Hacienda, solicitando una solución integral para que a partir del próximo ejercicio financiero las obras sociales se ajustarán a una estructura orgánica y presupuestaria perfectamente definida y uniforme;

Que encontrándose ya próxima la iniciación del citado ejercicio sin que se tenga conocimiento de que se hayan dispuesto medidas tendientes a lograr la finalidad perseguida corresponde a este cuerpo dictar normas que faciliten el cumplimiento de su cometido sin tener que admitir -

situaciones de dudosa procedencia frente a las disposiciones de la ley de contabilidad;

Que en orden a ello el Tribunal de Cuentas o sus representantes, en su caso, no podrán dar curso a actuaciones que impliquen erogaciones, de cualquier naturaleza, cuando estas estén destinadas a las obras sociales y afecten partidas que no expresen claramente ese destino;

Que tampoco puede conformar, en materia de gastos en personal, documentación alguna cuando de ella surja que el agente prestó servicios en dichas obras sociales, imputándose sus haberes a partidas no previstas para ese destino;

Por todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA NACION
R E S U E L V E :

Artículo 1º.- A partir del día 1º de noviembre próximo - los representantes del Tribunal de Cuentas, cualquiera sea la instancia en que intervengan, solo darán curso a las actuaciones que impliquen afectar las partidas del presupuesto general con erogaciones destinadas a las obras sociales cuando esta finalidad esté expresamente prevista en el crédito imputado.-

Artículo 2º.- Cuando dichos representantes intervengan documentación relacionada con gastos en personal se abstendrán de conformarla si de ella surgiera que el agente prestó servicios en obras sociales revistando en partidas arbitradas para otros fines.-

Artículo 3º.- Los citados funcionarios comunicarán, asimismo a los respectivos servicios centrales del Tribunal toda asignación de inmuebles -fiscales o locados por el Estado- para su utilización por las obras sociales, como así tam -

bién la entrega a esas instituciones de bienes de uso o - consumo adquiridos con partidas previstas para otros destinos.-

Artículo 4º.- Comuníquese a la Secretaría de Estado de Hacienda y a los jefes de los servicios administrativos con nota de estilo; dése al Digesto Administrativo y archívese.

JOSE M. FERNANDEZ FARIÑA - Damián Figueroa - Rodolfo J. Tarelli - Wifredo Dedeu - Antonio M. Pérez Arango - Juan Carlos Pastene-Secretario-

RESOLUCION Nº 1.919/59.-

Poder Ejecutivo Nacional
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº 990.-

LICENCIAS

Ref. nota Nº 670/59.-
Providencia Nº 458.-

Señor Subsecretario:

Respecto de la consulta formulada precedentemente - por el Tribunal de Cuentas de la Nación acerca de la limitación de las licencias extraordinarias previstas en el artículo 31º del decreto Nº 12.720/53 (1), esta Dirección General considera lo siguiente:

Las licencias extraordinarias sin goce de haberes, - concedidas por asuntos familiares o particulares, constituyen un derecho, el que no debe ser entendido como absoluto y arbitrario, es decir, que pueda ser ejercitado por el agente con prescindencia total de las necesidades de la Administración.

Todo derecho reconoce limitaciones en su ejercicio, en aras del interés público. Tal conclusión se impone si se considera el vínculo o nexo que relaciona al agente - de la Administración Pública con el Estado. El contrato de trabajo supone como elemento esencial la subordina- - ción o dependencia, y ésta se manifiesta entre otras formas, mediante la obligación del empleado de poner sus - servicios a disposición del empleador -en este caso el - Estado-, y éste retribuir mediante la remuneración estipulada.

No es concebible la pretensión de ejercer un derecho aún contra el interés del servicio al cual el recurrente

(1) Ver Digesto Administrativo Nº 15.-

se encuentra afectado, y en tales condiciones cabe concluir que es procedente la limitación o cancelación de una li - cencia concedida en los términos del art. 31º del decreto Nº 12.720/53, cuando razones del servicio así lo imponen.

DIRECCION GRAL. DEL SERVICIO CIVIL DE LA NACION, 1-10-1959.

Fdo. JOSE LUIS FRANGI
Director General

//nos Aires, 5 de octubre de 1959.-

Con lo informado precedentemente por la Dirección General del Servicio Civil de la Nación, vuelvan estos actuados al Tribunal de Cuentas de la Nación.

Sirva la presente de atenta nota de remisión.-

Fdo. RAFAEL RODOLFO AYALA
Subsecretario de Hacienda

Poder Ejecutivo Nacional
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº 991.-

ESTATUTO PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL (Arts. 40º y 41º) - SUMARIOS

Expte. Nº 90.404/59.-

Buenos Aires, 1º de octubre de 1959.-

Señor Presidente de la Lotería de
Beneficencia Nacional y Casinos
D. REINALDO BRENNA
S / D.

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en respuesta a la consulta que formulara mediante expte. Nº 681/58 Cde. 22 (90.404/59), acerca de los procedimientos a seguir en lo referente a la aplicación de los artículos 40º y 41º del Estatuto del Personal Civil y su Reglamentación.

Al respecto transcribo a continuación la parte pertinente del informe elevado por esta Dirección General al señor Subsecretario de Hacienda, mediante providencia Nº 406, del 9/9/59:

"a) Cuando el inculpado, al tomar vista de lo actuado, "(art. 41º, punto XIII, de la Reglamentación del Estatu- "to) solicite la realización de diligencias o medidas de "prueba, en su descargo, resulta procedente aplicar el - "procedimiento establecido en el punto IX del aludido - "art. 41º.

"b) Una vez realizadas las diligencias o medidas de -

"prueba ofrecidas por el inculpado -en el caso de haber - "las considerado procedentes- corresponde que el sumarian "te las analice y formule las nuevas conclusiones que de "ellas resulten".

Respecto de la consulta formulada como punto c), se - transcribe asimismo la parte pertinente del dictamen producido por la Dirección General de Asuntos Jurídicos de - esta Secretaría en el expte. Nº 34.407/59 (') (Dictamen - Nº 201, del 22/7/59):

"Con relación a las declaraciones tomadas por el ins - "tructor, luego de dar vista al imputado de las conclusio "nes que resultaban del sumario, se consulta si el proce- "dimiento contraviene la norma del art. 41, apartado XIII, "primer párrafo de la reglamentación del Estatuto que dice: "Cuando el instructor disponga el cierre del sumario, for "mulará las conclusiones que resulten de lo actuado, lue- "go de lo cual dará vista al imputado para que presente - "su alegato de defensa, sobre la base concreta de las im- "putaciones y cargos consignados en el informe del instruc "tor, dentro del término establecido en el artículo 41º - "del Estatuto.

"Se interpreta que la vista se confiere luego de cerra "do el sumario y que una vez contestada, el instructor - "queda desligado del procedimiento, debiendo limitarse a "remitir las actuaciones a la Junta de Disciplina, confor "me así lo dispone el segundo párrafo del apartado XIII.

"Pero lo cierto es que el sentido exacto del texto de- "be ser desentrañado relacionándolo con la norma del Esta "tuto que reglamenta y que dice así: "art. 41. El sumario "será secreto hasta que el sumariante dé por terminada la "prueba de cargo. En ese estado se dará vista de tres a - "diez días al inculpado para que el mismo efectúe sus des "cargos y proponga las medidas que crea oportunas para su defensa".

"El juego armónico de ambas disposiciones lleva a dis-

(') Ver Digesto Administrativo Nº 926.-

"currir de la siguiente manera: el inculpado toma vista "del sumario y propone medidas para su defensa (en el ca_ "so presente, nuevas declaraciones); el instructor provee "de conformidad con lo solicitado y de hecho se produce "la ampliación del mismo; cumplidas las medidas solicita_ "das, debe ampliar también las conclusiones que le sugie_ "re el sumario y dar nueva vista al imputado, hecho lo - "cual corresponde el paso de las actuaciones a la Junta "de Disciplina.

"En otras palabras, una interpretación coherente del "art. 41 del Estatuto y de la respectiva norma reglamen- "taria, lleva a la conclusión de que no puede disponerse "el cierre del sumario mientras no se hayan practicado - "todas las diligencias de prueba que se consideren perti_ "nentes. Luego, si al contestar la vista el imputado pro_ "pone medidas y se dispone su realización, tanto en el - "caso de la ampliación del sumario como en el de la adop_ "ción de otras medidas para mejor proveer (art. 44 de la "reglamentación), el principio de bilateralidad de la - "prueba que es esencial en el procedimiento, exige que "se corra vista al sumariado de las nuevas diligencias, "ya que el contralor de ellas que en esa oportunidad se "le ofrece, constituye la garantía necesaria para la de- "fensa de sus derechos".

En cuanto, al punto d), cabe establecer que el térmi_ no acordado al inculpado para que tome vista y efectúe - sus descargos, debe considerarse independientemente en cada caso, vale decir que en cada una de las vistas po - drá hacer uso del plazo máximo estipulado.

Saludo al señor Presidente con atenta consideración.-

Fdo. JOSE LUIS FRANGI
Director General
Servicio Civil de la Nación

Poder Ejecutivo Nacional
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº 992.-

ESTATUTO PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL (Arts. 39º y 41º) - SUMARIOS - JUNTA DE DISCIPLINA

Expediente S.H. Nº 90440/59.-
Expte. M.A.S.S.P. Nº41056/59.-

Dirección General de Despacho:

I

Por estas actuaciones, la Dirección General Inmobiliaria dependiente de la Secretaría de Hacienda de la Nación, da cuenta de que la agente de este Departamento de Estado, Sra. OLGA BLANCA CASTAÑEDA de DE LA CUEVA habría cometido el delito de usurpación contra la Administración Nacional.

En consecuencia, considera que la aludida se encontraría incursa en la causal de exoneración prevista por el art. 38º del Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública Nacional, que fulmina con dicha sanción al personal que cometa "delito contra la Administración" (Inciso c).

Del informe del Departamento de Inmuebles Fiscales - cuya copia obra a fs. 2, resulta que la causante, violentando las cerraduras, penetró en el departamento nº 2, Monoblock de Comercio nº 5, Manzana 8, Sección 4, Circunscripción 1 del Barrio General Belgrano. La citada se habría instalado en el mismo con sus seis hijos menores ha

biéndose negado a aceptar la comodidad que, para obtener la más rápida desocupación del departamento, se le consiguiera en la obra social "Emaus". Ante una posterior gestión personal, habría manifestado que por ningún concepto haría abandono del departamento, profiriendo amenazas de muerte contra quien intentara sacarla de allí; en consecuencia, estima el citado Departamento que sólo restaría proceder, por medio de la Procuración del Tesoro, a la iniciación de la pertinente acción penal.

A fs. 3 la Dirección General del Personal informa que la Sra. de DE LA CUEVA (Legajo nº 12.684), revista en funciones de mucama en el Policlínico de Ezeiza, y remite los actuados a este organismo asesor para los fines consiguientes.

II

Esta Dirección General entiende que, para que proceda la exoneración de la causante por la causal determinada en el art. 38º, inc. c) del decreto-ley 6666/57 (1), debe mediar sentencia judicial firme que establezca la real existencia de un delito contra la Administración. Por lo demás, atento a lo dispuesto por el art. 40º de la misma norma, no es factible aplicar tal sanción sin la instrucción previa del sumario respectivo.

Ahora bien, siendo la Dirección General Inmobiliaria la danmificada por la conducta de la causante, y tratándose de un hecho manifiestamente ajeno al servicio, corresponde que sea aquella Repartición la que instruya el pertinente sumario, sin perjuicio de elevar oportunamente sus conclusiones a este Departamento de Estado a efectos de la aplicación de la pertinente sanción disciplinaria.

Asimismo, corresponde a aquel organismo efectuar la denuncia del hecho ante las autoridades respectivas atento lo dispuesto por el art. 164 del Código de Procedimien

(1) Ver Digesto Administrativo Nº 254.-

tos en lo Criminal, efectuando la pertinente comunicación a este Ministerio a efectos de lo dispuesto en el art. 39º, apartado I) del decreto Nº 1471/58(").

Igualmente la misma Dirección General Inmobiliaria habrá de adoptar las medidas del caso para que el Sr. Procurador Fiscal que corresponda promueva las pertinentes acciones -penales y/o civiles- para obtener el desahucio de la Sra. de DE LA CUEVA de las comodidades que ocupa indebidamente en el Barrio General Belgrano.

Finalmente, una vez sustanciado el sumario de rigor, esa dependencia deberá elevar las actuaciones al Tribunal de Cuentas de la Nación a los efectos de la formulación del cargo que pueda corresponder por el perjuicio fiscal que dicha ocupación indebida hubiera producido.

A los efectos indicados, se aconseja girar estos actuados en devolución a la Dirección General Inmobiliaria dependiente de la Secretaría de Hacienda de la Nación.

DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS, julio 13 de 1959.-

Fdo. JUAN G. DE SOUZA LOBO
Director General

Expediente Nº 90440/59 S.H.-
Expte.Nº 41056/59 M.A.S.S.P.-
Providencia Nº 434.-

Señor Subsecretario:

En el caso planteado considera esta Dirección General lo siguiente:

a) efectuada por intermedio de la Dirección General

(") Ver Digesto Administrativo Nº 422.-

Inmobiliaria la denuncia ante las autoridades policiales, y remitida la pertinente comunicación a la Procuración - del Tesoro de la Nación a efectos de que promueva las acciones penales y/o civiles que correspondan, por estimarse que la inculpada cometió hechos sancionados por el Código Penal en su art. 181 -Usurpación-, corresponde aplicar en la emergencia las disposiciones del art. 39° de la Reglamentación del Estatuto del Personal Civil. Vale decir que el Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública, en base a la constancia fehaciente de la iniciación - del proceso criminal, deberá proceder a suspender preventivamente a la interesada, hasta tanto demuestre su inculpabilidad con el testimonio de la sentencia firme respectiva.

b) tratándose de un hecho manifiestamente ajeno al - servicio no corresponde a la Dirección General Inmobiliaria instruir sumario tendiente a juzgar la actitud de la inculpada como agente del Estado, ya que la misma no pertenece a su jurisdicción ni se halla adscripta a dicho organismo.

El Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública, a cuyo personal pertenece la interesada, deberá por su parte adoptar los recaudos administrativos pertinentes, abriendo el sumario respectivo, a efectos de que, en caso de recaer en la causa judicial una sentencia condenatoria, puedan aplicarse las medidas que resulten oportunas (arts. 37° y 38° del Estatuto) dentro de las formalidades expresamente consignadas en el art. 40° del citado cuerpo legal.

DIRECCION GRAL. DEL SERVICIO CIVIL DE LA NACION, 23-9-59.-

Fdo. JOSE LUIS FRANGI
Director General

//nos Aires, 28 de setiembre de 1959.-

De acuerdo, previa vista a la Dirección General Inmobiliaria, pasen estos actuados al Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública a sus efectos.

Sirva la presente de atenta nota de remisión.-

Fdo. RAFAEL RODOLFO AYALA
Subsecretario de Hacienda

Poder Ejecutivo Nacional
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº 993.-

ESCALAFON PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL (Punto 26º) - SUBSIDIO FAMILIAR

Expte. Nº 1803/59(Salud Pública).
Providencia Nº 430.-

Señor Subsecretario:

La Comisión Nacional de Rehabilitación del Lisiado - plantea en estas actuaciones el caso del pago de subsidio por cónyuge, cuando éste se encuentre recluído en un establecimiento penal, en relación a las normas que fijó - la Resolución S.H. Nº 7.142/59 (1).

De acuerdo con las mismas se considera el cónyuge "a cargo" cuando conviva con el agente y éste atienda su subsistencia.

En consecuencia, en el caso planteado no corresponderá el pago de dicho subsidio, pues no se cumplirán ninguno de los requisitos exigidos: no existe convivencia entre los esposos, aunque no se trate de una separación voluntaria, ni el cónyuge ocupado en la Administración Nacional debe atender a la subsistencia del otro, cuya mantención está a cargo de la autoridad penal.

El caso planteado no está relacionado para nada con el previsto en el punto 11º de la Resolución S.H. número 7.789/59, citada a fs. 1, ya que la misma se refiere al caso de pariente incapacitado recluído en establecimiento público, condiciones que no concuerdan con la de cón-

(1) Ver Digesto Administrativo Nº 781.-

yuge (que no es pariente), recluído en establecimiento penal (que no comporta causal de incapacitación).-

DIRECCION GRAL. DEL SERVICIO CIVIL DE LA NACION, 22-9-959.-

Fdo. JOSE LUIS FRANGI
Director General

Buenos Aires, 28 de septiembre de 1959.-

De acuerdo con lo informado por la Dirección General del Servicio Civil de la Nación, pasen estos actuados al Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública, para su conocimiento, estimándole al propio tiempo se arbitren los medios conducentes a que todo tipo de consultas que deben formular sus organismos, referentes a Estatuto, Escalafón, etc., se formulen por la vía jerárquica correspondiente.

Sirva la presente de atenta nota de remisión.-

Fdo. RAFAEL RODOLFO AYALA
Subsecretario de Hacienda

Poder Ejecutivo Nacional
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº 994.-

ESCALAFON PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL (Punto 52º) - ANTIGÜEDAD

Expte. Nº 90427/59 S.H.
Providencia Nº 429.-

Señor Subsecretario:

El planteo que formula la Universidad Nacional del Litoral acerca del cómputo de servicios a los fines determinados en el punto 52º, inciso c), del Escafón aprobado por decreto Nº 9.530/58, debe ser encarado en una forma práctica, que permita su adaptación a todas las circunstancias que se presenten.

En tal sentido, esta Dirección General considera que en todos los casos debe adoptarse el procedimiento que resulte más favorable al empleado en cuestión, de manera de no perjudicarlo pecuniariamente.

Pueden presentarse, en consecuencia, dos distintas posibilidades referidas a casos de agentes que registran parte de sus servicios prestados en un determinado horario, y otra parte en uno inferior (condiderando para estos efectos los horarios previstos en el punto 52º, inciso c), del Escalafón):

I) cuando cada uno de los períodos, separadamente, arroje una fracción en meses superior a 6, se computará cada una de esas fracciones como 1 año, aun cuando en el caso de ser sumadas, arrojen una fracción inferior a 6 meses.

Ejemplo: en el caso planteado a fs. 1 como "agente A", se registra: 1 año y 7 meses en horario de 35 hs.
0 año y 10 meses en horario de 25 hs.
total: 2 años y 5 meses de servicio.

Deberá computarse 2 años a razón de $ 50.- a cada uno, y 1 año a $ 40.-

II) cuando la suma total de los servicios arroje una cifra cuya fracción en meses sea superior a 6, deberá computarse un año más, aun cuando ninguna de las cifras parciales llegue a esa cantidad. En tal caso se tomará como 1 año el excedente en meses que sea mayor.

Ejemplo: en el caso planteado a fs.1 como "agente B", se registra: 14 años y 3 meses en horario de 35 hs.
2 años y 4 meses en horario de 25 hs.
total: 16 años y 7 meses de servicio.

Deberá computarse 14 años a razón de $ 50.- cada uno, y 3 años a $ 40.-

El procedimiento sugerido responde a una necesidad eminentemente práctica, desprovista de toda especulación matemática, pero que permitirá dar adecuada solución a todos los supuestos posibles. Su incidencia en el monto a liquidar a cada agente ha de resultar mínima, y en la mayoría de los casos resultará absorbida al practicarse el redondeo de cifras que corresponde por ubicación en la categoría pertinente.

DIRECCION GRAL. DEL SERVICIO CIVIL DE LA NACION, 22-9-959.-

Fdo. JOSE LUIS FRANGI
Director General

 D.A. Nº 994.-

Buenos Aires, 15 de octubre de 1959.-

De acuerdo con lo informado por la Dirección General del Servicio Civil de la Nación, vuelvan estos actuados a la Universidad Nacional del Litoral.

Sirva la presente de atenta nota de remisión.-

Fdo. RAFAEL RODOLFO AYALA
Subsecretario de Hacienda

Poder Ejecutivo Nacional
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº 995.-

ESCALAFON PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL (Punto 26º) - SUBSIDIO FAMILIAR

Expediente Nº 90.416/59.-
Providencia Nº 419.-

//ñor Subsecretario:

Respecto de las consultas que formula la Dirección General de Contabilidad de la Secretaría de Estado de Obras Públicas, esta Dirección General considera lo siguiente:

a) El artículo 2º, inciso b), del decreto Nº 4631/59 (1), hace extensivos los beneficios del subsidio familiar instituído en el punto 26º del Escalafón para el Personal Civil de la Administración Pública Nacional, entre otros, al personal comprendido en la Ley del Servicio Exterior de la Nación.

En tales condiciones, no existen dudas de interpretación acerca de la procedencia de su liquidación al personal que presta servicio en el extranjero.

b) Procede la liquidación de subsidio familiar -exceptuando al caso del correspondiente a cónyuge- aun cuando los causantes del beneficio residan en el extranjero, siempre que se llenen los recaudos que para cada caso estipula el decreto Nº 4631/59 y demás Resoluciones complementarias, ya que no existen normas que determinen una exclusión de este tipo.

c) El requisito de "convivencia" que exige la Resolución S.H. Nº 7142/59 (2), para la liquidación del subsidio por cónyuge se refiere indudablemente al hecho de compartir

(1) Ver Digesto Administrativo Nº 738.-
(2) Ver Digesto Administrativo Nº 781.-

el mismo domicilio.

La circunstancia de registrar los cónyuges distintos domicilios configura, en principio, la situación de una separación de hecho, que es incompatible con la percepción del subsidio familiar a que se hace mención.

d) La aparente contradicción resultante de la redacción del punto 6° de la Resolución S.H. N° 7787/59(''), ha sido suficientemente salvada al dictarse la Resolución S.H. N° 7974 (°), del 12/8/59, publicada en el Boletín Oficial del 8/9/59, la que define adecuadamente la improcedencia absoluta de liquidación de suma alguna en concepto de diferencia por subsidio familiar.

Todas las aclaraciones que anteceden están referidas al personal comprendido dentro del régimen del decreto N° 4631/59,no así para los que no encuadran dentro de los incisos a) y b) del artículo 2° del mismo, para los cuales siguen en vigencia las normas del decreto-ley N° 14.984/57 (+).-

DIRECCION GRAL. DEL SERVICIO CIVIL DE LA NACION, 17-9-59.-

Fdo. JOSE LUIS FRANGI
Director General

Expediente N° 90.416/1959. -

//nos Aires, 21 de setiembre de 1959.-

De acuerdo con lo informado precedentemente por la Dirección General del Servicio Civil de la Nación, vuelvan estas actuaciones a la Secretaría de Estado de Obras Públicas.

Sirva la presente de atenta nota de remisión.-

Fdo. RAFAEL RODOLFO AYALA
Subsecretario de Hacienda

(''') Ver Digesto Administrativo N° 816.-
(°) Ver Digesto Administrativo N° 865.-
(+) Ver Digesto Administrativo N° 369.-

Poder Ejecutivo Nacional
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº 996.-

ESTATUTO PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL (Art. 41º) - JUNTA DE DISCIPLINA

Expte.Nº 77.090/58 - Instituto Nacional de Acción Social-Ministerio de Obras Públicas-Luis Walter Vaccaro-Unidad Turística de Chapadmalal-Sumario Administrativo instruído por el I.N.A.S.-Régimen disciplinario de los adscriptos-Medidas que incumben a las reparticiones-Consecuencias de la desadscripción-Estatuto del Personal Civil de la Administración-Vista al imputado-Intervención de la Junta de Disciplina.-

//ñor Subsecretario de Hacienda:

Para los fines del dictamen requerido con respecto a la jurisdicción en que correspondería resolver en definitiva el sumario de que se trata, conviene reseñar los siguientes antecedentes;

a) Con fecha 16 de diciembre de 1955 se inició un sumario administrativo en la Unidad Turística de Chapadmalal, dependiente entonces del ex-Instituto Nacional de Acción Social, a raíz de presuntas irregularidades cometidas en la misma.

b) Con fecha 8 de febrero de 1956 y 3 de octubre del mis

mo año, declara en esas actuaciones el ex-administrador general de la citada Unidad, Luis Walter Vaccaro, agente del Ministerio de Obras Públicas, adscripto al Instituto Nacional de Acción Social.

c) Dicho agente fué desadscripto del Instituto Nacional de Acción Social con fecha 30 de enero de 1956, hallándose aun en sustanciación el referido sumario, y suspendido luego, preventivamente, por el Ministerio de Obras Públicas el 16 de febrero de 1956 (Resolución Nº 528/56) hasta tanto se esclareciera su situación con referencia a los hechos investigados.

d) El 16 de octubre de 1956, la Institución da por terminado el sumario y formula sus conclusiones, mientras que, por decreto 17.800 del 22 de octubre de 1956, se produce la transferencia de la Unidad Turística de Chapadmalal a la Dirección General Inmobiliaria y luego, por decreto 11.645, de 1º de octubre de 1957, al ex-Ministerio de Transportes (Dirección Nacional de Turismo).

e) Remitidas las actuaciones al Ministerio de Obras Públicas, éste resolvió, el 12 de junio de 1958 (Resol. 17/58), levantar la suspensión del agente Vaccaro, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones que correspondan de acuerdo con el resultado a que se arribe en el respectivo sumario.

En las presentes actuaciones se plantea una vez más una situación relativa al ejercicio del poder disciplinario con respecto a los empleados que se desempeñan como adscriptos o en comisión, materia sobre la cual esta Dirección se remite a lo expuesto en el expte. 204.459/57, según dictamen de fecha 12 del corriente mes, cuya copia (en la parte pertinente) se agrega para mejor ilustración (*).

(*) Ver págs. 5, 6, 7, 8, 9 y 10 de este Boletín.-

Atento a lo que resulta de los antecedentes del asunto y de los principios enunciados en dicho dictamen, esta Dirección considera:

1º) Que corresponde cumplir en el caso con lo dispuesto en el art. 41 del Estatuto del Personal Civil de la Administración, a efectos de conferir vista al Sr. Vaccaro de las actuaciones en cuestión.
Se trata de una formalidad procesal que no deja de ser tal por el hecho de que resulte indispensable para la debida sustanciación del sumario, a fin de que el inculpado efectúe sus descargos y proponga las medidas que crea oportunas para su defensa, motivo por el cual es, en verdad, indiferente, que dicha formalidad se cumpla por intermedio de una u otra repartición. Con todo, como el sumario de que aquí se trata ha sido instruído mientras la Unidad Turística de Chapadmalal dependía del ex-Ministerio de Hacienda y como la vista debe ser conferida por el instructor (artículo 41- XIII de la reglamentación del Estatuto), esta Dirección estima como más razonable la intervención de la Secretaría de Hacienda para cumplir con el requisito de la vista.

2º) Que según el criterio en que se han fundado los fallos de la Cámara Federal de la Capital (Sala Contencioso-administrativo) de 2 de setiembre y 11 de setiembre de 1958, publicados en La Ley de 17 de setiembre y 24 de octubre de 1958, respectivamente, la intervención de la Junta de Disciplina dispuesta por el art. 44 del Estatuto tiene el carácter de una garantía en favor del imputado. De las diversas Juntas de Disciplina que podrían dictaminar en el presente caso (la de la Secretaría de Obras Públicas, a la que pertenece el inculpado Vaccaro; la de la Secretaría de Transportes, de la que depende en la actua-

lidad la Unidad Turística en la que ocurrieron los hechos, y la de la Secretaría de Hacienda, en la que se ha instituído el respectivo sumario), parece claro - que la mayor garantía que podría darse al inculpado - consistiría en la intervención de la Junta de la jurisdicción a la que él pertenece por razón de su nombramiento, esto es, la Junta de Disciplina de la Secretaría de Obras Públicas.

3º) Que la Secretaría de Obras Públicas conserva plena libertad de apreciación con respecto a la conducta de - Vaccaro, según lo que reflejan las constancias y conclusiones del sumario instruído por el ex-I.N.A.S., - pues sólo a dicha Secretaría le corresponde ahora -después de la desadscripción de Vaccaro- el ejercicio - de la potestad disciplinaria para imponerle sanciones a dicho agente.

4º) Que ello es así porque, disuelto con la desadscripción todo "vinculum iuris" (relación de empleo o de servicio) entre Vaccaro y la Secretaría de Hacienda, ésta carece de la facultad necesaria para imponerle sanción alguna a dicho agente (cfr. Villegas Basavilbaso, "Derecho Administrativo", ed.1951, t.III, ps. 530 y 541). Si la Secretaría de Hacienda, al dictar resolución en el sumario -luego de cumplidas las formalidades indicadas- (vista al imputado y dictamen de la Junta de - Disciplina), entendiera que Vaccaro merece sanción - disciplinaria,no podría hacer ya más que emitir una "opinión" al respecto, a los efectos de su oportuna consideración por la Secretaría de Obras Públicas,la cual, como es natural, podrá resolver -con entera independencia- según su propio criterio, sobre todo si se - - tratara de sanciones que comprometieran la situación jurídica de su propio agente, (poster-

gación en el ascenso, retrogradación, cesantía o - exoneración).-

DIRECCION GRAL. DE ASUNTOS JURIDICOS, 17-11-1958.-

Fdo. CRISTIAN GIMENEZ DEMARIA
Director General

3.- Régimen disciplinario de los empleados adscriptos o en comisión.-

Antes de enunciar las conclusiones que resultan, a - juicio de esta Dirección, de los antecedentes consignados en el capítulo anterior, conviene exponer algunos principios aclaratorios sobre el ejercicio del poder disciplinario a que se hallan sometidos los empleados que se desempeñan como adscriptos o en comisión.

Como es sabido, no existe en nuestro derecho administrativo un conjunto de normas reguladoras, sino disposiciones aisladas, sobre las condiciones jurídicas de dichos agentes. En nuestros autores no se encuentran tampoco sino referencias ocasionales respecto de esas situaciones, que suelen revestir caracteres de evidente complejidad.

Tales situaciones se explican en doctrina mediante - la existencia de una única relación de empleo entre el agente y el Estado y de una doble relación de servicios - con cada una de las reparticiones interesadas (la repartición de origen y la repartición en que el agente se desempeña en comisión o en calidad de adscripto).

El poder jerárquico y el poder disciplinario que de ordinario lo complementa, se encuentra, por lo común, atribuído a la superioridad jerárquica de que depende el funcionario o empleado (Gilbert, La disciplina des fonctiones publiques, 1912, pág. 66/7; Caetano, M., Manual de direito administrativo, Lisboa, 1915, 3a. edición, pág. 500; Vitta, C., "Il potere disciplinaire sugli impiegati publici", 1913, Nº 75/7, págs. 407 y siguientes; Ruiz y Gómez, J.L., Principios generales de derecho administrativo, La Habana, 1935, pág. 420, Nº 18). Pero, en los supuestos de doble dependencia, la competencia en punto al ejercicio del poder jerárquico y también del poder disciplinario, puede ser acumulativa y hallarse distribuída. Un ejemplo de ello nos lo proporciona el art. 9º de la Ley número 12.951 (sobre designación de agregados militares, económicos, obreros, culturales, docentes o de otro carácter técnico en las representaciones diplomáticas del país), que si bien establece que el personal agregado debe cumplir las órdenes del jefe de la misión, admite a la vez que puede recibir instrucciones del Ministerio del ramo a que el agregado pertenece (cfr. dictamen de la Procuración del Tesoro de 15 de julio de 1953).

Según la doctrina más moderna, esa acumulación o distribución del poder jerárquico puede dar lugar a su ejercicio de acuerdo con las siguientes consideraciones (Gérard Lupi, "Les positione du fonctionnaire", París, Librairie Dalloz, 1956, págs. 164/166);

"Del mismo modo que el poder jerárquico, el poder disciplinario no pertenecerá exclusivamente ni a la administración de origen ni a la beneficiaria de la adscripción. Estos dos poderes van a ser compartidos para la mejor satisfacción de los intereses de cada una de ellas. Así, en lo que concierne al poder jerárquico, se opera una disociación, dejando a la administración a la que pertenece el funcionario todas las medidas susceptibles de modificar

su situación administrativa, aquellas, sobre todo las más importantes, que lo afectan en su grado o función. En cambio es razonable acordar a la administración en que el agente se desempeña, una parte de este poder jerárquico, que se justifica como necesaria a consecuencia de la ocupación del empleo por el agente adscripto.

"El régimen disciplinario a que dicho agente será sometido es igualmente doble, dado que el art. 105 del estatuto general ha precisado que, después de adscripto, las normas que rigen en la función que él ejerce por efecto de su adscripción, le serán aplicables. Si es necesario confiar al servicio que ocupa al funcionario cierto poder disciplinario, no se le podría dar todo este poder disciplinario, puesto que la administración de origen deberá conservar los medios de presión suficientemente eficaces a su respecto, manteniendo así en interés de su servicio la posibilidad de imponer sanciones a un agente ausente. Pero si se admite la necesidad de una coparticipación en el poder disciplinario, corresponde precisar cuáles sanciones pueden ser aplicadas por la administración de origen y por la beneficiaria de la adscripción.

"a) Esta dispondrá de un sistema disciplinario más restringido, menos rico. Esto se concibe así si se tiene presente que el funcionario adscripto no se halla sino investido de un empleo y que las sanciones que se le pueden aplicar están vinculadas a su ejercicio. No se le podría, ciertamente, perjudicar en sus derechos esenciales, que derivan de la posesión del grado (revocación, retrogradación). A la inversa, resulta de la jurisprudencia que la administración de origen no podría utilizar, en contra del agente adscripto, sanciones que no pueden ser impuestas sino por el servicio donde aquél cumple sus tareas. Es así como la suspensión, a pesar de que no sea exactamente una pena disciplinaria, no puede ser dispuesta sino por este último. "No se trata, dice un decreto, sino de una -

medida de orden adoptada en el interés del servicio, sin poseer un carácter disciplinario, por aplicación del art. 65 de la Ley de 22 de abril de 1905, por la cual la autoridad local podía dictar las medidas de suspensión".

"Más aún, ella atribuye una facultad exclusiva a la administración en que el agente se desempeña, y anula la medida de suspensión de la administración de origen, por emanar de una autoridad incompetente. No es sino una hipótesis el caso en que las dos administraciones podrán aplicar conjuntamente la misma sanción disciplinaria. Una y otra decidirán poner fin a la adscripción antes de la expiración del término previsto; habrá una resolución por la cual se reintegre de oficio o se ponga al agente a la disposición de la administración de origen.

"b) Pero cuando se trate de imponer una pena más grave, como la eliminación del cuadro de ascensos, la retrogradación, la revocación, le corresponderá hacerlo a la administración de origen, y a ella sóla.

"En primer lugar, porque si el agente público conserva su grado en su administración de origen, las medidas que pudieran perjudicarlo más o menos directamente, son de su competencia.

"Además, ocurrirá frecuentemente que el servicio en que el funcionario conserva su grado resulte técnicamente mejor protegido por la facultad de imponer una sanción disciplinaria. Y ello resulta evidente si se piensa que un funcionario ha podido ser adscripto o destacado en una empresa privada, en un organismo internacional o en un territorio de ultramar, es decir, en un empleo cuyas disposiciones estatutarias pueden dar mayores o menores garantías al interesado. Esta es la razón por la cual sólo la administración de origen impondrá las penas disciplinarias. Esto explica que la suspensión, que no es en realidad una de ellas, ni está por otra parte provista sino de menores garantías, sea de competencia de la administración benefi

ciaria de la adscripción. Y esto explica que cuando el agente queda a disposición de la administración de origen, no se persiga sino someter a ésta al funcionario que se ha hecho culpable de faltas graves en servicio de adscripción.

"En fin, la competencia de la administración de origen se justifica en la medida en que la ley de 19 de octubre de 1946 impondría obligaciones cuya violación requeriría una sanción y que no podría pronunciarse sobre la base de otro texto menos severo, como podría ser el estatuto particular del empleo de adscripción, si se admitiese que el agente adscripto quedara integral y exclusivamente sometido al mismo.

"La administración de origen ejercerá entonces su poder disciplinario y podrá hacerlo sin estar obligada a tener en cuenta la opinión de los organismos que funcionan en el servicio a que el agente ha sido adscripto. Excepción hecha de la suspensión, que no se considera como una pena, dicho poder comprende a todas las demás sanciones disciplinarias que la autoridad que ha acordado la adscripción podrá adoptar absolutamente sola".

Cabe concluir, de lo expuesto precedentemente, que en nuestro actual régimen administrativo (en el cual no existen disposiciones sobre el particular, a diferencia de lo que ocurre en Francia, donde "le détachaement" es un instituto sometido a precisas normas legales), tanto la suspensión preventiva o previsional, medida de orden jerárquico de carácter precautorio, como la suspensión definitiva, sanción disciplinaria privativa de haberes (Estatuto del Personal Civil de la Administración, aprobado por decreto-ley 6.666/57 (°), arts. 34 y 39), serían de la incumbencia de la repartición en que el empleado se desempeña en comisión o en calidad de adscripto -por no constituir sino una prohibición temporal del ejercicio de sus funciones en este carácter-, mientras que las medidas de

(°) Ver Digesto Administrativo Nº 254.-

mayor gravedad, como la postergación en el ascenso, la retrogradación de la categoría en el empleo, la cesantía y la exoneración (Estatuto citado, art. 34), serían de la incumbencia de la repartición de origen, esto es, de aquella a la que pertenece el agente por razón de su nombramiento, por constituir alteraciones fundamentales en la situación jurídica permanente que vincula al empleado con la Administración.

Expte. Nº 77.090/58 S.H.
Expte. Nº 44.550/58 M.O.P.
Providencia Nº 418.-

//ñor Subsecretario:

En las presentes actuaciones, referentes al sumario administrativo instruído a raíz de diversas irregularidades cometidas en la Unidad Turística de Chapadmalal, siendo organismo de la ex-Fundación, se cuestiona la intervención de la Junta de Disciplina, en relación a la jurisdicción en que han sucedido los hechos, y la dependencia presupuestaria del agente presuntamente inculpado.

En tal sentido, esta Dirección General comparte el criterio sustentado por su similar de Asuntos Jurídicos en su dictamen de fecha 17 de noviembre de 1958, el que, por otra parte, es concordante con el que dió fundamento a la Resolución S.H. Nº 8.003/58 (*). En efecto, se trata en el presente caso de hechos acaecidos en una entidad no perteneciente a la Administración Pública Nacional,

(*) Ver Digesto Administrativo Nº 818.-

y por consiguiente el juzgamiento del agente inculpado - corresponde al organismo al que pertenecía presupuestariamente en el momento de cometidas aquéllas.

Este criterio no vulnera el resultante de la Resolución S.H. Nº 8.039/58 (+), en la que se determina que - "la Junta de Disciplina que debe dictaminar necesariamente en todo sumario administrativo incoado por razones disciplinarias, es la que corresponde a la jurisdicción donde se han producido los hechos que dan origen a aquél, - cualquiera sea la dependencia presupuestaria del o de - los inculpados". Efectivamente, en el caso en cuestión - no podría intervenir la Junta de Disciplina del organismo al que pertenece actualmente la Unidad Turística de Chapadmalal (Dirección Nacional de Turismo), pues los hechos fueron cometidos antes de que la misma pasara a poder del Estado, y en consecuencia se trata de juzgar hechos ocurridos fuera del ámbito de la Administración Pública Nacional.

En virtud de lo expuesto, a fin de cumplimentar las prescripciones del artículo 41º, apartado XIII, del Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública Nacional y su Reglamentación procede la remisión de estos actuados a la Secretaría de Obras Públicas a fin de que dictamine la respectiva Junta de Disciplina.

DIRECCION GRAL. DEL SERVICIO CIVIL DE LA NACION, 17-9-59.-

Fdo. JOSE LUIS FRANGI
Director General

(+) Ver Digesto Administrativo Nº 822.-

 D.A. Nº 996.-

Expediente Nº 77.090/58 S.H.
Expediente Nº 44.550/58 M.O.P.

//nos Aires, 21 de setiembre de 1959.-

De acuerdo con lo manifestado por las Direcciones Generales de Asuntos Jurídicos y Servicio Civil de la Nación, pase a la Secretaría de Estado de Obras Públicas, a los fines pertinentes.

Sirva la presente de atenta nota de remisión.-

Fdo. RAFAEL RODOLFO AYALA
Subsecretario de Hacienda

Poder Ejecutivo Nacional
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº 997.-

ESCALAFON PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL (Punto 26º) - SUBSIDIO FAMILIAR

Expediente Nº 62.364/59 S.H.
Providencia Nº 417.-

//ñor Subsecretario:

El personal civil de las fuerzas armadas tiene derecho a percibir el subsidio familiar instituído en el punto 26º del Escalafón (decreto Nº 9.530/58) de acuerdo - con lo establecido en el art. 2º, inciso b), del decreto Nº 4.631/59 (*). En efecto, dicho personal está incluído en el Presupuesto General de la Administración Nacional y excluído del Estatuto del Personal Civil (decreto-ley Nº 6.666/57)(**), en virtud del decreto Nº 1.193/58(º), - dictado en base al art. 2º, inciso 1), del referido Estatuto.

El mencionado acto (decreto Nº 4.631/59) dió efecto a sus beneficios al 1º de noviembre de 1958, pero por una razón de derecho no podría dársele ese mismo efecto - retroactivo en lo que configurara una reducción o supresión de beneficios de los que se estuviese haciendo uso efectivo. En este caso, la vigencia de sus disposiciones resulta procedente a partir del día siguiente a la fecha de publicación del aludido decreto en el Boletín Oficial, es decir, del 25 de abril último.

(*) Ver Digesto Administrativo Nº 738.-
(**) Ver Digesto Administrativo Nº 254.-
(º) Ver Digesto Administrativo Nº 495.-

Por lo expuesto, esta Dirección General considera que en el caso planteado no corresponde el reintegro de lo percibido entre el 1° de noviembre de 1958 y la fecha indicada en el párrafo anterior.

DIRECCION GRAL. DEL SERVICIO CIVIL DE LA NACION, 17-9-59.-

Fdo. JOSE LUIS FRANGI
Director General

//nos Aires, 21 de setiembre de 1959.-

Con lo informado precedentemente por la Dirección General del Servicio Civil de la Nación, vuelvan estos actuados a la Secretaría de Estado de Guerra.

Sirva la presente de atenta nota de remisión.-

Fdo. RAFAEL RODOLFO AYALA
Subsecretario de Hacienda

Poder Ejecutivo Nacional
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº 998.-

ESCALAFON PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL - ANTIGÜEDAD - GABINETE DEL MINISTRO

Expediente Nº 90.418/59 S.H.
Expediente Nº 35.220/59 M.O.P.
Providencia Nº 415.-

//ñor Subsecretario:

El decreto Nº 1.472/58 (1), que reglamenta la creación del "Gabinete del Ministro" establece que:

a) el personal gozará de las mismas remuneraciones, sobreasignaciones, bonificaciones y demás emolumentos que determinen las correspondientes leyes de presupuesto y disposiciones en vigor para el personal permanente de igual categoría.
b) el personal no tendrá derecho a la carrera administrativa.

El monto en concepto de antigüedad, resultante del punto 52º, inciso c), del Escalafón aprobado por decreto Nº 9.530/58, no constituye una sobreasignación ni bonificación, sino que es uno de los pasos a seguir para escalafonar al personal dentro de las Clases, Grupos y Categorías previstas en aquel cuerpo normativo.

En tales condiciones, no teniendo derecho el personal del "Gabinete del Ministro" a su inclusión en dicho Escalafón, dado que éste conforma la carrera administra-

(1) Ver Digesto Administrativo Nº 425.-

tiva del agente de la Administración Pública -expresamente vedada a aquél-, no corresponde liquidar al mismo el monto de que se trata.-

DIRECCION GRAL. DEL SERVICIO CIVIL DE LA NACION, 16-9-59.-

Fdo. JOSE LUIS FRANGI
Director General

Expediente N° 90.418/59 S.H.
Expediente N° 35.220/59 M.O.P.

//nos Aires, 21 de setiembre de 1959.-

De acuerdo con lo informado precedentemente por la Dirección General del Servicio Civil de la Nación, pasen estos actuados a la Secretaría de Estado de Obras Públicas.

Sirva la presente de atenta nota de remisión.-

Fdo. RAFAEL RODOLFO AYALA
Subsecretario de Hacienda

Poder Ejecutivo Nacional
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº 999.-

LOTERIA DE BENEFICENCIA NACIONAL Y CASINOS (Casinos) - COMPENSACION POR DESARRAIGO

Buenos Aires, 22 de octubre de 1959.-

Visto el expediente Nº 395.811/59 por el cual la Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos gestiona la modificación del artículo 1º del Decreto Nº 10.183 (1) de fecha 24/8/59, que determina que el personal jornalizado destinado a prestar servicios en los Casinos dependientes de la misma, gozará de una asignación por desarraigo, y

CONSIDERANDO:

Que por Decreto número 10.184/59 se determina que la explotación del Casino en el Hotel de Termas de Rosario de la Frontera en la Provincia de Salta estará a cargo de la referida Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos;

Que en tal circunstancia y teniendo en cuenta que el porcentaje que corresponde asignar en la emergencia es el del 50 % en concordancia con lo determinado para los Casinos de Bariloche, Termas de Río Hondo y Termas de Reyes;

Que asimismo se hace notar que en virtud de haberse determinado la rotación del personal del Casino de Mendoza para las próximas temporadas, es oportuno incluir en la modificación que se propicia para el citado artículo

(1) Ver Digesto Administrativo Nº 869.-

al personal que se destine a prestar servicios a ese Casino, dentro de los beneficios de la asignación por desarraigo, con un porcentaje del cincuenta por ciento (50%);

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

Artículo 1°.- Modifícase el texto del artículo 1° del Decreto N° 10.183/59 en la siguiente forma:

"Artículo 1°.- A partir del 1° de febrero de 1959, el personal jornalizado de la Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos que sea destinado a prestar servicios en los Casinos dependientes de la misma, gozará de una asignación por desarraigo, compensatorio de los gastos que le origine su estada en la localidad donde funcione la respectiva Sala de Entretenimientos, de acuerdo a los porcentajes que se indican a continuación:

"Casino Central de Mar del Plata.

Anexo I y II,

"Casino de Miramar y Casino de Necochea: cuarenta por ciento (40 %).

"Casinos de Bariloche, Termas de Río Hondo, Termas de Reyes, Termas de Rosario de la Frontera y Mendoza: cincuenta por ciento (50 %)".

Artículo 2°.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda.

Artículo 3°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y pase a la Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos a sus efectos.

FRONDIZI - Alvaro Alsogaray -
Guillermo W. Klein.

DECRETO N° 13.340.-

Poder Ejecutivo Nacional
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº 1000.-

ESTATUTO PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL (Art. 38 "in fine") - LICENCIAS - SANCIONES

Expte. Nº 300.361/59 (')
Providencia Nº 356.-

Buenos Aires, 13 de agosto de 1959.-

Vuelvan estas actuaciones a la Dirección General de Contabilidad y Administración llevando a su conocimiento, respecto de la consulta que antecede, lo siguiente:

I) Las inasistencias en que incurre el personal y que no son justificadas -cualquiera sea su causa: asuntos particulares, exámenes, enfermedad, etc.- deben ser sancionadas en base a la escala del artículo 36º de la Reglamentación del Estatuto del Personal Civil. Las escalas de los puntos 23º, 67º y 91º de la resolución M.H.Nº 8.264/56 (") deben ser sustituídas por las de aquella norma.

II) El agente que falta al cumplimiento de las obligaciones establecidas en las Reglamentaciones vigentes, comete infracciones que caen dentro de la calificación de "violación de los deberes del personal".

Dichas transgresiones, de acuerdo con el artículo 38º, última parte, del Estatuto del Personal Civil, son pasibles de sanciones que pueden ir desde el apercibimiento

(') Ver Digesto Administrativo Nº 908.-
(") Ver Digesto Administrativo Nº 16.-

hasta la exoneración, en base a la escala del artículo 34° y a las normas del artículo 42° del mismo cuerpo legal independientemente de las que les corresponda al agente por sus inasistencias sin justificar.

Fdo. JOSE LUIS FRANGI
Director General
Servicio Civil de la Nación

Expte. 300.361/59 - Estatuto del Personal Civil de la Administración-Dirección Gral.de Obra Social-Carlos Parache Chaves-Licencia para rendir examen-Falta de justificación-Sanciones establecidas por el Estatuto y por reglamentaciones internas(Res.N°8264/56)-Régimen de aplicación.-

//ñor Secretario de Hacienda:

Esta Dirección concuerda con lo expuesto a fs. 14 por la Dirección General del Servicio Civil de la Nación.

En efecto, si la inasistencia del agente carece de justificación -sea cual fuere el motivo invocado por éste; asuntos particulares de diversa índole; acontecimientos fortuitos; dificultades e imposibilidad de hecho; enfermedad; necesidad de rendir examen, etc.-, no pueden aplicarse sino las sanciones previstas por el Estatuto y su reglamentación para el personal que incurra en inasistencias "sin causa justificada" (arts. 36 y 37, inc. a). En el caso particular de estas actuaciones, el incumplimiento de

la obligación de presentar la constancia de que se ha rendido examen (Res. 8264/56, art. 91), deja "sin justificar" las inasistencias en que ha incurrido el agente y lo hace pasible de las sanciones establecidas por el decreto reglamentario del Estatuto, art. 36 - II).

Por otra parte, cuando las reglamentaciones administrativas imponen determinadas obligaciones concretas y establecen para el caso de infracción sanciones no incompatibles con las determinadas por el Estatuto, cabe aplicar las normas de dichas reglamentaciones (con sujeción a las disposiciones del régimen disciplinario implantado por el mismo) en virtud del precepto enunciado por éste en el art. 38, última parte. Así, por ejemplo:

- incumplimiento de la obligación del agente que ha dado aviso de enfermo, de permanecer en su domicilio a los fines de su examen médico (Res. 8264/56, art. 59): puede sancionarse según lo dispuesto por dicha resolución, art. 67, pero las suspensiones no podrán ser con prestación de servicios (D.R.del Estatuto, art. 35 - I);
- pedido injustificado de la concurrencia de médico al domicilio del agente (Res. 8264/56, art. 67): lo mismo que en el caso anterior;
- falsedad de la certificación extendida por un facultativo de esta Secretaría con respecto a la enfermedad de un empleado, infracción que se reprime por el art. 68 de la Res. 8264/56 con "suspensión por dos meses sin goce de sueldo con prestación de servicios o cesantía en caso de reincidencia"; la suspensión no puede ser ni por más de un mes (Estatuto,art. 34, inc. b) ni con prestación de servicios;
- simulación realizada con el fin de obtener licencia o justificar inasistencias (Res. 8264/56,art.98): lo mismo que en el caso anterior.

DIRECCION GRAL.DE ASUNTOS JURIDICOS,2 de octubre de 1959.-

Fdo. CRISTIAN GIMENEZ DEMARIA
Director General

sumarios administrativos debe ajustarse estrictamente a todas y cada una de las normas contenidas en el art. 41º del Estatuto del Personal Civil y su Reglamentación, ya que en caso contrario quedaría invalidado todo lo actuado",dicha norma, por lo expuesto precedentemente,no podría aplicarse en forma automática al caso en cuestión, ya que ello significaría rehacer todo un sumario efectuado hace más de dos años, con los inconvenientes de todo orden que no sería del caso puntualizar. Las deficiencias que el mismo revela, en cuanto a insuficiencia de ciertas averiguaciones, pueden quedar subsanadas en una ampliación que solicite la Junta de Disciplina correspondiente; las formales,relativas a la falta de designación expresa de Instructor Sumariante y Secretario Actuante, no justificarían un sumario completamente nuevo, ya que debe considerarse muy especialmente que a la fecha de su realización, no se había dictado aún el Estatuto del Personal Civil, y esta Dirección General no tiene conocimiento de que existiese un reglamento expreso en la materia, dentro del entonces Ministerio de Hacienda.

Por todo lo expuesto se estima procedente dar traslado de estos actuados, en su estado actual, a la Junta de Disciplina de la Dirección General de Suministros del Estado.-

DIRECCION GRAL.DEL SERVICIO CIVIL DE LA NACION, 30-7-59.-

Fdo. JOSE LUIS FRANGI
Director General

Poder Ejecutivo Nacional
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº 967.-

ESCALAFON PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL - (Punto 26) - SUBSIDIO FAMILIAR

Buenos Aires, 4 de junio de 1959.-

Señor Subsecretario:

Tengo el agrado de dirigirme al señor Subsecretario con motivo de una consulta referente a liquidaciones particulares del salario familiar instituído por Decreto Nº 9.530/58.

Entiende esta Secretaría que, concorde con lo establecido por los Decretos Nros. 24.815/45 y 14.984/57 y sus sucesivas actualizaciones, el salario familiar comprende exclusivamente al personal que presta servicios en el territorio de la República.

No obstante lo expuesto, esta Secretaría tiene personal que, prestando servicios en unidades que navegan en aguas no territoriales, que no perciben haberes en divisas, y que dada su tarea tiene la familia radicada en el país, a los cuales entiende correspondería por todo ello la liquidación de referencia, mientras se cumplimentaran los requisitos de dicho decreto Nº 9.530/58, y se mantuvieran las condiciones de revista y pago indicados.

Abona en favor de esa opinión, el hecho de que la revista en cuestión se efectúa en el país, de que dicho personal -insisto- percibe sus haberes en pesos moneda nacional sin que medie liquidación en divisas, y que menos aún se les abona el suplemento que en concepto de "Bene-

ficio de Familia" establece el decreto Nº 17.156/53.

Por lo expuesto, solicito del señor Subsecretario - quiera tener a bien disponer se dictamine sobre lo apunta do precedentemente.

Hago propicia la oportunidad para reiterar a V.S. las expresiones de mi consideración más dintinguida.

Fdo. ELADIO M. VAZQUEZ
Capitán de Navío
Subsecretario de Marina

A S.S. el señor Subsecretario de Hacienda
D. RAFAEL R. AYALA
S / D.

Expte. Nº 90.283/59 (Hacienda)
Providencia Nº 306.-

Señor Subsecretario:

El régimen de subsidio familiar instituído por el pun to 26º del Escalafón para el Personal Civil de la Adminis tración Pública Nacional y reglamentado por decreto mímero 4.631/59 (1), no contiene disposición alguna que esta blezca la obligatoriedad de residir en el país para perci bir ese beneficio.

(1) Ver Digesto Administrativo Nº 738.-

Ello no obstante, y de considerarse subsistente ese requisito, fijado en el decreto Nº 24.815/45 y decreto-ley 14.984/57 (*), estima esta Dirección General que el personal de la Secretaría de Estado de Marina involucrado en los alcances de la referida norma, que se halle prestando servicios en unidades navales fuera de aguas territoriales argentinas, está asimilado al personal que reside en el país, por cuanto al estar el buque bajo pabellón nacional debe considerárselo como parte integrante de su territorio. Este temperamento es aplicable únicamente en el caso concreto que expone la citada Secretaría, vale decir, cuando ese personal tiene su familia radicada en el país, y sus haberes se liquidan en moneda nacional, y en ningún caso correspondería aplicar coeficiente alguno sobre su monto.-

DIRECCION GRAL. DEL SERVICIO CIVIL, 2 de julio de 1959.-

Fdo. JOSE LUIS FRANGI
Director General

Expediente Nº 90.283/59.-

Buenos Aires, 12 de agosto de 1959.-

Señor Subsecretario:

Tengo el agrado de dirigirme al señor Subsecretario en respuesta a la consulta que formulara esa Secretaría -

(*) Ver Digesto Administrativo Nº 369.-

de Estado mediante nota Nº 479/59, relativa a la liquidación del subsidio familiar instituído por el punto 26º del Escalafón aprobado por decreto Nº 9.530/58 y decreto Nº - 4.631/59, al personal que presta servicio en unidades que navegan en aguas no territoriales.

En tal sentido llevo a su conocimiento que el Escalafón para el Personal Civil innova con respecto a la aplicación del "Subsidio familiar" y en consecuencia sustituye a las disposiciones vigentes con anterioridad.

El decreto Nº 4.631/59 dictado en uso de la facultad de los artículos 1º y 4º de la Ley 14.794 (1) declara que el "Subsidio familiar" de referencia alcanza, entre otros, al personal comprendido en la Ley del servicio exterior de - la Nación (Ley 12.951) (inciso e) y al personal comprendido en la Ley para el Personal Militar (Ley 13.996) (inciso f).

Por ello, desde cualquiera de esas situaciones en que se considere al personal motivo de la consulta les corresponde el "subsidio familiar", sin entrar a relacionarlas con los procedimientos anteriores.

Saludo al señor Subsecretario con atenta consideración.-

Fdo. RAFAEL RODOLFO AYALA
Subsecretario de Hacienda

Al señor Subsecretario de Marina
Capitán de Navío D.ELADIO M. VAZQUEZ
S / D.

(1) Ver Digesto Administrativo Nº 688.-

Boletín Nº 968.-

INDEMNIZACION POR TRASLADO - VIATICOS

Expediente Nº 31.143/59.-

Señor Director General:

Por decreto Nº 1.229 de fecha 3 de febrero de 1958, se dejó sin efecto la autorización acordada por su similar Nº 3.328 de 1954, para que la Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos instalara en la ciudad de Mar del Plata, una agencia de apuestas hípicas en coordinación con los Hipódromos de Palermo y San Isidro.

A raíz de lo dispuesto en el artículo 2º del decreto citado en primer término, se procedió a transferir a los hipódromos mencionados, el personal, muebles, útiles, enseres y documentación correspondiente a la agencia que se suprimió, situación que motivara diversas presentaciones de los agentes que prestaban servicios en la dependencia, alegando que le correspondían los beneficios e indemnizaciones establecidos por los decretos números 18.989/56 (*) y 6.666/57 (**).

Remitidas las actuaciones a opinión de la División Asuntos Legales del Departamento Hipódromos, ésta se manifiesta en el sentido de que los actos legales a que se hace referencia, no respaldan fehacientemente lo solicitado, puesto que el decreto Nº 18.989/56 es de aplicación en los casos en que exista comisión de servicio y el decreto Nº 6.666/57, rige para el supuesto de trasla-

(*) Ver Digesto Administrativo Nº 14.-
(**) Ver Digesto Administrativo Nº 254.-

dos permanentes del personal, donde los viáticos se abonan una sola vez. Entiende además, que el traslado dispuesto estaba dentro de las facultades de la Administración, puesto que habiendo sido designados los agentes para desempeñarse en el Departamento de Hipódromos, dependiente de la Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos, puede asignárseles funciones en los lugares donde se desarrollan actividades hípicas, lo que no significa una comisión de servicio, ni un traslado permanente, sino el desempeño de tareas jornalizadas, conforme a la naturaleza de la actividad. En términos semejantes la Presidencia de la Repartición referida, resuelve no hacer lugar a lo solicitado.

En nuevas presentaciones efectuadas, los agentes de que se trata, ponen de manifiesto la procedencia de aplicar el régimen de viáticos establecidos por el decreto Nº 18.989/56, produciéndose a tal efecto una ratificación a lo anteriormente resuelto, por parte de las autoridades de la Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos.

Debido al recurso que interpusieron los causantes, se giran las presentes actuaciones a esta Secretaría de Estado a fin de resolver sobre el temperamento a aplicar en la emergencia.

Al respecto, cabe considerar la situación planteada a efectos de establecer la procedencia de aplicación del régimen de indemnización por traslado, que acuerda el art. 5º del decreto Nº 18.989/56. A tal fin debe señalarse conforme al texto normativo citado, que corresponde dicho beneficio al personal que sea trasladado con carácter permanente de su asiento habitual, siempre que el desplazamiento no se disponga a solicitud del agente. En consecuencia habría que determinar si dentro de los términos "traslado permanente", se encuadra la situación presente.

Es evidente que la disposición del decreto Nº1229/58, configura la supresión de un "asiento habitual", conforme a lo que se entiende por tal, para la aplicación del

decreto Nº 18.989/56 (la localidad donde se encuentra - instalada la oficina en la cual se preste efectiva y permanente servicio, segundo párrafo del art. 2º), creándose en esta forma una situación especial no contemplada - en las reglamentaciones vigentes, pero que, por vía de - interpretación, conformaría una situación similar a la de traslado permanente.

En consecuencia, este Departamento es de opinión que la única indemnización que correspondería reconocer en esta emergencia, es la acordada por el artículo 5º del - decreto Nº 18.989/56, ratificando en lo que respecta a - la procedencia de los viáticos solicitados, lo manifestado por la División Asuntos Legales del Departamento Hipódromos, no obstante lo cual estima conveniente, dada la naturaleza de la situación planteada y la competencia específica en la materia, dar intervención a la Dirección General de Finanzas.-

DEPARTAMENTO DE SECRETARIA, 16 de febrero de 1959.-

Fdo. NORBERTO P. DENARI
Jefe de Departamento

//nos Aires, 16 de febrero de 1959.-

Atento lo manifestado precedentemente por el Departamento de Secretaría, pase a la Dirección General de Finanzas, estimándole quiera servirse emitir opinión.-

Fdo. ANGEL BOTTERO TORRES
Director General de
Contabilidad y Administración

Expte. Nº 31143/59.- Indemnización por traslado reclamado por el personal de la Agencia Hípica de Apuestas Mutuas Nº 1 de Mar del Plata.-

//nos Aires, 13 de agosto de 1959.-

Vuelva a la Dirección General de Contabilidad y Administración para manifestarle, respecto a la reclamación interpuesta por personal de la Agencia Hípica de Apuestas Mutuas Nº 1 de la ciudad de Mar del Plata, que esta Dirección General comparte el temperamento expuesto por esa Repartición a fojas 27 y 28 de las adjuntas actuaciones, por cuanto las disposiciones del decreto Nº 1229/58, determinaron la supresión de un "asiento habitual", situación esta que por analogía encuadra en las normas emergentes del artículo 5º del decreto Nº 18.989/56, que regía en aquella oportunidad.

Sirva la presente de atenta nota de envío.-

Fdo. ALVARO OSCAR VIZCARGUENAGA
Subdirector General de Finanzas.

Expte. Nº 31143/59.- Indemnización por traslado reclamada por personal de la Agencia Hípica de Apuestas Mutuas de Mar del Plata.-

//nos Aires, 25 de agosto de 1959.-

Visto y de conformidad con el temperamento expuesto por la Dirección General de Contabilidad y Administración

y la Dirección General de Finanzas respecto de la reclamación interpuesta en estos actuados por personal de la Agencia Hípica de Apuestas Mutuas Nº 1 de Mar del Plata, pase a la Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos a fin de que proceda a resolver la situación planteada en orden al criterio sustentado por las referidas reparticiones.-

Fdo. RAFAEL RODOLFO AYALA
Subsecretario de Hacienda

RESOLUCION Nº 8002.-

Boletín Nº 969.-

LICENCIAS - RENUNCIA

Expediente nº 32531/59 (Hacienda)
252262/58 (J.N.G.).
Providencia nº 301

Señor Subsecretario:

El art. 41º del decreto nº 12.720/53 (º), por el que se fijó el régimen de licencias para el personal civil dependiente del Poder Ejecutivo Nacional, encomendó a los Ministerios la reglamentación del mismo, conforme con las necesidades de los servicios respectivos.-

En esta Secretaría de Estado -entonces Ministerio- dicha reglamentación se aprobó mediante Resolución nº 8264 / 56 (ºº), en la que no existe norma alguna que contemple la situación planteada a fs. 1 por la Dirección Nacional de Química.-

Por consiguiente, y pese a estimar fundadas las consideraciones vertidas a fs. 4/5 por la Delegación Fiscalía del Tribunal de Cuentas de la Nación, debe llegarse a la conclusión de que no existiendo una norma reglamentaria que impida conceder licencia al personal cuando éste simultáneamente presenta su renuncia al cargo, no resultaría procedente aplicar tal temperamento en el caso en cuestión.

(º) Ver Digesto Administrativo nº 15.-
(ºº) Ver Digesto Administrativo nº 16.-

Ello no obstante, cabe destacar que la concesión de licencia por vacaciones está supeditada a las necesidades del servicio de cada dependencia (art. 3° del decreto n° 12.720/53, y puntos 33° y 47° de la Resolución 8.264/56), causal que podría invocar la Dirección Nacional de Química a efectos de no conceder la licencia que solicitara la causante, o para interrumpirla en su transcurso (art. 12° del decreto n° 12.720/53), pero que no consta en estos actuados.-

Sin perjuicio de lo manifestado en el tercer párrafo de la presente, cabe destacar que, de estimarlo procedente esa Superioridad, podría encararse la implantación de un régimen que contemplara estas situaciones, el que debería ser proyectado por la Dirección General de Contabilidad y Administración, a cuyo cargo está lo referente al control de licencias del personal, sin perjuicio de la intervención que le compete a esta Dirección General de acuerdo con los decretos números 860 (&) y 2.477/58 ($).-

En lo que concierne al expediente n° 252.262/58 de la Junta Nacional de Granos, agregado a estas actuaciones, cabe informar que si dicho organismo tiene facultades para reglamentar, dentro de su ámbito de acción, la aplicación del decreto n° 12.720/53 - lo cual no surge del art. 41° - del mismo - no cabrían objeciones de fondo a la Resolución n° 664, del 28 de abril de 1958, de esa Junta, salvo en lo referente al carácter retroactivo que se dá a la misma en su art. 4°, que esta Dirección General considera improcedente, por estar en pugna con principios básicos de derecho.-

DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO CIVIL DE LA NACION, 29-6-59.

Fdo. JOSE LUIS FRANGI
Director General

(&) Ver Digesto Administrativo n° 420.-
($) Ver Digesto Administrativo n° 432.-

Poder Ejecutivo Nacional
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº 970.-

ESTATUTO PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL (art. 4º inc. d) - INGRESO

Expediente nº 44.167/58

//ñor Secretario de Hacienda:

Según el art. 4º, inc. d) del Estatuto del Personal Civil (decreto-ley 6.666/57) (1), no podrá ingresar en la Administración Nacional "el que tenga pendiente proceso criminal".-

Entiende esta Dirección que dicha norma se refiere al proceso "pendiente de resolución", esto es, a la causa aún no terminada por sentencia firme, y halla su fundamento en que ello plantea una situación de duda respecto de las condiciones morales del procesado a los efectos de poder confiarle el desempeño de un empleo público. Se trata, en suma, de una medida preventiva, en defensa del decoro y prestigio de la Administración, ya que no se puede abrir juicio acerca de la idoneidad moral de quien pretende ingresar en la Administración mientras se encuentre sometido a proceso criminal.-

Aquí nos encontramos con un sumario que terminó el 24 de marzo de 1949, con el auto de sobreseimiento provisional. El principal efecto del sobreseimiento provisional -

(1) Ver Digesto Administrativo nº 254.-

consiste en la detención de los procedimientos, bajo la condición resolutoria consistente en la aparición de nuevos elementos de juicio que autoricen a modificar la situación creada, pues "el sobreseimiento provisional deja el juicio abierto hasta la aparición de nuevos datos o comprobantes , salvo el caso de prescripción" (Código de Procedimientos en lo Criminal, art. 436, última parte). Una vez firme el auto de sobreseimiento provisional y salvo el caso de reapertura del sumario, no cabe ninguna otra actividad procesal con relación a los hechos que fueron materia de aquel pronunciamiento, y cumplida la prescripción de la acción penal, no es precisa la reapertura del sumario para convertir el sobreseimiento de provisional, en definitivo (cfr. ODERIGO, "Derecho procesal penal", t.2, p.96, ed. 1952).-

En tal virtud, considera esta Dirección que, en el caso, no nos encontramos en presencia de un proceso "pendiente de resolución", sino concluído y resuelto en 1949 de acuerdo con las normas procesales establecidas al efecto,lo que no impide que la Administración, teniendo en cuenta la naturaleza de los hechos, el tiempo transcurrido, la edad del interesado, la función a desempeñar por el mismo, etc., determine por sí, según su libre, discreta y razonable apreciación, si se cumple o no con el requisito de idoneidad moral que establece el art. 3° del Estatuto.-

Sin perjuicio de lo expuesto, y para la mejor resolución del caso de autos, estima esta Dirección que corresponde requerir al interesado, Antonio Eduardo Poma, la presentación de un certificado del juzgado ante el cual tramitó el sumario a que se refiere el testimonio de fs. 8, en el que se haga constar si el auto de sobreseimiento provisional se encuentra firme y si se ha convertido o no en sobreseimiento definitivo, como parecería desprenderse del tiempo transcurrido (diez años) y de las disposiciones -

del código penal (arts. 42 y 119) que serían de aplicación en el caso.-

DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS, 24 de marzo 1959.

Fdo. CRISTIAN G. DEMARIA
Director General

Expediente nº 44.167/58
Providencia nº 316

//nos Aires, 17 de Julio de 1959

En virtud de las actuaciones producidas, vuelva a la - Dirección General de Contabilidad y Administración infor - mando que esta Dirección General estima procedente concre- tar el temperamento adoptado por la Lotería de Beneficen - cia Nacional y Casinos, ratificando la disposición 2/959 - Rda., dado que conforme a los testimonios obrantes a fojas 8 y 21 y al dictamen de la Dirección General de Asuntos Ju rídicos de fs. 16/17, no sería de aplicación en este caso la norma del art. 4º, inciso d) del Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública Nacional.-

Fdo. JOSE LUIS FRANGI
Director General
Servicio Civil de la Nación-

Boletín Nº 971.-

ESTATUTO PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL (Art. 17º) - LICENCIAS

Expediente Nº 90.330/59.-

Señor Subsecretario:

Tengo el agrado de dirigirme a V.E. con referencia a la situación planteada por la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación en el expediente Nº 98/59, relacionada con la licencia gremial sin goce de haberes solicitada por el agente D.RODOLFO QUINTANA, a fin de asistir a las reuniones de la Federación Argentina de Trabajadores del Turf, entidad no estatal a la que se encontraba afiliado.

De la letra del apartado 2º del artículo 29º del Decreto Nº 12.720/53 (1), modificado por el Decreto número 17.609/56, no surge claramente si la licencia se otorga a los representantes gremiales o sindicales de cualquier profesión o asociación o solamente a los que representan a agentes del Estado, perciban o no retribución de la entidad representada.

En consecuencia, atento que el artículo 17º del Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública Nacional no ha sido aún reglamentado por el Poder Ejecutivo y de acuerdo con la facultad conferida a esa Secretaría de Estado por Decreto Nº 797/58, el suscripto solici

(1) Ver Digesto Administrativo Nº 15.-

ta se dicten las normas aclaratorias con respecto a la - cuestión expuesta.

Buenos Aires, 21 de julio de 1959.-

Fdo. FEDERICO A. E. RATROSSE
Subsecretario de Obras Públicas

A S.S. el señor Subsecretario de Estado de Hacienda
D. RAFAEL RODOLFO AYALA
S / D.

Expediente Nº 90.330/59.-
Providencia Nº 338.-

//ñor Subsecretario:

El artículo 29º del decreto Nº 12.720/53, modificado por su similar Nº 17.609/56, cuya vigencia resulta de lo establecido en el artículo 17º del Estatuto del Personal Civil, establece que el personal civil dependiente de la Administración Nacional podrá gozar de licencia especial cuando fuera designado para desempeñar un cargo de representación gremial y/o sindical, representando a agentes - del Estado, en la medida necesaria, y mientras dure su - mandato.

En el caso presente se habla (fs. 1) de una licencia para asistir a las reuniones de la Federación Argentina de Trabajadores del Turf, entidad no estatal, a la que - el recurrente se encontraría afiliado.

Se trata evidentemente de una situación completamente al margen de la prevista en el decreto general de licencias:1) el interesado no representa a agentes del Estado -por lo menos a los de la Repartición a la que pertenece y que nada tiene que ver con la actividad de los integrantes del aludido gremio-; 2) no tiene por tanto - mandato alguno conferido por el personal de su Reparti - ción. En consecuencia, no corresponde incluír su solicitud en los beneficios resultantes del aludido artículo - 29º del decreto Nº 12.720/53.

DIRECCION GRAL. DEL SERVICIO CIVIL DE LA NACION, 3-8-59.-

Fdo. JOSE LUIS FRANGI
Director General

//nos Aires, 4 de agosto de 1959.-

Con lo informado precedentemente por la Dirección General del Servicio Civil de la Nación, vuelva a sus efectos a la Secretaría de Estado de Obras Públicas.

Sirva la presente de atenta nota de remisión.-

Fdo. RAFAEL RODOLFO AYALA
Subsecretario de Hacienda

Poder Ejecutivo Nacional
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº 972.-

ESCALAFON PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL (Punto 52º) - ANTIGUEDAD

Expediente Nº 90.342/59 S.H.-
Expediente Nº 35.795/59 y Nº 31.301/59 A.S.S.P.-
Providencia Nº 352.-

Señor Subsecretario:

Se plantea en estas actuaciones el caso de un agente del Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública quien, al 1º de noviembre de 1958 -en que comenzó a regir el Escalafón aprobado por decreto Nº 9.530/58- ocupaba simultáneamente con el cargo de ese Dpto. de Estado, otro de Auxiliar de 1ra. en la Escuela de Técnicos para la Sanidad, dependiente de la Universidad Nacional del Litoral, en el que se encontraba en uso de licencia extraordinaria sin goce de haberes desde el 16 de junio del mismo año.

Con fecha 16 de junio de 1959 le fué aceptada a la causante su renuncia a este último cargo.

El caso a considerar estriba en el cómputo de servicios prestados en la aludida Escuela entre el 1º de julio de 1948 y la fecha de su incorporación al Ministerio referido, a los fines previstos, en el punto 52º del Escalafón para el Personal Civil. Las normas complementarias de dicha disposición, aprobadas por decreto Nº 4632/59 (1) establecen en su punto III que en los casos de que el agente desempeñe más de un puesto en organismos comprendi

(1) Ver Digesto Administrativo Nº 709.-

dos en el Escalafón, se computarán exclusivamente en cada empleo los años de servicio cumplidos por el agente en el mismo.

En el caso en cuestión, la circunstancia de encontrarse en uso de licencia sin goce de haberes no desvinculaba a la interesada de su empleo en la Universidad Nacional del Litoral, y por consiguiente, no habiendo cesado en ese empleo no resulta procedente computar los servicios prestados en el mismo al ser escalafonada en el Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública.

Recién a partir de la fecha de aceptación de su renuncia en aquella ocupación (fs. 11) corresponde aplicar el procedimiento fijado en el inciso c) del punto III de las normas complementarias ya citadas (decreto Nº 4632/59), computando los servicios prestados desde el 1º de julio de 1948.

Es, pues, correcta la interpretación que hacen las Direcciones Generales de Personal y de Asuntos Jurídicos del referido Departamento de Estado acerca de las normas en cuestión.-

DIRECCION GRAL. DEL SERVICIO CIVIL DE LA NACION, 13-8-59.-

Fdo. JOSE LUIS FRANGI
Director General

//nos Aires, 18 de agosto de 1959.-

Visto lo informado precedentemente por la Dirección General del Servicio Civil de la Nación, vuelva al Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública.

Sirva la presente de atenta nota de remisión.-

Fdo. RAFAEL RODOLFO AYALA
Subsecretario de Hacienda

Poder Ejecutivo Nacional
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº 973.-

ESCALAFON PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL (punto 26º) - SUBSIDIO FAMILIAR

Expediente nº 90.312/59
Providencia nº 322

//ñor Subsecretario:

El Ministerio del Interior solicita se le informe si le alcanzan los beneficios del subsidio familiar al sobrino o sobrino político que por sentencia judicial se encuentra a cargo del agente.-

Sobre el aspecto concreto de la consulta, cabe destacar que en el punto 26º del Escalafón aprobado por decreto número 9.530/58 y ratificado por ley nº 14.794 (º), se determina en forma taxativa los parientes y familiares a quienes alcanza tal beneficio, no considerando a esos efectos a los sobrinos o sobrinos políticos, aún cuando se encuentre perfectamente establecido que estén a cargo del agente.-

Por otra parte, el decreto nº 4.631/59 (ºº) de fecha 22 de abril ppdo. aprobatorio de las normas complementarias del mencionado punto 26º, especifica expresamente las condiciones esenciales que deben cumplir parientes y familiares a fin de que al agente le corresponda el pago de dicho subsidio.-

(º) Ver Digesto Administrativo nº 688.-
(ºº) Ver Digesto Administrativo nº 738.-

Por lo expresado, no procede abonar salario familiar al empleado, por el hecho de tener a su cargo un sobrino o sobrino político, aún cuando ello pueda ser demostrado fehacientemente.-

DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO CIVIL, 17 de julio de 1959

Fdo. JOSE LUIS FRANGI
Director General

//nos Aires, 20 de Julio de 1959

Con lo informado por la Dirección General del Servicio Civil de la Nación, vuelva al Ministerio del Interior a sus efectos.-

Fdo. RAFAEL RODOLFO AYALA
Subsecretario de Hacienda

Poder Ejecutivo Nacional
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº 974.-

SUMARIOS - RENUNCIA (sus efectos a los fines disciplina - rios) - SANCIONES

Ref: actuación irregular del ex - cobrador fiscal Oscar A. Salvadores: Administrativo:271 58.-

Señor Director General:

Trata el presente expediente sobre la actuación irregular en que habría incurrido el ex-cobrador fiscal don Oscar A. Salvadores "en cuanto su desatención casi total de la cartera de juicios a su cargo habría producido un perjuicio fiscal de cuantioso monto".-

Así lo deja expresado el Departamento de Asuntos Legales (fs. 59), el que también hace notar dos circunstancias; a) que por Decreto nº 6.438/58 le ha sido aceptada la renuncia y b) que la responsabilidad del referido ex-funcionario debe ser tenida en cuenta desde tres puntos de vista: administrativo, civil y penal.-

Desde el punto de vista civil y si bien se documentan las impugnaciones formuladas por el sucesor del ex-agente, (fs. 15 a 48), se hace resaltar que a la fecha se está tratando de concretar la cifra definitiva que informará sobre la magnitud del daño causado, lo que determinaría el monto de la demanda.-

A efectos de entablar la demanda, el Departamento de Asuntos Legales sugiere esperar a conocer el monto del perjuicio, o bien promover desde ya la acción por intermedio

del Procurador Fiscal. De adoptarse este último criterio, correspondería instruirlo en el sentido de que la demanda se plantearía según el ajuste final de las cantidades.-

Si la Superioridad lo compartiese, estímase oportuno recurrir a lo sugerido en segundo término e imponiendo a la División Cobradores Fiscales el procedimiento adoptado a - fin de poder conocer urgentemente el monto al cual asciende el perjuicio.-

En cuanto a la responsabilidad penal, se comparte lo - opinado a fs. 59 (punto III), en el sentido de promover la correspondiente denuncia con arreglo al art. 164 del Código respectivo.-

Referente a la responsabilidad administrativa, el Departamento de Asuntos Legales manifiesta que al habérsele aceptado la renuncia sería improcedente instruir sumario administrativo (ver fs. 59, punto I), toda vez que para prosperar, debe referirse a un agente que reviste en los cuadros de la Administración Pública.-

En el aspecto referido, si bien esta Dirección considera improcedente la iniciación de un sumario conforme las - disposiciones del Decreto-Ley nº 6666/57 (*) y su reglamentación, -atento lo que establece el art. 1º de aquél- por - no prestar servicios en la actualidad el Sr. Salvadores, se estima necesario, sin embargo, se constaten fehacientemente los hechos, por cuya razón ha de fundamentarse a continuación los motivos que así deciden a opinar.-

El Estatuto del Personal Civil de la Administración Nacional buscó dignificar la Administración Pública "y con - ello, la de quienes la integran y dedican sus esfuerzos mediante el desempeño de una función o empleo, que a la par - de ennoblecer implica deberes de cumplimiento ineludible.-

---

(*) Ver Digesto Administrativo nº 254.-

Fué la conquista de una administración sana y honrada.- La Administración Pública -léase "de la cosa pública"- se desarrolla a través de la actividad de sujetos cuyo cometido debe ser satisfecho con honestidad, lealtad y eficacia. Una administración, cualquiera sea, pública o privada, sólo será eficiente en la medida de la responsabilidad de quienes administren. En cuanto a la pública, sólo es buen funcionario o empleado aquél que cumple con las disposiciones legales y es fiel realizador de los deberes impuestos a la actividad administrativa, en beneficio de los intereses que administra.-

Y los derechos y garantías que consagra el Decreto-Ley nº 6666/57 no han tenido otra finalidad, además de razones de justicia, que asegurar la existencia de un cuadro de agentes responsables, con conciencia sobre lo que es "la cosa Pública", el "interés público", desde que no debe olvidarse la figura jurídica de la administración pública como gestora de los intereses de terceros, a quienes se sirve.-

La citada norma nos dice (ver art. 3, punto VII y IX) : el personal que hubiere dejado de pertenecer a la Administración, por renuncia, podrá reingresar nuevamente. El reingreso se efectuará en la categoría, clase y grupo en que actuaba al egresar siempre y cuando haya acreditado méritos suficientes para ello durante su actuación anterior. El agente exonerado de la Administración podrá reingresar, si a tal fin hubiera obtenido su rehabilitación y satisfaga los requisitos comunes de ingreso. A continuación, el art. 4º - señala a quienes no pueden ingresar a la Administración Pública.-

Visto tal posibilidad de reingreso, podría echarse un manto de olvido sobre la eventual actuación irregular y consiguiente responsabilidad de quien habría llevado a cabo deficientemente la función que tenía encomendada?

Es indudable que si bien el poder administrador debe ser un fiel ejecutor de la ley y custodio práctico e inme-

diato de los intereses que contienen las normas, también debe custodiar en forma práctica y jurídica el interés público.-

Aplicando lo dicho al tema en examen, no debe olvidarse que el Sr. Salvadores fué un funcionario del Estado, que en esencia y en el ejercicio de sus funciones, debié cuidar los intereses puestos bajo su atención, que eran los de la colectividad.-

Y la tutela de la "cosa pública" impone la necesidad (ante la posibilidad futura de un reintegro del agente, que hoy voluntariamente se apartó de la Administración) de una constatación de los hechos que se le imputan, los que fehacientemente comprobados y aparejando sanción, ésta debe quedar registrada como antecedente personal, aunque haya cesado la relación por renuncia, y el poder administrador, comprobado lo que se imputa, podrá, entonces, revocar con fundamento el acto administrativo anterior.-

La revocación, decisión dirigida a extinguir un acto administrativo anterior, es una manifestación de la voluntad - administrativa modificatoria de una precedente. El acto administrativo en principio, es revocable. Máxime, cuando concurren causas legales para ello; cuando existen razones de conveniencia, a efectos de resguardar los intereses públicos, - creando para tal fin, una inhabilidad al agente que no obró conforme con los deberes que su gestión le imponía y de lo - que deberá rehabilitarse en caso de pretender reincorporarse en el futuro (ver Decreto-Ley nº 6666/57 art. 3º, puntos - VIII-IX y art. 4º).-

Y esta revocación (potestad de policía del poder administrador sobre sus propios actos; supervisión de la labor ya - cumplida), que hace factible retirar la norma o acto inoportuno, para substituirle por otro que contemple la satisfac - ción necesaria y justa que merece el interés público, encuentra su objeto en el mismo fin a que tiende la ley: el Estatuto, desde el momento que si éste buscó dignificar a quienes

integran la Administración Pública, también les asignó deberes de ineludible cumplimiento, los que el Sr. Salvadores no habría observado.-

Pero el nuevo acto revocatorio no se justificaría; a) si dentro del orden jurídico no tuviera una causa justa - como razón de su existencia. b) si antes de ser dictado , no se desarrollara una labor intelectiva de conocimiento de los motivos que lo determinan, es decir, de un proceso que permita conocer las circunstancias motivantes, las - que necesariamente deben tener relación con el fin que debe satisfacer: en el caso, la salvaguarda futura del interés público (de lo que la Administración Pública es gestora), que hoy lesionado podría en el mañana estar nuevamente en manos del agente que no habría observado los deberes más esenciales del gestor.-

El proceder aconsejado y posterior revocación del primer acto, no significa otorgar un salvoconducto al poder administrador para que haga algo ilegal. El estado de derecho no puede repudiar legítimos procesos, cuando se hallan de por medio intereses superiores. La política jurídica del estado moderno confirma esta necesidad cuando - ello no implica arbitrariedad. Al contrario, la justifica y le concede vida jurídica, porque se trata de prevenir , de salvaguardar el peligro de que la gestión administrativa pueda nuevamente caer en quien habría observado un proceder irregular en el cuidado y atención de la cosa pública.-

Mas, como rodear de garantías al nuevo acto a dictarse, si no podrían aplicarse las normas del Estatuto que - disponen sobre la instrucción sumarial, desde que el agente ya no pertenece a la Administración Nacional? (ver art. 1º del Decreto-ley 6666/57). Sería extensible el citado - procedimiento al caso examinado, o bien deberá procederse a una constatación de hechos, como se ha venido hablando, a los efectos de que el Poder Ejecutivo también posea fun

damentos para dictar el acto revocatorio, si fuese necesario hacerlo, de llegarse a constatar responsabilidad?

Por ello y ante la necesidad de llegar a conocer fehacientemente los hechos imputados al ex-agente Salvadores,- es que esta Dirección -si así lo compartiese la Superioridad y en mérito a todo lo dicho-, estima que correspondería requerir opinión a la Dirección General del Servicio Civil (Decreto nº 2.477/58) (') sobre cuál sería el mejor procedimiento a adoptar en el caso, sin perjuicio de lo ya expresado sobre la responsabilidad civil y penal en los primeros párrafos del presente dictamen, procedimiento que la Superioridad debería adoptar con urgencia.-

DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS, 30 de diciembre de 1958.-

Fdo. CARLOS FUNCK MORENO
Director

Expediente nº 90.306/59.
Providencia nº 326.-

Señor Subsecretario de Hacienda:

En las presentes actuaciones la Dirección General Impositiva solicita se le informe el procedimiento administrativo que corresponde seguir respecto de un empleado al que se le ha aceptado la renuncia con posterioridad a lo cual surgen sospechas de su culpabilidad en un hecho delictuoso

(') Ver Digesto Administrativo nº 432.-

que significó perjuicio para el Estado.-

Esta Dirección General considera que la circunstancia de haber cesado la relación de dependencia de un empleado con el organismo administrativo al cual perteneció, ya sea por jubilación, renuncia, cesantía etc., no lo excluye de ser juzgado por hechos irregulares cometidos durante su gestión como agente del Personal Civil; admitir lo contrario, implicaría inhibición para iniciar causa o bien obligatoriedad de disponer el archivo de la que se le hubiera incoado, quedando el imputado exento de toda responsabilidad por el hecho de haber cesado en su prestación de servicios.-

Por otra parte, para el caso eventual de que el agente colocado en las condiciones a que alude el punto anterior lograse por una contingencia cualquiera ingresar nuevamente en la Administración Pública, nos encontraríamos con que el mismo no registraría ningún antecedente en su legajo personal, en lo que a penalidades se refiere, libre éste de toda constancia vinculada a sanciones y por ende colocado aquél en condiciones de competir con otros servidores responsables, correctos y cumplidores de su deber, consumándose de tal suerte una sensible injusticia.-

Por lo expuesto, esta Dirección General estima que aún después de aceptada la renuncia de un agente, puede ser sometido el mismo a procedimientos disciplinarios, tal como ocurre cuando la formaliza para eludir sanciones a raíz de la comisión de un delito o falta.-

DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO CIVIL DE LA NACION, 22-7-59

Fdo. JOSE LUIS FRANGI
Director General

D.A. nº 974.-

Expediente nº 90.306/59

//nos Aires, 27 de julio de 1959.-

Con lo informado precedentemente por la Dirección General del Servicio Civil de la Nación, pase a sus efectos a la Dirección General Impositiva.-

Fdo. RAFAEL RODOLFO AYALA
Subsecretario de Hacienda

Poder Ejecutivo Nacional
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº 975.-

ESCALAFON PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL (Punto 26º) - SUBSIDIO FAMILIAR

Buenos Aires, 28 de agosto de 1959.-

Señor Director General:

Tengo el agrado de dirigirme al señor Director General, con referencia a la aplicación de las normas para el pago del subsidio familiar, que fueron aprobadas por decretos 9530/58 y 4631/59 (').

Al respecto se solicita que ese Organismo, en cumplimiento de las funciones que le asigna el decreto 2477/58 ("), quiera tener a bien emitir su opinión con respecto a la procedencia del pago del citado beneficio en las situaciones que se han planteado y que seguidamente se consultan:

a) Por hijos declarados por agentes femeninos, en aquellos casos en que el esposo no percibe dicho beneficio.

b) Por hermanos menores de edad o impedidos, cuando el padre se halla incapacitado y a cargo, y la madre no se halla encuadrada por las disposiciones que acuerdan tal beneficio.

c) Por hermanos menores de edad o incapacitados, cuan

(') Ver Digesto Administrativo Nº 738.-
(") Ver Digesto Administrativo Nº 432.-

do la madre del declarante que no está impedida, es viuda, separada de hecho, separada legalmente o divorciada, teniendo en cuenta que el padre es considerado cabeza de familia.

d) Por el esposo, cuando ambos cónyuges revistan en la Administración Nacional y aquél ha sido suspendido preventivamente en sus funciones.

Saludo al señor Director General con mi consideración más distinguida.-

Fdo. MARCOS WAISSMAN
Director de Administración
de la Dirección General Impositiva

Expediente Nº 62.771/59.-
P. Nº 7728/59.-

//nos Aires, 29 de septiembre de 1959.-

Vuelva a la Dirección General del Servicio Civil de la Nación, manifestándole que esta Dirección General mantiene en las diversas situaciones planteadas a fs. 1 por la Dirección General Impositiva, la opinión que en cada caso se pasa a exponer:

a) El caso de hijos declarados por agentes femeninos, cuando el esposo no percibe en su actividad dicho beneficio, está contemplado en el apartado b), punto VI del decreto Nº 4631/59, que aprobó las normas aclaratorias del Escalafón para el Personal Civil de la Administración Pública Nacional

y el punto 4º de la resolución Nº 7787/59 (*);

b) En este supuesto, la solución está dada por el punto 7º de la Resolución Ministerial Nº 7787 de fecha 16 de junio de 1959;

c) Con relación a los hermanos menores de 18 años o mayores impedidos, corresponderá la liquidación del beneficio cuando, como en el caso anterior, el agente demuestre que aquéllos se hallan a su cargo;

d) El titular del beneficio, por aplicación del apartado a) punto VI del decreto Nº 4631/59 es el esposo, sólo podrá percibirlo la esposa, cuando aquél se encuentre en la situación especificada en el punto b) del mismo apartado del citado decreto Nº 4631/59.- En el caso, la liquidación del subsidio quedaría supeditada a las resultas del sumario incoado y en cuya razón el agente haya sido suspendido preventivamente en sus funciones.-

Fdo. ANGEL BOTTERO TORRES
Director General
de Contabilidad y Administración

Buenos Aires, 9 de octubre de 1959.-

Señor Subdirector General de Impositiva
D. RENE SAN MIGUEL
S / D.

Tengo el agrado de dirigirme al señor Subdirector General en respuesta a su nota de fecha 28 de agosto ppdo.,

(*) Ver Digesto Administrativo Nº 816.-

en la que formulaba distintas consultas referentes a la liquidación del subsidio familiar. (Decretos Nos. 9530/58 y 4631/59). Al respecto, llevo a su conocimiento lo siguiente:

Caso a): La liquidación debe ajustarse a las normas del punto VI, inciso b) de las normas complementarias aprobadas por decreto Nº 4631/59, vale decir que el agente femenino debe probar que su cónyuge ha renunciado o no tiene derecho a percibir en su empleo el beneficio por la misma causa.

Caso b): La liquidación resultará procedente cuando se cumplan los requisitos fijados en los puntos III y IV (incisos e y f) de las aludidas normas complementarias, es decir, que se trate de hermanos menores de edad o impedidos, y estén a cargo del causante, para lo cual no deberán poseer una renta superior a $ 1.000.- mensuales, y estar su alimentación, vestido y educación obligatoria atendidos por el titular del subsidio de que se trata.

Caso c): La liquidación estará sujeta a los mismos requisitos del caso anterior.

Caso d): En el caso planteado la liquidación del subsidio quedará supeditada a las conclusiones del sumario incoado. Si del mismo resulta la procedencia del pago de haberes al agente sumariado, no corresponde la liquidación del subsidio a su esposa; si por el contrario el sumario concluye con una medida sancionatoria, el pago de subsidio por cónyuge al agente mujer deberá ajustarse a lo estipulado en la Resolución S.H. Nº 7142/59 (+).

Saludo al señor Subdirector General con atenta consideración.-

Fdo. JOSE LUIS FRANGI
Director General
Servicio Civil de la Nación

(+) Ver Digesto Administrativo Nº 781.-

Poder Ejecutivo Nacional
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº 976.-

ESCALAFON PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL - CALIFICACIONES

Buenos Aires, 23 de octubre de 1959.-

Visto lo determinado por el punto 34° del Escalafón para el Personal Civil de la Administración Pública Nacional y las normas complementarias aprobadas por el Decreto nº 11.941/59(1) respecto del régimen de calificaciones del personal;

EL DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION

D I S P O N E :

1º.- Determínase en la forma cuyo detalle se consigna seguidamente, las tres instancias jerárquicas a través de las cuales se efectuará la calificación del personal que presta servicios en la repartición:

(1) Ver Digesto Administrativo nº 916.-

Personal que dependa directamente de una Jefatura de Sección.	1a.Instancia Jefe de Sección (x)	2a.Instancia Jefe de Dpto. (xx)	3a.Instancia Director General.
Personal que dependa directamente de una Jefatura de División.	Jefe de División	Jefe de Dpto.	Director General.
Personal que dependa directamente de una Jefatura de Departamento.	Jefe de Departamento.	Subdirector General.	Director General.
Personal que dependa directamente de la Dirección General.	Subdirector General	-	Director General.

(x) Para el caso de la Sección Gestoría que depende directamente del Jefe del Departamento de Secretaría, en esta instancia calificará al Jefe de la dependencia el Jefe del Departamento.-

(xx) Para el caso previsto precedentemente, en esta instancia calificará el Subdirector General.-

2º.- Para los supuestos previstos en los apartados III y IV de las normas complementarias del referido punto 34º del Escalafón, los reemplazantes naturales de los funcionarios calificadores especificados substituirán a éstos, en cada caso, en las instancias respectivas.-

3º.- Comuníquese a quienes corresponda y archívese.-

Fdo. ANGEL BOTTERO TORRES
Director General
de Contabilidad y Administración

DISPOSICION Nº 8346.-

Poder Ejecutivo Nacional
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº 977.-

ESCALAFON PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL (Punto 52º) - TITULOS

Buenos Aires, 21 de octubre de 1959.-

Visto el Escalafón para el Personal Civil de la Administración Pública Nacional aprobado por Decreto Nº 9530 de fecha 7 de noviembre de 1958 y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 28º del referido instrumento determina el importe de las bonificaciones que corresponde abonar por la posesión de los títulos habilitantes o certificados de capacitación que detalle a aquellos agentes que se desempeñen en funciones propias de su especialidad y que no revisten en la clase C;

Que existen en vigor regímenes distintos al referido, que otorgan bonificaciones mayores y/o bonifican títulos o certificados no comprendidos en éste;

Que es menester precisar el procedimiento a seguirse para ubicar al personal amparado por dichos regímenes en el Escalafón aprobado por Decreto 9.530/58 sin desmedro de su actual retribución total;

Por todo ello atento lo propuesto por la Secretaría de Hacienda de la Nación, de acuerdo con la competencia que le atribuyen el Decreto-Ley Nº 797/58 (') y el artículo 20 inciso 12 de la Ley Nº 14.489,

(') Ver Digesto Administrativo Nº 419.-

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

Artículo 1º.- Agrégase al inciso a) del artículo 52º del capítulo X del Escalafón para el Personal Civil de la Administración Pública Nacional aprobado por Decreto Nº - 9.530, del 7 de noviembre de 1958 el siguiente párrafo: "Para el personal que percibiera una bonificación por la "posesión de un título que por aplicación del artículo 28º "de este Escalafón no correspondiera bonificar, o estuvie "ra previsto con un importe menor, se computará también - "la diferencia entre ambos regímenes".

Artículo 2º.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda.

Artículo 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y pase a la Secretaría de Estado de Hacienda a sus efectos.-

FRONDIZI - Alvaro C. Alsogaray - Guillermo Walter Klein.

DECRETO Nº 13.116.-

Poder Ejecutivo Nacional
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº 978.-

LICENCIAS

Buenos Aires, Octubre 19 de 1959.-

Visto el decreto Nº 12.720 del 14 de julio de 1953 (*), por el cual se fija el régimen de licencias para el personal de la Administración Nacional; y

CONSIDERANDO:

Que dicho acto de gobierno no prevé la situación de aquellos agentes que, debiendo tener que someterse a diversos exámenes médicos previos a su incorporación a las filas de las fuerzas armadas, en cumplimiento del servicio militar obligatorio, deben inasistir a sus tareas;

Que si bien el artículo 36º de dicho acto de gobierno contempla, para su justificación, las inasistencias del personal motivadas por razones atendibles o de fuerza mayor, la limitación introducida por el mismo a esos efectos (dos por mes, sin que excedan de diez por año) determina la imposibilidad de considerar con arreglo a esa disposición, la situación de los agentes en las condiciones señaladas, ya que, la mayoría de los mismos, se ven precisados a no concurrir a sus tareas durante períodos superiores al previsto mensualmente en dicha norma;

Que en ese orden de ideas y teniendo en cuenta las razones especiales que obligan al personal de que se trata a estar ausente de sus tareas los días en que deben -

(*) Ver Digesto Administrativo Nº 15.-

someterse a los exámenes médicos aludidos, se estima procedente modificar el artículo 28º del aludido decreto Nº - 12.720/53, reemplazado por el número 13.800 del 1º de agosto de 1956, contemplando en el mismo la situación expuesta;

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

Artículo 1º.- Modifícase el artículo 28º del decreto número 12.720/53, reemplazado por el Nº 13.800/56, en la siguiente forma:

"Artículo 28º.- Los agentes que deban incorporarse al "servicio militar tendrán derecho a las siguientes li"cencias con el 50% de su remuneración; desde la fecha "de su incorporación hasta cinco (5) días después del "día de la baja asentada en la libreta de enrolamien-"to, en los casos en que el agente hubiera sido decla"rado inapto o fuera exceptuado; y hasta quince (15) "días después de haber sido dado de baja si hubiera - "cumplido el período para el cual fué convocado y és-"te fuera mayor de seis meses. Igualmente se concede-"rá licencia de cinco (5) días, con la remuneración - "expresada, cuando el período fuera inferior a seis - "meses.

"Las inasistencias en que incurra el personal por te-"ner que concurrir a someterse a los exámenes médicos, "previos a su incorporación a las filas de las fuer - "zas armadas, en cumplimiento del servicio militar o-"bligatorio, serán justificadas con goce de haberes.

"El personal que en carácter de reservista sea incor-"porado transitoriamente a las Fuerzas Armadas de la "Nación tendrá derecho a usar la licencia y a perci -

"bir, mientras dure su incorporación como única re - "tribución la correspondiente a su grado en caso de "ser oficial o suboficial de la Reserva; cuando el "sueldo del cargo civil sea mayor que dicha remunera "ción, la dependencia a la cual pertenece liquidará "la diferencia".

Artículo 2º.- El presente decreto será refrendado por los señores Ministros Secretarios en los Departamentos de Economía, del Interior y de Asistencia Social y Salud Pública y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda.

Artículo 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.

FRONDIZI - Alvaro C.
Alsogaray - Alfredo
R.Vítolo - Héctor V.
Noblía - Guillermo
W. Klein.

DECRETO Nº 13.004.-

Poder Ejecutivo Nacional
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº 979.-

ESCALAFON PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL (punto 52º) - ANTIGÜEDAD

Expte. nº 157.506/58.-

Señor Director General de Personal:

I.- Las presentes actuaciones se relacionan con una presentación del agente don LUIS ALBERTO VOSO, mediante la cual solicita que se le liquide como lo fué hasta el 31 de Marzo de 1958 la bonificación respectiva que desde el mes de Abril de 1958 no percibe (fs. 1/2).-

Funda su petición en que por Resolución de fecha 9 de Abril de 1948 del Banco Central de la República Argentina que en copia obra a fs. 22/24 fueron acreditados a todos los efectos que hubiere lugar la antigüedad de servicios prestados en las firmas o empresas propietarias de elevadores y otras instalaciones, expropiadas en virtud de los decretos nros. 10.107/44 y 9.626/46.-

De conformidad con lo que surge de lo actuado se trata de lo siguiente:

El personal de empresas particulares, que prestaban servicios en instalaciones que fueron declaradas de utilidad pública por el Decreto nº 10.107/44 pasó a prestar servicios en la ex-Comisión de Granos y Elevadores de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 del mismo (fs. 7).-

Por Decretos nros. 11.853 del 30 de Mayo de 1945 y -

7.365 del 20 de Marzo de 1947 se reconoció a dicho personal la antigüedad en las empresas originarias, pero al sólo efecto de la licencia anual reglamentaria (considerandos de la resolución de fs. 22).-

Al tratarse el escalafón por la Comisión Nacional de Granos y Elevadores, el Banco Central de la República Argentina, en cuya órbita se encontraba dicha Comisión, reconoció por Resolución de fecha 9 de Abril de 1948 (fs.23/24) a todos los efectos que hubiese lugar, la antigüedad de servicios prestados en las firmas o empresas propietarias de elevadores y otras instalaciones expropiadas por Decretos nros. 10.107/44 y 9.626/46.-

En virtud de ello la Comisión Nacional de Granos y Elevadores computó al señor LUIS ALBERTO VOSO una antigüedad de quince años diez meses y un día por servicios prestados en la firma LUIS DE RIDDER LTDA. S.A. Comercial (informe de fs. 27).-

El citado agente pasó luego a prestar servicios en calidad de adscripto al Instituto Argentino de Promoción del Intercambio (en liquidación), el que reconoció a los efectos del adicional por antigüedad los servicios prestados en la citada firma en virtud de lo dispuesto por Resolución "A" nº 1.119 de fecha 11 de Octubre de 1948 que en copia obra a fs. 28.- Cabe destacar que dicho Instituto a la fecha de esa Resolución estaba con respecto al Banco Central, en situación análoga a la de la Comisión de Granos y Elevadores.-

Posteriormente por Decreto nº 6.312/58 el señor VOSO fué incorporado al ex-Ministerio de Comercio e Industria a partir del 1/4/58 oportunidad en que se le convirtió en sueldo el adicional que por antigüedad percibía en dicho Instituto (informe de fs. 29).-

En su presentación de fs. 1/2 el citado agente reclama que se le computen los 15 años 10 meses y 1 día de servi-

cios prestados en la firma LUIS DE RIDDER LTDA. S.A. Comercial para liquidarle la bonificación por antigüedad.-

Corresponde dejar aclarado, que los reconocimientos de antigüedad dispuestos por el Banco Central de la República Argentina y cómputos efectuados por la Comisión Nacional de Granos y Elevadores y el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio (en liquidación) -y con respecto a los cuales funda su pedido el agente recurrente- fueron hechos por dichos organismos en la esfera de su competencia con fines determinados, no teniendo consecuencia alguna con respecto al cómputo de antigüedad que, a los fines de la liquidación de la bonificación, corresponde hacer en esta Secretaría de Estado.-

II.- La disposición legal aplicable a esta Secretaría de Estado y mediante la cual se acuerda bonificación por antigüedad al personal de la misma es el Decreto nº 13.540/49 cuyo artículo 5º establece que: "a los efectos del adicional calculado en la forma que se determina en el artículo anterior, se considerará como antigüedad el total de años de servicios prestados por los agentes en la Administración Pública Nacional, ya sea en forma ininterrumpida o alternada" completado por lo dispuesto por el Decreto nº 12.439/56 (¹) que reconoce los servicios prestados en la Municipalidad de Buenos Aires y por el Decreto nº 556/58 (") de fecha 20 de Enero de 1958 que reconoce al sólo efecto de la bonificación por antigüedad, los servicios prestados con anterioridad a la fecha de su nacionalización, en empresas, entidades o instituciones que hubieran pasado a formar parte del Patrimonio del Estado.-

Como los servicios que cuestiona el señor VOSO fueron prestados en una entidad privada, corresponde establecer si ellos encuadran en la última de las disposiciones citadas.-

---

(¹) Ver Digesto Administrativo nº 62.-

(") Ver Digesto Administrativo nº 416.-

Por decreto nº 10.107/44 el Estado declaró de utilidad pública el uso de las instalaciones, elevadores, cargadores galpones, etc., que fueran utilizados o susceptibles de utilizarse para la recepción, almacenamiento etc. de granos y luego por decreto nº 9.626/46 expropió todos esos bienes incluyendo terrenos, edificios etc.-

Dichas expropiaciones si bien abarcaban gran extención de los elementos que utilizaban las empresas para el desempeño de sus funciones no significaron la nacionalización de las mismas, razón por la cual se estima que el caso del señor VOSO no estaría encuadrado dentro de las disposiciones del artículo 1º del Decreto nº 556/58 a la luz de una aplicación estricta y formal.-

Ahora bien, dada la magnitud de las expropiaciones, por vía de interpretación, podría llegarse a considerarlo incluído en sus beneficios. Así se cumpliría con los fines de la ley.-

III.- Empero, como la antigüedad que se cuestiona tendría sólo efectos en el período comprendido entre el 1/4/58, fecha en que el señor VOSO fué incorporado a esta Secretaría de Estado y el 31 de Octubre ppdo., en virtud de que a partir del 1º de Noviembre de 1958, se aplicaría el Escalafón para el Personal Civil de la Administración Pública Nacional y que el inc. c) del artículo 52 de éste establece un procedimiento análogo para el cómputo de antigüedad, se estima necesario dar intervención al Ministerio de Hacienda de conformidad con lo dispuesto por el Decreto-ley nº 797/58 (&).-

DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS, 5 de junio de 1959.

Fdo. LUCAS SILVANO PENNA
Director General

(&) Ver Digesto Administrativo nº 419.-

Expediente nº 90.316/59 (Hacienda)
157.506/58 (Comercio)
Providencia nº 328.-

Señor Subsecretario de Hacienda:

La Secretaría de Estado de Comercio solicita se le informe si corresponde reconocer a los efectos de la liquidación del beneficio establecido por el punto 52º del Escalafón aprobado por decreto nº 9.530/58, los servicios prestados por un agente en la compañía Luis De Ridder Ltda. S.A. Comercial, que fuera expropiada por la Comisión Nacional de Granos y Elevadores.-

Dicho agente pasó, posteriormente, a depender del Instituto Argentino de Promoción del Intercambio, y en oportunidad de la liquidación del mismo, fué transferido a la Secretaría de Comercio, organismo que lo incorporó a su presupuesto a partir del 1º de abril de 1958.-

Atento la consulta formulada, quedarían dos períodos perfectamente delimitados a considerar: el que va desde la fecha citada hasta el 31 de octubre del mismo año, que se regiría por las disposiciones del decreto nº 13.540 del 9 de junio de 1949, aprobatorio del régimen de bonificaciones por antigüedad para el personal de la citada Secretaría, y su reglamentación, y sus complementarios nº 12439 / 56 y 556/58; y el que comienza el 1º de noviembre de 1958, entrando ya en el ámbito de aplicación de las normas del mencionado punto 52º del Escalafón y del decreto nº 4.632/59 ($).-

Si bien bajo la dependencia del I.A.P.I., le fueron re

($) Ver Digesto Administrativo nº 709.-

conocidos al interesado, a todos los fines, los servicios computados, en virtud de la resolución de fecha 9 de abril de 1948, dictada por el Banco Central de la República Argentina, tal temperamento no puede aplicarse cuando el empleado es designado en la Secretaría de Comercio ya que desde ese momento se encuentra comprendido en las prescripciones del decreto nº 13.540/49 y sus complementarios nros. 12.439/56 y 556/58, de acuerdo con los cuales sólo se computan los servicios nacionales y los cumplidos en la Municipalidad de Buenos Aires y aquellos prestados en empresas nacionalizadas con anterioridad a la fecha en que hubieran pasado al patrimonio estatal, vale decir que en este caso especial únicamente pueden considerarse útiles los servicios prestados en la Comisión Nacional de Granos y Elevadores y en el I.A.P.I., en razón de que la referida empresa no fué nacionalizada, sino parcialmente expropiada, aún cuando parte de su personal haya sido transferido conjuntamente. Sin perjuicio de ello la totalidad de los servicios prestados pueden acumularse para licencia u otros fines.-

En el segundo lapso son aplicables las normas del punto 52º, inciso c), del citado Escalafón, que establecen que la antigüedad que registre el agente se determinará "sobre la base de los servicios prestados en organismos nacionales, provinciales o municipales o en instituciones, entidades o empresas privadas que hubieran sido incorporadas al patrimonio nacional, provincial o municipal".-

De tal manera, en ninguno de los dos períodos considerados, pueden computarse al causante, a efectos de la bonificación por antigüedad, los servicios prestados en la empresa privada a que se hizo referencia.-

Buenos Aires, 22 de julio de 1959.-

Fdo. JOSE LUIS FRANGI
Director General
Servicio Civil de la Nación

//nos Aires, 27 de julio de 1959.-

Con lo informado precedentemente por la Dirección General del Servicio Civil de la Nación, pase a sus efectos a la Secretaría de Estado de Comercio.-

Fdo. RAFAEL RODOLFO AYALA
Subsecretario de Hacienda

Poder Ejecutivo Nacional
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº 980.-

ESTATUTO PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL (arts. 41º y 44º) - SUMARIOS

Expediente nº 317.352/59(º).
Expte. nº 35.419/57 - Dirección General de Suministros del Estado - Alfonso Casini - Juan - Carlos Galardi - Sumario administrativo - Estatuto del Personal Civil - Nueva norma procesal - Aplicación - Intervención de la Junta de Disciplina

//ñor Secretario de Hacienda:

Esta Dirección entiende que si bien el presente sumario fue iniciado con fecha 11 de enero de 1957 -ver fs. 3- y las normas del Estatuto del Personal Civil de la Administración y su reglamentación comenzaron a tener vigencia - desde el 27 de junio de 1957 y 13 de febrero de 1958, respectivamente, son aplicables en el caso los preceptos contenidos en el Estatuto (art. 44) y su reglamentación (arts. 41-XIII y 44), que disponen la intervención de la Junta de Disciplina en todo sumario iniciado por razones disciplinarias.-

(º) Ver Digesto Administrativo nº 966.-

Es indudable, desde el punto de vista técnico-jurídico que tales normas son instrumentales o formales (conf. ALSINA, Hugo, "Tratado Teórico Práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial", t.1, p.38, Bs.As., 1941, y CARNELUTTI, Francisco, "Sistema de Derecho Procesal Civil", Bs.As., 1944, t.1, p.93), ya que "regulan los medios para dictar la solución e imponerla, atribuyendo para el efecto un poder jurídico a un determinado sujeto" y que, por lo tanto, no resuelven directamente un conflicto, actuando sobre la litis imponiendo obligaciones, es decir que no son "sustantivas o materiales".-

En efecto, dichas normas crean un nuevo órgano administrativo con competencia para dictaminar en todos los sumarios disciplinarios y establecen la forma en que deberá intervenir.-

Tratándose, entonces, de verdaderas normas procesales, es criterio reiterado de la doctrina y jurisprudencia que "no hay derecho adquirido a ser juzgado con arreglo a determinado procedimiento, y las leyes que lo reglan son aplicables a las causas pendientes mientras no afecten los actos concluídos o dejen sin efecto lo actuado con arreglo a leyes anteriores" (S.C.N., Fallos, Vol. 220, año 1951, t. 2, p. 729 y los allí citados).-

En el caso presente, se trata de un sumario administrativo en el que no ha recaído todavía resolución, y durante el trámite del cual se ha creado un nuevo órgano disciplinario competente para dictaminar, en forma tal que ninguno de los actos procesales cumplidos con anterioridad puede considerarse afectado por la aplicación de la nueva norma.

Atento a lo que resulta de las conclusiones que anteceden, estima, en síntesis, esta Dirección que debe procederse al envío de las presentes actuaciones a la Junta de Disciplina de la jurisdicción que corresponda, de acuerdo

con las normas que rigen en la actualidad (Estatuto del - Personal Civil, art. 44 y su reglamentación, arts. 41-XIII y 44).-

DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS, 4-9-958.-

Fdo. CRISTIAN GIMENEZ DEMARIA
Director General

Poder Ejecutivo Nacional
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº 981.-

LICENCIAS

M E M O R A N D U M

Producido por: Jefe del Departamento de Personal.-

Para información del: Señor Director General de Contabilidad y Administración.-

---

Por las presentes actuaciones el agente de la Dirección Nacional de Estadística y Censos, don PEDRO RODOLFO ALTEMIR (Clase D - Grupo III), solicita se le considere como licencia sin goce de haberes, las inasistencias en que incurrió desde el 30 de setiembre hasta el 22 de diciembre de 1958.

Al causante, en virtud de haber sido favorecido con una beca otorgada por la F.A.O. y la Administración Técnica de las Naciones Unidas, para realizar estudios en los Estados Unidos de América, relacionados especialmente, en métodos de muestreo agrícola, se le concedieron, a partir del 10 de setiembre de 1957, once meses de licencia con goce de haberes y con imputación al artículo 35º del Decreto Nº 12.720/53, modificado por el Nº 13.800/56, mediante Decreto Nº 11.132(S.H. 4.877) de fecha 16 de setiembre de 1957.

El citado agente, en virtud de haber sido notificado con posterioridad a la fecha en la cual debía iniciar el uso del aludido beneficio, comenzó a hacer efectivo el mismo a partir del 26 de setiembre de 1957, procediéndo-

se a rectificar el pronunciamiento que le acordó la mencionada licencia, por Decreto Nº 7.021 (S.H. 3.830), del 10 del actual.

Al término de la misma, la precitada Dirección Nacional, procedió a concederle licencia anual reglamentaria, desde el 26 de agosto hasta el 29 de setiembre último (fs. 4 vta.), no existiendo en este Departamento constancia de haber solicitado autorización para permanecer en el extranjero, transgrediendo así lo dispuesto en el punto 102º del Reglamento de Asistencia y Licencias, aprobado por Resolución Nº 8.264/56.

Habiendo finalizado la beca que le fuera otorgada en su oportunidad y ante la posibilidad de continuar sus estudios, el agente ALTEMIR continuó en los EE.UU., motivo por el cual solicita se le considere el período comprendido desde el 30 de setiembre hasta el 22 de diciembre de 1958, como licencia sin goce de haberes.

Frente a la situación que se señala, este Departamento estima conveniente requerir opinión al Tribunal de Cuentas de la Nación (Delegación Fiscalía ante la Secretaría de Hacienda), sobre la procedencia de la concesión que se efectuó al causante, del beneficio que establece el artículo 4º del Decreto Nº 12.720/53, por entender que si bien existe la obligatoriedad del descanso del agente luego de un lapso prudencial de tareas, que se gradúa según los años de servicios y teniendo en cuenta el propósito higiénico que motivara su implantación, su otorgamiento se encuentra supeditado, no solamente a que el agente se halle en actividad, sino además, en pleno ejercicio de las funciones inherentes a su cargo.

Buenos Aires, junio 24 de 1959.-

Fdo.ARMANDO A.TORNESE
Jefe
Departamento de Personal

Expediente Nº 963.249/58.-
Providencia Nº 339.-

//nos Aires, 3 de agosto de 1959.-

Vuelvan las presentes actuaciones a la Dirección General de Contabilidad y Administración llevando a su conocimiento lo siguiente:

I) Se cuestiona en el Memorándum de fs. 14/15 la procedencia de la concesión de licencia por vacaciones al causante, agente de la Dirección Nacional de Estadística y Censos, al término del lapso en que usufructuó de un beneficio similar, originado en la obtención de una beca para realizar estudios de perfeccionamiento estadístico en los Estados Unidos.- Se expresa en dicho informe que el otorgamiento de la licencia por vacaciones "se encuentra supeditado, no sólo a que el agente se halle en actividad, sino además en pleno ejercicio de las funciones inherentes a su cargo", temperamento que es compartido plenamente por esta Dirección General.

Cabe pues analizar cual era la situación del interesado mientras utilizara la licencia acordada por Decretos Nos. 11.132/57 y 7.021/59.

a) La beca acordada no fué la resultante de una gestión personal del empleado en cuestión. La Dirección Nacional de Estadística y Censos puntualiza en su informe de fs. 18/19 el proceso de la misma, originada en la realización, durante el año 1955, de un Centro Latinoamericano de Demostración de Técnicas de Muestreo Agrícola, bajo el auspicio conjunto del Gobierno Argentino y la Organización de las Naciones Unidas. Dicho convenio estipula la asignación de becas de especialización para los mejores alumnos del curso, habiendo recaído una de ellas en el causante, enviado a dicho curso por la aludida Repartición, a cuya dotación de agentes pertenecía.

Vale decir que la beca era una resultante de su condición de agente del Estado, intimamente relacionada con su tarea específica, a la cual eran de aplicación los estudios de especialización estadística a realizar, motivo por el cual la Repartición aludida consideró de suma utilidad el aprovechamiento integral de la beca ofrecida.

b) El art. 2º del decreto Nº 11.132/57 encargó al agente de referencia la realización de un informe vinculado con el estudio a realizar, con miras a la aplicación en nuestro medio de los conocimientos que adquiriese, el que debió ser presentado a la Repartición en que revistaba dentro de los 30 días hábiles de su regreso al país.

Es decir que el resultado de sus estudios debió ser puesto en conocimiento del organismo al que pertenecía, para su aprovechamiento en lo que fuera conveniente.

De los expuesto en los puntos a) y b) resulta en forma evidente que la licencia usufructuada ha tenido, en su gestión previa y en sus consecuencias inmediatas, una íntima relación con la situación del causante como empleado de la Dirección Nacional de Estadística y Censos. Debe inferirse de ello que la misma, durante el usufructo de la beca, no lo desligaba en manera alguna de su condición de agente al servicio activo del Estado, al que debía rendir cuenta de sus estudios, con el objeto de aplicar los conocimientos adquiridos.

Entiende esta Dirección General, en consecuencia, que su situación era similar a la de los agentes que prestaban servicio efectivo, y por lo tanto la licencia por vacaciones resultaba procedente al término de la beca otorgada.

II) Respecto del incumplimiento de la norma del punto 102º de la Resolución M.H. 8.264/56 (') (autorización para trasladarse al exterior durante el lapso que dure la licencia por vacaciones), se estima que no sería de apli-

(') Ver Digesto Administrativo Nº 16.-

cación estricta en el caso en cuestión, toda vez que el interesado ya se encontraba fuera del país, como resulta do de una autorización en tal sentido otorgada por el Po der Ejecutivo Nacional, el que dispuso asimismo el otorgamiento del pasaje correspondiente hasta el lugar de destino del becario.-

DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO CIVIL DE LA NACION.

Fdo. JOSE LUIS FRANGI
Director General

Poder Ejecutivo Nacional
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº 982.-

ESCALAFON PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL (punto 26º) - SUBSIDIO FAMILIAR

Buenos Aires, 28 de Septiembre de 1959.-

Visto el Expediente nº 90.382/59 (D.N.M. 610.874/59), y

CONSIDERANDO:

Que la Resolución S.H. nº 7.142/59 (1) establece, a los fines de la liquidación del subsidio familiar, que se considera "a cargo" al cónyuge cuando conviva con el agente y éste atienda su subsistencia;

Que el requisito de la convivencia fué establecido como una norma general, con vista a las situaciones de matrimonios separados de hecho, por propia voluntad;

Que en el caso planteado en el expediente a que se hace referencia, el agente recurrente, casado en el extranjero, ha solicitado y obtenido de las autoridades migratorias de nuestro país el permiso de ingreso al mismo de su esposa, el que no puede efectivizarse por la circunstancia de que las autoridades del país en que reside aquélla no permiten su salida;

Que en tales condiciones, debidamente documentadas, la no convivencia de los cónyuges no puede ser atribuída a la voluntad del recurrente ni de su esposa, no existiendo así una separación voluntaria;

(1) Ver Digesto Administrativo nº 781.-

Que el causante ha presentado comprobantes de las remesas de dinero que efectúa periódicamente a su esposa, lo que resultaría probanza de que atiende a su subsistencia ;

Que la Dirección General del Servicio Civil de la Nación considera que las circunstancias apuntadas son suficientes como para determinar la procedencia del beneficio cuestionado, por sus características excepcionales;

Por ello, y atento a las facultades conferidas por los Decretos nros. 9530/58 (art. 13°) y 4631/59 (") (artículo - 5°);

EL SECRETARIO DE HACIENDA
R E S U E L V E:

1° - Considerar procedente la liquidación del subsidio familiar (punto 26° del Escalafón aprobado por Decreto n° 9.530/58) dentro de las condiciones y formalidades establecidas en el Decreto n° 4.631/59, en el caso del agente del Ministerio del Interior - Dirección Nacional de Migraciones-, D. Juan Durcansky, quien deberá acreditar periódicamente, ante el servicio administrativo correspondiente, el envío de ayuda pecuniaria a su cónyuge.-

2° - Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, y archívese.-

Fdo. GUILLERMO W. KLEIN.

RESOLUCION N° 8.119.-

(") Ver Digesto Administrativo n° 738.-

Poder Ejecutivo Nacional
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº 983.-

ASISTENCIA

Buenos Aires, 9 de Octubre de 1959.-

Visto el pedido formulado por la Junta Central de la - Acción Católica Argentina para que se autorice la justificación de las inasistencias en que incurra el personal del Estado con motivo de su participación en el VIº Congreso - Eucarístico Nacional a realizarse en la ciudad de Córdoba entre los días 7 y 11 del corriente mes de octubre, y

CONSIDERANDO:

Que dada la formación católica de la mayoría del pue - blo argentino debe descontarse la concurrencia a esa magna asamblea de numerosos agentes de la ciudad de Córdoba y de otros puntos del país;

Que es deseo del Poder Ejecutive facilitar esa partici pación en la medida en que no se perjudique la prestación de los servicios a cargo del Estado;

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA
D E C R E T A :

Artículo 1º.- Autorízase a los Ministerios, Secretarías - de Estado, organismos descentralizados y empresas del Esta do a justificar con goce de haberes las inasistencias en que incurra su personal para participar en el VIº Congreso

Eucarístico Nacional.-

Artículo 2º.- Dicha justificación podrá incluir hasta dos días posteriores a la clausura del Congreso, cuando se trate de personal que se ha trasladado desde lugares alejados de la sede del mismo.-

Artículo 3º.- Los organismos mencionados en el artículo - 1º verificarán por los medios de control a su alcance la efectiva participación en el Congreso de los agentes que - se acojan a estos beneficios.-

Artículo 4º.- Las ausencias deberán ser previamente autorizadas por los organismos competentes, quienes deberán adoptar las medidas pertinentes para asegurar la debida prestación de los servicios.-

Artículo 5º.- El presente decreto será refrendado por los señores Ministros Secretarios en los Departamentos de Interior y de Relaciones Exteriores y Culto.-

Artículo 6º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.-

FRONDIZI - Alfredo R. Vítolo
Diógenes Taboada.-

DECRETO Nº 12.648.-

Boletín Nº 984.-

DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO CIVIL DE LA NACION - PERSONAL - BOLSA DE TRABAJO

Buenos Aires, 23 de octubre de 1959.-

Visto estas actuaciones en las que el Tribunal de Cuentas de la Nación en uso de las facultades que le han sido acordadas por el Artículo 85ºa) de la Ley de Contabilidad, observa el Decreto Nº 9.718/59 (') por entender que las transferencias previstas en sus Artículos 6ºy 7º enervan lo expresamente dispuesto en el Artículo 35º del Decreto-Ley Nº 23.573/56 (") modificado por su similar Nº 3.891/57 (•), en cuanto que el personal debe desempeñarse en la función para cuyo fin ha sido prevista la partida con cargo a la cual se atiende su remuneración y prohibe las adscripciones entre los distintos Ministerios, y

CONSIDERANDO:

Que las disposiciones del mencionado Artículo 35º están orientadas principalmente a impedir el discrecionalismo en materia de adscripciones, a fin de evitar que el uso indiscriminado de ese sistema de afectación de personal perturbe el normal desenvolvimiento de los planes de trabajo;

Que el propósito que anima a las cláusulas observadas, además del de coadyuvar a la reducción de los gastos pú-

(') Ver Digesto Administrativo Nº 854.-
(") Ver Digesto Administrativo Nº 141.-
(•) Ver Digesto Administrativo Nº 213.-

blicos promoviendo el desplazamiento de agentes hacia la actividad privada, es el de posibilitar una racional distribución de personal con miras a lograr una mayor efectividad y mejores condiciones de trabajo, extremos éstos que resultan concordantes con los perseguidos por el aludido Artículo 35°, en mérito a que ambos resultan instrumentos que conducen a un solo objetivo principal, cual es el de perfeccionar el mecanismo funcional de la Administración Pública Nacional;

Que por otra parte el Artículo 7° del Decreto número 9.718/59 al determinar que el agente que sea motivo de traslado se desempeñará en su nuevo destino "en comisión", hasta tanto sea incorporado al presupuesto respectivo, ya sea mediante la transferencia del cargo o habilitación de la vacante necesaria, fija procedimientos que conducen a regularizar su situación de revista, circunstancia que en su esencia define un propósito coincidente con el espíritu del precitado Artículo 35°;

Por ello, y atento lo propuesto por la Secretaría de Estado de Hacienda,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

Artículo 1°.- Insístese en el cumplimiento del Decreto N° 9.718 de fecha 12 de agosto de 1959.

Artículo 2°.- El presente Decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda.

Artículo 3°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y pase al Tribunal de Cuentas de la Nación para su conocimiento y demás efectos.-

FRONDIZI - Alvaro C. Alsogaray - Guillermo W. Klein.

DECRETO N° 13.387.-

Poder Ejecutivo Nacional
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº 985.-

ESCALAFON PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL (punto 52º) - ANTIGÜEDAD - LOTERIA DE BENEFICENCIA NACIONAL Y CASINOS (CASINOS)

Buenos Aires, 23 de octubre de 1959.-

Visto los expedientes nros. 52.798/59 y 90.247/59, de la Secretaría de Estado de Hacienda, en los que se plantea el reconocimiento de servicios a personal de la Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos, y de la Junta Nacional de Granos, y

CONSIDERANDO:

Que el punto 52º, inciso c), del Escalafón aprobado por decreto nº 9.530/58 establece que la antigüedad que registra cada agente se determinará tomando en cuenta, entre otros, los servicios prestados en instituciones, entidades o empresas privadas incorporadas al patrimonio nacional, provincial o municipal;

Que el caso de las Reparticiones a que se hace referencia, no es exactamente el previsto en el aludido Escalafón;

Que en lo concerniente a la Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos, mediante decreto nº 31.090/44 se declaró la caducidad de las concesiones otorgadas por los gobiernos provinciales a empresas o personas jurídicas privadas, para la explotación de casinos o salas de juego, declarando de utilidad pública y sujetos a expropiación los inmue-

bles, muebles y demás enseres afectados a este servicio, y posteriormente, por decreto nº 7.865/46, se encargó à la aludida Repartición la explotación, manejo y administración de los mismos, facultándose al Ministerio del Interior para convenir el arrendamiento, cesión o utilización temporaria de los inmuebles hasta tanto se decidiera su expropiación;

Que dichas medidas de gobierno no establecieron expresamente el régimen de incorporación del personal afectado a las mismas, pese a lo cual, y a efectos de que el aludido organismo pudiera dar cumplimiento a la misión que le fijaba el decreto nº 7.865/46, se produjo la incorporación del citado personal al presupuesto de la cuenta que atendió las erogaciones emergentes del cumplimiento del referido acto legal;

Que en tales condiciones la situación de dicho personal es similar al de las empresas, instituciones o entidades privadas que fueron incorporadas al patrimonio del Estado, ya que no se produjo discontinuidad en la prestación del servicio por parte del personal afectado, que continuó en su misma tarea y con sus mismas obligaciones, cambiando solamente su dependencia, que pasó a ser el Estado;

Que en el caso de la Junta Nacional de Granos se reproduce, con algunas variantes, esta misma situación; ya que por decreto nº 10.107/44 se declaró de utilidad pública el uso de todas las instalaciones destinadas al comercio de granos ubicadas en zonas portuarias, la caducidad de los arrendamientos y cesiones de depósitos para el almacenamiento de los mismos y otras medidas conexas, todo lo cual pasó a poder de la Comisión Nacional de Granos y Elevadores, determinándose en el art. 14º del citado decreto que dicha Comisión mantendría todo o parte del personal permanente que prestaba servicios a la fecha del pronunciamiento, el que quedaría en comisión por el término de un año;

Que los servicios prestados por el personal afectado en las empresas incluídas en los decretos nros. 10.107/44 y 9.626/46 -que complementó al anterior-, le fueron reconocidos, a todos los efectos, mediante Resolución del Banco Central de la República, de fecha 9 de abril de 1948, dentro de determinadas condiciones que en la misma se especifican, situación que se ha mantenido a través de los sucesivos escalafones otorgados al personal de aquella Junta mediante decretos nros. 23.471/56 y nº 5.848/58.

Que en tales condiciones, no resultaría equitativo restringir tales beneficios al incorporar a dicho personal al Escalafón aprobado por decreto nº 9.530/58, pues se afectarían de tal modo derechos que han sido plenamente ejercitados;

Que, en consecuencia, y de acuerdo con lo propuesto por la Secretaría de Estado de Hacienda, corresponde determinar la procedencia del cómputo de servicios a que se ha hecho referencia, mediante el pronunciamiento que amplía la norma del punto 52º, inciso c), del Escalafón,

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA
D E C R E T A :

Artículo 1º.- A los fines del cómputo de antigüedad previsto en el punto 52º, inciso c), del Escalafón aprobado por decreto nº 9.530/58 considérase comprendidos, en las condiciones establecidas en el mismo, los servicios del personal de los Casinos y Salas de Juego cuyas concesiones fueran declaradas caducas mediante decreto nº 31.090/44, que prestaban servicio en los mismos a la fecha del referido pronunciamiento.-

Artículo 2º.- Reconócese, asimismo, a los fines indicados en el art. 1º, en las condiciones fijadas en el punto 52º, inciso c), del Escalafón, los servicios prestados en las

firmas o empresas propietarias de elevadores y otras instalaciones expropiadas en virtud de los decretos nros.10.107/44 y 9.626/46, o de otros dictados en consecuencia del art. 14º de la ley nº 11.742, por los empleados y obreros, y los jornaleros accidentales con un mínimo de doscientos días de trabajo efectivo por año, que a la fecha del acto gubernativo que dispuso la expropiación se hallaban prestando servicio en las mismas. Queda comprendido en el beneficio que se establece precedentemente el personal que por las causas indicadas en el mismo hubiera sido incorporado a la Junta Nacional de Granos, en las siguientes condiciones:

1º.- El personal que prestaba servicios en las instalaciones expropiadas o en tareas complementarias vinculadas a la explotación de esas instalaciones en las oficinas administrativas de las firmas propietarias;

2º.- El personal que prestaba servicios en dichas empresas en el ramo de cereales o en tareas vinculadas a la explotación de las instalaciones expropiadas y que hubiere sido destinado o trasladado por aquéllas, como consecuencia de la expropiación, a firmas filiales directas o subsidiarias computándose tanto los servicios prestados en el orden indicado, como los que se hubieren prestado en la firma filial o subsidiaria con anterioridad o con posterioridad a la fecha de la expropiación y los que se hubieren prestado en forma alternativa;

3º.- El personal proveniente de firmas o empresas que no fueren propietarias de elevadores u otras instalaciones expropiadas, pero que por razón de su actividad en el ramo hubieren estado vinculadas a la explotación o conservación de dichas instalaciones;

4º.- El personal que como consecuencia de la expropiación hubiere sido suspendido o separado de sus funciones y que hubiere ingresado posteriormente a la mencionada Junta Na-

cional.-

Artículo 3º.- A los fines determinados en los dos artículos precedentes no serán computados los lapsos de servicio que hubieran dado lugar a pago de indemnización por despido, de acuerdo con la ley nº 11.729.-

Artículo 4º.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía, y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda.-

Artículo 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y Archívese.-

FRONDIZI - Alvaro C. Alsogaray
Guillermo W. Klein.-

DECRETO Nº 13.380.-

Poder Ejecutivo Nacional
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº 986.-

LEY DE CONTABILIDAD - CONTRATACIONES

Buenos Aires, 7 de octubre de 1959.-

Visto el inciso 22 de la reglamentación del artículo 61 de la Ley de Contabilidad aprobada por Decreto número 9.400/57, que dispone que las contrataciones deberán formalizarse en una sola vez para cada ejercicio o por períodos semestrales o trimestrales según la naturaleza, y

CONSIDERANDO:

Que el Estado, no obstante las severas medidas de economía actualmente en ejecución, constituye -dentro de la plaza- un comprador de importancia, por el volumen y monto total de las adquisiciones y servicios que, normalmente, debe contratar;

Que, dentro de las diversas medidas integrantes del plan de estabilización, se estima llegado el momento de considerar al Estado, precisamente en esa situación de adquirente, con miras a evitar que -por el gran volumen y simultaneidad de esas contrataciones- pueda influir en determinados casos en forma desfavorable para la política de estabilización en que se halla empeñado el Poder Ejecutivo Nacional;

Que, en tal sentido, se estima conveniente autorizar contrataciones por plazos menores que los previstos en el inciso 22 de la reglamentación vigente del artículo 61 de la Ley de Contabilidad;

Que, en tal forma podrá lograrse una mayor competencia, al haber mayor cantidad de oferentes atento los pla

zos más reducidos, como asimismo se obtendrán mejores precios para el Estado. También como consecuencia de esos menores plazos los proveedores habituales o de rutina, deberán enfrentar esa mayor competencia, con la cual se logrará una reactivación saludable, tanto para el Estado como para los particulares proveedores;

Que, con el procedimiento de que se trata, se dá solución de carácter práctico y dentro de las normas legales, a diversos problemas que motivaron distintas gestiones de Ministerios, Secretarías y Reparticiones Nacionales;

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

Artículo 1º.- Las contrataciones que tengan por objeto - los suministros en general o prestaciones de servicios, a cumplirse en el ejercicio 1959/60, podrán concretarse por períodos trimestrales.

Artículo 2º.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario en el Departamento del Interior, a cargo interinamente del Ministerio de Economía y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda.

Artículo 3º.- Tómese nota, comuníquese al Tribunal de Cuentas de la Nación, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y vuelva a la Dirección - General de Suministros del Estado, a sus efectos.

FRONDIZI - Alfredo R.
Vítolo - Guillermo W.
Klein.

DECRETO Nº 12.606.-

Poder Ejecutivo Nacional
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO.

Boletín Nº 987.-

CONTRATACIONES (Rescisión)

Buenos Aires, 22 de Octubre de 1959.-

Visto las actuaciones acumuladas en el Expediente nº 1.579/59 del registro de la Secretaría de Hacienda, y

CONSIDERANDO:

Que por decreto nº 9.026 del 29 de Julio de 1959 (1), se facultó a las reparticiones de la Administración Pública Nacional para rescindir los contratos de suministros, servicios u otros conceptos, concertados hasta el 31 de diciembre de 1958, o posteriormente, si el acto de apertura de las respectivas propuestas se hubiera realizado hasta esa fecha;

Que ha provocado algunas dudas el ámbito de aplicación de dicho decreto en cuanto a si el mismo alcanza a las empresas del Estado, por lo que resulta conveniente definir afirmativamente la cuestión en razón de que ese es el espíritu del mencionado decreto nº 9.026/59, cuyos efectos deben involucrar por igual a todos los contratantes con el Estado, cualquiera sea la naturaleza jurídico-administrativa de las dependencias, reparticiones o entidades con las cuales hubiesen concertado operaciones, siempre que se reunan los requisitos y condiciones que aquel decreto regla expresamente;

---

(1) Ver Digesto Administrativo nº 844.-

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA
D E C R E T A :

Artículo 1º.- Aclárase que las disposiciones del Decreto nº 9.026 de fecha 29 de julio de 1959 son de aplicación en todos los organismos integrantes de la Administración Pública Nacional, inclusive los entes descentralizados y las empresas del Estado.-

Artículo 2º.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda.-

Artículo 3º.- Comuníquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.-

FRONDIZI - Alvaro C. Alsogaray - Guillermo W. Klein.-

DECRETO Nº 13.334.-

Poder Ejecutivo Nacional
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº 988.-

PASAJES OFICIALES - ORDENES DE CARGA

Buenos Aires, 22 de octubre de 1959.-

Visto el expediente Nº 10.184 (D.N.A.C.), Nº 23.655 Cde. 11 (S.A.), lo solicitado por el señor Secretario de Estado de Aeronáutica, y lo propuesto por el señor Ministro Secretario en el Departamento de Defensa Nacional, y

CONSIDERANDO;

Que por Decreto Nº 15.896/49 (') existe la obligatoriedad de utilizar los medios de transporte de propiedad del Estado, en los desplazamientos que deban realizar los funcionarios del Estado en misión oficial, tanto dentro como fuera del país, criterio que también debe regir para el despacho de cargas, equipajes y efectos;

Que, en lo concerniente al transporte aéreo, la demora en los pagos por parte de los organismos de la Administración origina problemas de carácter financiero, agravados considerablemente en lo que a Aerolíneas Argentinas respecta, por los pagos que a su vez dicha Empresa del Estado debe realizar en plazos perentorios a terceros transportadores aéreos, en divisas extranjeras, cuando se trata de transporte fuera de sus propias líneas o en conexión con sectores más allá de los servicios cubiertos por la red de dicha Empresa;

Que las circunstancias apuntadas hacen necesario dictar normas complementarias de las que rigen conforme al

(') Ver Digesto Administrativo Nº 106.-

Decreto Nº 15.896/49, a efectos de evitar los perjuicios de orden económico-financiero que originan a Aerolíneas Argentinas las demoras en los pagos y las diferencias de cambio entre las tarifas originalmente aplicadas y las que deben satisfacerse a otros transportadores aéreos en los vuelos en conexión con Aerolíneas Argentinas o sobre sectores no comprendidos en la red de servicios de dicha Empresa del Estado,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

Artículo 1º.- Los ministerios, secretarías de Estado, organismos autárquicos, empresas del Estado y, en general todos los organismos oficiales que dependan del Estado Nacional, deberán acordar a la Empresa del Estado Aerolíneas Argentinas la preferencia establecida por Decreto Nº15896/49, en todos los casos en que deben realizarse viajes de funcionarios o transportes de materiales o efectos por vía aérea, tanto dentro como fuera del país.

Artículo 2º.- La Empresa del Estado Aerolíneas Argentinas facturará los importes respectivos a las tarifas en vigor a la fecha de concretarse el transporte, debiendo dichas facturas ser abonadas indefectiblemente dentro de los treinta (30) días de presentadas ante el Ministerio, Secretaría, Repartición u organismo que originó el transporte.

Artículo 3º.- Cuando el transporte se refiera a servicios de otros transportadores, por tramos en conexión o no volados por los servicios propios de Aerolíneas Argentinas, el valor de tal transporte será facturado por Aerolíneas Argentinas, y abonado a ésta por el mismo importe total y clase de moneda en que el transportador correspondiente formule el cargo respectivo a dicha Empresa del Estado de acuerdo a las tarifas básicas que rijan para el viaje o

sector involucrado.

Artículo 4º.- El presente decreto será refrendado por los señores ministros secretarios en los departamentos de Defensa Nacional, de Interior, de Relaciones Exteriores y Culto, de Economía e interino de Trabajo y Seguridad Social, de Educación y Justicia, de Asistencia Social y Salud Pública y de Obras y Servicios Públicos y firmado por el señor Secretario de Estado de Aeronáutica.

Artículo 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y vuelva a la Secretaría de Aeronáutica.

FRONDIZI - Alberto R. Costantini - Héctor V. Noblía - Luis R.Mac Kay - Alvaro C. Alsogaray - Justo P. Villar - Diógenes Taboada - Alfredo R. Vítolo - Ramón A. Abrahín.

DECRETO Nº 13.134.-

Poder Ejecutivo Nacional

SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA

DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº 989.-

PRESUPUESTO - OBRA SOCIAL - RESOLUCION DEL TRIBUNAL DE - CUENTAS DE LA NACION

Buenos Aires, 27 de octubre de 1959.-

Visto las dificultades con que tropieza el Tribunal de Cuentas para el cumplimiento de su cometido en todo cuanto se refiere a la fiscalización que ejerce sobre el aporte - estatal a las obras sociales que funcionan en las reparticiones de la Administración Pública, y

CONSIDERANDO:

Que tales inconvenientes son motivados en gran parte - por la diversidad de matices que ofrece la citada contribución oficial;

Que comprobaciones realizadas al efecto permiten dar - algunos ejemplos de las distintas formas que concretan la ayuda del Estado y que pueden así expresarse:

1) figuración en el presupuesto general como una dependencia más dentro del anexo respectivo;

2) inclusión de partidas específicas tanto en gastos - en personal como en gastos generales;

3) contribuciones globales expresas consignadas en el anexo pertinente;

4) asignación de créditos tomados de las partidas generales de presupuesto mediante distribuciones ju-

risdiccionales, aun cuando aquéllas no citen expresamente esta finalidad;

5) adscripción informal de personal que revista en las partidas generales de la repartición;

6) utilización de edificios y locales fiscales o alquilados por el Estado, uso de mobiliario, útiles, automotores, combustibles y bienes en general adquiridos con partidas no asignadas para las obras sociales.-

Que al hecho de no haberse determinado aun por una ley específica la naturaleza jurídica de las obras sociales en general, se suma el problema que crea las distintas caracterizaciones legales con que se distinguen a esas entidades, puesto que existen aquellas que actúan como organizaciones de derecho privado y otras que han sido instituídas expresamente como de derecho público por sus respectivas disposiciones de creación;

Que las circunstancias apuntadas en los considerandos anteriores dificultan la correcta fiscalización por parte de las representaciones de este cuerpo;

Que frente a la urgente necesidad de regularizar esta situación el Tribunal de Cuentas -por nota nº 139/I.A. de fecha 3 de julio del año en curso- la sometió a consideración de la Secretaría de Hacienda, solicitando una solución integral para que a partir del próximo ejercicio financiero las obras sociales se ajustarán a una estructura orgánica y presupuestaria perfectamente definida y uniforme;

Que encontrándose ya próxima la iniciación del citado ejercicio sin que se tenga conocimiento de que se hayan dispuesto medidas tendientes a lograr la finalidad perseguida corresponde a este cuerpo dictar normas que faciliten el cumplimiento de su cometido sin tener que admitir -

situaciones de dudosa procedencia frente a las disposiciones de la ley de contabilidad;

Que en orden a ello el Tribunal de Cuentas o sus representantes, en su caso, no podrán dar curso a actuaciones que impliquen erogaciones, de cualquier naturaleza, cuando estas estén destinadas a las obras sociales y afecten partidas que no expresen claramente ese destino;

Que tampoco puede conformar, en materia de gastos en personal, documentación alguna cuando de ella surja que el agente prestó servicios en dichas obras sociales, imputándose sus haberes a partidas no previstas para ese destino;

Por todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA NACION
R E S U E L V E :

Artículo 1º.- A partir del día 1º de noviembre próximo - los representantes del Tribunal de Cuentas, cualquiera sea la instancia en que intervengan, solo darán curso a las actuaciones que impliquen afectar las partidas del presupuesto general con erogaciones destinadas a las obras sociales cuando esta finalidad esté expresamente prevista en el crédito imputado.-

Artículo 2º.- Cuando dichos representantes intervengan documentación relacionada con gastos en personal se abstendrán de conformarla si de ella surgiera que el agente prestó servicios en obras sociales revistando en partidas arbitradas para otros fines.-

Artículo 3º.- Los citados funcionarios comunicarán, asimismo a los respectivos servicios centrales del Tribunal toda asignación de inmuebles -fiscales o locados por el Estado- para su utilización por las obras sociales, como así tam -

bién la entrega a esas instituciones de bienes de uso o - consumo adquiridos con partidas previstas para otros destinos.-

Artículo 4º.- Comuníquese a la Secretaría de Estado de Hacienda y a los jefes de los servicios administrativos con nota de estilo; dése al Digesto Administrativo y archívese.

JOSE M. FERNANDEZ FARIÑA - Damián Figueroa - Rodolfo J. Tarelli - Wifredo Dedeu - Antonio M. Pérez Arango - Juan Carlos Pastene-Secretario-

RESOLUCION Nº 1.919/59.-

Poder Ejecutivo Nacional
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº 990.-

LICENCIAS

Ref. nota Nº 670/59.-
Providencia Nº 458.-

Señor Subsecretario:

Respecto de la consulta formulada precedentemente - por el Tribunal de Cuentas de la Nación acerca de la limitación de las licencias extraordinarias previstas en el artículo 31º del decreto Nº 12.720/53 (1), esta Dirección General considera lo siguiente:

Las licencias extraordinarias sin goce de haberes, - concedidas por asuntos familiares o particulares, constituyen un derecho, el que no debe ser entendido como absoluto y arbitrario, es decir, que pueda ser ejercitado por el agente con prescindencia total de las necesidades de la Administración.

Todo derecho reconoce limitaciones en su ejercicio, en aras del interés público. Tal conclusión se impone si se considera el vínculo o nexo que relaciona al agente - de la Administración Pública con el Estado. El contrato de trabajo supone como elemento esencial la subordina- - ción o dependencia, y ésta se manifiesta entre otras formas, mediante la obligación del empleado de poner sus - servicios a disposición del empleador -en este caso el - Estado-, y éste retribuir mediante la remuneración estipulada.

No es concebible la pretensión de ejercer un derecho aún contra el interés del servicio al cual el recurrente

(1) Ver Digesto Administrativo Nº 15.-

se encuentra afectado, y en tales condiciones cabe concluir que es procedente la limitación o cancelación de una li - cencia concedida en los términos del art. 31º del decreto Nº 12.720/53, cuando razones del servicio así lo imponen.

DIRECCION GRAL. DEL SERVICIO CIVIL DE LA NACION, 1-10-1959.

Fdo. JOSE LUIS FRANGI
Director General

//nos Aires, 5 de octubre de 1959.-

Con lo informado precedentemente por la Dirección General del Servicio Civil de la Nación, vuelvan estos actuados al Tribunal de Cuentas de la Nación.

Sirva la presente de atenta nota de remisión.-

Fdo. RAFAEL RODOLFO AYALA
Subsecretario de Hacienda

Poder Ejecutivo Nacional
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº 991.-

ESTATUTO PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL (Arts. 40º y 41º) - SUMARIOS

Expte. Nº 90.404/59.-

Buenos Aires, 1º de octubre de 1959.-

Señor Presidente de la Lotería de
Beneficencia Nacional y Casinos
D. REINALDO BRENNA
S / D.

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en respuesta a la consulta que formulara mediante expte. Nº 681/58 Cde. 22 (90.404/59), acerca de los procedimientos a seguir en lo referente a la aplicación de los artículos 40º y 41º del Estatuto del Personal Civil y su Reglamentación.

Al respecto transcribo a continuación la parte pertinente del informe elevado por esta Dirección General al señor Subsecretario de Hacienda, mediante providencia Nº 406, del 9/9/59:

"a) Cuando el inculpado, al tomar vista de lo actuado, "(art. 41º, punto XIII, de la Reglamentación del Estatu- "to) solicite la realización de diligencias o medidas de "prueba, en su descargo, resulta procedente aplicar el - "procedimiento establecido en el punto IX del aludido - "art. 41º.

"b) Una vez realizadas las diligencias o medidas de -

"prueba ofrecidas por el inculpado -en el caso de haber - "las considerado procedentes- corresponde que el sumarian "te las analice y formule las nuevas conclusiones que de "ellas resulten".

Respecto de la consulta formulada como punto c), se - transcribe asimismo la parte pertinente del dictamen producido por la Dirección General de Asuntos Jurídicos de - esta Secretaría en el expte. Nº 34.407/59 (') (Dictamen - Nº 201, del 22/7/59):

"Con relación a las declaraciones tomadas por el ins - "tructor, luego de dar vista al imputado de las conclusio "nes que resultaban del sumario, se consulta si el proce- "dimiento contraviene la norma del art. 41, apartado XIII, "primer párrafo de la reglamentación del Estatuto que dice: "Cuando el instructor disponga el cierre del sumario, for "mulará las conclusiones que resulten de lo actuado, lue- "go de lo cual dará vista al imputado para que presente - "su alegato de defensa, sobre la base concreta de las im- "putaciones y cargos consignados en el informe del instruc "tor, dentro del término establecido en el artículo 41º - "del Estatuto.

"Se interpreta que la vista se confiere luego de cerra "do el sumario y que una vez contestada, el instructor - "queda desligado del procedimiento, debiendo limitarse a "remitir las actuaciones a la Junta de Disciplina, confor "me así lo dispone el segundo párrafo del apartado XIII.

"Pero lo cierto es que el sentido exacto del texto de- "be ser desentrañado relacionándolo con la norma del Esta "tuto que reglamenta y que dice así: "art. 41. El sumario "será secreto hasta que el sumariante dé por terminada la "prueba de cargo. En ese estado se dará vista de tres a - "diez días al inculpado para que el mismo efectúe sus des "cargos y proponga las medidas que crea oportunas para su defensa".

"El juego armónico de ambas disposiciones lleva a dis-

(') Ver Digesto Administrativo Nº 926.-

"currir de la siguiente manera: el inculpado toma vista "del sumario y propone medidas para su defensa (en el ca_ "so presente, nuevas declaraciones); el instructor provee "de conformidad con lo solicitado y de hecho se produce "la ampliación del mismo; cumplidas las medidas solicita_ "das, debe ampliar también las conclusiones que le sugie_ "re el sumario y dar nueva vista al imputado, hecho lo - "cual corresponde el paso de las actuaciones a la Junta "de Disciplina.

"En otras palabras, una interpretación coherente del "art. 41 del Estatuto y de la respectiva norma reglamen- "taria, lleva a la conclusión de que no puede disponerse "el cierre del sumario mientras no se hayan practicado - "todas las diligencias de prueba que se consideren perti_ "nentes. Luego, si al contestar la vista el imputado pro_ "pone medidas y se dispone su realización, tanto en el - "caso de la ampliación del sumario como en el de la adop_ "ción de otras medidas para mejor proveer (art. 44 de la "reglamentación), el principio de bilateralidad de la - "prueba que es esencial en el procedimiento, exige que "se corra vista al sumariado de las nuevas diligencias, "ya que el contralor de ellas que en esa oportunidad se "le ofrece, constituye la garantía necesaria para la de- "fensa de sus derechos".

En cuanto, al punto d), cabe establecer que el térmi_ no acordado al inculpado para que tome vista y efectúe - sus descargos, debe considerarse independientemente en cada caso, vale decir que en cada una de las vistas po - drá hacer uso del plazo máximo estipulado.

Saludo al señor Presidente con atenta consideración.-

Fdo. JOSE LUIS FRANGI
Director General
Servicio Civil de la Nación

Poder Ejecutivo Nacional
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº 992.-

ESTATUTO PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL (Arts. 39º y 41º) - SUMARIOS - JUNTA DE DISCIPLINA

Expediente S.H. Nº 90440/59.-
Expte. M.A.S.S.P. Nº41056/59.-

Dirección General de Despacho:

I

Por estas actuaciones, la Dirección General Inmobiliaria dependiente de la Secretaría de Hacienda de la Nación, da cuenta de que la agente de este Departamento de Estado, Sra. OLGA BLANCA CASTAÑEDA de DE LA CUEVA habría cometido el delito de usurpación contra la Administración Nacional.

En consecuencia, considera que la aludida se encontraría incursa en la causal de exoneración prevista por el art. 38º del Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública Nacional, que fulmina con dicha sanción al personal que cometa "delito contra la Administración" (Inciso c).

Del informe del Departamento de Inmuebles Fiscales - cuya copia obra a fs. 2, resulta que la causante, violentando las cerraduras, penetró en el departamento nº 2, Monoblock de Comercio nº 5, Manzana 8, Sección 4, Circunscripción 1 del Barrio General Belgrano. La citada se habría instalado en el mismo con sus seis hijos menores ha

biéndose negado a aceptar la comodidad que, para obtener la más rápida desocupación del departamento, se le consiguiera en la obra social "Emaus". Ante una posterior gestión personal, habría manifestado que por ningún concepto haría abandono del departamento, profiriendo amenazas de muerte contra quien intentara sacarla de allí; en consecuencia, estima el citado Departamento que sólo restaría proceder, por medio de la Procuración del Tesoro, a la iniciación de la pertinente acción penal.

A fs. 3 la Dirección General del Personal informa que la Sra. de DE LA CUEVA (Legajo nº 12.684), revista en funciones de mucama en el Policlínico de Ezeiza, y remite los actuados a este organismo asesor para los fines consiguientes.

II

Esta Dirección General entiende que, para que proceda la exoneración de la causante por la causal determinada en el art. 38º, inc. c) del decreto-ley 6666/57 (1), debe mediar sentencia judicial firme que establezca la real existencia de un delito contra la Administración. Por lo demás, atento a lo dispuesto por el art. 40º de la misma norma, no es factible aplicar tal sanción sin la instrucción previa del sumario respectivo.

Ahora bien, siendo la Dirección General Inmobiliaria la danmificada por la conducta de la causante, y tratándose de un hecho manifiestamente ajeno al servicio, corresponde que sea aquella Repartición la que instruya el pertinente sumario, sin perjuicio de elevar oportunamente sus conclusiones a este Departamento de Estado a efectos de la aplicación de la pertinente sanción disciplinaria.

Asimismo, corresponde a aquel organismo efectuar la denuncia del hecho ante las autoridades respectivas atento lo dispuesto por el art. 164 del Código de Procedimien

(1) Ver Digesto Administrativo Nº 254.-

tos en lo Criminal, efectuando la pertinente comunicación a este Ministerio a efectos de lo dispuesto en el art. 39º, apartado I) del decreto Nº 1471/58(").

Igualmente la misma Dirección General Inmobiliaria habrá de adoptar las medidas del caso para que el Sr. Procurador Fiscal que corresponda promueva las pertinentes acciones -penales y/o civiles- para obtener el desahucio de la Sra. de DE LA CUEVA de las comodidades que ocupa indebidamente en el Barrio General Belgrano.

Finalmente, una vez sustanciado el sumario de rigor, esa dependencia deberá elevar las actuaciones al Tribunal de Cuentas de la Nación a los efectos de la formulación del cargo que pueda corresponder por el perjuicio fiscal que dicha ocupación indebida hubiera producido.

A los efectos indicados, se aconseja girar estos actuados en devolución a la Dirección General Inmobiliaria dependiente de la Secretaría de Hacienda de la Nación.

DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS, julio 13 de 1959.-

Fdo. JUAN G. DE SOUZA LOBO
Director General

Expediente Nº 90440/59 S.H.-
Expte.Nº 41056/59 M.A.S.S.P.-
Providencia Nº 434.-

Señor Subsecretario:

En el caso planteado considera esta Dirección General lo siguiente:

a) efectuada por intermedio de la Dirección General

(") Ver Digesto Administrativo Nº 422.-

Inmobiliaria la denuncia ante las autoridades policiales, y remitida la pertinente comunicación a la Procuración - del Tesoro de la Nación a efectos de que promueva las acciones penales y/o civiles que correspondan, por estimarse que la inculpada cometió hechos sancionados por el Código Penal en su art. 181 -Usurpación-, corresponde aplicar en la emergencia las disposiciones del art. 39° de la Reglamentación del Estatuto del Personal Civil. Vale decir que el Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública, en base a la constancia fehaciente de la iniciación - del proceso criminal, deberá proceder a suspender preventivamente a la interesada, hasta tanto demuestre su inculpabilidad con el testimonio de la sentencia firme respectiva.

b) tratándose de un hecho manifiestamente ajeno al - servicio no corresponde a la Dirección General Inmobiliaria instruir sumario tendiente a juzgar la actitud de la inculpada como agente del Estado, ya que la misma no pertenece a su jurisdicción ni se halla adscripta a dicho organismo.

El Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública, a cuyo personal pertenece la interesada, deberá por su parte adoptar los recaudos administrativos pertinentes, abriendo el sumario respectivo, a efectos de que, en caso de recaer en la causa judicial una sentencia condenatoria, puedan aplicarse las medidas que resulten oportunas (arts. 37° y 38° del Estatuto) dentro de las formalidades expresamente consignadas en el art. 40° del citado cuerpo legal.

DIRECCION GRAL. DEL SERVICIO CIVIL DE LA NACION, 23-9-59.-

Fdo. JOSE LUIS FRANGI
Director General

//nos Aires, 28 de setiembre de 1959.-

De acuerdo, previa vista a la Dirección General Inmobiliaria, pasen estos actuados al Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública a sus efectos.

Sirva la presente de atenta nota de remisión.-

Fdo. RAFAEL RODOLFO AYALA
Subsecretario de Hacienda

Poder Ejecutivo Nacional
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº 993.-

ESCALAFON PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL (Punto 26º) - SUBSIDIO FAMILIAR

Expte. Nº 1803/59(Salud Pública).
Providencia Nº 430.-

Señor Subsecretario:

La Comisión Nacional de Rehabilitación del Lisiado - plantea en estas actuaciones el caso del pago de subsidio por cónyuge, cuando éste se encuentre recluído en un establecimiento penal, en relación a las normas que fijó - la Resolución S.H. Nº 7.142/59 (1).

De acuerdo con las mismas se considera el cónyuge "a cargo" cuando conviva con el agente y éste atienda su subsistencia.

En consecuencia, en el caso planteado no corresponderá el pago de dicho subsidio, pues no se cumplirán ninguno de los requisitos exigidos: no existe convivencia entre los esposos, aunque no se trate de una separación voluntaria, ni el cónyuge ocupado en la Administración Nacional debe atender a la subsistencia del otro, cuya mantención está a cargo de la autoridad penal.

El caso planteado no está relacionado para nada con el previsto en el punto 11º de la Resolución S.H. número 7.789/59, citada a fs. 1, ya que la misma se refiere al caso de pariente incapacitado recluído en establecimiento público, condiciones que no concuerdan con la de cón-

(1) Ver Digesto Administrativo Nº 781.-

yuge (que no es pariente), recluído en establecimiento penal (que no comporta causal de incapacitación).-

DIRECCION GRAL. DEL SERVICIO CIVIL DE LA NACION, 22-9-959.-

Fdo. JOSE LUIS FRANGI
Director General

Buenos Aires, 28 de septiembre de 1959.-

De acuerdo con lo informado por la Dirección General del Servicio Civil de la Nación, pasen estos actuados al Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública, para su conocimiento, estimándole al propio tiempo se arbitren los medios conducentes a que todo tipo de consultas que deben formular sus organismos, referentes a Estatuto, Escalafón, etc., se formulen por la vía jerárquica correspondiente.

Sirva la presente de atenta nota de remisión.-

Fdo. RAFAEL RODOLFO AYALA
Subsecretario de Hacienda

Poder Ejecutivo Nacional
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº 994.-

ESCALAFON PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL (Punto 52º) - ANTIGÜEDAD

Expte. Nº 90427/59 S.H.
Providencia Nº 429.-

Señor Subsecretario:

El planteo que formula la Universidad Nacional del Litoral acerca del cómputo de servicios a los fines determinados en el punto 52º, inciso c), del Escafón aprobado por decreto Nº 9.530/58, debe ser encarado en una forma práctica, que permita su adaptación a todas las circunstancias que se presenten.

En tal sentido, esta Dirección General considera que en todos los casos debe adoptarse el procedimiento que resulte más favorable al empleado en cuestión, de manera de no perjudicarlo pecuniariamente.

Pueden presentarse, en consecuencia, dos distintas posibilidades referidas a casos de agentes que registran parte de sus servicios prestados en un determinado horario, y otra parte en uno inferior (condiderando para estos efectos los horarios previstos en el punto 52º, inciso c), del Escalafón):

I) cuando cada uno de los períodos, separadamente, arroje una fracción en meses superior a 6, se computará cada una de esas fracciones como 1 año, aun cuando en el caso de ser sumadas, arrojen una fracción inferior a 6 meses.

Ejemplo: en el caso planteado a fs. 1 como "agente A", se registra: 1 año y 7 meses en horario de 35 hs.
0 año y 10 meses en horario de 25 hs.
total: 2 años y 5 meses de servicio.

Deberá computarse 2 años a razón de $ 50.- a cada uno, y 1 año a $ 40.-

II) cuando la suma total de los servicios arroje una cifra cuya fracción en meses sea superior a 6, deberá computarse un año más, aun cuando ninguna de las cifras parciales llegue a esa cantidad. En tal caso se tomará como 1 año el excedente en meses que sea mayor.

Ejemplo: en el caso planteado a fs.1 como "agente B", se registra: 14 años y 3 meses en horario de 35 hs.
2 años y 4 meses en horario de 25 hs.
total: 16 años y 7 meses de servicio.

Deberá computarse 14 años a razón de $ 50.- cada uno, y 3 años a $ 40.-

El procedimiento sugerido responde a una necesidad eminentemente práctica, desprovista de toda especulación matemática, pero que permitirá dar adecuada solución a todos los supuestos posibles. Su incidencia en el monto a liquidar a cada agente ha de resultar mínima, y en la mayoría de los casos resultará absorbida al practicarse el redondeo de cifras que corresponde por ubicación en la categoría pertinente.

DIRECCION GRAL. DEL SERVICIO CIVIL DE LA NACION, 22-9-959.-

Fdo. JOSE LUIS FRANGI
Director General

 D.A. Nº 994.-

Buenos Aires, 15 de octubre de 1959.-

De acuerdo con lo informado por la Dirección General del Servicio Civil de la Nación, vuelvan estos actuados a la Universidad Nacional del Litoral.

Sirva la presente de atenta nota de remisión.-

Fdo. RAFAEL RODOLFO AYALA
Subsecretario de Hacienda

Poder Ejecutivo Nacional
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº 995.-

ESCALAFON PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL (Punto 26º) - SUBSIDIO FAMILIAR

Expediente Nº 90.416/59.-
Providencia Nº 419.-

//ñor Subsecretario:

Respecto de las consultas que formula la Dirección General de Contabilidad de la Secretaría de Estado de Obras Públicas, esta Dirección General considera lo siguiente:

a) El artículo 2º, inciso b), del decreto Nº 4631/59 (1), hace extensivos los beneficios del subsidio familiar instituído en el punto 26º del Escalafón para el Personal Civil de la Administración Pública Nacional, entre otros, al personal comprendido en la Ley del Servicio Exterior de la Nación.

En tales condiciones, no existen dudas de interpretación acerca de la procedencia de su liquidación al personal que presta servicio en el extranjero.

b) Procede la liquidación de subsidio familiar -exceptuando al caso del correspondiente a cónyuge- aun cuando los causantes del beneficio residan en el extranjero, siempre que se llenen los recaudos que para cada caso estipula el decreto Nº 4631/59 y demás Resoluciones complementarias, ya que no existen normas que determinen una exclusión de este tipo.

c) El requisito de "convivencia" que exige la Resolución S.H. Nº 7142/59 (2), para la liquidación del subsidio por cónyuge se refiere indudablemente al hecho de compartir

(1) Ver Digesto Administrativo Nº 738.-
(2) Ver Digesto Administrativo Nº 781.-

el mismo domicilio.

La circunstancia de registrar los cónyuges distintos domicilios configura, en principio, la situación de una separación de hecho, que es incompatible con la percepción del subsidio familiar a que se hace mención.

d) La aparente contradicción resultante de la redacción del punto 6° de la Resolución S.H. N° 7787/59(''), ha sido suficientemente salvada al dictarse la Resolución S.H. N° 7974 (°), del 12/8/59, publicada en el Boletín Oficial del 8/9/59, la que define adecuadamente la improcedencia absoluta de liquidación de suma alguna en concepto de diferencia por subsidio familiar.

Todas las aclaraciones que anteceden están referidas al personal comprendido dentro del régimen del decreto N° 4631/59,no así para los que no encuadran dentro de los incisos a) y b) del artículo 2° del mismo, para los cuales siguen en vigencia las normas del decreto-ley N° 14.984/57 (+).-

DIRECCION GRAL. DEL SERVICIO CIVIL DE LA NACION, 17-9-59.-

Fdo. JOSE LUIS FRANGI
Director General

Expediente N° 90.416/1959. -

//nos Aires, 21 de setiembre de 1959.-

De acuerdo con lo informado precedentemente por la Dirección General del Servicio Civil de la Nación, vuelvan estas actuaciones a la Secretaría de Estado de Obras Públicas.

Sirva la presente de atenta nota de remisión.-

Fdo. RAFAEL RODOLFO AYALA
Subsecretario de Hacienda

(''') Ver Digesto Administrativo N° 816.-
(°) Ver Digesto Administrativo N° 865.-
(+) Ver Digesto Administrativo N° 369.-

Poder Ejecutivo Nacional
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº 996.-

ESTATUTO PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL (Art. 41º) - JUNTA DE DISCIPLINA

Expte.Nº 77.090/58 - Instituto Nacional de Acción Social-Ministerio de Obras Públicas-Luis Walter Vaccaro-Unidad Turística de Chapadmalal-Sumario Administrativo instruído por el I.N.A.S.-Régimen disciplinario de los adscriptos-Medidas que incumben a las reparticiones-Consecuencias de la desadscripción-Estatuto del Personal Civil de la Administración-Vista al imputado-Intervención de la Junta de Disciplina.-

//ñor Subsecretario de Hacienda:

Para los fines del dictamen requerido con respecto a la jurisdicción en que correspondería resolver en definitiva el sumario de que se trata, conviene reseñar los siguientes antecedentes;

a) Con fecha 16 de diciembre de 1955 se inició un sumario administrativo en la Unidad Turística de Chapadmalal, dependiente entonces del ex-Instituto Nacional de Acción Social, a raíz de presuntas irregularidades cometidas en la misma.

b) Con fecha 8 de febrero de 1956 y 3 de octubre del mis

mo año, declara en esas actuaciones el ex-administrador general de la citada Unidad, Luis Walter Vaccaro, agente del Ministerio de Obras Públicas, adscripto al Instituto Nacional de Acción Social.

c) Dicho agente fué desadscripto del Instituto Nacional de Acción Social con fecha 30 de enero de 1956, hallándose aun en sustanciación el referido sumario, y suspendido luego, preventivamente, por el Ministerio de Obras Públicas el 16 de febrero de 1956 (Resolución Nº 528/56) hasta tanto se esclareciera su situación con referencia a los hechos investigados.

d) El 16 de octubre de 1956, la Institución da por terminado el sumario y formula sus conclusiones, mientras que, por decreto 17.800 del 22 de octubre de 1956, se produce la transferencia de la Unidad Turística de Chapadmalal a la Dirección General Inmobiliaria y luego, por decreto 11.645, de 1º de octubre de 1957, al ex-Ministerio de Transportes (Dirección Nacional de Turismo).

e) Remitidas las actuaciones al Ministerio de Obras Públicas, éste resolvió, el 12 de junio de 1958 (Resol. 17/58), levantar la suspensión del agente Vaccaro, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones que correspondan de acuerdo con el resultado a que se arribe en el respectivo sumario.

En las presentes actuaciones se plantea una vez más una situación relativa al ejercicio del poder disciplinario con respecto a los empleados que se desempeñan como adscriptos o en comisión, materia sobre la cual esta Dirección se remite a lo expuesto en el expte. 204.459/57, según dictamen de fecha 12 del corriente mes, cuya copia (en la parte pertinente) se agrega para mejor ilustración (*).

(*) Ver págs. 5, 6, 7, 8, 9 y 10 de este Boletín.-

Atento a lo que resulta de los antecedentes del asunto y de los principios enunciados en dicho dictamen, esta Dirección considera:

1º) Que corresponde cumplir en el caso con lo dispuesto en el art. 41 del Estatuto del Personal Civil de la Administración, a efectos de conferir vista al Sr. Vaccaro de las actuaciones en cuestión.
Se trata de una formalidad procesal que no deja de ser tal por el hecho de que resulte indispensable para la debida sustanciación del sumario, a fin de que el inculpado efectúe sus descargos y proponga las medidas que crea oportunas para su defensa, motivo por el cual es, en verdad, indiferente, que dicha formalidad se cumpla por intermedio de una u otra repartición. Con todo, como el sumario de que aquí se trata ha sido instruído mientras la Unidad Turística de Chapadmalal dependía del ex-Ministerio de Hacienda y como la vista debe ser conferida por el instructor (artículo 41- XIII de la reglamentación del Estatuto), esta Dirección estima como más razonable la intervención de la Secretaría de Hacienda para cumplir con el requisito de la vista.

2º) Que según el criterio en que se han fundado los fallos de la Cámara Federal de la Capital (Sala Contencioso-administrativo) de 2 de setiembre y 11 de setiembre de 1958, publicados en La Ley de 17 de setiembre y 24 de octubre de 1958, respectivamente, la intervención de la Junta de Disciplina dispuesta por el art. 44 del Estatuto tiene el carácter de una garantía en favor del imputado. De las diversas Juntas de Disciplina que podrían dictaminar en el presente caso (la de la Secretaría de Obras Públicas, a la que pertenece el inculpado Vaccaro; la de la Secretaría de Transportes, de la que depende en la actua-

lidad la Unidad Turística en la que ocurrieron los hechos, y la de la Secretaría de Hacienda, en la que se ha instituído el respectivo sumario), parece claro - que la mayor garantía que podría darse al inculpado - consistiría en la intervención de la Junta de la jurisdicción a la que él pertenece por razón de su nombramiento, esto es, la Junta de Disciplina de la Secretaría de Obras Públicas.

3º) Que la Secretaría de Obras Públicas conserva plena libertad de apreciación con respecto a la conducta de - Vaccaro, según lo que reflejan las constancias y conclusiones del sumario instruído por el ex-I.N.A.S., - pues sólo a dicha Secretaría le corresponde ahora -después de la desadscripción de Vaccaro- el ejercicio - de la potestad disciplinaria para imponerle sanciones a dicho agente.

4º) Que ello es así porque, disuelto con la desadscripción todo "vinculum iuris" (relación de empleo o de servicio) entre Vaccaro y la Secretaría de Hacienda, ésta carece de la facultad necesaria para imponerle sanción alguna a dicho agente (cfr. Villegas Basavilbaso, "Derecho Administrativo", ed.1951, t.III, ps. 530 y 541). Si la Secretaría de Hacienda, al dictar resolución en el sumario -luego de cumplidas las formalidades indicadas- (vista al imputado y dictamen de la Junta de - Disciplina), entendiera que Vaccaro merece sanción - disciplinaria,no podría hacer ya más que emitir una "opinión" al respecto, a los efectos de su oportuna consideración por la Secretaría de Obras Públicas,la cual, como es natural, podrá resolver -con entera independencia- según su propio criterio, sobre todo si se - - tratara de sanciones que comprometieran la situación jurídica de su propio agente, (poster-

gación en el ascenso, retrogradación, cesantía o - exoneración).-

DIRECCION GRAL. DE ASUNTOS JURIDICOS, 17-11-1958.-

Fdo. CRISTIAN GIMENEZ DEMARIA
Director General

3.- Régimen disciplinario de los empleados adscriptos o en comisión.-

Antes de enunciar las conclusiones que resultan, a - juicio de esta Dirección, de los antecedentes consignados en el capítulo anterior, conviene exponer algunos principios aclaratorios sobre el ejercicio del poder disciplinario a que se hallan sometidos los empleados que se desempeñan como adscriptos o en comisión.

Como es sabido, no existe en nuestro derecho administrativo un conjunto de normas reguladoras, sino disposiciones aisladas, sobre las condiciones jurídicas de dichos agentes. En nuestros autores no se encuentran tampoco sino referencias ocasionales respecto de esas situaciones, que suelen revestir caracteres de evidente complejidad.

Tales situaciones se explican en doctrina mediante - la existencia de una única relación de empleo entre el agente y el Estado y de una doble relación de servicios - con cada una de las reparticiones interesadas (la repartición de origen y la repartición en que el agente se desempeña en comisión o en calidad de adscripto).

El poder jerárquico y el poder disciplinario que de ordinario lo complementa, se encuentra, por lo común, atribuído a la superioridad jerárquica de que depende el funcionario o empleado (Gilbert, La disciplina des fonctiones publiques, 1912, pág. 66/7; Caetano, M., Manual de direito administrativo, Lisboa, 1915, 3a. edición, pág. 500; Vitta, C., "Il potere disciplinaire sugli impiegati publici", 1913, Nº 75/7, págs. 407 y siguientes; Ruiz y Gómez, J.L., Principios generales de derecho administrativo, La Habana, 1935, pág. 420, Nº 18). Pero, en los supuestos de doble dependencia, la competencia en punto al ejercicio del poder jerárquico y también del poder disciplinario, puede ser acumulativa y hallarse distribuída. Un ejemplo de ello nos lo proporciona el art. 9º de la Ley número 12.951 (sobre designación de agregados militares, económicos, obreros, culturales, docentes o de otro carácter técnico en las representaciones diplomáticas del país), que si bien establece que el personal agregado debe cumplir las órdenes del jefe de la misión, admite a la vez que puede recibir instrucciones del Ministerio del ramo a que el agregado pertenece (cfr. dictamen de la Procuración del Tesoro de 15 de julio de 1953).

Según la doctrina más moderna, esa acumulación o distribución del poder jerárquico puede dar lugar a su ejercicio de acuerdo con las siguientes consideraciones (Gérard Lupi, "Les positione du fonctionnaire", París, Librairie Dalloz, 1956, págs. 164/166);

"Del mismo modo que el poder jerárquico, el poder disciplinario no pertenecerá exclusivamente ni a la administración de origen ni a la beneficiaria de la adscripción. Estos dos poderes van a ser compartidos para la mejor satisfacción de los intereses de cada una de ellas. Así, en lo que concierne al poder jerárquico, se opera una disociación, dejando a la administración a la que pertenece el funcionario todas las medidas susceptibles de modificar

su situación administrativa, aquellas, sobre todo las más importantes, que lo afectan en su grado o función. En cambio es razonable acordar a la administración en que el agente se desempeña, una parte de este poder jerárquico, que se justifica como necesaria a consecuencia de la ocupación del empleo por el agente adscripto.

"El régimen disciplinario a que dicho agente será sometido es igualmente doble, dado que el art. 105 del estatuto general ha precisado que, después de adscripto, las normas que rigen en la función que él ejerce por efecto de su adscripción, le serán aplicables. Si es necesario confiar al servicio que ocupa al funcionario cierto poder disciplinario, no se le podría dar todo este poder disciplinario, puesto que la administración de origen deberá conservar los medios de presión suficientemente eficaces a su respecto, manteniendo así en interés de su servicio la posibilidad de imponer sanciones a un agente ausente. Pero si se admite la necesidad de una coparticipación en el poder disciplinario, corresponde precisar cuáles sanciones pueden ser aplicadas por la administración de origen y por la beneficiaria de la adscripción.

"a) Esta dispondrá de un sistema disciplinario más restringido, menos rico. Esto se concibe así si se tiene presente que el funcionario adscripto no se halla sino investido de un empleo y que las sanciones que se le pueden aplicar están vinculadas a su ejercicio. No se le podría, ciertamente, perjudicar en sus derechos esenciales, que derivan de la posesión del grado (revocación, retrogradación). A la inversa, resulta de la jurisprudencia que la administración de origen no podría utilizar, en contra del agente adscripto, sanciones que no pueden ser impuestas sino por el servicio donde aquél cumple sus tareas. Es así como la suspensión, a pesar de que no sea exactamente una pena disciplinaria, no puede ser dispuesta sino por este último. "No se trata, dice un decreto, sino de una -

medida de orden adoptada en el interés del servicio, sin poseer un carácter disciplinario, por aplicación del art. 65 de la Ley de 22 de abril de 1905, por la cual la autoridad local podía dictar las medidas de suspensión".

"Más aún, ella atribuye una facultad exclusiva a la administración en que el agente se desempeña, y anula la medida de suspensión de la administración de origen, por emanar de una autoridad incompetente. No es sino una hipótesis el caso en que las dos administraciones podrán aplicar conjuntamente la misma sanción disciplinaria. Una y otra decidirán poner fin a la adscripción antes de la expiración del término previsto; habrá una resolución por la cual se reintegre de oficio o se ponga al agente a la disposición de la administración de origen.

"b) Pero cuando se trate de imponer una pena más grave, como la eliminación del cuadro de ascensos, la retrogradación, la revocación, le corresponderá hacerlo a la administración de origen, y a ella sóla.

"En primer lugar, porque si el agente público conserva su grado en su administración de origen, las medidas que pudieran perjudicarlo más o menos directamente, son de su competencia.

"Además, ocurrirá frecuentemente que el servicio en que el funcionario conserva su grado resulte técnicamente mejor protegido por la facultad de imponer una sanción disciplinaria. Y ello resulta evidente si se piensa que un funcionario ha podido ser adscripto o destacado en una empresa privada, en un organismo internacional o en un territorio de ultramar, es decir, en un empleo cuyas disposiciones estatutarias pueden dar mayores o menores garantías al interesado. Esta es la razón por la cual sólo la administración de origen impondrá las penas disciplinarias. Esto explica que la suspensión, que no es en realidad una de ellas, ni está por otra parte provista sino de menores garantías, sea de competencia de la administración benefi

ciaria de la adscripción. Y esto explica que cuando el agente queda a disposición de la administración de origen, no se persiga sino someter a ésta al funcionario que se ha hecho culpable de faltas graves en servicio de adscripción.

"En fin, la competencia de la administración de origen se justifica en la medida en que la ley de 19 de octubre de 1946 impondría obligaciones cuya violación requeriría una sanción y que no podría pronunciarse sobre la base de otro texto menos severo, como podría ser el estatuto particular del empleo de adscripción, si se admitiese que el agente adscripto quedara integral y exclusivamente sometido al mismo.

"La administración de origen ejercerá entonces su poder disciplinario y podrá hacerlo sin estar obligada a tener en cuenta la opinión de los organismos que funcionan en el servicio a que el agente ha sido adscripto. Excepción hecha de la suspensión, que no se considera como una pena, dicho poder comprende a todas las demás sanciones disciplinarias que la autoridad que ha acordado la adscripción podrá adoptar absolutamente sola".

Cabe concluir, de lo expuesto precedentemente, que en nuestro actual régimen administrativo (en el cual no existen disposiciones sobre el particular, a diferencia de lo que ocurre en Francia, donde "le détachaement" es un instituto sometido a precisas normas legales), tanto la suspensión preventiva o previsional, medida de orden jerárquico de carácter precautorio, como la suspensión definitiva, sanción disciplinaria privativa de haberes (Estatuto del Personal Civil de la Administración, aprobado por decreto-ley 6.666/57 (°), arts. 34 y 39), serían de la incumbencia de la repartición en que el empleado se desempeña en comisión o en calidad de adscripto -por no constituir sino una prohibición temporal del ejercicio de sus funciones en este carácter-, mientras que las medidas de

(°) Ver Digesto Administrativo Nº 254.-

mayor gravedad, como la postergación en el ascenso, la retrogradación de la categoría en el empleo, la cesantía y la exoneración (Estatuto citado, art. 34), serían de la incumbencia de la repartición de origen, esto es, de aquella a la que pertenece el agente por razón de su nombramiento, por constituir alteraciones fundamentales en la situación jurídica permanente que vincula al empleado con la Administración.

Expte. Nº 77.090/58 S.H.
Expte. Nº 44.550/58 M.O.P.
Providencia Nº 418.-

//ñor Subsecretario:

En las presentes actuaciones, referentes al sumario administrativo instruído a raíz de diversas irregularidades cometidas en la Unidad Turística de Chapadmalal, siendo organismo de la ex-Fundación, se cuestiona la intervención de la Junta de Disciplina, en relación a la jurisdicción en que han sucedido los hechos, y la dependencia presupuestaria del agente presuntamente inculpado.

En tal sentido, esta Dirección General comparte el criterio sustentado por su similar de Asuntos Jurídicos en su dictamen de fecha 17 de noviembre de 1958, el que, por otra parte, es concordante con el que dió fundamento a la Resolución S.H. Nº 8.003/58 (*). En efecto, se trata en el presente caso de hechos acaecidos en una entidad no perteneciente a la Administración Pública Nacional,

(*) Ver Digesto Administrativo Nº 818.-

y por consiguiente el juzgamiento del agente inculpado - corresponde al organismo al que pertenecía presupuestariamente en el momento de cometidas aquéllas.

Este criterio no vulnera el resultante de la Resolución S.H. Nº 8.039/58 (+), en la que se determina que - "la Junta de Disciplina que debe dictaminar necesariamente en todo sumario administrativo incoado por razones disciplinarias, es la que corresponde a la jurisdicción donde se han producido los hechos que dan origen a aquél, - cualquiera sea la dependencia presupuestaria del o de - los inculpados". Efectivamente, en el caso en cuestión - no podría intervenir la Junta de Disciplina del organismo al que pertenece actualmente la Unidad Turística de Chapadmalal (Dirección Nacional de Turismo), pues los hechos fueron cometidos antes de que la misma pasara a poder del Estado, y en consecuencia se trata de juzgar hechos ocurridos fuera del ámbito de la Administración Pública Nacional.

En virtud de lo expuesto, a fin de cumplimentar las prescripciones del artículo 41º, apartado XIII, del Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública Nacional y su Reglamentación procede la remisión de estos actuados a la Secretaría de Obras Públicas a fin de que dictamine la respectiva Junta de Disciplina.

DIRECCION GRAL. DEL SERVICIO CIVIL DE LA NACION, 17-9-59.-

Fdo. JOSE LUIS FRANGI
Director General

(+) Ver Digesto Administrativo Nº 822.-

 D.A. Nº 996.-

Expediente Nº 77.090/58 S.H.
Expediente Nº 44.550/58 M.O.P.

//nos Aires, 21 de setiembre de 1959.-

De acuerdo con lo manifestado por las Direcciones Generales de Asuntos Jurídicos y Servicio Civil de la Nación, pase a la Secretaría de Estado de Obras Públicas, a los fines pertinentes.

Sirva la presente de atenta nota de remisión.-

Fdo. RAFAEL RODOLFO AYALA
Subsecretario de Hacienda

Poder Ejecutivo Nacional
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº 997.-

ESCALAFON PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL (Punto 26º) - SUBSIDIO FAMILIAR

Expediente Nº 62.364/59 S.H.
Providencia Nº 417.-

//ñor Subsecretario:

El personal civil de las fuerzas armadas tiene derecho a percibir el subsidio familiar instituído en el punto 26º del Escalafón (decreto Nº 9.530/58) de acuerdo - con lo establecido en el art. 2º, inciso b), del decreto Nº 4.631/59 (*). En efecto, dicho personal está incluído en el Presupuesto General de la Administración Nacional y excluído del Estatuto del Personal Civil (decreto-ley Nº 6.666/57)(**), en virtud del decreto Nº 1.193/58(º), - dictado en base al art. 2º, inciso 1), del referido Estatuto.

El mencionado acto (decreto Nº 4.631/59) dió efecto a sus beneficios al 1º de noviembre de 1958, pero por una razón de derecho no podría dársele ese mismo efecto - retroactivo en lo que configurara una reducción o supresión de beneficios de los que se estuviese haciendo uso efectivo. En este caso, la vigencia de sus disposiciones resulta procedente a partir del día siguiente a la fecha de publicación del aludido decreto en el Boletín Oficial, es decir, del 25 de abril último.

(*) Ver Digesto Administrativo Nº 738.-
(**) Ver Digesto Administrativo Nº 254.-
(º) Ver Digesto Administrativo Nº 495.-

Por lo expuesto, esta Dirección General considera que en el caso planteado no corresponde el reintegro de lo percibido entre el 1° de noviembre de 1958 y la fecha indicada en el párrafo anterior.

DIRECCION GRAL. DEL SERVICIO CIVIL DE LA NACION, 17-9-59.-

Fdo. JOSE LUIS FRANGI
Director General

//nos Aires, 21 de setiembre de 1959.-

Con lo informado precedentemente por la Dirección General del Servicio Civil de la Nación, vuelvan estos actuados a la Secretaría de Estado de Guerra.

Sirva la presente de atenta nota de remisión.-

Fdo. RAFAEL RODOLFO AYALA
Subsecretario de Hacienda

Poder Ejecutivo Nacional
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº 998.-

ESCALAFON PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL - ANTIGÜEDAD - GABINETE DEL MINISTRO

Expediente Nº 90.418/59 S.H.
Expediente Nº 35.220/59 M.O.P.
Providencia Nº 415.-

//ñor Subsecretario:

El decreto Nº 1.472/58 (1), que reglamenta la creación del "Gabinete del Ministro" establece que:

a) el personal gozará de las mismas remuneraciones, sobreasignaciones, bonificaciones y demás emolumentos que determinen las correspondientes leyes de presupuesto y disposiciones en vigor para el personal permanente de igual categoría.
b) el personal no tendrá derecho a la carrera administrativa.

El monto en concepto de antigüedad, resultante del punto 52º, inciso c), del Escalafón aprobado por decreto Nº 9.530/58, no constituye una sobreasignación ni bonificación, sino que es uno de los pasos a seguir para escalafonar al personal dentro de las Clases, Grupos y Categorías previstas en aquel cuerpo normativo.

En tales condiciones, no teniendo derecho el personal del "Gabinete del Ministro" a su inclusión en dicho Escalafón, dado que éste conforma la carrera administra-

(1) Ver Digesto Administrativo Nº 425.-

tiva del agente de la Administración Pública -expresamente vedada a aquél-, no corresponde liquidar al mismo el monto de que se trata.-

DIRECCION GRAL. DEL SERVICIO CIVIL DE LA NACION, 16-9-59.-

Fdo. JOSE LUIS FRANGI
Director General

Expediente N° 90.418/59 S.H.
Expediente N° 35.220/59 M.O.P.

//nos Aires, 21 de setiembre de 1959.-

De acuerdo con lo informado precedentemente por la Dirección General del Servicio Civil de la Nación, pasen estos actuados a la Secretaría de Estado de Obras Públicas.

Sirva la presente de atenta nota de remisión.-

Fdo. RAFAEL RODOLFO AYALA
Subsecretario de Hacienda

Poder Ejecutivo Nacional
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº 999.-

LOTERIA DE BENEFICENCIA NACIONAL Y CASINOS (Casinos) - COMPENSACION POR DESARRAIGO

Buenos Aires, 22 de octubre de 1959.-

Visto el expediente Nº 395.811/59 por el cual la Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos gestiona la modificación del artículo 1º del Decreto Nº 10.183 (1) de fecha 24/8/59, que determina que el personal jornalizado destinado a prestar servicios en los Casinos dependientes de la misma, gozará de una asignación por desarraigo, y

CONSIDERANDO:

Que por Decreto número 10.184/59 se determina que la explotación del Casino en el Hotel de Termas de Rosario de la Frontera en la Provincia de Salta estará a cargo de la referida Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos;

Que en tal circunstancia y teniendo en cuenta que el porcentaje que corresponde asignar en la emergencia es el del 50 % en concordancia con lo determinado para los Casinos de Bariloche, Termas de Río Hondo y Termas de Reyes;

Que asimismo se hace notar que en virtud de haberse determinado la rotación del personal del Casino de Mendoza para las próximas temporadas, es oportuno incluir en la modificación que se propicia para el citado artículo

(1) Ver Digesto Administrativo Nº 869.-

al personal que se destine a prestar servicios a ese Casino, dentro de los beneficios de la asignación por desarraigo, con un porcentaje del cincuenta por ciento (50%);

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

D E C R E T A :

Artículo 1°.- Modifícase el texto del artículo 1° del Decreto N° 10.183/59 en la siguiente forma:

"Artículo 1°.- A partir del 1° de febrero de 1959, el personal jornalizado de la Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos que sea destinado a prestar servicios en los Casinos dependientes de la misma, gozará de una asignación por desarraigo, compensatorio de los gastos que le origine su estada en la localidad donde funcione la respectiva Sala de Entretenimientos, de acuerdo a los porcentajes que se indican a continuación:

"Casino Central de Mar del Plata.

Anexo I y II,

"Casino de Miramar y Casino de Necochea: cuarenta por ciento (40 %).

"Casinos de Bariloche, Termas de Río Hondo, Termas de Reyes, Termas de Rosario de la Frontera y Mendoza: cincuenta por ciento (50 %)".

Artículo 2°.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firmado por el señor Secretario de Estado de Hacienda.

Artículo 3°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y pase a la Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos a sus efectos.

FRONDIZI - Alvaro Alsogaray -
Guillermo W. Klein.

DECRETO N° 13.340.-

Poder Ejecutivo Nacional
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIGESTO ADMINISTRATIVO

Boletín Nº 1000.-

ESTATUTO PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL (Art. 38 "in fine") - LICENCIAS - SANCIONES

Expte. Nº 300.361/59 (')
Providencia Nº 356.-

Buenos Aires, 13 de agosto de 1959.-

Vuelvan estas actuaciones a la Dirección General de Contabilidad y Administración llevando a su conocimiento, respecto de la consulta que antecede, lo siguiente:

I) Las inasistencias en que incurre el personal y que no son justificadas -cualquiera sea su causa: asuntos particulares, exámenes, enfermedad, etc.- deben ser sancionadas en base a la escala del artículo 36º de la Reglamentación del Estatuto del Personal Civil. Las escalas de los puntos 23º, 67º y 91º de la resolución M.H.Nº 8.264/56 (") deben ser sustituídas por las de aquella norma.

II) El agente que falta al cumplimiento de las obligaciones establecidas en las Reglamentaciones vigentes, comete infracciones que caen dentro de la calificación de "violación de los deberes del personal".

Dichas transgresiones, de acuerdo con el artículo 38º, última parte, del Estatuto del Personal Civil, son pasibles de sanciones que pueden ir desde el apercibimiento

(') Ver Digesto Administrativo Nº 908.-
(") Ver Digesto Administrativo Nº 16.-

hasta la exoneración, en base a la escala del artículo 34° y a las normas del artículo 42° del mismo cuerpo legal independientemente de las que les corresponda al agente por sus inasistencias sin justificar.

Fdo. JOSE LUIS FRANGI
Director General
Servicio Civil de la Nación

Expte. 300.361/59 - Estatuto del Personal Civil de la Administración-Dirección Gral.de Obra Social-Carlos Parache Chaves-Licencia para rendir examen-Falta de justificación-Sanciones establecidas por el Estatuto y por reglamentaciones internas(Res.N°8264/56)-Régimen de aplicación.-

//ñor Secretario de Hacienda:

Esta Dirección concuerda con lo expuesto a fs. 14 por la Dirección General del Servicio Civil de la Nación.

En efecto, si la inasistencia del agente carece de justificación -sea cual fuere el motivo invocado por éste; asuntos particulares de diversa índole; acontecimientos fortuitos; dificultades e imposibilidad de hecho; enfermedad; necesidad de rendir examen, etc.-, no pueden aplicarse sino las sanciones previstas por el Estatuto y su reglamentación para el personal que incurra en inasistencias "sin causa justificada" (arts. 36 y 37, inc. a). En el caso particular de estas actuaciones, el incumplimiento de

la obligación de presentar la constancia de que se ha rendido examen (Res. 8264/56, art. 91), deja "sin justificar" las inasistencias en que ha incurrido el agente y lo hace pasible de las sanciones establecidas por el decreto reglamentario del Estatuto, art. 36 - II).

Por otra parte, cuando las reglamentaciones administrativas imponen determinadas obligaciones concretas y establecen para el caso de infracción sanciones no incompatibles con las determinadas por el Estatuto, cabe aplicar las normas de dichas reglamentaciones (con sujeción a las disposiciones del régimen disciplinario implantado por el mismo) en virtud del precepto enunciado por éste en el art. 38, última parte. Así, por ejemplo:

- incumplimiento de la obligación del agente que ha dado aviso de enfermo, de permanecer en su domicilio a los fines de su examen médico (Res. 8264/56, art. 59): puede sancionarse según lo dispuesto por dicha resolución, art. 67, pero las suspensiones no podrán ser con prestación de servicios (D.R.del Estatuto, art. 35 - I);
- pedido injustificado de la concurrencia de médico al domicilio del agente (Res. 8264/56, art. 67): lo mismo que en el caso anterior;
- falsedad de la certificación extendida por un facultativo de esta Secretaría con respecto a la enfermedad de un empleado, infracción que se reprime por el art. 68 de la Res. 8264/56 con "suspensión por dos meses sin goce de sueldo con prestación de servicios o cesantía en caso de reincidencia"; la suspensión no puede ser ni por más de un mes (Estatuto,art. 34, inc. b) ni con prestación de servicios;
- simulación realizada con el fin de obtener licencia o justificar inasistencias (Res. 8264/56,art.98): lo mismo que en el caso anterior.

DIRECCION GRAL.DE ASUNTOS JURIDICOS,2 de octubre de 1959.-

Fdo. CRISTIAN GIMENEZ DEMARIA
Director General

Centro de Documentación e Información

Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas
Presidencia de la Nación

Este documento fue digitalizado por el
Centro de Documentación e Información
del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas

Ciudad Autónoma de Bs. As. 2016

http://cdi.mecon.gob.ar/